
Desafíos para la democracia en
Latinoamérica y el Caribe: Evidencia desde el
Barómetro de las **A**méricas 2006-07

Mitchell A. Seligson, Ph.D., Editor



VANDERBILT UNIVERSITY



USAID
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA

Este estudio se realizó gracias al patrocinio otorgado por el programa de Democracia y Gobierno de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Las opiniones expresadas en este estudio corresponden a sus autores y no necesariamente reflejan los puntos de vista de la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos.

Marzo, 2008

CONTENIDO

Presentación	v
Prólogo	vii
El Barómetro de las Américas, 2006-07: Antecedentes del estudio	vii
Agradecimientos	xi
Perspectiva general	xv
Parte I. Desafíos para la infraestructura institucional de la democracia	1
I. El resurgimiento del populismo y la izquierda: ¿Retos a la consolidación democrática?	3
<i>Mitchell A. Seligson</i>	
Resumen.....	3
La orientación política de América Latina es importante para la democracia	6
La orientación política importa: las personas votan según sus creencias	7
Los izquierdistas son menos propensos a favorecer algunos valores democráticos claves	12
Los latinoamericanos no están listos para descartar las instituciones democráticas.....	14
Conclusiones: Instituciones políticas y valores permanecen importantes.	18
Referencias.....	20
II. Democracia iliberal y normativa: ¿Cómo se define la democracia en las Américas?	23
<i>Julio F. Carrión</i>	
Resumen.....	23
Concepciones de la democracia	25
¿Qué tan consistente es el apoyo a la democracia?.....	31
¿Quién es más probable de adoptar la democracia liberal?	39
A modo de conclusión	46
Referencias.....	48
III. ¿Que se vayan todos? Actitudes hacia los partidos políticos y democracia en las Américas.....	53
<i>María Fernanda Boidi</i>	
Resumen.....	53
Vínculos entre ciudadanos y partidos en las Américas.....	54
Por qué la confianza en los partidos políticos importa	58
Partidos políticos y consolidación democrática en la región	68
Referencias.....	72
IV. Desempeño económico y apoyo al sistema: desafíos económicos a las democracias latinoamericanas.....	75
<i>Vivian Schwarz-Blum</i>	
Resumen.....	75
Desempeño económico y apoyo al sistema: desafíos económicos a las democracias latinoamericanas	75
Índice de Apoyo al Sistema	77
Desarrollo, crecimiento económico y apoyo al sistema.....	87
Conclusiones.....	89
Referencias.....	91



V. ¿Descentralizar o centralizar? Desafíos para la reforma estatal y la democracia en América Latina y el Caribe	93
<i>Daniel Montalvo</i>	
Resumen.....	93
Descentralización, centralización y transferencias intergubernamentales	95
El estado de la descentralización en América Latina y el Caribe	96
Opinión Pública: confianza política en las instituciones y apoyo a la descentralización.....	98
Nivel comparativo de confianza política municipal versus otras instituciones democráticas.....	101
Confianza política en el gobierno municipal por país	102
Confianza política en el gobierno municipal versus confianza en el gobierno nacional, por país.....	103
Variables que determinan la confianza política en las municipalidades de América Latina y el Caribe.....	106
¿Centralizar o descentralizar?	108
Conclusiones	113
Referencias.....	115
VI. Interpretando el voto a la izquierda en América Latina: ¿riesgo u oportunidad?.....	123
<i>Rosario Queirolo</i>	
Resumen.....	123
Primer argumento: El voto a la izquierda como reacción en contra del Consenso de Washington	125
Teorías, hipótesis y casos.....	127
Teoría del voto económico	128
“Clivages” creados por procesos políticos.....	129
Los casos	130
Modelo y resultados	132
Resultados	134
Segundo argumento: El voto a la izquierda es un riesgo para la democracia en América Latina.....	138
Resultados	139
Conclusiones	145
Referencias.....	147
Parte II. Desafíos para la democracia desde la sociedad civil	151
VII. Confianza social, desigualdad económica y democracia en las Américas	153
<i>Abby B. Córdova Guillén</i>	
Resumen.....	153
Una breve revisión de la literatura	156
El capital social en Latinoamérica en perspectiva comparada.....	158
Un nexo débil: la confianza social y la participación cívica.....	162
Explicando la brecha de la confianza social en las Américas: ¿Importan las características individuales?	166
Características socioeconómicas	166
Características demográficas	167
La experiencia personal con el crimen	169
La desigualdad económica y la confianza social: Un análisis de nivel múltiple	171
La importancia de la confianza social para las democracias latinoamericanas.....	176
Conclusiones	178
Referencias.....	180
VIII. Identidad nacional y minorías étnicas en las Américas	185
<i>Daniel Moreno</i>	
Resumen.....	185
La comunidad política nacional.....	186
Pertenencia nacional: ¿Necesaria para la democracia?.....	186
La fortaleza de la comunidad política nacional en los países del estudio	189

Pertenencia nacional e identidad étnica. Cuestionando supuestos.....	193
Combinando factores individuales con factores contextuales	198
Conclusiones.....	200
Referencias.....	202
IX. Retos para la tolerancia en las Américas.....	205
<i>Diana Orcés</i>	
Resumen.....	205
La tolerancia política.....	206
¿Por qué la tolerancia política difiere a través de países?.....	208
¿Qué factores a nivel individual influyen en las diferencias de tolerancia política?	209
América del Norte y el Caribe.....	210
América Central.....	212
América del Sur.....	213
Métodos y resultados	216
El caso de Venezuela	218
La tolerancia social	219
Métodos y resultados.....	222
Conclusiones.....	223
Referencias.....	225
Parte III. Desafíos para el estado de derecho.....	227
X. El impacto del crimen violento en la cultura política de América Latina: El caso especial de Centroamérica	229
<i>José Miguel Cruz</i>	
Resumen.....	229
Condiciones para la democracia, cultura política, legitimidad y violencia.....	231
La violencia criminal en América Latina.....	234
Aspectos metodológicos	236
Datos.....	236
Ítems y variables	237
Violencia, victimización e inseguridad.....	237
La cultura política democrática	237
La hipótesis empírica.....	238
Victimización, inseguridad y cultura política democrática en la región	239
Violencia y actitudes de apoyo a la democracia en Centroamérica	247
Conclusiones.....	253
Referencias.....	255
XI. La corrupción y su impacto sobre la estabilidad democrática en Latinoamérica	263
<i>Dominique Zéphyr</i>	
Resumen.....	263
El nivel de corrupción en la región	265
Modalidades de victimización por corrupción en Latinoamérica y el Caribe.....	269
¿Quiénes son más probables de ser víctimas de la corrupción?.....	275
La corrupción y su impacto sobre la democracia.....	277
Victimización por corrupción y satisfacción con la democracia	278
Victimización por corrupción y apoyo a la democracia como forma ideal de gobierno.....	280
Victimización por corrupción y apoyo al sistema político	282
Conclusiones.....	283
Referencias.....	285



XII. Justicia y democracia: El estado de derecho en las Américas	289
<i>Juan Carlos Donoso</i>	
Resumen.....	289
El “Poder” Judicial:.....	289
Los datos.....	291
Apoyo al Estado de Derecho.....	297
Estado de derecho y democracia.....	305
Conclusiones.....	309
Referencias.....	311

Presentación

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) se enorgullece de apoyar las encuestas sobre democracia y gobernabilidad que el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP) ha llevado a cabo a lo largo de las pasadas dos décadas en Latinoamérica y el Caribe. Los hallazgos de LAPOP han sido un instrumento crucial para las misiones nacionales de USAID tanto en el diagnóstico de la naturaleza del desafío democrático, como en la promoción de diálogo y debate sobre políticas en los países latinoamericanos, en el monitoreo de los programas de USAID actualmente en marcha y en la evaluación y medición del desempeño de USAID en el apoyo a la democracia y el buen gobierno en la región. Los informes han servido a menudo como la “voz” de los ciudadanos sobre la calidad de la democracia. Esperamos que este estudio de 2006/07 sea también de utilidad para los diseñadores de políticas, defensores de la democracia, contribuyentes y practicantes.

La decisión de realizar encuestas sobre el *status quo* de la democracia en América Latina y el Caribe se originó en las misiones nacionales de USAID, donde los oficiales de campo han crecientemente contado con ellas como instrumento de manejo y diseño de políticas. La profundidad y amplitud de los cuestionarios nos permite ir más allá de preguntas simples y examinar relaciones complejas relacionadas al género, la etnicidad, la geografía, el bienestar económico y otras condiciones, y explorar en profundidad prácticas específicas y culturas para identificar en qué sector puede nuestra contribución ser más efectiva para la promoción de la democracia. Las encuestas son un recurso único de USAID en tanto representan una fuente de información consistente, de alta calidad y de cualidad comparativa a través del tiempo. USAID agradece el liderazgo del Dr. Mitchell Seligson en la Universidad de Vanderbilt, a sus extraordinarios estudiantes de doctorado provenientes de todo el hemisferio y la participación y pericia de los varios académicos en la región e instituciones expertas que han estado involucrados en este proyecto.

Dos tendencias recientes en estas encuestas las han hecho aun más útiles. Una es la inclusión de más países adicionales a la base de la encuesta usando un núcleo común de preguntas para todos los países, lo cual permite realizar comparaciones válidas a través de diferentes sistemas políticos y a través del tiempo. La segunda, y aún más importante, es la introducción de “muestras especiales” en regiones específicas o en función de proyectos específicos en algunos de los países en los que USAID tiene programas de democracia. El resultado es una nueva capacidad de las misiones de USAID para examinar el impacto de sus programas comparando de manera estadísticamente confiable cambios acaecidos en las áreas de sus programas con cambios que suceden fuera del área de dichos programas. Esto último nos permite comparar el “antes y después” de nuestro trabajo así como comparar cambios en regiones en las que tenemos programas con regiones en las que no los tenemos. Estas metodologías deben tener el efecto de proveer una de las pruebas más rigurosas de la efectividad de nuestros programas y contribuciones en cualquier campo.

La promoción de la democracia y el buen gobierno es una prioridad de la política exterior del gobierno de los Estados Unidos y nuestra inversión económica y en esfuerzo es sustancial. Sin embargo, el desarrollo democrático es un campo del desarrollo relativamente nuevo y



nuestro conocimiento de las relaciones políticas básicas y el impacto de la ayuda a través de donaciones se encuentra aun en una etapa inicial. Es crítico que seamos capaces de determinar cuáles programas funcionan y bajo qué circunstancias funcionan mejor, aprendiendo de nuestra experiencia y mejorando nuestros programas constantemente. Para conquistar este desafío USAID ha tomado una nueva iniciativa llamado la Investigación Estratégica y Operativa (SORA), con el apoyo de la Academia Nacional de Ciencias. SORA ha incorporado a su trabajo las opiniones de numerosos expertos en ciencia política y en metodología de investigación. Las encuestas de LAPOP sobre la democracia son un componente crítico de este esfuerzo de evaluación. Esperamos que sus hallazgos estimulen un diálogo entre gobiernos, ONGs, académicos y el público en general que ayude, a largo plazo, a solidificar la democracia en América Latina.

Dra. Margaret Sarles
Jefa de División, Planificación Estratégica e Investigación
Oficina de Democracia y Gobernabilidad
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)

Prólogo

El Barómetro de las Américas, 2006-07: Antecedentes del estudio

Por Mitchell A. Seligson
Centennial Profesor de Ciencia Política
y Director del Proyecto de Opinión Pública de América Latina
Universidad de Vanderbilt

Tengo el placer de presentar a ustedes la ronda 2006/07 del **Barómetro de las Américas**, una de las muchas y crecientes actividades del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP). Este proyecto, iniciado hace dos décadas, es ahora albergado por la Universidad de Vanderbilt. LAPOP se inició con el estudio de los valores democráticos en un país, Costa Rica, en un momento en el que la mayor parte de los países latinoamericanos se encontraban atrapados en regímenes represivos que prohibían ampliamente la realización de estudios de opinión pública (y violaban sistemáticamente los derechos humanos y las libertades civiles). Por fortuna, hoy esos estudios pueden ser llevados a cabo abiertamente en casi todos los países de la región. El **Barómetro de las Américas** es un esfuerzo hecho por LAPOP para medir los valores y comportamientos democráticos en el continente, utilizando muestras nacionales probabilísticas de adultos en edad de votar. En el 2004, se llevó a cabo la primera ronda, en la cual participaron once países. Los reportes y las respectivas bases de datos están disponibles en la página web del LAPOP. El presente estudio representa el esfuerzo más grande llevado a cabo por LAPOP hasta este momento, al incorporar a veinte países. Por primera vez, gracias al apoyo generoso del Centro para las Américas de la Universidad de Vanderbilt, ha sido posible incluir a los Estados Unidos y Canadá. La Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID) proporcionó el financiamiento necesario para incorporar los países de América Latina y el Caribe. En la ronda del 2006, los países incluidos al momento de escribir este prólogo son: México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Chile, Perú, República Dominicana, Haití y Jamaica. Los diseños de la muestra y el cuestionario para estos estudios son uniformes, permitiendo comparaciones directas entre ellos, así como análisis detallados dentro de cada país. La serie del 2006/07 incluye publicaciones individuales para cada país, escritas por un equipo nacional de investigadores y un resumen del estudio escrito por el autor de este prólogo, miembros del equipo de LAPOP en Vanderbilt y otros colaboradores. Nos embarcamos en el **Barómetro de las Américas** 2006/07 con la esperanza de que los resultados fueran de interés y relevancia política para los ciudadanos, ONGs, académicos, gobernantes y la comunidad donante internacional. Aspiramos a que el estudio pueda ser utilizado no sólo para ayudar al avance de la agenda de democratización, sino que también sirva a la comunidad académica que ha estado involucrada en la tarea de determinar qué valores son los que más probablemente promueven una democracia estable. Por esta razón, se acordó incluir un núcleo común de preguntas en nuestra encuesta. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) brindó su valiosa colaboración económica para reunir, en mayo del 2006, a un grupo de académicos reconocidos en el campo de la opinión pública, con el propósito de ayudar a determinar las mejores preguntas a incorporar en el Índice de Apoyo a la Democracia del PNUD. Los académicos que asistieron a esta reunión prepararon documentos de trabajo que fueron



presentados y comentados en un taller en la Universidad de Vanderbilt, y proporcionaron una justificación teórica y empírica de las decisiones tomadas. Todos estos documentos están disponibles en la página web de LAPOP.

Después del evento patrocinado por el PNUD, se realizó en mayo del 2006 una reunión de los equipos nacionales de investigadores de todos los países participantes en Heredia, Costa Rica. Importantes oficiales de la oficina de democracia de USAID estuvieron presentes en dicha reunión, así como miembros del equipo de LAPOP de Vanderbilt. Con los antecedentes de la ronda del 2004 y tomando en cuenta los insumos obtenidos en el taller auspiciado por el PNUD, fue fácil para los equipos llegar a un acuerdo sobre el cuestionario común para todos los países. El núcleo común nos permite examinar, para cada país y entre naciones, temas como legitimidad política, tolerancia política, apoyo a una democracia estable, participación de la sociedad civil y capital social, el estado de derecho, evaluación de los gobiernos locales y participación en ellos, victimización de crimen, victimización de corrupción y comportamiento electoral. El estudio de cada país contiene un análisis de esas importantes áreas relacionadas con los valores y comportamientos democráticos. En algunos casos hemos encontrado similitudes sorprendentes de país a país, mientras que en otros casos hemos encontrado marcados contrastes.

Un diseño muestral común fue crucial para el éxito de este esfuerzo. Antes de ir a Costa Rica, el autor de este capítulo preparó para cada equipo nacional los lineamientos para la construcción de una muestra multi-etápica, estratificada y probabilística con un tamaño de 1.500 casos. En el evento de Costa Rica, los equipos de cada país se reunieron con el Dr. Polibio Córdova, Presidente de CEDATOS de Ecuador y experto regional en diseño muestral, entrenado por Leslie Kish en la Universidad de Michigan. Los refinamientos al diseño de las muestras fueron hechos en dicha reunión y luego revisados por el Dr. Córdova. En un anexo del informe de cada país está incluida la descripción detallada de cada muestra.

La reunión de Costa Rica fue también una ocasión para que los equipos nacionales acordaran un marco común para el análisis. No quisimos imponer restricciones a los equipos, dado que reconocimos desde el principio que cada país poseía circunstancias únicas, y que lo que era lo que es importante para un país (como por ejemplo, crimen, abstención electoral) podría ser irrelevante para otro. Sin embargo, sí queríamos que todos los equipos pudieran hacer comparaciones directas con los resultados de otros países. Por esta razón, acordamos un método común para la construcción de índices. Utilizamos como estándar un coeficiente de confiabilidad de Alpha mayor a .6, con preferencia por .7, como el mínimo nivel necesario para que un grupo de ítems fuera considerado una escala. La única variación a esta regla ocurrió cuando utilizamos “variables de conteo” para construir un índice (por oposición a una escala) en el que simplemente queríamos saber, por ejemplo, cuántas veces un individuo participó en cierta forma de actividad. De hecho, la mayoría de nuestras escalas presentaron un índice de confiabilidad Alpha mayor a .7, muchas de ellas incluso superando .8. También animamos a todos los equipos a utilizar un análisis factorial para establecer la dimensionalidad de sus escalas. Otra regla común, aplicada a todo el conjunto de datos, fue en el tratamiento de los datos perdidos. Con el fin de maximizar los N de las muestras sin distorsionar irrazonablemente los patrones de respuesta, sustituimos el puntaje promedio de la elección individual del encuestado para cualquier escala o índice en el que hubiera datos perdidos, pero sólo cuando los datos perdidos comprendieran menos de la mitad de todas las respuestas de ese individuo. Para una escala de cinco ítems, por ejemplo, si el encuestado respondió tres o más de los ítems, asignamos la media de esos tres a esa persona para

esa escala. Si menos de tres de los cinco ítems tuvieron respuesta, el caso completo fue considerado como perdido.

Otro acuerdo que cerramos en Costa Rica fue que los estudios deben ser accesibles al lector lego. Para esto, se decidió la utilización de gráficas bivariadas y trivariadas. Pero también acordamos que esas gráficas seguirían un análisis multivariado (regresión lineal o regresión logística), de tal forma que el lector técnicamente informado pudiera asegurarse de que las variables individuales que se presentan en las gráficas fueran realmente predictores significativos de la variable dependiente estudiada. También acordamos un formato común para las gráficas (usando las plantillas producidas por SPSS 14.0). Finalmente, un formulario de “consentimiento informado” común fue preparado, y la aprobación para la investigación con sujetos humanos fue concedida por el Comité de Revisión Institucional (IRB) de la Universidad de Vanderbilt. Todos los investigadores involucrados en este proyecto estudiaron los materiales sobre protección a sujetos humanos utilizados por Vanderbilt y pasaron el examen correspondiente para obtener un certificado. Todos los datos públicos de este proyecto protegen el anonimato de los entrevistados. El formulario de consentimiento informado aparece como anexo del cuestionario en cada estudio.

Una preocupación desde el principio fue la minimización del error y la maximización de la calidad de la base de datos. Lo hicimos a través de diferentes formas. Primero, acordamos un esquema común de codificación para todas las respuestas cerradas. Segundo, nuestros colegas de la Universidad de Costa Rica prepararon un conjunto común de formatos para el ingreso de datos, incluyendo un cuidadoso control de rangos, usando el programa CPro 2.4 del *Census Bureau* (Oficina del Censo) de Estados Unidos. Tercero, todas las bases de datos fueron ingresadas en los países respectivos y verificadas, después de lo cual fueron enviados a LAPOP para su revisión. En ese punto, una lista aleatoria de 100 números de identificación de cuestionarios fue enviada a cada equipo, a quienes se les pidió que enviaran esas 100 encuestas a través de correo certificado a LAPOP para la auditoría. Esa auditoría consistió en dos pasos: el primero implicó comparar las respuestas escritas en el cuestionario durante la entrevista con las respuestas ingresadas por los equipos codificadores. El segundo paso implicó una comparación de las respuestas codificadas con la base de datos en sí misma. Si se encontraba un número significativo de errores a lo largo de ese proceso, la base de datos completa era reingresada y el proceso de auditoría repetido sobre la nueva base de datos. Afortunadamente, durante la ronda 2006/07 del **Barómetro de las Américas**, esto ocurrió en muy pocos casos. Finalmente, las bases de datos fueron combinadas por nuestro experto, Dominique Zéphyr, en un archivo único para todos los países y las copias fueron enviadas a todos los equipos para que pudieran llevar a cabo los análisis comparativos sobre el archivo completo.

Una adición tecnológica para la ronda del 2006/07 es la utilización de Asistentes Digitales Personales (PDAs) para la recolección de datos en cinco de los países. Nuestros socios en la Universidad de Costa Rica desarrollaron un programa llamado EQCollector y lo formatearon para su uso en la ronda de encuestas del 2006. Este nuevo método de recolección de datos resultó ser extremadamente eficiente, mejorando así la calidad de los datos debido a la minimización de errores, comparado con el método de lápiz y papel. Adicionalmente, el tiempo y el costo del ingreso de datos fueron completamente eliminados. Nuestro plan es expandir el uso de PDAs en futuras rondas de encuestas de LAPOP.



El trabajo de campo para las encuestas fue llevado a cabo solo luego de un extensivo proceso de prueba piloto en cada país. En muchos casos, pudimos enviar miembros del equipo LAPOP a los países recientemente incluidos en el **Barómetro de las Américas** para ayudar en el proceso. Las sugerencias de cada país fueron transmitidas a LAPOP y los cambios y revisiones necesarias fueron realizados. En la mayoría de los países esto significó más de 20 versiones revisadas del cuestionario. Utilizamos como estándar la versión 23 para el cuestionario final. El resultado es un instrumento altamente pulido, con preguntas comunes pero apropiadamente ajustadas al vocabulario específico de cada país. En los casos de países con una población indígena significativa, los cuestionarios fueron traducidos a los idiomas nativos de estos grupos (Quechua y Aymará en Bolivia, por ejemplo). Hemos creado también versiones en inglés para aquellos países del Caribe en donde se habla este idioma y la costa atlántica del continente, así como una versión en creole para Haití y en portugués para Brasil. En total, existen versiones en diez idiomas diferentes. Todos estos cuestionarios están disponibles en www.lapopsurveys.org y pueden ser encontrados en los apéndices de cada estudio.

Los equipos de cada país procedieron luego a analizar las bases de datos y escribir sus reportes. Cuando los borradores estuvieron listos, el siguiente paso en nuestro esfuerzo por maximizar la calidad del proyecto fue una reunión plenaria en Santo Domingo de Heredia, Costa Rica. Como preparación para esa reunión, sostenida en Noviembre del 2006, grupos de investigadores fueron asignados para presentar temas que emergieron de los estudios. Por ejemplo, un equipo hizo una presentación sobre corrupción y democracia, mientras que otro discutió los resultados sobre el estado de derecho. Esas presentaciones, hechas en PowerPoint, fueron criticadas por un pequeño equipo de nuestros metodólogos más calificados, y después el grupo completo de investigadores y los miembros de USAID-democracia discutieron los resultados. Ese proceso fue repetido en un período de dos días. Fue muy emocionante ver nuestros resultados allí, en “blanco sobre negro”, pero también fue el momento de aprender más sobre el fuerte vínculo entre datos, teoría y método. Después de la reunión de Costa Rica, los borradores de los informes fueron leídos por el equipo de LAPOP en Vanderbilt y fueron después regresados a los autores para correcciones. Los informes revisados fueron reenviados para ser leídos y editados por Mitchell Seligson, el coordinador científico del proyecto, que leyó y criticó cada una de las versiones preliminares. Estos borradores retornaron a sus países de origen, donde fueron editados y corregidos y posteriormente enviados a USAID para sus comentarios. Lo que tienen ante ustedes, entonces, es el producto de un intenso trabajo de investigadores altamente motivados, expertos en diseño muestral, supervisores de campo, entrevistadores, digitadores, y, por supuesto de más 27.000 entrevistados. Nuestros esfuerzos no serán en vano si los resultados presentados aquí son utilizados por formuladores de políticas públicas, ciudadanos y académicos para ayudar a fortalecer la democracia en América Latina.

Agradecimientos

El estudio fue posible gracias al generoso apoyo de la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos (USAID). Margaret Sarles, en la Oficina de Democracia y Gobierno de USAID, con la asistencia de Eric Kite, María Barrón y Elizabeth Ramírez en la Directiva de América Latina y el Caribe, aseguraron el financiamiento e hicieron posible todo el proyecto gracias a su apoyo incesante. Todos los participantes en el estudio les agradecen. En la Universidad de Vanderbilt, el estudio no hubiera sido posible sin la generosidad, colaboración y trabajo de muchas personas. El Decano de Artes y Ciencias, Richard McCarty proporcionó apoyo financiero en muchos aspectos cruciales de la investigación. Nicholas S. Zepos, Provost y Vice-Canciller para Asuntos Académicos generosamente ofreció a LAPOP oficinas y espacio para conferencias y los reacondicionó y equipó totalmente. Vera Kutzinski, Directora del Centro para las Américas, ha apoyado vigorosamente el proyecto tanto en el aspecto administrativo como con financiamiento para la inclusión de los Estados Unidos y Canadá en esta ronda del **Barómetro de las Américas**. Su asistente administrativa, Janell Lees, hizo posible muchas cosas de manera eficiente. Neal Tate, Director del Departamento de Ciencias Políticas en Vanderbilt, ha sido un gran apoyo para el proyecto desde su llegada a Vanderbilt y ha facilitado su integración con la apretada agenda del departamento. Tonya Mills, Administradora de Fondos y Patrick D. Green, Director Asociado de la División de Investigación Auspiciada, manejaron heroicamente los múltiples contratos y detalles financieros de este proyecto. En un estudio tan complejo como éste, decenas de contratos debieron ser firmados y cientos de facturas debieron ser pagadas. Ellos merecen un especial agradecimiento por sus esfuerzos.

En la central LAPOP, el peso del proyecto recayó en Dominique Zéphyr, nuestro Coordinador de Investigación y Analista de Datos. Dominique trabajó incansablemente, casi siempre siete días a la semana, en cada aspecto de los estudios, desde el diseño hasta la implementación y el análisis. También tuvo la responsabilidad central de preparar el material de capacitación para el análisis de datos, de realizar la auditoria y de combinar las bases de datos. Dominique sirvió también como Coordinador Regional para los países del Caribe y condujo personalmente las pruebas piloto del cuestionario y la capacitación de los entrevistadores en estos países. Finalmente, trabajó como colaborador en el reporte de Haití. Julio Carrión, de la Universidad de Delaware, cumplió el rol de Coordinador Regional para México, América Central y los Andes. Al mismo tiempo, fue colaborador en el estudio de Perú. Los estudiantes de postgrado del equipo de LAPOP estuvieron involucrados en todos los aspectos del estudio, desde el diseño de los cuestionarios, hasta la auditoria de los datos y el control de calidad. Quisiera agradecer a todos ellos: María Fernanda Boidi, Abby Córdova Guillén, José Miguel Cruz, Juan Carlos Donoso, Jorge Daniel Montalvo, Daniel Moreno Morales, Diana María Orcés y Vivian Schwarz-Blum. Sus programas de doctorado en Vanderbilt son auspiciados por USAID, el Centro para Estudios Latinoamericanos e Ibéricos de la Universidad de Vanderbilt y el Departamento de Ciencias Políticas. Mi colega Jon Hiskey participó en nuestras reuniones semanales, añadiendo su experta opinión y apoyo. La administradora de nuestra página web, María Clara Bertini, se aseguró que nuestros esfuerzos fuesen transparentes y ha hecho un trabajo extraordinario manejando la siempre creciente página web de LAPOP. Héctor Lardé y Roberto Ortiz fueron responsables del diseño de la portada y el formato del texto.



Imprescindible para el éxito del proyecto fue la cooperación de muchas personas e instituciones en los países involucrados, quienes trabajaron incesantemente para cumplir con fechas límites que parecían imposibles. Sus nombres, países y afiliaciones aparecen a continuación.

País	Investigadores
Resumen comparativo	Prof. Mitchell Seligson, Director de LAPOP y Profesor “Centennial” de Ciencias Políticas de la Universidad Vanderbilt
México y Centro América	
México	<ul style="list-style-type: none"> ● Dr. Kenneth M. Coleman, Investigador y Analista Senior, Director de Estudios, Market Strategies, Inc. ● Pablo Parás García, Presidente, DATA Opinión Pública y Mercados
Guatemala	<ul style="list-style-type: none"> ● Dra. Dinorah Azpuru, Profesora de Ciencia Política, Wichita State University y Asociada de ASIES, Guatemala ● Elaboración de la muestra: Lic. Juan Pablo Pira, Consultor Independiente
El Salvador	<ul style="list-style-type: none"> ● Dr. Ricardo Córdova, Presidente, FundaUngo, El Salvador ● Prof. Miguel Cruz, Director de IUDOP, Universidad Centroamericana (UCA)
Honduras	<ul style="list-style-type: none"> ● Prof. Miguel Cruz, Director de IUDOP, Universidad Centroamericana (UCA) ● José Rene Argueta, candidato doctoral, University of Pittsburgh
Nicaragua	<ul style="list-style-type: none"> ● Prof. Manuel Ortega-Hegg, Director, Centro de Análisis Socio-Cultural (CASC), Universidad Centroamericana (UCA), Managua, Nicaragua ● Marcelina Castillo Venerio, Centro de Análisis Socio-cultural (CASC), Universidad Centroamericana. (UCA)
Costa Rica	<ul style="list-style-type: none"> ● Dr. Luis Rosero, Director del Centro Centroamericano de Población (CCP), y Profesor, Universidad de Costa Rica. ● Dr. Jorge Vargas, Sub-director, Proyecto Estado de la Nación
Panamá	<ul style="list-style-type: none"> ● Dr. Orlando Pérez, Profesor Asociado de Ciencia Política, Central Michigan University
Los Andes/Cono Sur	
Colombia	<ul style="list-style-type: none"> ● Prof. Juan Carlos Rodríguez-Raga, Profesor, Universidad de los Andes
Ecuador	<ul style="list-style-type: none"> ● Dr. Mitchell Seligson, Director de LAPOP, y Profesor “Centennial” de Ciencias Políticas de la Universidad Vanderbilt ● Juan Carlos Donoso, estudiante doctoral, Vanderbilt University ● Daniel Moreno, Ph.D. candidato doctoral, Vanderbilt University ● Diana Orcés, estudiante doctoral, Vanderbilt University ● Vivian Schwarz-Blum, estudiante doctoral, Vanderbilt University
Perú	<ul style="list-style-type: none"> ● Dr. Julio Carrión, Profesor Asociado, Universidad de Delaware en Estados Unidos, e investigador del Instituto de Estudios Peruanos. ● Patricia Zárate Ardela, investigadora, Instituto de Estudios Peruanos
Bolivia	<ul style="list-style-type: none"> ● Dr. Mitchell Seligson, Director de LAPOP, y Profesor “Centennial” de Ciencias Políticas de la Universidad Vanderbilt ● Abby B. Córdova, estudiante doctoral, Vanderbilt University ● Juan Carlos Donoso, estudiante doctoral, Vanderbilt University ● Daniel Moreno, Ph.D. candidato doctoral, Vanderbilt University ● Diana Orcés, Ph.D. estudiante doctoral, Vanderbilt University ● Vivian Schwarz-Blum, estudiante doctoral, Vanderbilt University
Paraguay	<ul style="list-style-type: none"> ● Manuel Orrego, CIRD, Paraguay
Chile	<ul style="list-style-type: none"> ● Dr. Juan Pablo Luna, Instituto de Ciencia Política, Pontificia Universidad Católica de Chile
Uruguay	<ul style="list-style-type: none"> ● María Fernanda Boidi, estudiante doctoral, Vanderbilt University ● Dr. María del Rosario Queirolo, Profesora de Ciencias Políticas, Universidad de Montevideo
Brasil	<ul style="list-style-type: none"> ● Denise Pavia, Universidade Federal de Goiás, Goiás, Brazil ● Simon Bohn, York University ● Rachael Meneguillo, Brazil, Directora del Centro de Estudos de Opinião Pública (CESOP) Profesora de Ciencia Política, Universidad de Campinas, Brazil ● David Samuels, Profesor de Ciencia Política, University of Minnesota ● Lucio Renno, University of Arizona

País	Investigadores
El Caribe	
República Dominicana	<ul style="list-style-type: none"> ● Dra. Jana Morgan Kelly, Profesora Asistente de Ciencia Política, University of Tennessee ● Dra. Rosario Espinal, Profesora de Sociología, Temple University
Guyana	<ul style="list-style-type: none"> ● Dr. Mark Bynoe, Director, School of Earth and Environmental Sciences, University of Guyana ● Ms. Talia Choy, Lecturer, Department of Government and International Affairs, University of Guyana.
Haití	<ul style="list-style-type: none"> ● Dominique Zéphyr, Coordinador de investigación de LAPOP, Vanderbilt University ● Yves François Pierre, Groupe de Recherche en Sciences Sociales (GRESS)
Jamaica	<ul style="list-style-type: none"> ● Dr. Ian Boxill, Profesor de Sociología Comparada, Department of Sociology, Psychology and Social Work, UWI, Mona. ● Roy Russell, Lecturer en Estadística, Department of Sociology, Psychology and Social Work, UWI, Mona. ● Arlene Bailey, Especialista en Sistemas de Información, Department of Sociology, Psychology and Social Work, UWI, Mona. ● Balford Lewis, Lecturer en Métodos de Investigación, Department of Sociology, Psychology and Social Work, UWI, Mona. ● Dr. Lloyd Waller, Lecturer in Métodos de Investigación, Department of Government, UWI, Mona

Finalmente, queremos agradecer a los más de 30,000 individuos en estos países que entregaron tiempo de sus ocupaciones diarias para contestar nuestras preguntas. Sin su cooperación, este estudio habría sido imposible.

Nashville, Tennessee
Marzo, 2008

Perspectiva general

Por Margaret Sarles y Mitchell A. Seligson

Existe mucho que celebrar en el fortalecimiento de las prácticas democráticas y las instituciones en América Latina. Gobernados alguna vez casi en su totalidad por dictadores, los países de la región son ahora gobernados casi en su totalidad por demócratas. Las elecciones aparecen como la norma establecida para decidir “quién gobierna”, reemplazando las transferencias frecuentes e irregulares de poder vía golpes militares y ejecutivos de Estado del pasado. De hecho, hasta los líderes más carismáticos relacionados con el cambio radical aparecen comprometidos con las elecciones libres y limpias como el camino hacia el legítimo liderazgo. Con mayor acceso al poder a través de las elecciones, hasta la izquierda radical está usando el sistema político para llegar al poder en lugar de usar violencia. Los rezagados, como el prolongado movimiento guerrillero en Colombia o la dictadura socialista de casi medio siglo en Cuba parecen aisladas anomalías anacrónicas en una región comprometida con las políticas electorales. Asimismo, las tendencias democráticas son evidentes por fuera de las políticas electorales. Las organizaciones de la sociedad civil y los grupos independientes de negocios crecen y prosperan; los partidos políticos se turnan dentro y fuera del poder; la prensa crecientemente energética e independiente descubre irregularidades, y los funcionarios locales aseguran mayor independencia del centro. Las frecuentes violaciones a los derechos humanos del pasado por parte del Estado, son ahora la excepción en lugar de la regla. En el lado del gobierno, las democracias en América Latina han sido capaces de juntar coaliciones políticas para enfrentar exitosamente un número importante de problemas de política pública, proveyendo estabilidad macroeconómica, aumentando la inversión, aumentando el acceso a la educación y la salud, y algunos han logrado importantes resultados en la lucha contra la pobreza. La democracia parece haberse convertido, usando la terminología clásica de Adam Przeworski, en “el único juego en la ciudad”.

Sin embargo, el continuo progreso en dirección de la consolidación democrática y de democracias de mayor calidad no está garantizado como lo demuestran los resultados de “Freedom House” en 2007 en su encuesta “Libertad en el mundo”. El estudio reporta un descenso generalizado del estado de la libertad a nivel mundial, y un creciente retroceso en contra de la democracia a causa de gobiernos autoritarios, incluyendo a Venezuela. Hasta en las democracias relativamente consolidadas de México, Argentina y Brasil, las “puntuaciones de libertad” descendieron el año pasado. Mientras la política electoral competitiva continúa prosperando, y la institucionalización de entidades electorales es un hecho característico del progreso, otras instituciones democráticas muestran signos preocupantes de debilidad en la región. Los constantes escándalos de corrupción ilustran la debilidad de la rendición de cuentas y del estado de derecho, al igual que las altas tasas de criminalidad. Además, luego de haber sido elegidos democráticamente, algunos presidentes empujan los límites del poder ejecutivo a nuevos extremos, esforzándose cada vez más para acumular mayor poder a costa de instituciones de representación fundamentales para una democracia liberal. Los partidos políticos en varios países permanecen débiles. El estado de derecho es frágil en varios países, mientras que los gobiernos locales carecen de recursos. Los partidos basados en etnicidad se están incrementando en algunos países, sugiriendo un incremento del sectarismo.



¿Qué debemos pensar de esta combinación de tendencias, de manera positiva y negativa? A nivel macro, las pautas no son claras. A lo mejor, ellas muestran que la consolidación democrática no es un proceso lineal, proporcionando evidencia de la democratización como un proceso más bien con altos y bajos, con algunos aspectos que avanzan bien, mientras otros parecen ser frustrantemente intratables. No está claro si un cambio negativo en un año en particular, en un país en particular, está relacionado con un retroceso real en la democracia, parte de un alejamiento subyacente de la democracia liberal, o si estamos simplemente observando un proceso inestable de avances y retrocesos que de hecho puede ser compatible con la consolidación democrática de largo plazo. Para entender las democracias latinoamericanas necesitamos ir por debajo del nivel macro. Necesitamos más y mejores datos. Necesitamos además llevar a cabo un análisis más refinado que permita comparaciones detalladas entre aspectos específicos del cambio democrático en la región.

Es el propósito de este volumen regional empezar aquel detallado análisis comparativo del proceso democrático en América Latina y el Caribe, proporcionando una lente diferente a través de la cual se pueda analizar y juzgar el estado de la democracia en la región.

Este estudio se basa en la encuesta del Barómetro de Las Américas llevada a cabo en 22 países entre 2006 y 2007, involucrando más de 34.000 entrevistas cara-a-cara a profundidad con ciudadanos de la región. Los datos del Barómetro de Las Américas revelan qué hacen, piensan y sienten los ciudadanos en términos de democracia, además de informar sobre atributos personales, permitiendo así un análisis detallado que no se encuentra disponible en ninguna otra fuente. En casi todos los países se han escrito estudios de caso detallados basados en las encuestas, cubriendo temas como legitimidad democrática, corrupción, crimen y violencia y participación ciudadana.¹ En algunos países existen múltiples encuestas, extendiéndose desde hace diez años o más. A medida que son publicados, los estudios de las encuestas por país reciben mucha publicidad, y los resultados son debatidos y discutidos en la prensa nacional y entre gente interesada en política, contribuyendo así al diálogo general del estado de la democracia y de las reformas democráticas.

Este reporte regional acompaña a los estudios de país. Adjunta además algunos de los descubrimientos más importantes de las encuestas, pero se enfoca en la región en su conjunto. Los artículos cubren tópicos críticos en el desarrollo democrático sostenible en la región y debería contribuir ampliamente en el actual discurso de la reforma de la democracia y la gobernabilidad en las políticas y las comunidades de desarrollo.

Hemos escogido enfocarnos en un tema único e importante: los retos para la democracia en América Latina y el Caribe. Incluso enfocado de esta manera hemos tenido que ser selectivos

¹ Los reportes por país se encuentran disponibles en formato pdf en la página Web del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (ver www.LapopSurveys.org). Los datos para cada país están también disponibles en el mundo entero, gratis, para análisis en línea en de la página Web anteriormente mencionada. Damos la bienvenida y animamos a otros investigadores a usar los datos gratuitamente, tanto para verificar los descubrimientos presentados aquí, como para llevar a cabo su propia investigación. Dada la gran cantidad de datos disponibles, este volumen, además de las monografías por país, pueden únicamente apenas escharbar superficialmente para descubrir descubrimientos interesantes en la democracia.

en escoger un número limitado de tópicos. Los hemos elegido sobre la base de 1) nuestra evaluación de la importancia del proceso de desarrollo democrático; 2) su destaque como tópicos importantes de política en América Latina; y 3) qué tan bien la investigación a través de encuestas pueden lidiar con este tema. Obviamente existen varios aspectos de desarrollo institucional, cambios macropolíticos, y liderazgo, que requieren sendos análisis más allá de la investigación a través de encuestas que son importantes para entender el desarrollo democrático en América Latina. Por otra parte, existen algunos temas para los cuales la investigación a través de encuestas proporciona una excelente, y única en algunos casos, evidencia empírica. Hemos enfatizado, naturalmente, aquellos temas en este reporte.

Los artículos en este volumen cubren un amplio espectro de aproximaciones a la democracia, empero presenta un set unificado de análisis de varias maneras. Todos relacionan la teoría democrática con algún aspecto de los datos provenientes de las encuestas, y todos sugieren la amplia preocupación de política pública que se encuentra detrás de este tema. La mayoría trata con algún aspecto de las preguntas de quién apoya a la democracia, qué tipo de democracia, y bajo qué condiciones la apoyan. Algunos buscan amplios descubrimientos, mientras que otros escarban de manera profunda en una relación particular que tiene implicaciones para la sostenibilidad democrática. Algunos de ellos combinan los datos que provienen de las encuestas con variables estructurales macro, usando análisis de regresiones complejas que nos permiten determinar la importancia relativa de las actitudes y comportamientos individuales comparados con características a nivel de país, como por ejemplo el nivel de riqueza. De forma grupal, ellos muestran cuánto puede aprenderse de encuestas que van más allá de caracterizaciones sencillas de la cultura democrática de la región. En efecto, algunos de ellos presentan resultados que contradicen directamente aquello que se pasaba por “conocimiento general” acerca de las democracias latinoamericanas.

Lectores cuidadosos notarán que no existe un acuerdo total en todos los puntos entre los autores. En parte, esto refleja el hecho de que los autores han escogido conceptos y mediciones diferentes pero emparentadas para examinar un relacionamiento básico y, por ende, los descubrimientos van a variar. En parte, sin embargo, esto refleja la imperfección de la teoría democrática en sí misma, en la cual existe todavía un gran debate sobre el significado de deficiente respuesta de los partidos políticos, o de la disposición de la gente a considerar opciones políticas diferentes a la democracia como sistema político. No hemos realizado un esfuerzo para lograr que los autores conformen una sola definición de estabilidad democrática o cambio, y en efecto hemos acogido las diversas interpretaciones que traen en su trabajo.

Estos artículos en su totalidad mueven el debate sobre democratización, de la tendencia de aquellos hacedores de política pública quienes se expresan sobre el progreso de la región en blanco y negro, o que proveen caracterizaciones superficiales de un hemisferio entero. Mientras que la agregación de datos a nivel de país a un nivel regional conlleva con seguridad a una pérdida de particularidades, los autores son cuidadosos al limitar su generalización, o proporcionar comparaciones entre países cuando es necesario. En general, estos análisis de nivel regional proporcionan el tipo de evidencia comparativa que ha estado faltando en el debate sobre democratización.



Los retos

El primer reto para la democracia al cual nos referimos es uno de los que más preocupa a los analistas que se enfocan en el estado contemporáneo de democratización en América Latina: la disposición de muchos latinoamericanos de aceptar, e incluso apoyar a sus Presidentes recientemente elegidos a ignorar los chequeos y balances de una democracia moderna y a asumir poderes semi-autoritarios. El presidencialismo sigiloso en América Latina fue notado por Guillermo O'Donnell en su artículo clásico “democracia delegativa” in 1995, y la tendencia parece haberse fortalecido en los trece años desde que su artículo fuera publicado (O'Donnell 1995). De vez en cuando ha sido el propio presidente quien ha buscado expandir poderes, incrementando el uso de “decretos ejecutivos” por ejemplo, que pueden ser llevados a cabo con contribuciones legislativas limitadas, o a su vez, sin ninguna contribución. Varios presidentes han cabildeado también exitosamente para lograr cambios Constitucionales, permitiéndoles así permanecer en el poder más tiempo del límite original. Pero sería un error pensar que los presidentes en estas democracias relativamente nuevas están tomando estos poderes sin la aprobación ciudadana. Estos cambios, en efecto, tienen usualmente mucha popularidad. Parece ser que muchos ciudadanos desean tener elecciones libres y limpias, pero una vez elegidos, sienten comodidad en otorgar a sus presidentes poderes extraordinarios.

Varios investigadores han visto esta característica político/cultural como un indicador de la emergencia del autoritarismo electoral, o una forma contemporánea de populismo democrático, caracterizado por ejecutivos virtualmente sin control, apoyados por movimientos masivos de personas que ven a la oposición y a la política competitiva de partidos como una amenaza, en lugar de una condición necesaria para la prosperidad de la democracia liberal. ¿Es esta una característica importante en la cultura democrática en América Latina? De ser el caso, ¿representa esto un límite a la institucionalización de las prácticas democráticas en la región?

Es precisamente este fenómeno el que Mitchell A. Seligson explora en el primer artículo en este reporte: el punto hasta el cual los ciudadanos apoyan la dominancia ejecutiva, y son capaces de abandonar varios de los chequeos y balances requeridos en un Estado democrático sostenible. Seligson mira al autoritarismo electoral en términos de la ideología política de izquierda/derecha ciudadana. Encuentra que aquellos que se identifican como “izquierda” son más escépticos y desconfiados de las instituciones políticas, más inclinados a creer que la democracia es mejor que otros sistemas, y más favorables a un líder fuerte. Si América Latina está “girando hacia la izquierda”, como un número de elecciones recientes parece demostrar, esto parecería una causa de gran preocupación. Esto indicaría que existe un electorado cada vez menos comprometido con un sistema político democrático.

Sin embargo, el análisis de contexto de Seligson proporciona un cuadro mucho más detallado. Primero encuentra que incluso con pequeños incrementos en la orientación izquierdista que parece haber tomado lugar, los ciudadanos latinoamericanos permanecen un poco hacia la “derecha” ideológicamente, en comparación con otras regiones del mundo. Sin embargo y de mayor importancia, Seligson es capaz de determinar limitaciones importantes en la mayoría de ciudadanos, incluso aquellos de izquierda, quienes desean imponerse al poder de un líder elegido. Nota además que a pesar de la gran desconfianza en los partidos políticos, la mayoría de los ciudadanos los consideran esenciales para la democracia: ellos no quieren abandonarlos ni

tampoco a otras instituciones políticas. Incluso mientras los entrevistados se muestran impacientes con la lentitud de la reforma económica, existen de hecho límites importantes a las medidas “populistas” que apoyarían para llegar a dicha reforma.

En el Capítulo II, Julio Carrión examina una pregunta más bien teórica pero igual de importante para aquellos interesados en el estado de la democracia en América Latina: ¿Qué clase de democracia tienen las personas en mente cuando dicen “apoyar la democracia”? ¿Qué tan profundo y consistente es su compromiso? ¿Qué tipo de personas son las que más apoyan y qué tipo son las que apoyan menos a la democracia?

El enfoque de Carrión es metodológicamente innovador, particularmente en el contexto latinoamericano. Su análisis está basado en preguntas abiertas pidiéndole a la gente definir a qué se refieren con democracia. Estas preguntas, desarrolladas por el Afro-Barómetro y conducidas en numerosos países africanos en el tiempo, nos permiten por primera vez obtener una buena percepción del entendimiento sobre democracia de los ciudadanos en América Latina, e incluso comparar países latinoamericanos y africanos. No debe sorprender que la gente no concuerde con una sola definición de democracia, tomando en cuenta que hasta los expertos difieren en su definición. Carrión aplica técnicas sofisticadas de modelación, haciendo posible el controlar por una serie de variables que comúnmente presentan relaciones escondidas entre el apoyo a la democracia y otros atributos, descubriendo así relaciones un tanto asombrosas.

Mientras que Carrión encuentra que la mayoría de latinoamericanos miran que la democracia hermana derecho y libertad, también demuestra que un porcentaje significativo se refiere a los servicios y beneficios gubernamentales o al progreso económico como parte de su definición. Tal vez más problemático es el número de encuestados que parece no tener idea del significado del término. Esto por sí mismo representa un reto democrático.

Al igual que Seligson, Carrión encuentra que la gente que manifiesta una definición liberal de la democracia posee ciertas características: ellos apoyan más a la democracia como sistema, y parecen ser mayores, ser hombres, ser ricos, parecen residir fuera de las áreas rurales y tener un mayor conocimiento político. Al controlar por estos atributos, Carrión encuentra que la usualmente discutida relación entre “confianza social” y apoyo a la democracia desaparece completamente. Adicionalmente, y de nuevo en contradicción con varios análisis actuales, Carrión encuentra que “el hecho de que una persona haya sido víctima de un crimen no la hace menos probable a apoyar la democracia”. Esto sugiere que una prioridad de política pública en disminuir las tasas de crimen puede no tener el efecto de incrementar el apoyo a la democracia, por lo menos en los términos generales en los que algunos reformistas lo habían deseado. Empero, aquellos que se encuentran más disgustados con la corrupción en el gobierno y aquellos negativos con respecto a la economía nacional, de hecho se inclinan más a apoyar alternativas políticas no democráticas.

En el Capítulo III María Fernanda Boidi aborda uno de los aspectos institucionales más debatidos y menos entendidos de la democratización en la región: el estado de los partidos políticos. Los partidos políticos son esenciales para el funcionamiento de un sistema político democrático moderno, pero son generalmente caracterizados como “débiles” en América Latina, y desconfiados por los ciudadanos. De hecho, mientras las encuestas han mostrado que los partidos políticos son las instituciones menos confiadas en todo el mundo, los partidos



latinoamericanos tienen el dudoso honor de ser los menos confiados incluso en este penoso grupo. ¿Qué significa esto para la democracia?

La contribución de Boidi a esta discusión recae primeramente en la presentación de datos nuevos. Ella ha acumulado datos de encuestas por país sobre identificación partidaria, participación en actividades de partidos, y otros relacionados con comportamiento del voto que nunca antes habían sido analizados. Su capítulo ilustra la riqueza de los datos de encuestas y su relación con los partidos políticos, y debería incentivar a otros investigadores de partidos políticos a continuar investigando. Ella busca explicar por qué los latinoamericanos tienen tan poca confianza en los partidos políticos, desarrollando un modelo de regresión múltiple que incluye variables basadas en varias de las razones citadas con mayor frecuencia sobre baja confianza, incluyendo la percepción de la habilidad del gobierno para combatir la corrupción, el crimen, la pobreza, y reducción del desempleo. Su análisis preliminar indica que estos factores parecen casi no tener poder explicativo.

Al igual que otros contribuyentes de este volumen, Boidi está impresionada por lo que parece ser inconsistencias entre la percepción política de los ciudadanos y la democracia. Ella muestra que no únicamente la confianza en los partidos políticos es baja, sino también que los votantes no usan a los partidos como un “atajo a la información” para la selección de votos: únicamente un quinto de los entrevistados escogen a un candidato presidencial por su partido político, con una amplia variación por país. Ella concluye que “los partidos políticos están fallando en proporcionar alternativas significativas para liderar el gobierno; consecuentemente, ellos no cumplen con su función representativa”. Sin embargo, también encuentra que los ciudadanos rechazan tener una democracia sin partidos, y que existe una relación cercana entre ideología y voto partidario, con gente que se auto-identifica como “derechista” votando más por los partidos de “derecha” y viceversa, al igual que los mostrado por Seligson desde una perspectiva algo distinta. El análisis de Boidi ofrece una intrigante evidencia de que los partidos políticos latinoamericanos no son únicamente vehículos de la ambición personal de líderes, ni tampoco partidos “patrimoniales” mantenidos con vida únicamente por la distribución de empleo y los enlaces personales, sino basados también en genuinas diferencias políticas e ideológicas.

Un reto aún más básico a la sostenibilidad de la democracia que los partidos políticos es bajo nivel de “apoyo al sistema” que varios latinoamericanos expresan hacia sus nuevas democracias. Para las democracias que permanezcan estables, los ciudadanos deben expresar por lo menos niveles mínimos de apoyo a su sistema político. Las democracias que no son apoyadas por sus ciudadanos son vulnerables a la inestabilidad e incluso rompimiento. Este problema es explorado en el Capítulo IV por Vivian Schwarz-Blum.

Schwarz-Blum reitera un punto inicial importante: en países altamente industrializados, el “apoyo al sistema” a la democracia es relativamente alto (inclusive si ha declinado en años recientes) y básicamente inafectado por el pobre desempeño económico de un país, e incluso por la situación económica propia de un individuo. Desafortunadamente en América Latina, ella encuentra que éste no es el caso. Schwarz-Blum usa la definición de “apoyo al sistema”, un índice compuesto de cinco preguntas creadas por LAPOP que sondean si el entrevistado está orgulloso/a de su sistema político, si los juicios son justos, si las instituciones políticas deberían ser respetadas, si los derechos básicos están salvaguardados, y si el sistema político debería ser apoyado. Según su argumento, esta es una medida más demandante sobre el apoyo que la

pregunta sobre si los ciudadanos apoyan la democracia como “la mejor de las alternativas” usada en otros artículos en este reporte. Por esta medida, Canadá y los Estados Unidos se ubican en el extremo más alto de los 19 países estudiados, con cerca de dos tercios de los entrevistados apoyando sus sistemas democráticos, con Ecuador y Paraguay, al otro extremo, con menos del 40 por ciento de apoyo al sistema. Estos resultados conllevan a una preocupación sobre la sostenibilidad democrática entre los países al extremo más bajo de la escala.

En un interesante contraste con los hallazgos de Boidi que indican que el desempeño económico no afecta a la confianza en los *partidos*, Schwarz-Blum encuentra que el buen desempeño económico, de hecho incrementa el *apoyo general* al sistema político de un país. Los ciudadanos latinoamericanos descontentos con el desempeño económico de su país, o aquellos que perciben su propia situación económica de manera negativa, apoyan en menor medida a sus democracias. Entender este vínculo entre apoyo a la democracia y el progreso económico contribuye a una discusión contemporánea mucho más amplia sobre la relación del desempeño económico con la sostenibilidad democrática, especialmente durante los primeros años de una nueva democracia, además ilustra el potencial de los datos de encuesta para analizar estos vínculos. Sus resultados colocan debidamente parte del peso del éxito democrático sobre los hombros de aquellos que manejan las economías nacionales, incluyendo líderes políticos nacionales, bancos centrales, partidos y responsables de elaborar las políticas públicas.

Históricamente, el poder político en América Latina ha estado excesivamente centralizado en el nivel nacional, y dentro del gobierno nacional, en el poder ejecutivo, haciendo que la política autoritaria sea más fácil y más probable. Seligson aborda uno de los aspectos más importantes de este desafío para la democracia en su discusión sobre el dominio del poder ejecutivo en el Capítulo I, revelando cierta persistencia del apoyo ciudadano al “autoritarismo electoral”, incluso una generación después de la constitución de los nuevos sistemas democráticos, aunque con importantes limitaciones. Daniel Montalvo trata el otro lado de la sobre-centralización en el Capítulo V, examinando cuidadosamente la descentralización de poder desde la arena nacional a los gobiernos municipales. ¿Es la descentralización una de las soluciones para la sostenibilidad de las democracias?

El trabajo de Montalvo es uno de los pocos estudios empíricos que emplea datos de encuesta para abordar este importante problema. La descentralización ha sido promovida como un obstáculo permanente a la reimposición del poder autoritario, ya que el crecimiento de centros de poder subnacionales independientes, potencialmente restringe el poder del gobierno nacional. La descentralización promete situar a los ciudadanos más cerca de los gobiernos que influyen en su vida diaria, y proporcionar mayores oportunidades y un acceso más amplio a la participación ciudadana en el gobierno; al mismo tiempo que con la descentralización el gobierno tiene un mejor conocimiento de las necesidades de los votantes locales y se vuelve más sensible a ellas. A lo largo de la pasada generación, todos los países han instituido elecciones directas para elegir a sus alcaldes y autoridades municipales; el último gobierno democrático en hacerlo fue Costa Rica, con las primeras elecciones directas de alcalde en 2002. Sin embargo, todavía sabemos poco sobre si los ciudadanos sienten que estas promesas de una mejor democracia y un mejor gobierno se han hecho realidad.

Montalvo, de hecho, encuentra alguna divergencia entre las grandes esperanzas que ha suscitado la descentralización y su apoyo entre los ciudadanos de América Latina. En general, la



confianza de la gente en el gobierno local es similar a la confianza en el gobierno nacional. Sin embargo, esto esconde la gran variación que existe dentro de la región, con ciudadanos en algunos países confiando mucho más en el gobierno local, y prefiriendo que los servicios se presten localmente, mientras en otros países ocurre justo lo contrario. La investigación establece una tipología de estados, basada en los distintos grados de confianza en los niveles nacional y local. Después analiza los acontecimientos históricos que han llevado a esas diferencias, ilustrando cómo los datos de encuesta pueden complementar y fortalecer estudios más tradicionales a nivel de país. La experiencia positiva de Jamaica con planes de gobierno local, los pobres antecedentes de Ecuador a la hora de mantener gobiernos nacionales estables -estas y otras experiencias únicas de cada país ayudan a explicar las grandes diferencias entre ellos. Estos hallazgos sugieren que existen oportunidades diferenciales para la descentralización como medio para promover la democracia a lo largo de América Latina, y que programas destinados a incrementar la descentralización necesitan considerar los beneficios y las actitudes de los ciudadanos en cada país si quieren alcanzar sus objetivos. La evidencia en este capítulo muestra que no es la solución perfecta.

En el Capítulo VI, Rosario Queirolo retoma dos temas discutidos ya en otras partes del reporte: la relación entre el desempeño económico y las pautas de voto, y si el aumento observado del voto a la izquierda representa una amenaza para la democracia. Ella comprueba sus hipótesis utilizando de manera un poco diferente los datos de las encuestas, lo cual muestra por una parte, los múltiples enfoques posibles a la hora de analizar datos de encuesta y por otra, que los hallazgos de los investigadores pueden variar hasta cierto punto dependiendo de las preguntas elegidas. Queirolo comprueba diferentes teorías económicas que compiten por explicar por qué los Latinoamericanos han elegido presidentes de izquierda en diferentes países. Concluye que el giro a la izquierda no se ha producido por el cansancio con las reformas de libre mercado impulsadas por el “Consenso de Washington”, ni por una ideología de izquierda, sino por el fracaso del gobierno –cualquiera que sea su línea ideológica- a la hora de mejorar la situación económica. Los votantes Latinoamericanos se han guiado más por los resultados económicos que por la ideología, ella concluye. Los votantes eligen partidos que no han sido “contaminados” por haber estado en el poder.

Cuando se centra en la cuestión de si la izquierda supone un “peligro para la democracia”, utiliza un conjunto de escalas desarrolladas por LAPOP para medir la tolerancia política y el apoyo a las libertades básicas, además de la pregunta frecuentemente utilizada de si el entrevistado está de acuerdo con la afirmación “puede que la democracia tenga problemas, pero es mejor que cualquier otra forma de gobierno”. No obstante, sus hallazgos divergen de manera provocadora de los de Seligson. Aunque los dos encuentran que la derecha muestra niveles más elevados de apoyo al sistema político democrático que la izquierda, Queirolo señala que los ciudadanos de izquierda puntúan más alto en términos de tolerancia política y del apoyo a las libertades civiles, mientras que los de derecha se inclinan en menor medida a apoyar cualquier uso de la fuerza para derrocar a un gobierno. Ella concluye que la izquierda no supone ningún peligro para la democratización en América Latina: la izquierda está utilizando el sistema político en vez de rechazarlo, y apoya creencias consistentes con una cultura democrática.

Abby Córdova Guillén se centra en otro de los desafíos para la democracia –la frecuentemente citada falta de “capital social” en América Latina, que de acuerdo a expertos como Robert Putnam y Larry Diamond, es necesario para que la democracia se sostenga. Este un

tema complejo, y Córdova Guillén ofrece importantes observaciones sobre la cultura democrática en América Latina en el Capítulo VII. ¿Tiene América Latina el capital social necesario para que la democracia se sostenga? Guillén compara los países de América Latina con las democracias consolidadas de Estados Unidos y Canadá, observando los dos componentes del capital social, confianza interpersonal y participación cívica. Tal y como se podría esperar, ella encuentra que los niveles de confianza social en Estados Unidos y Canadá son más elevados que en los países de América Latina. Por el contrario, sin embargo, las tasas de participación cívica varían mucho, con algunos países como Haití con muy bajos niveles de confianza social. En general, la evidencia muestra que es la confianza, más que la participación, la que más relaciona desarrollo democrático y capital social.

Posteriormente, Córdova Guillén examina las fuentes de la confianza social para determinar lo duradera o maleable que es la confianza social como valor en la sociedad. Si tal y como alguien ha argumentado, está profundamente arraigada en la historia y en la religión de la región, y es resistente al cambio, entonces podremos esperar que muchos países de América Latina tengan grandes dificultades para sostener la democracia. Por el contrario, si el concepto está arraigado en factores estructurales o individuales susceptibles de cambio, entonces es más probable, si esos factores han cambiado, que una cultura más democrática pueda echar raíces.

Ella utiliza un modelo de regresión jerárquico lineal para analizar de manera conjunta factores individuales y contextuales del país, controlando por la edad, género, educación y victimización por delincuencia, todas ellas posibles explicaciones de las diferencias en los niveles de confianza social. Córdova Guillén concluye finalmente que no son las diferencias individuales, sino los niveles económicos del país lo que mejor explica los niveles confianza. Al igual que otros investigadores, encuentra que cuanto más rico es un país, más altos son los niveles de confianza social. Sin embargo, encuentra que la potencial relación positiva entre desarrollo y confianza social está atenuada por otro factor: la desigualdad económica. Cuanto mayor es la desigualdad, menor es el impacto del crecimiento económico sobre la confianza social. En otras palabras, para que crezca la confianza social, no es suficiente centrarse en el desarrollo económico: debe prestarse atención también a la mejora de la igualdad económica. Esta conclusión sobre la primacía de la economía a la hora de explicar la confianza social es también importante porque el desarrollo económico, e incluso la distribución del ingreso, son “maleables”; no son rasgos individuales resistentes al cambio. La confianza social puede cambiar.

¿Hasta qué punto la etnicidad supone un desafío para la consolidación de la democracia en la región? Daniel Moreno trata este desafío en el Capítulo VIII. En muchos países de América Latina, la población indígena y las minorías se han enfrentado históricamente a una gran discriminación, y a la denegación del acceso al poder político y social. Las nuevas democracias han sido más inclusivas, ofreciendo oportunidades de liderazgo político por primera vez a muchos de esos grupos. Pero dada la historia de América Latina, ¿los grupos tradicionalmente excluidos se sienten realmente parte del nuevo sistema político? ¿Están deseando jugar el juego político democrático? ¿Se dividirán los países en función del origen étnico?

Moreno introduce el concepto de “sentido de integración nacional”, una combinación entre el orgullo de pertenencia al país y la creencia de que dentro del país se comparte una serie de valores comunes. Argumenta persuasivamente que este sentido positivo de país y de



comunidad política es esencial para consolidar la democracia. Entonces se pregunta si la gente que pertenece a los grupos tradicionalmente excluidos tiene el mismo sentido de nacionalidad, el mismo sentimiento de orgullo y la creencia de compartir valores comunes, como el resto de la población. Dados los patrones históricos de exclusión política y social, ¿representan un grupo “desintegrado” y distanciado de la política?

Su análisis encuentra que la respuesta es no, con muy pocas excepciones. Muestra que un elevado porcentaje de ciudadanos a lo largo del hemisferio se siente orgulloso de su país y que las minorías expresan el mismo nivel de orgullo que sus conciudadanos, excepto en cuatro países: Canadá, Honduras, Perú y Panamá. Cuando retoma la cuestión de “compartir valores comunes”, aparecen sin embargo algunas diferencias. La gente que se considera de una minoría étnica está menos convencida de que haya valores compartidos, lo cual genera una preocupación, porque aquellos que creen que existen valores compartidos entre los ciudadanos son también los más tolerantes políticamente. Como otros investigadores en este reporte, señala lo importantes que son las características individuales para explicar diferencias, con la gente mayor sintiéndose más orgullosa de su país que los más jóvenes, y las mujeres teniendo un sentido más fuerte de valores comunes que los hombres. En general, la historia es positiva. La identidad étnica parece no tener efecto sobre la fortaleza del vínculo entre ciudadanos y comunidad política.

Esta investigación, tal y como señala Moreno, sólo toca la superficie de lo que puede aprenderse sobre etnicidad y democracia a partir de datos de encuesta. Estudios sobre patrones de voto y comportamiento político, además de políticas y prácticas, deberían darnos en el futuro un mejor entendimiento sobre si las nuevas democracias serán capaces de integrar completamente a todos los ciudadanos en la política y en la sociedad.

Los sistemas políticos democráticos proporcionan medios para que todos los ciudadanos puedan participar en la política, protegiendo incluso a grupos impopulares de la potencial tiranía de la mayoría con libertad de expresión y acceso al poder político. ¿La cultura política de los países Latinoamericanos apoya este principio básico de la democracia? El análisis de Diana Orcés sobre esta cuestión en el Capítulo IX debería preocupar a los reformadores democráticos.

Orcés emplea una definición muy básica de “tolerancia política” desarrollada por Seligson que pregunta a los entrevistados si apoyan el derecho al voto, a manifestarse pacíficamente, a competir por cargos políticos, y a realizar discursos políticos de los grupos con los que no están de acuerdo. Cada uno de estos es un derecho protegido por cualquier democracia. Sin embargo, muchos, y a menudo la mayoría de los ciudadanos en los países Latinoamericanos no están de acuerdo con que esos grupos de oposición tengan tales derechos. Incluso en democracias consolidadas como Estados Unidos y Canadá, el 20 por ciento de los entrevistados están dispuestos a negar esos derechos a los oponentes. Muchos países de América Latina y el Caribe, tienen alrededor de un 40% en desacuerdo, y en cuatro países –Bolivia, Honduras, Ecuador y Panamá- la mayoría de ciudadanos no están de acuerdo.

Existen diferencias importantes en los niveles de tolerancia entre los países, con los datos proporcionando algún apoyo al argumento de que las experiencias coloniales británicas y francesas podrían haber proporcionado una base más firme que el colonialismo español para el desarrollo de la tolerancia. Pero a medida que Orcés explora las raíces de la tolerancia política, encuentra un factor que explica por encima de cualquier otro las diferencias en la tolerancia: los

niveles individuales de educación. Aquellos con educación secundaria tienden a ser mucho más tolerantes políticamente, y aquellos con una educación superior incluso más. Encuentra otros factores que también intervienen: las mujeres en general son menos tolerantes políticamente que los hombres, las personas que viven en centros urbanos son más tolerantes que los que viven en zonas rurales. No obstante, la educación es el más fuerte de los atributos que tienen aquellos que apoyan los derechos básicos para los grupos que no les gustan. Estas diferencias son importantes para entender desde una perspectiva de política pública, cómo se puede ayudar a desarrollar una cultura más democrática.

¿La delincuencia socava la sostenibilidad democrática? Los análisis de las encuestas de LAPOP han ido por delante a la hora de identificar las altas tasas de victimización por la delincuencia como uno de los mayores desafíos para la democracia en América Latina. Especialmente en Guatemala, El Salvador y Honduras, los ciudadanos en repetidas encuestas han señalado que apoyarían un golpe de estado militar que redujera la delincuencia. Algunos países centroamericanos se sitúan entre los países del mundo con mayores niveles de delincuencia. A la vez que la delincuencia se ha disparado y las pandillas juveniles se han expandido, los reformadores democráticos han luchado por bajar los índices de delincuencia como una forma para mejorar la calidad y sostenibilidad de la democracia.

Los hallazgos de José Miguel Cruz en el Capítulo X pueden cambiar la forma en que los reformadores contemplan la relación entre la delincuencia y la democracia. Cruz observa tres variables independientes relacionadas con la delincuencia: si el individuo ha sido víctima de la delincuencia, si se siente inseguro debido a la delincuencia y cómo evalúa el desempeño del gobierno en el combate a la delincuencia. (Debe señalarse que este es el único artículo que se centra en una medida específica del desempeño gubernamental, aunque las encuestas incluyen preguntas sobre el desempeño del gobierno en el combate a la pobreza y a la corrupción, solo por esta razón ya es interesante). Además, analiza otra serie más amplia de indicadores democráticos como variables dependientes: no sólo apoyo al sistema, sino el rechazo al autoritarismo, y si se debería permitir a la policía que ignorara la ley en el combate a la delincuencia.

Los resultados son alarmantes. Basándose en una comparación entre los países centroamericanos, Cruz encuentra que la “victimización por la delincuencia” puede que no tenga la importancia que normalmente le atribuimos como un factor de riesgo para la democracia. La evaluación del desempeño gubernamental, y no la victimización por delincuencia, incluso tampoco la percepción de inseguridad, parece ser la variable independiente más significativamente relacionada con la delincuencia. Él señala que “la victimización personal pierde su poder de predicción en los países en los que la misma había aparecido como importante, esto es, en Honduras y en Nicaragua”. Es decir, el desempeño institucional es la clave.

Existe una relación compleja entre victimización, percepción de inseguridad, y percepción del desempeño institucional, que necesita de una mayor exploración. El trabajo de Cruz acentúa algunas relaciones intrigantes entre la evaluación del desempeño y la disposición de la gente a dejar que la policía viole la ley, y otras actitudes no democráticas. Se necesitan más investigaciones sobre este tema para mejorar nuestra capacidad de desarrollar reformas que combatan la delincuencia de manera más eficaz, y que fortalezcan los cimientos de una cultura democrática en vez de potencialmente socavarla.



En el Capítulo XI, Dominique Zephyr aborda el desafío que la corrupción gubernamental supone para la estabilidad de la democracia en la región. Los analistas a menudo se refieren a “la corrupción y al crimen” como una doble arma que debilita a las nuevas democracias y aleja a los ciudadanos de ellas. Tal y como Zephyr cita al exSecretario General de la Organización de los Estados Americanos: “la corrupción es un terrible cáncer que atenta contra la legitimidad de las instituciones y el estado de derecho”.

Zephyr emplea datos empíricos sobre corrupción elaborados por Mitchell Seligson a partir de las encuestas de LAPOP de la década pasada, y expande el análisis para incluir muchos más países. En general, los analistas han tenido que confiar en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional como la mejor medida disponible sobre los niveles de corrupción de un país, aún es la única medida mundial disponible. No obstante, dentro de América Latina, el Barómetro de las Américas hace posible que contemos con una serie de preguntas para determinar si un ciudadano ha tenido que pagar un soborno y a quién. Este índice de “victimización por corrupción” nos aleja de las percepciones y de los “efectos de contagio”, hacia una medida mucho más sólida y confiable de corrupción. Utilizando los datos de LAPOP, entonces, ¿los altos niveles de corrupción en muchos países latinoamericanos socavan la democracia?

Zephyr señala que estudios previos que emplean los datos de Transparencia Internacional no encontraron evidencia de que la corrupción afectara las opiniones de los ciudadanos hacia la democracia como forma de gobierno. Sin embargo, utilizando los datos de victimización por corrupción emerge una situación diferente. De hecho, los ciudadanos que son forzados a pagar un soborno muestran un menor apoyo al sistema político, confían menos en el gobierno, y ven a sus gobiernos democráticos como menos legítimos que la gente que no ha tenido que pagar un soborno. La gente más rica, y mayor, es la que con mayor probabilidad tiene que pagar sobornos –gente, que en general, es la que apoya en mayor medida a sus gobiernos democráticos y a la democracia en general. Los niveles de corrupción difieren mucho entre países, a la vez que varían dentro de cada país por la “fuente” de corrupción –policía, servicios de salud, gobierno local, etc. Igual que en otros temas en este reporte, el trabajo de Zephyr plantea todo un conjunto de preguntas secundarias para investigaciones futuras que serían útiles no sólo para los analistas sino para los diseñadores de políticas públicas, quienes necesitan centrar sus recursos donde realmente reside el problema.

En el último capítulo, Juan Carlos Donoso analiza el desafío del estado de derecho en la región. “Estado de derecho” significa muchas cosas diferentes para muchas personas, y no hay un único conjunto de datos empíricos que pueda capturar su carácter multidimensional. Sin embargo, Donoso de manera correcta identifica la necesidad de arrojar toda la luz posible sobre una de las partes de la democracia que todos claman débil, en la cual los donantes han gastado grandes cantidades de fondos, y que todavía carece de una medición válida y confiable.

Este capítulo reúne por primera vez algunas interesantes y novedosas mediciones del estado de derecho. Para capturar si la judicatura es independiente, Donoso adopta una medida desarrollada en el Reporte Anual sobre Derechos Humanos del Departamento de Estado. Este reporte del Departamento de Estado ha adquirido una gran credibilidad a lo largo de las últimas décadas, y cada vez más, los científicos políticos están construyendo a partir de sus informes anuales, mediciones sobre el estado de derecho y los derechos humanos. Él analiza la autonomía

de la judicatura en términos del apoyo ciudadano a la democracia, del nivel de confianza social, y añade preguntas específicas sobre si los ciudadanos consideran que los juicios son justos y sobre si pueden confiar en la policía y en la Corte Suprema de Justicia.

Él llega a algunas conclusiones desalentadoras. La Corte Suprema de Justicia es una de las instituciones que menor confianza recibe en América Latina, aunque existen grandes diferencias entre países. De hecho, incluso controlando por explicaciones alternativas, hay un “efecto independiente del país” en el estado de derecho. En Ecuador, donde la Corte Suprema de Justicia ha sido el campo de batalla política en el que todo ha valido durante muchos años, los ciudadanos tienen menor confianza en la Corte que ciudadanos similares en otros países de la región. La mayoría de las características individuales no son importantes, excepto la educación y si la persona ha sido víctima de la corrupción o de la delincuencia. Estos factores tienen un efecto corrosivo sobre la confianza en las instituciones del estado de derecho.

Donoso elabora un convincente argumento de que las actitudes hacia el estado de derecho son decisivas para la sostenibilidad de la democracia. En países donde el estado de derecho está más afianzado, los ciudadanos parecen reconocerlo, tienen mayor confianza en las instituciones y muestran un mayor apoyo a la democracia. Cuando los ciudadanos tienen menor confianza en las instituciones del estado de derecho, tienden a estar de acuerdo con afirmaciones tales como “los jueces con frecuencia estorban la labor de nuestros presidentes y deberían ser ignorados”.

Conclusiones

Estos capítulos proporcionan mucho para pensar sobre cómo entender la cultura democrática y su importancia en la sostenibilidad de las nuevas democracias en América Latina. Todos ellos cubren temas que normalmente no son tratados por la literatura, y hacen uso de una rica base de datos que incrementa nuestro conocimiento sobre la democracia más allá de los eventos actuales, crisis y elecciones. Se trata de un detallado análisis micro-nivel sobre la democracia en las Américas. Los hallazgos ofrecen un complicado mosaico, sugiriendo que “la democracia” en sí misma es un fenómeno complejo, muchas veces simplificado en un único índice o número. Los datos sobre los que se apoyan estos capítulos suponen un desafío para los teóricos de la democracia: nuestra información puede estar dejando por detrás a nuestros conceptos políticos. Es más, los diseñadores de políticas públicas y los desarrollistas encontrarán en la información que aquí se proporciona, conclusiones que pueden desafiar la manera convencional en la que los reformadores se han centrado sobre el desarrollo democrático. Esperamos ampliar la discusión sobre las reformas democráticas en América Latina.

Referencias

- Huntington, Samuel P. *Political Order in Changing Societies*. New Haven: Yale University Press, 1968.
- O'Donnell, Guillermo. "Delegative Democracy." *Journal of Democracy* 5, no. 1 (1995): 55-69.

Parte I. Desafíos para la infraestructura institucional de la democracia

I. El resurgimiento del populismo y la izquierda: ¿Retos a la consolidación democrática?¹

Mitchell A. Seligson*

“Hay un giro a la izquierda en América Latina, y se denotan claramente las reacciones a las tendencias que predominaron durante los últimos quince años: reformas de libre-mercado, acuerdos con los Estados Unidos en una cantidad de temas, y la consolidación de la democracia representativa.”

Jorge Castañeda (Castañeda 2006).

Resumen

¿Cómo interpretar la reciente subida de la izquierda al poder y la resurrección del populismo en América Latina? Acaso las tendencias reflejan algo más que un movimiento pendular en el “humor” de los votantes o ¿habrá implicaciones más profundas en el desarrollo democrático? Este trabajo examina la orientación política de los ciudadanos mostrando, que en los últimos dos años, ha habido un pequeño movimiento hacia la “izquierda”, el mismo que es reflejado en las votaciones. Más aún, aquellos con una orientación más izquierdista son más escépticos y apoyan menos las instituciones políticas tradicionales y los valores democráticos, y están más dispuestos a apoyar un líder político no elegido por votación popular. Mientras que los niveles de tolerancia política, un valor democrático clave, son similares en el espectro ideológico, en la mayoría de las mediciones, aquellos más a la derecha son más firmes en su apoyo al balance de poderes y menos favorables a dar poderes ilimitados a un presidente. Sin embargo, la varianza entre países de la región es alta, y no es claro si estas relaciones perdurarán. No obstante, la disposición de los ciudadanos a dar a los presidentes poder extraordinario debe permanecer como una preocupación para aquellos comprometidos con la consolidación democrática.

Un número creciente de países latinoamericanos han elegido ahora presidentes de partidos políticos de izquierda o centro-izquierda, más que nunca antes en la historia. En América del Sur, presidentes de orientación izquierdista lideran ahora la mayoría de países, incluyendo los más grandes: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Guyana, Perú, Uruguay, y Venezuela, con la posibilidad de la victoria de la izquierda en Paraguay el próximo año. Mientras la mayoría de los presidentes de estos países han expresado públicamente su compromiso con los valores democráticos, algunos están presionando los límites aceptables de dominio ejecutivo en una democracia, y aún habrían podido excederlos. El venezolano Hugo Chávez, quien intentara en

¹ Una versión anterior de este trabajo se presentó en la Universidad Brigham Young, el 15 de marzo de 2007. Agradezco a Kirk Hawkins y Darren Hawkins de dicha institución por sus comentarios así como las sugerencias de tantos en LAPOP, en particular José Miguel Cruz y John Booth.

* Profesor “Centennial” de Ciencias Políticas y Director del “Latin American Public Opinion Project” de la Universidad Vanderbilt



1992 un golpe militar y, que luego fuera sido elegido por votación popular en dos ocasiones, ha retado abiertamente los principios de la democracia liberal, controlando las cortes y la legislatura, apoyando abiertamente el control de un solo partido y adhiriéndose al modelo político del la Cuba de Castro. Dos adiciones recientes para la izquierda. Evo Morales de Bolivia elegido en el 2006 y Rafael Correa de Ecuador quien empezó su presidencia a inicios del 2007, están, en varias maneras, cuestionando los balances de poder del sistema democrático liberal, apoyando reformas.

Claro está, no son solo los presidentes de la izquierda quienes han sido tentados por la posibilidad de desarrollar mayor poder a costa de otras instituciones. Muchos dentro del espectro ideológico continúan haciendo uso de decretos para sobrepasar a la legislatura, y muchos, sin importar la ideología, han considerado reformas constitucionales que les permitirían alargar sus presidencias. A pesar de ello, los esfuerzos recientes de los líderes de izquierda, particularmente en Venezuela de ampliar el poder presidencial de manera que no haya balances de poder y, el apoyo que han recibido de los ciudadanos de sus países para hacerlo, representan una preocupación frente a la consolidación de la democracia representativa y a las prácticas democráticas en la región.

La preocupación sobre el liderazgo político populista no está limitada a los que ahora están en el poder. Otros potenciales líderes cuyo compromiso con el pluralismo político puede estar en duda están en la línea. Algunos recientemente han perdido elecciones. El ex-Teniente Coronel Ollanta Humala, quien otrora planificó golpes de estado, ganó una mayoría de votos en primera vuelta durante las elecciones peruanas de 2006, sin embargo fue derrotado en la recta final. El candidato izquierdista mexicano fue vencido por un margen mínimo en las elecciones del 2006 y desde entonces se ha negado a aceptar la legitimidad del proceso electoral. En Paraguay, la hegemonía de décadas del Partido Colorado está siendo retada por el ex-arzobispo católico Monseñor Fernando Lugo, quien se adhiere a una mezcla de retórica izquierdista y populista. La legitimidad de la democracia representativa, al menos, parece cuestionada por muchos líderes o líderes potenciales.

No obstante, como en el tango, hacen falta dos para que el baile funcione. Y es el otro lado el que nos preocupa aquí, esto es, las creencias y las prácticas de los ciudadanos que están eligiendo estos presidentes. Los presidentes están expandiendo sus poderes no solamente porque “pueden” hacerlo, ya que las otras instituciones son débiles, pero porque muchos de los ciudadanos de sus países apoyan esta expansión, muchas veces de manera explícita e insistentemente. Aparece en la región un nivel creciente de apoyo ciudadano al incremento del poder presidencial a expensas del de las otras ramas de gobierno y, un creciente apoyo al desmantelamiento de los balances de poder, a pesar de ser crítico para el sistema político democrático. Este fenómeno ha sido señalado por algún tiempo, de manera más notable por Guillermo O'Donnell, y su término “democracia delegativa”, en la cual los ciudadanos dan al presidente elegido poderes extraordinarios (O'Donnell 1995).

No es difícil encontrar ejemplos de ciudadanos urgiendo a presidentes a tomar medidas fuertes y unilaterales, ignorando a las cortes y a la legislatura. Cuando el presidente Fujimori cerró completamente el Congreso en 1992 insistiendo que sus miembros eran corruptos y que muchos estaban enlazados al movimiento revolucionario Sendero Luminoso, fuertes mayorías de ciudadanos peruanos apoyaron sus acciones. (Seligson y Carrión 2002; Carrión y Zárate 2007).

En Venezuela, grandes mayorías de votantes han reelegido repetidamente al president Chávez, aun cuando él ha neutralizado a la legislatura y a las cortes.

Existe una larga tradición de líderes populistas en América Latina. Inicialmente los populistas surgieron en Brasil en los años de 1930 con el gobierno de Getúlio Vargas de Brasil y en Argentina en los años 1940 con el gobierno de Juan Domingo Perón. Otras figuras claves del populismo son Lázaro Cárdenas (México), Jorge Gaitán (Colombia) y José María Velasco Ibarra (Ecuador). Aunque el tipo de populismo al que se adherían Vargas y Perón estaba enraizado en la derecha, tomando inspiración de Mussolini y el fascismo europeo, también hubo líderes populistas de izquierda tal como la dictadura militar de Juan Velasco Alvarado en el Perú de 1968 a 1975. A veces el término “populismo” se interpreta erróneamente como meramente líderes carismáticos de gran personalidad quienes apelan a una base que traspasa las clases (Taggart 2000). La característica unificadora de los gobiernos populistas no es su orientación izquierdista ni derechista. Más bien es una creencia fundamental que las instituciones de la democracia liberal clásica, especialmente la legislatura y las cortes, son anacrónicas, ineficientes e inconsistentes con la propia interpretación de la “voluntad del pueblo”². Por su lado, los líderes populistas proponen que es mejor “escuchar al pueblo” y llevar a cabo su voluntad personalmente, a la vez que aíslan a los “reaccionarios” y generalmente atropellan las garantías fundamentales democráticas tales como las libertades civiles, especialmente la libre expresión y el derecho al juicio imparcial³.

¿Están los ciudadanos deseosos de deshacerse de las instituciones de la democracia liberal e imbuir a sus líderes electos de poderes sin balances, volviendo a épocas de autoritarismo? ¿Están aquellos que favorecen un mayor dominio del ejecutivo más a la izquierda, coincidiendo esto con el aumento de presidentes izquierdistas? Si es así, resulta esto una amenaza al desarrollo democrático de la región ¿Reflejan las tendencias algo más que un cambio de “humor” que según Stimson (1998; 2004) periódicamente ocurre en los Estados Unidos, o serán un mar de cambios que puede ultimadamente representar una amenaza a la estabilidad democrática?

Las encuestas del Barómetro de las Américas 2006-07 nos permiten, por primera vez, analizar estas preguntas en una forma única que va más allá de impresiones generales. En primer lugar, examinaremos la ideología, definida en términos de auto-identificación con la izquierda y derecha política. Luego examinaremos si los electores latinoamericanos utilizan su “orientación política” como sustento de su voto. También veremos si su orientación está enlazada a su apoyo a los valores democráticos incluyendo balances institucionales y tolerancia política.

En Segundo lugar, examinaremos en más detalles las características de aquellos que parecen sostener en baja estima los valores democráticos. Quiénes son ellos como grupo y cómo difieren de aquellos que aprecian los valores democráticos. Finalmente, basados en este análisis,

² En este respecto, Weyland (2001: 14) define de la mejor manera el populismo: “una estrategia política en la que un líder de fuerte personalidad busca o ejerce el poder gubernamental con base en el apoyo directo, inmediato y desinstitucionalizado de grandes números de seguidores mayormente desorganizados. Esta relación directa, semi-personal sobrepasa las organizaciones intermediarias o las desinstitucionaliza y las subordina a la voluntad personal del líder”.

³ Entre las obras clásicas que exploran los elementos de la tradición populista están Conniff (1999) y Malloy (1977). En cuanto a una cosecha moderna, léase a Roberts (publicación pendiente).



veremos si la orientación política y aquellos que no estiman los valores democráticos representan una amenaza a la consolidación democrática de la región.

La orientación política de América Latina es importante para la democracia

¿Que tan “a la izquierda” estarán los ciudadanos latinoamericanos y del Caribe? y ¿Habrá una tendencia hacia la izquierda? Para sorpresa de muchos, ideológicamente están realmente un poco a la *derecha* de la mayoría de los encuestados a nivel mundial. Podemos afirmar esto porque durante varios años, desde el Eurobarometer y los primeros World Values Surveys (WVS), los cuestionarios de opinión pública en todo el mundo han incluido una escala de ideología de 10 puntos de izquierda a derecha, con una calificación de 1 para los que se autodefinieron de extrema izquierda del espectro político, y una nota 10 para los que se colocaron en la extrema derecha. La media aritmética de esta escala sería de 5.5, pero dado que las únicas respuestas posibles son los números enteros, los grupos de enfoque muestran que el 5 es considerado universalmente por encuestados como el punto neutro (ni de izquierda ni de derecha).⁴ Resulta que en la mayoría de países andan por el centro de la escala, aunque existen excepciones, por ejemplo Bielorrusia en 1990 con un promedio de 3.88 a comparación con Bangladesh en el 2000 con un promedio de 7.56. El puntaje promedio a nivel mundial, sin embargo, fue de 5.56 para los datos recogidos por WVS en 84 países, incorporándose más de 267,000 entrevistas de todas las naciones para la serie completa de 1981 a 2004. Esto indica que existe un pequeño sesgo hacia la derecha a nivel mundial⁵. Desafortunadamente, en cuanto a Latinoamérica y el Caribe, la cobertura del WVS ha sido limitada, sin embargo de los cuatro países incluidos en la ronda más reciente (2000-01) los siguientes valores promedio se observan: Chile, 5.22; México, 6.55; Perú, 5.69; y Venezuela 6.32. En resumen, a nivel mundial, y en el grupo limitado de países latinoamericanos usando la encuesta WVS, en una escala 1 a 10, los promedios están un poco a la derecha del centro.

Los datos del Barómetro de las Américas 2006/07, que incluyó 20 países de la región, muestran que el promedio de la región es de 5.71, bastante cerca del promedio mundial que se reportó anteriormente, pero un poco más a la *derecha*.⁶ Así, en general, los datos revelan que los ciudadanos latinoamericanos tienen una orientación política ligeramente hacia la derecha.

⁴ Una escala de 0-10 hubiera producido un punto neutro real, pero la del Barómetro de las Américas está de acuerdo al estándar mundial de 1-10.

⁵ La encuesta ha expandido su rango de países en los últimos años, pasando de una concentración en las democracias industriales avanzadas, a un enfoque en el que actualmente se incluyen a muchos países del mundo en desarrollo. Mirando exclusivamente a los 70 países encuestados desde 1999, la marca promedio de ideología es de 5.58, que es prácticamente idéntica a la serie completa desde 1981, indicando una ausencia de cambio en la era post-Guerra Fría. La negativa a responder a esta pregunta a nivel mundial es característicamente más alta que en otros puntos de la encuesta. La media del WVS se basa en 193,531 individuos quienes respondieron a la pregunta sobre ideología en al menos una oleada de WVS. En el AmericasBarometer, se encontró aproximadamente el 20% de negativa a responder, lo cual es típico en muchas encuestas.

⁶ Esta comparación incluye una sub-categoría de 10 países de 2004 que también se encuestaron con puntos de encuesta idénticos en 2006.

Sin embargo, a través del tiempo, los datos del Barómetro de las Américas también muestran un desplazamiento a la izquierda como se puede ver al comparar las encuestas del 2004 con las del 2006 en los países en donde se realizó el estudio en los dos años. En el 2004 la media fue 6.17, en el 2006 la media cayó a 5.71. La mayoría de países se desplazaron hacia la izquierda, 6 de ellos significativamente, uno significativamente hacia la derecha, y el resto estadísticamente invariables. Por tanto, el pequeño “giro a la izquierda” en realidad ha ocurrido, y la tendencia es a nivel regional, pero la magnitud del cambio es pequeña y el centro de gravedad permanece un tanto a la derecha. Es más, los datos de tendencia a largo plazo tendrían que examinarse antes de que podamos confiar en que el movimiento hacia la izquierda en Latinoamérica sea más que un cambio transitorio.

La orientación política importa: las personas votan según sus creencias

La pregunta sobre si los latinoamericanos votan en base a su orientación política es muy importante. En términos del tema de esta investigación, si el giro hacia la izquierda presagia un decrecimiento del apoyo a la consolidación democrática, debemos enlazar “orientación” al apoyo efectivo a la izquierda en las elecciones. Para que la ideología sea importante, necesita traducirse en un comportamiento consistente con esa orientación. Si no lo hiciera, entonces no hay mucha razón de preocuparse por el significado de los cambios en orientación ideológica. Dado que la encuesta no solamente incluía preguntas sobre ideología sino de preferencia por partido, podemos analizar esta relación, y más allá examinar los resultados al ver clase social, empleo, y otros factores que pueden causar “brechas” sociales.

No obstante, la pregunta de si los votantes eligen a sus líderes en base a la orientación política es importante por otras razones. En el estudio de los partidos políticos en América Latina los investigadores han tratado este tema a lo largo del tiempo. Algunos han argumentado que la mayoría de los partidos son personalistas y que los electores escogen sus presidentes en base a su sentimientos “personales” hacia él/ella, y no en función de la orientación del partido que lo/la auspicia (Gunther, Montero y Linz 2002). Existe otra literatura sobre el partido “patrimonial”, que argumenta que la mayoría de la gente apoya un partido con base en sus enlaces “clientelares” con la dirigencia, antes que en la ideología o en las creencias políticas (Linz 2000). Estas explicaciones no pueden ser completamente puestas a prueba en este estudio, pero podemos explorar a profundidad las preguntas sobre ideología política.

Esta investigación revela no solamente la orientación política de los electores, sino también a qué partido político apoyaron en las elecciones, así como sus características personales (edad, género, ingreso, región, etc.). Esto nos permite tener una base empírica más detallada sobre la relación de la orientación al votar y las características de los electores por partido y por orientación política.

En términos de orientación política, los datos muestran que las disposiciones ideológicas a lo largo del continuo izquierda-derecha tiene, ciertamente, un impacto significativo en cómo la gente vota. Las personas con una orientación más izquierdista votan por partidos de izquierda, y aquellas de tendencia más derechista lo hacen por partidos de la derecha. Sin embargo, el efecto de la ideología es diferente en cada país debido a la gran variación de sistemas de partidos. En



democracias más establecidas con sistemas de partidos consolidados, los partidos de “derecha” e “izquierda” no están muy distantes ideológicamente, y de manera similar, los electores son llevados al centro: mientras que, en sistemas con brechas más profundas, el voto partidario revela una gran polarización entre el electorado.

Estas variaciones entre países pueden ser ilustradas a través de las comparaciones de los datos de algunos de los países de la muestra del Barómetro de las Américas. Primero, considere el caso de Costa Rica, comparado con los de Nicaragua y El Salvador. En Costa Rica, una de las democracias más consolidadas de Latinoamérica, las diferencias ideológicas entre los principales partidos políticos en cuanto al continuo izquierda-derecha son mínimas. En contraste, los partidos nicaragüenses muestran una división ideológica significativa y los partidos en El Salvador son los más polarizados.

En los Gráficos I-1 y I-2 la marca promedio en cuanto a la ideología de los que apoyaron a los candidatos presidenciales particulares se indica con un pequeño círculo⁷. En Costa Rica, la marca promedio de ideología en la escala izquierda derecha en 2006-07 era de 5.9, como puede verse en el Gráfico I-1. Todos los candidatos que recibieron un número significativo de votos en la elección se alinearon estrechamente con esa media. (La mayor desviación fue de solo 0.6 puntos, y esto era para los votantes que apoyaban el Partido Libertario, en la periferia del espectro político Costarricense.) El tradicional partido de centro-derecha, el PUSC coincide directamente con la media nacional, mientras que la base de apoyo del partido PLN tuvo un promedio de 6.3, un poco a la derecha de la media nacional. Estos resultados ilustran dramáticamente cómo se está realineando, en el sentido electoral, este país (Lehoucq 2006), siendo que el PLN, el partido de Oscar Arias, ganador del Premio Nobel, recibió apoyo de votantes situados ligeramente a la derecha del partido tradicional de centro-derecha. Sin embargo, el punto más importante es notar el estrecho rango de diferencia ideológica en la democracia más antigua y estable de Latinoamérica. Aunque el escenario electoral ha sido marcado por un declive en la participación de los electores y la evidencia de un declive en el apoyo al sistema (Seligson 2002b), Costa Rica sigue a la cabeza de los países de la región en términos de legitimidad política, y, tal y como lo muestran estos resultados, los desacuerdos ideológicos son muy limitados (Booth y Seligson 2005).

⁷ El intervalo de confianza del 95% alrededor de esa media se representa con una “I” horizontal, de tal manera que, cuando es mayor el número de encuestados que seleccionaron un candidato en la encuesta, es menor el intervalo de confianza.

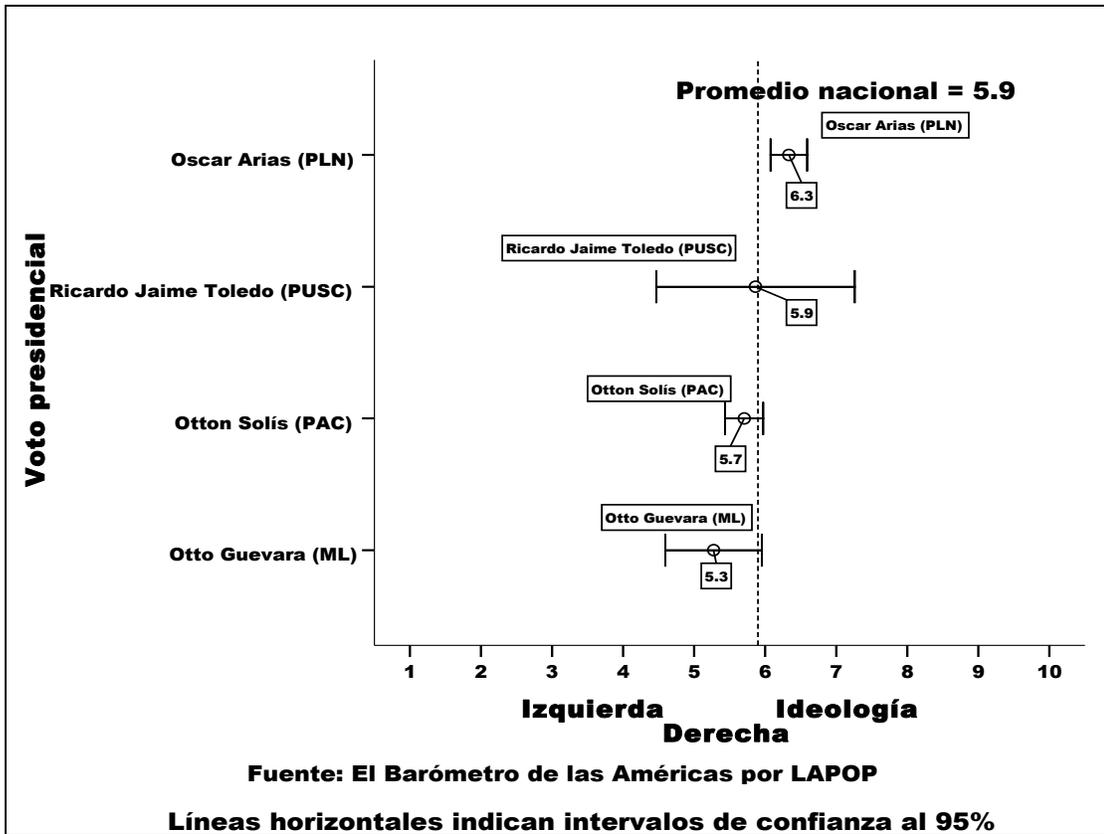


Gráfico I-1. Preferencia ideológica y voto presidencial: Costa Rica

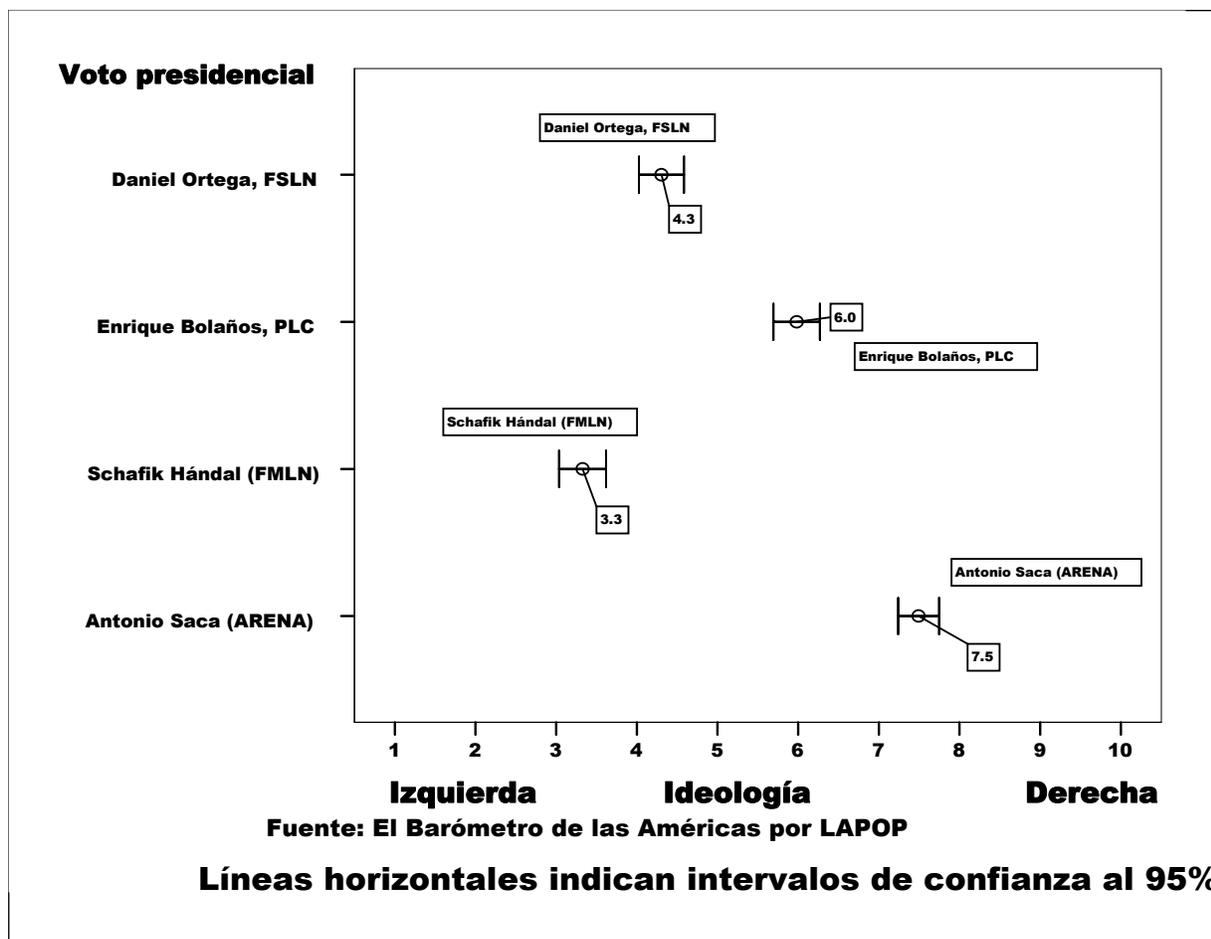


Gráfico I-2. Preferencia ideológica y voto presidencial: Nicaragua y El Salvador

Considérese ahora las imágenes más divididas de los dos vecinos centroamericanos de Costa Rica, Nicaragua y El Salvador, que se describen en el Gráfico I-2. Los que apoyan al candidato Sandinista Daniel Ortega están, como es de esperarse, considerablemente más a la izquierda de los que apoyaron a Enrique Bolaños del PLC. De mayor importancia, la brecha ideológica entre izquierda y derecha en Nicaragua que es mucho más amplia que en Costa Rica. Así, en Nicaragua lo partidario está más determinado por la orientación política que en Costa Rica y hay una mayor polarización del sistema político dentro del sistema partidario. Este fenómeno es más severo en El Salvador, donde la distancia ideológica es aún mayor. Los partidarios del (ahora difunto) Schafik Hándal del FMLN, el partido izquierdista que surgió de las organizaciones guerrilleras de la guerra civil que tomó lugar durante los años 1980, promedian 3.3, en comparación del 7.5 para los que apoyaron a Antonio Saca líder del partido derechista ARENA, que ha ganado todas las elecciones desde que se restableció la democracia en ese país.

Chile ofrece un interesante caso final, con partido y votantes alineados de manera muy cercana. Como se ve en el Gráfico I-3, la ganadora presidencial, la candidata socialista Michelle Bachellet atrajo a los electores que estaban más cerca de la media ideológica nacional. A su extremo izquierdo estaba Tomás Hirsch, quien se adhirió a un programa más radical durante la

campana, ganando únicamente una pequeña proporción de los votos (así se explica el amplio intervalo de confianza alrededor de la media de los encuestados que dicen que votaron por un partido). El candidato derechista Joaquín Lavín atrajo electores que estaban en el extremo derecho, mientras que el centro-derechista Sebastián Piñera, que perdió en la segunda vuelta en enero de 2006, recibió el apoyo de electores que según los datos del Barómetro de las Américas no estaban tan a la derecha. En resumen, las ideologías de los electores en Chile caben perfectamente en el espectro de candidatos de los cuales podían escoger.

Existen tres conclusiones claves que se extraen de este repaso de la ideología en Latinoamérica y el Caribe. Primero, el elector medio está un poco a la derecha de la opinión mundial, aunque resulten electos más presidentes “izquierdistas” en la región. Segundo, dentro de esta orientación “ligeramente derechista” los electores se movieron un poco a la izquierda, aunque sea durante el breve lapso de 2004 a 2006 que se analiza en este trabajo. Tercero, la orientación política es un determinante de la preferencia del elector en Latinoamérica, con un impacto que varía de país a país.

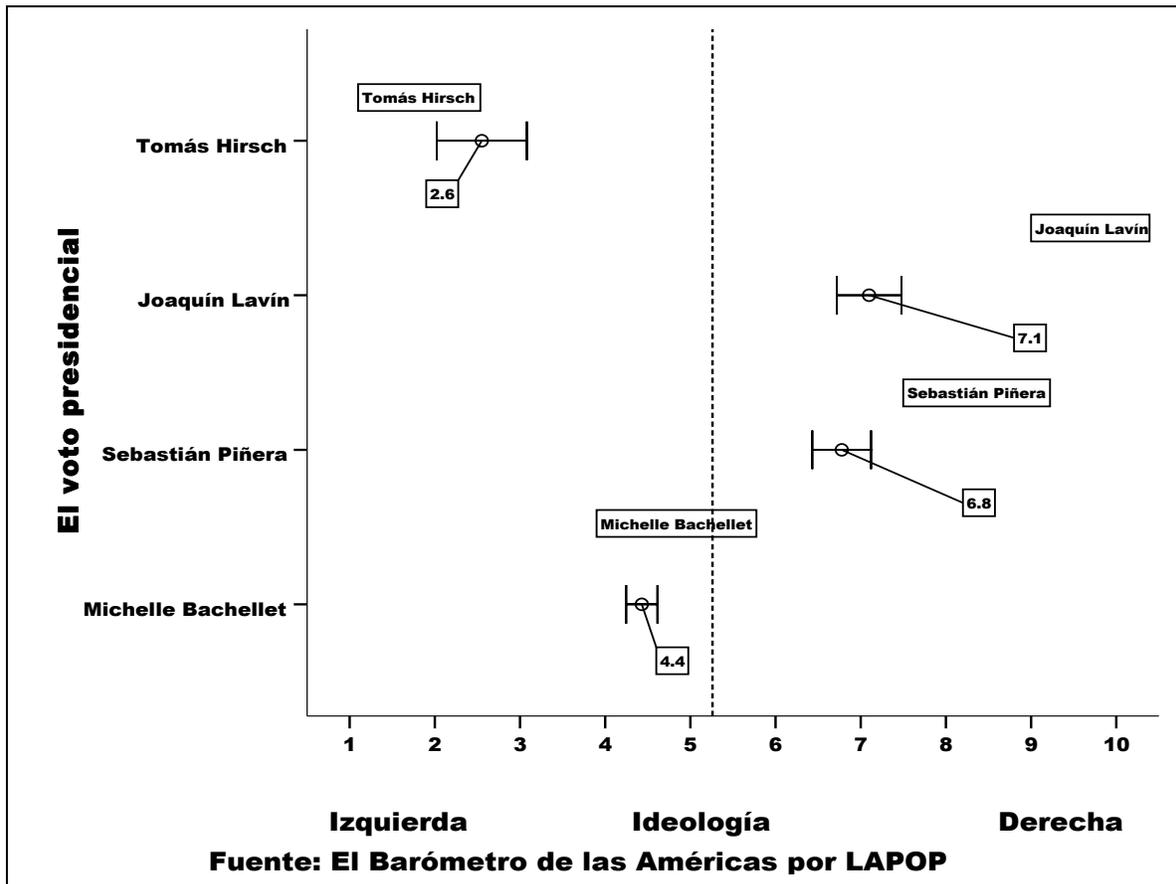


Gráfico I-3. Preferencia ideológica y voto presidencial: Chile



Los izquierdistas son menos propensos a favorecer algunos valores democráticos claves

Más allá de la urna de votación, los datos del Barómetro de las Américas muestran que la ideología es importante en cuanto al tema mucho más hondo y ultimadamente más profundo, que es el apoyo a la democracia. Los que se autodefinen como más izquierdistas también tienden a ver sus sistemas políticos como menos legítimos, y están menos dispuestos a favorecer la democracia como sistema político menos que los otros. Muchos de los izquierdistas que ahora están en el poder vinieron a la política luchando contra regímenes represivos. En varios países, fueron los izquierdistas quienes lideraron la creación de nuevas y más democráticas constituciones y lucharon por elecciones libres y justas. Una generación entera de izquierdistas liderará la lucha por la democracia.

Sin embargo, es también cierto que históricamente, en la región latinoamericana como un todo, las instituciones democráticas -cortes, legislaturas, gobiernos locales- han sido controlados por pequeñas elites en su propio beneficio. Los sistemas políticos de América Latina apoyaron políticas económicas que condujeron a una de las más altas inequidades de ingresos en el mundo. No es sorprendente entonces, que los ciudadanos se quejen de legislaturas corruptas y gobiernos no transparentes y, se tornen escépticos de las soluciones institucionales de la democracia. Sus instituciones no les han servido bien.

¿Cómo llegamos entonces a la conclusión de que los ciudadanos que son más “izquierdistas” son menos propensos a favorecer los valores democráticos? Esta sección analiza el apoyo general a los valores democráticos. Luego, lo enlazaré a la orientación política izquierda-derecha de los ciudadanos. Finalmente, se incluirá una nueva dimensión, un grupo de preguntas designadas específicamente para probar el apoyo al predominio ejecutivo, mirando a ambos resultados generales y desglosándolos por orientación política.

Usamos un sinnúmero de métodos. Primero, desarrollamos una escala basada en una pregunta usada a menudo para medir el apoyo democrático en encuestas contemporáneas sobre democracia, tomada del trabajo de Mishler y Rose (1999 81-82) en la Europa post-comunista, que se conoce como la pregunta “Churchill”. Se pregunta a los encuestados, en una escala de 1-7, si ellos están de acuerdo o no con la siguiente afirmación: “Aun cuando la democracia tiene muchos problemas, es mejor que cualquier otra forma de gobierno”. La escala fue convertida a la más familiar de rango 1-10 para compatibilizarla con el segundo ítem. Este segundo ítem involucra el uso de un índice compuesto para medir legitimidad. Este índice está basado en la conceptualización clásica de Lipset (Lipset 1959b) y Easton (Easton 1975)⁸. Está compuesto de 5 ítems que buscan detectar cuánto confían los ciudadanos en su sistema político. Ambas medidas condujeron a la conclusión mostrada en el Gráfico I-4: Mientras más izquierdista es la orientación política del encuestado, más bajo es su creencia de que la democracia es “mejor que

⁸ Este es medido por una serie de 5 ítems, cada uno calificado de 1-7 y luego transformado a un índice de 1-10. Se pueden encontrar detalles en: (Seligson 2002a; Booth y Seligson 2005; Seligson 2006).

cualquier otra forma de gobierno”. Estos resultados son para la muestra del Barómetro de las Américas como un todo; sin embargo, en un país, Chile, este patrón aparece invertido.

Este es un hallazgo perturbador, cuando se lo empareja con la creciente orientación izquierdista de los ciudadanos y la incidencia de ello en determinar el apoyo a un candidato presidencial. Para la región como un todo, el hallazgo de que los ciudadanos de izquierda tienden a dar menor preferencia a la democracia que aquellos de la derecha, sugiere que el movimiento hacia la izquierda podría representar un movimiento fuera de los valores democráticos, mientras que la escala de legitimidad sugiere que más ciudadanos cuestionarán el derecho a gobernar de un régimen democrático.

En la encuesta del Barómetro de las Américas también se preguntó: “Hay personas que dicen que lo que necesitamos es un líder fuerte que no tiene que ser elegido por medio de voto. Otros dicen que aunque las cosas no funcionen, la democracia electoral, o sea el voto popular, siempre es mejor”. En general en la región, sólo el 14.6% de los encuestados prefirieron un líder fuerte. Esto constituye un signo alentador para la democracia. No obstante, en 11 de los 15 países donde se hizo esta pregunta, aquellos que prefirieron un “líder fuerte” estaban más a la izquierda que los que prefirieron la democracia electoral. Solamente en Guatemala, Chile y República Dominicana aquellos en la izquierda, y no los de la derecha, mostraron un apoyo fuerte a la democracia electoral y rechazaron un líder fuerte. En México hubo un empate.

Sin embargo, por otra medida estándar de valores democrático de la encuesta, tolerancia política, la diferencia entre izquierda y derecha desaparece o en algunos casos, presenta una tendencia invertida. En la mayoría de países, la izquierda y la derecha son igualmente tolerantes. En tres países, México, Guatemala y Chile la izquierda es más tolerante que la derecha. Las preguntas utilizadas para medir la tolerancia se han centrado en la disposición de los encuestados en conceder a las minorías de oposición las libertades básicas, tales como el derecho a votar, el derecho a postularse como candidato, el derecho a protestar y el de libertad de expresión. Es posible que ya que la izquierda está en el poder en gran parte de la región, se haya vuelto *menos* tolerante que la derecha, que ahora está fuera del poder. Esta hipótesis, no obstante, requeriría de un esfuerzo considerable para ser examinada y comprobada y es un tema que está más allá del ámbito de este capítulo corto.

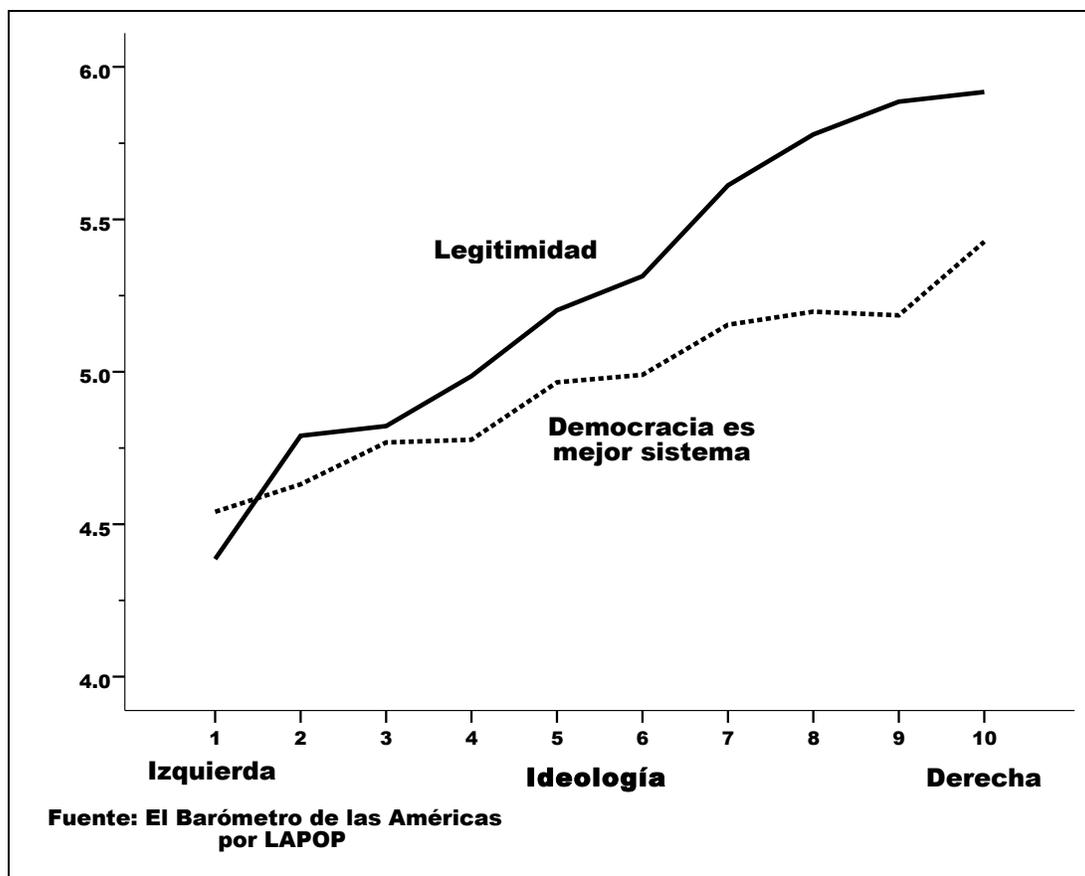


Gráfico I-4. Impacto de ideología en la legitimidad y creencia en que la democracia es el “mejor sistema”

En suma, tanto la izquierda como la derecha en América Latina apoyan un importante valor democrático: la tolerancia política. No obstante, están divididas en si la democracia es o no el mejor sistema de gobierno y, en su voluntad de apoyar a un líder no elegido, con la izquierda más inclinada en favor de un líder no elegido y mostrando un mucho mayor escepticismo hacia la democracia como sistema político. Dado el pequeño movimiento hacia la izquierda en los últimos dos años (aun cuando todavía es en general “derechista”), y el número en aumento de sistemas políticos liderados por partidos de izquierda, si esta tendencia continua, más y más latinoamericanos podrían optar por alternativas no democráticas de darse la oportunidad. Sin embargo, hay gran varianza entre países.

Los latinoamericanos no están listos para descartar las instituciones democráticas

Aunque existen diferencias importantes entre la izquierda y la derecha en cuanto al apoyo a los controles del poder ejecutivo, es importante contextualizar esto, observando los patrones generales de apoyo dentro de la región. Hemos señalado anteriormente el hecho de que en comparación con el resto del mundo, los latinoamericanos se mantienen ligeramente a la derecha de la media en el continuo de orientación política izquierda/derecha. En esta sección,

examinaremos actitudes hacia instituciones políticas específicas, para estimar de mejor manera dónde se podría esperar que los latinoamericanos pongan su confianza. También analizaremos otras características de los latinoamericanos, para observar su relación con el apoyo a las instituciones democráticas y los balances de poder; o para ponerlo de otra manera, si hay ciertos grupos de personas que están más inclinadas a descartar estas instituciones.

¿Habrá evidencia de que los ciudadanos de Latinoamérica y del Caribe tienen preferencia por los gobiernos al estilo populista más que por las democracias liberales? Una manera de medir esto es observar la confianza en las instituciones. En casi todas las encuestas de América Latina y del Caribe se ha encontrado que los ciudadanos consideran con desprecio las legialturas y los organismos judiciales. Al examinar los datos del Barómetro de las Américas, esta imagen se confirma. A los encuestados se les presentó una lista extensa de instituciones y se les preguntó cuánto confiaban en cada una. Esto se convirtió a la escala conocida del 0 al 100, y la Iglesia Católica⁹ siempre recibe la más alta calificación con una media de 68 para la región globalmente. En el extremo más bajo se encontraron los partidos políticos, con una calificación de confianza correspondiente a la mitad de la obtenida por la Iglesia (35). El sistema judicial obtuvo un promedio de 44, la asamblea legislativa y la corte suprema 45 y la policía 46. Las fuerzas armadas, en contraste, marcaron la más alta calificación 60, sólo 8 puntos detrás de la Iglesia. En resumen, de todas las instituciones estatales tratadas en las encuestas, solamente las fuerzas armadas tuvieron un promedio en el lado positivo del continuo de 0 a 100, en cuanto las instituciones clave que representan la democracia liberal siempre se encontraron del lado negativo.

¿Qué tan bajas están esas calificaciones comparadas con las de otros países del mundo? La encuesta WVS usando una medida ligeramente diferente, nos permite cotejar estas valoraciones con los de otros países de fuera de la región. En el WVS alrededor del mundo, prevalece el mismo patrón de confianza. Un examen del orden de rango que usa la WVS, a saber, la iglesia, el ejército, la policía, los partidos, la legislatura y el sistema judicial, muestra que la calificación promedio más baja de todos los países a nivel mundial la reciben los partidos, seguidos por la legislatura y luego por el sistema judicial. Por tanto, en ese sentido, Latinoamérica se conforma con precisión al patrón internacional. Los hallazgos del Barómetro de las Américas permiten aún más comparaciones interesantes ya que incluye a datos de Estado Unidos y Canadá. Esto nos permite comparar los resultados de la Latinoamérica y el Caribe con preguntas idénticas en redacción y escala que se las utilizadas en los Estados Unidos y Canadá. La confianza en los partidos es baja en Canadá (49.1) y en los Estados Unidos (42.9), no obstante, en términos de comparación Canadá aparece más alto que cualquier país de la región, mientras que los Estados Unidos ocupan el cuarto lugar. Solamente otros tres países promediaron arriba de 40 en una escala de 100 puntos, y dos, Paraguay y Ecuador menos de 30. En cuanto a las cortes y la corte suprema, la brecha es mayor en Latinoamérica. Canadá tiene como calificación 71.3, y los Estados Unidos 67.1 para la corte suprema, mientras que todos los países de América Latina y el Caribe tienen calificaciones menores de 60 y la mitad de éstos menores de 50. En el extremo inferior están Haití (31.4), Paraguay (30.2) y Ecuador (24.7). Respecto al sistema judicial, el patrón es igual, con los Estados Unidos y Canadá como los únicos países con

⁹ En todos los países con excepción de Jamaica y Guyana, a los encuestados se les preguntó con respecto a la “Iglesia Católica,” a la vez que en esos dos países se les preguntó sobre “la Iglesia.”



calificaciones arriba de 60, y el final de la cola Perú (32.6), Paraguay (31.0) y Ecuador (28.0). Cabe notar que los resultados en Uruguay, una de las mejores democracias establecidas en la región, son los más cercanos a los de Estados Unidos y Canadá en esta pregunta (55.6), seguido de Costa Rica (52.9), la democracia más antigua en la región.

Dadas estas bajas calificaciones a las instituciones tradicionales de la democracia liberal, uno podría esperar que el sentimiento populista esté en alza y que los ciudadanos estén listos para desecharlas. Sin embargo, esto no es cabalmente lo que muestra la evidencia de la encuesta. A pesar del bajo apoyo a los partidos, cuando se preguntaba uno de los temas estándar de muchas encuestas sobre democracia: “¿En su opinión, cree que podría existir la democracia sin los partidos políticos?” El Barómetro de las Américas 2006-07 encuentra una minoría, el 43%, que está de acuerdo. No obstante, en Ecuador el 50.5% y en Haití el 62.2% respondieron que estaban de acuerdo de que podría haber democracia sin partidos. Es difícil determinar si esta es una noticia buena o mala. A la vez que en la mayoría de países una gran proporción de la población rechaza la noción de que pueda haber democracia sin partidos, una fuerte minoría lo acepta. Es importante indagar más a fondo para lograr una mejor interpretación de las implicaciones de estos hallazgos en términos de que los latinoamericanos sean proclives a aceptar un gobierno populista.

Para lograr una mejor aproximación al atractivo del populismo, LAPOP desarrolló una nueva serie de ítems para la encuesta del Barómetro de las Américas 2006-07. Esta serie se diseñó específicamente para medir el grado en que los ciudadanos estaban dispuestos a deshacerse de los partidos, del órgano legislativo y de las instituciones judiciales, cediendo así el poder al ejecutivo. Esto suministra, a la fecha, los datos más convincentes en relación a las actitudes hacia las instituciones representativas. Cuando se analizaran los datos, se construyeron cinco ítems para que formaran una sola dimensión (utilizando el análisis de factores). Un ítem, por ejemplo, rezaba, “¿Con cuál de estas opiniones concuerda más usted? 1) Para que progrese el país es necesario que los presidentes limiten la voz y el voto de los partidos de oposición; 2) No existe razón que justifique el que los presidentes limiten la voz y el voto de los partidos de oposición, aunque esto detuviera el progreso del país”¹⁰. Se creó una escala global de “apoyo al populismo”, en la que se descubrió que un tercio (32.6%) de los encuestados para la muestra total rehusaron aceptar cualquier medida populista, y solamente el 15.9% de los encuestados apoyarían más de dos de las cinco medidas populistas. Sin embargo, el 47.6% de los encuestados que estaban contemplados en la base de datos, estaban dispuestos a aceptar dos de las cinco medidas, y el 63.4% estaban dispuestos a aceptar al menos una de estas medidas. Según este conteo,

¹⁰ Los demás ítems de la serie (con el debido cambio de términos de sistemas parlamentarios versus presidencialistas) son: **POP2:** 1. ¿Será que el congreso impide que nuestro presidente/primer ministro pueda trabajar, y debería ser ignorado? 2. Aunque entorpezcan el trabajo del presidente/primer ministro, éstos no deben pasar por encima del congreso. **POP3:** 1. Los jueces a menudo entorpecen el trabajo de nuestros presidentes/primeros ministros, y se les debería ignorar. 2. Aunque los jueces a veces entorpezcan el trabajo de nuestros presidentes/primeros ministros, sus decisiones siempre deberían ser acatadas. **POP4:** 1. Nuestros presidentes/primeros ministros deberían contar con el poder necesario para poder actuar en razón del interés nacional. 2. El poder con el que cuentan nuestros presidentes/primeros ministros debería ser limitado para que no amenacen nuestras libertades. **POP5:** 1. Nuestros presidentes/primeros ministros deberían hacer lo que quiere la gente aunque las leyes no lo permitan. 2. Nuestros presidentes/primeros ministros deberían obedecer las leyes aunque la gente no quiera que lo hagan.

solamente una pequeña minoría de ciudadanos en Latinoamérica y en el Caribe están a favor de una amplia variedad de medidas que fortalezcan al presidente a costa de las instituciones representativas de la democracia liberal; pero a la vez, una mayoría considerable aceptaría al menos algunas reducciones fuertes del principio de separación de poderes.

¿Qué hay de la minoría que rechaza la democracia liberal en nuestras preguntas sobre populismo? En las democracias, las minorías pueden ser importantes, en particular si se concentran en un sector homogéneo de la población. En las elecciones, por ejemplo, las minorías con posición unificada pueden lograr una victoria electoral cuando se divide la oposición. Las minorías también acarrearán gran peso en la calle, en el caso que decidan realizar manifestaciones, desobediencia civil o realizar actos de terrorismo. Es importante saber, por tanto, dónde es más fuerte el apoyo minoritario del gobierno populista en el área de Latinoamérica y el Caribe.

Los resultados de nuestro análisis hacen eco de los hallazgos del trabajo clásico de Seymour Lipset (1959a) quien desarrolló el concepto de “autoritarismo de la clase obrera”, esto es que la clase obrera exhibe tendencias más autoritarias que las elites.

Consistente con el trabajo de Lipset un análisis regresivo de los datos recogidos muestra que el sentimiento populista es mucho mayor entre las personas pobres y con menor educación¹¹. Los resultados que confirman a Lipset se presentan en los Gráficos I-5 y I-6. Sin embargo, un hallazgo sorprendente, es que, aunque se controló por salud y educación, entre más *joven* es el encuestado, más probabilidades hay que apoye las medidas populistas. Esto sorprenderá a muchos ya que desde hace mucho se suponía que la gente de la tercera edad tiene “costumbres fijadas” y por tanto están más dispuestos a brindar apoyo a un gobierno que controle a los que disientan. De hecho, son los jóvenes de América Latina y el Caribe que son más propensos a dar su apoyo a las medidas populistas. Se necesita probar los datos más a fondo para explicar estos hallazgos; pero, es el caso que muchos adultos mayores en la región experimentaron personalmente los regímenes dictatoriales que predominaron en los años 70's. Esta experiencia puede haber ayudado a “inmunizarlos” contra los llamados del líder populista. Ellos estuvieron allí y conocen los costos. En contraste, los jóvenes solamente conocen el período democrático actual, que ha estado lleno de decepciones amargas para muchos; el crecimiento económico en gran parte de América Latina y el Caribe ha sido modesto, y no ha logrado llegar hasta los pobres. Es más, podría ser que los jóvenes sean los más susceptibles a los llamados populistas, mientras que otros ciudadanos, ya más conocedores, habiendo visto a políticos de todos los colores llegar y partir, pueden ser más resistentes a la última moda. Tal vez no sea sorprendente, por tanto, que Chile y Haití sean los dos países con el mayor impacto en cuanto a las personas de más edad que rechazan a los populistas. Los datos de opinión pública que se presentan aquí, por tanto, no serán sorprendentes.

Los datos de opinión pública que se han presentado aquí no deben aparecer como una sorpresa. Las implicaciones de estos resultados son preocupantes: a medida que los jóvenes de

¹¹ En cuanto al análisis de datos particulares de los países, que no se proporciona, existe una variación en cuanto a estos patrones de regresión. Estudios extensos en cada uno de los países de la Serie Barómetro de las Américas puede descargarse en www.lapopsurveys.org.



hoy se convierten en mayoría de electores, los hallazgos sugieren que son más y más susceptibles a los llamamientos de los populistas.¹²

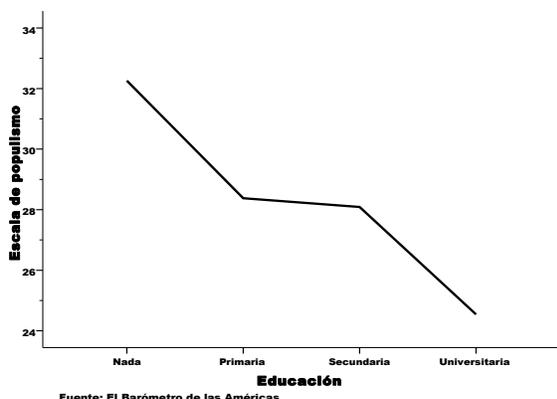


Gráfico I-5. El impacto de educación en apoyo por populismo

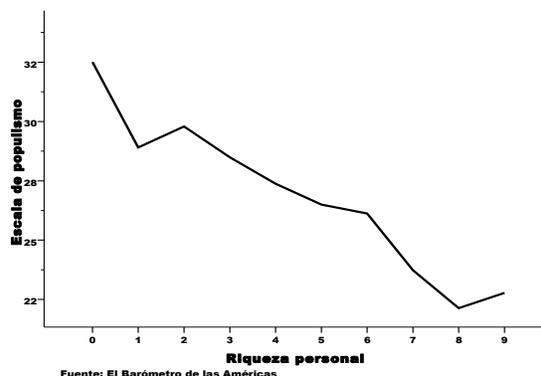


Gráfico I-6. El impacto de riqueza en apoyo por populismo

Conclusiones: Instituciones políticas y valores permanecen importantes.

Los datos de la encuesta presentados en este estudio, sin duda sugieren que los votantes de orientación política más a la izquierda, son más propensos a dejar de lado los chequeos y balances en la democracia y, a dar demasiado poder a sus ejecutivos elegidos, dejando abierta la puerta para alguna forma de “autoritarismo electoral”. Dado el incremento de presidentes izquierdistas, apoyados por sus electores, hay una amplia razón para estar alerta. Muchos de los presidentes izquierdistas moderados podrían estar completamente comprometidos y ser respetuosos de las instituciones democráticas. Sin embargo, este análisis ha mostrado, que al menos algunos de sus seguidores podrían no estarlo.

Sin embargo, en este punto no existe una amenaza inmediata de que el incremento del soporte a la izquierda represente un reto a la consolidación de la democracia. De hecho, este estudio ha develado algunas dinámicas que son positivas a la construcción de instituciones democráticas. Primero, quienes apoyan a la izquierda se mantienen dentro del sistema político y usan el voto, y no la violencia, para hacer sentir sus preocupaciones políticas. Segundo, los partidos políticos en un número de países son al menos medianamente programáticos reflejando el continuum izquierda/derecha de los votantes. Tercero, mientras hay poca confianza en las

¹² Una obvia explicación alternativa es que a medida que los jóvenes se vuelven mayores, tienden a parecerse a la población mayor, y por tanto resistirían los llamados populistas de igual manera. Desafortunadamente, los datos de panel para comparar el factor edad contra efectos de cohorte no existen (Firebaugh 1997).

instituciones políticas más representativas, los ciudadanos las mantendrían, aún a los partidos políticos que son quienes están en la parte más baja en las medidas de confianza.

No obstante, algunas tendencias merecen atención cuidadosa. El centro de gravedad ideológico en América Latina está, según el estándar mundial, un poco a la derecha, sin embargo las actitudes se desplazan hacia la izquierda. Las brechas ideológicas de Latinoamérica, cuando mucho tiempo ha pasado desde el fin de la guerra fría, en algunos países, todavía se alinean en la clara dimensión izquierda-derecha, y los electores apoyan partidos que sean consistentes con sus orientaciones ideológicas. La brecha entre la izquierda y la derecha es bastante angosta, sin embargo, en algunos países (por ejemplo Costa Rica) pero marcadamente amplía en otros (por ejemplo Nicaragua, El Salvador y Chile). Estar en la izquierda en Latinoamérica y el Caribe tiene implicaciones que van más allá de la urna electoral. Para la región entera, los que están a la izquierda son mucho menos propensos a creer que su sistema político sea legítimo y están menos propensos a creer que a pesar de sus problemas la democracia sigue siendo el mejor sistema. Es más, es probable que en la mayoría de países la izquierda apoye a líderes fuertes que no necesitan quedar electos por medio del voto. Una segunda tendencia relacionada es el alza de las figuras y los gobiernos populistas, en particular en Sudamérica. Esta tendencia surge, sin duda, del extremadamente bajo nivel de confianza que tienen muchos ciudadanos en cuanto a instituciones clave en la democracia liberal, especialmente en los partidos, las cortes y la asamblea legislativa. En algunos países, tales como Ecuador la confianza en estas instituciones está en niveles extremadamente bajos. Esto no debe sorprender dados los eventos que tuvieron lugar durante la década pasada en Ecuador. Los ecuatorianos vieron pasar una sucesión de presidentes electos democráticamente quienes tuvieron que abandonar la presidencia a la fuerza, mientras que el ejecutivo ha eliminado cualquier noción de independencia judicial. Por otra parte, las demandas de que se tomen medidas generales que esencialmente promoverían la creación de un mando dictatorial todavía representan un sentimiento minoritario en la región en su totalidad, casi dos tercios de los encuestados en la región aceptarían al menos una reducción seria de la autonomía institucional de las cortes, la asamblea legislativa y los partidos de oposición. El apoyo de estas medidas daría como resultado lo que Diamond ha descrito como “dejar hueca” a la democracia (Diamond 1999), esto se relaciona estrechamente, en toda la región con los pobres, los que tienen menos educación y los jóvenes.

Finalmente, hay otras tendencias de largo plazo operando que podrían fortalecer el apoyo a la democracia. Podría ser que los resultados de la investigación estén relacionados a cambios en el patrón de la histórica exclusión de los pobres y de las minorías étnicas en la región. Los datos de la encuesta de Bolivia, por ejemplo, muestran, que pronto después de que Evo Morales, cuyas raíces están en las comunidades indígenas, fuera electo presidente de ese país, la brecha entre el apoyo a la democracia entre indígenas y no-indígenas desapareció. Entonces, el menor apoyo a la democracia entre aquellos de la izquierda podría moverse tanto en cuanto los gobiernos en el poder den respuestas a las demandas de las poblaciones excluidas.



Referencias

- Bell, Daniel. *The End of Ideology: on the Exhaustion of Political Ideas in the Fifties*. Glencoe, Ill.; Free Press, 1960.
- Booth, John A. y Mitchell A. Seligson. "Political Legitimacy and Participation in Costa Rica: Evidence of Arena Shopping." *Political Research Quarterly* 59, no. 4 (2005): 537-50.
- Castañeda, Jorge G. "Latin America's Left Turn." *Foreign Affairs*, no. 3 (2006).
- Conniff, Michael L., ed. *Populism in Latin America*. Tuscaloosa: University of Alabama Press, 1999.
- Diamond, Larry. *Developing Democracy: Toward Consolidation*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1999.
- Easton, David. "A Re-Assessment of the Concept of Political Support." *British Journal of Political Science* 5 (1975): 435-57.
- Finkel, Stven E., Aníbal Pérez-Liñán y Mitchell A. Seligson. "Effects of U.S. Foreign Assistance on Democracy Building: Results of a Cross-National Quantitative Study " Paper presented at the The Annual Meeting of American Political Science Association, Philadelphia, PA 2006.
- Firebaugh, Glenn. *Analyzing Repeated Surveys*. Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications, 1997.
- Inglehart, Ronald, Miguel Basañez, Jaime Diez-Medrano, Loek Halman y Ruud Luijkx. *Human Beliefs and Values: a cross-cultural sourcebook based on the 1999 - 2002 values surveys*. Mexico: Siglo XXI, 2004.
- Lehoucq, Fabrice. "Costa Rica: Paradise in Doubt." *Journal of Democracy* 16, no. 3 (2006): 140-54.
- Lipset, Seymour Martin. "Democracy and Working-Class Authoritarianism." *American Sociological Review* 24 (1959a): 482-502.
- . "Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy." *American Political Science Review* 53 (1959b): 65-105.
- Malloy, J. M. *Authoritarianism and Corporatism in Latin America*. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1977.
- Mishler, William y Richard Rose. "Five Years After the Fall: Trajectories of Support for Democracy in Post-Communist Europe." In *Critical Citizens: Global Support for Democratic Governance*, edited by Pippa Norris, 78-99. Oxford: Oxford University Press, 1999.
- Roberts, Kenneth M. *Changing Course: Parties, Populism, and Political Representation in Latin America's Neoliberal Era*. Cambridge: Cambridge University Press, forthcoming.
- Seligson, Mitchell A. "The Impact of Corruption on Regime Legitimacy: A Comparative Study of Four Latin American Countries." *Journal of Politics* 64 (2002a): 408-33.
- . "Trouble in Paradise: The Impact of the Erosion of System Support in Costa Rica, 1978-1999." *Latin American Research Review* 37, no. 1 (2002b): 160-85.
- . "Encuestas y democratización." *Este País (Mexico)*, no. 168 (2005a): 4-13.
- . "Improving the Quality of Survey Research in Democratizing Countries." *PS, Political Science and Politics*, no. January (2005b): 51-56.
- . "The Measurement and Impact of Corruption Victimization: Survey Evidence from Latin America." *World Development* 34, no. 2 (2006): 381-404.

- Shifter, Michael y Vinay Jawahar. "Latin America's Populist Turn." *Current History*, no. 104 (2005): 51-57.
- Stimson, James A. *Public Opinion in America : Moods, Cycles, and Swings*. 2nd ed, *Transforming American politics*. Boulder, Colo: Westview Press, 1998.
- . *Tides of consent : How Public Opinion Shapes American Politics*. New York: Cambridge University Press, 2004.
- Taggart, Paul A. *Populism, Concepts in the Social Sciences*. Buckingham [England]; Philadelphia: Open University Press, 2000.
- Weyland, Kurt. "Clarifying a Contested Concept: Populism in the Study of Latin American Politics." *Comparative Politics* 34, no. 1 (2001): 1-22.

II. Democracia iliberal y normativa: ¿Cómo se define la democracia en las Américas?

Julio F. Carrión*

Resumen

¿Cómo definen la democracia los latinoamericanos? La mayoría de los latinoamericanos define la democracia en términos normativos, y que aquellos que lo hacen tienen una mayor probabilidad de endosarla que aquellos que la definen en términos negativos o instrumentales. Pero también encuentro que el efecto no es muy fuerte. Los datos muestran que la mayoría de los latinoamericanos endosa la democracia pero que existen importantes variaciones nacionales en ese apoyo. Más aún, el estudio encuentra que este apoyo es más bien superficial. Muchos de los autoproclamados demócratas tienen puntos de vista que son hostiles a un gobierno democrático, tales como el endoso de golpes militares o la disposición a apoyar formas no liberales del ejercicio del poder político. Encuentro que dependiendo de la pregunta, entre el 18% y el 47% de los autoproclamados demócratas están dispuestos a justificar un golpe militar. También encuentro que un cuarto de aquellos que endosan la democracia no tienen ningún problema en manifestar su acuerdo con la frase que los presidentes deben limitar la voz y el voto de la oposición si es necesario “para el progreso del país”.

El análisis de la opinión pública y sus actitudes frente a la democracia se ha convertido en un tema reciente de mucho interés en América Latina. Sin duda que los esfuerzos del Barómetro de las Américas dirigido por el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP) aumentará aún más el interés en este importante tópico. Un importante hito en el análisis de las opiniones públicas frente a la democracia fue la publicación por parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) del libro titulado *La Democracia en América Latina* (PNUD-PRODDAL 2004). Este informe ofrece un panorama sombrío sobre el compromiso de los latinoamericanos con la democracia. Aunque encuentra que la mayoría de los encuestados apoya a la democracia como sistema ideal de gobierno, argumenta que este apoyo es superficial. Según este estudio (PNUD-PRODDAL 2004, 132) un importante segmento del público está dispuesto a sacrificar un gobierno democrático a favor de un progreso socioeconómico real. Este informe (PNUD-PRODDAL, 134) clasifica al 43% de latinoamericanos como “demócratas” y a un 26% como “no demócratas”. El PNUD identifica una categoría para aquellos que son “ambivalentes”, es decir, tienen puntos de vista contradictorios acerca de la democracia: prefieren a la democracia como sistema ideal de gobierno pero también están dispuestos a apoyar actos autoritarios o “delegativos” “cuando las circunstancias lo requieran” Según este informe (PNUD-PRODDAL 2004, 137), lo que diferencia a los demócratas de aquellos que son ambivalentes es su actitud frente a la tensión entre la democracia y el desarrollo económico: los “demócratas” no están dispuestos a sacrificar la primera por la segunda, mientras que los ambivalentes sí lo están.

* Profesor Asociado, Universidad de Delaware en Estados Unidos e investigador del Instituto de Estudios Peruanos.



Basado en el estudio del PNUD, parecería que el compromiso con la democracia de los latinoamericanos es, para usar un término desarrollado por Bratton y Mattes (2001a), meramente instrumental. Es decir, la gente apoya a la democracia debido a los beneficios materiales que espera de ella y no debido a los valores normativos que la democracia expresa. En su estudio de las actitudes de la opinión pública frente a la democracia en África, Bratton y Mattes (2001a) enfrentan de manera directa el tema de los fundamentos “instrumentales versus normativos” en el apoyo a la democracia y encuentran que la evidencia es contradictoria. De una lado, reportan (2001a, 473) que “el hecho que los entrevistados africanos apoyen a la democracia mientras que están muy lejos de estar contentos con sus logros concretos sugiere un grado de apoyo intrínseco al régimen democrático que suplanta consideraciones instrumentales”. De otro lado, ellos argumentan (ídem) que “el público general en los países africanos piensa instrumentalmente; en otras palabras, el apoyo a la democracia depende de manera crítica del apoyo popular a los logros gubernamentales.”

Haciéndose eco de esta ambivalencia de los fundamentos del apoyo a la democracia, Bratton y Mattes (2001a, 118-119) escriben en otro artículo que “en al menos cinco de nuestros seis países [en África] el apoyo popular a la democracia tiene un fuerte componente instrumental. Los ciudadanos extienden el apoyo a un régimen democrático en buena parte porque están satisfechos con su desempeño en proveer bienes y servicios deseados. Pero el 21% de los entrevistados dicen que apoyan a la democracia por principio incluso si están insatisfechos con el desempeño de su propio régimen. Estos ciudadanos valoran la democracia intrínsecamente, esto es, no simplemente como un medio de suministrar desarrollo pero como un fin en sí mismo”. Un estudio más reciente (Mattes y Bratton 2007), confirma que el apoyo a la democracia está influenciado por consideraciones normativas e instrumentales.

Dos conclusiones pueden extraerse de la discusión previa. Primero, afirmar que la mayoría de la gente apoya la democracia en América Latina no es el punto final del análisis sino su comienzo. ¿Qué tipo de democracia tiene la gente en mente cuando dicen que la apoyan? ¿Qué variaciones nacionales importantes en estas definiciones y en los niveles de apoyo a la democracia pueden encontrarse en América Latina? ¿Qué tan profundo y consistente es el compromiso con la democracia? ¿Cuáles son los factores que fomentan un compromiso más fuerte con la democracia? El segundo punto que debe hacerse es que no necesitamos preguntarnos si el apoyo a la democracia en América Latina está influenciado por compromisos normativos o consideraciones instrumentales. Claramente, está influenciado por ambos. Lo que necesitamos hacer es “desempaquetar” la idea de apoyo instrumental. Por ejemplo, ¿la gente acepta la democracia porque les agrada el presidente, o perciben una mejora en su condición económica, o porque confían en sus instituciones políticas? ¿Es la percepción de amenaza personal lo que influencia las actitudes frente a los regímenes, o es la satisfacción de la gente con la manera como la democracia está funcionando en general?

En las siguientes páginas discuto estas interrogantes. El análisis empieza examinando las concepciones que la gente tiene de la democracia. Luego examino como estas concepciones se relacionan con el apoyo a la democracia. Luego de ello, examino la profundidad de los compromisos democráticos, explorando el apoyo hacia formas liberales e iliberales de la democracia. En esta sección propongo una manera más robusta para mediar el apoyo actitudinal

hacia la democracia. Concluyo el análisis identificando los factores asociados con el apoyo a la democracia liberal. Una sección con el resumen de la discusión termina el capítulo.

Concepciones de la democracia

Antes de proceder con el análisis de las concepciones de democracia entre el público, es importante examinar en primer lugar el grado general de apoyo a la democracia en la región. En el conjunto de la muestra de América Latina y el Caribe, el 67.1% prefiere la democracia mientras que un 14% apoya un gobierno autoritario, y un 11.4% es indiferente (un 8.4% adicional no contesta la pregunta). Cuando aquellos que no contestan son excluidos del cálculo, el apoyo a la democracia aumenta al 73% en América Latina y el Caribe.

En algunos países, sin embargo, la gente tiene bastante renuencia o es incapaz de manifestar una preferencia de régimen. En Guatemala casi el 20% de los entrevistados se niegan a contestar la pregunta. En México, Colombia, y Nicaragua, diez por ciento o más de los entrevistados se encuentran en una situación similar (Haití es un caso limítrofe, con 9.6% que declina contestar la pregunta). Uno puede hipotetizar que éstos son países con una fuerte población rural y/o con escasa educación que no tienen la sofisticación de expresión para responder una pregunta como ésta. Esto, sin embargo, no explica porque las tasas de rechazo son mucha más bajas en países como Bolivia, Ecuador u Honduras, que también tienen un gran contingente de población rural y escasamente educada. Quizás el apoyo a la democracia está relacionado con la habilidad de definirla, tal como Mattes y Bratton (2007) argumentan. Esta sección explora esta hipótesis.

El cuestionario de LAPOP del 2006-07 hizo la siguiente pregunta abierta: “¿En pocas palabras, que significa para usted la democracia?” Los encuestados podían ofrecer hasta tres distintas definiciones. Luego se les pidió especificar (si mencionaron más de una definición) cuál de sus definiciones era la más importante. El Cuadro I.1 presenta el resumen de las respuestas múltiples dadas a esta pregunta (el cuadro no incluye los entrevistados de Canadá y los Estados Unidos). Tres cuartos de los entrevistados latinoamericanos y caribeños pudieron ofrecer una definición de la democracia. De manera sorprendente, esta es casi la misma proporción de entrevistados que pudo proveer una definición de la democracia en un estudio de seis naciones africanas en 1999-2000 (Bratton y Mattes 2001b, 108). En Canadá, sin embargo, sólo 15.5% no pudo ofrecer una respuesta, mientras que en los Estados Unidos fue sólo 8.5%. Entre los distintos significados asignados a la democracia, el más importante individualmente es “libertad de expresión” (19.5%) seguido de “libertad” (9.4%).

Antes de agrupar todas estas definiciones en conjuntos más reconocibles, es necesario examinar las variaciones nacionales en la habilidad de proveer una definición de la democracia. Para analizar las variaciones naciones, se ha clasificado la información ofrecida en el Cuadro II.1 en dos grupos. El primer grupo está compuesto por todos los encuestados que ofrecen una definición de la democracia, incluso si ella tiene una connotación negativa. El otro grupo está compuesto por todos aquellos que no pudieron asignarle un significado al término. El Gráfico II.1 ilustra la distribución de esta variable (“habilidad de definir la democracia”) en los países en los cuales esta pregunta fue preguntada en el 2006-07.



Tabla II.1. Concepciones de democracia, 2006

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido
No tiene ningún significado	6958	22.3	24.7
Libertad (sin decir que tipo)	3237	10.4	11.5
Libertad económica	457	1.5	1.6
Libertad de expresión	5907	18.9	20.9
Libertad de movimiento	427	1.4	1.5
Libertad, falta de	165	.5	.6
Ser independientes	563	1.8	2.0
Bienestar, progreso económico, crecimiento	587	1.9	2.1
Bienestar, falta de, no hay progreso económico	106	.3	.4
Capitalismo	35	.1	.1
Libre comercio, libre negocio	128	.4	.5
Trabajo, más oportunidad de	400	1.3	1.4
Trabajo, falta de	210	.7	.7
Derecho de escoger líderes	991	3.2	3.5
Elecciones, voto	493	1.6	1.7
Elecciones libres	451	1.4	1.6
Elecciones fraudulentas	20	.1	.1
Igualdad (sin especificar)	1181	3.8	4.2
Igualdad económica, de clases	303	1.0	1.1
Igualdad de género	189	.6	.7
Igualdad frente a la leyes	283	.9	1.0
Igualdad de razas o étnica	119	.4	.4
Igualdad, falta de, desigualdad	103	.3	.4
Limitaciones de participación	68	.2	.2
Participación (sin decir que tipo)	572	1.8	2.0
Participación de las minorías	82	.3	.3
Poder del pueblo	574	1.8	2.0
Derechos humanos, respeto a los	963	3.1	3.4
Desorden, falta de justicia	322	1.0	1.1
Justicia	310	1.0	1.1
Obedecer la ley	219	.7	.8
Gobierno no militar	82	.3	.3
Vivir en Paz, sin guerra	830	2.7	2.9
Guerra, invasiones	21	.1	.1
Otra respuesta	854	2.7	3.0
Total	28210	90.4	100.0
Casos perdidos	3000	9.6	
Total	31209	100.0	

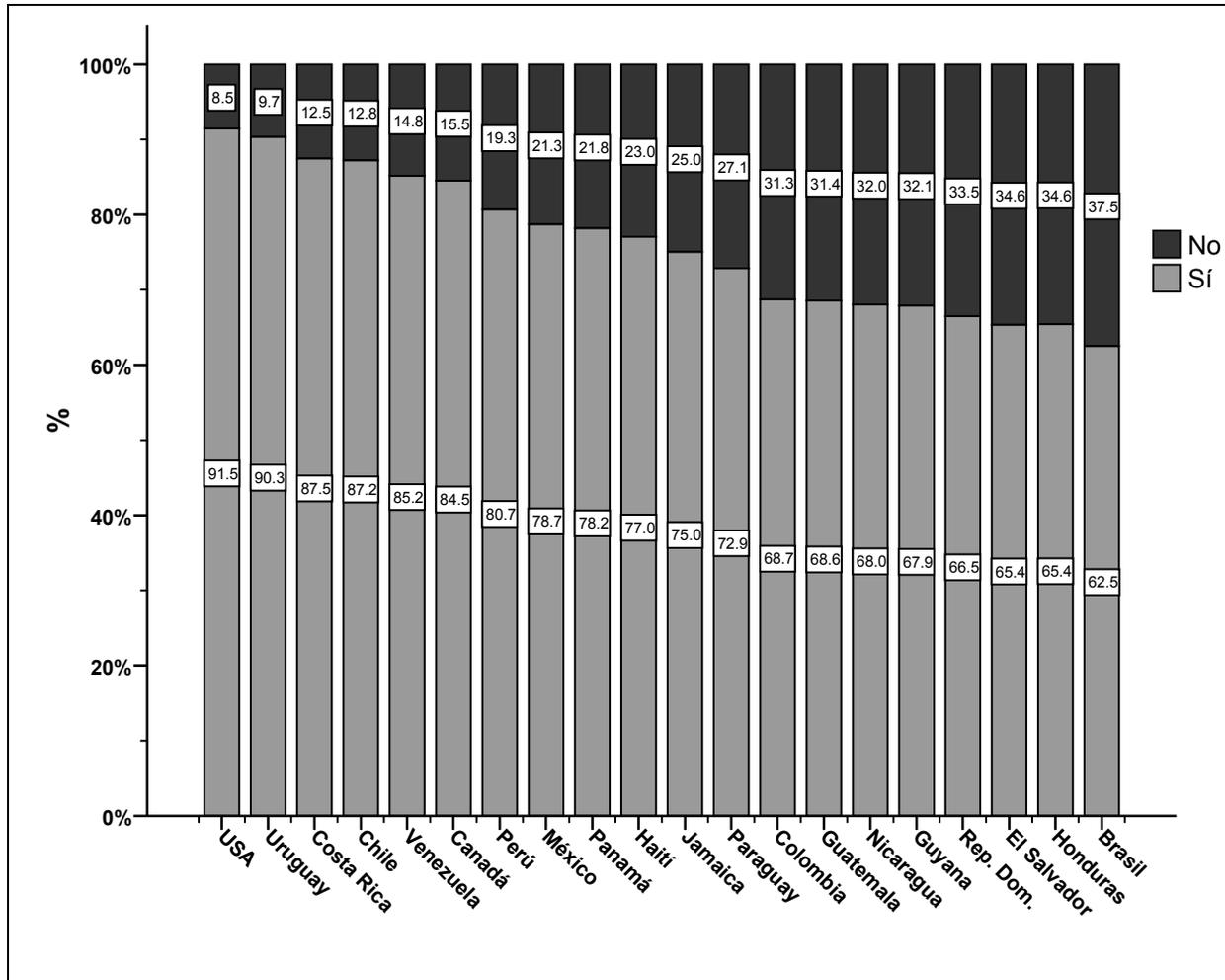


Gráfico II.1. Habilidad de definir la democracia

El Gráfico II.1 muestra dos agrupamientos, uno en los cuales el 80% o más de los encuestados pueden proveer una definición de la democracia (Perú, Canadá, Chile, Costa Rica, Uruguay, Venezuela y los Estados Unidos), y el otro donde menos del 70% de los entrevistados pueden hacerlo (Colombia, Guatemala, Nicaragua, la República Dominicana, El Salvador, Guyana, Brasil y Honduras). En el primer grupo, con la excepción de Perú, tenemos países con una fuerte tradición de gobierno democrático (a pesar del interregno de 1973-1990 en Chile, y los recientes sucesos en Venezuela). El segundo grupo, con la excepción de Colombia y Guyana, está compuesto por países centroamericanos.

Bratton y Mattes (2001b, 117) argumentan que “los individuos que no pueden definir la democracia muestran una menor adhesión a ella como forma preferida de gobierno”. La evidencia general proveniente del Barómetro de las Américas parece confirmar este punto de vista. Cuando el conjunto de los datos se analiza (sin incluir los entrevistados de los Estados Unidos y el Canadá), se encuentra que la habilidad de definir la democracia incrementa su



apoyo¹, y el efecto es moderadamente fuerte. Por ejemplo, 65% de aquellos que no pueden ofrecer una definición de la democracia están dispuestos a decir que la prefieren sobre el autoritarismo². Entre aquellos que sí la pueden definir, el apoyo a la democracia se incrementa al 75%. La diferencia es 10 puntos porcentuales y aunque es estadísticamente significativa, ella no es abrumadora.

En algunos países de las Américas, sin embargo, el impacto de la habilidad de definir la democracia sobre su apoyo es bastante fuerte (Gráfico II.2). En las democracias avanzadas, vemos una correlación muy fuerte entre la habilidad de definir la democracia y su apoyo. En los Estados Unidos, por ejemplo, aquellos que pueden ofrecer una definición de la democracia tienen el doble de apoyo a la democracia que aquellos que no la pueden definir. En Canadá, la diferencia en los niveles de apoyo a la democracia entre aquellos que pueden definirla y aquellos que no es de 30 puntos porcentuales. En América Latina y El Caribe, también encontramos que algunos países presentan una fuerte correlación entre la habilidad de definir la democracia y su apoyo. En el Uruguay la diferencia es de 32 puntos. En el Perú el apoyo a la democracia es 19 puntos porcentuales más alto entre aquellos que pueden ofrecer una definición que entre aquellos que no pueden. En Paraguay la diferencia es 27 puntos porcentuales; en Colombia la diferencia es de 15 puntos. En otros países, tales como Guatemala, Honduras, Panamá, la República Dominicana, Haití, Jamaica y Costa Rica no hay una diferencia estadísticamente significativa en los niveles de apoyo a la democracia entre aquellos que pueden definirla y aquellos que no. Ningún patrón puede ser identificado de manera inmediata para explicar por qué en algunos países la habilidad de definir la democracia está tan vinculada con su nivel de apoyo.

Regresemos a las definiciones de democracia ofrecidas en el Cuadro II.1. Éstas pueden ser agrupadas de maneras más significativas para facilitar el análisis. La pregunta es ¿qué categorías usar? La democracia es un concepto con múltiples significados que es el producto de más de 2,500 años de historia (Dahl 1989; Duna 2005; Held 1996; Touraine 1997). Hay varias maneras de clasificar la multiplicidad de sus definiciones. Una es agrupar todas las posibles definiciones en los significados tradicionales asociados con la democracia: libertad, igualdad, protección contra la arbitrariedad política y participación. Esta es la estrategia que, en términos generales, fue inicialmente adoptada por C. B. Macpherson (1977) y luego desarrollada por Held (1996). Otra manera es seguir la estrategia de Dahl (1956) y definir la democracia de manera procedural o sustantiva.

¹ Para los propósitos del presente análisis, el no apoyo a la democracia se define como aquellos que no escogieron la opción “La democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno”. Aquellos que no respondieron la pregunta sobre el apoyo a la democracia fueron eliminados del análisis.

² Apoyo a la democracia se mide por el acuerdo con la siguiente frase: “La democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno”. El apoyo al autoritarismo se mide por el acuerdo con la siguiente opción: “En algunas circunstancias un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático”. Indiferencia entre regímenes se mide por la siguiente frase: “A la gente como uno, le da lo mismo un régimen democrático que uno no democrático”.

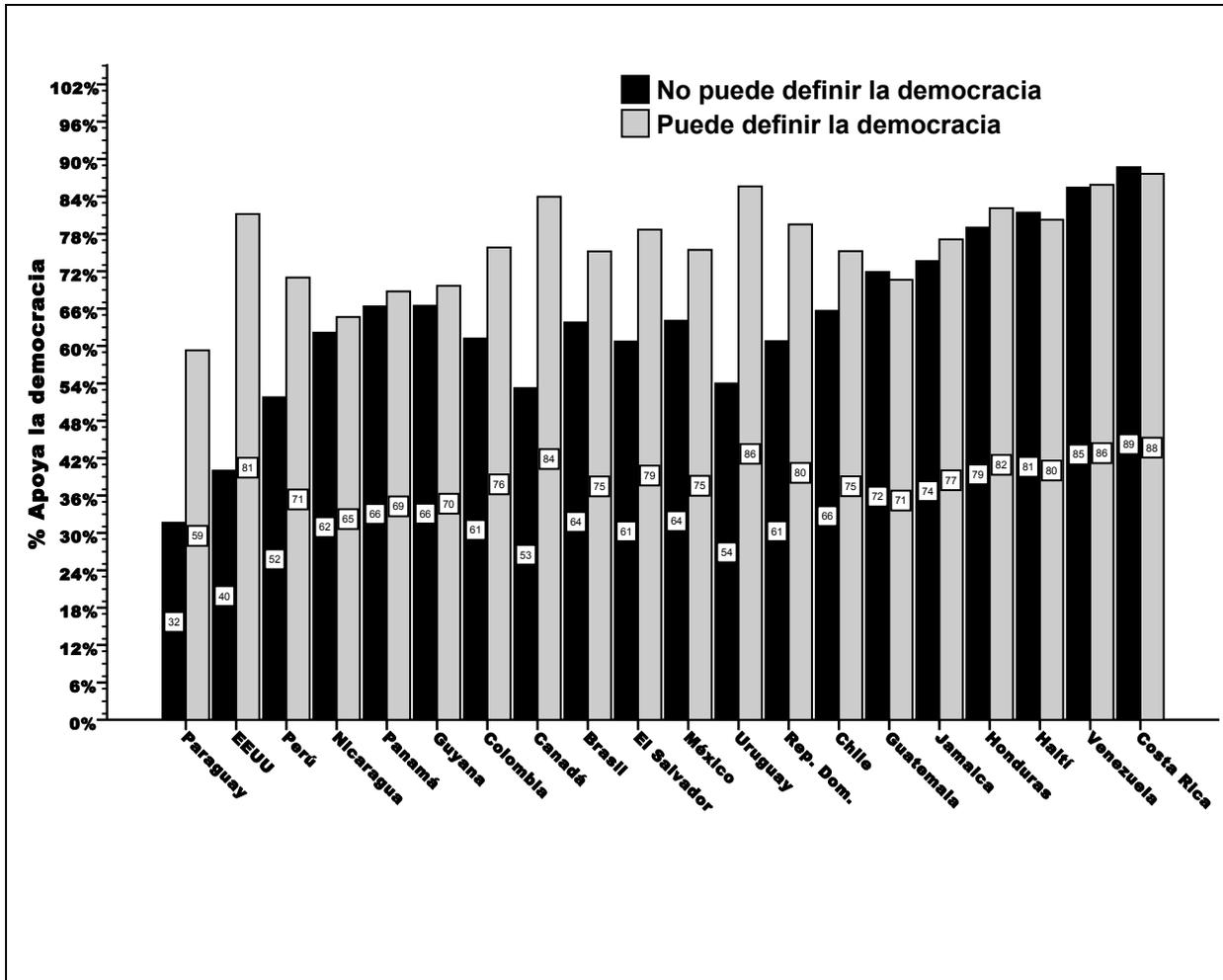


Gráfico II.2. Apoyo a la democracia según la habilidad de definirla

Otra manera de aproximarse a esta tarea es definir la democracia tomando como criterio la fuente de la racionalidad de la creencia (Bratton y Mattes 2001a; Mattes y Bratton 2007; Sarsfield 2003; Sarsfield y Echegaray 2006; Sarsfield y Carrión 2006). Uno puede sostener una determinada creencia, en este caso democracia, porque está asociada con ciertos valores que son considerados deseables (por ejemplo, libertad, igualdad, justicia). De manera alternativa, uno puede sostener esa creencia porque produce ciertos bienes o utilidades (por ejemplo, progreso económico, desarrollo). En el primer caso, el compromiso con la democracia es normativo porque está basado en una racionalidad axiológica; en el segundo caso es instrumental porque está basado en una racionalidad de medios-fin. La democracia puede también ser definida, desde esta perspectiva, en términos peyorativos o negativos porque “produce” un resultado no deseado (por ejemplo, guerra civil, violencia, desorden). Por supuesto, la gente también puede carecer completamente de una concepción de democracia (una definición “vacía”). Esta es la estrategia clasificatoria que se seguirá aquí porque continúa con los valiosos análisis que Bratton y Mattes han realizado de la opinión pública africana. El Cuadro II.2 ofrece las definiciones ofrecidas en el Cuadro I.1 y cómo ellas se relacionan con nuestras cuatro definiciones de democracia basadas en la racionalidad de las creencias.



Tabla II.2. Concepciones de democracia basadas en la racionalidad de las creencias

Normativa	Instrumental	Vacía	Peyorativa
-Libertad (sin decir de que tipo)	-Libre comercio, libre	-No tiene ningún	-Falta de libertad
-Libertad de expresión, de voto, de	negocio	significado	-Falta de bienestar,
elegir, de derechos humanos	-Libertad económica	-Otra respuesta	no hay progreso
-Libertad de movimiento	-Bienestar, progreso	-NS/NR	económico
-Ser independientes	económico, crecimiento		-Falta de trabajo
-Derecho de escoger líderes	-Capitalismo		-Elecciones
-Elecciones, voto	-Trabajo, más		fraudulentas
-Elecciones libres	oportunidades de		-Falta de igualdad,
-Igualdad (sin especificar)			desigualdad
-Igualdad económica, de clases			-limitaciones de
-Igualdad de género			participación
-Igualdad frente a las leyes			-Desorden, falta de
-Igualdad de razas o étnica			justicia, corrupción
-Participación (sin decir de que tipo)			-Guerra, invasiones
-Participación de las minorías			
-Poder del pueblo			
-Respeto a los derechos humanos			
-Justicia			
-Obedecer la ley, menos corrupción			
-Gobierno no militar			
-Vivir en paz, sin guerra			

Podemos ahora examinar si la manera como la gente define la democracia está relacionada con su apoyo. Los datos muestran que aquellos que definen la democracia en términos normativos tienden a un nivel ligeramente mayor de apoyo a la democracia que aquellos que la definen en términos instrumentales (77.2% y 71.9%, respectivamente). La diferencia más importante en los niveles de apoyo a la democracia se encuentra entre aquellos que la definen en términos negativos y aquellos que la conceptualizan en términos normativos: 64.4% y 77.6%, respectivamente (Gráfico II.3; datos de los Estados Unidos y Canadá no están incluidos en este gráfico). En sólo unos pocos países la diferencia en el nivel de apoyo a la democracia entre aquellos que la definen normativamente y aquellos que lo hacen en términos instrumentales supera los 10 puntos porcentuales. Estos países son la República Dominicana, México y Chile. En siete países las diferencias entre aquellos que ven la democracia de manera normativa y aquellos que la definen instrumentalmente es menos de 5 puntos porcentuales. Así, aunque uno puede percibir una asociación entre ciertas definiciones de la democracia y su apoyo, uno puede concluir con cierto grado de confianza que el apoyo a la democracia en América Latina no está determinado principalmente por la manera como la gente la define sino más bien por la habilidad de definirla de manera positiva o negativa.

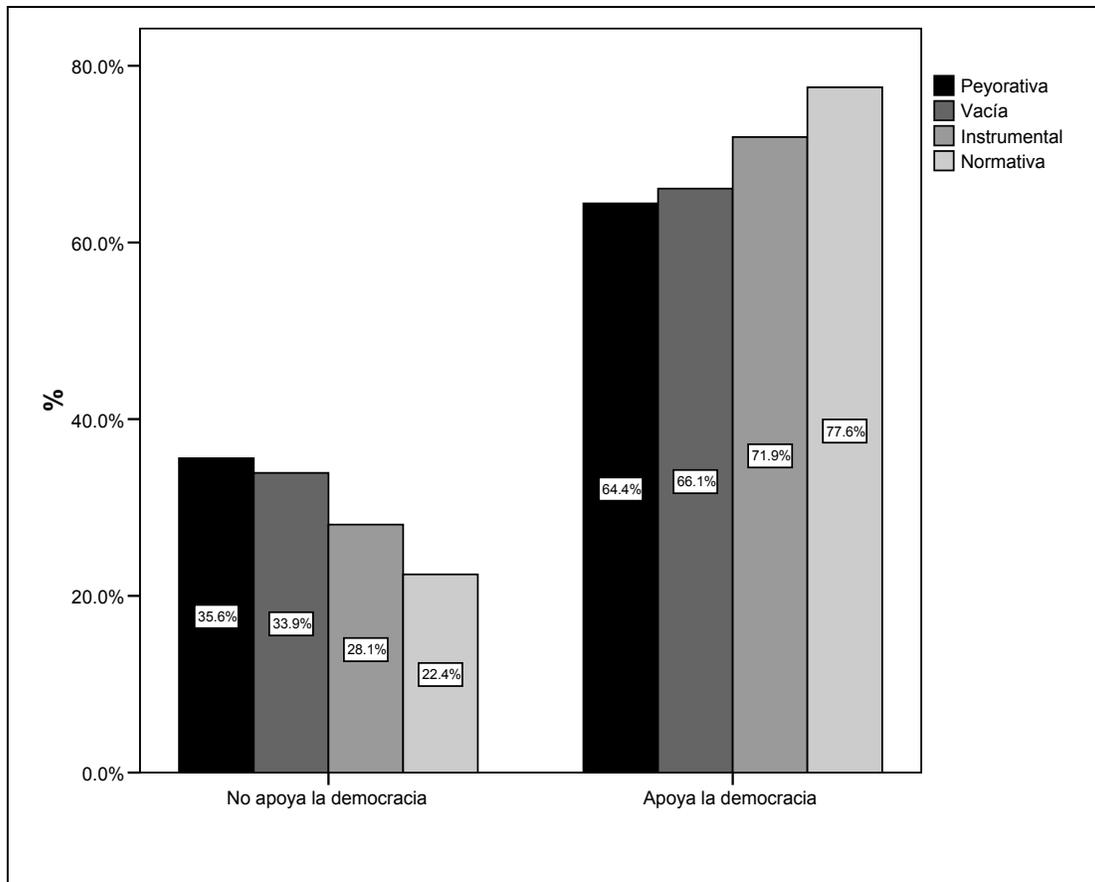


Gráfico II.3. Concepciones de, y apoyo a, la democracia

¿Qué tan consistente es el apoyo a la democracia?

Debe decirse desde el comienzo que una preferencia expresada por la democracia no inocula al público latinoamericano contra el apoyo a alternativas iliberales o abiertamente autoritarias. Las inconsistencias de las preferencias populares por la democracia no es un hallazgo novedoso. En un trabajo pionero y clásico, James Prothro y Charles Grigg (1960) encontraron que aquellos que manifestaban un abierto apoyo a la democracia en abstracto no siempre escogían la opción democrática en temas más concretos. Lo que necesitamos preguntar es, por lo tanto, ¿qué tan profundo o consistente es el apoyo expreso por la democracia? Y ¿cuáles son los factores que hacen que la gente tenga un apoyo más consistente a la democracia? Para responder estas preguntas exploraré, en primer lugar, el grado en el cual los autoproclamados demócratas³ también endosan opciones iliberales y autoritarias. En la siguiente sección exploro los factores que están asociados con la preferencia por formas liberales de la democracia.

Una amenaza tradicional para la democracia en América Latina ha sido la deposición inesperada de los gobiernos civiles por un golpe militar. Uno esperaría que aquellos que endosan

³ Aquellos que escogieron la opción “La democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno” en la pregunta descrita en la nota 2 son aquí considerados como “demócratas autoproclamados”.



la democracia sobre el autoritarismo estuvieran menos inclinados a apoyar un potencial golpe de estado. Este es, efectivamente, el caso. El Gráfico II.4 presenta los puntajes promedios de apoyo a golpes militares según la preferencia de régimen político. Como se espera, el apoyo más fuerte a los golpes militares se encuentra entre aquellos que declaran su preferencia por un régimen autoritario y el más bajo se registra entre aquellos que manifiestan preferir la democracia. Pero el punto importante de este gráfico es que un importante porcentaje de autoproclamados demócratas están listos a apoyar golpes militares bajo algunas circunstancias⁴. Por ejemplo, el 17% de aquellos que endosan la democracia declaran que un golpe militar para enfrentar un desempleo muy alto es justificable. De manera similar, y preocupante, el 45% de los autoproclamados demócratas justificarían un golpe militar para enfrentar alta delincuencia. Más aún, el 40% de los que endosan la democracia justificarían un golpe militar para combatir corrupción excesiva. Claramente, el determinar qué proporción de la población endosa la democracia como forma ideal de gobierno es un primer paso necesario en nuestros esfuerzos por determinar la difusión de actitudes democráticas en la región. Pero los datos que acabamos de presentar también sugieren que para determinar cuán profundas son las actitudes democráticas en la región necesitamos ir más allá del endoso formal a la democracia como forma ideal de gobierno.

Hoy en día, el autoritarismo que América Latina enfrenta es diferente del tradicional golpe de estado. En un cambio preocupante, algunas democracias latinoamericanas parecen haber sido parcialmente socavadas por presidentes elegidos que usan su considerable apoyo popular para corroer las precarias bases democráticas de sus respectivas naciones. Esta situación es una manifestación de una tendencia mayor de devaluación democrática en el mundo en desarrollo, un fenómeno caracterizado por Diamond (1999) como “la globalización de la democracia hueca”. Mientras que se mantienen de manera externa las instituciones democráticas formales, muchos gobiernos elegidos adoptan de manera sistemática comportamientos antidemocráticos que buscan eliminar todos los desafíos creíbles a su continuación en el poder. La emergencia y el crecimiento de estos regímenes han llevado a algunos observadores a caracterizarlos como autoritarios de naturaleza electoral o competitiva (Carrión 2006; Diamond 2002; Levitsky y Way 2002; Schedler 2006). Los reveses democráticos en América Latina son más factibles de venir de poblaciones que eligen y reeligen presidentes despóticos dedicados a aumentar sus propios poderes a costa de legislaturas y cortes que de golpes militares.

⁴ La encuesta realizó una serie de preguntas incluyendo si un golpe militar podría ser justificado bajo una serie de circunstancias: para enfrentar un alto desempleo, para controlar las protestas sociales, para frenar la delincuencia, para luchar contra la inflación, y para combatir la corrupción. A cada respuesta positiva se le asignó un puntaje de 1. El índice resultante fue luego transformado para que tuviera un rango de 0 (ningún apoyo a golpes bajo alguna circunstancia) a 100 (apoyo bajo cualquier circunstancia).

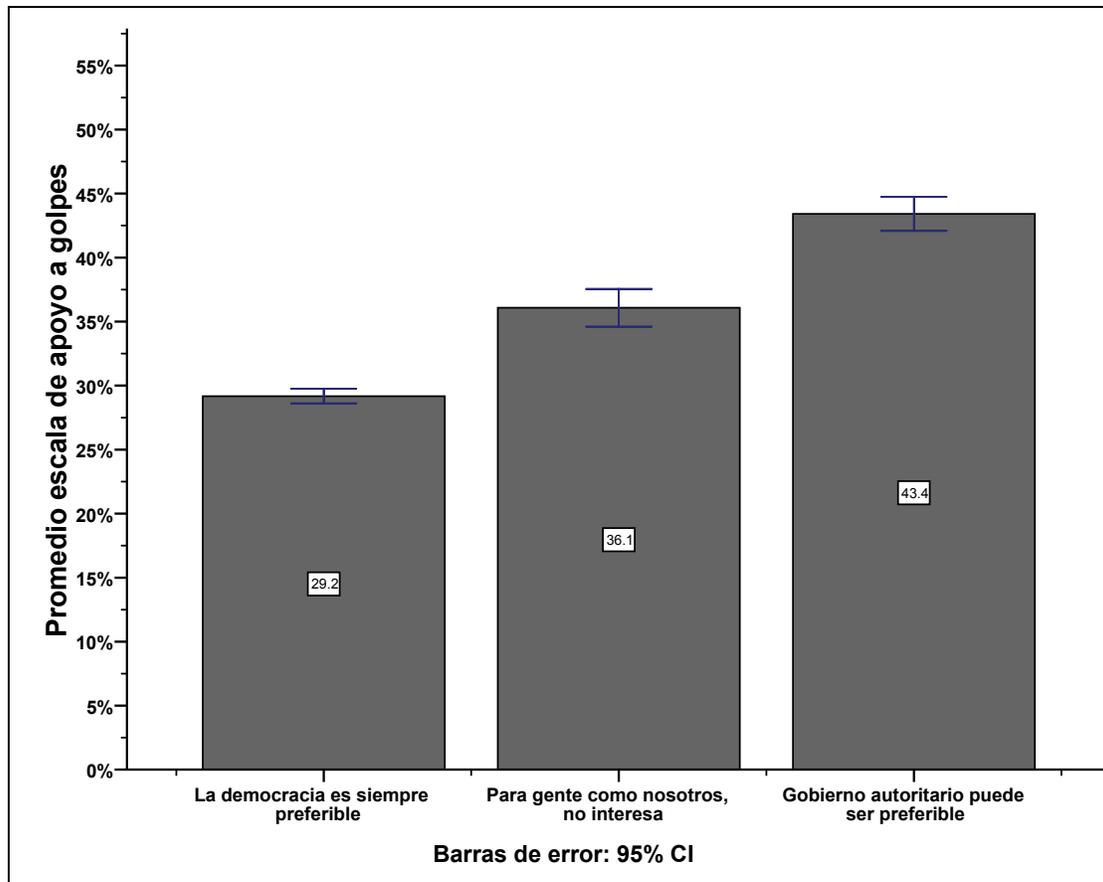


Gráfico II.4. Promedio de puntaje de apoyo a golpes militares según preferencia de régimen

Hasta hace poco, el ex-presidente Alberto Fujimori de Perú era el mejor ejemplo de este autoritarismo emergente, pero la reelección del golpista Hugo Chávez en el 2000 en Venezuela junto son los desarrollos subsecuentes en ese país sugieren el establecimiento de otro régimen electoral autoritario en la región. Las recientes crisis políticas en Bolivia y Ecuador tienen en su raíz los temores de la oposición de que sus países se vayan a sumergir en un camino similar, en la medida que los presidentes usan su popularidad para socavar los existentes (y muy impopulares) congresos. En algunos casos extremos, presidentes elegidos han asumido abiertamente poderes dictatoriales, como fue el caso de Perú en abril de 1992 y en Guatemala en mayo de 1993 (un intento que finalmente fracasó). Obviamente no hay una única razón que pueda explicar por qué la toma presidencial autoritaria fue exitosa en Perú pero no en Guatemala, pero el apoyo/oposición popular fue ciertamente un importante factor en estos resultados divergentes. Mientras que el autogolpe de Fujimori recibió un significativo apoyo popular en el Perú (Conaghan 1995; Carrión 2006), la acción de Serrano fue ampliamente rechazada en Guatemala (Cameron 1998, 133). Esta diferencia subraya los riesgos del apoyo popular a formas civiles de autoritarismo. Como el informe del PNUD-PRODDAL concluye (2004, 131) “las democracias se vuelven vulnerables cuando, entre otros factores, las fuerzas políticas autoritarias encuentran en las actitudes ciudadanas terreno fértil para actuar”.

Por esta razón, el Barómetro de las Américas 2006/07 investiga el potencial apoyo popular a actos iliberales de jefes elegidos del poder ejecutivo contra el congreso, la oposición,



las cortes judiciales y las leyes en general. Para ello, el cuestionario del 2006/07 desarrolló una nueva serie, haciendo las siguientes preguntas:

Ahora, yo le voy a leer varias frases. Teniendo en cuenta la situación actual del país, quisiera que me diga con cuál de las siguientes frases está más de acuerdo?

POP1. [Leer alternativas]

1. Para el progreso del país, es necesario que nuestros presidentes limiten la voz y el voto de los partidos de la oposición, [o al contrario],
2. Aunque atrase el progreso del país, nuestros presidentes no deben limitar la voz y el voto de los partidos de la oposición.

POP2. [Leer alternativas]

1. El Congreso impide mucho la labor de nuestros presidentes, y debería ser ignorado, [o al contrario],
2. Aun cuando estorbe la labor del presidente, nuestros presidentes no debieran pasar por encima del Congreso.

POP3. [Leer alternativas]

1. Los jueces con frecuencia estorban la labor de nuestros presidentes, y deberían ser ignorados, [o al contrario],
2. Aun cuando a veces los jueces estorban la labor de nuestros presidentes, las decisiones de los jueces siempre tienen que ser obedecidas.

POP4. [Leer alternativas]

1. Nuestros presidentes deben tener el poder necesario para que puedan actuar a favor del interés nacional, [o al contrario],
2. Se debe limitar el poder de nuestros presidentes para que nuestras libertades no corran peligro.

POP5. [Leer alternativas]

1. Nuestros presidentes deben hacer lo que el pueblo quiere aunque las leyes se lo impidan, [o al contrario],
2. Nuestros presidentes deben obedecer las leyes aunque al pueblo no le guste.

Es alentador el informar que en todas las cinco preguntas, la respuesta liberal (los presidentes deben seguir la ley) prevalecen sobre la respuesta iliberal. Sin incluir a aquellos que no ofrecieron una respuesta, el 72% declara que los presidentes no debieran limitar la voz y el voto de la oposición, 80% afirma que no debieran pasar por encima del congreso, 80% demanda que obedezcan a los jueces, el 59% quiere que sus poderes sean limitados, y el 70% piensa que deben obedecer las leyes⁵.

A pesar de estos números alentadores, es claro que varios de los autoproclamados demócratas escogen la respuesta iliberal en estas preguntas. Por ejemplo, 25% de los que escogen democracia como forma ideal de gobierno seleccionan la respuesta iliberal en la pregunta POP1. En la pregunta POP4, 41% de los autoproclamados demócratas escogen la respuesta iliberal. Esto, por supuesto, plantea el tema de cuán profundo o consistente con sus compromisos democráticos.

Una manera de medir el apoyo a la democracia de forma más robusta es combinar las preferencias de régimen político con las actitudes acerca de cómo la autoridad política debe ser

⁵ Estas cinco preguntas fueron sumadas en un índice de apoyo a un gobierno liberal. Cuando un encuestado respondió cuatro de estas preguntas, el valor promedio de estas respuestas se le imputó a la respuesta faltante. Esto se hizo en un esfuerzo para mantener el mayor número posible de casos válidos. Para facilitar el análisis, cada pregunta fue transformada numéricamente para que el índice resultante tuviera un rango de 0 a 100. Valores por debajo de 50 indican un bajo apoyo a un gobierno liberal, y consecuentemente valores iguales o superiores a 50 indican alto apoyo a un gobierno liberal. En el conjunto de la muestra, 82% tienen valores de 50 o más en la escala. Estas preguntas no fueron hechas en Bolivia o Ecuador.

ejercitada. Si tomamos las preferencias por regímenes⁶, consolidando las tres opciones en dos, una para la opción democrática y otra para aquellos que prefieren autoritarismo (o son indiferentes) y las combinamos con el índice de apoyo a un gobierno liberal (dividiendo el índice entre bajo y alto apoyo) obtenemos las siguientes situaciones teóricas (Cuadro II.3).

Tabla II.3. Relaciones conceptuales entre preferencias de régimen y actitudes frente a las restricciones a la autoridad política

Restricciones a la autoridad política	Preferencia de régimen	
	<i>Democracia</i>	<i>No Democracia</i>
<i>Gobierno Liberal</i>	Democracia liberal	Autoritarismo liberal
<i>Gobierno Iliberal</i>	Democracia iliberal	Autoritarismo iliberal

La opción óptima para la consolidación de una democracia saludable es la combinación de actitudes que favorecen un régimen democrático con restricciones al ejercicio del poder político de los presidentes o primeros ministros. Aquellos que exhiben tal combinación de preferencia son considerados aquí “demócratas liberales”. Centraré el análisis en ellos. Todas las demás opciones son subóptimas para las perspectivas de un gobierno democrático, pero la peor combinación posible es aquella que junta una preferencia por formas autoritarias de gobierno (o indiferencia entre ellos) con apoyo al ejercicio iliberal del poder ejecutivo.

La distribución de estas actitudes para el conjunto de la muestra se muestra en el Cuadro II.4. Mientras que el 73% de los entrevistados favorece la democracia (esta cifra excluye aquellos que no contestan la pregunta), el 61 por ciento de todos los entrevistados pueden ser clasificados como demócratas liberales, es decir, apoyan la democracia y restricciones en el ejercicio del poder político. Es alentador encontrar que solo un 7% de los aquellos entrevistados en el 2006/07 favorecen la peor posible combinación de apoyo a un gobierno iliberal y preferencia por la no democracia.

⁶ Medida por las respuestas a la siguiente pregunta: ¿Con cuál de las siguientes frases está usted más de acuerdo? A la gente como uno, le da lo mismo un régimen democrático que uno no democrático; la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno; en algunas circunstancias un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático.



Tabla II.4. Apoyo a la democracia liberal e iliberal

		Apoyo a la democracia		
		Demócratas	No Demócratas	Total
Restricciones al poder	Gobierno liberal	60.6%	18.9%	79.5%
	Gobierno iliberal	13.6%	6.9%	20.5%
Total		74.2%	25.8%	100.0%

¿Es ésta una clasificación válida o útil? Una manera de validarla es usarla para predecir ciertas actitudes que están relacionadas con el apoyo o el rechazo a los valores democráticos. Si la clasificación tiene validez, debiera ayudarnos a predecir, por ejemplo, niveles de tolerancia política, con los demócratas liberales siendo más tolerantes que los no demócratas iliberales. De manera similar, si ésta es una clasificación válida debiera ser capaz de distinguir entre aquellos que endosan valores sociales autoritarios de aquellos que no, con los demócratas liberales siendo menos socialmente autoritarios que los autoritarios iliberales⁷. Los gráficos II.5 y II.6 muestran los promedios de tolerancia política y valores autoritarios para cada uno de nuestros cuatro grupos creados por la combinación “régimen x autoridad”. En cada caso, los resultados están en la dirección esperada y, de manera más importante, son monotónicos, es decir, los demócratas liberales son más tolerantes y menos socialmente autoritarios que los demócratas iliberales y, a su vez, los demócratas iliberales son más tolerantes y menos conservadores que los autoritarios liberales, con los autoritarios iliberales apareciendo con los promedios más bajos en ambas actitudes.

⁷ Debe señalarse que las preguntas utilizadas para medir autoritarismo social no tienen un contenido político. Ellas preguntan si el encuestado está de acuerdo con las siguientes afirmaciones: “Una manera muy eficaz de corregir los errores de los empleados es regañarlos frente a otros empleados”; “la persona que aporta más dinero a la casa es la que debería tener la última palabra en las decisiones del hogar”; “en la escuela, los niños deben hacer preguntas solamente cuando el maestro lo indique”; “cuando los niños se portan mal, se justifica a veces que sus padres les den palmadas”.

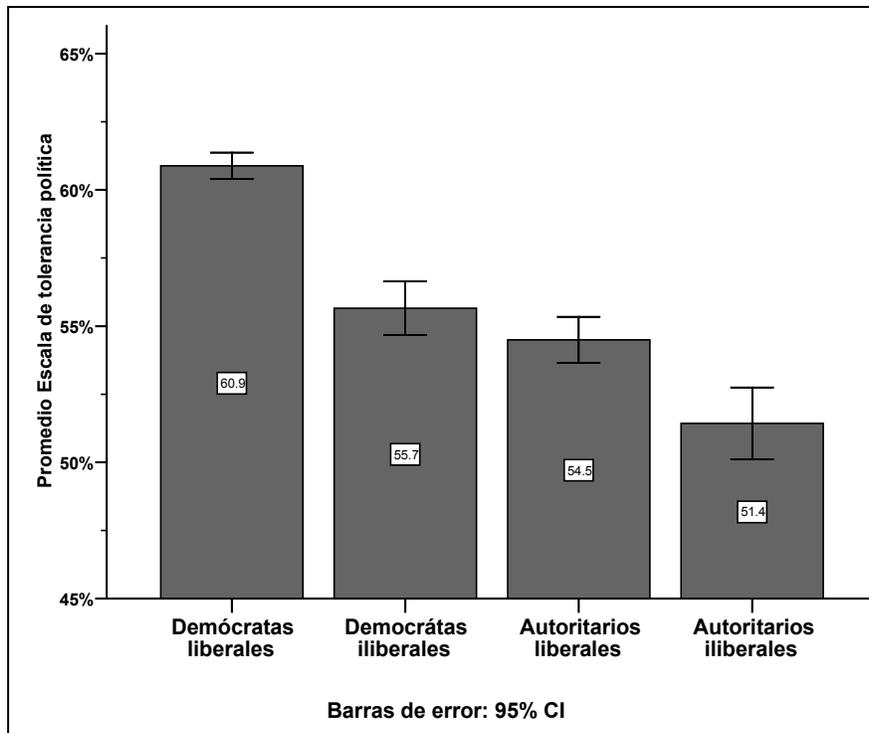


Gráfico II.5. Tolerancia política según preferencia de régimen y apoyo a gobierno liberal

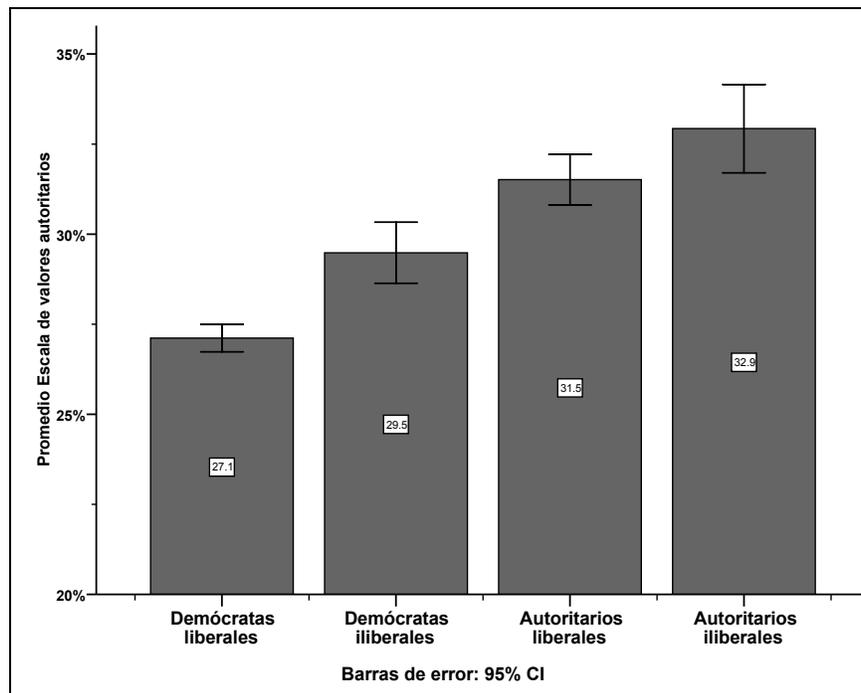


Gráfico II.6. Autoritarismo social según preferencia de régimen y apoyo a gobierno liberal

Como es de esperarse, existen importantes variaciones nacionales en la distribución de demócratas liberales (Gráfico II.5). Países con fuertes tradiciones democráticas, como Costa



Rica, y Uruguay y aquellos con sólidas historias parlamentarias, como Jamaica, reportan el número más alto de demócratas liberales. Honduras, Venezuela, la República Dominicana, Guyana, y Chile siguen. De otro lado, Haití, que tiene el tercer porcentaje más alto de gente declarando que prefieren la democracia sobre el autoritarismo, cae al penúltimo lugar cuando se matiza la preferencia por la democracia con el apoyo a un gobierno liberal. El Paraguay presenta el nivel más bajo de apoyo actitudinal a la democracia liberal. Guatemala, Brasil, Nicaragua y Perú, todos países con tradiciones democráticas débiles, siguen a Paraguay y Haití con los menores porcentajes de demócratas liberales.

Para tener un mejor entendimiento de los factores que ayudan a discriminar entre demócratas liberales y aquellos que tienen otras preferencias en la relación régimen/autoridad es necesario ir más allá de las diferencias nacionales. Es imperativo explorar las características personales de cada de estos grupos. Eso es lo que se hace en la siguiente sección.

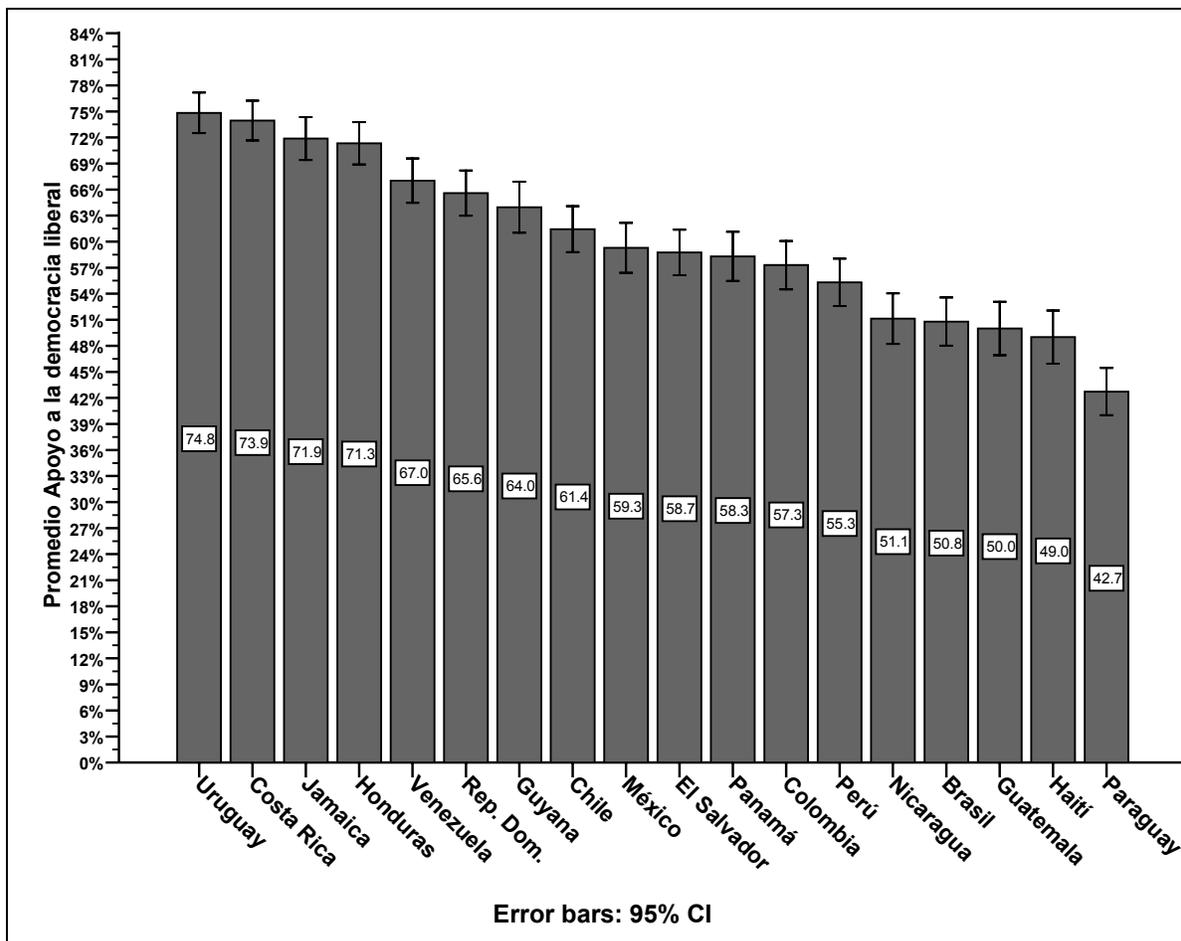


Gráfico II.7. Distribución de demócratas liberales según países

¿Quién es más probable de adoptar la democracia liberal?

Una actitud, tal como el apoyo al ejercicio liberal de la democracia, no puede tener un simple factor que la determina. Las actitudes son influenciadas por características personales, tales como el género, la educación, y el lugar de residencia, así como por experiencias vivenciales formativas, rasgos de la personalidad y otras actitudes tales como, en este caso particular, evaluaciones del sistema político. Es útil distinguir todas estas distintas influencias cuando tratamos de determinar su impacto en el apoyo a la democracia liberal. Así, aquí desarrollo cinco modelos que explican la membresía en la celda de “democracia liberal” en contraposición a aquellos que caen las celdas de “democracia iliberal” o “autoritaria” (para simplificar el análisis estadístico y la discusión, los autoritarios liberales e iliberales son agrupados en una simple categoría).

El primer modelo incluye características sociodemográficas: género, edad, educación, riqueza material (una forma de medir el estatus socioeconómico), residencia en áreas urbanas o rurales, y si el encuestado creció en un pueblo o ciudad o en un área rural. Junto con estos factores, incluí dos variables asociadas con el interés en y el conocimiento de política⁸. Este es nuestro modelo de base.

El segundo modelo incluye, además de las variables anteriores, una serie de preguntas asociadas con el trabajo de Putnam sobre el capital social (Putnam 1993) y el de Inglehart (1977; 1988) que argumenta que la satisfacción general de una persona con su vida está asociada con actitudes democráticas más fuertes. El aspecto central de la teoría del capital social es que una actividad asociativa más fuerte y confianza en otras personas favorece el desarrollo de valores democráticos. Por lo tanto, se incluye una escala de participación en organizaciones de la sociedad civil, una pregunta que averigua el nivel de confianza interpersonal del entrevistado y otra que interroga acerca de su nivel de satisfacción con la vida.

El tercer modelo trata de determinar si las percepciones de amenaza personal o económica afectan sus opciones de régimen, tal como han sido redefinidas aquí. La teoría subyacente es que una percepción de amenaza incrementa la propensidad de una persona a apoyar alternativas autoritarias (Altemeyer 1996; Fromm 1941; Stenner 2005). Se piensa que el deseo de seguridad y predictabilidad es el mecanismo psicológico que lleva a la gente que tiene una elevada percepción de amenaza a endosar el autoritarismo. Para medir la sensación de seguridad personal empleamos tres variables. La primera pide al entrevistado que evalúe que tan seguro se encuentra en su barrio. La segunda pregunta indaga sobre si el encuestado ha sido víctima de un acto delincencial el año previo a la encuesta. La última variable es un índice del número total de actos de corrupción que el entrevistado sufrió el año previo a la encuesta. Para medir la

⁸ El interés en la política se mide por la respuesta a dos preguntas: a) “¿Qué tanto interés tiene usted en la política: mucho, algo, poco o nada?”; b) “¿Con qué frecuencia mira noticias en la TV: todos los días, una o dos veces por semana, rara vez, nunca?”. Las respuestas fueron recodificadas para que vayan de bajo a alto interés. El conocimiento político se midió a través de una escala que suma las respuestas correctas a cinco preguntas de conocimiento político general (ver la batería de preguntas “GI” en el cuestionario). Se ha encontrado que el conocimiento político es un importante predictor de varias actitudes políticas (Althaus 2003; Delli Carpini y Keeter 1996; Grofman 1995).



inseguridad económica se utilizan dos preguntas comunes: la evaluación retrospectiva que el entrevistado tiene tanto de su situación personal como la del país. El supuesto es que aquellos que tienen opiniones negativas de la situación económica personal o del país tienen un nivel más bajo de sensación de seguridad económica que aquellos que tienen una evaluación más positiva de la economía.

Mientras que el modelo anterior se centra en las percepciones de amenaza, el cuarto modelo centra su atención en las evaluaciones del desempeño político. Como Bratton y Mattes (2001a; 2007) argumentan, existen varias evidencias que el apoyo a la democracia está parcialmente determinado por las evaluaciones de qué tan bien el sistema político está funcionando. El impacto de dos tipos de evaluaciones políticas se exploran aquí, una que está específicamente relacionado con el desempeño del presidente o jefe del poder ejecutivo, y el otro que se relaciona de manera más general con el desempeño del sistema político. En este último caso, tres variables son usadas: una escala de apoyo al sistema, una escala de confianza en instituciones políticas y una pregunta que mide la satisfacción del entrevistado con “la forma en que democracia funciona” en el país.

Finalmente, el quinto modelo agrega a las influencias mencionadas anteriormente dos variables que miden ideología (en la tradicional escala izquierda-derecha) y una escala de valores sociales autoritarios (la que, como mencioné anteriormente, no está “contaminada” con contenido político). Siguiendo el trabajo de Altemeyer sobre convencionalismo (1996), planteamos la hipótesis que aquellos que se encuentran en el lado socialmente autoritario del espectro (mostrando apoyo a convenciones patriarcales y autoritarias) tienen una mayor probabilidad de apoyar formas autoritarias de gobierno.

El cuadro que reporta los resultados completos de los cinco modelos se adjunta al final del capítulo. El Cuadro II.5 resume los resultados en una forma no técnica, dando el signo de la relación sólo para aquellos predictores que resultan ser estadísticamente significativos. Los predictores que no son estadísticamente significativos son notados con “ns”. La categoría de referencia en el cuadro es aquellos que apoyan el autoritarismo (ya sea en su variante liberal o iliberal).

Para analizar los resultados compararé, en primer lugar, los factores que diferencian aquellos que apoyan la democracia liberal con aquellos que endosan formas autoritarias de gobierno. Luego, analizaré las diferencias entre aquellos que apoyan formas iliberales de la democracia versus aquellos que endosan el autoritarismo.

El cuadro resumen sugiere que tres factores sociodemográficos son predictores consistentes del apoyo a la democracia liberal. Ciudadanos de mayor edad tienen una mayor probabilidad de ser clasificados como demócratas liberales (basados en sus respuestas a las preguntas sobre preferencias de régimen y cómo el poder ejecutivo debiera ser ejercitado) que votantes más jóvenes (Gráfico II.8). Este hallazgo es completamente entendible pero no por ello menos preocupante. Ciudadanos de mayor edad crecieron en un período cuando muchos países latinoamericanos estuvieron sometidos a gobiernos militares. Ellos probablemente recuerdan bien los abusos asociados con estos regímenes y los esfuerzos ciudadanos para removerlos del poder. Los ciudadanos más jóvenes, por otro lado, se ha socializado en un ambiente distinto.

Ellos nunca han vivido bajo gobiernos distintos que los débiles y problemáticos gobiernos democráticos que caracterizan una buena parte de la región; por lo tanto, carecen del referente comparativo que tienen aquellos que han vivido bajo gobiernos autoritarios. De manera no sorprendente, la asociación entre edad y opción de régimen es bastante consistente y se mantiene significativa incluso cuando variables asociadas con el desempeño político y valores democráticos son incorporados en el análisis.

En tres de los cinco modelos, el género de la persona aparece como un predictor significativo, siendo los hombres más propensos que las mujeres a apoyar la democracia liberal en lugar del autoritarismo. De igual forma, los datos tienden a apoyar la idea que una mayor posesión de bienes materiales fortalece las predisposiciones democráticas.

Tabla II.5. Variables predictoras de apoyo a la democracia liberal e iliberal (resumen)

Variables predictoras	Modelo de base	Capital social	Percepción de amenaza	Desempeño político	Valores
I. Demócratas liberales					
Edad en años	+	+	+	+	+
Género (0=Mujeres)	ns	+	+	+	ns
Educación en años	+	+	+	+	+
Riqueza material	+	+	+	+	ns
Lugar de origen (0=Rural)	+	+	+	+	+
Lugar de origen (0=Ciudad)	ns	ns	ns	ns	ns
Lugar de residencia (0=Area rural)	ns	ns	ns	ns	ns
Mira noticias por TV	ns	ns	ns	ns	ns
Interés en la política	ns	ns	ns	ns	ns
Conocimiento político	+	+	+	+	+
Vida asociativa		ns	ns	ns	ns
Confianza interpersonal		+	+	+	ns
Satisfacción con la vida		+	+	ns	ns
Se siente seguro en el barrio			ns	ns	ns
Ha sido víctima de un crimen (0=No)			ns	ns	ns
Índice de victimización por corrupción			-	-	-
Eval. retrospectiva de situación económica personal			ns	ns	ns
Eval. retrospectiva de situación económica del país			-	-	-
Aprobación presidencial				ns	ns
Apoyo al sistema				+	ns
Confianza en instituciones políticas				ns	ns
Satisfacción con la forma como la democracia funciona				+	+
Ideología					ns
Escala de valores autoritarios					-
Escala de tolerancia política					+



II. Demócratas liberales					
Edad en años	+	+	+	+	+
Género (0=Mujeres)	ns	ns	ns	ns	ns
Educación en años	ns	ns	ns	ns	ns
Riqueza material	ns	ns	ns	ns	ns
Lugar de origen (0=Rural)	ns	ns	ns	ns	ns
Lugar de origen (0=Ciudad)	ns	ns	ns	ns	ns
Lugar de residencia (0=Area rural)	ns	-	-	-	-
Mira noticias por TV	ns	ns	ns	ns	ns
Interés en la política	ns	ns	ns	ns	ns
Conocimiento político	+	+	+	+	+
Vida asociativa		ns	ns	ns	ns
Confianza interpersonal		ns	ns	ns	ns
Satisfacción con la vida		+	+	ns	ns
Se siente seguro en el barrio			ns	ns	ns
Ha sido víctima de un crimen (0=No)			ns	ns	ns
Índice de victimización por corrupción			-	ns	ns
Eval. retrospectiva de situación económica personal			ns	ns	ns
Eval. retrospectiva de situación económica del país			-	-	-
Aprobación presidencial				-	-
Apoyo al sistema				ns	ns
Confianza en instituciones políticas				ns	ns
Satisfacción con la forma como la democracia funciona				+	+
Ideología					ns
Escala de valores autoritarios					-
Escala de tolerancia política					ns

Categoría de referencia: Autoritarios; ns=no significativa. Las variables no incluidas en el modelo aparecen sombreadas.

La evidencia también muestra que los demócratas liberales, en comparación con los autoritarios, están más educados y tienen una mayor probabilidad de haber pasado sus años formativos en pueblos o ciudades que los autoritarios. Estos hallazgos son consistentes con lo que uno esperaría, en tanto la educación y los procesos de socialización tempranos en zonas urbanas se consideran estar relacionadas con una preferencia democrática más fuerte.

Ni el mirar noticias por TV ni el interés en la política incrementan la probabilidad de escoger formas liberales de la democracia sobre un gobierno autoritario. De otro lado, y de manera consistente con nuestro hallazgo anterior, el tener mayores niveles de conocimiento político está asociado a una mayor probabilidad de pertenecer a la celda de los demócratas liberales.

En relación a las variables asociadas con teoría del capital social, los datos muestran un apoyo bastante mixto para el punto de vista que la confianza interpersonal o la membresía en organizaciones de la sociedad civil fortalecen el compromiso con los valores democráticos. Cuando se incluyen junto con las variables que constituyen nuestro modelo de base, tanto la confianza interpersonal como la vida asociativa emergen como predictores significativos de membresía en el grupo de democracia liberal. Ellas son también significativas cuando se incluyen junto con el modelo de percepción de amenaza. Sin embargo, cuando el desempeño político, ideología, tolerancia política, y autoritarismo social son incorporados, el efecto de las variables de capital social desaparece. Un patrón similar puede ser detectado cuando el impacto de satisfacción con la vida en el apoyo a la democracia liberal es analizado. El impacto es positivo y significativo cuando se introduce originariamente, pero cuando las variables de desempeño y otras actitudes son incluidas, su influencia desaparece.

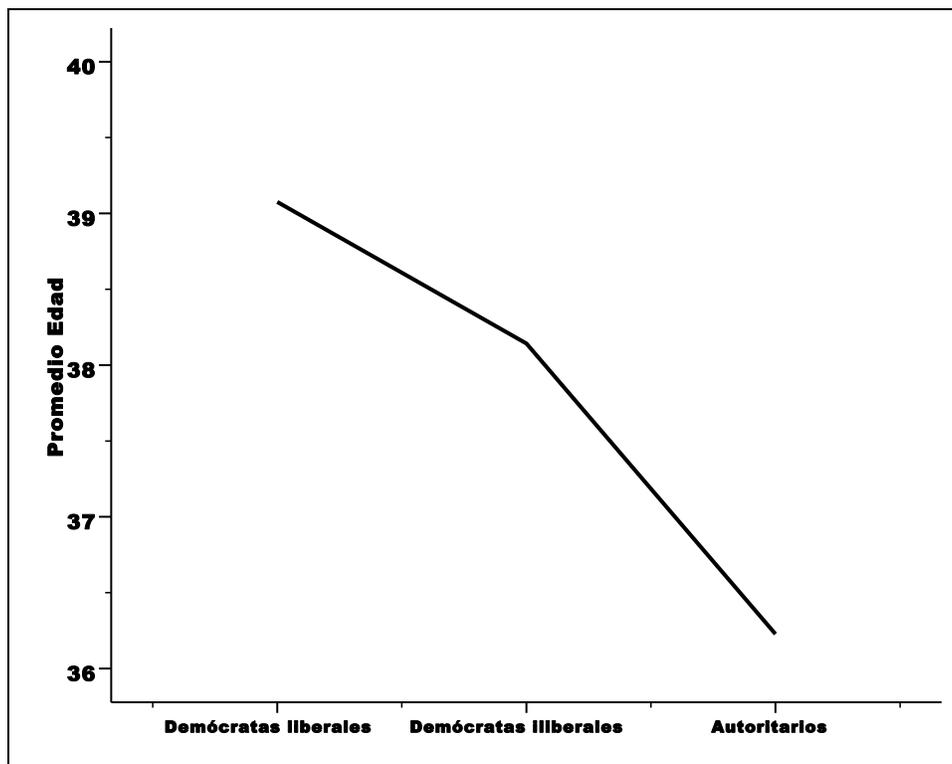


Gráfico II.8. Preferencia de régimen/Apoyo a gobierno liberal según edad

También hay un apoyo mixto a la tesis que niveles elevados de percepción de amenaza deprime el apoyo a las formas liberales de la democracia. El que una persona haya sido víctima de un crimen no la hace menos inclinada a apoyar la democracia. Tampoco está asociada la sensación de inseguridad personal con las preferencias de régimen. Esto son noticias relativamente buenas porque implica que el incremento en el crimen que la región está experimentando no está afectando, al menos no aún, las actitudes frente a la democracia liberal. De otro lado, sí encontramos que una mayor experiencia personal con la corrupción y evaluaciones negativas de la economía nacional disminuyen la probabilidad que un entrevistado prefiera la democracia liberal sobre el autoritarismo. La gente que cree que la economía del país es peor ahora que hace un año atrás tienen una menor probabilidad de apoyar la democracia



liberal y una mayor probabilidad de endosar el autoritarismo (Gráfico II.9). Este efecto no desaparece cuando variables de desempeño político y otras actitudes son incluidas en el análisis.

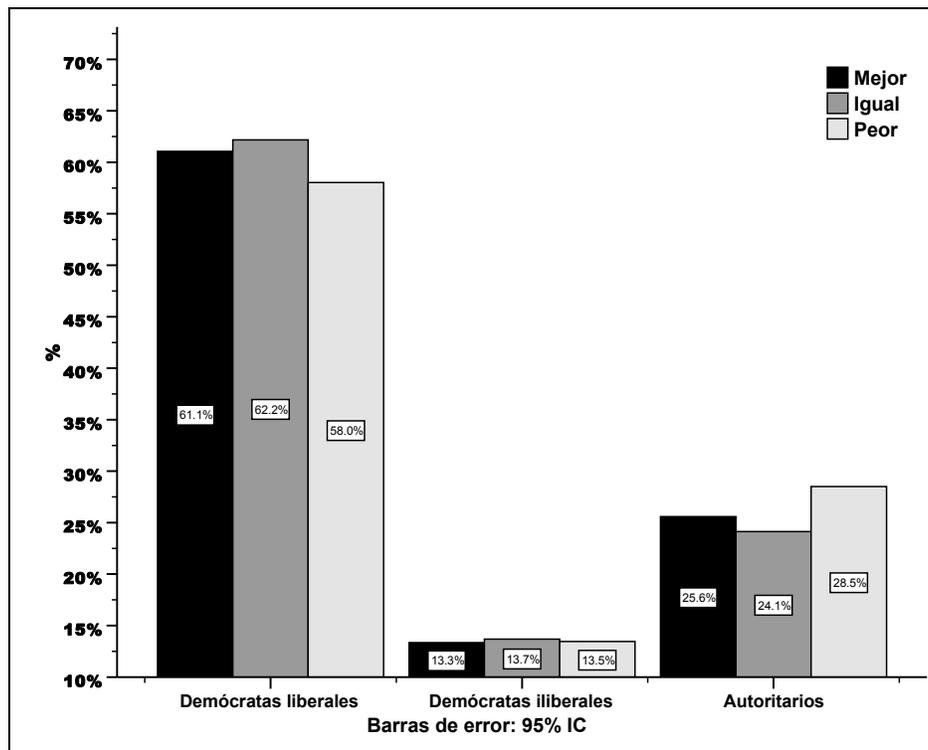


Gráfico II.9. Preferencias de régimen/Apoyo a gobierno liberal según evaluaciones retrospectivas de la economía del país

El modelo 4 examina cuán importantes son las evaluaciones del sistema político, la confianza en las instituciones políticas, la aprobación presidencial y la satisfacción con la forma como la democracia funciona en el país en el apoyo a la democracia liberal. Los resultados indican que la preferencia por la democracia liberal no es afectada por las evaluaciones del desempeño del presidente o la confianza en las instituciones políticas. De manera similar, mientras que el apoyo al sistema emerge como un efecto positivo y significativo en un modelo, su efecto desaparece cuando la ideología, la tolerancia política y la escala de actitudes autoritarias son incorporadas en el análisis. De las variables de desempeño político, la única que exhibe una influencia consistente en la opción de régimen es la satisfacción con la manera como la democracia viene funcionando en el país: una sensación generalizada de que la democracia no está funcionando adecuadamente hace que la gente esté más inclinada a apoyar el autoritarismo.

Finalmente, mientras que no podemos encontrar una relación significativa entre ideología (medida en la escala izquierda-derecha) y nuestras categorías redefinidas de régimen político, sí encontramos que el rechazo a los valores sociales autoritarios incrementa el apoyo a la democracia liberal.

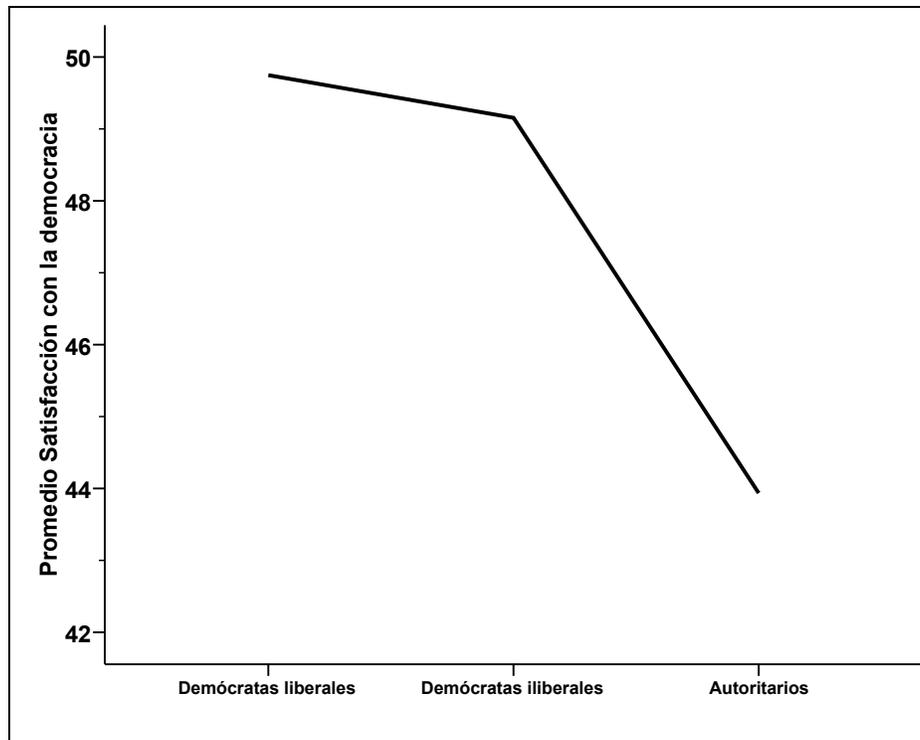


Gráfico II.10. Preferencia de régimen/Apoyo a gobierno liberal según satisfacción con la forma como la democracia esta funcionando en el país

Prestando atención ahora a las diferencias entre demócratas iliberales y autoritarios, se puede decir lo siguiente. En primer lugar, varios de los factores que nos ayudan a discriminar entre los demócratas liberales y los autoritarios nos ayudan también a discriminar entre los demócratas iliberales y los autoritarios. Como el cuadro resumen sugiere, los ciudadanos de mayor edad con niveles de conocimiento político superiores al promedio, que tienen evaluaciones positivas de la economía del país, que están generalmente satisfechos con la manera como la democracia funciona en el país, y que son también políticamente tolerantes y están menos inclinados a apoyar el autoritarismo social son también más probables de endosar la democracia en variantes iliberales que apoyar al autoritarismo.

Sin embargo, algunos de los factores que hacen que la gente escoja la democracia liberal en oposición al autoritarismo no nos ayudan a distinguir entre aquellos que prefieren formas iliberales de la democracia y el autoritarismo. Por ejemplo, mientras que el tener experiencias de socialización temprana en pueblos o ciudades en oposición a zonas rurales lleva a la gente a endosar la democracia liberal, esas experiencias de socialización no nos ayudan a distinguir entre los demócratas iliberales y los autoritarios. De manera similar, mientras que la gente con mayor riqueza material tiene una mayor probabilidad de escoger la democracia liberal en oposición al autoritarismo, la riqueza económica no nos ayuda a discriminar entre los autoritarios y los demócratas iliberales. Esto significa que los autoritarios y los demócratas iliberales tienden a tener procesos de socialización tempranos y antecedentes de riqueza económica similares.

De otro lado, hay dos variables que son predictores significativos de membresía en el grupo de demócratas iliberales en oposición a los autoritarios. El primero es el área de residencia



actual, con los demócratas iliberales siendo más probables de residir en ciudades que los autoritarios. La segunda variable es aprobación presidencial. Aquellos que están insatisfechos con el trabajo del presidente están más inclinados a apoyar el autoritarismo que endosar formas iliberales de democracia. Aquellos que aprueban la labor del presidente o el primer ministro tienen una mayor probabilidad de endosar la democracia, pero en su variante iliberal. Esto tiene sentido porque los demócratas iliberales son aquellos que están dispuestos a dar poderes extraordinarios a los presidentes o primeros ministros. Demócratas liberales, por otro lado, pueden o no pueden apoyar al presidente. Si lo hacen o no, no tiene ningún impacto en su disposición a preferir un tipo de gobierno sobre el otro.

A modo de conclusión

Encuentro que la mayoría de los latinoamericanos define la democracia en términos normativos, y que aquellos que lo hacen tienen una mayor probabilidad de endosarla que aquellos que la definen en términos negativos o instrumentales. Pero también encuentro que el efecto no es muy fuerte. Los datos muestran que la mayoría de los latinoamericanos endosa la democracia pero que existen importantes variaciones nacionales en ese apoyo. Más aún, el estudio encuentra que este apoyo es más bien superficial. Muchos de los autoproclamados demócratas tienen puntos de vista que son hostiles a un gobierno democrático, tales como el endoso de golpes militares o la disposición a apoyar formas no liberales del ejercicio del poder político. Encuentro que dependiendo de la pregunta, entre el 17% y el 45% de los autoproclamados demócratas están dispuestos a justificar un golpe militar. También encuentro que un cuarto de aquellos que endosan la democracia no tienen ningún problema en manifestar su acuerdo con la frase que los presidentes deben limitar la voz y el voto de la oposición si es necesario “para el progreso del país”.

Dadas estas inconsistencias, propongo una tipología que busca proveer una definición más robusta de apoyo a gobierno democrático. Esto se hace a través de la combinación de preferencias de régimen (democracia o autoritarismo) con actitudes frente a cómo debe ejercerse el poder político (con restricciones o sin ellas). Los demócratas liberales, en esta redefinición, son aquellos que apoyan la democracia por principio y no están dispuestos a ceder poderes sin restricciones a los presidentes. Los demócratas iliberales son aquellos que aunque prefieren la democracia también están dispuestos a endosar el ejercicio iliberal del poder. Autoritarios liberales e iliberales son, para los propósitos de este artículo, agrupados en una sola categoría. Mientras que el 73% de los entrevistados declara una preferencia por la democracia sobre otros regímenes, el análisis realizado en este capítulo muestra que sólo el 61% de todos los entrevistados pueden ser clasificados como demócratas liberales. Probablemente esta última cifra nos da una visión más realista del grado de apoyo actitudinal existente para la democracia que la mencionada anteriormente. Pero incluso, y como el análisis realizado sugiere, algunos demócratas liberales no están completamente al margen de la tentación de endosar algunas posiciones autoritarias.

Para identificar quiénes tienen una mayor probabilidad de ser clasificados como demócratas liberales se desarrolló una serie de modelos. Los principales hallazgos son que el endoso de la democracia liberal está afectado por consideraciones tanto normativas como

instrumentales. Por el lado utilitario, los datos muestran que las evaluaciones positivas de la economía del país y una satisfacción general con la manera como la democracia está funcionando incrementa el apoyo a las formas liberales del gobierno democrático. Por el lado normativo, los datos muestran que mayores niveles de tolerancia política y bajas predisposiciones al autoritarismo social incrementan el apoyo a la democracia liberal. Junto con estas consideraciones utilitarias y normativas, ciertas características demográficas tales como la edad y la riqueza material, así como la información política, afectan el grado de apoyo a la democracia liberal, con ciudadanos de mayor edad y mayor ingreso y con mayores niveles de información política mostrando una mayor probabilidad de preferir la democracia liberal que el autoritarismo.

La conclusión general de este capítulo es que el apoyo popular a la democracia no es tan alto o robusto como uno esperaría o desearía. De otro lado, es claro que una mayoría de los latinoamericanos ven con simpatía el ejercicio liberal del gobierno democrático. Incluso si este apoyo es por momentos inconsistente, ofrece un núcleo sobre el cual se pueden alentar actitudes democráticas más fuertes y consistentes.



Referencias

- Altemeyer, Bob. *Enemies of Freedom: Understanding Right-Wing Authoritarianism*. San Francisco: Jossey-Bass, 1988.
- . *The Authoritarian Specter*. Cambridge: Harvard University Press, 1988.
- Althaus, Scott L. *Collective Preferences in Democratic Politics: Opinion Surveys and the Will of the People*. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
- Bratton, Michael y Robert Mattes. “Support for Democracy in Africa: Intrinsic or Instrumental”. *British Journal of Political Science*. Vol. 31, Nro. 3 (2001a): 447-474.
- . “Africans’ Surprising Universalism.” *Journal of Democracy* 12 (1) (2001b): 107-121.
- Cameron, Maxwell. “Self-Coups: Peru, Guatemala, Russia.” *Journal of Democracy* 9 (1) (1998).
- Carrión, Julio F. “Conclusion: The Rise and Fall of Electoral Authoritarianism in Peru”. En *The Fujimori Legacy: The Rise of Electoral Authoritarianism in Peru*, ed. Julio F. Carrión, University Park: Pennsylvania State University Press, 2006.
- Conaghan, Catherine M. *Fujimori’s Peru: Deception in the Public Sphere*. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2005.
- Dahl, Robert. *A Preface to Democratic Theory*. Chicago and London: The University of Chicago Press, 1956.
- . *Democracy and its Critics*. New Haven: Yale University Press, 1989.
- Delli Carpini, Michael X. y Scott Keeter. *What Americans Know About Politics and Why it Matters*. New Haven: Yale University Press, 1996.
- Diamond, Larry. *Developing Democracy: Toward Consolidation*. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1999.
- . “Thinking about Hybrid Regimes.” *Journal of Democracy* 13 (2) (2002).
- Fromm, Eric. *Escape From Freedom*. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1941.
- Grofman, Bernard (editor). *Information, Participation, and Choice*. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1995.
- Held, David. *Models of Democracy. Second Edition*. Stanford: Stanford University Press, 1966.
- Inglehart, Ronald. *The Silent Revolution*. Princeton: Princeton University Press, 1977.
- . “The Renaissance of Political Culture.” *American Political Science Review*. Vol. 82 (1988): 1203-1230.
- Lakoff, Sanford. *Democracy: History, Theory, Practice*. Boulder: Westview Press, 1996
- Levitsky, Steven, y Lucan A. Way. “The Rise of Competitive of Authoritarianism.” *Journal of Democracy* 13 (2) (2002).
- Macpherson, C.B. *The Life and Times of Liberal Democracy*. Oxford: Oxford University Press, 1997.
- Mattes, Robert y Michael Bratton. “Learning about Democracy in Africa: Awareness, Performance, and Experience.” *American Journal of Political Science* 51 (1) (2007): 192-217.
- PNUD-PRODDAL. *La democracia en América Latina: Hacia una democracia de ciudadanos y ciudadanas*. Lima: PNUD, 2004.

- Prothro, James W. y Charles M. Grigg. "Fundamental Principles of Democracy: Bases of Agreement and Disagreement." *Journal of Politics* 22 (2) (1960): 276-294.
- Putnam, Robert. *Making Democracy Work*. Princeton: Princeton University Press, 1993.
- Sarsfield, Rodolfo. *¿La no-elección de Dorian Gray o la decisión de Ulises? Racionalidad y determinación en la preferencia por democracia en América Latina*. México: FLACSO. Ph.D Dissertation, 2003.
- Sarsfield, Rodolfo y Julio F. Carrión. *The Different Paths to Authoritarianism: Rationality and Irrationality in Regime Preferences*. Reunión anual de World Association of Public Opinion Research, WAPOR. Mayo 16-18, Montreal, Canadá, 2006.
- Sarsfield, Rodolfo y Fabian Echegaray. "Opening the Black Box. How Satisfaction with Democracy and its Perceived Efficacy Affect Regime Preference in Latin America." *International Journal of Public Opinion Research*, Vol. 18 (2006): 153-173.
- Schedler, Andreas (editor). *Electoral Authoritarianism: The Dynamics of Unfree Competition*. Boulder and London: Lynne Rienner Pub, 2006.
- Stenner, Karen. *The Authoritarian Dynamic*. New York: Cambridge University Press, 2005.
- Touraine, Alain. *What is Democracy*. Boulder, Westview Press, 1997.



Anexo. Modelando el apoyo a la democracia liberal

Tabla II. 6. Predictores de apoyo a la democracia liberal

Variables predictoras	Modelo de base	Capital social	Percep. de amenaza	Desempeño político	Valores
I. Demócratas liberales					
Constante	-1.498 (.765)*	-11.875 (1.240)**	-12.218 (1.265)**	-11.918 (1.292)**	-9.554 (1.437)**
Edad en años	.014 (.001)**	.014 (.001)**	.014 (.001)**	.015 (.001)**	.016 (.002)**
Género (0=Mujeres)	.062 (.034)	.080 (.036)*	.076 (.037)*	.076 (.039)*	.070 (.042)
Educación en años	.032 (.005)**	.037 (.005)**	.038 (.005)**	.039 (.006)**	.030 (.006)**
Riqueza material	.057 (.011)**	.026 (.011)*	.028 (.012)*	.024 (.012)*	.020 (.013)
Lugar de origen (0=Rural)	.199 (.048)**	.192 (.051)**	.178 (.052)**	.187 (.054)**	.205 (.059)**
Lugar de origen (0=Ciudad)	.022 (.048)	.065 (.051)	.071 (.052)	.101 (.053)	.084 (.058)
Lugar de residencia (0=Area rural)	.022 (.043)	-.051 (.046)	-.038 (.047)	-.030 (.050)	-.031 (.055)
Mira noticias por TV	-.019 (.019)	-.009 (.021)	-.014 (.021)	-.012 (.022)	-.005 (.024)
Interés en la política	.012 (.018)	.001 (.019)	-.002 (.020)	-.002 (.021)	-.007 (.022)
Conocimiento político	.194 (.014)**	.113 (.016)**	.112 (.017)**	.110 (.017)**	.078 (.019)**
Vida asociativa		-.083 (.087)	-.038 (.089)	-.107 (.093)	.075 (.101)
Confianza interpersonal		.086 (.020)**	.066 (.021)*	.047 (.022)*	.031 (.024)
Satisfacción con la vida		.070 (.024)*	.056 (.025)*	.030 (.026)	.027 (.028)
Se siente seguro en el barrio			.001 (.001)	.001 (.001)	.001 (.001)
Ha sido víctima de un crimen (0=No)			.057 (.049)	.029 (.050)	.043 (.055)
Índice de victimización por corrupción			-.088 (.024)**	-.066 (.026)*	-.058 (.029)*
Eval. retrospectiva de situación económica personal			-.014	.029	.028

Variables predictoras	Modelo de base	Capital social	Percep. de amenaza	Desempeño político	Valores
			(.030)	(.031)	(.033)
Eval. retrospectiva de situación económica del país			-.137 (.030)**	-.133 (.032)**	-.154 (.035)**
Aprobación presidencial				.046 (.024)	.035 (.027)
Apoyo al sistema				.003 (.001)*	.002 (.001)
Confianza en instituciones políticas				-.001 (.001)	-.001 (.001)
Satisfacción con la forma como la democracia funciona				.005 (.001)**	.005 (.001)**
Ideología					.011 (.008)
Escala de valores autoritarios					-.010 (.001)**
Escala de tolerancia política					.009 (.001)**
II. Demócratas iliberales					
Constante	-3.017 (1.112)*	-12.966 (1.605)**	-13.689 (1.319)**	-14.099 (1.667)**	-11.590 (1.855)**
Edad en años	.010 (.002)**	.011 (.002)**	.011 (.002)**	.012 (.002)**	.013 (.002)**
Género (0=Mujeres)	-.003 (.049)	.049 (.052)	.057 (.053)	.052 (.055)	.034 (.060)
Educación en años	.004 (.008)	.006 (.008)	.006 (.008)	.007 (.008)	.000 (.009)
Riqueza material	.025 (.016)	.004 (.017)	-.006 (.017)	-.008 (.018)	-.005 (.019)
Lugar de origen (0=Rural)	.103 (.067)	.110 (.071)	.101 (.072)	.090 (.075)	.102 (.082)
Lugar de origen (0=Ciudad)	-.091 (.068)	-.077 (.071)	-.055 (.072)	-.049 (.075)	-.065 (.080)
Lugar de residencia (0=Area rural)	-.087 (.062)	-.186 (.066)*	-.182 (.068)*	-.160 (.071)*	-.173 (.078)*
Mira noticias por TV	-.018 (.028)	-.008 (.029)	-.018 (.030)	-.018 (.031)	-.016 (.034)
Interés en la política	.044 (.026)	.040 (.027)	.033 (.028)	.015 (.029)	.014 (.032)
Conocimiento político	.152 (.020)**	.087 (.023)**	.087 (.024)**	.091 (.024)**	.060 (.027)*



Variables predictoras	Modelo de base	Capital social	Percep. de amenaza	Desempeño político	Valores
Vida asociativa		-.008 (.123)	.034 (.126)	.037 (.132)	.123 (.142)
Confianza interpersonal		.046 (.028)	.012 (.030)	-.003 (.031)	-0.012 (.034)
Satisfacción con la vida		.123 (.034)**	.084 (.035)*	.045 (.037)	.058 (.040)
Se siente seguro en el barrio			.002 (.001)	.001 (.001)	.001 (.001)
Ha sido víctima de un crimen (0=No)			.095 (.070)	.057 (.072)	.040 (.077)
Índice de victimización por corrupción			-.078 (.034)*	-.069 (.036)	-.055 (.040)
Eval. retrospectiva de situación económica personal			-.008 (.043)	.020 (.044)	.018 (.047)
Eval. retrospectiva de situación económica del país			-.254 (.043)**	-.213 (.045)**	-.215 (.049)**
Aprobación presidencial				-.147 (.038)**	-.118 (.042)*
Apoyo al sistema				.000 (.002)	.002 (.002)
Confianza en instituciones políticas				-.002 (.002)	-.003 (.002)
Satisfacción con la forma como la democracia funciona				.006 (.001)**	.005 (.001)**
Ideología					.000 (.012)
Escala de valores autoritarios					-.008 (.001)**
Escala de tolerancia política					.002 (.001)
Pseudo R cuadrado	.082	.083	.087	.092	.111
-2 log de verosimilitud	36008.5	32736.6	31749.4	29721.6	25196.6
Categoría de referencia: Autoritarios.					
Las cifras son coeficientes de la regresión logística multinomial. Los respectivos errores típicos están entre paréntesis.					
*p ≤ .05; **p ≤ .001. Los efectos de país están omitidos en el cuadro para ahorrar espacio.					

III. ¿Que se vayan todos? Actitudes hacia los partidos políticos y democracia en las Américas¹

María Fernanda Boidi²

Resumen

Los partidos políticos son la estructura que intermedia entre sociedad y gobierno en las democracias representativas. Si los vínculos entre los ciudadanos y los partidos son demasiado débiles, la tarea básica de intermediación no está siendo llevada a cabo, y como resultado, sociedad y gobierno no están conectados. Este parece ser el caso en América Latina, donde los ciudadanos confían muy poco en los partidos políticos, y donde además otros vínculos entre ciudadanos y partidos (como el voto por partidos políticos, la identificación partidaria y la participación en actividades partidarias) son también, promedialmente, débiles. No obstante lo desalentador de este panorama, en la mayoría de los países de la región hay aún una reserva de apoyo a los partidos. En casi todos los países, la creencia en la necesidad de los partidos para la democracia supera (en algunos casos ampliamente) los niveles de confianza en los partidos políticos. La mayoría de los latinoamericanos cree que los partidos son necesarios para la democracia (desde un 33 por ciento en Haití hasta 66 por ciento en Uruguay). Esto sugiere que el desdén por los partidos es coyuntural: serían los partidos tal cual funcionan actualmente y no el rechazo a ellos en tanto institución lo que mantiene a los ciudadanos alejados de los partidos.

En 1942, y refiriéndose al sistema de partidos estadounidense, Schattschneider afirmaba que la democracia moderna es impensable sin partidos políticos (1942:1). Las democracias contemporáneas son “impensables” sin partidos políticos porque han sido diseñadas de modo que los partidos sean la “estructura intermedia entre la sociedad y el gobierno” (Sartori 1976: iv). Si los vínculos entre los ciudadanos y los partidos son demasiado débiles, como es el caso en muchos países de América Latina, la tarea básica de intermediación no está siendo llevada a cabo, y como resultado, sociedad y gobierno no están conectados.

¹ Las “Américas” refiere a los 22 países incluidos en la ronda 2006 del Barómetro de las Américas de LAPOP: Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Esta ronda de entrevistas fue posible gracias al apoyo de USAID. Cuando la disponibilidad de datos así lo permite, el análisis se extiende al conjunto de los 22 países. Sin embargo, la discusión central sobre confianza en los partidos políticos se limita a los países de América Latina y el Caribe.

² Este artículo se ha beneficiado de mis conversaciones sobre el tema con Florence Faucher-King y Jonathan Hiskey. Mitchell Seligson leyó cuidadosamente versiones preliminares y aportó valiosos comentarios. Vaya a los tres mi agradecimiento. El producto final, por supuesto, es mi exclusiva responsabilidad. Escribí este capítulo durante el año académico 2006-2007, mientras me encontraba cursando estudios de doctorado en Ciencia Política en la Universidad de Vanderbilt. Quiero agradecer el apoyo financiero del Departamento de Ciencia Política así como del Centro para las Américas de dicha Universidad. Asimismo, hago extensivo el agradecimiento a la oficina del Provost de la Universidad de Vanderbilt cuyas instalaciones nos alojan.



Uno de los ejemplos más claros no sólo del distanciamiento entre ciudadanos y partidos políticos sino también del rechazo a los partidos como institución de intermediación política ha sido el reclamo de “Que se vayan todos”. La primera vez que este sentimiento se hizo público fue en Argentina en 2001, cuando la gente salió a las calles a literalmente “expulsar” a sus gobernantes al canto de “Que se vayan todos, que no quede ni uno solo”. Las protestas que culminaron en la renuncia del entonces presidente Fernando de la Rúa habían comenzado con grupos de desocupados que rechazaban las políticas económicas del gobierno a los que luego se unieron las clases medias de todo el país, convirtiendo la protesta en un reclamo nacional. (Bonnet s.d., Dinerstein 2003, Giarraca 2002).

Con independencia de su origen y motivaciones puntuales, “que se vayan todos” expresa el alzamiento de los ciudadanos en rechazo a las instituciones centrales de las democracias representativas. En este sentido, el caso argentino no es excepcional. González (2006:8) enumera nueve “crisis políticas agudas” que involucran debilitamiento o ruptura institucional en otros seis países de América Latina en lo que va del siglo (Paraguay 2000, Perú 2000, Venezuela 2003, Bolivia 2003 y 2005, Ecuador 2000 y 2005 y Nicaragua 2005). Si bien la queja expresada en el grito de “que se vayan todos” es contra el sistema todo -una especie de llamado a empezar de nuevo- la decepción es con las instituciones de la democracia representativa, y en ese sentido los destinatarios del reclamo no son otros que los partidos políticos en tanto agentes encargados de la organización, canalización y representación de intereses en la esfera pública.

Desde las organizaciones partidarias se reconoce que parte del problema son los partidos mismos. En su estudio sobre partidos políticos centroamericanos, Achard y González encontraron que el 64 por ciento de los políticos consultados y el 80 por ciento de los observadores no políticos encuestados consideran que los partidos políticos no se están desempeñando bien en la región. Entre las razones que explicarían este pobre desempeño, los entrevistados mencionaron las prácticas patrimoniales y corruptas, la existencia de estructuras partidarias oligárquicas y la falta de democracia interna (Achard y González 2004: 83). Por su parte, Córdova Macías (2004) señala que entre las causas de la crisis de los partidos políticos en América Latina su falta de representatividad y transparencia, la incapacidad de cumplir las promesas de campaña y las demandas de la ciudadanía destacan como las más importantes.

La confianza en los partidos políticos es el tema central de este capítulo. Investigaciones previas han demostrado que un bajo nivel de confianza en los partidos políticos perjudica el proceso de consolidación democrática de varias maneras, como se describe en la sección principal, *Por qué la confianza en los partidos políticos importa*. Este capítulo comienza con una breve descripción de los vínculos entre ciudadanos y partidos en las Américas, seguida por la sección principal sobre confianza en los partidos. El capítulo concluye con la discusión de las implicaciones de la baja confianza en los partidos para el proceso de consolidación democrática en la región.

Vínculos entre ciudadanos y partidos en las Américas

La relación entre ciudadanos y partidos puede analizarse desde varias ópticas. En lo que refiere a comportamientos, los ciudadanos pueden afiliarse a organizaciones partidarias, o

participar de las actividades organizadas por los partidos, como actos, caravanas y reuniones. En última instancia, los ciudadanos votan por un partido político, en lo que constituye para muchos el único acto de participación política (Campbell et al., 1960). A nivel de las actitudes, además de la mencionada confianza, los individuos pueden simpatizar (o no) con un partido político, y también tienen sus ideas sobre la centralidad de los partidos para la democracia. Estos comportamientos y actitudes, sobre todo cuando son considerados en su conjunto, proveen un mapa de los vínculos entre ciudadanos y partidos en cada uno de los países.

Tabla III-1. Vínculos entre ciudadanos y partidos en las Américas

	Voto elección presidencial % (a)	Voto elección legislativa % (b)	Diferencia voto presidencial/ Legislativo	Simpatiza % (c)	Asiste a reuniones Media (d)	Convencer a otros (total entrevistados) Media (e)	Convencer a otros (sólo simpatizantes) Media (f)	Trabajar por el partido (total entrevistados) % (g)	Trabajar por el partido (sólo simpatizantes) % (h)
México	71.3	58.1	13.2	49.2	0.2	0.4	0.6	7.4	9.7
Guatemala	56.5	41.1	15.4	14.7	0.1	0.4	0.7	3.8	14.2
El Salvador	67.9	65.6	2.3	31.3	0.1	0.4	0.7	8.3	15.6
Honduras	82.5	70.3	12.2	44.2	0.2	0.5	0.7	19.9	27.3
Nicaragua	61.2	46.8	14.4	49.8	0.3	0.5	0.6	10.9	16.8
Costa Rica	70.8	92.7	-21.9	36.2	0.1	0.6	0.8	11.2	19.6
Panamá	79.5	51.0	28.5	20.8	0.2	0.9	1.2	12.8	26.6
Colombia	60.2	46.5	13.7	28.6	0.2	0.4	0.7	11.7	25.2
Ecuador	83.8				0.1	0.5		9.3	
Bolivia	90.9				0.2	0.6			
Perú	91.8	91.8	0	29.9	0.3	0.7	1.0	8.0	15.4
Paraguay	67.6				0.2	0.5		12.1	
Chile	70.8	66.4	4.4	25.6	0.1	0.6	0.9	3.8	9.2
Uruguay	88.9			53.3	0.2	0.6	0.8	15.2	21.6
Brasil	84.1			34.1	0.1	0.7	0.9	14.0	23.8
Venezuela	76.8	29.8	47	32.5	0.3	0.7	1.0	13.2	26.8
República Dominicana	80.3	77.2	3.1	60.4	0.5	1.0	1.2	20.0	27.3
Haití	78.0	72.5	5.5	37.9	0.4	0.5	0.7	15.4	23.7
Jamaica	48.0	33.1	14.9	47.1	0.3	0.6	0.9	6.8	12.9
Guyana	78.1	56.8	21.3	19.5	0.3	0.8	1.1	10.1	22.5
Canadá	84.0			50.7	0.2				
Estados Unidos	89.3			62.2	0.2				
Total Américas	74.8	59.2		37.1	0.2	0.6	0.9	11.3	20.01

a. Porcentaje de entrevistados que respondió "Sí" a pregunta vb2 ¿Votó Ud. en las últimas elecciones presidenciales? b. Porcentaje de entrevistados que respondió "Sí" a pregunta vb6 ¿Votó Ud. para diputado en las últimas elecciones? c. Porcentaje de entrevistados que respondió "Sí" a pregunta vb10 ¿En este momento, simpatiza con algún partido político? d. Promedio de asistencia a reuniones de partidos o movimientos políticos (0. Nunca, 1. Una o dos veces al año, 2. Una o dos veces al mes, 3. Una vez a la semana). Creado en base a recodificación de valores originales de pregunta cp13 ¿Asiste a reuniones de un partido o movimiento político? e. Promedio de frecuencia con que entrevistados manifestaron querer convencer a otros de votar por un partido o candidato (0. Nunca, 1. Rara vez, 2. De vez en cuando, 3. Frecuentemente). Creado en base a recodificación de valores originales de pregunta pp1 ¿Con qué frecuencia ha tratado usted de convencer a otros para que voten por un partido o candidato?. Calculado para el total de entrevistados que respondieron a la pregunta. f. Promedio de frecuencia con que entrevistados manifestaron querer convencer a otros de votar por un partido o candidato (0. Nunca, 1. Rara vez, 2. De vez en cuando, 3. Frecuentemente). Creado en base a recodificación de valores originales de pregunta pp1 ¿Con qué frecuencia ha tratado usted de convencer a otros para que voten por un partido o candidato?. Calculado sólo para los que simpatizan con un partido político. g. Porcentaje de entrevistados que respondió "Sí" a pregunta pp2 Hay personas que trabajan por algún partido o candidato durante las campañas electorales. ¿Trabajó Ud. para algún candidato o partido en las pasadas elecciones presidenciales? Calculado para el total de los entrevistados que respondieron a la pregunta. h. Porcentaje de entrevistados que respondió "Sí" a pregunta pp2 Hay personas que trabajan por algún partido o candidato durante las campañas electorales. ¿Trabajó Ud. para algún candidato o partido en las pasadas elecciones presidenciales? Calculado sólo para los que simpatizan con un partido político.



El estudio en perspectiva comparada de comportamientos tales como el voto a partidos políticos o la pertenencia a organizaciones partidarias presenta la dificultad de que las variaciones entre los países pueden estar determinadas en gran parte por las características propias de los sistemas electorales y de las estructuras de incentivos propias de cada nación. De hecho, la proporción de ciudadanos que se involucra en cada una de las varias actividades relacionadas con los partidos políticos sobre las que se indagó en la ronda 2006/07 del Barómetro de las Américas varía mucho por país (Tabla III-1). Así, la participación a través del voto a partidos en elecciones presidenciales puede ser tan baja como 48 por ciento en Jamaica, o superar el 90 por ciento en Bolivia y en Perú.³

Más grande aún es la brecha en la participación en elecciones legislativas, que va de 33 por ciento en Jamaica a más de 90 por ciento en Costa Rica y en Perú. Según Mainwaring y Scully (1995: 5,9), la diferencia entre la proporción de votos emitidos en las elecciones presidenciales y las legislativas es un indicador de qué tanto han penetrado los partidos en la sociedad. Cuando los partidos políticos son actores centrales en la delineación de las preferencias de la sociedad, las diferencias entre el voto en ambos tipos de elecciones deberían ser mínimas, ya que los ciudadanos votarían más frecuentemente en base a distinciones partidarias en ambas instancias. De acuerdo a este indicador (cuyos resultados por país se presentan en la tercera columna de la Tabla III-1), los partidos estarían menos arraigados en Panamá, Guyana, y Costa Rica, donde las diferencias entre la proporción de votantes en una y otra elección son mayores. Sin embargo, cabe mencionar que la utilidad de este indicador debe ser ponderada a la luz de las reglas electorales de cada país. Que el voto sea obligatorio o no, y la aplicación o no de las sanciones pertinentes, así como la concurrencia en el tiempo de las elecciones presidenciales y legislativas son todos factores que también pueden afectar las diferencias en la proporción de votantes entre cada tipo de elección, y esto con independencia de la fortaleza de los partidos políticos.

En su concepción clásica, de acuerdo al modelo de Michigan, la identificación partidaria es una identificación psicológica con un partido político, que puede existir sin que haya un vínculo formal (de membresía, por ejemplo) con el partido. Se trata de una orientación afectiva, persistente en el tiempo y que no necesariamente está asociada con el voto consistente por el partido objeto de la identificación (Campbell et al. 1960: 121-123). La identificación partidaria es uno de los vínculos centrales entre ciudadanos y partidos. Bajos niveles de identificación partidaria sugieren que los partidos políticos no son capaces de establecer vínculos de mediano y largo plazo con los ciudadanos. La debilidad de estos vínculos puede obedecer tanto a un sistema de partidos fluido en el que los partidos aparecen y desaparecen entre elecciones, a la incapacidad de los partidos “viejos” y “estables” de inspirar lealtades duraderas, como a nuevos valores de los ciudadanos que ya no ven en los partidos políticos un grupo de pertenencia (Dalton 2006, Dalton y Wattenberg 2000). Cualquiera sea su origen, bajos niveles de identificación con los partidos

³ Las cifras correspondientes a la participación en elecciones presidenciales y legislativas reflejan tasas de participación más elevadas que las que registran los datos oficiales sobre elecciones en cada país. Esto es un problema frecuente en la investigación de opinión pública, y se relaciona con el efecto de deseabilidad social. La deseabilidad social refiere a la necesidad de presentarse a uno mismo de la manera más favorable posible (Turangeau y Rasinski 2000: 5). Dado que el acto de votar es positivamente valorado en el contexto de las democracias de la región, algunos entrevistados pueden haberse visto tentados a contestar que votaron en las últimas elecciones, cuando en realidad no lo hicieron. Este efecto, no obstante, no empaña las importantes diferencias entre países.

son un indicador de la debilidad de los vínculos entre ciudadanos y partidos políticos. Algo más de un tercio (37.1 por ciento) de ciudadanos es el promedio de partidarios en cada país (Tabla III-1) según las respuestas otorgadas a la pregunta “¿En este momento, simpatiza con algún partido político?” También en este aspecto las variaciones entre países son significativas; la proporción de ciudadanos que se identifican con un partido puede ser tan baja como 15 por ciento en Guatemala o situarse por encima de los 60 puntos porcentuales, en Estados Unidos y República Dominicana. Otras actividades a través de las cuales los ciudadanos se vinculan a los partidos, como la asistencia a reuniones partidarias o la participación en las campañas (también representadas en la Tabla III-1) son aún menos frecuentes entre los ciudadanos de las Américas, aunque también en este caso hay variaciones por país.

Entre las funciones que típicamente se espera que los partidos políticos cumplan se destacan la canalización de intereses y demandas, y la promoción de la participación electoral vía reducción de los costos de información del acto de votar (Mainwaring y Scully 1995: 2-3). Los partidos de América Latina y el Caribe no parecen estar cumpliendo estas tareas. Cuando preguntamos a los entrevistados sobre la razón más importante que tuvieron en cuenta a la hora de escoger presidente entre el partido, el candidato o el programa de gobierno, el partido político del candidato resultó ser la razón menos mencionada (19 por ciento, para el conjunto de la muestra).⁴ La respuesta más frecuente en todos los países fue “el plan de gobierno” (54 por ciento en el conjunto). Que la mayoría de los ciudadanos decidan su voto a presidente en función del programa de gobierno no implica, *per se*, debilidad en los vínculos partidarios. Sin embargo, que los partidos sean la razón menos mencionada como determinante del voto en la región en su conjunto y en 12 de los 17 países sobre los que se dispone de información indica que los partidos no están cumpliendo las funciones de organizar y canalizar la competencia por el poder público; para la mayoría de los ciudadanos las diferencias están marcadas por los programas y por los candidatos en mucho mayor medida que por los partidos políticos. En su conjunto, los ciudadanos de América Latina y el Caribe (no contamos con datos para Canadá ni Estados Unidos) no perciben que los partidos políticos estén cumpliendo con la función de agregación de intereses y atajos de información que su rol supone (Mainwaring y Scully 1995, Sartori 1976).

En suma, el panorama es uno de vínculos entre ciudadanos y partidos relativamente débiles en lo que refiere a la participación electoral, a las motivaciones para esa participación y al involucramiento con los partidos y sus actividades de campaña. Hay, por supuesto, diferencias significativas entre países. Como la información presentada en la Tabla III-1 sugiere, los vínculos serían más fuertes en Honduras, Uruguay y República Dominicana y extremadamente débiles en Guatemala. Lo que estos datos a nivel individual muestran es confirmado por los indicadores a nivel institucional: Guatemala cuenta con uno de los sistemas de partidos menos institucionalizados de la región, mientras que en Honduras, Uruguay y República Dominicana tienen sistemas de partidos mucho más consolidados y establecidos (Payne et al. 2003, Payne et al. 2006).

⁴ A todos los encuestados que afirmaron haber votado en las pasadas elecciones presidenciales se les preguntó: (VB8) “Cuando votó, ¿cuál fue la razón más importante de su voto: las cualidades del candidato, el partido político del candidato, el plan de gobierno del candidato? Esta pregunta se formuló en Colombia, Perú, Chile, Costa Rica, El Salvador, Panamá, Guatemala, México, Haití, Nicaragua, Paraguay, Guyana, República Dominicana, Honduras, Uruguay, Venezuela y Jamaica.



Por qué la confianza en los partidos políticos importa

Esta sección toma su título del libro de Marc J. Hetherington (2005) *Why Trust Matters* (Por qué la confianza importa). El argumento central de Hetherington es que la confianza en el gobierno es crítica en los momentos en que los ciudadanos sienten que pagan los costos pero no reciben los beneficios de las acciones gubernamentales (en este sentido, los gobiernos requieren grandes reservas de confianza para que sus programas redistributivos prosperen). Si bien la temática abordada por Hetherington no se vincula directamente la problemática que ocupa a este capítulo, la preocupación de fondo es compartida. Para su buen funcionamiento, dice el autor, las democracias representativas requieren que la gente confíe en sus representantes, tanto individualmente como en las instituciones que ellos ocupan. Si la personas no confían en sus instituciones, no tienen incentivos para apegarse a las leyes establecidas por esas instituciones (Hetherington 2005:12).

Estudios previos han encontrado que los ciudadanos con más bajos niveles de confianza en los partidos políticos son menos propensos a participar en las elecciones o en las actividades de campaña; los que no confían en los partidos tienen menos incentivos para participar justamente de las actividades que involucran a los partidos políticos. En consecuencia, estos ciudadanos son más propensos a buscar acceso a la política por medio de caminos no partidarios, como lo son el contacto directo con los políticos o la acción directa (marchas y protestas), o también pueden hacerlo a través del voto por opciones anti-partidos e incluso anti-sistemas (Blackelock 2006, Dalton 2006). En casos extremos, aquellos que menos confían en los partidos políticos tienden a apoyar medidas no-convencionales de participación política (incluyendo formas ilegales de participación). Además, la desconfianza en los partidos aumenta la volatilidad electoral (Dalton y Weldon 2005), lo que en algunos casos puede llevar a inestabilidad política y problemas de gobernabilidad.

Los partidos políticos son la institución que menos confianza recibe en el mundo. Según la Encuesta Mundial de Valores (WVS, por sus siglas en inglés), los partidos políticos son las institución política en la que los ciudadanos depositan menos confianza. En una escala de 0 a 4, donde 0 representa “nada” de confianza y 4 representa “mucho”, el valor promedio de confianza en los partidos políticos es 2.08. Para las demás instituciones los niveles de confianza son los siguientes: sindicatos 2.25, parlamentos 2.32, prensa 2.39, gobierno 2.40, la televisión 2.50, el sistema de justicia 2.51, la policía 2.56 y la iglesias 2.81 (Gráfico III-1). Estos datos corresponden a las cuatro olas consolidadas (World Values Survey 2005).

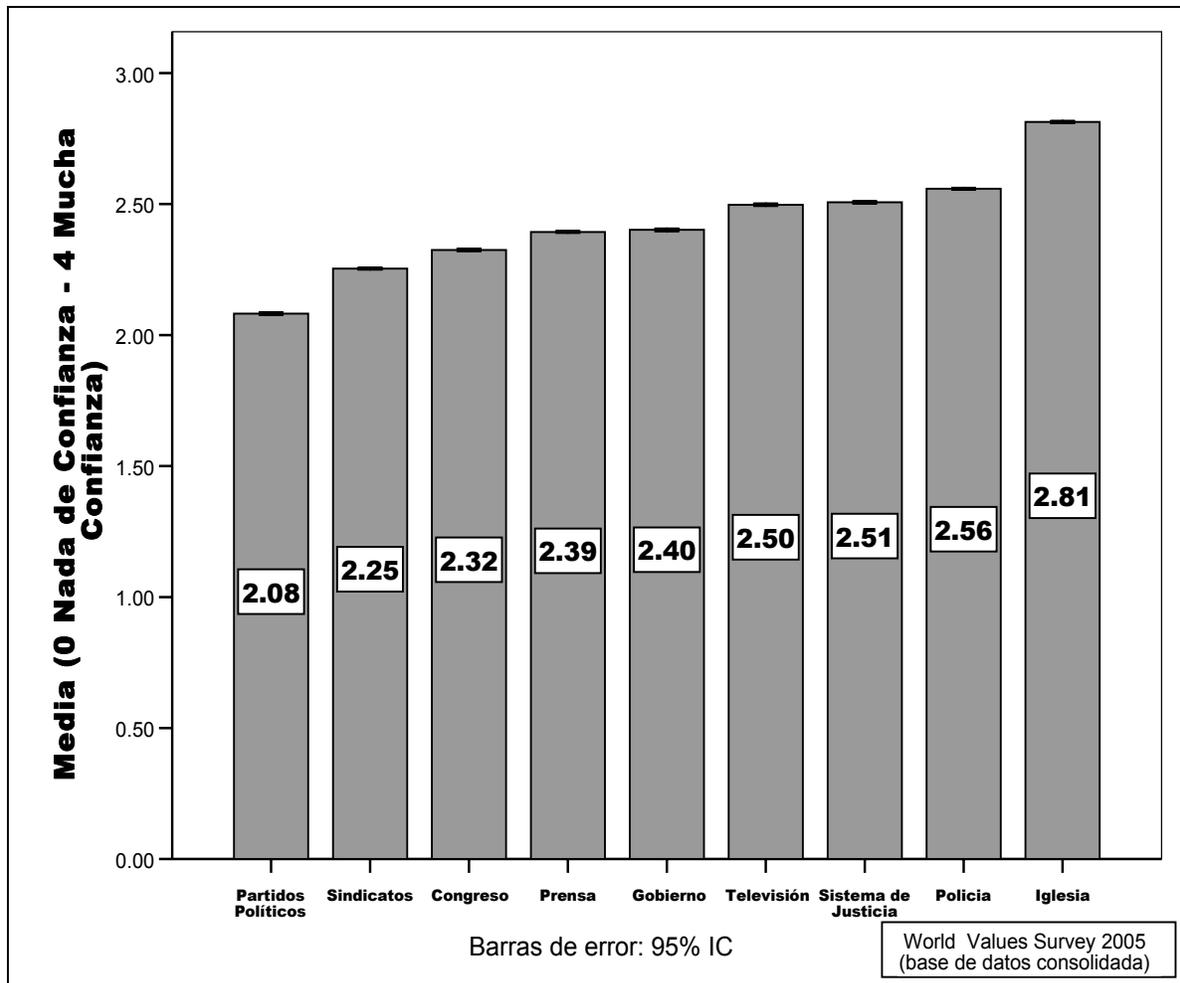


Gráfico III-1. Confianza en instituciones políticas en el mundo

La perspectiva de modernización cultural, que explica el debilitamiento de los lazos entre ciudadanos y partidos en el mundo industrializado, supone que la condición de altos niveles de desarrollo económico tiene que estar presente para que los valores y actitudes menos favorables hacia los partidos ocurran (Dalton 2006, Dalton y Wattenberg 2000, Dalton y Weldon 2005, Inglehart y Welzel 2005). La realidad latinoamericana, sin embargo, socava los postulados de esta teoría a su nivel fundamental: en América Latina y el Caribe, donde no se ha experimentado el desarrollo económico que ha tenido lugar en otras regiones, los vínculos entre ciudadanos y partidos son los más débiles en lo que refiere a confianza (Gráfico III-2). Se hace evidente, entonces, que el enfoque ensayado para las democracias industrializadas no es la explicación global a la debilidad de los vínculos entre ciudadanos y partidos. ¿Qué explica, entonces, los más bajos niveles de confianza en los partidos políticos? ¿A través de qué otras manifestaciones puede evaluarse la fortaleza de los vínculos entre ciudadanos y partidos?

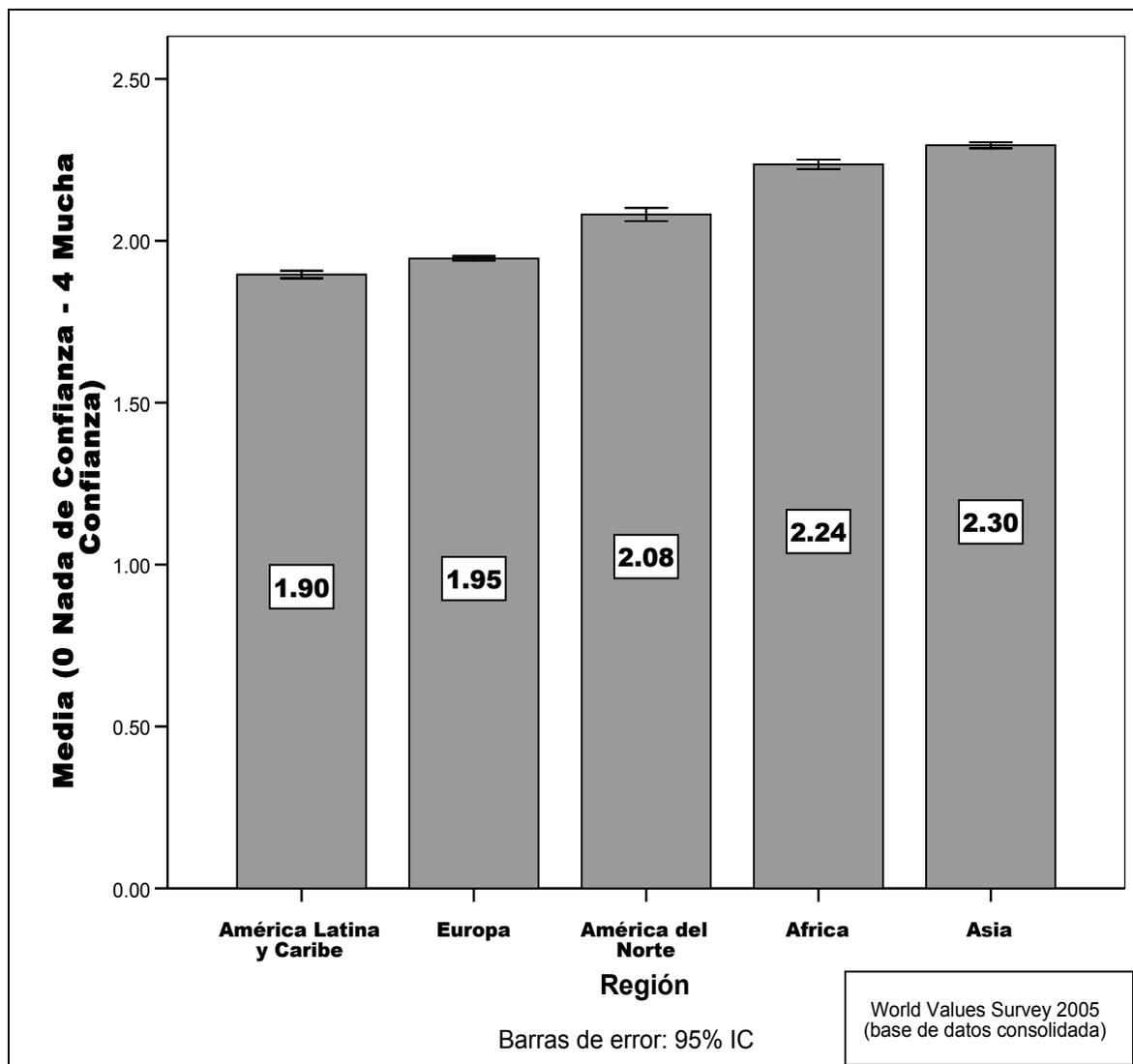


Gráfico III-2. Confianza en los partidos políticos en el mundo

La confianza en las instituciones políticas es muy baja en general en toda la región, en especial comparada con la confianza en las instituciones no-políticas, como la Iglesia, los medios de comunicación y los militares (Gráfico III-3). En cada uno de los países, los entrevistados fueron consultados hasta qué punto confiaban en cada una de las instituciones, pidiéndoles que indicaran el número que mejor describía su posición en una escala de uno a siete, en la que uno significaba nada de confianza y siete mucha confianza. Para facilitar el análisis, las respuestas a esas preguntas se convirtieron a una escala de cero a 100, en la que también el valor más bajo, cero, significa nada de confianza y el más alto, 100, mucha confianza. Valores superiores a 50 indican que los ciudadanos confían relativamente en la institución, ya que manifiestan, en promedio, niveles de confianza superiores a la mitad de la escala.

El Gráfico III-3 presenta los valores promedio de confianza en cada una de las instituciones para todos los países de la región. Ninguna de las instituciones políticas recoge una confianza promedio superior a la mitad de la escala (indicada por la línea horizontal al nivel 50

de confianza) y los partidos políticos se encuentran en la peor de las posiciones. No sólo son la institución en la que menos confían los habitantes de América Latina y el Caribe en su conjunto; los partidos son la institución que menos confianza inspiran en cada uno de los países (excepto en México y Venezuela, donde son la segunda institución menos confiada, luego de la Policía).

La segunda institución que menos confianza despierta, el cuerpo legislativo, está íntimamente asociada con los partidos políticos, ya que es el ámbito de acción de estos. De hecho, la correlación entre los niveles de confianza en las dos instituciones es relativamente elevado (Coeficiente de correlación de Pearson .508 significativa al nivel .000 para el conjunto de la muestra), lo que sugiere que los niveles de confianza en una y otra están vinculados.

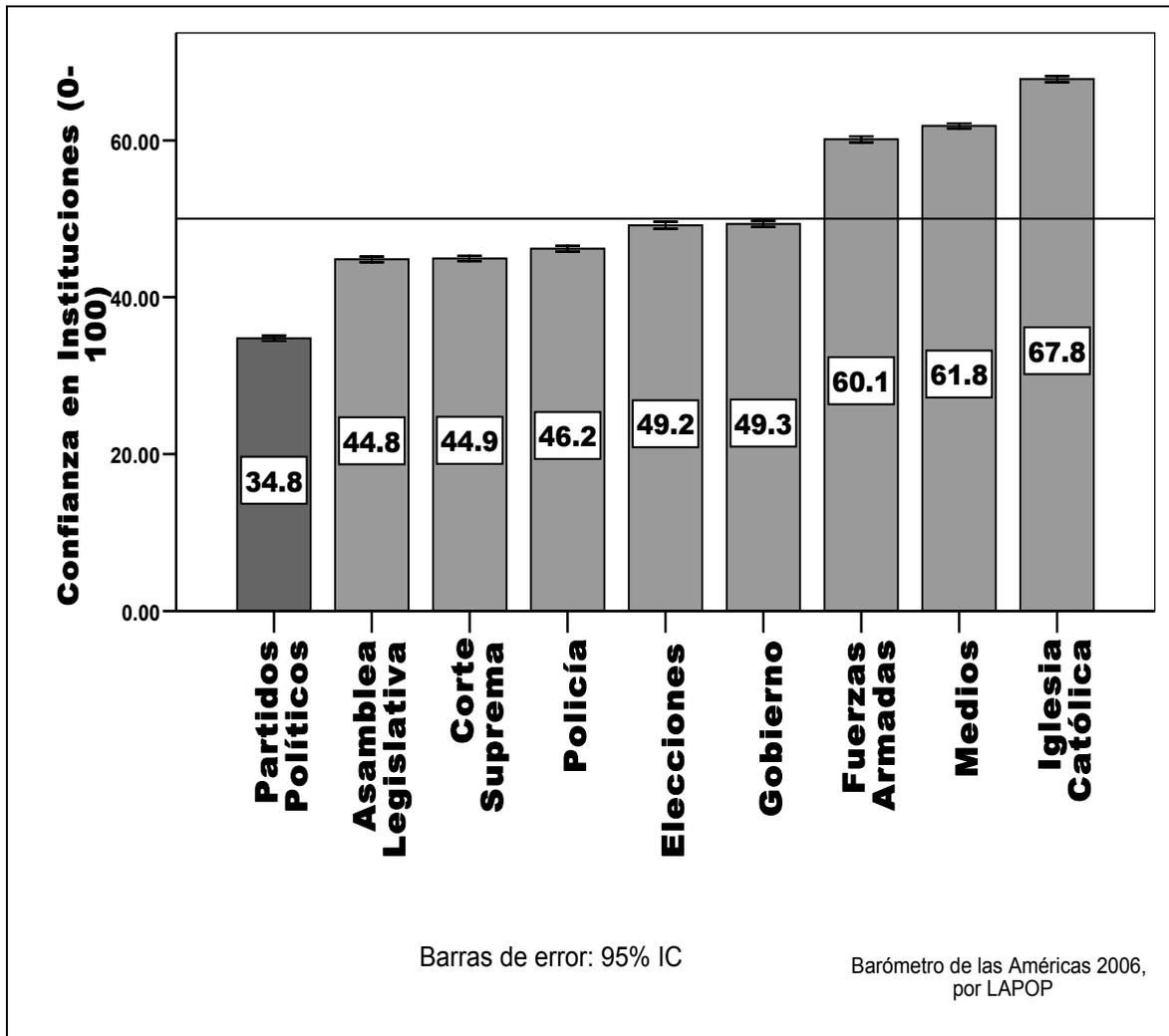


Gráfico III-3. Confianza en las instituciones en América Latina y El Caribe
¿Hasta qué punto confía en...? (0 Nada, 100 Mucho) Promedios por institución.⁵

⁵ Los valores del Gráfico III-3 representan el promedio de confianza en cada institución en toda la región (los casos están ponderados por país, para que todos los países tengan el mismo tamaño de la muestra y por esto tienen el mismo peso en cualquier análisis de promedios). Corresponde mencionar que no todas las preguntas sobre confianza

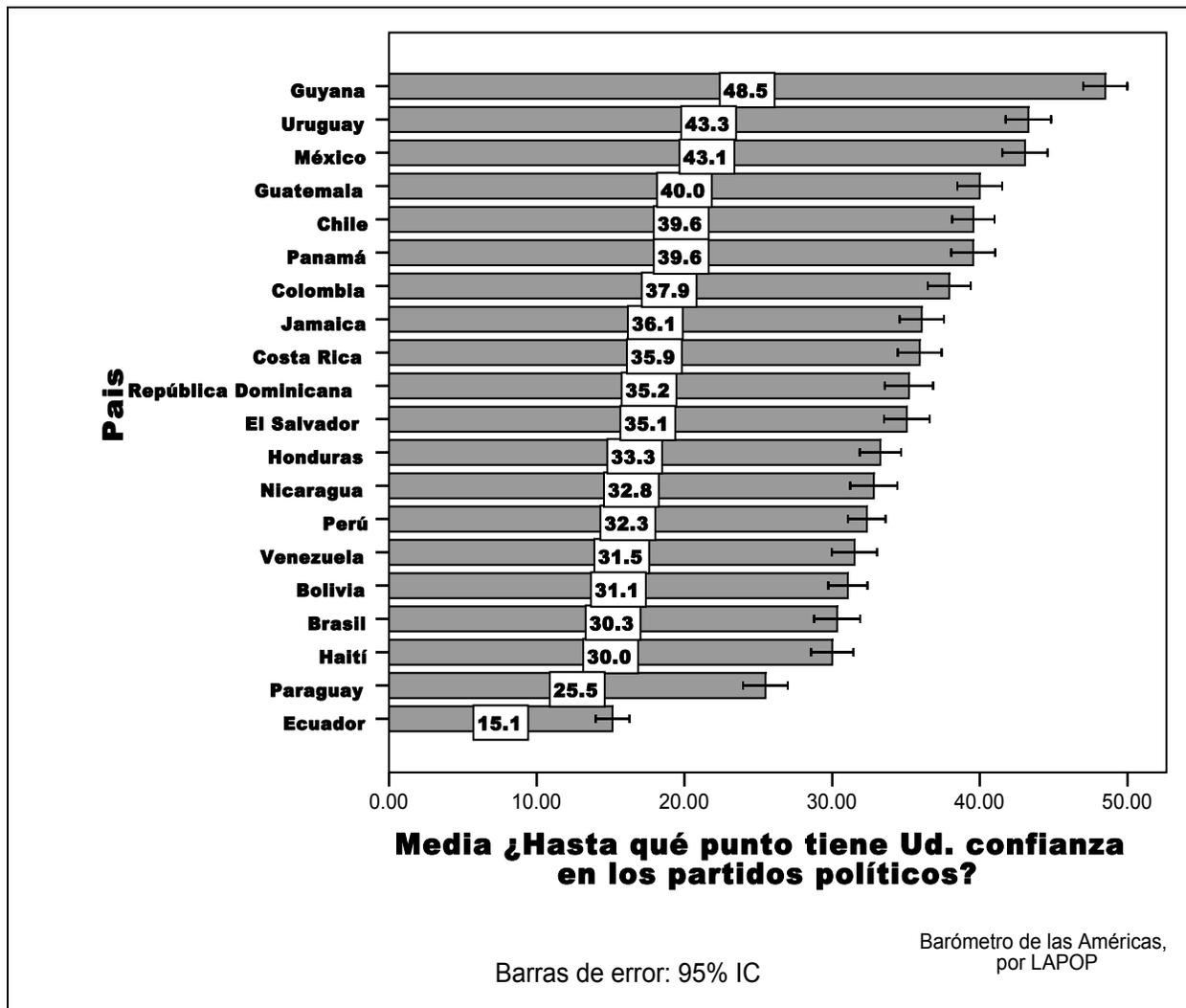


Gráfico III-4. Confianza en los partidos políticos, por país

¿Cuáles son las explicaciones de la baja confianza generalizada en los partidos políticos en la región? Hay, al menos, dos claras líneas de interpretación. La primera apunta directamente al pobre desempeño de éstos, y es una explicación que surge incluso en círculos partidarios (Achard y González 2004) y que también se expresa en el diagnóstico académico de los partidos como organizaciones que no funcionan bien ni a su interior ni en su relación con los demás actores relevantes de la sociedad (Córdova Macías 2004). Por otra parte, están las expectativas insatisfechas de los ciudadanos, que canalizan hacia los partidos, la cara visible del gobierno democrático, sus frustraciones. En lo que han llamado “la paradoja centroamericana,” pero que

en las instituciones fueron formuladas en todos los países, por lo tanto algunos de los valores aquí presentados no son representativos del total de los países incluidos en la Ronda 2006 del Barómetro de las Américas. En particular, confianza en las elecciones excluye México, Bolivia, Chile, República Dominicana y Haití; confianza en las Fuerzas Armadas excluye los países en donde no hay ejércitos, o sea Costa Rica, Panamá y Haití; finalmente, la pregunta sobre confianza en el gobierno excluye Bolivia.

ciertamente puede extenderse hacia toda la región, Achard y González (2004: 127) señalan que pese a que hoy en día hay más democracia que antes, los ciudadanos están menos satisfechos con sus frutos, las instituciones en general y los partidos políticos en particular. De acuerdo a esta tesis, las expectativas ciudadanas han crecido -en ciertos casos alimentadas por las promesas irrealizables de los partidos políticos- más allá de las posibilidades reales de los sistemas de satisfacerlas. Eso ha llevado a la creciente desilusión con el sistema en general y con los partidos en particular. En el mismo sentido, Paramio (1999:12) sostiene que “la frustración de las expectativas de los electores parece un factor decisivo a la hora de explicar la baja valoración de la política partidaria”.

Ahora bien, ¿cuáles son los factores más importantes que afectan la confianza en los partidos políticos? ¿Es posible encontrar regularidades en la región a pesar de las diferencias entre los países? En la literatura clásica sobre confianza en el gobierno, la percepción de eficacia de las instituciones juega un papel importante: cuando los ciudadanos perciben que sus gobernantes están realizando un buen trabajo depositan más confianza en ellos. En el mismo sentido actúan las percepciones sobre la marcha de la economía (Hetherington 1998, Hetherington 2005). En consecuencia, resulta imperativo analizar el impacto de las opiniones de los ciudadanos en ambas dimensiones a la hora de estimar los determinantes de la confianza en los partidos.

Estudios previos que incluyeron preguntas sobre eficacia gubernamental indagaron en las opiniones de los ciudadanos sobre la eficacia del gobierno en las áreas que los ciudadanos previamente habían definido como más importantes (Hetherington 1998, Muller et al. 1991). El Barómetro de las Américas formuló en su ronda 2006/07 una serie de preguntas acerca de las *percepciones sobre la eficacia del gobierno*, preguntando a los entrevistados directamente (y con independencia de sus previas respuestas sobre los problemas más importantes) hasta qué punto creían que el gobierno actual combate la pobreza, promueve y protege los principios democráticos, combate la corrupción en el gobierno, protege los derechos humanos, mejora la seguridad ciudadana y combate el desempleo. Para cada una de estas actividades se pidió a los encuestados que indicaran su opinión con un número en una escala de uno a siete en la que uno significa nada y siete significa mucho. Siguiendo la práctica usual de LAPOP para uniformizar las escalas, las respuestas se reescalaron en un continuo de cero a 100 para facilitar el análisis.

Para medir el efecto de la evaluación de desempeño del gobierno en materia económica sobre la confianza en los partidos se utilizan dos medidas alternativas: la evaluación de la situación económica del país o sociotrópica y la evaluación de la situación económica familiar, o del “propio bolsillo” (Kinder y Kiewiet 1981). Es de esperar que en ambos casos percepciones más favorables de la economía lleven a más confianza.⁶

⁶ Se preguntó a los encuestados si calificarían--tanto la situación económica del país como su situación económica familiar-- como muy buena, buena, ni buena ni mala, mala o muy mala. A efectos de facilitar el análisis de los datos, en este capítulo se han codificado las respuestas para que los valores más altos correspondan a percepciones más favorables. De este modo, ambas variables varían entre uno y cinco (uno refleja una evaluación “muy mala,” y cinco una “muy buena”).



La cercanía de los ciudadanos hacia los partidos políticos también debería tener un impacto positivo en el nivel de confianza en ellos. En particular, se espera que la identificación con un partido político afecte positivamente la confianza en los partidos todos, ya que si hay una “orientación afectiva” hacia los partidos que tiene su base en la identificación psicológica con ellos (Campbell et al. 1960: 121) debería haber un vínculo de confianza subyacente. En consecuencia, es de esperar que la identificación con algún partido político (operacionalizada en una respuesta positiva a la pregunta “¿En este momento, simpatiza con algún partido político?”) esté asociada con mayores niveles de confianza.

Estudios previos sugieren que la confianza en las instituciones políticas se relaciona con los niveles de confianza interpersonal (Inglehart 1990, Inglehart and Welzel 2005, Putnam 1993); los vínculos que se desarrollan gracias a los lazos de confianza interpersonal en la comunidad incidirían positivamente en el nivel de confianza hacia el sistema todo. En consecuencia, resulta pertinente indagar los efectos de la confianza interpersonal sobre la confianza en los partidos políticos. El Barómetro de las Américas 2006/07 preguntó a los entrevistados: “¿Hablando de la gente de aquí, diría que la gente de su comunidad es muy confiable, algo confiable, poco confiable o nada confiable?” Las respuestas han sido ordenadas en una escala de uno (nada confiable) a cuatro (muy confiable).

En el mismo sentido, actitudes favorables al sistema político en general deberían estar asociadas a actitudes favorables también hacia las instituciones (Easton 1965, Mueller et al. 1982, Seligson 2002a), por lo que es de esperarse una relación positiva entre el nivel de apoyo al sistema político y la confianza en los partidos. La variable que captura apoyo al sistema político recoge las respuestas a la pregunta “¿Hasta qué punto cree que se debe apoyar al sistema político del país?”, ordenadas en una escala de cero (nada) a 100 (mucho).

Según varios observadores, el sentimiento anti-partidos se explica en parte por el rechazo a las prácticas corruptas a las que los partidos políticos son asociados (Achard y González 2004, Córdova Macías 2004, Dinerstein 2003). En tal sentido, cabe esperar menos confianza en los partidos entre aquellos que los perciben como corruptos. Lamentablemente no se cuenta con datos sobre percepción de corrupción en los partidos políticos en particular. Sin embargo, sí tenemos una medida directa de la experiencia de corrupción de los individuos. Seligson (2002b) encontró que las experiencias directas de corrupción tienen un impacto negativo sobre el apoyo al sistema político, y el mismo tipo de relación negativa es de esperar respecto a la confianza en los partidos políticos. En la ronda 2006-07 del Barómetro de las Américas se preguntó a los ciudadanos por su experiencia en cuanto a ser víctimas de intento de soborno por parte de la policía, de algún empleado público, en la municipalidad, en el trabajo, en los juzgados, en el dispensario de salud, y en la escuela o colegio. Como medida resumen de las respuestas a estas preguntas se crea el “Índice total de victimización de corrupción” que varía entre cero y cinco (la distribución inicial de cero a siete se reescala para facilitar el análisis).

El reclamo de “que se vayan todos” se manifestó con la gente en las calles pidiendo la retirada de escena de los políticos. El movimiento que comenzó en Argentina se repitió luego en Bolivia y Ecuador, en lo que se convirtió en una forma no convencional de presión para el recambio de autoridades. En consecuencia, cabe preguntarse si la participación en protestas públicas está relacionada con los niveles de confianza en los partidos políticos. A la luz de la

experiencia del “que se vayan todos” debería esperarse menor confianza en los partidos políticos entre aquellos más propensos a participar de las protestas. La ronda 2006/07 consultó a los entrevistados sobre su experiencia de participación en protestas públicas; las respuestas se ordenaron en una escala de uno (nunca participó de una protesta) a tres (algunas veces participó).

Por último, es necesario controlar el impacto que las características demográficas y socioeconómicas (como sexo, edad, educación y riqueza) de los individuos puedan tener sobre actitudes hacia los partidos políticos. Resulta también pertinente controlar el impacto que el nivel de conocimiento político y la autoubicación ideológica (en la escala izquierda-derecha) puedan tener. Por último, la evidencia disponible en el contexto norteamericano sugiere que la exposición a medios masivos de comunicación, en especial a las noticias en la televisión afecta negativamente los niveles de confianza (Hetherington 1998), y en consecuencia se incluyen variables sobre recepción de noticias en radio, televisión, diarios e Internet para controlar por este factor. Con la intención de evaluar si hay diferencias significativas entre países, se incluyen en el análisis variables “dummy” para cada país excepto México, que se toma como categoría de referencia.

Cuando atendemos a la región en su conjunto son varios los factores que afectan la confianza en los partidos (Tabla III-2). De acuerdo a los resultados de la regresión lineal, eficacia del gobierno en combate a la pobreza, lucha contra la corrupción, reducción del desempleo, mejoramiento de la seguridad y promoción de la democracia, autoidentificación o simpatía partidaria, confianza interpersonal, apoyo al sistema político y experiencia de victimización de corrupción son todas variables estadísticamente significativas. De las variables de control, sólo la ideología, la riqueza y la exposición a noticias en la radio tienen impacto estadísticamente significativo (aunque sustantivamente muy pequeño) sobre la confianza en los partidos. Las diferencias entre países en relación a México, la categoría de referencia, son tanto estadística como sustantivamente significativas en la mayoría de los casos.

Como se esperaba, el apoyo general al sistema y la confianza interpersonal están positivamente relacionados con la confianza en los partidos políticos. Con un coeficiente de 0.210, un cambio radical en apoyo al sistema (0 a 100 puntos) produce un aumento de 21 puntos en la escala de confianza a los partidos. Este es el mayor efecto posible que podemos encontrar. Claro, en este punto cabe preguntarse sobre la dirección causal de la relación; ¿es el apoyo a los partidos motivado por el apoyo al sistema, o es en realidad el apoyo al sistema un producto derivado de la confianza en los partidos políticos? Resulta muy difícil desentrañar aquí esta cuestión, y en todo caso hay justificaciones teóricas para esperar relaciones causales en ambos sentidos (que probablemente se refuerzan mutuamente). En todo caso el resultado incontestable es que en la región confianza en los partidos políticos y apoyo al sistema político del país corren juntos, en una misma dirección. Como señalan Mainwaring y Scully (1995:24), para que los ciudadanos confieran legitimidad a su gobierno deben creer que ese gobierno —a través de los partidos— cuando menos intenta representar a la sociedad.

También de acuerdo a las expectativas, la simpatía por un partido político está asociada con mayores niveles de confianza en los partidos como institución. Sin embargo, el impacto no es dramático: la confianza entre los que simpatizan en los partidos es, en promedio, 5.8 puntos mayor que entre los que no.



Del lado de las variables que afectan negativamente los niveles de confianza, la experiencia con episodios de corrupción es la que tiene el mayor impacto significativo: (-1.903), lo que implica que, como se esperaba, a mayor exposición a la corrupción, menor la confianza en los partidos. El impacto de la experiencia de corrupción puede ser una reducción de hasta 10 puntos en el nivel de confianza en los partidos.

Tabla III-2. Regresión lineal en confianza en partidos políticos en América Latina y el Caribe (*)

	B	Error Estándar
Evaluación situación económica del país	.425	.268
Evaluación situación económica familiar	.046	.293
Eficacia gobierno combatiendo la pobreza	.052***	.011
Eficacia gobierno promueve democracia	.036**	.012
Eficacia gobierno combate la corrupción	.080***	.011
Eficacia gobierno protege derechos humanos	-.003	.011
Eficacia gobierno mejora la seguridad	.093***	.011
Eficacia gobierno combate el desempleo	.073***	.011
Simpatiza con un partido político	5.846***	.453
Confianza interpersonal	1.582***	.235
Apoyo al sistema político	.210***	.008
Índice total de victimización de la corrupción	-1.903***	.284
Participación en protestas públicas	.328	.313
Conocimiento político	-4.5E-005	.002
Auto-ubicación ideológica	.247**	.084
Sexo (mujer)	.577	.428
Edad	.014	.015
Educación	-.055	.062
Riqueza (posesión de bienes de capital)	-.436***	.131
Noticias por la radio	.551**	.195
Noticias en TV	-.62	.250
Noticias periódicos	.148	.227
Noticias en Internet	-.15	.326
Guatemala	4.017***	1.241
El Salvador	-5.325***	1.131
Honduras	-5.542***	1.166
Nicaragua	-2.846*	1.179
Costa Rica	-7.604***	1.144
Panamá	3.160**	1.198
Perú	-3.391**	1.121
Chile	-3.187**	1.112
República Dominicana	-13.336***	1.126
Haití	-2.684	1.396
Jamaica	-1.735	1.304
Guyana	9.997***	1.271
Uruguay	-10.422***	1.188
Venezuela	-7.039***	1.141
Constante	6.537***	1.781
R cuadrado ajustado	.230	
ANOVA (sig)	.000	
Significancia $p < .05$ (*), $p < .01$ (**), $p < .001$ (***) (*) Los casos correspondientes a Colombia, Ecuador, Bolivia, Brasil y Paraguay se han excluido debido a falta de información (algunas de las preguntas que involucran las variables independientes no fueron formuladas en estos países).		



Contrariamente a las expectativas, la evaluación del gobierno en cuanto al desempeño de la economía (tanto a nivel del país como familiar) no tiene un impacto significativo sobre la confianza en los partidos, y la percepción de eficacia gubernamental (aunque estadísticamente significativa) no altera en forma sustantiva los niveles de confianza en los partidos. También contrariamente a las expectativas, la participación en protestas públicas no tiene efectos sobre la confianza en los partidos políticos, lo que sugeriría que el “que se vayan todos” encarna un tipo especial de conducta hacia los partidos: no todos los que participan en protestas o manifestaciones públicas en la región sustentan la misma visión de los partidos, o al menos, la participación en estos eventos no implica niveles significativamente menores de confianza en los partidos políticos. Ni la exposición a medios (salvo a noticias en la radio, aunque con un impacto sustantivo menor), ni los niveles de conocimiento político se relacionan, de acuerdo a este modelo, con la confianza en los partidos. Finalmente, ninguna de las características sociodemográficas de los entrevistados (a excepción de la riqueza medida en cantidad de bienes de capital, aunque con un impacto sustantivo marginal) afectaría significativamente las actitudes hacia los partidos en materia de confianza.

Las diferencias entre países (en relación a México, la categoría de referencia) son estadística y sustantivamente significativas: el nivel de confianza en los partidos políticos varía según el país de origen (una vez más, en relación a México) cuando se mantienen constantes los determinantes actitudinales y de control sociodemográficos.

La relativamente baja capacidad predictiva del modelo aquí presentado (R cuadrado ajustado de 0.230) sumada a las variaciones por país sugiere que tal vez haya factores de fondo, de corte nacional -tal vez incluso idiosincrásicos- que contribuyan a explicar la confianza hacia los partidos con mayor nivel de detalle. La diferencia en los niveles de confianza en los partidos políticos entre los países no ameritaba un análisis de multi-nivel, menos aún cuando no era claro que una sola variable a nivel de país pudiera explicar la varianza. Sin embargo, para futuras investigaciones parece pertinente considerar la necesidad de explorar la influencia de los marcos institucionales (formales, como las reglas electorales, e informales, como la dinámica de la competencia interpartidaria) en la determinación de las actitudes, en particular la confianza, hacia los partidos.

Partidos políticos y consolidación democrática en la región

¿Cuáles son las implicaciones para las democracias de la región de la evidencia hasta ahora discutida? De acuerdo a la visión ciudadana, los partidos políticos de la región no se están desempeñando adecuadamente. Como se vio en la segunda sección, si bien la debilidad en los vínculos entre ciudadanos y partidos en cuanto a confianza es una tendencia mundial, es particularmente severa en el caso de América Latina y el Caribe donde, además, las democracias se encuentran aún en proceso de consolidación.

Los partidos políticos no están cumpliendo su rol en la provisión de “atajos de información” a la hora de definir el voto; apenas un quinto de los habitantes de la región se basa en razones partidarias a la hora de escoger presidente (y la proporción de ciudadanos que votan por razones partidarias puede ser tan baja como 4 por ciento, en el caso de Venezuela). En este

sentido, los partidos están fallando en proveer alternativas significativas para la conducción del gobierno, y en consecuencia están cumpliendo deficitariamente su tarea fundamental de representación. Para que la representación sea ejercida eficazmente, la institucionalización de los partidos políticos es condición necesaria, como apunta Paramio, “porque sin ella no existe una estructura de incentivos [ni para los partidos ni para los ciudadanos] que conduzca a la representación democrática” (Paramio 1999:14).

Un sistema de partidos institucionalizado implica estabilidad en la competencia interpartidaria, existencia de partidos con raíces estables en la sociedad, aceptación de los partidos y elecciones como las instituciones legítimas para acceder al poder y la existencia de organizaciones partidarias razonablemente estructuradas (Mainwaring y Scully 1995:1). Cuando los sistemas de partidos están poco institucionalizados, hay mayor espacio para la emergencia de propuestas populistas y apelaciones personalistas; como los políticos dependen directamente de las masas, una vez en el poder pueden estar tentados a implementar las políticas que más popularidad les reporten en el corto plazo, en oposición a medidas de largo alcance, potencialmente más favorables para el país (Mainwaring y Scully 1995:22).

La confianza en los partidos políticos es un factor central en las perspectivas de institucionalización de los sistemas de partidos. Si no reciben la confianza de los ciudadanos, es muy difícil que los partidos puedan desarrollar vínculos estables o que sean aceptados como instituciones legítimas en la competencia por el poder. Si, como observan Dalton y Weldon (2005), la desconfianza en los partidos lleva a mayor volatilidad electoral, los sistemas de partidos no se volverán estables a menos que los ciudadanos confíen en ellos. En este sentido, la confianza en los partidos políticos no sería solamente una dimensión de la institucionalización del sistema sino una *condición* para alcanzarla.

¿Cuáles son, entonces, las perspectivas para los sistemas de partidos de la región ante tan bajos niveles de confianza? Pese al panorama desalentador en relación a la confianza, en la mayoría de los países hay una reserva de apoyo. La ronda 2006/07 del Barómetro de las Américas preguntó a los ciudadanos su opinión acerca de la centralidad de los partidos para la democracia. Se pidió a los entrevistados que indicaran su nivel de acuerdo con la frase “Puede haber democracia sin que existan partidos políticos”. Las respuestas (originalmente emitidas en una escala de uno a siete, donde uno significa muy en desacuerdo y siete muy de acuerdo con la afirmación) fueron invertidas, de modo que valores más altos reflejaran actitudes más favorables a los partidos. Siguiendo el procedimiento usual de LAPOP, la variable original se reescaló a un rango de cero a 100. Lo que esta variable representa es la creencia de los ciudadanos en la *necesidad de los partidos para la democracia*; los valores más bajos (cerca de cero) indican actitudes menos favorables a los partidos (o mayores niveles de acuerdo con que la democracia puede prescindir de ellos), mientras que los valores más altos (cerca de 100) reflejan actitudes más positivas hacia los partidos (rechazo a la posibilidad de democracia sin partidos políticos)⁷.

⁷ Esta alteración de la forma de medición original no cambia en absoluto la distribución sustantiva de las preferencias de los entrevistados, su único propósito es facilitar el análisis y la comparabilidad con otras variables medidas con la misma escala.

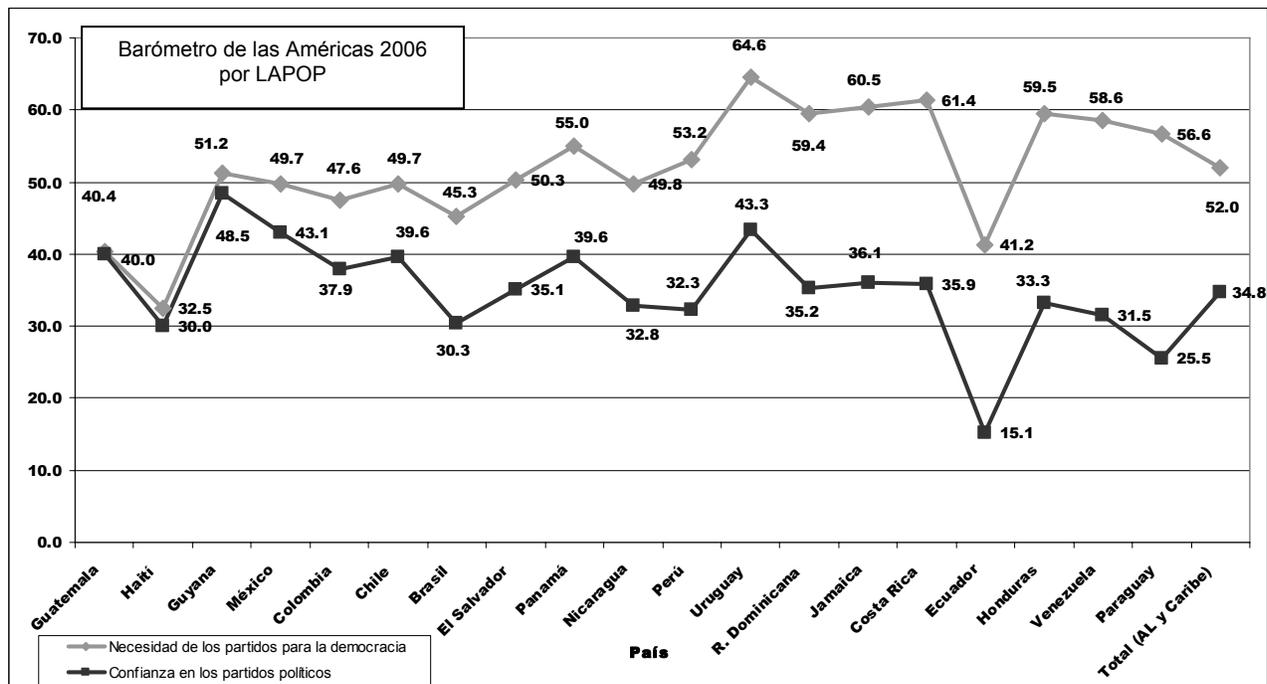


Gráfico III-5. Necesidad de los partidos para la democracia y confianza en los partidos políticos

El Gráfico III-5 muestra los valores de esta variable para cada país (línea gris), junto a los promedios de confianza en los partidos (línea negra). Tanto la confianza en los partidos como centralidad de los partidos para la democracia se presentan en el Gráfico III-5 en una escala de cero a 100, y para las dos variables valores más altos reflejan actitudes más positivas a los partidos (más confianza en un caso, mayor rechazo a la posibilidad de que exista democracia sin partidos, en el otro). Los valores reportados son los promedios por país (para todos los países en los que se formularon las dos preguntas) y para el conjunto de la región. La utilización de la misma escala para las dos variables permite su comparabilidad directa y facilita la interpretación de las diferencias entre ambas, representada por la brecha entre los valores de las dos líneas.

En la región en su conjunto, así como en la mayoría de los países, el rechazo a la democracia sin partidos supera significativamente los niveles de confianza. En promedio, son más los ciudadanos que apoyan con mayor convicción la centralidad de los partidos para la democracia que los que manifiestan confiar en ellos. Las diferencias entre confianza en los partidos y creencia de que los partidos son centrales para la democracia sugiere que el desdén por los partidos es *coyuntural*. Serían los *partidos tal cual funcionan actualmente* y no el rechazo a ellos en tanto institución lo que mantiene a los ciudadanos alejados de los partidos.

Este desfase entre baja confianza en los partidos y relativamente más alto rechazo a la democracia sin ellos parece reflejar un desequilibrio entre la oferta y la demanda de instituciones democráticas (Bratton 2005: 28). Bratton señala que para el afianzamiento de las democracias es necesario que las demandas populares sean equiparadas por la oferta de instituciones democráticas, principalmente por parte de las élites; la consolidación democrática se alcanzaría cuando el equilibrio se produce a altos niveles de oferta y demanda. En el caso de los partidos

políticos, la situación óptima sería que la confianza aumentara al nivel de las expectativas sobre la centralidad de los partidos para la democracia.

El rechazo a la democracia sin partidos políticos, no obstante, no es abrumador. El promedio para la región es de 52 puntos, en la mitad de la escala; y para los países individualmente considerados varía entre 33 puntos en Haití y 65 en Uruguay. Sin embargo, en la mayoría de los casos el rechazo a la democracia sin partidos supera a la confianza, lo que indicaría que los partidos tienen oportunidad de recobrar terreno si mejoran su imagen y desempeño. Idealmente, acciones que apunten a elevar la confianza del público en los partidos conllevarían a una visión más favorable de los partidos en tanto actores necesarios para la democracia, en una dinámica en que el apoyo específico a los partidos podría alimentar el apoyo difuso a las instituciones de democracia representativa (Easton 1965), fortaleciendo de este modo el proceso de consolidación democrática en la región.

Las democracias de la región (como todas las democracias contemporáneas) necesitan de los partidos para su funcionamiento adecuado ya que fueron diseñadas para operar bajo principios representativos a través de canales institucionalizados para ello. En la mayoría de los países de América Latina y el Caribe los agentes de esa representación, los partidos políticos, no están cumpliendo la función de acuerdo a las expectativas de los ciudadanos. Sin embargo, la evidencia sugiere que si los partidos mejoraran su desempeño (fundamentalmente ganando en confianza ciudadana) hay entonces posibilidades para que la representación partidaria se vigore, contribuyendo al fortalecimiento de las democracias de la región. En tal sentido, “que se vayan todos” no significaría un rechazo incondicional a los partidos políticos sino, probablemente, sólo a los actores contemporáneos.



Referencias

- Achard, Diego; Luis E. González. "Bringing All Voices Together: The State and Prospects for Political Parties Central America, Panama and the Dominican Republic." In *A Challenge for Democracy. Political Parties in Central America, Panama and the Dominican Republic*, edited by Diego Achard; Luis E. González. Washington, D.C.: Inter-American Development Bank, International IDEA, Organization of American States, United Nations Development Program, 2004.
- Blakelock, Paul. "Changing Trust: Individual-Level Assessments of Political Legitimacy." Ph.D., University of Houston, 2006.
- Bonnet, Alberto R. *Que Se Vayan Todos. Crisis, Insurrección Y Caída De La Convertibilidad* [cited Enero 2007]. Available from http://www.geocities.com/economistas_de_izquierda/albertobonnet_quesevayantodos.PDF.
- Bratton, Michael; Robert Mattes; E. Gyimah-Boadi. *Public Opinion, Democracy and Market Reform in Africa*: Cambridge University Press, 2005.
- Campbell, Angus; Philip E. Converse; Warren Miller; Donald Stokes. *The American Voter*. Chicago: The University of Chicago Press, 1960.
- Córdova Macías, Ricardo. "The Crisis of Political Parties in Latin America." In *A Challenge for Democracy. Political Parties in Central America, Panama and the Dominican Republic*, edited by Diego Achard; Luis E. González. Washington, D.C.: Inter-American Development Bank, International IDEA, Organization of American States, United Nations Development Program, 2004.
- Dalton, Russell J. *Citizens Politics. Public Opinion and Political Parties in Advanced Industrial Democracies*. Fourth ed. Washington, D.C: CQ Press, 2006.
- Dalton, Russell J.; Martin P. Wattenberg. "Unthinkable Democracy. Political Change in Advanced Industrial Democracies." In *Parties without Partisans. Political Change in Advanced Industrial Democracies* edited by Russell J Dalton; Martin P. Wattenberg. Oxford and New York: Oxford University Press, 2000.
- Dalton, Russell J.; Steven A. Weldon. "Public Images of Political Parties: A Necessary Evil?" *West European Politics* 28, no. 5 (2005): 931-51.
- Dinerstein, Ana C. "¡Que Se Vayan Todos! Popular Insurrection and the Asambleas Barriales in Argentina." *Bulletin of Latin American Research* 22, no. 2 (2003): 187-200.
- Easton, David. *A Framework for Political Analysis*. New Jersey: Prentice-Hall, 1965.
- Giarraca, Norma. "Argentina 1991-2002: Una Década De Protesta Que Finaliza En Un Comienzo. La Mirada Desde El Interior Del País." *Argumentos* 1, no. 1 (2002): 1-8.
- González, Luis E. "Las Crisis Políticas De América Latina En Los Primeros Años Del Siglo." In *Política Y Desarrollo En Honduras, 2006-2009*, edited by Diego Achard; Luis E. González. Tegucigalpa: UNDP – ASDI – AECI – DFID, 2006.
- Hetherington, Marc J. "The Political Relevance of Political Trust." *American Political Science Review* 92, no. 4 (1998): 791-808.
- . *Why Trust Matters. Declining Political Trust and the Demise of American Liberalism*. Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2005.

- Inglehart, Ronald. *Culture Shift in Advanced Industrial Societies*. . New Haven: Princeton University Press, 1990.
- Inglehart, Ronald; Christian Welzel. *Modernization, Cultural Change and Democracy*: Cambridge University Press, 2005.
- Kinder, Donald R.; Roderick Kiewiet. "Sociotropic Politics: The American Case." *British Journal of Political Science* 11, no. 2 (1981): 129-61.
- Mainwaring, Scott; Timothy R. Scully. "Introduction. Party Systems in Latin America." In *Building Democratic Institutions. Party Systems in Latin America*, edited by Mainwaring Scott and Timothy R. Scully, 1-34. Stanford: Stanford University Press, 1995.
- Muller, Edward N.; Henry A. Dietz; Steven E. Finkel. "Discontent and Expected Utility of Rebellion: The Case of Peru." *The American Political Science Review* 85, no. 4 (1991): 1261-82.
- Muller, Edward N.; Thomas O. Jukam; Mitchell Seligson. "Diffuse Political Support and Antisystem Political Behavior: A Comparative Analysis." *American Journal of Political Science* 26, no. 2 (1982): 240-64.
- Paramio, Ludolfo. *La Democracia Tras Las Reformas Económicas En América Latina* Instituto de Estudios Sociales Avanzados (CSIC), 1999 [cited 2007]. Available from <http://www.iesam.csic.es/doctrab1/dt-9903.htm>.
- Payne, J. Mark et al. *Democracies in Development. Politics and Reform in Latin America*. Washington, D.C.: Inter-American Development Bank, Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2003.
- Payne, Mark J.; Daniel Zovatto; Mercedes Mateo Díaz. *La Política Importa. Democracia Y Desarrollo En América Latina*. Segunda Edición ed. Washington, DC: IADB - IDEA, 2006.
- Putnam, Robert D. *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton: Princeton University Press, 1993.
- Sartori, Giovanni. *Parties and Party Systems. A Framework for Analysis*. London New York Melbourne: Cambridge University Press, 1976.
- Schattschneider, E.E. *Party Government*. Edited by Phillips Bradley, *American Government in Action*. New York: Farrar and Rinehart, 1942.
- Seligson, Mitchell A. "The Impact of Corruption on Regime Legitimacy: A Comparative Study of Four Latin American Countries." *The Journal of Politics* 64, no. 2 (2002a): 408-33.
- . "Trouble in Paradise? The Erosion of System Support in Costa Rica, 1978-1999." *Latin American Research Review* 37, no. 1 (2002b): 160-85.
- Survey, World Values. *World Values Survey, Four-Waves Pooled Dataset 2005* [cited August 2006]. Available from www.worldvaluessurvey.org.

IV. Desempeño económico y apoyo al sistema: desafíos económicos a las democracias latinoamericanas

Vivian Schwarz-Blum*

Resumen

El objetivo de este estudio es determinar los efectos que las evaluaciones individuales del desempeño económico del gobierno en países latinoamericanos y del Caribe tienen sobre el apoyo al sistema y las diferencias entre países en cuanto al apoyo al sistema. El estudio emplea un análisis de regresión lineal para estimar los efectos de las evaluaciones individuales y un análisis mixto de multi-nivel para estimar el efecto de variables de nivel nacional sobre el apoyo al sistema. Los resultados revelan que, contrariamente a la evidencia obtenida para el caso de los países altamente industrializados, en este caso las evaluaciones individuales del desempeño económico del gobierno son un predictor importante del apoyo al sistema para los casos latinoamericanos y del Caribe analizados.

Desempeño económico y apoyo al sistema: desafíos económicos a las democracias latinoamericanas

El estudio de la estabilidad de las democracias ha generado teoría y evidencia empírica sustancial enfocada en la importancia del apoyo al sistema político para la estabilidad e incluso para la supervivencia de los regímenes democráticos. La dinámica de apoyo al sistema depende, en parte, de las relaciones entre el Estado y la ciudadanía de un país. El supuesto fundamental de esta relación sostiene que la ciudadanía tiene expectativas sobre el desempeño del Estado y que tal desempeño es evaluado por los ciudadanos individualmente. Una evaluación positiva o negativa resultaría en un sentimiento de satisfacción o insatisfacción con el desempeño del Estado, lo cual a su vez conduciría a la voluntad individual —o la falta de ella— de apoyar y confiar en el Estado y actuar en consecuencia, de manera cooperativa con las instituciones y regulaciones generadas desde el Estado.

Por su parte, una evaluación insatisfactoria resultaría en comportamiento poco cooperativo y en el cuestionamiento de las regulaciones y decisiones emanadas del Estado, lo cual puede debilitar e incluso desestabilizar al Estado si el sentimiento de insatisfacción es generalizado entre la ciudadanía.

* Vivian Schwarz-Blum es estudiante de doctorado en el programa de Ciencia Política de la Universidad de Vanderbilt y es parte del equipo de trabajo del Proyecto de Opinión Pública de Latinoamérica (LAPOP).

** Un agradecimiento especial a los profesores Mitchell A. Seligson y Jonathan Hiskey por sus valiosos consejos para la realización de este estudio. Agradezco también a mis compañeros del programa de doctorado y de LAPOP por sus sugerencias y consejos.



Con base en este razonamiento, estudiosos han encontrado que el apoyo al sistema político no solamente es un elemento importante en una democracia debido a su relevancia para la estabilidad del sistema democrático, sino que es un elemento vital del proceso político dado que “un sistema político democrático no puede sobrevivir por mucho tiempo sin el apoyo de la mayoría de sus ciudadanos” (Miller 1974).

Bajos niveles de apoyo al sistema han sido considerados como un factor amenazante para la estabilidad de las democracias porque las consecuencias de una insatisfacción a largo plazo con el gobierno puede generar, como sugiere Miller, “(...) sentimientos de vacíos de poder y de ausencia de regulaciones que muy probablemente son acompañados por sentimientos de hostilidad hacia líderes políticos y sociales, las instituciones del gobierno y el régimen en conjunto” (Miller 1974).

El efecto del desempeño del gobierno sobre los ciudadanos puede ser más importante y tener consecuencias más importantes de lo que muchas veces se supone. Bastian y Luckham sugieren que es necesario estudiar en profundidad los efectos de las democracias sobre la vida de los ciudadanos pues, contrariamente a la noción convencional, la democracia tiene “dos caras”: puede generar consecuencias negativas tanto como positivas, dependiendo del poder y del desempeño de los actores políticos, de los grupos de interés y de las condiciones económicas (Bastian and Luckham 2003). En función de dichos factores, las democracias pueden enfatizar las desigualdades sociales, marginar a las minorías o acrecentar los conflictos entre grupos sociales de igual manera que pueden incrementar la participación y la inclusión de grupos marginalizados en procesos políticos, crear políticas de inclusión social y mejorar la redistribución de recursos entre la población.

La insatisfacción con el desempeño del gobierno puede ser transformada en acción a nivel individual a través del apoyo que se le brinda al sistema. La confianza política juega un papel clave en la percepción de legitimidad de de las normas promulgadas por un gobierno y por lo tanto también en el nivel de apoyo que un individuo está dispuesto a darle al gobierno y al régimen.

Levi y Stoker (Levi and Stoker 2000) enfatizan la importancia de la relación entre la confianza política y aquello que es digno de confianza y las consecuencias políticas de la presencia o ausencia de dichos elementos en regímenes políticos. Su estudio se concentra en fenómenos en los cuales se refleja la confianza en el régimen, tales como la opinión pública, la participación política y su relación con la confianza, la confianza social y la cooperación y la obediencia ciudadana al gobierno en función de los niveles de confianza que recibe.

Este estudio concluye que la confianza es importante para el fortalecimiento de la legitimidad de los regímenes políticos. La consideración de que el gobierno o los políticos son dignos de confianza influye entre otras cosas a los niveles de participación política y a la probabilidad de que los individuos devengan políticamente activos, así como a sus preferencias electorales, niveles de cooperación social y apoyo individual a las políticas del gobierno y al régimen político.

Además del estudio de Levi y Stoker, varios estudios (Easton 1975; Easton 1976; Weatherford 1992; Hetherington 1998; Schwarz-Blum 2006) han proporcionado amplia evidencia de que la confianza política es una parte fundamental del apoyo al sistema. Bajo esta consideración, el instrumento de LAPOP para medir el nivel de apoyo al sistema en un país determinado está basado en un índice de 5 ítems que han sido estudiados y establecidos como válidos por académicos y estudiosos de la democracia y que intentan capturar el nivel de confianza que les merece a los entrevistados elementos centrales de su sistema político.

Estos ítems están medidos en una escala de 7 puntos que con el propósito de facilitar la comprensión del análisis ha sido transformada en una escala de rango 0 a 100, en la que un promedio cercano a 0 es indicador de un bajo nivel de apoyo al sistema y un promedio cercano a 100 es indicador de un alto nivel de apoyo al sistema.

Los ítems que conforman este índice están medidos a través de las siguientes preguntas:

Índice de Apoyo al Sistema
B1. ¿Hasta qué punto cree usted que los tribunales de justicia de (país) garantizan un juicio justo?
B2. ¿Hasta qué punto tiene respeto por las instituciones políticas de (país)?
B3. ¿Hasta qué punto cree usted que los derechos básicos del ciudadano está bien protegidos por el sistema político (país)?
B4. ¿Hasta qué punto se siente orgulloso de vivir bajo el sistema político (país)?
B6. ¿Hasta qué punto piensa que se debe apoyar el sistema político (país)?

¿Cómo se relacionan estas teorías con la coyuntura de las democracias en América Latina? Muchas de las democracias latinoamericanas pertenecen al grupo de la llamada “tercera ola de democratización”, (Huntington 1991) lo cual significa que son democracias jóvenes que aún están pasando por procesos de transformación y consolidación.

A pesar de que se pensaba que muchas de estas democracias jóvenes ya se habían consolidado al punto de que no podrían revertirse a regímenes autoritarios, el resurgimiento de un populismo extendido y por una política de liderazgos extremadamente personalizados en América del Sur y América Central se expresa a través de una creciente aceptación de ideologías de tipo socialista que rechaza la “democracia liberal” como forma ideal de gobernar, de la elección de líderes populistas como Ortega en Nicaragua, Morales en Bolivia y Correa en Ecuador y la creciente popularidad del estilo de gobierno de Hugo Chávez; todos estos factores están preocupando a ciudadanos y académicos comprometidos con principios democráticos puros y están cuestionando una vez más el destino de las jóvenes democracias latinoamericanas.

Los estudios de LAPOP han demostrado consistentemente a través de los años que los niveles de apoyo al sistema varían considerablemente entre países pero que tienden a permanecer relativamente estables dentro de los países. Una excepción muy infrecuente a este patrón se puede dar cuando ocurren cambios bruscos o extremos en el contexto político de un país, tales como una fuerte crisis económica, una guerra civil o conflictos étnicos intensos. Dado que el apoyo al sistema se mide individualmente, es una medida susceptible a influencias de hechos importantes o poderosos de la coyuntura política y por lo tanto en situaciones extremas se pueden registrar variaciones en el nivel doméstico de apoyo al sistema.



El gráfico que se presenta a continuación ilustra la distribución de apoyo al sistema en 19 países de América Latina y del Caribe durante el ciclo 2006 - 2007. En el gráfico se puede observar que países como Ecuador, Paraguay, Haití, Brasil, Jamaica y Perú reportan niveles bajos de apoyo al sistema mientras que Costa Rica, México y Uruguay reportan niveles mayores de apoyo.

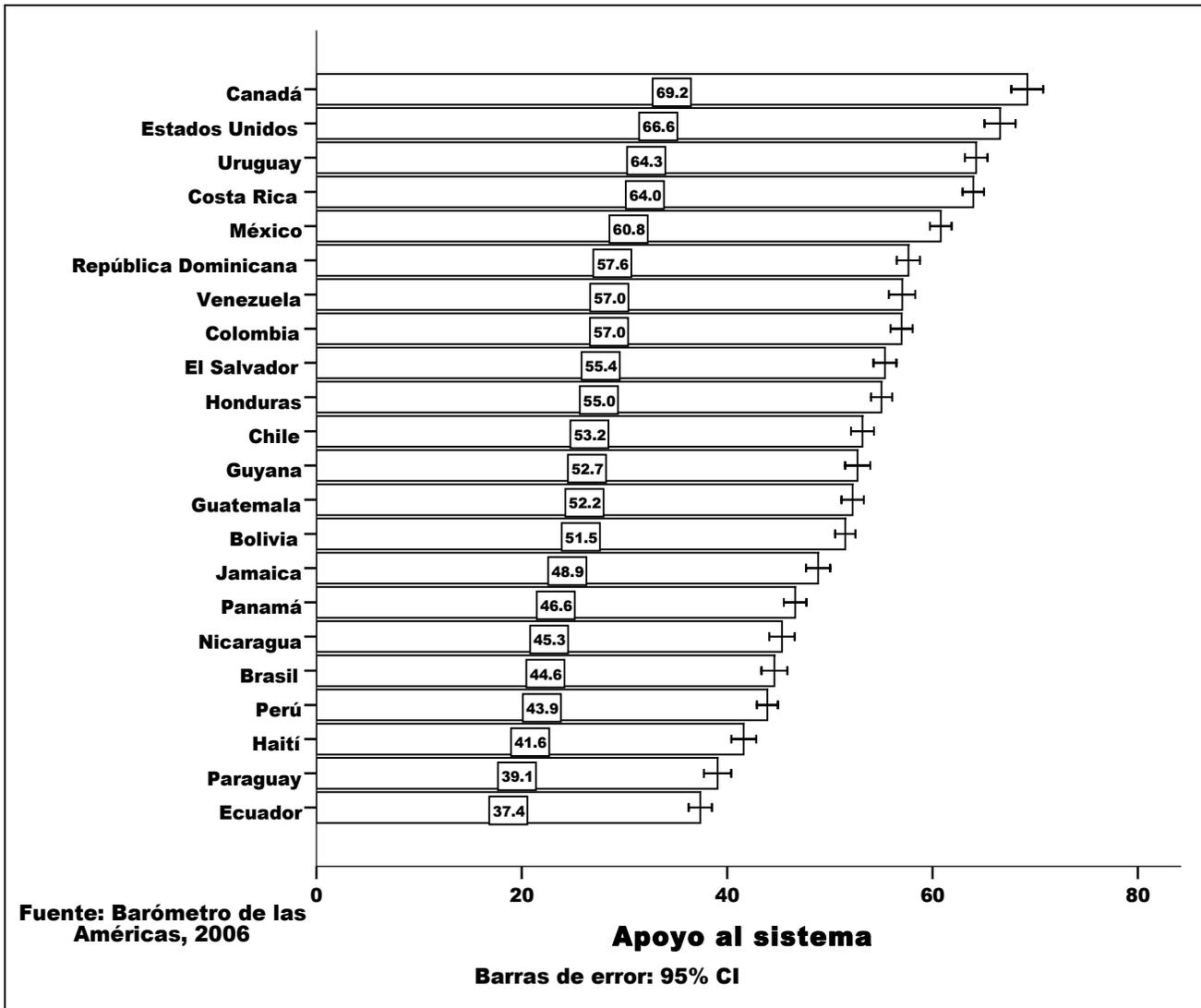


Gráfico IV-1. Promedio de apoyo al sistema, por país. Muestra comparativa, 2006.

Más allá de lo que los datos dicen específicamente sobre cada país, de manera global parecen estar indicando que los cambios más prominentes están ocurriendo en países en los que la ciudadanía se ha declarado consistentemente insatisfecha con el desempeño de los gobiernos democráticos. En función de esto, en este capítulo nos preocupa entender cuáles son los factores que reducen o aumentan los niveles de apoyo al sistema y bajo qué condiciones ocurren dichos cambios.

En 2004, Russel Dalton (Dalton 2004) publicó un estudio sobre la erosión del apoyo al sistema en democracias industriales avanzadas en el que analizaba los factores generadores de cambio en el apoyo al sistema. Varios estudios (Easton 1976; Weatherford 1992; Anderson and Guillory 1997) han determinado que la evaluación individual del desempeño del gobierno es uno de los factores más importantes con influencia sobre el nivel de apoyo al sistema.

Sin embargo, en su estudio, Dalton obtiene evidencia de que contrariamente a lo que otros estudios establecen, en los países altamente industrializados la evaluación individual del desempeño económico del gobierno no causa directamente la reducción del apoyo al sistema, pues los ciudadanos tienden a tener una visión de largo plazo en relación a políticas económicas.

Siguiendo la línea de razonamiento de Dalton, en lo que sigue de este capítulo analizaremos cuán determinantes pueden ser las evaluaciones individuales sobre el desempeño económico de los gobiernos en países latinoamericanos para los niveles de apoyo al sistema. El supuesto principal de estas pruebas es que el apoyo al sistema está fuertemente influenciado por la satisfacción o insatisfacción con la situación económica doméstica, producto del desempeño gubernamental en asuntos de política económica. Un supuesto adicional sostiene que las evaluaciones de corto plazo sobre política económica tienen mayor influencia en su evaluación del desempeño gubernamental que en países industrializados.

El estudio probará dos hipótesis que representan dos maneras diferentes en que factores económicos pueden afectar el apoyo al sistema: la primera es la percepción de la situación económica nacional y personal.

La segunda prueba analizará cómo el crecimiento o reducción del nivel de desarrollo de un país afecta el apoyo al sistema en un país determinado. El nivel de desarrollo para estas pruebas está medido por el Índice de Desarrollo Humano que el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD) genera cada dos años. El modelo controlará también la influencia del nivel de riqueza de un país, medido a través del Producto Interno Bruto (PIB), sobre los niveles de apoyo al sistema. El supuesto básico de esta segunda prueba sostiene que los países más ricos y los más desarrollados reportarán mayores niveles de apoyo al sistema que los países más pobres y los menos desarrollados.

La combinación de factores individuales y agregados enriquece la comprensión de los fenómenos estudiados permitiendo combinar dos elementos complementarios que afectan los procesos políticos de maneras diferentes pero simultáneamente: el sujeto y el contexto.

El análisis inicial de los elementos determinantes del apoyo al sistema se realizó a través de una regresión lineal aplicada que toma en consideración la percepción individual de la situación económica nacional y personal y la percepción de cuán generalizada es la corrupción entre los funcionarios públicos controlando por características sociodemográficas de los ciudadanos entrevistados. El análisis incluye 19 países latinoamericanos y del Caribe: Uruguay, Costa Rica, México, República Dominicana, Venezuela, Colombia, El Salvador, Honduras, Chile, Guyana, Guatemala, Bolivia, Jamaica, Panamá, Nicaragua, Brasil, Perú, Haití y Ecuador. Costa Rica es utilizado como categoría de referencia para el análisis de las diferencias entre países.



Los resultados de este análisis –presentados en la Tabla IV-1, demuestran que, contrariamente a como sucede en los países industrializados, en Latinoamérica la evaluación individual de la situación económica nacional y de la situación económica personal influyen la decisión de apoyar al sistema político o no apoyarlo. Los resultados del análisis de regresión indican también que estas evaluaciones individuales y la percepción de cuán generalizada está la corrupción son los predictores más robustos del nivel de apoyo al sistema para los países analizados, más importantes que las diferencias socio-económicas entre individuos. El análisis sugiere además que el desempeño del gobierno en cuestión de política económica es un factor importante para los ciudadanos en los países latinoamericanos y del Caribe en el momento de determinar su nivel de apoyo al sistema.

Adicionalmente, los resultados de la regresión lineal sugieren que existe una diferencia en el apoyo al sistema determinada por el país en el que viven las personas entrevistadas. Por ejemplo, los mexicanos declaran niveles de apoyo al sistema en general mayores que los declarados por los chilenos, los colombianos o los bolivianos. Puesto de otra manera, aunque existen diferencias entre mexicanos en sus niveles de apoyo al sistema, el apoyo en México es en promedio y en general siempre más alto que el apoyo en Chile, Colombia o Bolivia.

Tabla IV-1. Análisis de regresión lineal del apoyo al sistema. Muestra comparativa 2006-2007

Modelo	Coeficientes no estandarizados		Coeficientes estandarizados	t	Sig.
	B	Error típ.	Beta		
(Constante)	55.098	1.192		46.235	.000
Sexo	1.187	.264	.026	4.499	.000
Edad	.844	.094	.055	8.941	.000
Educación	-.472	.201	-.016	-2.348	.019
Urbano	1.985	.319	.040	6.225	.000
Riqueza individual medida por la posesión de bienes de capital	-.284	.083	-.025	-3.429	.001
Situación económica nacional	.169	.007	.168	25.629	.000
Situación económica personal	.097	.007	.087	13.266	.000
Frecuencia de la corrupción	-.003	.000	-.106	-17.854	.000
México	-3.468	.807	-.033	-4.296	.000
Guatemala	-11.695	.846	-.107	-13.826	.000
Salvador	-7.786	.814	-.077	-9.567	.000
Honduras	-10.115	.817	-.099	-12.381	.000
Nicaragua	-17.164	.838	-.167	-20.470	.000
Panamá	-18.018	.837	-.175	-21.518	.000
Colombia	-7.972	.819	-.077	-9.739	.000
Ecuador	-24.162	.806	-.240	-29.993	.000
Bolivia	-14.737	.839	-.142	-17.565	.000
Perú	-19.581	.832	-.194	-23.530	.000
Chile	-14.235	.811	-.140	-17.561	.000
RDominicana	-5.723	.815	-.056	-7.019	.000
Haití	-20.255	.875	-.194	-23.139	.000
Jamaica	-13.796	.837	-.128	-16.483	.000
Guyana	-13.871	.838	-.129	-16.552	.000
Uruguay	-2.872	.815	-.028	-3.527	.000
Brazil	-20.448	.806	-.200	-25.376	.000
Venezuela	-7.697	.815	-.075	-9.441	.000

A continuación se presenta un análisis más detallado de los resultados obtenidos del análisis de regresión lineal para los predictores del apoyo al sistema en los países latinoamericanos y del Caribe.

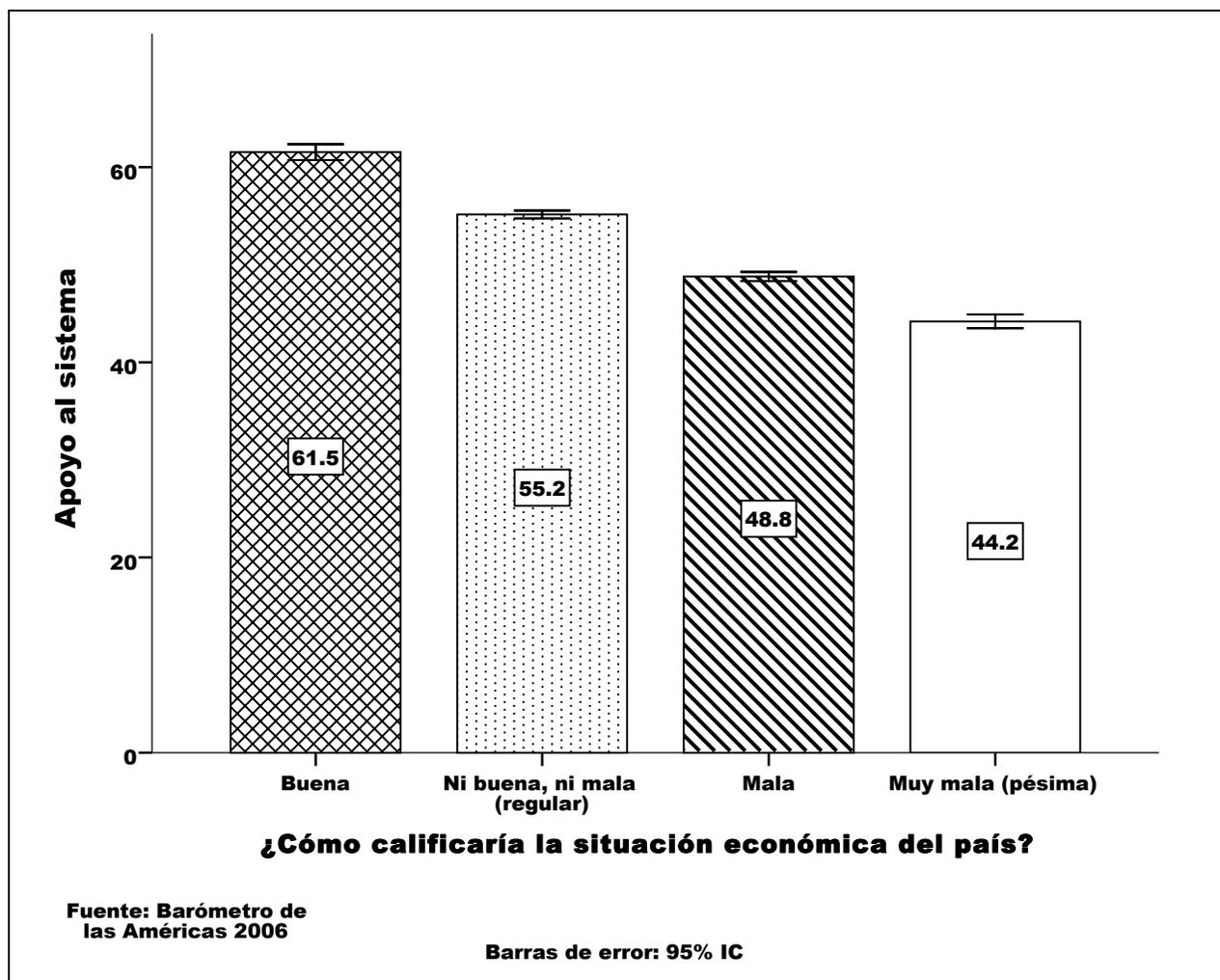


Gráfico IV-2. Apoyo al sistema por percepción de la economía nacional. Muestra comparativa 2006-2007

Como se puede ver en el Gráfico IV-2, una percepción favorable de la situación económica nacional influye positivamente el nivel de apoyo que los ciudadanos proporcionan al sistema político. En general, las personas que perciben que el país tiene una buena situación económica presentan niveles más altos de apoyo al sistema que las personas que tienen una percepción desfavorable de la situación económica nacional. Las diferencias entre aquellos que opinan que la situación económica nacional es buena y los que opinan que no es ni buena ni mala, que es mala o que es muy mala son estadísticamente significativas, como indican los intervalos de confianza que no se superponen entre sí.

La percepción de la situación económica personal presenta el mismo tipo de relación con la tendencia a apoyar al sistema; las personas que están más satisfechas con su situación económica personal presentan niveles mayores de apoyo al sistema que aquellas personas que consideran que su situación económica es mala o muy mala. Aún cuando esta diferencia no es estadísticamente significativa entre las personas que consideran que su situación económica personal es muy buena y las que consideran que su situación es buena, la relación es válida para la categoría de análisis: mientras menos satisfechas están las personas con su situación económica personal, menor tiende a ser el apoyo que le dan al sistema.

Estos resultados, de la evaluación de la situación económica nacional y personal son válidos y estadísticamente significantes para los 19 países incluidos en el análisis.

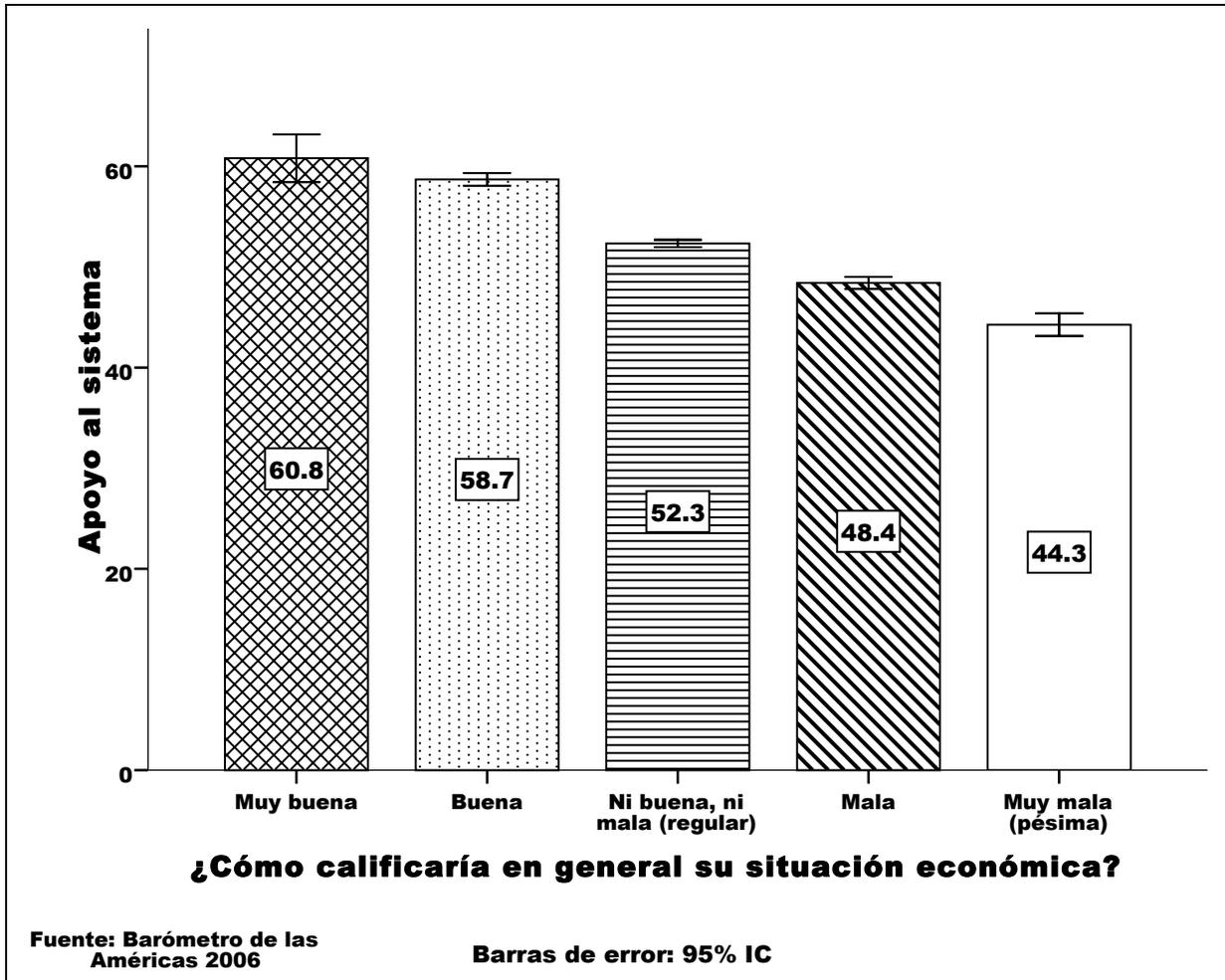


Gráfico IV-3. Apoyo al sistema por situación económica personal. Muestra comparativa 2006-2007

Por el contrario, la percepción de corrupción tiene una relación negativa con el apoyo al sistema. Como se observa en el siguiente gráfico, las personas que opinan que la corrupción entre los funcionarios públicos está muy generalizada presentan niveles de apoyo al sistema menores que aquellos que consideran que la corrupción está menos generalizada.

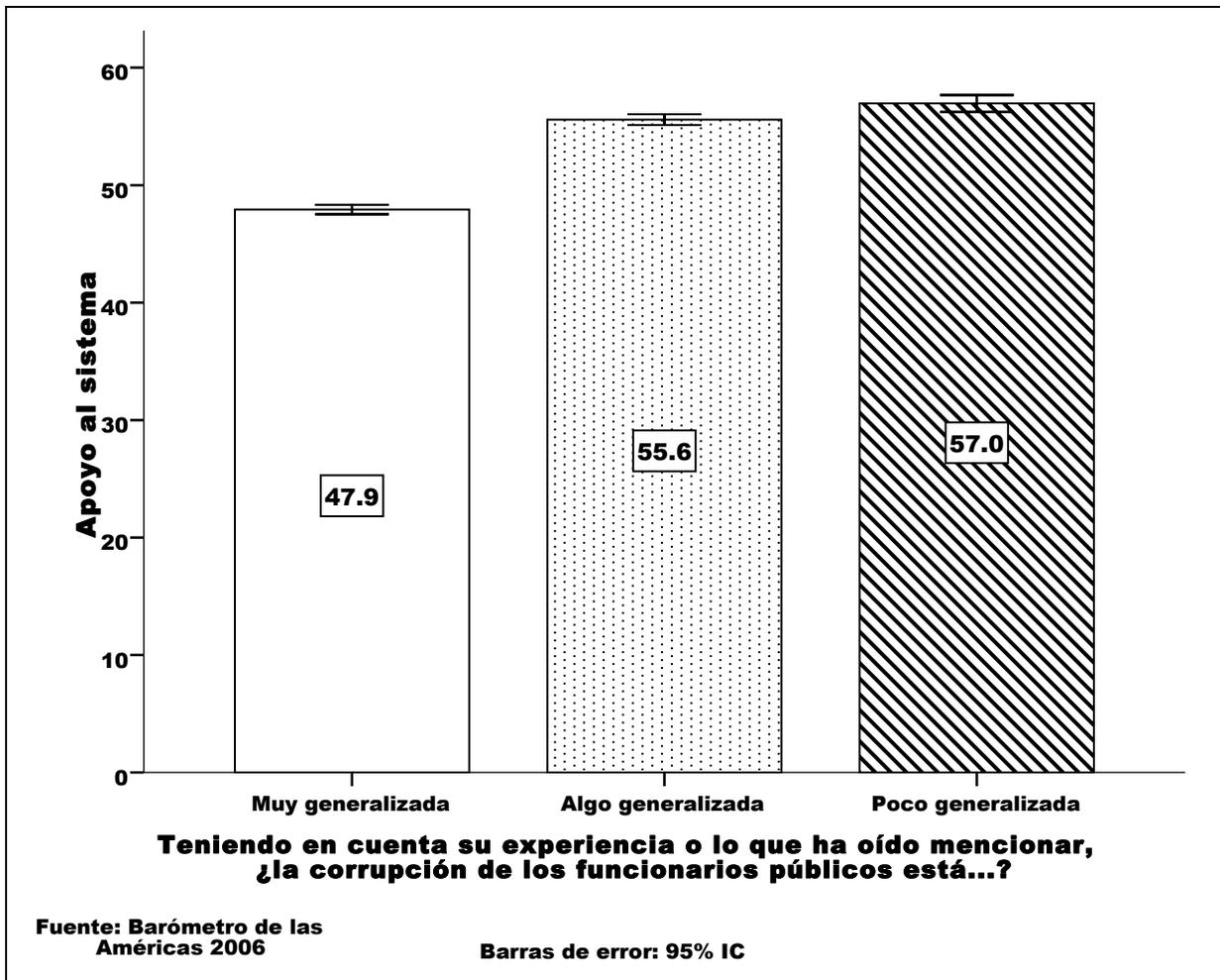


Gráfico IV-4. Apoyo al sistema por percepción de corrupción. Muestra comparativa 2006-2007

En cuanto a las características socioeconómicas de los entrevistados, el sexo, la edad, el nivel educativo, el nivel de riqueza personal y la edad marcan diferencias en los niveles de apoyo al sistema que los ciudadanos presentan. Los resultados indican que las personas que viven en zonas rurales tienden a apoyar al sistema más que las personas que viven en áreas urbanas, y que las personas de mayor edad apoyan al sistema más que los más jóvenes.

El gráfico a continuación ilustra cómo el nivel de riqueza personal¹, medido en función de la posesión de bienes de capital, influencia los niveles de apoyo al sistema.

¹ El nivel de riqueza personal se mide a través de un índice simple que resulta de sumar el número de bienes de capital que una persona posee, de acuerdo a su propia declaración. Estos bienes varían desde tener acceso a servicios básicos como alcantarillado y servicio sanitario dentro de la casa hasta la posesión de un automóvil, teléfono u otros.

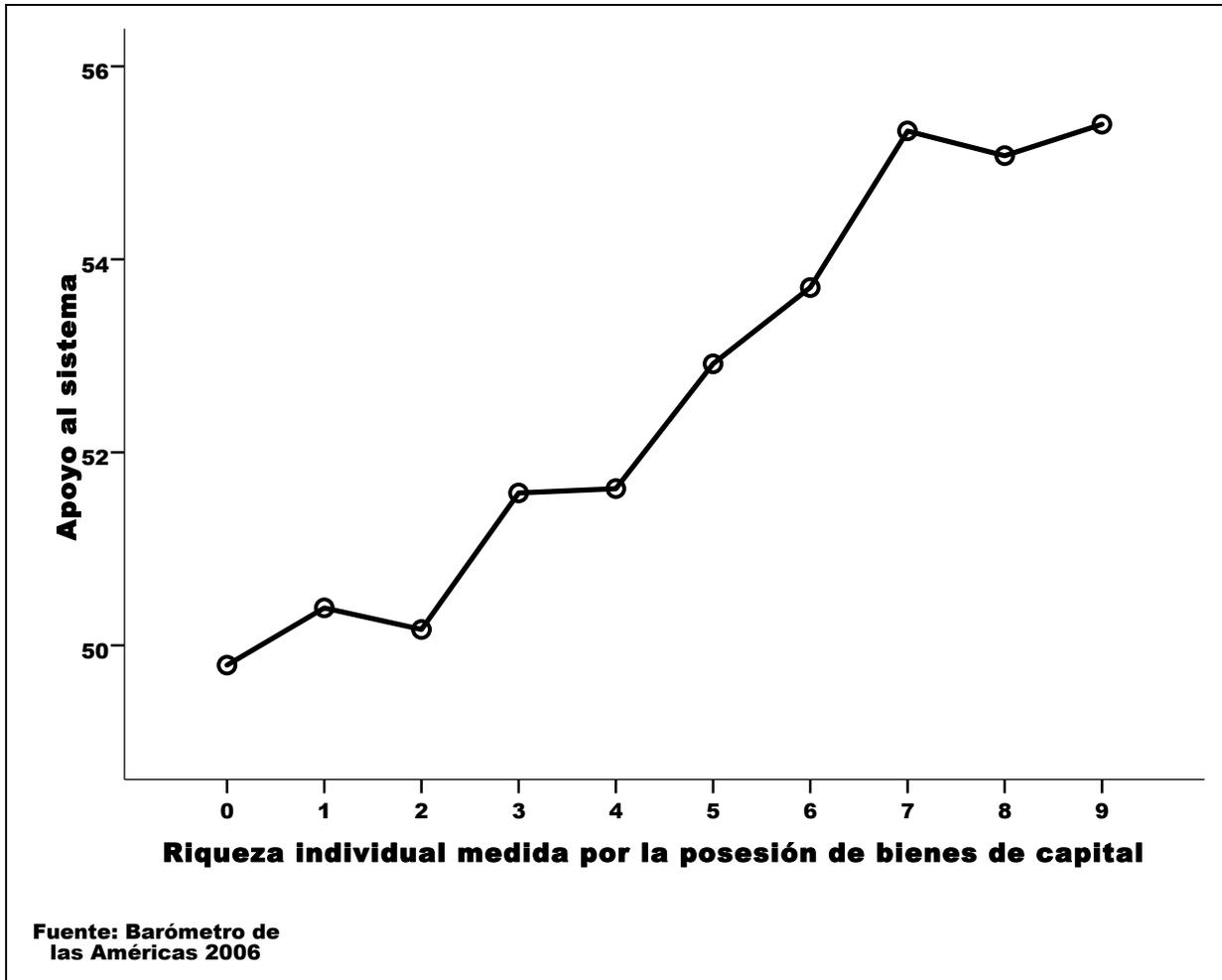


Gráfico IV-5. Apoyo al sistema por nivel de riqueza individual. Muestra comparativa 2006-2007.

Como se observa en el Gráfico IV-5, a medida que el nivel de riqueza personal se incrementa, de la misma manera se incrementa el nivel de apoyo al sistema que declaran los entrevistados. Sin embargo, el incremento de apoyo no es igual para todos los grupos sino que parece ser más moderado entre las personas con menor riqueza (entre los puntos 0 y 2 de la escala) y más pronunciado entre aquellos de riqueza media-baja a media-alta (entre los puntos 2 y 7 de la escala). Es interesante observar también que esta relación no se cumple entre aquellos que se encuentran en el grupo con mayor riqueza personal, en el que el nivel de apoyo al sistema se mantiene prácticamente constante a pesar de que el nivel de riqueza se incrementa. Sin embargo, el nivel de apoyo al sistema en este último grupo de entrevistados es en general mayor que el apoyo entre aquellos con menor riqueza personal.

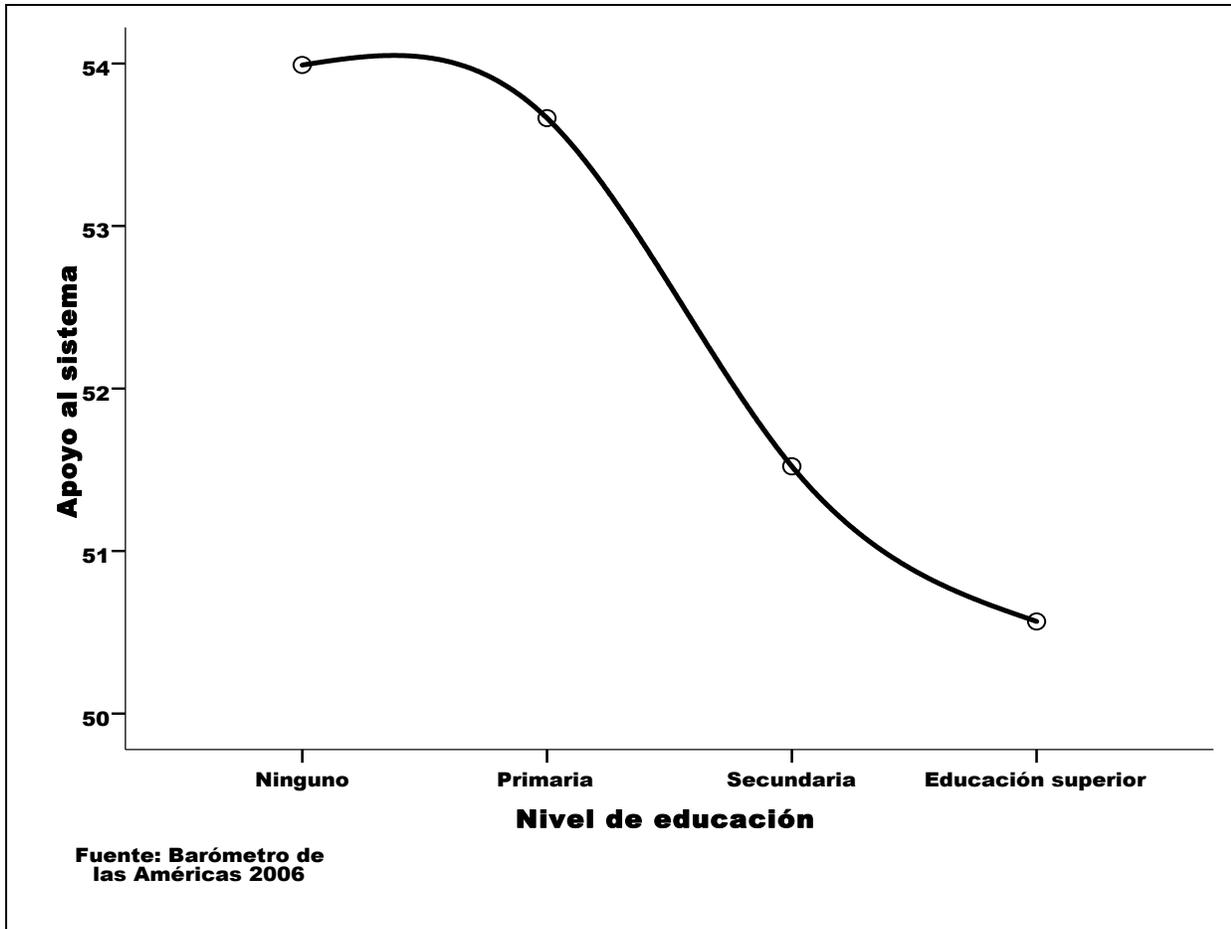


Gráfico IV-6. Apoyo al sistema por nivel educativo. Muestra comparativa 2006-2007

En cuanto al nivel educativo de los entrevistados el Gráfico IV-6 ilustra una relación negativa entre el nivel educativo y el apoyo al sistema. En otras palabras, a medida que el nivel educativo se incrementa, el apoyo al sistema tiende a reducirse. Las personas sin educación formal son las que presentan mayores niveles de apoyo al sistema mientras que aquellas con educación superior son las que menos apoyan al sistema.

El siguiente gráfico representa las diferencias de apoyo al sistema entre hombres y mujeres.

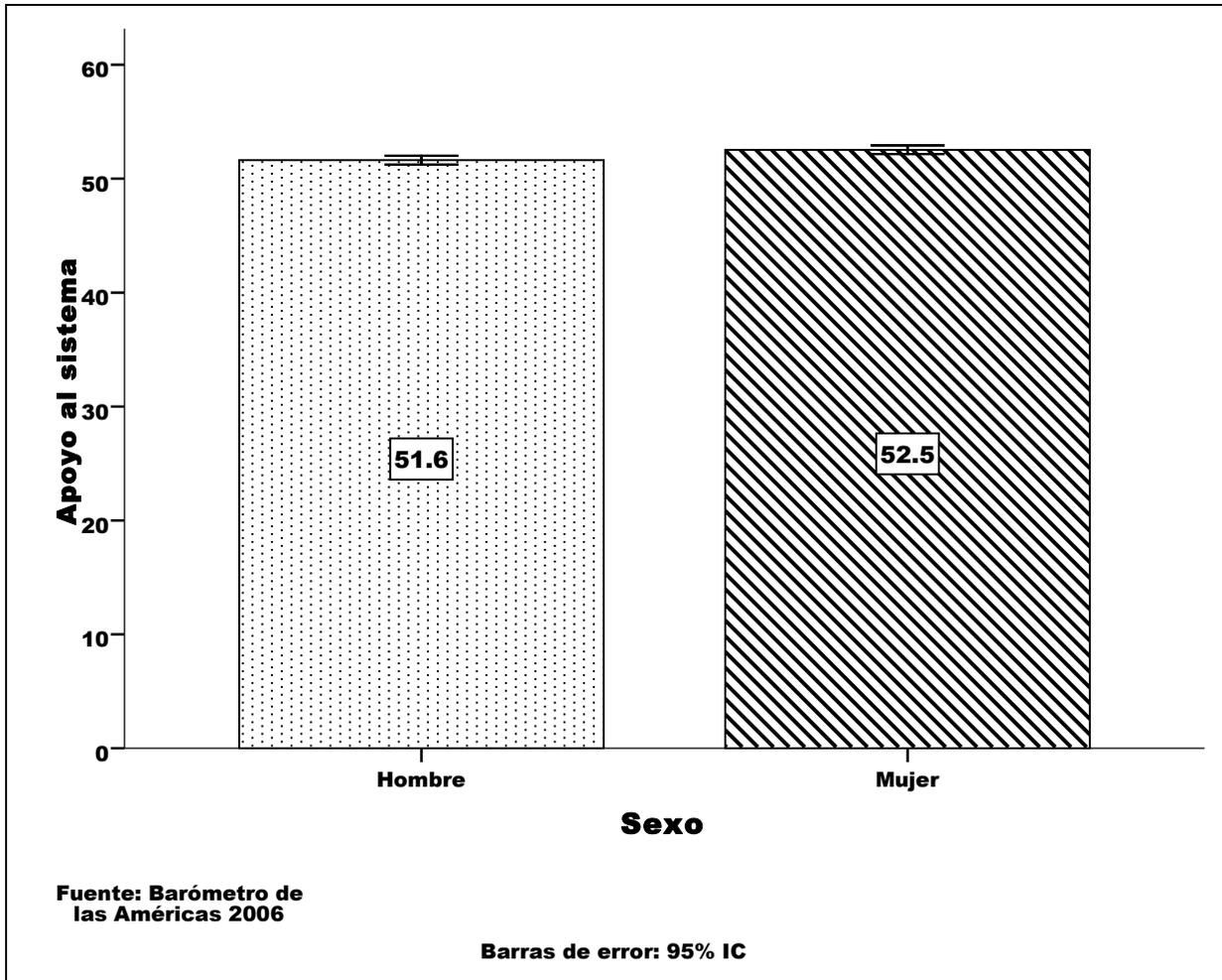


Gráfico IV-7. Apoyo al sistema por sexo. Muestra comparativa 2006-2007

Finalmente, el Gráfico IV-7 muestra que en general, las mujeres declaran un nivel de apoyo al sistema ligeramente mayor que el de los hombres. Esta diferencia es estadísticamente significativa –los intervalos de confianza no se superponen, aunque no es sustancialmente muy grande, pues es de sólo un punto en una escala de 100.

Desarrollo, crecimiento económico y apoyo al sistema

Vimos en la sección anterior que existen diferencias significantes de apoyo al sistema entre países. Estas diferencias no pueden ser atribuidas a ningún fenómeno específico de cada país en un análisis con datos de nivel individual, como el que hemos realizado hasta ahora, pues pueden existir factores a nivel de país que no pueden ser detectados a nivel individual, como por ejemplo la influencia de la cultura política, de la situación económica o del contexto político, entre muchos otros.



Sin embargo, el que no se puedan detectar los factores que generan estas diferencias con datos de nivel individual no quiere decir que dichas diferencias no sean reales. Para detectar cuál es el factor que podría generar estas diferencias entre países utilizaremos un análisis que combina la información a nivel individual con datos agregados a nivel nacional.

Dado que el desarrollo y el crecimiento económico de un país son resultado directo –en su mayor parte– de las políticas económicas del gobierno de un país, el efecto de éstas sobre el apoyo al sistema es también una evaluación del desempeño gubernamental en el campo económico.

Esta sección del capítulo se concentra en estimar la influencia de factores económicos sobre el apoyo al sistema. El análisis siguiente estimará en dos modelos separados cómo el nivel de desarrollo de un país, medido en términos de desarrollo humano², y el nivel de crecimiento económico, medido en términos del Producto Interno Bruto³ influyen las diferencias de apoyo al sistema entre países registrada en la sección anterior.

A continuación se presentan los resultados del análisis de efectos mixtos del crecimiento económico a nivel nacional sobre el apoyo al sistema.

Tabla IV-2. Análisis de efectos mixtos del crecimiento económico sobre el apoyo al sistema. Muestra comparativa 2006-2007.

Variables	Coefficientes	Error standard	z	P>z
Situación económica nacional	-.0032463	.0003465	-9.37	0.000
Situación económica personal	-.001304	.0001476	-8.84	0.000
PIB2004	-.0000229	9.84e-06	-2.33	0.020
Constante	1.799696	.0638379	28.19	0.000
Mixed-effects REML regression		# of obs = 31626		
Group variable: país		# of groups = 20		
Prob > chi2	= 0.0000			

Los resultados presentados en la Tabla IV-2 indican que de acuerdo con lo esperado, las diferencias en el crecimiento económico entre países – medidas por PIB – son estadísticamente significantes en el modelo y que la percepción de la situación económica nacional e individual siguen siendo significativas.

Esto quiere decir que las razones por las cuales los mexicanos reportan niveles mayores de apoyo al sistema que los colombianos, los bolivianos o los chilenos parecen tener relación tanto con factores de orden individual –tales como la satisfacción con la situación económica nacional y la personal– como con factores económicos de tipo contextual a nivel nacional. En otras palabras, el nivel de crecimiento económico de México contribuye a que quizás los

² Los valores del Índice de Desarrollo Humano (IDH) para cada país corresponden al año 2004, que es el año más reciente para el que estos datos están disponibles. Fuente: Informe Global de Desarrollo Humano 2006, PNUD.

³ Los valores del PIB de cada país corresponden al año 2004, que es el año más reciente para el que estos datos están disponibles. Fuente: Informe Global de Desarrollo Humano 2006, PNUD.

mexicanos sientan que viven en un país con una economía saludable y que por ello reportan niveles de apoyo al sistema más altos que los ciudadanos de otros países.

Tabla IV-3. Análisis de efectos mixtos del nivel de desarrollo humano sobre el apoyo al sistema. Muestra comparativa 2006-2007.

Variables	Coefficientes	Error standard	z	P>z
Situación económica nacional	-.0032506	.0003471	-9.37	0.000
Situación económica personal	-.0013032	.0001476	-8.83	0.000
IDH2004	-.3828372	.3372549	-1.14	0.256
Constante	1.950214	.2541186	7.67	0.000
Mixed-effects REML regression		# of obs =	31626	
Group variable: pais		# of groups =	20	
Prob > chi2 =	0.0000			

Por otro lado, las diferencias en el nivel de desarrollo humano entre países no son estadísticamente significante en el modelo, lo cual significa que el nivel nacional de desarrollo humano no influencia el nivel de apoyo al sistema que los ciudadanos tienen en distintos países.

Estos resultados son evidencia persuasiva de que las actitudes de los ciudadanos hacia el sistema de gobierno y hacia el Estado no solamente están influenciadas por características a nivel individual sino que también están influenciadas por elementos estructurales, que forman parte del contexto en el cual se desarrollan las relaciones entre el individuo y las instituciones del sistema político.

Conclusiones

Hemos visto en este capítulo que existe evidencia de que el estudio del apoyo al sistema puede ser un instrumento importante para la estimación de la estabilidad de las democracias.

Hemos obtenido evidencia de que para los 19 países latinoamericanos y del Caribe incluidos en este análisis el apoyo al sistema no depende únicamente de consideraciones políticas, sino que está influenciado de manera importante por evaluaciones individuales del desempeño económico gubernamental, tanto por la percepción de la situación económica nacional como por la percepción de la situación económica personal de los ciudadanos, contrariamente a lo que Dalton había encontrado para los países altamente industrializados.

Complementariamente, la percepción de la generalización de corrupción puede afectar negativamente el apoyo que los ciudadanos dan al sistema, reduciendo los niveles de apoyo en la medida de la extensión de la corrupción.

Estos elementos sugieren que los países en los que los ciudadanos perciben que el desempeño económico del gobierno genera problemas económicos para el país o condiciones pobres para la economía individual de los ciudadanos tendrán niveles de apoyo al sistema más



bajos que aquellos países en los que los gobiernos logran mantener una economía saludable o por lo menos estable.

La evidencia sugiere también que existen diferencias en los niveles de apoyo al sistema entre países determinadas por características específicas de cada país que los datos de nivel individual en este análisis no logran detectar. Los resultados del análisis de efectos mixtos sugieren que estas diferencias son también producto de diferencias en elementos estructurales específicos del sistema político de cada país, especialmente los niveles de crecimiento económico, que ejercen influencia sobre los niveles individuales de apoyo al sistema.

Referencias

- Anderson, C. J. y C. A. Guillory. "Political Institutions and Satisfaction with Democracy: A Cross-National Analysis of Consensus and Majoritarian Systems." *The American Political Science Review* 91(1) (1997): 66-81.
- Bastian, S. y R. Luckham. Introduction. *Can Democracy Be Designed? Can Democracy Be Designed?* S. Bastian and R. Luckham. New York, Zed Books, 2003.
- Dalton, R. J. *Democratic Challenges, Democratic Choices: The Erosion of Political Support in Advanced Industrial Democracies*. Oxford, Oxford University Press, 2004.
- Easton, D. "A Re-Assessment of the Concept of Political Support." *British Journal of Political Science* 5 (1975): 435-57.
- Easton, D. "Theoretical Approaches to Political Support." *Canadian Journal of Political Science / Revue canadienne de science politique* 9 (3) (1976): 431 - 448.
- Hetherington, M. J. "The Political Relevance of Political Trust." *American Political Science Review* 92 (4) (1998): 791-808.
- Huntington, S. *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*. Norman, University of Oklahoma Press, 1991
- Levi, M. y L. Stoker. "Political Trust and Trustworthiness." *Annual Review of Political Science* 3 (2000).
- Miller, A. H. "Political Issues and Trust in Government." *American Political Science Review* 68 (1974): 951-72.
- Schwarz-Blum, V. *Confianza en las instituciones: por que es necesaria?* D. Moreno. Cochabamba, USAID Bolivia, 2006.
- Seligson, M. A. "The Impact of Corruption on Regime Legitimacy: A Comparative Study of Four Latin American Countries." *Journal of Politics* 64 (2) (2002).
- Weatherford, M. S. "Measuring Political Legitimacy." *American Political Science Review* 86 (1) (1992): 149-166.

V. ¿Descentralizar o centralizar? Desafíos para la reforma estatal y la democracia en América Latina y el Caribe ¹

Daniel Montalvo

Resumen

A partir de la tercera ola de democratización, varios debates se han centrado en determinar cómo afrontar los desafíos que persisten en las democracias de América Latina y el Caribe. Una alternativa difundida en la región es la descentralización, aplicada como mecanismo de fomento del balance vertical de poderes del estado. Sin embargo, al explorar la opinión pública de los ciudadanos acerca de su confianza política en los gobiernos locales y el potencial apoyo a un proceso de descentralización, este capítulo muestra que existe una variación considerable en la confianza en las municipalidades y que incluso, contrariamente a lo esperado, el 52 por ciento de las personas abogan porque el gobierno nacional sea quien asuma las obligaciones y servicios de los municipios. Para determinar las variables explicativas de estos fenómenos, en esta investigación (1) se compara la confianza política de los individuos en los diferentes niveles de gobierno, (2) se estudia a la confianza política como causa del apoyo a un proceso de reforma del estado, y (3) se determina el apoyo ciudadano a la descentralización o la centralización institucional. Este análisis de percepciones ciudadanas se lleva a cabo de manera comparativa en 19 países, realizando estudios individuales de los casos extremos.

Un considerable número de científicos sociales ha debatido en sus estudios sobre los desafíos que enfrentan la democracia y la democratización a nivel mundial. Por ejemplo, Dahl (1971) considera casi indiscutible que mientras mayor es el nivel socio-económico de un país, mayor será la posibilidad de que este país consolide su democracia. Asimismo, Sorensen (1998) atribuye los bajos niveles de educación, urbanización y desarrollo, a un pobre sustento de la democracia. Otros factores como la corrupción, una cultura política adversa y la desigualdad social, son un riesgo para una democracia consolidada (Epstein *et al.*, 2006). A partir de las últimas dos décadas, varios países han apostado a la descentralización como un medio para enfrentar a los desafíos anteriormente mencionados, y así incrementar los niveles de gobernabilidad democrática, mitigar la pobreza y reducir la corrupción.

¹ La presente investigación ha sido posible gracias al aporte de USAID al Barómetro de las Américas. Adicionalmente, expresamos nuestra gratitud a la Misión de USAID en Ecuador, al Departamento de Ciencias Políticas y su personal, al Centro para las Américas, a la Oficina del “Provost” de la Universidad de Vanderbilt. Un reconocimiento especial al Profesor Mitchell A. Seligson por su valioso aporte en este estudio y en todos los ámbitos académicos, y al equipo del Proyecto de Opinión Pública de América Latina. Adicionalmente gracias al Profesor Jonathan Hiskey por su extensiva contribución académica.



Tulia Faletti (2005) manifiesta que en términos fiscales “en 1980, los gobiernos locales alrededor del mundo colectaron en promedio un 15 por ciento de los ingresos y gastaron un 20 por ciento de los egresos, mientras que a fines de los noventa, esas cifras se expandieron a un 19 y 25 por ciento respectivamente, y hasta doblaron en ciertas regiones”. Es así que gobiernos de los países de América Latina y el Caribe, con el apoyo de varios organismos multinacionales como el Banco Mundial, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Alemana GTZ, y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), han extendido sus programas de descentralización con un importante énfasis en la región.² A pesar de estos importantes esfuerzos de los gobiernos nacionales y los organismos multilaterales para resolver los distintos problemas a través de la descentralización, existe una escasa evidencia empírica sobre si estos programas, desde el punto de vista de los supuestos “beneficiarios”, realmente han logrado sus metas. Para comprender mejor la opinión pública de los latinoamericanos y caribeños acerca de la descentralización y la centralización, el Barómetro de las Américas en el 2006/07 incluyó un bloque de preguntas para explorar las opiniones y actitudes de los habitantes de la región sobre estos procesos de reforma del estado.

En este capítulo se analizan la centralización y la descentralización fiscal y administrativa desde la óptica de los pobladores de 19 países de América Latina y el Caribe.³ Se inicia con una descripción conceptual de la centralización y la descentralización, acompañada de una reseña histórica de los procesos de transferencias de poder, examinando la tradición centralista del estado latinoamericano y parte del caribeño como resultado de la colonia. Seguidamente, se presentan los argumentos teóricos de los factores que podrían favorecer a los procesos de reforma del estado, a partir de la confianza política en las instituciones de gobierno. Luego, se diferencian los países cuyos pobladores confían más en sus gobiernos nacionales de los países con mayor confianza en la municipalidad y se estructuran los componentes explicativos de estas diferencias. Una vez determinada la confianza política se caracterizan a quienes apoyan que los municipios reciban más obligaciones y más dinero y quienes, al contrario, apoyan a que el gobierno nacional asuma más obligaciones y servicios municipales; es decir, quienes apoyan descentralizar y quienes centralizar el estado. Por último, se determinan aquellos países en los que la población estaría dispuesta a pagar más impuestos a la municipalidad para que pueda prestar mejores servicios.

² El área de *Gobernabilidad Democrática* del PNUD por ejemplo, contribuye a la conformación de capacidades nacionales, fomentando un ambiente adecuado para la descentralización efectiva, gobernabilidad local y desarrollo urbano/rural. El área técnica de *Democracia y Gobernabilidad* de USAID, dirige sus esfuerzos al combate de la corrupción, descentralización democrática, fortalecimiento legislativo, relaciones civiles-militares e implementación efectiva de políticas públicas. Por último el *Grupo Temático Subnacional y de Descentralización* del Banco Mundial busca compartir y profundizar el conocimiento sobre relaciones intergubernamentales, desarrollo regional y reducción de la pobreza, y gobernabilidad central y local para reforzar la efectividad de los diferentes niveles de gobierno.

³ Los países analizados en esta investigación según la disponibilidad de datos, son: México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Colombia, Ecuador, Brasil, Perú, Paraguay, Uruguay, Chile, República Dominicana, Haití, Jamaica y Guyana. Los datos fueron obtenidos de la ronda de encuestas 2006, conducida por el Barómetro de las Américas y el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP).

Descentralización, centralización y transferencias intergubernamentales

Compilaciones históricas de los procesos de balance de poder vertical en América Latina y el Caribe, muestran la herencia centralizadora implantada por la colonia española y portuguesa en las Américas, como un medio eficiente de extracción de recursos. Durante el siglo XX, el estado central en casi toda América Latina concentró exitosamente sus niveles de poder, autoridad y control de recursos. Pero es a partir de los ochentas, en concomitancia con el refuerzo de las transiciones a la democracia, en que se implementan sistemáticos procesos de transferencias de poder desde el nivel nacional al nivel local (Seele 2004).

¿Cuál es la teoría detrás de la descentralización y centralización en la nación-estado de la modernidad en América Latina y el Caribe? En términos de Ciencia Política, Tullia Falleti (2005) denomina *descentralización* al proceso de reforma estatal a través de políticas públicas, dirigido a la transferencia de poder, responsabilidades y/o recursos desde niveles superiores a niveles inferiores de gobierno. Por el contrario, *centralización* es el proceso de reforma estatal a través de políticas públicas, dirigido a restituir a niveles superiores de gobierno, facultades atribuidas a niveles inferiores en un contexto político determinado. Al analizar los componentes de estas definiciones, se enfatiza primordialmente el carácter dinámico de estos procesos contrariamente a características estáticas de un sistema. Por esto, se estudia el carácter de reforma estatal y no a una descripción institucional en un punto determinado en el tiempo. El carácter de reforma estatal excluye la privatización de las funciones públicas, por lo que las transferencias de facultades se manifiestan estrictamente en el sector público. Según la constitución política de los estados analizados en este estudio, se pueden dar cuenta de varios niveles de gobierno, siendo así (1) el nivel nacional de gobierno corresponde al gobierno nacional o gobierno central⁴, (2) el nivel intermedio de gobierno corresponde al gobierno de los estados federados, departamentos o provincias, (3) el nivel local de gobierno corresponde a los municipios o cabildos y (4) otros niveles o jurisdicciones subnacionales.⁵

Las transferencias entre los distintos tipos de gobiernos suceden en tres ámbitos, (1) *político*, referente al otorgamiento de espacios de representación territorial sobre la base de reformas electorales para designar órganos ejecutivos y legislativos de gobierno. Adicionalmente, transferencias de la capacidad de los niveles de gobierno para designar y remover personal del sector oficial. (2) *fiscal*, referente a competencias de recolección y distribución de ingresos en forma de impuestos, rentas y transferencias entre los distintos niveles de gobierno, competencias y distribución de egresos en forma de gastos e inversiones, y competencias de endeudamiento público; y (3) *administrativo*, referente a la transferencia de competencias para otorgar servicios públicos (Manor 1999, Tulchin 2004, O'Neill 2005, Falleti 2005). Falleti (2005) identifica la secuencia en la que ocurren las transferencias políticas, fiscales y administrativas. En el caso del nivel de gobierno que transfiere competencias, el orden preferido de transferencia es primeramente la administrativa, para liberarse de responsabilidades

⁴ Para fines de estandarización con la encuesta, se utiliza en este estudio el término gobierno nacional para definir al gobierno central.

⁵ Por ejemplo, condados, villas, juntas parroquiales, etc.



en los servicios públicos, luego la fiscal para retener el control y poder político. De forma inversa, el nivel de gobierno que recibe competencias, prefiere que se le transfiera en principio el control y poder político para prevenir ser designado o removido a discreción del nivel del otro nivel de gobierno. Una vez asegurada su legitimidad a través del voto requiere del control fiscal para afianzar su institucionalidad y por último ejercer el control administrativo de los servicios públicos.

Para enfatizar los procesos de descentralización experimentados a partir de la tercera ola de democratización en América Latina, varios científicos sociales descomponen su definición en términos más precisos. Kathleen O'Neill (2005) define la descentralización en términos de (1) *devolución*, como el proceso de transferencia de fondos y responsabilidades a oficiales en los niveles intermedios y locales, designados por el gobierno nacional, (2) *delegación*, como el proceso de conferir responsabilidades a organismos no oficiales⁶ y (3) *desconcentración*, como el proceso de conferir el poder de tomar decisiones a una serie de ministros en la rama ejecutiva. Por último, se debe diferenciar también entre *federalismo*, que corresponde a un sistema de gobierno en donde la soberanía es constitucionalmente dividida entre la autoridad de gobierno nacional y las unidades políticas subnacionales, y en donde el poder es compartido entre el gobierno nacional y los gobiernos intermedios⁷, y *autonomía*, en donde los niveles subnacionales de gobierno tienen amplios poderes ejecutivos y legislativos, pero la soberanía es atributo exclusivo de la nación.

El estado de la descentralización en América Latina y el Caribe

Varios investigadores concuerdan en que la consolidación de las reformas estatales en términos de transferencias políticas, fiscales y administrativas, toma vigor a partir del retorno a la democracia en los estados latinoamericanos y caribeños a fines de la década de los setenta.⁸ Daughters y Harper (2007) argumentan que las primeras reformas estatales hacia la descentralización se llevaron a cabo en la arena política, específicamente en la creación de democracias representativas a nivel local. Las elecciones de alcaldes iniciaron con altas expectativas, dada la ventaja natural que poseen los niveles locales e intermedios sobre el nivel central en cuanto al enlace entre las necesidades poblacionales y los bienes y servicios ofertados por los gobiernos locales. Además, otra ventaja radica en la facilitación para interpretar las preferencias a través de un incremento en la participación política comunitaria. A mediados de 1990, una de las primeras condiciones para la descentralización política fue ampliamente cumplida entre las naciones de Latinoamérica y el Caribe: las elecciones democráticas para alcaldes municipales han sido instituidas en toda la región a excepción de Surinam.⁹ El primer país en implementar elecciones en los gobiernos locales es México en 1917, coincidiendo con su año de retorno a la democracia. Los últimos países de la región en llevar a cabo elecciones locales son Guayana y Panamá, ambos en 1995, y sus años de transición a la democracia fueron

⁶ La delegación se lleva a cabo a través de privatizaciones o concesiones a de responsabilidades públicas.

⁷ Generalmente estados o provincias.

⁸ Ver Robert Daughters y Leslie Harper (2007), Tulia Falletti (2005), Kathleen O'Neill (2005), Daniel Treisman (2002)

⁹ Se excluye a Cuba del análisis.

1966 y 1989 respectivamente. En la Tabla V-I se resumen los primeros años de elecciones de alcalde en los países en comparación con su años de transición democrática.

En referencia a políticas fiscales de reforma estatal, los gobiernos subnacionales han recurrido a tres formas generales de financiamiento: (1) impuestos¹⁰, (2) transferencias intergubernamentales¹¹ y (3) generación de ingresos por autogestión.¹² Falleti (2005) asegura que durante la década de 1980, los gobiernos subnacionales colectaron un promedio del 15 por ciento de los ingresos totales y gastaron un promedio del 20 por ciento de los egresos totales. Estas cifras según Daughters y Harper (2007), esconden una diferencia significativa entre países, especialmente en términos de gastos e inversiones. Es así que para el período 1996 - 2004, datos del Banco Interamericano de Desarrollo muestran en forma descendente, que tres países – Argentina, Brasil y Colombia- poseen un alto índice de descentralización de gastos con porcentajes cercanos al 50 por ciento, colocándolos dentro del grupo de los países más descentralizados del mundo.¹³ Un segundo grupo de países –México, Venezuela, Bolivia, Perú y Ecuador- presentan un moderado pero igualmente significativo nivel de descentralización del gasto de entre el 17,5 y 31,8 por ciento en el 2004. Cabe destacar que de entre los cinco primeros países, cuatro de ellos conforman sistemas federales de gobierno,¹⁴ a excepción de Colombia que presenta una tradición regionalista histórica que le ha permitido elevar sus niveles de descentralización.

Finalmente, un tercer grupo de países –Uruguay, Chile, Honduras, Guatemala, El Salvador, Paraguay, Nicaragua, Costa Rica y Panamá- están caracterizados por bajos niveles de descentralización del gasto, desde un 13 por ciento como es el caso de Uruguay y Chile, hasta un 1 al 3 por ciento como en los casos de Panamá y Costa Rica.

Por último, a partir de la segunda mitad de los 1990, un creciente número de restricciones al endeudamiento subnacional se han implementado para evitar problemas de deudas excesivas que se suscitaron a partir de las políticas adoptadas por Brasil y Colombia en primera instancia, seguidas luego por Bolivia, Ecuador y Perú. Un resumen de las características de endeudamiento público subnacional, se presenta en la Tabla V-1.

¹⁰ Siendo los más comunes los impuestos a la propiedad, a la circulación vehicular, y a la industria y comercio.

¹¹ Que pueden ser en forma permanente e igualitaria a través de legislación o a discreción de los niveles superiores de gobierno.

¹² En el caso de empresas municipales de agua potable, electrificación, etc.

¹³ Estos países incluyen Canadá, Estados Unidos, y países nórdicos de Europa (Daughters y Harper, 2007).

¹⁴ Argentina, Brasil, México y Venezuela (Central Intelligence Agency, 2007).



Tabla V-1. Primer año de elecciones municipales, transición democrática y endeudamiento subnacional

País	Elección de Alcaldes Municipales*	Año de Transición Democrática*	Prohibición de Endeudamiento Subnacional**	Autorización del Gobierno Nacional para el Endeudamiento**	Restricción del Uso de Fondos de Deuda Pública**
Argentina	1983	1983		✓	✓
Belice	1981	1981	n.d.	n.d.	n.d.
Bolivia	1985	1982		✓	✓
Brasil	n.d. ^a	1985		✓	✓
Chile	1992	1990	✓		
Colombia	1988	1958		✓	✓
Costa Rica	1949	1949		✓	✓
República Dominicana	1966	1966	n.d.	n.d.	n.d.
Ecuador	1983	1979		✓	✓
El Salvador	1985	1984		✓	✓
Guatemala	1985	1985		✓	✓
Guyana	1995	1966		✓	✓
Honduras	1982	1982		✓	✓
Jamaica	1962	1962		✓	
México	1917	1917		✓	✓
Nicaragua	1992	1990	n.d.	n.d.	n.d.
Panamá	1995	1989		✓	✓
Paraguay	1991	1989		✓	✓
Perú	1980	1980		✓	✓
Surinam	n.e. ^b	1987	✓		
Trinidad y Tobago	1962	1962		✓	✓
Uruguay	1984	1985	n.d.	n.d.	n.d.
Venezuela	1989	1958	n.d.	n.d.	n.d.

Fuentes: *Banco Interamericano de Desarrollo (1997)
 ** *Ibid* (2004) Elaborado por Robert Daughters y Leslie Harper (2007) y re-estructurado por el autor
^a n.d. Dato no disponible
^b Gobierno local inexistente

Opinión Pública: confianza política en las instituciones y apoyo a la descentralización

¿Qué opinan los latinoamericanos y caribeños sobre los procesos de descentralización?
 ¿Confían más en los gobiernos nacionales, o su confianza es mayor en los niveles locales de

gobierno?, ¿Estarían dispuestos a apoyar a que el municipio reciba más responsabilidades y recursos del gobierno nacional, o es el gobierno nacional quien debe asumir más responsabilidades y recursos municipales? Muchos esfuerzos se han llevado a cabo para definir el balance institucional ideal entre la centralización y la descentralización del estado, pero pocos estudios se han enfocado en determinar la opinión pública con respecto a estos procesos de reforma estatal. En este análisis se estudia en primer lugar la *confianza política* que tienen las personas de la región en sus instituciones públicas, haciendo énfasis principalmente en el gobierno nacional y la municipalidad. Según Hetherington (2005) la confianza política es el grado de percepción que tiene la gente sobre si el gobierno está produciendo o no resultados consistentes con sus expectativas. Esta concepción contiene una característica clave, que es la *percepción* de las personas y no en sí el desempeño de los gobiernos. Obviamente existe una necesidad fundamental de conectar las percepciones y la realidad, pero el enlace es muchas veces ambiguo e indirecto. Esto desemboca en varios problemas, siendo uno de los más importantes la dificultad que tienen los ciudadanos en conocer exactamente el desempeño del gobierno. Mucha de esta información es transmitida a través de los medios de comunicación, y los medios pueden distorsionar la percepción, debido a propósitos políticos por ejemplo. Además el acceso a los medios de comunicación varía de acuerdo al estatus socio-económico y al interés de los ciudadanos en política.

La confianza en las instituciones está vitalmente relacionada con el apoyo a la democracia y con los procesos democráticos. Adrian y Smith (2006) especifican que tanto en sistemas democráticos como en las naciones en proceso de democratización, los individuos que evalúan desfavorablemente regímenes presentes y pasados, expresan a su vez muy poca confianza institucional. El *apoyo* se define como un fundamento, confirmación o prueba de una opinión o doctrina. Bajo la premisa de que la confianza política está en última instancia relacionada con el apoyo a la democracia y con los procesos democráticos, se puede inferir que mientras más confianza se tiene, por ejemplo, en la municipalidad, el apoyo a la descentralización será mayor. Este estudio no analiza la relación inversa, que es que el apoyo a la descentralización causa que los individuos confíen más en las instituciones porque se puntualiza la descentralización desde una perspectiva dinámica. Mas bien la gente decide si va a favorecer una mayor descentralización basándose en su experiencia personal con su gobierno municipal en contraste con su experiencia con el gobierno nacional.

En este capítulo se analizan los datos obtenidos en la ronda de encuestas llevadas a cabo por el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP) como parte de las series del Barómetro de las Américas en los años 2006 y 2007, a través de las siguiente preguntas:

LGL2. En su opinión, ¿se le debe dar más obligaciones y más dinero a la municipalidad, o se debe dejar que el gobierno nacional asuma más obligaciones y servicios municipales?

B32. ¿Hasta qué punto tiene usted confianza en su municipalidad?

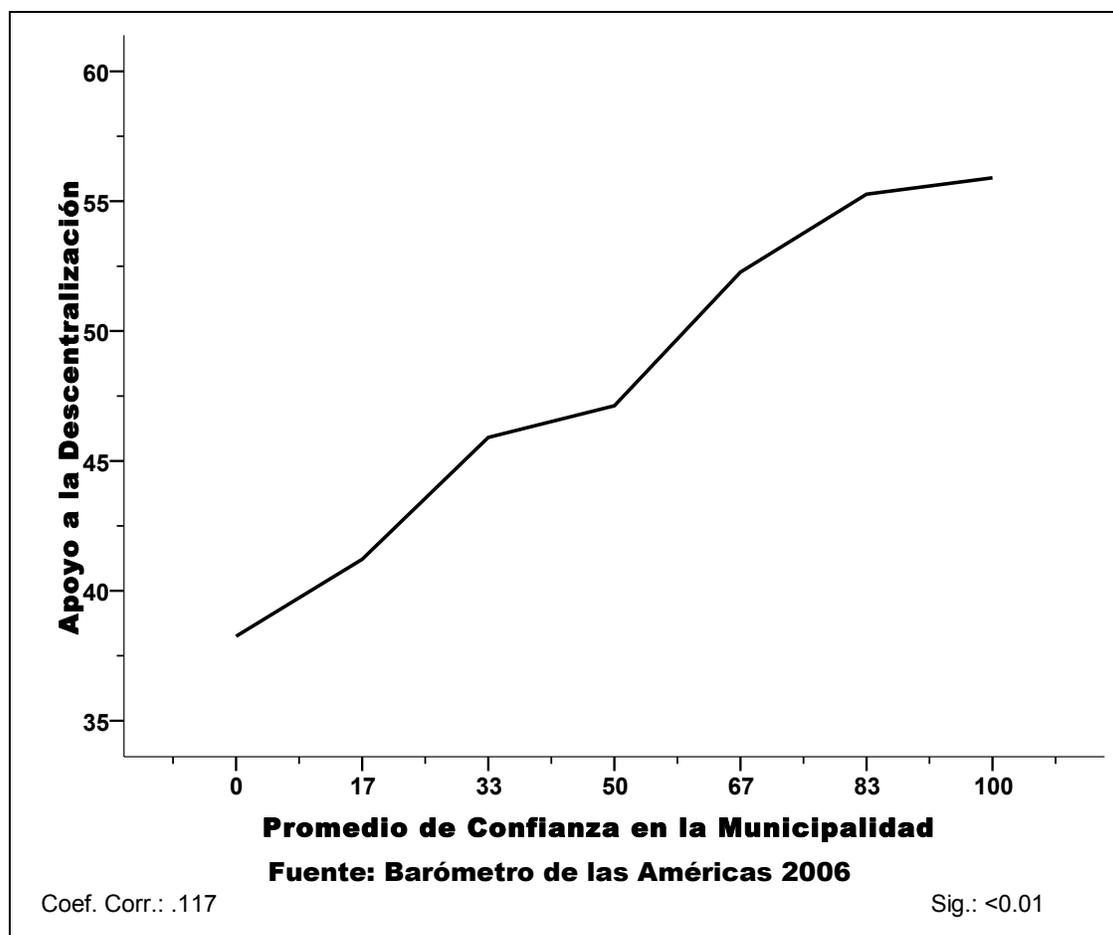


Gráfico V-1. Confianza en la municipalidad y apoyo a la descentralización

Los contundentes resultados de la conexión entre el apoyo a la descentralización como resultado de la confianza en la municipalidad, se muestra en el Gráfico V-1. En los 19 países analizados,¹⁵ mientras mayor confianza política se tiene en la municipalidad, mayor será el apoyo a la descentralización. A través de este hallazgo, se verifica la hipótesis de que a medida que los individuos incrementan su confianza en la municipalidad, mayor será el apoyo brindado a un proceso de descentralización. Lo último indica que en términos de política pública, es fundamental considerar que los ciudadanos apoyan un proceso de transferencia a los municipios cuando perciben un buen desempeño de los alcaldes, los concejales y los empleados municipales. Es decir, los funcionarios municipales juegan un rol fundamental en la construcción del apoyo ciudadano necesario para establecer un proceso de descentralización del estado, ya que a medida que los municipios cumplen con las expectativas de los individuos, el resultado se traduce directamente en favorecer el aumento de poder político y económico de los gobiernos locales.¹⁶

¹⁵ De acuerdo a la disponibilidad de información, para este estudio se incluyeron los siguientes países: Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana.

¹⁶ En el caso de la relación entre la confianza política en el gobierno nacional y el apoyo a la centralización, esta relación es no significativa.

Nivel comparativo de confianza política municipal versus otras instituciones democráticas

¿Cuál es el promedio de confianza política de los latinoamericanos y caribeños en los municipios? ¿Cómo difiere la confianza en los municipios de la confianza política en otras instituciones del estado? Haciendo una valoración de 10 de las principales instituciones presentes en un régimen democrático, se analizan los niveles de confianza política de la sociedad latinoamericana y caribeña. El Gráfico IV-2. resume los resultados de estas preguntas en los 19 países. En una escala de 100 puntos, en donde 100 significa que la persona confía mucho en la institución y 0 significa que la persona no confía nada, los latinoamericanos y caribeños que respondieron a esta encuesta les han otorgado alrededor de 50 puntos a la municipalidad, mientras que el gobierno nacional suma 49 puntos. El promedio de confianza para todas las instituciones se ubica en los 48 puntos, es decir, la confianza en la municipalidad supera en 2 puntos al promedio del resto de instituciones, mientras que la confianza en el gobierno nacional supera en 1 punto al promedio institucional. Como se puede apreciar, las Fuerzas Armadas es la institución en la cual la población tiene mayor confianza con 13 puntos sobre el promedio institucional, mientras los partidos políticos es la institución en la que menos se confía, con 13 puntos bajo el promedio. En color negro en el gráfico se encuentran la municipalidad y el gobierno nacional. Nótese que la diferencia entre la confianza en las municipalidades y los gobiernos nacionales de los 19 países es mínima (menos de 1 punto).

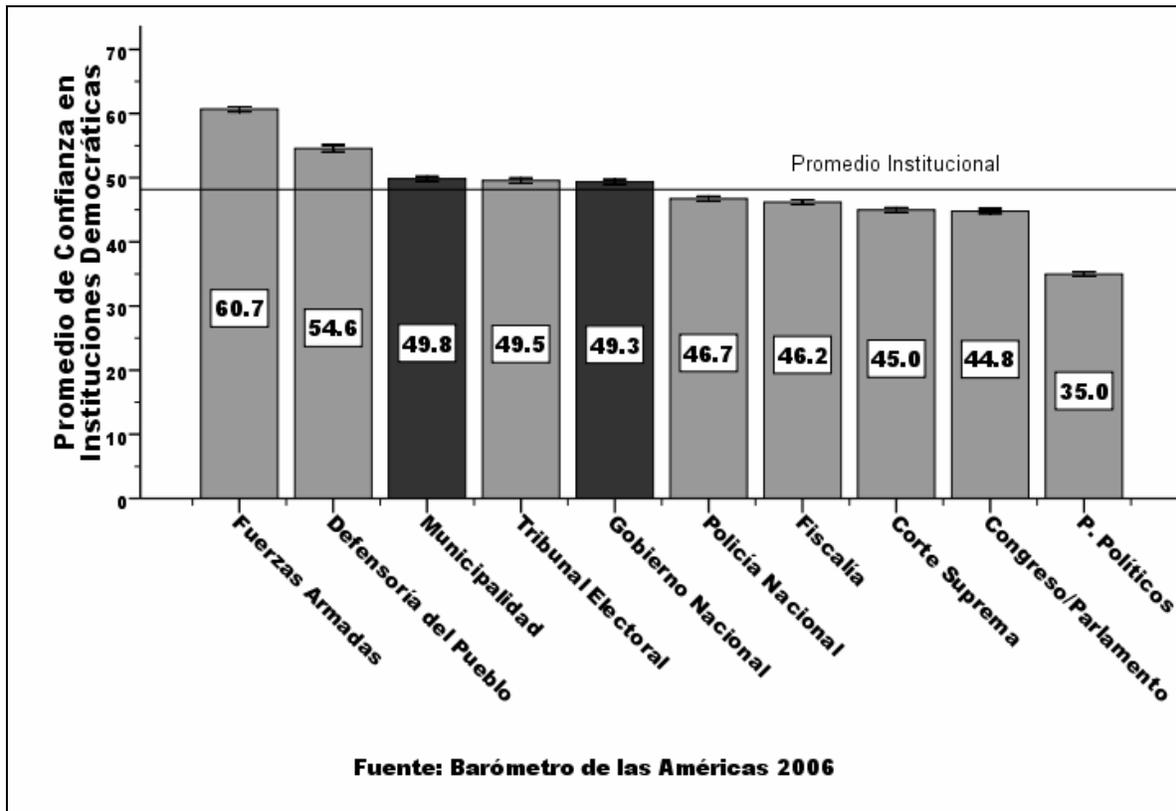


Gráfico V-2. Confianza política en las instituciones públicas



Confianza política en el gobierno municipal por país

¿Son estos niveles de confianza en las municipalidades los mismos en todos los países? En esta sección se analiza de forma comparativa el nivel de confianza política que poseen los ciudadanos en sus municipios, de acuerdo al país de residencia. El Gráfico V-3 muestra que en una escala de 0 a 100 puntos, donde 100 significa mucha confianza y 0 nada de confianza, los ciudadanos dominicanos son los que tienen un mayor promedio de confianza política en las municipalidades, otorgándole 60 puntos. Es decir, la confianza en la municipalidad en República Dominicana se encuentra 10 puntos sobre el nivel promedio de confianza política promedio en los municipios en América Latina y el Caribe que llega a los 50 puntos. Haití se ubica en último lugar, otorgándole 30 puntos a la confianza en los municipios, 20 puntos menos que la confianza promedio en los municipios en la región. Además existe un grupo de países –Nicaragua, Guyana, Colombia y Brasil - que presentan un nivel de confianza muy cercano al promedio de confianza política en los municipios de la región.

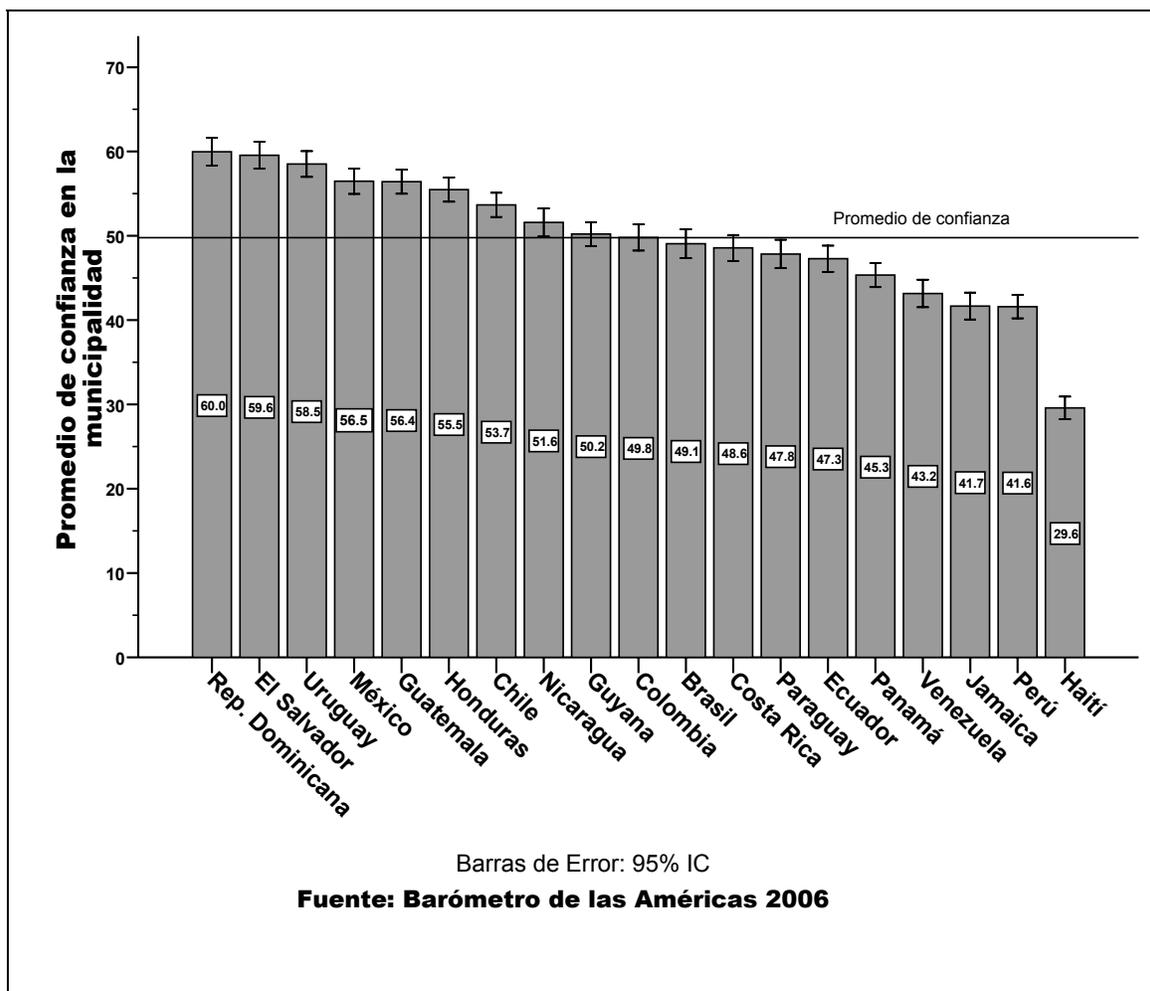


Gráfico V-3. Confianza política en los municipios, por país

Confianza política en el gobierno municipal versus confianza en el gobierno nacional, por país

A pesar de algunas de las características que se comparten en varios países de América Latina y el Caribe, existen diferencias claves en la confianza política en los municipios y los gobiernos nacionales. En el tema de la confianza política en estas instituciones, los datos muestran que existen 3 agrupaciones: (1) países en donde la confianza política en la municipalidad es mayor que en el gobierno nacional, (2) países en donde la confianza política en el gobierno nacional es mayor que en la municipalidad y (3) países en donde la diferencia en la confianza política en el gobierno nacional y la municipalidad es no significativa. El Gráfico V-4. ilustra los tres grupos en donde se muestra la diferencia de la confianza política en las municipalidades y el gobierno nacional. Las barras con puntaje positivo muestran a los países que tiene mayor confianza en la municipalidad, mientras que las barras con puntajes negativos muestran una mayor confianza en el gobierno nacional.

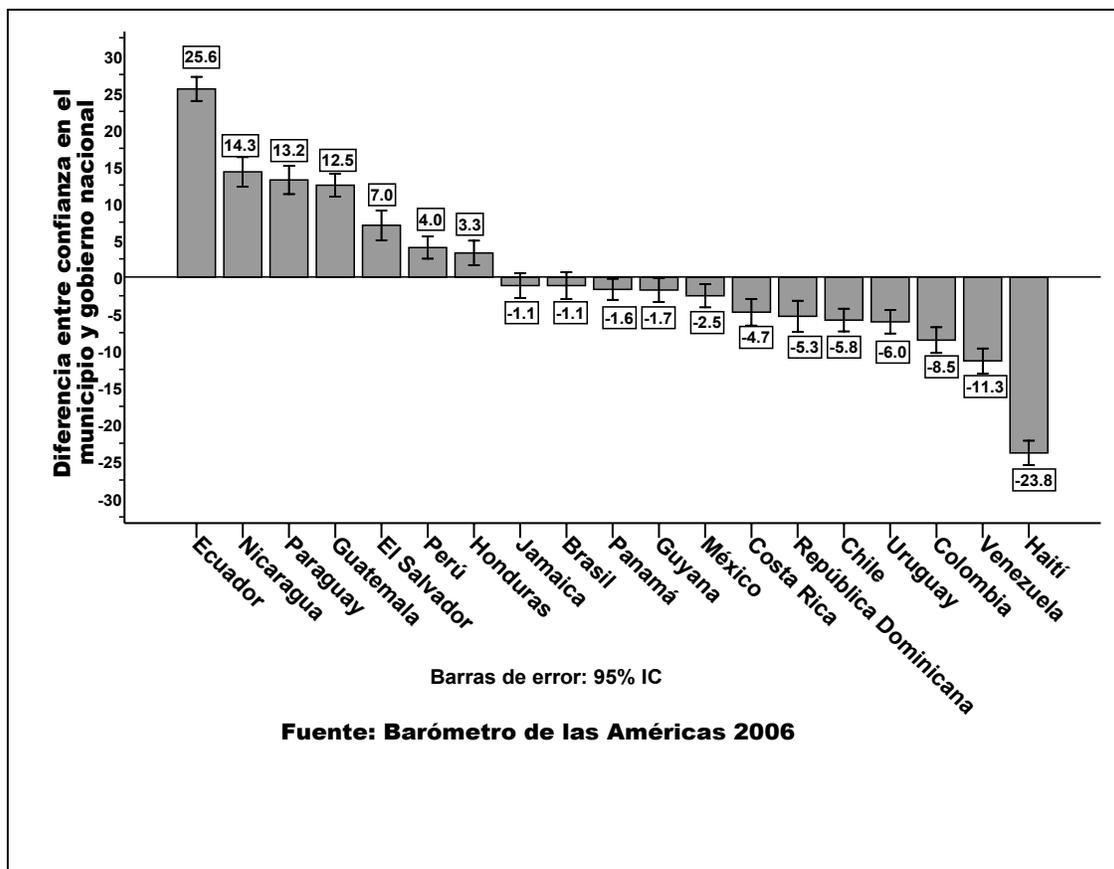


Gráfico V-4. Confianza política en el gobierno nacional versus la municipalidad

Cabe destacar que el país con el rango más alto de dispersión entre la confianza política en la municipalidad y el gobierno nacional lo presenta Ecuador con casi 26 puntos. Esto quiere decir que los ecuatorianos presentan el grado de confianza política municipal más elevado en comparación con el resto de países en América Latina y el Caribe. Al hacer un análisis de caso se encuentra que los resultados están sistemáticamente relacionados con la alta inestabilidad



política en el gobierno nacional que ha sufrido el Ecuador durante los últimos 12 años. De acuerdo a Seligson *et al.* (2006), durante el período 1995 – 2007, el Ecuador ha tenido 8 presidentes de la república, lo que quiere decir que cada presidente ha permanecido en el poder un promedio de 1,5 años. La crisis en el gobierno nacional del Ecuador se inicia con la salida del país del entonces vicepresidente del Ecuador Alberto Dahik en 1995, en el gobierno de Sixto Durán-Ballén, debido a un juicio político en su contra por malversación de fondos reservados. En 1997 el presidente electo Abadalá Bucaram, luego de verse envuelto en varios escándalos de corrupción, fue cesado por una resolución del Congreso Nacional amparada en la figura constitucional de “incapacidad mental”. Luego de un período de interinazgo presidido por el ex presidente del Congreso Nacional Fabián Alarcón, en 1998 se llevan a cabo elecciones presidenciales y llega al poder el ex alcalde de Quito, Jamil Mahuad. Debido a un período de crisis financiera que dio como resultado el congelamiento de cuentas bancarias, en 2001 fue obligado a renunciar por haber llevado al país a la peor crisis económica desde la instauración de la república. Su ex vicepresidente, Gustavo Noboa le sucede en el poder hasta que el ex militar Lucio Gutiérrez, quien había participado en el golpe de estado contra Mahuad, llega al poder tras ser elegido como presidente de la república en el 2002 (Seligson *et al.*, 2004). En 2005 Gutiérrez junto al Congreso Nacional ordenan la cesación de todos los ministros jueces de la Corte Suprema de Justicia, aduciendo una alta politización y parcialidad de la justicia ecuatoriana. Estos hechos provocaron una abrupta reacción de un movimiento capitalino, y el Congreso Nacional se ve obligado a cesar las funciones de Gutiérrez como presidente de la república, bajo la figura constitucional de “abandono del cargo”. Le sucede su ex vicepresidente Alfredo Palacio y en 2006 se llevan a cabo elecciones presidenciales (Seligson *et al.*, 2006). Al momento de escribir este estudio, el actual presidente de la república Rafael Correa realizó un referéndum para reescribir la constitución política del estado por vez vigésima.

La inestabilidad política no se ha producido de manera concomitante en todos los niveles de gobierno. Por ejemplo, el prefecto de la provincia del Guayas, Nicolás Lapenti ha sido elegido democráticamente por cuarta vez para cumplir 16 años en su cargo. En el caso de los alcaldes municipales de Quito y Guayaquil, los dos alcaldes han sido reelegidos, para cumplir 8 años en el cargo. Es por estos motivos que Ecuador se muestra como un caso extremo, en donde la confianza política es mucho mayor en el gobierno local que en el gobierno nacional. El resto de países del grupo con mayor confianza política en los municipios que en el gobierno nacional, muestran una diferencia más moderada.¹⁷

Existe un segundo grupo de países en donde los ciudadanos expresan una mayor confianza institucional en el gobierno nacional en comparación con las municipalidades. En el Gráfico V-4. se muestran a los 8 países que comparten esta característica en el presente estudio. En éste gráfico, los países que se encuentran por debajo de la línea horizontal son aquellos en los que sus habitantes confían más en el gobierno nacional que en el gobierno local. En este caso, Haití se presenta al extremo con una confianza mucho mayor en el gobierno nacional que en la municipalidad, con 24 puntos de diferencia. Al conducir un análisis de este caso, el informe “La Cultura Política en Haití: 2006”, Zéphyr y Pierre (2007) manifiestan que desde la independencia de Haití en 1804, el país ha estado marcado por una tradición de centralización administrativa y financiera. A pesar de que en 1844, el país logró organizar las primeras elecciones en los

¹⁷ Nicaragua 14,3; Paraguay 13,2; Guatemala 12,5; El Salvador 7,0; Perú 4,0; y Honduras 3,3.

Consejos Comunales de Municipalidades, el presidente de ese entonces, Rivière Hérard logró establecer una ley creando una serie de distritos y prefecturas bajo el mando del presidente, para contrarrestar el poder político de los consejos municipales. Es así que en los gobiernos subsecuentes, las municipalidades han sido utilizadas como puntos de extensión del poder central, las cuales además presentaron un sesgo por los constantes fraudes electorales. En respuesta a esta dominación, los propios pobladores fueron creando sus propias instituciones de gobierno local que han sido legitimadas de manera informal.

Las asociaciones locales de desarrollo comunitario se implementaron durante el régimen de Duvalier, empero su funcionamiento ha estado lejos de ser democrático (Zéphyr y Pierre, 2007). Denominados Consejos de Acción Comunitaria (CAC), estas asociaciones debían responder cada vez más al poder central. Puesto que las CAC's estaban muy ligadas al poder de Duvalier, estas instituciones dejaron de existir a partir de 1986. Con el advenimiento de la nueva constitución política de 1987, la conformación de la institucionalidad local no ha sido respetada. Por ejemplo, las Asambleas Departamentales que deberían escoger los miembros del Consejo Interdepartamental nunca se llevaron a cabo. Es por esto que fue imposible establecer las municipalidades. A partir de 1990, los haitianos apoyaron a candidatos provenientes de distintos partidos políticos para el establecimiento de los gobiernos locales, empero en 1995 los pobladores persuadieron a los miembros de las agrupaciones locales para que se postularan como candidatos. Esto inicia una importante etapa en el desarrollo de la gobernabilidad local; no se limitaron a apoyar fuerzas políticas externas sino que también emprendieron campañas para participar en las elecciones locales. Lamentablemente los municipios haitianos no disponen de medios logísticos, técnicos ni financieros para responder a las necesidades de su jurisdicción. En la mayor parte de los casos, los alcaldes dependen de contribuciones extranjeras para la financiación de pequeños proyectos de desarrollo local cuyo control escapa de su competencia. Generalmente, estos proyectos son financiados y administrados por ONGs u otras organizaciones internacionales en colaboración con asociaciones locales y/o comités de barrio, dejando fuera a los oficiales elegidos localmente. Los proyectos del gobierno en el nivel local son más bien esporádicos, aunque la ley de 4 de abril de 1996 exige que las personas electas para ocupar cargos locales, participen plenamente en proyectos de desarrollo local. Es esta ausencia de instituciones municipales efectivas la que llevaría a los haitianos a confiar más en el gobierno nacional que en el nivel local.

En cuanto al resto de países en esta categoría, se puede indicar que a pesar de que los ciudadanos confían más en el gobierno nacional que en las municipalidades, la brecha no es tan grande como en el caso de Haití.¹⁸ Finalmente, en el Gráfico V-4. se presenta un tercer grupo de países en donde la diferencia entre confianza política en el gobierno nacional y la municipalidad no es significativa, es decir, estos países no presentan diferencia estadística en su confianza en los gobiernos locales y el nivel nacional.¹⁹ Recapitulando esta sección, se determina que en una escala de 0 a 100, los habitantes de los 16 países de este estudio le otorgan un promedio de 45 puntos a la confianza que tienen en 10 de las instituciones más representativas de un régimen

¹⁸ Venezuela 11,3; Colombia 8,5; Uruguay 6,0; Chile 5,8; República Dominicana 5,3; Costa Rica 4,7 y México 2,5.

¹⁹ Guyana, Panamá, Brasil y Jamaica con un nivel de confianza del 95%. En el gráfico IV.4. Se puede apreciar que las barras de error coinciden con la línea horizontal que indica que no hay diferencia estadística en la confianza en los dos niveles de gobierno.



democrático. Si se ordena en forma descendente a los países de acuerdo a la suma de confianza política en el gobierno nacional más la confianza en la municipalidad, se obtiene a República Dominicana como el país con mayor confianza en estas dos instituciones, seguido por México, Chile, El Salvador, Colombia, Honduras, Guyana, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Nicaragua, Haití, Jamaica, Paraguay, Perú y por último Ecuador.

Variables que determinan la confianza política en las municipalidades de América Latina y el Caribe

En esta sección se reportan los factores explicativos que llevan a los habitantes a confiar más en el nivel local que en el nivel nacional de gobierno. Para esto, luego de haber determinado el grupo de países cuyos habitantes confían más en la municipalidad -Paraguay, Perú, Ecuador, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala-, se lleva a cabo una regresión lineal para determinar algunas de las variables que explican la confianza en las municipalidades. Kenneth Newton y Pippa Norris (1999) identifican por lo menos tres escuelas de pensamiento sobre confianza política en las instituciones del estado, con los siguientes factores explicativos: (1) Aquellas que se enfocan en las características socio-sicológicas de los individuos, (2) Aquellas que se enfocan en el ambiente cultural de los individuos, grupos y comunidades y (3) Aquellas que se concentran en el desempeño de las instituciones de gobierno.²⁰

De acuerdo a la escuela *socio-sicológica* Newton y Norris (1999) determinan que la calidad interna de la confianza en otras personas, en sí mismo y el optimismo, conforman un conjunto de “confianza básica” que se forma en los primeros estadios de desarrollo psicológico como resultado de la experiencia de la alimentación materno-infantil. En ese estudio, los autores citan a Easton (1965) quien concluye que la presencia de la confianza significa que las necesidades e intereses de los miembros de una sociedad serán atendidos por las autoridades inclusive si ellas estarían expuestas a poca supervisión o escrutinio. Si esta escuela está en lo correcto, uno esperaría un nivel de asociación a nivel individual entre confianza e instituciones políticas. Para determinar cuáles son los factores en relación a esta escuela que determinan los niveles de confianza política en los municipios se hicieron las preguntas señaladas en el Anexo 1. Otra escuela de pensamiento considera que la participación en actividades comunitarias y la socialización, incrementan la confianza en general en la gente y las instituciones, esto quiere decir que mientras mayor es el capital social, mayor será la confianza general de una persona. Por último Newton y Norris (1999) consideran que las instituciones gubernamentales que tienen un buen desempeño, generan una mayor confianza en los individuos; y, al contrario, las instituciones que son ineficientes generan rechazo.

Para poder verificar estas teorías, se elaboró un modelo que además de incluir las variables explicativas de las tres escuelas de pensamiento anteriormente mencionadas, se controla por variables socioeconómicas estándar como: (1) vivienda urbana/rural, (2) sexo, (3) edad, (4) nivel de educación, (5) riqueza medida por la posesión de bienes de capital y (6)

²⁰ Debido a que el formato del cuestionario de Paraguay es diferente al del resto de países, ya que el estudio de este país no fue conducido por el consorcio LAPOP, y los resultados de algunas variables explicativas forman “outliers” en la muestra, se procedió a retirar a Paraguay del resto de este análisis.

variables “dummy” para controlar el efecto-país. Los resultados de esta regresión se pueden apreciar en el Anexo 2.

Los resultados muestran que los niveles de la confianza política en la municipalidad no dependen de las variables de control: sexo, ni tampoco de la riqueza medida por la posesión de bienes de capital. De lo que sí depende la confianza política en la municipalidad, es del nivel de educación. A medida que el nivel de educación aumenta, la confianza política en los municipios *disminuye*, probablemente porque la gente con mayor educación tiende a conocer más las falencias institucionales. Esto es preocupante ya que precisamente es la población altamente educada quien podría acelerar un proceso de reforma estatal, aunque sea también la más crítica. Además estos resultados sugieren que un candidato populista podría obtener un gran beneficio, presionando al sistema para implementar un proceso de descentralización. La Tabla V-2 a continuación resume algunas de las variables explicativas estadísticamente significativas y su relación –positiva o negativa- con la confianza política en los municipios.

Tabla V-2. Predictores de la confianza política en los municipios	
Variables	Efecto en la confianza política en la municipalidad
Edad	+
Educación	-
Sector Urbano	+
Confianza interpersonal	+
Satisfacción con la vida	+
Víctima de corrupción	-
Percepción de los servicios municipales	+
Asistencia a las reuniones municipales	+
Víctima de un acto de delincuencia	-

La Tabla V-2 muestra que mientras que la edad aumenta y el individuo reside en zonas más urbanizadas, la confianza en el municipio es mayor. Adicionalmente se muestra que a mayor confianza interpersonal, mayor será la confianza política en los municipios. Esta relación positiva se manifiesta también en la satisfacción con la vida. En el ámbito del desempeño institucional de acuerdo a los requerimientos de los individuos, las personas que han sido víctimas de la corrupción a nivel de instituciones públicas en el último año, confían menos en el municipio.²¹ Esto ratifica una vez más la importancia del efecto de la percepción de la corrupción en la confianza de los individuos en los municipios. Es lógico pensar que la gente desconfía de las instituciones en las que han sido víctimas de corrupción, pero un hallazgo importante en este estudio es que los individuos pueden además generalizar su desconfianza en otras instituciones

²¹ Se incluyó en la regresión una variable que mide la corrupción a nivel de municipio, pero resultó no significativa.



del estado. En otras palabras, si un individuo es víctima de la corrupción en las instituciones nacionales, este mismo individuo podría desconfiar en todas las instituciones del estado, inclusive en las del nivel local. Lo propio sucede con las personas que han sido víctimas de la delincuencia ya que igualmente muestran su desconfianza en el municipio.

En el caso de las personas que perciben que el municipio está brindando buenos servicios y trata bien a la gente, se observa que estos individuos tienen un nivel mayor de confianza política en los municipios. Este hallazgo es fundamental en términos de un proceso de descentralización, ya que es claro que para generar confianza política y su posterior apoyo a la descentralización, los alcaldes, concejales y demás funcionarios municipales deben optimizar sus servicios, brindando además una atención pertinaz y oportuna a las demandas ciudadanas. Este proceso de construcción de confianza es vital previo a un proceso de descentralización como se analizará en las secciones posteriores.

¿Centralizar o descentralizar?

Una vez caracterizadas algunas de las razones del porqué las personas confían o desconfían políticamente del municipio, se analiza si los latinoamericanos y caribeños de los 19 países incluidos en este estudio estarían dispuestos a que los municipios reciban más responsabilidades y dinero del gobierno nacional, o si por el contrario, el gobierno nacional debería asumir los servicios y responsabilidades municipales. Para determinar el apoyo a la descentralización o centralización fiscal y administrativa se preguntó:²²

LGL2. En su opinión, ¿se le debe dar más obligaciones y más dinero a la municipalidad, o se debe dejar que el gobierno nacional asuma más obligaciones y servicios municipales?

Los resultados de esta pregunta se resumen en el Gráfico V-5.

²² En este estudio no se analiza la opinión pública entorno a la descentralización o centralización política.

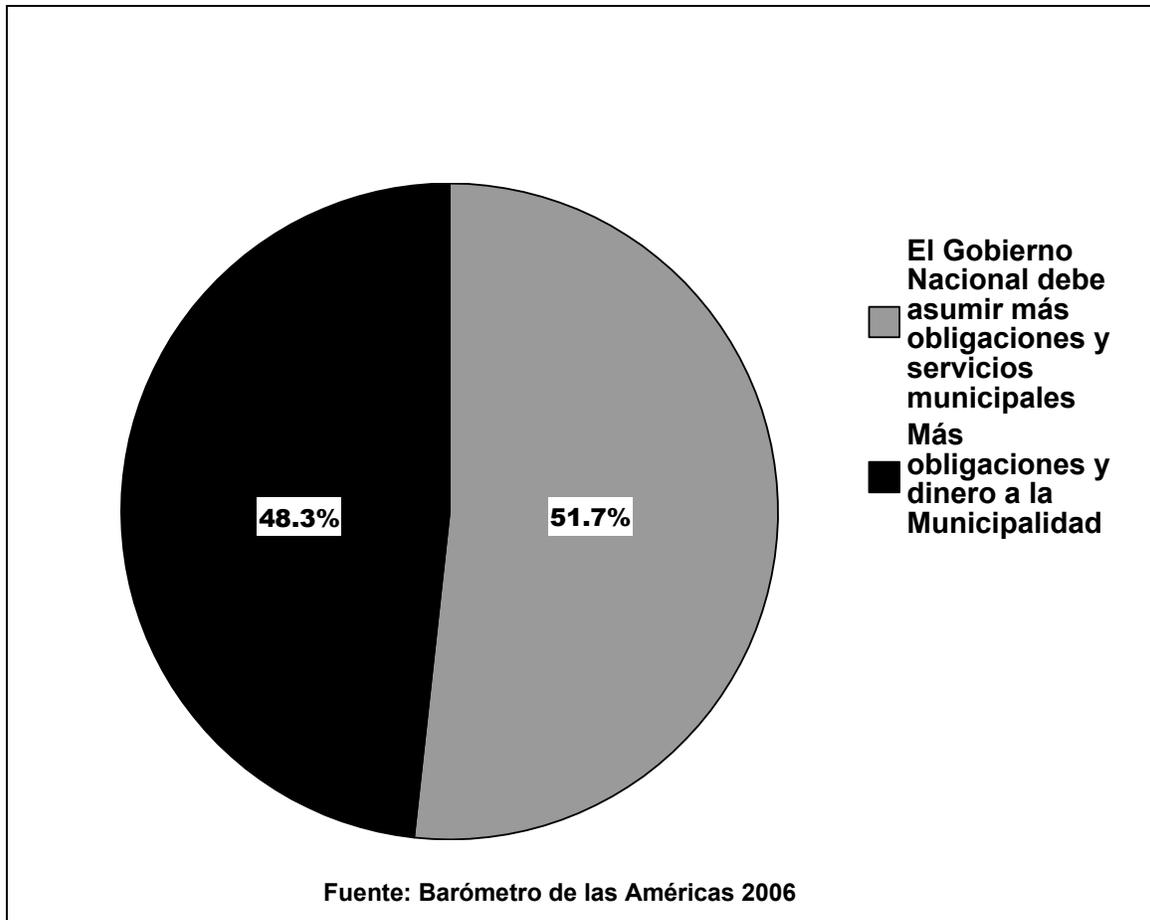


Gráfico V-5. Porcentaje de apoyo a la descentralización o la centralización del estado

Como se puede apreciar en el gráfico, la opinión de los habitantes de América Latina y el Caribe que participaron en este estudio se encuentra cercanamente dividida entre la centralización y la descentralización del estado. Este resultado conlleva a analizar detenidamente cuáles son los países en los que la gente opina que debería haber un proceso mayor de descentralización, y también aquellos países en donde la gente opina que el gobierno nacional es el que debería asumir las funciones de los municipios. El Gráfico V-6 muestra que dentro de los países en los cuales los habitantes prefieren que se realice una mayor transferencia fiscal y administrativa, Jamaica es el que se ubica en primer lugar, en donde un poco más del doble de la población prefiere un proceso de descentralización a uno de centralización.

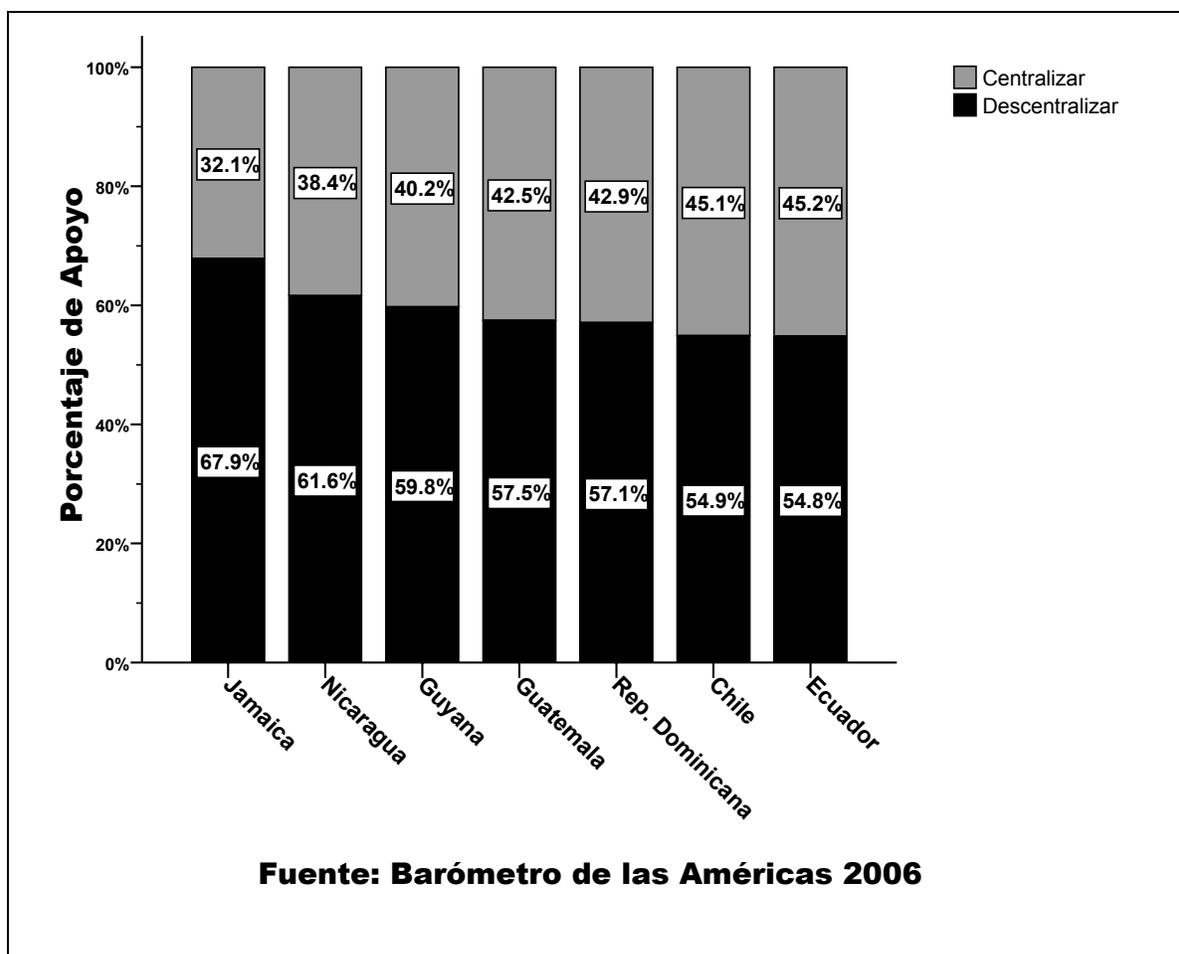


Gráfico V-6. Países con mayor apoyo a la descentralización

Esto se debe en parte, a que a inicios del 2005 varias autoridades locales jamaicanas han preparado los “Planes de Desarrollo Local Sostenible”. En el caso de Kingston y St. Andrew Corporation, las áreas más pobladas de Jamaica, estos planes han recibido la colaboración del Banco Mundial a través de capacitación en gestión financiera y el entrenamiento de los concejales parroquiales en administración pública.²³ El sistema de gobiernos locales en Jamaica fue establecido por los británicos en la segunda mitad del siglo XVII. En 1944, se estableció el sistema de “Concejos Parroquiales” con el objeto de incrementar la representación política en el nivel local. Este sistema de representación local es el que se mantiene hasta la actualidad en Jamaica. En la actualidad, la percepción de los jamaicanos sobre los problemas más graves que atraviesa el país, corresponden al estado deteriorado de su sistema vial, la escasez de agua y el pobre sistema de alcantarillado. Estos problemas coinciden con la necesidad de dotar con más responsabilidades y recursos a los gobiernos locales para que puedan solventar estas necesidades de la población.

En el resto de países –Nicaragua, Guyana, Guatemala, República Dominicana, Chile y Ecuador – más del 50 por ciento de las personas encuestadas manifiestan que se le debe transferir

²³ Los concejales parroquiales son elegidos a través de sufragio popular a nivel local.

más responsabilidades y recursos a la municipalidad. Ahora bien, existe un segundo grupo de países en donde los entrevistados consideran que el gobierno nacional debería asumir más obligaciones y servicios municipales. Los resultados sobre centralización administrativa y fiscal se resumen en el Gráfico V-7.

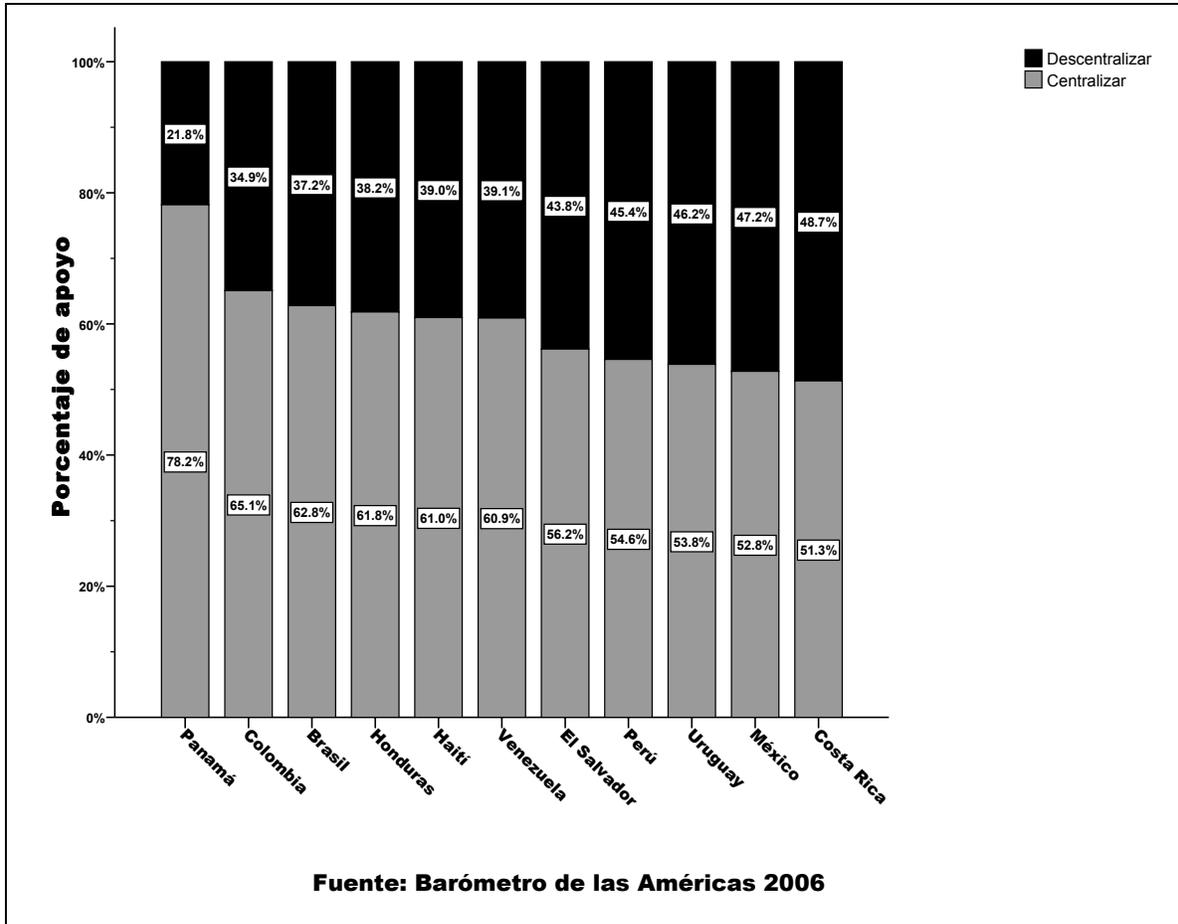


Gráfico IV-7. Países con mayor apoyo a la centralización

Como se puede observar, los panameños que consideran que el gobierno nacional debe asumir más obligaciones y servicios municipales supera en más de 3,5 veces a los que consideran que se deberían llevar a cabo procesos de descentralización. Estos resultados coinciden con los resultados presentados por Daughters y Harper (2007) que presentan a Panamá como el país menos descentralizado de la región.²⁴ En el estudio del proyecto BID “Programa Multifase de Desarrollo Municipal y Apoyo a la Descentralización” Nessim *et al.* (2003), manifiestan que los ingresos tributarios para los municipios panameños constituyen básicamente los impuestos sobre la actividad económica, los impuestos de circulación vehicular y los permisos de construcción. El impuesto a la propiedad inmueble no es municipal. Esto quiere decir que a nivel nacional dos de cada tres municipios no cuenta con los recursos suficientes para cubrir sus gastos de operación. Por este motivo, los servicios municipales son de baja calidad y en general esto desemboca en

²⁴ En términos fiscales y administrativos. En términos de descentralización política, junto con Guyana, Panamá ha sido uno de los últimos países en implementar elecciones locales de alcaldes municipales (ver tabla IV.1.)



una opinión pública desfavorable hacia los gobiernos municipales. El resto de países –Colombia, Honduras, Haití, El Salvador, Perú, México y Costa Rica-, a pesar de que se encuentran dentro del grupo de países con mayor apoyo a la centralización que a la descentralización del estado, la diferencia es menor.

Para determinar algunas de las variables explicativas del apoyo a la centralización o a la descentralización del estado, se llevó a cabo la batería de preguntas del Anexo 3. Además, se incluyeron las siguientes variables socio-demográficas de control: (1) vivienda urbana/rural, (2) sexo, (3) edad, (4) nivel de educación, (5) riqueza medida por la posesión de bienes de capital y (6) variables “dummy” para controlar el efecto-país. Los resultados de la regresión binomial logística, se pueden observar en el Anexo 4. La Tabla V-3 a continuación resume algunas de las variables explicativas estadísticamente significativas y su relación con la descentralización y la centralización del estado.

Tabla V-3. Predictores de la descentralización y la centralización del estado	
Variables	Efecto en la descentralización o la centralización del estado
Sexo (Hombres)	Descentralización
Edad	Descentralización
Sector Urbano	Descentralización
Educación	Descentralización
Eficacia del gobierno de turno	Centralización
Conocimiento político	Descentralización
Percepción de los servicios municipales	Descentralización
Confianza en el municipio	Descentralización
Interés en política	Centralización

La Tabla V-3 muestra que en términos sociodemográficos, el sexo, la edad, el nivel de educación y la zona geográfica en la que habitan los latinoamericanos y caribeños, determina el apoyo a la descentralización. Es así que los hombres, las personas de mayor edad y nivel educativo y que residen en zonas urbanas, apoyan más la descentralización fiscal y administrativa. Asimismo, las personas con mayor conocimiento político, que confían y perciben que el municipio trata bien a las personas y resuelve sus peticiones, tienden también a apoyar más a la descentralización. No obstante, las personas que tienen interés en política y que

consideran que el gobierno nacional de turno es eficiente, apoyan más la centralización. Esto puede deberse a que las personas interesadas en política buscan ocupar cargo públicos del nivel nacional de gobierno, y por esto no precisan la descentralización que puede restar poder al gobierno nacional.

Por último se preguntó si ¿estaría usted dispuesto a pagar más impuestos a la municipalidad para pueda prestar mejores servicios municipales o cree que no vale la pena pagar más impuestos a la municipalidad? Más del 60 por ciento de las personas en cada uno de los 19 países analizados en este estudio contestaron que no vale la pena pagar más impuestos a excepción de Haití en donde el 80 por ciento de los entrevistados estarían dispuestos a pagar más impuestos. La negativa a pagar más impuestos es entendible, ya que nadie quiere hacerlo.

Conclusiones

En este capítulo se ha analizado la opinión pública respecto a la centralización y la descentralización financiera y administrativa como reformas del estado en América Latina y el Caribe. A pesar de los ingentes esfuerzos puestos en marcha en materia de descentralización en la región, existe muy poca evidencia sobre la opinión de la población sobre estos procesos de reforma. Este análisis responde a este déficit, llevando a cabo una encuesta en 19 países de la región, que permite analizar los niveles de confianza en el gobierno central y los municipios y el apoyo que los latinoamericanos y caribeños le brindarían a los procesos de descentralización o centralización.

Contrariamente a lo que se podría esperar en cuanto a un apoyo masivo a la descentralización, la población en Latinoamérica y el Caribe muestra una opinión dividida en cuando a este proceso. Cerca de la mitad de las personas piensan que se le debería dar más obligaciones y recursos a los municipios, mientras que la otra mitad piensa que es el gobierno central quien debería asumir más obligaciones y recursos municipales. Esto coincide con la mínima diferencia entre la confianza en el gobierno nacional y los municipios. Por esto, es necesario precisar cuál sería el apoyo que los gobiernos y los organismos internacionales y otros organismos de cooperación recibirían de la población en el caso de planificar procesos de apoyo a reformas en la transferencia de recursos y responsabilidades a nivel intergubernamental.

Al analizar caso por caso, la conjugación entre confianza en la municipalidad y el gobierno nacional, con el apoyo a la centralización o a la descentralización, se encontró que en Ecuador, Guatemala y Nicaragua, los habitantes confían más en sus municipalidades y estarían dispuestos a apoyar un proceso de descentralización. En el caso de Guyana y Jamaica, a pesar de que el nivel confianza es prácticamente el mismo entre el gobierno nacional y la municipalidad, los pobladores de estos países estarían dispuestos a apoyar el proceso de descentralización. Por último Chile y República Dominicana muestran niveles inferiores de confianza en sus municipios, pero de todas maneras le apostarían a la descentralización. En Perú, Honduras y El Salvador, a pesar de que la gente confía más en las municipalidades que en el gobierno nacional, ellos presentan un mayor apoyo al proceso de centralización del estado. En el caso de Panamá,



Brasil y México, casi no hay distinción entre la confianza en la municipalidad y el gobierno nacional, pero los habitantes prefieren que el gobierno nacional asuma más obligaciones y servicios municipales. Para terminar, los pobladores de Chile, Colombia, Haití, Uruguay y Venezuela, confían más en sus gobiernos nacionales y apoyarían centralizar el estado.

Un factor importante que se debería considerar en estudios posteriores es la descentralización de la justicia. Toda la literatura revisada para este estudio hace mención a tres factores de descentralización –administrativo, político y fiscal- pero en todas ellas se ha dejado por fuera la descentralización de las instituciones judiciales. Por último, un análisis complementario a esta investigación consiste en determinar los niveles de equilibrio de poder en los diferentes niveles de gobierno, a través de la modelización formal y la teoría de juego.

Referencias

- Agresti, Alan and Barbara Finlay. *Statistical Methods for the Social Sciences*. International Edition ed. New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1997.
- Barczak, Monica. "Representation by Consultation? The Rise of Direct Democracy in Latin America." *Latin American Politics and Society* 43, no. 3 (2001): 24.
- Bardhan, Pranab. "Decentralization of Governance and Development." *Journal of Economic Perspectives* 16, no. 4 (2002): 20.
- Barr, Robert. "Parties, Legitimacy and the Motivations for Reform: Devolution and Concentration in Latin America." (2001): 27. Publication data?
- Bunce, Valerie. "Comparative Democratization: Big and Bounded Generalizations." *Comparative Political Studies* 33, no. 6/7 (2000): 32.
- Cameron, John. "Municipal Democratization in Rural Latin America: Methodological Insights from Ecuador." *Bulletin of Latin American Research* 24, no. 3 (2001): 24.
- Campbell, Tim. *The Quiet Revolution: Decentralization and the Rise of Political Participation in Latin American Cities*. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2003.
- Chang, Eric. "Electoral Incentives for Political Corruption under Open-List Proportional Representation." *The Journal of Politics* 67, no. 3 (2005): 15.
- Charles, Andrian and James Smith. *Political Democracy, Trust and Social Justice*. Boston: University Press of New England, 2006.
- Christopher Garman, Stephan Haggard, and Eliza Willis. "Fiscal Decentralization: A Political Theory with Latin American Cases." *World Politics* 53 (2001): 32.
- CIA, Central Intelligence Agency. "The World Factbook." Washington, 2007.
- Dahl, Robert. *Polyarchy; Participation and Opposition*. New Heaven: Yale University Press, 1971.
- Daughters, Robert, Leslie Harper. "Fiscal and Political Decentralization Reforms." In *The State of State Reform in Latin America*, edited by Eduardo Lora, 87 - 121. Washington: Stanford University Press, 2007.
- Epstein, David. "Democratic Transitions." *American Journal of Political Science* 50, no. 3 (2006): 19.
- Escobar-Lemmon, Maria. "Political Support for Decentralization: An Analysis of the Colombian and Venezuelan Legislatures." *American Journal of Political Science* 47, no. 4 (2003): 15.
- Falleti, Tulia. "A Sequential Theory of Decentralization: Latin American Cases in Comparative Perspective." *American Political Science Review* 99, no. 3 (2005): 20.
- Freire, James Keese and Marco. "Decentralisation and Ngo-Municipal Government Collaboration in Ecuador." *Development in Practice* 16, no. 2 (2006): 14.
- Garman, Christopher, Stephan Haggard, and Eliza Willis. "Fiscal Decentralization: A Political Theory with Latin American Cases." *World Politics* 53 (2001): 32.
- Grote, Joachim vonBraun and Ulrike. "Does Decentralization Serve the Poor?" *IMF* (2000): 32.
- Hetherington, Marc. *Why Trust Matters?* New Jersey: Princeton University Press, 2005.



- Hiskey, Jonathan, and Mitchell Seligson. "Pitfalls of Power to the People: Decentralization, Local Government Performance, and System Support in Bolivia." *Studies in Comparative International Development* 37, no. 4 (2003): 25.
- Joseph Tulchin, Andrew Selee. *Decentralization and Democratic Governance in Latin America*. Washington: Woodrow Wilson International Center for Scholars, 2004.
- Kenneth Newton, Pippa Norris. "Trust in Public Institutions: Faith, Culture or Performance?" (2000). This looks like an incomplete entry
- Lagos, Martha. "How People View Democracy: Between Stability and Crisis in Latin America." *Journal of Democracy* 12, no. 1 (2001): 9.
- Licha, Isabel. "Citizen Participation and Local Government in Latin America: Advances, Challenges and Best Practices." *IADB* (2002): 8.
- Lucero, Jose. "High Anxiety in the Andes: Crisis and Contention in Ecuador." *Journal of Democracy* 12, no. 2 (2001): 15.
- Manor, James. *The Political Economy of Democratic Decentralization*. Washington, 1999.
- Nessim, Heli, Ana María Linares, Iveta Ganey, Diego Buchara, Julio Norori, Javier Aguilar, Silvia Echeverría, Huáscar Eguino. "Programa Multifase De Desarrollo Municipal Y Apoyo a La Descentralización ", 15: BID, 2003.
- Newton Kenneth and Pippa Norris. "Trust in Public Institutions: Faith, Culture or Performance?" *Harvard University* (2000): 26.
- O'Neill, Kathleen. "Decentralization as an Electoral Strategy." *Comparative Political Studies* 36, no. 9 (2003): 24.
- O'Neill, Kathleen. *Decentralizing the State: Elections, Parties, and Local Power in the Andes*. New York: Cambridge University Press, 2005.
- Perez, Maria Garcia-Guadilla and Carlos. "Democracy, Decentralization and Clientelism: New Relationship and Old Practices " *Latin American Perspectives* 29, no. 5 (2002): 21.
- Pérez-Liñán, David Altman and Aníbal. "Assessing the Quality of Democracy: Freedom, Competitiveness and Participation in Eighteen Latin American Countries" *Democratization* 9, no. 2 (2002): 15. format??
- Peruzzotti, Catalina Smulovitz and Enrique. "Societal Accountability in Latin America." *Journal of Democracy* 11, no. 4 (2000): 12.
- Radcliffe, Sarah, Nina Laurie and Robert Andolina "Reterritorialised Space and Ethnic Political Participation: Indigenous Municipalities in Ecuador." *Space & Polity* 6, no. 3 (2002): 17.
- Roberts, Kenneth. "Social Inequalities without Class Cleavages in Latin America's Neoliberal Era." *Studies in Comparative International Development* 36, no. 4 (2002): 31.
- Sadoulet, Alain de Janvry and Elisabeth. "Rural Poverty in Latin America: Determinants and Exit Paths." *Food Policy* 25 (2000): 21.
- Selee, Andrew. "Exploring the Link between Decentralization and Democratic Governance." In *Decentralization and Democratic Governance in Latin America*, edited by Andrew Selee Joseph Tulchin, 35. Washington, 2004.
- Seligson, Mitchell. "The Impact of Corruption on Regime Legitimacy: A Comparative Study of Four Latin American Countries." *The Journal of Politics* 64, no. 2 (2002): 26.
- Seligson, Mitchell , Polibio Cordoba. *Auditoría De La Democracia Ecuador*. Quito: Cedatos, 2006.
- . *Auditoría De La Democracia Ecuador*. Quito: Cedatos, 2004.
- Sorensen, Georg. *Democracy and Democratization: Processes and Prospects in a Changing World* Westview Press, 1998.

- Sukhtankar, Carol Graham and Sandip. "Does Economic Crisis Reduce Support for Markets and Democracy in Latin America? Some Evidence from Surveys of Public Opinion and Well Being." *Journal for Latin American Studies (UK)* (2004).
- Treisman, Daniel. "Decentralization and Inflation: Commitment, Collective Action or Continuity." *The American Political Science Review* 94, no. 4 (2000): 22.
- . "Defining and Measuring Decentralization: A Global Perspective." (2002): 38. Publication data?
- Zéphyr, Dominique, Yves-François Pierre, and Abby Córdova. *Culture politique de la démocratie en Haïti: 2006*. Edited by Latin American Public Opinion Project. Nashville, TN: Vanderbilt University, 2007.

Anexo 1

<p>LS3. Hablando de otras cosas. En general ¿hasta qué punto se encuentra satisfecho con su vida?</p>
<p>IT1. Ahora, hablando de la gente de aquí, ¿diría que la gente de su comunidad es ...? (1) Muy confiable (2) Algo confiable (3) Poco confiable (4) Nada confiable (8) NS/NR</p>
<p>NP1. ¿Ha asistido a un cabildo abierto o una sesión municipal durante los últimos 12 meses?</p>
<p>SGL1. Diría usted que los servicios que la municipalidad está dando a la gente son: (1) Muy buenos (2) Buenos (3) Ni buenos ni malos (regulares) (4) Malos (5) Muy malos (pésimos) (8) NS/NR</p>
<p>SGL2. ¿Cómo considera que le han tratado a usted o a sus vecinos cuando han ido a la municipalidad para hacer trámites? ¿Le han tratado muy bien, bien, ni bien ni mal, mal o muy mal?</p>
<p>VIC1. ¿Ha sido usted víctima de algún acto de delincuencia en los últimos 12 meses?</p>
<p>EXC2. ¿Algún agente de policía le pidió una mordida (o soborno) en el último año?</p>
<p>EXC6. ¿Un empleado público le ha solicitado una mordida (o soborno) en el último año?</p>
<p>EXC11. ¿Ha tramitado algo en el municipio/ delegación en el último año? No → Marcar 9 Sí → Preguntar: Para tramitar algo en el municipio/delegación (como un permiso, por ejemplo) durante el último año, ¿ha tenido que pagar alguna suma además de lo exigido por la ley?</p>
<p>EXC13. ¿Usted trabaja? No → Marcar 9 Sí → Preguntar: En su trabajo, ¿le han solicitado alguna mordida (coima) en el último año?</p>
<p>EXC14. ¿En el último año, tuvo algún trato con los juzgados? No → Marcar 9 Sí → Preguntar: ¿Ha tenido que pagar una mordida (coima) en los juzgados en el último año?</p>
<p>EXC15. ¿Usó servicios médicos públicos en el último año? No → Marcar 9 Sí → Preguntar: Para ser atendido en un hospital o en un puesto de salud durante el último año, ¿ha tenido que pagar alguna mordida (o soborno)?</p>
<p>EXC16. ¿Tuvo algún hijo en la escuela o colegio en el último año? No → Marcar 9 Sí → Preguntar: En la escuela o colegio durante el último año, ¿tuvo que pagar alguna mordida (o soborno)?</p>
<p>EXC17. ¿Alguien le pidió una mordida (o soborno) para evitar el corte de la luz eléctrica?</p>
<p>EXC18. ¿Cree que como están las cosas a veces se justifica pagar una mordida (o soborno)?</p>
<p>EXC19. ¿Cree que en nuestra sociedad el pagar mordidas (o sobornos) es justificable debido a los malos servicios públicos, o no es justificable?</p>

Anexo 2

Coeficientes

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.540	1.423		4.596	.000
	Sexo (hombre)	.439	.377	.007	1.165	.244
	Edad	.367	.134	.018	2.746	.006
	Educación	-.769	.287	-.020	-2.682	.007
	Sector Urbano	1.162	.449	.018	2.589	.010
	Riqueza individual medida por la posesión de bienes de capital	-.187	.115	-.013	-1.616	.106
	Confianza interpersonal	.077	.006	.078	12.031	.000
	Satisfacción con su vida	.021	.007	.019	2.805	.005
	Número total de maneras que han sido víctimas de corrupción en el último año	-2.108	.250	-.056	-8.439	.000
	Percepción de los servicios municipales	.153	.019	.114	7.975	.000
	Asistencia a reuniones municipales	.424	.022	.282	19.475	.000
	Entrevistado que han sido víctima de un acto de delincuencia	-.019	.005	-.024	-3.742	.000
	Ecuador	2.919	1.139	.024	2.564	.010
	El Salvador	13.077	1.146	.108	11.415	.000
	Guatemala	12.328	1.174	.097	10.501	.000
	Honduras	8.723	1.170	.071	7.452	.000
	Nicaragua	8.082	1.141	.065	7.085	.000
	Peru	4.093	1.108	.034	3.693	.000
	República Dominicana	13.018	1.166	.106	11.160	.000
	Chile	11.839	1.185	.097	9.991	.000
	Costa Rica	7.004	1.209	.058	5.794	.000
	Guyana	9.433	1.189	.069	7.932	.000
	Jamaica	7.755	1.212	.054	6.399	.000
	Panama	6.382	1.153	.050	5.537	.000
	Mexico	15.672	1.167	.128	13.431	.000
	Uruguay	11.564	1.199	.095	9.646	.000
	Venezuela	2.874	1.255	.020	2.291	.022

a. Resultados de la regresión multivariada. Variable Dependiente: Confianza Municipal



Anexo 3

Ahora, en esta misma escala, (<i>seguir con tarjeta A: escala de 1 a 7 puntos</i>)
N1. Hasta qué punto diría que el Gobierno actual combate la pobreza.
N3. Hasta qué punto diría que el Gobierno actual promueve y protege los principios democráticos.
N9. Hasta qué punto diría que el Gobierno actual combate la corrupción en el gobierno.
N10. Hasta qué punto diría que el Gobierno actual protege los derechos humanos.
N11. Hasta qué punto diría que el Gobierno actual mejora la seguridad ciudadana.
N12. Hasta qué punto diría que el Gobierno actual combate el desempleo.
Ahora queremos saber cuánta información sobre política y sobre el país se le transmite a la gente...
G11. ¿Cuál es el nombre del actual presidente de los Estados Unidos? [NO LEER: George Bush]
G12. ¿Cómo se llama el Presidente del Congreso/Asamblea de país? [NO LEER: insertar nombre]
G13. ¿Cuántas provincias/departamentos tiene el país? [NO LEER: insertar número]
G14. ¿Cuánto tiempo dura el período presidencial en país? [NO LEER: insertar número de años]
G15. ¿Cómo se llama el presidente de Brasil? [NO LEER: Luiz Inácio Lula da Silva, aceptar también “Lula”]
SGL1. Diría usted que los servicios que la municipalidad está dando a la gente son: (1) Muy buenos (2) Buenos (3) Ni buenos ni malos (regulares) (4) Malos (5) Muy malos (pésimos) (8) NS/NR
SGL2. ¿Cómo considera que le han tratado a usted o a sus vecinos cuando han ido a la municipalidad para hacer trámites? ¿Le han tratado muy bien, bien, ni bien ni mal, mal o muy mal?
VIC1. ¿Ha sido usted víctima de algún acto de delincuencia en los últimos 12 meses?
EXC2. ¿Algún agente de policía le pidió una mordida (o soborno) en el último año?
EXC6. ¿Un empleado público le ha solicitado una mordida (o soborno) en el último año?
EXC11. ¿Ha tramitado algo en el municipio/ delegación en el último año? No → Marcar 9 Sí → Preguntar: Para tramitar algo en el municipio/delegación (como un permiso, por ejemplo) durante el último año, ¿ha tenido que pagar alguna suma además de lo exigido por la ley?
EXC13. ¿Usted trabaja? No → Marcar 9 Sí → Preguntar: En su trabajo, ¿le han solicitado alguna mordida (coima) en el último año?
EXC14. ¿En el último año, tuvo algún trato con los juzgados? No → Marcar 9 Sí → Preguntar: ¿Ha tenido que pagar una mordida (coima) en los juzgados en el último año?
EXC15. ¿Usó servicios médicos públicos en el último año? No → Marcar 9 Sí → Preguntar: Para ser atendido en un hospital o en un puesto de salud durante el último año, ¿ha tenido que pagar alguna mordida (o soborno)?

Ahora, en esta misma escala, (*seguir con tarjeta A: escala de 1 a 7 puntos*)

EXC16. ¿Tuvo algún hijo en la escuela o colegio en el último año?

No → Marcar 9

Sí → Preguntar:

En la escuela o colegio durante el último año, ¿tuvo que pagar alguna mordida (o soborno)?

EXC17. ¿Alguien le pidió una mordida (o soborno) para evitar el corte de la luz eléctrica?

EXC18. ¿Cree que como están las cosas a veces se justifica pagar una mordida (o soborno)?

EXC19. ¿Cree que en nuestra sociedad el pagar mordidas (o sobornos) es justificable debido a los malos servicios públicos, o no es justificable?

¿Para poder resolver sus problemas alguna vez ha pedido usted ayuda o cooperación ... ?

CP2. A algún diputado del Congreso

CP4A. A alguna autoridad local (alcalde, municipalidad, prefecto, intendente)

CP4. A algún ministerio/secretario, institución pública, u oficina del estado

B14. ¿Hasta qué punto tiene confianza usted en el Gobierno Nacional?

B32. ¿Hasta qué punto tiene usted confianza en su municipalidad?



Anexo 4

Coefficientes

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1(a)						
Sexo(hombre)	.085	.031	7.634	1	.006	1.089
Edad	.057	.011	27.439	1	.000	1.058
Sector Urbano	.193	.036	27.923	1	.000	1.213
Educación	.172	.025	47.993	1	.000	1.187
Riqueza	.006	.010	.377	1	.539	1.006
Eficacia del Gobierno de Turno	-.003	.001	17.936	1	.000	.997
Conocimiento Político	.004	.001	34.513	1	.000	1.004
Percepción de los servicios municipales	.012	.001	185.704	1	.000	1.012
Confianza en el Municipio	.006	.001	116.514	1	.000	1.006
Confianza en el Gobierno Nacional	-.001	.001	1.837	1	.175	.999
Interés en Política	-.109	.017	40.742	1	.000	.897
Solicitud de ayuda a la alcaldía	.001	.000	2.378	1	.123	1.001
Solicitud de ayuda a un Ministerio, Victimización delincuencia	.000	.000	.011	1	.917	1.000
Victimización Corrupción	.014	.020	.481	1	.488	1.014
Ecuador	1.314	.099	177.803	1	.000	3.719
Salvador	.912	.096	89.407	1	.000	2.489
Guatemala	1.577	.101	245.647	1	.000	4.842
Honduras	.685	.097	49.583	1	.000	1.983
Nicaragua	1.810	.100	327.056	1	.000	6.111
Peru	1.048	.097	117.442	1	.000	2.853
RDominicana	1.543	.098	246.783	1	.000	4.680
Chile	1.505	.098	234.202	1	.000	4.503
CRica	1.221	.100	147.967	1	.000	3.392
Guyana	1.550	.105	216.838	1	.000	4.713
Jamaica	2.023	.109	345.640	1	.000	7.563
Haiti	1.022	.103	98.012	1	.000	2.780
Mexico	1.145	.102	126.660	1	.000	3.143
Uruguay	.894	.101	79.082	1	.000	2.445
Brazil	.753	.101	55.351	1	.000	2.124
Venezuela	.961	.104	85.007	1	.000	2.615
Constant	-2.695	.148	330.785	1	.000	.068

b. Variable Dependiente: Descentralización versus Centralización.

VI. Interpretando el voto a la izquierda en América Latina: ¿riesgo u oportunidad?

Rosario Queirolo*

Resumen

¿Cuál es el efecto que las reformas económicas de mercado tuvieron en el voto hacia los partidos de izquierda en América Latina? ¿Están los latinoamericanos votando por la izquierda debido a sus posturas ideológicas o como una forma de castigar a los partidos tradicionales? Los latinoamericanos pueden votar a la izquierda porque quieren mayor intervención estatal en la economía, una distribución del ingreso más igualitaria o mayor inversión en políticas sociales. Por otro lado, también es posible argumentar que los electores no deciden el voto de acuerdo a sus políticas preferidas sino de acuerdo a los resultados económicos del gobierno anterior, y por lo tanto, votan a la izquierda porque el modelo neoliberal falló en producir crecimiento económico sostenido y resolver el endémico problema del desempleo. Mi argumento es que el reciente crecimiento de los partidos de izquierda en América Latina es un castigo de los votantes hacia los partidos tradicionales que fueron incapaces de mejorar el bienestar de sus electores. Además, este artículo compara las actitudes hacia la democracia de los latinoamericanos que se definen de izquierda con las de quienes se definen de derecha con el objetivo de analizar si el movimiento del continente hacia la izquierda representa un riesgo o una oportunidad para la democracia. La evidencia del Barómetro de las Américas 2006/07 indica que el apoyo a la democracia no difiere significativamente entre quienes se identifican con la izquierda o con la derecha.

¿Es el voto a la izquierda un riesgo para la democracia en América Latina? Desde los últimos años del siglo XX, muchos países latinoamericanos han elegido gobiernos que se identifican ideológicamente con la izquierda. En 1999, Hugo Chávez, quien intentó dar un golpe de estado algunos años antes, ganó las elecciones en Venezuela con una campaña en contra del Consenso de Washington, propuestas de destruir el viejo orden social y mejorar las condiciones de vida de los pobres. Brasil también giró a la izquierda en las elecciones de 2002 con la victoria del Partido de los Trabajadores (Partido dos Trabalhadores, PT). En Argentina, una fracción de izquierda dentro del Partido Peronista liderada por Néstor Kirchner ganó las elecciones presidenciales de 2003. En el vecino Uruguay, el Frente Amplio, una coalición de partidos de izquierda que desde su fundación en 1971 aumentó progresivamente su caudal electoral, finalmente ganó la elección presidencial de 2004. Chile es un país que ha sido gobernado por una coalición de izquierda desde su apertura a la democracia en 1990, alternando la presidencia entre candidatos de la socialdemocracia y el socialismo. La actual presidenta de Chile elegida en 2005, Michelle Bachelet, es miembro del Partido Socialista. También en el 2005, los bolivianos decidieron darle la presidencia de uno de los países más pobres del continente a Evo Morales,

* Profesora de Ciencia Política, Universidad de Montevideo.



candidato por el Movimiento al Socialismo (MAS) y uno de los principales líderes del sindicato cocalero. Manuel López Obrador, el candidato presidencial del Partido Revolucionario Democrático (PRD) mexicano, perdió la elección presidencial de 2006 por menos del 1% de los votos. Más recientemente, a finales de 2006, Nicaragua y Ecuador también eligieron partidos de izquierda para comandar el gobierno nacional. Daniel Ortega, ex presidente de Nicaragua (1985-1990) y principal líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) fue reelecto en noviembre de 2006. En Ecuador, Rafael Correa ganó la presidencia en la segunda vuelta de la elección presidencial de 2006 con el apoyo de partidos políticos de izquierda y movimientos indígenas.

Este movimiento de América Latina hacia la izquierda ha llevado a periodistas, analistas políticos y científicos políticos a buscar explicaciones. Una de las que ha tenido mayor difusión sugiere que el crecimiento electoral de los partidos de izquierda es una reacción en contra del modelo neoliberal implementado durante los años 90. Por otro lado, también se cuestiona los posibles riesgos que estos gobiernos de izquierda puedan implicar para la estabilidad de la democracia. Este capítulo explora que hay de cierto en estas dos ideas usando la encuesta de opinión pública AmericasBarometer 2006/07.

La investigación llega a tres conclusiones principales. Primero, los latinoamericanos no están votando a la izquierda por estar en contra de las reformas económicas neoliberales. El voto hacia los partidos de izquierda es más el resultado del descontento popular con la situación económica que de cualquier otro factor. Segundo, las posibilidades que tienen los partidos de izquierda de capitalizar el descontento económico y social dependen principalmente del número de partidos que sean “oposición creíble” en el sistema político. En países como Brasil y Uruguay, donde los partidos de izquierda representaban la única oposición creíble, era más fácil para estos capitalizar el descontento popular que en países como México, donde también existía una “oposición creíble” al PRI identificada con la derecha (el PAN). Por último, los resultados de este artículo demuestran que el incremento del voto a la izquierda en América Latina no constituye un riesgo para la democracia. Por el contrario, es un signo positivo porque los latinoamericanos han demostrado que pueden incorporar a los partidos de izquierda en el juego político y darles la oportunidad de gobernar. La democracia está en riesgo cuando los partidos de oposición son siempre los mismos y nunca acceden al gobierno, como fue el caso de México por más de 50 años. En América Latina, muchos partidos de izquierda permanecieron durante varios años como “perdedores” en el juego electoral, lo cual llevó a muchos de ellos a despreciar las elecciones como el mecanismo adecuado para acceder al gobierno. Por esta razón, la llegada de partidos de izquierda al gobierno de varios países latinoamericanos es un indicador de salud democrática y un mecanismo para reforzar las actitudes democráticas entre los ciudadanos; no una causa de preocupación. Los electores latinoamericanos están haciendo rendir cuentas a sus gobernantes, los remueven de sus cargos cuando no cumplen con lo prometido y los cambian por quienes todavía representan una “oposición creíble”. En conclusión, el reciente giro de América Latina hacia la izquierda ha ayudado a intensificar y fortalecer la democracia en la región incorporando a los “perdedores” en el juego político, no a debilitarla.

La primera sección de este artículo discute el argumento de que el crecimiento de la izquierda en América Latina es el resultado del rechazo a las reformas económicas neoliberales implementadas en la región. Este argumento es puesto a prueba en tres países en los cuales los partidos de izquierda han ido incrementando su apoyo electoral durante la última década: Brasil,

México y Uruguay. La segunda sección describe cada uno de estos casos y explica las teorías e hipótesis utilizadas para evaluar este argumento. La tercera sección presenta el modelo estadístico y los resultados que indican que el voto hacia los partidos de izquierda no se debe al rechazo a las reformas económicas, sino una reacción contra la mala situación económica. El segundo argumento que el artículo pone a prueba es si el voto a los partidos de izquierda implica algún tipo de riesgo para las frágiles democracias latinoamericanas. La evidencia va en contra de este argumento y muestra que el éxito de varios partidos de izquierda en la región fortalece la democracia porque canaliza el descontento social por vías institucionales. La cuarta sección explica este argumento y plantea las hipótesis usadas para evaluar su validez. La quinta sección presenta los resultados estadísticos usando la encuesta de opinión pública AmericasBarometer 2006/07. Para finalizar, se discuten las implicancias de estos resultados para la democracia y la rendición de cuentas (“accountability”) en la región.

Primer argumento: El voto a la izquierda como reacción en contra del Consenso de Washington

Durante las décadas del 80 y 90 se implementó en América Latina el llamado “Consenso de Washington”. Las reformas económicas de mercado fueron iniciadas en los 80s, y en algunos casos como Chile, Uruguay, Argentina y Colombia, incluso antes (Morley, Machado y Pettinato 1999)¹. En este capítulo, los términos “Consenso de Washington”, “reformas de mercado”, “reformas estructurales”, “reformas neoliberales” o “políticas ortodoxas” son usados indistintamente y refieren al mismo grupo de políticas definidas por Williamson en el “Consenso de Washington”: disciplina fiscal, restricciones en el gasto público, reforma tributaria, liberalización de tasas de interés, tasas de cambio competitivas, liberalización del comercio, liberalización de las restricciones para inversiones externas, privatizaciones, desregulación y fortalecimiento de los derechos de propiedad.

El éxito o fracaso del Consenso de Washington ha sido estudiado extensamente (Dutch 2003; Escaith y Morley 2001; Huber y Solt 2004; Kuczynski y Williamson 2003; Lora y Panizza 2002; Lora, Panizza y Quispe-Agnoli 2004; Stallings y Peres 2000). Inclusive se ha estudiado el impacto de algunas reformas en concreto (Lora y Barrera 1997). Independientemente de las diferencias entre estos estudios, todos ellos están de acuerdo en que después de dos décadas de reformas económicas, el modelo no ha producido el crecimiento económico esperado. Sí se logró disciplina fiscal en la región y hablar de hiperinflación suena a un tema del pasado, pero el crecimiento económico sostenido y la mejora en los indicadores sociales no tuvieron la misma suerte. El caso chileno puede considerarse una excepción en la región, es difícil encontrar otro país en donde exista el mismo crecimiento y desarrollo de los indicadores sociales.

Más allá de los resultados objetivos del modelo neoliberal, el desencanto de los latinoamericanos con el modelo es importante y puede verse en diferentes indicadores. Muchos

¹ Según Morley et al. (1999), la mayoría del incremento en los índices de reforma comercial y financiera que ocurrieron durante los años 1970 se deben a las políticas implementadas por Chile, Uruguay, Argentina y Colombia.



de los defensores más férreos del modelo han reconocido que el resultado no fue el que esperaban. Organizaciones internacionales que promocionaron y defendieron las reformas estructurales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, han reconocido que las reformas no produjeron los resultados planeados, y ahora sugieren cuatro formas de continuar: establecer defensas contra las crisis, completar las reformas de la primera generación, avanzar con las reformas de la segunda generación y disminuir la desigualdad (IDEA 2004). Desde esta perspectiva, no fueron las reformas las que estaban mal pensadas, sino su implementación la que falló. Por lo tanto, las nuevas reformas serían las responsables de lograr los resultados esperados. Varios de los investigadores que inicialmente promovieron el Consenso de Washington, luego se transformaron en sus críticos: Jeffrey Sachs (2005), Joseph Stiglitz (2002) y Dani Rodrik (2001) son ejemplos de este cambio. La comunidad internacional muestra signos de “fatiga reformadora” (Edwards 1997)². La falta de apoyo al modelo neoliberal también puede verse entre el público en general y existe una gran desconfianza entre los líderes políticos y ejecutores de políticas públicas latinoamericanas sobre los beneficios que las reformas de mercado implican (Lora, Panizza y Quispe-Agnoli 2004; Panizza y Yañez 2005).

Para muchos analistas políticos, el reciente incremento del voto hacia los partidos de izquierda en América Latina es consecuencia de esta “fatiga reformadora”. En otras palabras, los votantes están cansados de las reformas económicas estructurales y sus consecuencias, y por esta razón votan por partidos políticos que favorecen una mayor intervención del estado en la economía. La revista *The Economist* resume este argumento de la siguiente manera: “De forma acertada o equivocada, los votantes culpan al Consenso de Washington de la recesión económica. Como es de esperar que suceda en las democracias, los electores votan a la oposición, la cual tiende a estar en la izquierda” (The Economist 2006)³.

Sin embargo, esta no es la única respuesta. Otra posibilidad es que este giro a la izquierda sea simplemente la respuesta a una necesidad de cambio. El descontento popular con los partidos tradicionales, los cuales no supieron (o no pudieron) resolver los problemas de pobreza, corrupción y desigualdad de la región, llevaron a los latinoamericanos a votar por partidos políticos que se espera mejorarán la calidad de vida de los habitantes. En otras palabras, esta interpretación argumenta que el giro de los latinoamericanos hacia la izquierda no responde a posturas ideológicas sino al deseo de castigar a los actuales gobernantes por su mala gestión económica.

Este capítulo investiga qué es cierto en cada uno de estos argumentos. ¿Cuál es el efecto que las reformas económicas de mercado tuvieron en el voto hacia los partidos de izquierda en América Latina? ¿Están los latinoamericanos votando por la izquierda debido a sus posturas ideológicas o como una forma de castigar a los partidos tradicionales? Los latinoamericanos pueden votar a la izquierda porque quieren mayor intervención estatal en la economía, una distribución del ingreso más igualitaria o mayor inversión en políticas sociales. Después de una década de reformas neoliberales, pueden pensar que es “tiempo de cambiar” (Schlesinger 1986),

² “Fatiga reformadora” es un concepto acuñado por Sebastian Edwards (1997) y representa el cansancio de los ciudadanos con los sacrificios que implicaron las reformas económicas en cada uno de los países.

³ El original está en inglés. Traducción propia.

y como consecuencia comportarse guiados por sus políticas preferidas. Por otro lado, también es posible argumentar que los electores no deciden el voto de acuerdo a sus políticas preferidas sino de acuerdo a los resultados económicos del gobierno anterior, y por lo tanto, votan a la izquierda porque el modelo neoliberal falló en producir crecimiento económico sostenido y resolver el endémico problema del desempleo. Estas dos explicaciones no son incompatibles. Ambas pueden ser correctas. Los latinoamericanos pueden estar votando a la izquierda porque no quieren más políticas económicas que dejen la suerte del país en manos del mercado, y también porque están castigando a los partidos que tuvieron una mala gestión económica.

Mi argumento es que el reciente crecimiento de los partidos de izquierda en América Latina es un castigo de los votantes hacia los partidos tradicionales que fueron incapaces de mejorar el bienestar de sus electores. La mayoría de los latinoamericanos ha pasado por dificultades económicas durante sucesivos gobiernos de diferentes partidos políticos, y algunas investigaciones recientes sugieren que los votantes tienen memoria económica de largo plazo (Benton 2005) y no sólo castigan al partido del gobierno de turno por los malos resultados económicos, sino también a quienes lo antecedieron. Los partidos de izquierda, cuando han estado fuera de las coaliciones de gobierno y se han mantenido como oposición, toman ventaja de esta situación y capitalizan el descontento social y económico. Siguiendo este razonamiento, los latinoamericanos, al votar a la izquierda, parecen estar buscando alternativas creíbles al status quo en vez de volverse anti-mercado en sus posturas políticas.

Teorías, hipótesis y casos

El comportamiento electoral en América Latina es usualmente considerado muy volátil e impredecible debido a la falta de identificaciones partidarias e ideológicas fuertes. Los latinoamericanos parecen basar su decisión de voto en factores de corto plazo como las condiciones económicas (Cantón y Jorrat 2002; Roberts y Wibbels 1999) y las imágenes de los candidatos (Echegaray 2005; Weyland 2003). Es en este contexto que el reciente triunfo de los partidos de izquierda llama la atención. Si la ideología y las identificaciones partidarias no son factores de decisión de voto relevantes en América Latina (Echegaray 2005), ¿por qué los votantes están eligiendo partidos identificados con la izquierda ideológica? ¿Es el voto hacia los partidos de izquierda otro ejemplo de la teoría de voto económico por la cual los ciudadanos castigan al partido de gobierno por los malos resultados económicos? ¿Están los votantes eligiendo partidos de izquierda porque sus candidatos son más atractivos? O, alternativamente, ¿están volviéndose más ideológicos y orientados por sus preferencias políticas porque las consideraciones ideológicas realmente son importantes y los votantes rechazan el modelo neoliberal?

Teniendo en cuenta lo que se ha investigado en Europa y los Estados Unidos en el área de comportamiento electoral, así como los resultados de estudios previos realizados en la región, se ponen a prueba dos teorías para explicar el crecimiento de la izquierda en América Latina: la teoría del voto económico y los “clivages” políticos creados por procesos políticos (Przeworski y Sprague 1986; Torcal y Mainwaring 2003). En particular, el análisis pretende entender el rol de las evaluaciones económicas (teoría de voto económico), y la ideología y posturas políticas (“clivages” creados por procesos políticos) en el crecimiento del voto hacia la izquierda en



América Latina. Al mismo tiempo, se pondrá a prueba si los votantes latinoamericanos se orientan por las políticas (la ideología y las posturas políticas son determinantes del voto), o se orientan por los resultados (las evaluaciones económicas son los factores decisivos del voto), o ambas. Las siguientes secciones del capítulo describen cada una de estas teorías, resumen las principales investigaciones realizadas en América Latina, y plantean las hipótesis y variables con que cada una de las teorías es puesta a prueba.

Teoría del voto económico

La literatura sobre comportamiento electoral en América Latina está claramente dominada por la explicación del voto económico. Esta teoría argumenta que si la economía va bien, los votantes reelegirán al partido que gobierna; mientras que si la economía va mal, los ciudadanos castigarán al partido de gobierno. Hay al menos cuatro formas en que la teoría funciona: voto egotrópico, voto sociotrópico (Kinder y Kiewiet 1981), voto retrospectivo y voto prospectivo (MacKuen, Erikson y Stimson 1992). Estas distinciones llevan a cuatro posibles combinaciones por las cuales los electores pueden construir sus evaluaciones de la situación económica: evaluando que tan buena o mala ha sido la situación económica del país durante los últimos años (retrospectivo sociotrópico), evaluando las expectativas de cómo va a ser la situación económica del país en el futuro (prospectivo sociotrópico), considerando que tan buena o mala ha sido la situación económica de su familia durante los últimos años (retrospectivo egotrópico), o pensando en las expectativas económicas familiares para los próximos años (prospectivo egotrópico).

La teoría de voto económico ha probado su validez en contextos económicos y políticos estables como Estados Unidos y Europa (Fiorina 1981; Kinder y Kiewiet 1981; Lewis-Beck 1986; Lewis-Beck 1988; Lewis-Beck y Belluci 1982; MacKuen, Erikson y Stimson 1992; Nadeau y Lewis-Beck 2001). En estos países existe consenso entre los investigadores de que los votantes toman más en cuenta los cambios en las condiciones económicas del país que las alteraciones de su propia situación económica (Kinder 1998).

En América Latina varios autores han puesto a prueba la relación entre economía y voto en estudios de casos (Cantón y Jorrot 2002; Domínguez y McCann 1995; Mora y Araujo y Smith 1984; Remmer 2003; Roberts y Arce 1998; Seligson y Gómez 1989; Weyland 1998), o a través de trabajos comparativos (Echegaray 2005; Remmer 1991; Roberts y Wibbels 1999; Remmer 1993), pero la evidencia está lejos de ser concluyente. Las evaluaciones económicas son importantes para los votantes dependiendo de la elección. Por ejemplo, Weyland encontró que los venezolanos fueron votantes egotrópicos en las elecciones de 1989 y 1993 (Weyland 1998) pero actuaron de forma sociotrópica cuando eligieron a Hugo Chávez en 1998 (Weyland 2003). Cantón y Jorrot (2002) y Echegaray (2005) también encuentran que el efecto de las evaluaciones económicas sobre el voto varía a través de los países y elecciones. A pesar de esas distinciones, las investigaciones realizadas confirman que los latinoamericanos tienden a tomar las elecciones como plebiscitos sobre la gestión económica del gobierno.

Si los factores económicos son importantes determinantes de la fortuna electoral de los partidos de gobierno, cabe preguntarse si existen algunas condiciones económicas específicas que benefician a los partidos de izquierda en comparación con los partidos de derecha o centro.

Siguiendo la teoría de voto económico, se puede esperar que quienes evalúan negativamente la economía castigarán al partido de gobierno. En países donde el partido de gobierno es de izquierda, los ciudadanos lo premiarán o castigarán dependiendo de la gestión económica. Pero en países donde la izquierda nunca estuvo a cargo del gobierno nacional y representa una “oposición creíble”, el electorado que está insatisfecho con la situación económica votará a favor de ellos.

H1: Cuanto más negativamente un votante evalúe la situación económica, mayor será la probabilidad de que vote a la oposición. En particular, los votantes que están desconformes beneficiarán a los partidos de izquierda que no han estado a cargo del gobierno.

Para ponerlo en forma sencilla, si un votante tiene una mala evaluación de la economía (x1) y los partidos de izquierda representan una “oposición creíble” (x2), votará por la izquierda (y).

Las variables que se usarán para poner a prueba la teoría del voto económico son cuatro: voto retrospectivo sociotrópico, voto retrospectivo egotrópico, voto prospectivo sociotrópico, y voto prospectivo egotrópico. El voto sociotrópico mide las evaluaciones sobre la situación económica del país; cuanto más alto el valor, peor la evaluación. El voto egotrópico mide la evaluación de la situación económica familiar o propia; también los valores altos corresponden con peores evaluaciones. El voto prospectivo mide las expectativas sobre el futuro económico, mientras que el voto retrospectivo evalúa la economía durante los pasados años.

“Clivages” creados por procesos políticos

A la hora de determinar cuál o cuáles teorías y determinantes de voto son los que mejor explican el voto por los partidos de izquierda en América Latina, es esencial incluir la ideología. La ideología del votante es considerada como uno de los principales determinantes de voto. Los electores usan la dimensión izquierda-derecha, o liberal-conservador como un mecanismo simplificador para procesar información y tomar decisiones electorales. Desde Converse (1964) ha habido un extenso debate sobre hasta que punto los votantes toman en cuenta la ideología y organizan sus ideas políticas en torno a la dimensión ideológica. Las mismas dudas sobre la importancia de la ideología existen para analizar el comportamiento de los votantes latinoamericanos. Echegaray (2005) considera que las claves ideológicas son irrelevantes para los latinoamericanos, pero no prueba empíricamente esta afirmación. En este capítulo se pone a prueba cuál es el impacto que la ideología tiene para determinar el voto hacia los partidos de izquierda en la región. Hay dos motivos para incluir a la ideología en el análisis.

Primero, según AmericasBarometer 2006/07, alrededor de siete en diez latinoamericanos se ubican en la escala ideológica. Este porcentaje varía dependiendo del país. Izquierda y derecha significan más para los chilenos y uruguayos que para los argentinos. Pero, al menos como primera aproximación, el pensamiento ideológico es una parte importante del comportamiento político de los latinoamericanos. Segundo, existe investigación empírica que señala a la ideología como un importante determinante del voto en América Latina (Cameron 1994; Torcal y Mainwaring 2003). Torcal y Mainwaring (2003) señalan que las consideraciones de clase sólo



emergen como un “clivage” importante en el sistema de partidos cuando los partidos de izquierda las enfatizan, y llaman a este fenómeno los “clivages” creados por procesos políticos (Przeworski y Sprague 1986; Torcal y Mainwaring 2003)⁴. Este enfoque teórico sobre la formación de “clivages” presta atención a como son creados por las élites políticas y los fenómenos políticos. La distinción izquierda/derecha también puede ser considerada como un “clivage” creado por procesos políticos. En otras palabras, los políticos pueden activar la dimensión ideológica como una manera de captar votos. Todo esto indica que es apropiado poner a prueba el impacto que la ideología tiene a la hora de decidir el voto:

H2: La identificación ideológica del entrevistado influye en el voto a la izquierda independientemente de los determinantes sociales y estructurales.

Una manera alternativa de poner a prueba el “clivage” ideológico es analizar si las opiniones sobre algunas políticas en particular son determinantes del voto. Votar por la izquierda puede estar asociado con el apoyo a una mayor intervención y regulación del estado en la economía, con la redistribución del ingreso, y con un incremento en el gasto social (Fuchs y Klingermann 1990; Inglehart y Klingermann 1976; Kitschelt y Hellemans 1990). Además, al ser difícil conseguir información acerca de las percepciones y opiniones de los electores sobre las reformas económicas neoliberales, el análisis de las preferencias y opiniones sobre políticas concretas es la mejor manera de aproximarse al tema.

H3: Aquellos latinoamericanos que apoyan la intervención y regulación económica por parte del estado, la redistribución del ingreso y el incremento en el gasto social, tendrán una mayor probabilidad de votar a los partidos de izquierda que quienes estén en contra de ese tipo de políticas.

La ideología es medida a través de la autoidentificación del entrevistado en una escala que va de 0 (izquierda) a 10 (derecha). Diferentes preguntas sobre preferencias políticas también son usadas como variables independientes para probar la existencia de un “clivage” ideológico: apoyo a las privatizaciones, apoyo a la reforma agraria, apoyo a la nacionalización de las empresas, opinión sobre la redistribución, opinión sobre la regulación e intervención del estado en la economía.

Los casos

Para poner a prueba el argumento que el reciente incremento del voto hacia los partidos de izquierda en América Latina es el resultado del rechazo de los votantes hacia los partidos tradicionales por no mejorar las condiciones de vida del electorado se usan tres casos: Brasil, México y Uruguay. Los partidos de izquierda pueden capitalizar el descontento social cuando: 1) representan una “oposición creíble”, y más aún cuando 2) son la única oposición creíble en el sistema político. Para ser “oposición creíble”, un partido político tiene que no haber estado a cargo del gobierno y no ser responsable por el estado actual del país.

⁴ Torcal y Mainwaring (2003) ponen a prueba la existencia de estos “clivages” políticos para el caso chileno con tres divisiones culturales-ideológicas que pueden servir para articular el conflicto: la división autoritarismo/democracia, la percepción sobre la desigualdad social, y las diferencias religiosas.

Brasil, México y Uruguay son todos casos en los cuales los partidos de izquierda han aumentado su caudal de votos desde los 80s, pero las trayectorias electorales de la izquierda son diferentes en cada uno de ellos. En Brasil, los partidos de izquierda ganaron acceso al gobierno en el 2002. Antes de eso, en 1994, el Partido Social Democracia Brasileira (PSDB) llevó a Fernando Henrique Cardoso a ser presidente de Brasil. Sin embargo, cuando el PSDB accedió al gobierno nacional ya se había movido hacia el centro de la escala ideológica (Power 2001/2002). En consecuencia, la primera vez que un partido de izquierda llegó al gobierno nacional después del retorno a la democracia fue en 2002 con Luis Inácio “Lula” da Silva, el histórico líder del Partido dos Trabalhadores (PT). Después de la experiencia de gobierno del PSDB, la oposición más creíble era la del PT.

En Uruguay, desde la reapertura democrática los partidos de izquierda aumentaron progresivamente su participación electoral. En el 2004, y después de veinte años de democracia, el Encuentro Progresista-Frente Amplio (EP-FA), una coalición de partidos de izquierda llegó al gobierno. La búsqueda de nuevas alternativas ha llevado a los uruguayos a votar por el Frente Amplio, el cual representaba la única “oposición creíble” después de varios años de gobiernos a cargo del Partido Colorado y el Partido Nacional.

México representa un ejemplo diferente del mismo fenómeno. Los partidos de izquierda, en particular el Partido Revolucionario Democrático (PRD), ha aumentado su caudal electoral durante los 90s. Al hacerlo, ha contribuido a aumentar la competencia electoral en la política mexicana. El PRD recibió casi un quinto de los votos en las elecciones de 1994 y 2000; y en el 2006 perdió la presidencia por menos de 500.000 votos, lo cual llevó a grandes controversias acerca del escrutinio final. El caso mexicano es un ejemplo de como la búsqueda de nuevas alternativas por parte del electorado terminó favoreciendo a los partidos que eran considerados una “oposición creíble”: el PAN, un partido de centro-derecha, y el PRD, un partido de izquierda.

Todos estos partidos de izquierda, PT, PRD y EP-FA son ejemplos de partidos profesionales: todos ellos trabajan en el desarrollo de sus estructuras internas, tienen organizaciones partidarias fuertes, y movilizan apoyos políticos, no sólo sociales. En ese sentido, son partidos más similares a Concertación en Chile que al Movimiento al Socialismo (MAS) en Bolivia o al partido de Hugo Chávez, Movimiento Quinta República en Venezuela. Usualmente son clasificados como la izquierda “institucional” de América Latina, en contra de la izquierda “populista” representada básicamente por el Movimiento Quinta República. Más allá de esas características en común, hay varias diferencias entre los países que hacen la selección de casos relevante. Solo haré referencia a las diferencias que tienen relación con esta investigación: las diferencias en los sistemas de partidos y sistemas políticos, y las diferencias en el grado en que los tres países implementaron reformas económicas neoliberales.

Las diferencias entre los sistemas de partidos y sistemas políticos brasileiro, mexicano y uruguayo son varias. Brasil es usualmente definido como un caso de subdesarrollo del sistema de partidos y un sistema político débilmente institucionalizado (Ames 2001; Mainwaring 1999; Mainwaring y Scully 1995). Tiene un sistema multipartidista que ha sido descrito como muy fragmentado, con alta volatilidad electoral, donde más de un tercio de los legisladores cambian de partido durante el período de gobierno, y donde las campañas políticas están dominadas por apelaciones individualistas, clientelísticas y personalistas (Samuels 2006). Por un periodo de



tiempo largo, México también fue considerado como un sistema político débilmente institucionalizado (Mainwaring y Scully 1995) en el cual existía un partido dominante, el Partido Revolucionario Institucional (PRI). El PRI estuvo a cargo del gobierno nacional mexicano desde 1929 al 2000, y los partidos de oposición no pudieron ganar la mayoría en la cámara baja hasta 1997, cuando el sistema de partidos pasó a ser multipartidista. No fue hasta el 2000 cuando el Partido de Acción Nacional (PAN), un partido identificado con la derecha ideológica, reemplazó al PRI en la presidencia. Uruguay, en cambio, ha tenido un sistema de partidos muy estable (Mainwaring y Scully 1995) con tres partidos políticos mayores, Partido Colorado (PC), Partido Nacional (PN) y Encuentro Progresista-Frente Amplio (EP-FA), y un partido menor, Partido Independiente (PI). Con la emergencia del Frente Amplio en 1971 el sistema de partidos experimentó su mayor cambio: paso de ser un sistema bipartidista a ser multipartidista (Gillespie y González 1989; González 1991).

Para ponerlo en forma sencilla, Brasil, México y Uruguay son diferentes en los grados de institucionalización de sus sistemas políticos, así como en el número de partidos. Mainwaring y Scully (1995) clasifican a Brasil como un sistema de partido incoativo, México como un sistema de partidos hegemónico, y Uruguay como un sistema de partidos institucionalizado. Muchas cosas han cambiado desde fines de los años 90s. Una de ellas es que México ya no puede ser considerado un sistema hegemónico. En cuanto al número de partidos, México y Uruguay se han transformado en sistemas multipartidistas e incrementado la competencia partidaria. Investigaciones recientes indican que el número de partidos afecta la manera en la cual los votantes hacen rendir cuentas a sus gobiernos. Los sistemas multipartidistas fortalecen la habilidad que tienen los electores para castigar varios partidos al mismo tiempo, y como resultado, el descontento popular será menor en países con leyes electorales que permitan el acceso de los pequeños partidos al parlamento (Benton 2005).

Las reformas económicas estructurales también fueron implementadas en grados diferentes en los tres países. Brasil y México son considerados reformadores lentos: implementaron las reformas más tarde y en menor grado; mientras que Uruguay es considerado un reformador gradual: las reformas fueron implementadas tempranamente pero fueron de intensidad media y llevadas a cabo gradualmente (Lora 1997/2001). También existieron diferencias entre los tres países en cuanto al área que más reformaron. Brasil presenta uno de los más altos índices de reforma en las áreas de privatizaciones y reforma laboral. En cambio México se posiciona bajo en los índices de reformas tributaria y laboral, pero alto en el índice de reforma financiera. Finalmente, Uruguay es uno de los países donde menos privatizaciones se realizaron pero donde más se reformó el comercio (Lora 1997/2001).

Modelo y resultados

Para poner a prueba si las preferencias por políticas en específico o las identificaciones ideológicas son más importantes que las evaluaciones sobre la situación económica cuando los latinoamericanos votan por partidos de izquierda, este capítulo usa encuestas electorales realizadas durante las elecciones de 1998 y 2002 en Brasil, 2000 en México y 2004 en Uruguay.

La encuesta en Uruguay es una encuesta preelectoral llevada a cabo por CIFRA, González, Raga y Asociados antes de la elección de 2004, cuando la izquierda accedió al gobierno⁵. La encuesta es representativa a nivel nacional e incluye 1.500 casos. La comparación entre el porcentaje que manifestó tener intención de voto por los partidos de izquierda en esta encuesta y el porcentaje que efectivamente votó por la izquierda refuerza la validez de este análisis: el resultado de la elección fue 54% y la encuesta predijo 60%.

Para poner a prueba las hipótesis en la elección brasilera de 2002, en la cual el PT ganó por primera vez la presidencia del Brasil, se usa “Brazil’s 2002 National Election Study (BNES)”, una encuesta de cobertura nacional realizada después de la elección de 2002 que incluye 2.513 encuestados⁶. Debido a que esta encuesta no incluye preguntas acerca de las evaluaciones económicas, el modelo también es puesto a prueba para la elección de 1998 usando una encuesta preelectoral realizada en julio, la cual incluye 4.380 casos y es representativa de todo el país. Como en el caso uruguayo, las encuestas brasileras también se ajustan con precisión al porcentaje que votó a la izquierda: en el 2002, 68% de los encuestados manifestó haber votado a la izquierda y el porcentaje real fue 77%⁷.

El voto hacia los partidos de izquierda en la elección mexicana del 2000 es analizado a través de una encuesta post-electoral llevada a cabo como parte del “Mexico 2000 Panel Study”⁸. Esta encuesta incluye 1.199 casos y fue realizada entre los días 6 y 9 de julio en los hogares de los entrevistados. Como en Brasil y Uruguay, los porcentajes de declaración de voto y voto real son muy similares. Si bien la encuesta sólo permite discriminar el voto hacia el PRD como voto hacia la izquierda (no es posible separar el voto de los otros partidos de izquierda de la categoría “Otros”), el porcentaje de la encuesta es 15% y el real 19%. Todas las encuestas en los tres países fueron realizadas cara a cara en los hogares de los entrevistados⁹.

La variable dependiente es una variable dicotómica que mide la intención de voto por un partido de izquierda: el valor 1 indica que la persona tiene la intención de votar a la izquierda, mientras que el 0 indica la intención de voto por el resto de los partidos. Los siguientes partidos fueron clasificados de izquierda en las elecciones presidenciales que están siendo analizadas en este capítulo: el Encuentro Progresista-Frente Amplio y el Partido Independiente en la elección uruguayo de 2004; el PT, PPS Y PSTU en la elección brasilera de 1998; el PT, PSB y PSTU en la elección brasilera de 2002; y en México sólo el PRD porque no fue posible separar el voto hacia los otros partidos de izquierda de la categoría “otros”.

⁵ Agradezco a los directores de CIFRA, Luis E. González y Adriana Raga por darme acceso a esta información, y generosamente permitirme incluir algunas preguntas específicas en la encuesta 2004.

⁶ Quiero agradecerle a Rachel Meneguello y Simone Aranha del Center for Studies on Public Opinion (CESOP) en la Universidad de Campinas (UNICAMP), Brasil, por darme acceso a las bases de datos de Datafolha y BNES.

⁷ Este resultado es contraintuitivo porque las encuestas post-electorales usualmente sobrerrepresentan al ganador.

⁸ Los participantes en el “2000 Mexico Panel Study” son, en orden alfabético: Miguel Basañez, Roderic Camp, Wayne Cornelius, Jorge Domínguez, Federico Estévez, Joseph Klesner, Chappell Lawson (Principal Investigador), Beatriz Magaloni, James McCann, Alejandro Moreno, Pablo Parás, y Alejandro Poiré. El financiamiento para este estudio fue dado por la National Science Foundation (SES-9905703) y el diario *Reforma*.

⁹ El tamaño muestral (N) de cada encuesta se reduce después de eliminar todos los valores perdidos. El tamaño muestral final se reporta en las tablas que muestran los resultados de las regresiones.



El capítulo usa dos variables independientes para probar la teoría del voto económico: voto sociotrópico y voto egotrópico. El voto sociotrópico mide la evaluación de la situación económica del país: cuanto mayor el valor, peor la evaluación. El voto egotrópico mide las evaluaciones de la situación económica familiar. El voto retrospectivo sociotrópico, el voto prospectivo sociotrópico, el voto retrospectivo egotrópico y el voto prospectivo egotrópico miden las evaluaciones de los votantes sobre la economía del país y la suya propia en comparación con el pasado y las expectativas de futuro. El voto sociotrópico y el voto egotrópico para la elección brasilera de 1998 son medidos por las evaluaciones que hacen los encuestados sobre el impacto del Plano Real en sus vidas y la del país. Los valores altos corresponden con peores evaluaciones.

La ideología es una de las variables independientes para probar la existencia de una “clivage” político. Es medida de dos formas. Primero, a través de la autoidentificación ideológica del encuestado en una escala que va de 1 (izquierda) a 10 (derecha). Segundo, a través de una serie de preguntas sobre las políticas preferidas: intervención estatal, redistribución, regulación estatal de las empresas privadas, reforma agraria, nacionalización y privatizaciones. Los valores más altos corresponden con las posiciones más liberales, las cuales deberían estar correlacionadas negativamente con el voto a los partidos de izquierda.

El modelo también incluye variables de control: edad, educación, ingreso de la familia, nivel socioeconómico del hogar, y lugar de residencia. Edad, educación e ingreso familiar tienen una clara interpretación: los valores bajos corresponden con los encuestados jóvenes, poco educados y con ingresos bajos. El nivel socioeconómico del hogar se mide de dos maneras. Primero, como una variable ordinal que clasifica a los entrevistados en categorías dependiendo de su vivienda. Segundo, a través de un índice de equipamiento del hogar, en el cual los valores más altos corresponden con niveles socioeconómicos más altos. La variable lugar de residencia indica el lugar donde vive el entrevistado, es dicotómica y toma el valor 1 cuando la persona vive en un área urbana y 0 cuando vive en un área rural o centro urbano pequeño.

Finalmente, también incluí identificación partidaria como variable de control usando cuatro variables dicotómicas, cada una de ellas representa un valor de la identificación partidaria: identificación partidaria con los partidos de izquierda, identificación partidaria con los partidos de centro, identificación partidaria con los partidos de derecha y aquellos que no se identifican con ningún partido. Cada categoría es ingresada al modelo como una variable dicotómica en la cual el “1” corresponde a las personas que entran en esa categoría y “0” para el resto. Los que no tienen identificación partidaria son la categoría base en los modelos de regresión.

Resultados

El primer resultado para mencionar es que el voto económico explica el voto hacia los partidos de izquierda en Brasil y Uruguay, pero no en México. Los resultados de las regresiones presentadas en la Tabla VI-1 indican que los brasileros y los uruguayos que evalúan negativamente la situación económica tienden a votar más por partidos de izquierda que por partidos de derecha o centro. Los ciudadanos que están descontentos con los resultados económicos del gobierno en sus propias vidas, o en la vida del país en general, votan a partidos de izquierda; mientras que aquellos que hacen una buena evaluación reeligen al partido de

gobierno o votan por otro partido que no sea de izquierda. Los signos positivos en los coeficientes de voto sociotrópico y voto egotrópico presentados en la Tabla VI-1 indican que a peor evaluación de la economía, mayor es la probabilidad de votar por la izquierda. Esta evidencia apoya la hipótesis 1, la cual argumenta que “cuanto más negativamente un votante evalúe la situación económica, mayor será la probabilidad de que vote a la oposición. En particular, los votantes que están descontentos beneficiarán a los partidos de izquierda que no han estado a cargo del gobierno”. En Brasil y Uruguay, los partidos de izquierda no podían ser considerados responsables del gobierno hasta 2002 y 2004 respectivamente.

Sin embargo, México presenta un caso diferente. En la elección presidencial de 2000, las evaluaciones económicas de los votantes ni favorecieron ni perjudicaron la fortuna electoral de los partidos de izquierda. Como varios estudiosos del caso mexicano han argumentado, la derrota del PRI en el 2000 no tiene nada que ver con la economía. Por el contrario, los logros de la presidencia de Zedillo eran reconocidos por la mayoría de mexicanos (Lawson y McCann 2004). En otras palabras, las evaluaciones económicas no favorecieron las posibilidades de la izquierda.

Las consideraciones ideológicas también juegan un papel muy importante a la hora de explicar el comportamiento de voto de los latinoamericanos, pero esto no quiere decir que los votantes opten por partidos de izquierda porque rechazan el modelo neoliberal. La ideología alcanza relevancia estadística en Brasil y Uruguay, pero no en México. Por otro lado, las preferencias por ciertas políticas no son relevantes en ningún caso, con la excepción de las opiniones sobre las privatizaciones y la reforma agraria en Brasil. Para que los “clivages” políticos se vuelvan activos, los políticos deben hacer énfasis en ellos. Torcal y Mainwaring (2003) argumentan que los “clivages” políticos son creados por los políticos como una manera de obtener votos, y sólo se vuelven relevantes si los líderes políticos y los partidos políticos estructuran el conflicto y la disputa por el poder en términos ideológicos. La ideología medida como autoidentificación ideológica en la escala izquierda-derecha es un determinante significativo del voto en Brasil y Uruguay: un punto más en la escala (que corresponde a un lugar más a la derecha) disminuye la probabilidad de votar a la izquierda en vez de al centro o a la derecha. Esta evidencia apoya la hipótesis 2, la cual plantea que la identificación ideológica del entrevistado influye en el voto a la izquierda independientemente de los determinantes sociales y estructurales.

Por otro lado, al menos hasta la elección del 2000, la política mexicana giró en torno a un “clivage” de régimen: pro-PRI versus anti-PRI. Durante ese tiempo, la dimensión ideológica permaneció inactiva, o como una dimensión de segunda categoría (Domínguez y McCann 1995, Domínguez y McCann 1996, Greene 2002, Klesner 2004, Klesner 2005, Magaloni y Poiré 2004a, Moreno 1998, Moreno 1999). Los resultados de los modelos de regresión indican que la autoidentificación ideológica no es un determinante relevante para los mexicanos. En el 2000, los mexicanos que se ubicaban en la izquierda del espectro ideológico no diferían significativamente en su voto de los que se ubicaban a la derecha.

Una manera alternativa de poner a prueba el “clivage” ideológico, y el argumento de que el giro latinoamericano hacia la izquierda es una respuesta en contra del Consenso de Washington, es analizar si las preferencias por políticas son determinantes del comportamiento electoral. Para ello fueron incluidas una serie de variables que miden las opiniones de los votantes sobre el intervencionismo estatal, la redistribución, la regulación estatal del



funcionamiento de las empresas privadas, la reforma agraria, la nacionalización y las privatizaciones. Los resultados que aparecen en la Tabla VI-1 indican que, con la excepción de las opiniones sobre las privatizaciones y la reforma agraria en Brasil, ninguna de las otras preferencias por políticas son factores relevantes para explicar el voto hacia los partidos de izquierda. Esta evidencia rechaza la hipótesis 3, la cual plantea que “aquellos latinoamericanos que apoyan la intervención y regulación económica por parte del estado, la redistribución del ingreso y el incremento en el gasto social, tendrán una mayor probabilidad de votar a los partidos de izquierda; mientras que aquellos que estén en contra de ese tipo de políticas serán más proclives a votar a partidos de derecha”. A pesar de que la ideología es un determinante de voto importante, ninguna de las preferencias y opiniones sobre políticas en concreto explican por qué los latinoamericanos eligen a un partido de izquierda. Estos resultados refuerzan el argumento de que el voto de los latinoamericanos a favor de la izquierda no se debe al rechazo del modelo neoliberal desde una postura ideológica.

Los latinoamericanos que han votado a la izquierda en esas elecciones cruciales no tienen un perfil socioeconómico claro. Contrariamente a lo que plantea el Informe Latinobarómetro 2006, el cual sostiene que los latinoamericanos pobres estarían votando a la izquierda, mientras que los ricos votarían a la derecha (Latinobarómetro 2006), los resultados de los modelos de regresión presentados en la Tabla VI-1 rechazan este argumento. Sólo en Brasil, en 1998 y 2002, los votantes con un ingreso familiar bajo tienden a votar más a la izquierda que a otros partidos, pero este comportamiento no existe en México ni en Uruguay. Ninguna otra variable socioeconómica como educación o el nivel socioeconómico del hogar alcanzan suficiencia estadística en ninguno de los tres países.

Tabla VI-1. Determinantes de voto por los partidos de izquierda: voto económico vs. Ideología

VARIABLES INDEPENDIENTES:	Brasil 1998	Brasil 2002	México 2000	Uruguay 2004
<i>Voto económico</i>				
Voto sociotrópico	0.344*** (.068)			0.416** (.182)
Voto egotrópico	0.686*** (.062)			0.369** (.191)
Sociotrópico retrospectivo			-0.038 (.182)	0.054 (.216)
Egotrópico retrospectivo			0.141 (.213)	-0.037 (.222)
Sociotrópico prospectivo				0.403 (.294)
Egotrópico prospectivo				-0.418 (.284)
<i>Ideología</i>				
Autoidentificación ideológica		-0.064** (.020)	-0.037 (.048)	-0.798*** (.098)
Opinión intervención estatal		-0.006 (.012)		
Opinión redistribución			-0.010 (.055)	
Opinión regulación estatal		-0.019 (.015)		
Opinión reforma agraria		-0.431** (0.141)		
Opinión nacionalización		0.015 (.015)		
Opinión privatizaciones	-0.248*** (.048)		-0.051 (.078)	
<i>VARIABLES DE CONTROL</i>				
Educación	0.039 (.029)	-0.002 (.017)	0.102 (.149)	-0.138 (.086)
Ingreso familiar	-0.001** (.000)	-0.001*** (.000)		0.094 (.064)
Nivel socioeconómico del hogar			-0.106 (.213)	
NSE del hogar (índice de equipamiento)			-0.109 (.133)	
Edad	0.001 (.000)	-0.018*** -0.005	0.012 (.012)	-0.010 (.008)
Lugar de residencia		-0.167 (.157)	-0.084 (.237)	-0.903** (.293)
<i>Identificación partidaria (1)</i>				
Izquierda	1.967*** (.133)	2.069*** (.225)	2.736*** (.445)	eliminado
Derecha	-0.449*** (.128)	-0.662*** (.160)	-2.651*** (.431)	-2.557*** (.335)
Centro	0.065 (.124)	-0.970 (1.289)		
Constante	-2.713*** (0.230)	2.496*** (.594)	-0.910*** (.431)	3.806** (1.505)
Pseudo R cuadrado	0.22	0.18	0.58	0.49
Wald chi2	577***	181***	198***	185520***
Número de casos	2900	1215	710	571

(1) La no identificación partidaria es la categoría de referencia. *p< .10, ** p< .05, *** p< .01
Nota: Las entradas son coeficientes binarios extraídos de modelos logit con errores estándar robustos.
En Uruguay 2004, STATA elimina la identificación partidaria con los partidos de izquierda de la regresión porque predice perfectamente el voto a la izquierda.



La identificación partidaria es un determinante muy importante del voto a los partidos de izquierda en estas elecciones: alcanzó relevancia estadística en todos los casos. Los latinoamericanos que se identifican con un partido de izquierda tienden a votar por partidos de izquierda en las elecciones presidenciales, mientras que aquellos que se identifican con partidos de derecha también votan dentro del mismo bloque.

A modo de resumen, la evidencia proveniente de estos tres países indica que los latinoamericanos votan a los partidos de izquierda como una manera de castigar a los partidos que gobernaron, en su mayoría partidos tradicionales, y no produjeron los resultados esperados. A pesar de que la ideología es un factor relevante para explicar el voto a la izquierda, los latinoamericanos no están votando a la izquierda porque están en contra del mercado y quieren mayor intervención estatal en la economía. Votan por los partidos de izquierda porque estos partidos fueron capaces de capitalizar el descontento social y económico predominante en la región. Las posibilidades que tienen los partidos de izquierda de capitalizar ese descontento popular dependen del número de oposiciones creíbles en el sistema de partidos. En países como Brasil y Uruguay donde sólo los partidos de izquierda representaban esa “oposición creíble”, era relativamente fácil capitalizar los votos de aquellos descontentos con el status quo. En cambio, en aquellos países como México con más de un partido que representa una “oposición creíble”, los partidos de izquierda tienen que ganar el voto de electores que toman en cuenta otras consideraciones, principalmente la capacidad para gobernar que cada partido tiene.

Segundo argumento: El voto a la izquierda es un riesgo para la democracia en América Latina

El reciente éxito de los partidos de izquierda en América Latina ha llevado a algunos analistas políticos a cuestionar el posible impacto que los gobiernos de izquierda pueden tener para las democracias de la región. Atrás de este cuestionamiento está el miedo a que los partidos de izquierda dañen la estabilidad de la democracia en América Latina. Este capítulo argumenta que el éxito de la izquierda en la región, en vez de ser una causa de preocupación, debe ser considerada un indicador de madurez democrática.

A pesar de que todos los países de América Latina terminaron su transición a la democracia hace ya varios años, todavía es necesario consolidar y mejorar la calidad de las democracias latinoamericanas (Roberts 1998). Para que las democracias funcionen correctamente, necesitan cierto nivel de apoyo popular (Easton 1953), y algunas investigaciones recientes indican que el apoyo a las instituciones democráticas y los sistemas democráticos depende, en parte, de que lado de la ecuación “ganadores-perdedores” se encuentran los votantes (Anderson, Blais, Bowler, Donovan y Listhaug 2005). Los ciudadanos que votaron por un partido que perdió la elección (perdedores) tienden a tener menores niveles de apoyo a la democracia que los ganadores. Como consecuencia, las democracias pueden volverse inestables si los perdedores son continuamente ignorados en el juego político, excluidos del proceso político, y si son siempre los mismos actores. Según las principales teorías democráticas, para lograr una democracia fuerte y estable es mejor tener alternancia en el poder e incorporar a las minorías (Anderson, Blais, Bowler, Donovan y Listhaug 2005). Siguiendo este argumento, el reciente éxito de los partidos de izquierda en la región puede ser tomada como buenas noticias para la democracia.

Para poner a prueba si la democracia está en peligro debido al éxito de los partidos de izquierda, esta sección compara los niveles de apoyo a la democracia de los latinoamericanos que se consideran de izquierda con los niveles de apoyo de los que se consideran de derecha. La hipótesis es que:

H4: Los latinoamericanos que se identifican con la izquierda no son menos democráticos que los que se consideran de centro o derecha.

Resultados

Para poner a prueba la hipótesis anterior se usan los datos del Barómetro de las Américas 2006/07. Esta encuesta cubre 23 países en América del Norte, el Caribe, América Central y América del Sur; sin duda constituye el recurso más completo para medir valores y actitudes democráticas en el continente. La encuesta fue llevada a cabo durante el 2006/07 por LAPOP (Latin American Public Opinion Project) de Vanderbilt University¹⁰. Las muestras de adultos en edad de votar son probabilísticas y representativas a nivel nacional. En este capítulo, sólo se usan los datos de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil, Venezuela y República Dominicana porque el tema que nos interesa es un fenómeno de América Latina. Por lo tanto, los países caribeños de habla inglesa, Estados Unidos y Canadá son excluidos.

La Tabla VI-2 muestra los resultados de un análisis ANOVA con diferentes actitudes y opiniones hacia la democracia. Una de las formas de medir con qué fortaleza los ciudadanos defienden la democracia es a través de sus actitudes hacia la tolerancia política. En la encuesta Barómetro de las Américas es posible usar un índice de Tolerancia Política que combina cuatro indicadores diferentes¹¹: 1) Hay personas que siempre hablan mal de la forma de gobierno del país, no sólo del gobierno de turno, sino de la forma de gobierno, ¿con qué firmeza aprueba o desaprueba usted el **derecho de votar** de esas personas? 2) ¿Con qué firmeza aprueba o desaprueba usted el que estas personas puedan llevar a cabo **manifestaciones pacíficas** con el propósito de expresar sus puntos de vista? 3) ¿Con qué firmeza aprueba o desaprueba usted el que estas personas puedan **postularse para cargos públicos**? 4) ¿Con qué firmeza aprueba o desaprueba usted el que estas personas salgan en la televisión **para dar un discurso**? Las categorías de respuesta van de 1=Desaprueba firmemente a 10=Aprueba firmemente. Las actitudes democráticas están representadas por los valores altos en el índice de Tolerancia Política. El índice va de 1 a 100, y tiene un Cronbach's Alpha de .870 para todos los países juntos, es decir que los cuatro indicadores tienen suficientes elementos en común para formar parte de un índice.

¹⁰ Quiero agradecer al Profesor Mitchell A. Seligson, director del LAPOP, por darme acceso a esta encuesta.

¹¹ Cuando un encuestado no contesta una o dos de las cuatro preguntas del índice, el valor promedio de las preguntas respondidas se le imputa a esas preguntas para no perder el caso. Sin embargo, cuando más de dos preguntas no son contestadas, el caso es considerado perdido.



El índice de Oposición a la Censura Gubernamental es otra manera de medir qué tan democráticos son los latinoamericanos. El índice combina cinco indicadores: 1) ¿Hasta qué punto aprueba o desaprueba **una ley que prohíba las protestas públicas?** 2) ¿Hasta qué punto aprueba o desaprueba **una ley que prohíba reuniones de cualquier grupo que critique el sistema político del país?** 3) ¿Hasta qué punto aprueba o desaprueba que **el gobierno censure programas de televisión?** 4) ¿Hasta qué punto aprueba o desaprueba que **el gobierno censure libros que están en las bibliotecas de las escuelas públicas?** 5) ¿Hasta qué punto aprueba o desaprueba que **el gobierno censure a los medios de comunicación que lo critican?** Las respuestas van de 1=Desaprueba firmemente a 10=Aprueba firmemente. En este caso, la escala fue invertida para mantener la comparabilidad con el resto de las variables e índices. Como resultado, los valores altos en el índice corresponden con mayores niveles de apoyo a la democracia. El índice va de 1 a 100, y tiene un Cronbach's Alpha de .788 para todo el conjunto de países¹².

Los resultados que se muestran en la Tabla VI-2 indican que los latinoamericanos que se identifican con la izquierda tienen niveles de tolerancia política similares a quienes se ubican en la derecha. Únicamente los del centro son menos tolerantes. Los latinoamericanos de izquierda se oponen más a la censura gubernamental que los de derecha. Sin embargo, los de derecha están más a favor de que a pesar de que “la democracia tenga problemas, es mejor que cualquier otra forma de gobierno”, que quienes se ubican a la izquierda. En resumen, dos de tres indicadores proveen evidencia para apoyar la hipótesis 4: los latinoamericanos de izquierda no son menos democráticos que los de derecha o centro. En otras palabras, hasta el momento, las actitudes de los latinoamericanos sobre la democracia no implican evidencia firme de que el giro de la región hacia la izquierda represente algún riesgo para el futuro de la democracia.

¹² El índice de Oposición a la Censura Gubernamental usa el mismo proceso para imputar datos perdidos que el índice de Tolerancia Política. Cuando un entrevistado no contesta una o dos de las cinco preguntas que conforman el índice, el valor promedio de las preguntas respondidas es adjudicado a esas preguntas sin respuesta. Sin embargo, cuando más de dos preguntas no son respondidas, el caso es considerado perdido. El N de este índice es menor porque algunas de las preguntas no fueron realizados en todos los países.

Tabla VI-2. Actitudes hacia la democracia

	Promedio	N	Desviación estándar	F	Sig.
Índice de Tolerancia Política					
Izquierda	56.7	5171	27.988	26.126	.000
Centro	53.2	7474	25.682		
Derecha	54.5	6588	28.154		
Índice de Oposición a la Censura Gubernamental					
Izquierda	74.6	4653	21.948	38.404	.000
Centro	71.4	6523	21.337		
Derecha	71.1	6125	22.420		
Puede que la democracia tenga problemas pero es mejor que cualquier otra forma de gobierno (1)					
Izquierda	4.99	5119	1.868	71.725	.000
Centro	5.10	7395	1.653		
Derecha	5.36	6498	1.714		
Fuente: Barómetro de las Américas 2006/07.					
(1) Puede que la democracia tenga problemas pero es mejor que cualquier otra forma de gobierno. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con esta frase? Las categorías de respuesta van de 1=Muy en desacuerdo a 7=Muy de acuerdo.					

Es posible que el análisis de todos los países juntos esconda efectos particulares de algunos países, los cuales pueden contradecir los anteriores resultados. En casi todos los países no hay diferencias significativas.

Para hacer las cosas todavía más complejas, el Gráfico VI-1 presenta evidencia que los latinoamericanos de derecha son más pro-democracia y apoyan más la idea de que la democracia puede tener problemas pero igual es la mejor forma de gobierno, en casi todos los países de la región con la excepción de Chile, Bolivia, Uruguay y Guatemala. En varios de los casos, las diferencias son significativas.

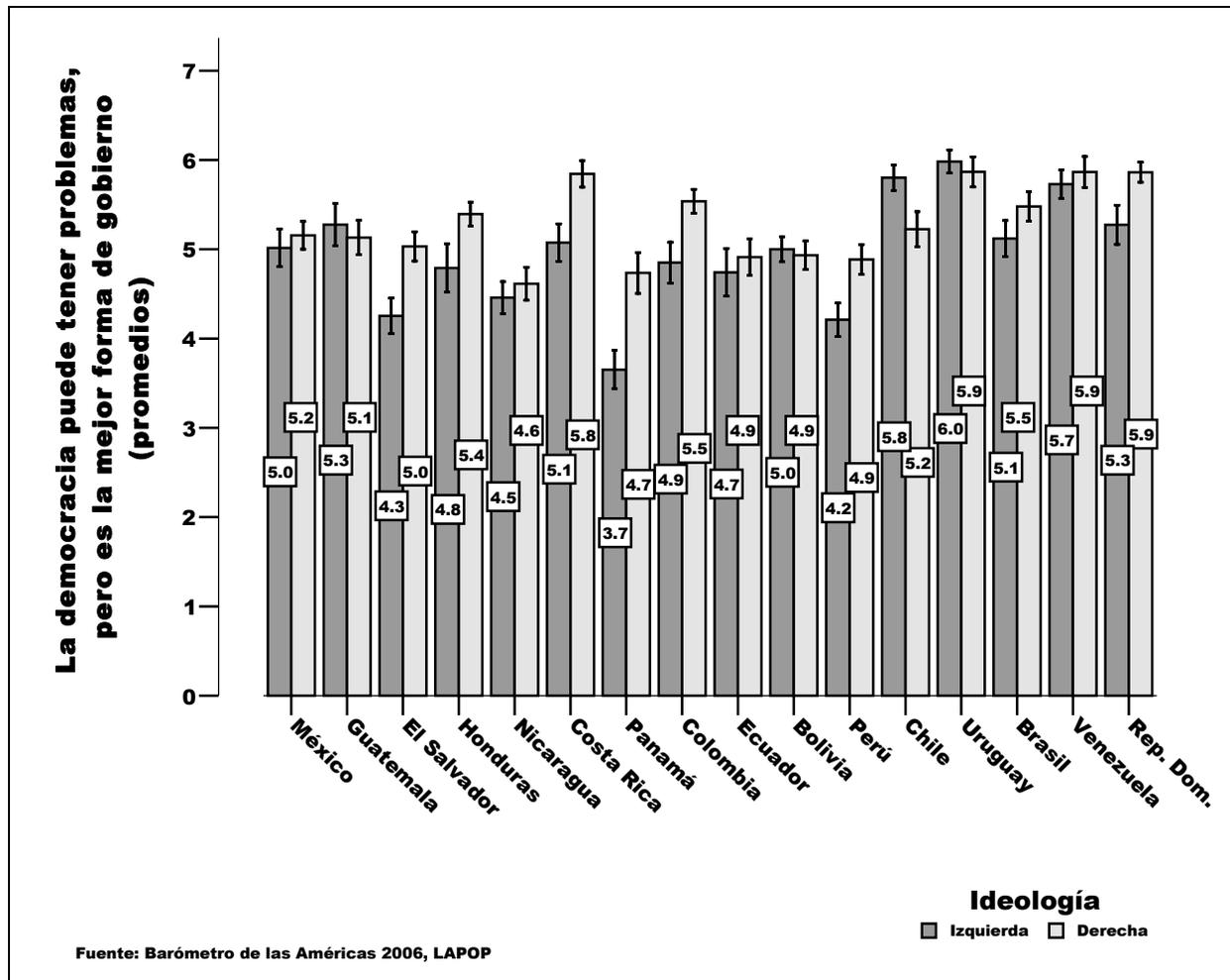


Gráfico VI-1. La democracia es la mejor forma de gobierno según país

La Tabla VI-3 refuerza esta última idea: quienes se sienten de derecha son más o igualmente democráticos que sus compatriotas de izquierda¹³. Es importante mencionar que la mayoría de los latinoamericanos, en cada uno de los países, piensa que la democracia electoral es siempre la mejor opción. Sin embargo, existen diferencias entre quienes son de derecha y de izquierda. En Costa Rica, Colombia, Nicaragua, Ecuador, Perú, Venezuela y Panamá, los de derecha son más democráticos; mientras que en Chile, Uruguay, Guatemala y Honduras, los de izquierda apoyan más la democracia. Finalmente, en República Dominicana, México, Brasil y El Salvador, las diferencias son irrelevantes.

¹³ El fraseo exacto de la pregunta es el siguiente: “Hay gente que dice que necesitamos un líder fuerte que no tenga que ser elegido a través del voto. Otros dicen que aunque las cosas no funcionen, la democracia electoral, o sea el voto popular, es siempre lo mejor. ¿Qué piensa usted?”

Tabla VI - 3. Autoritarismo versus democracia según país

País	Líder fuerte que no tenga que ser elegido a través del voto	Democracia electoral es lo mejor	Total	
Brasil				
	Izquierda	13	87	100
	Centro	11	89	100
	Derecha	12	88	100
Costa Rica				
	Izquierda	8	92	100
	Centro	5	95	100
	Derecha	2	98	100
Chile				
	Izquierda	4	96	100
	Centro	8	92	100
	Derecha	16	84	100
Rep. Dominicana				
	Izquierda	13	87	100
	Centro	10	90	100
	Derecha	12	88	100
Colombia				
	Izquierda	15	85	100
	Centro	8	92	100
	Derecha	9	91	100
México				
	Izquierda	13	87	100
	Centro	12	88	100
	Derecha	12	88	100
Guatemala				
	Izquierda	18	82	100
	Centro	21	79	100
	Derecha	29	71	100
El Salvador				
	Izquierda	13	87	100
	Centro	12	88	100
	Derecha	14	86	100
Honduras				
	Izquierda	14	86	100
	Centro	12	88	100
	Derecha	16	84	100
Nicaragua				
	Izquierda	21	79	100
	Centro	20	80	100
	Derecha	17	83	100
Ecuador				
	Izquierda	21	79	100
	Centro	17	83	100
	Derecha	13	87	100
Perú				
	Izquierda	24	76	100
	Centro	15	85	100
	Derecha	13	87	100
Uruguay				
	Izquierda	3	97	100
	Centro	5	95	100
	Derecha	7	93	100
Venezuela				
	Izquierda	15	85	100
	Centro	15	85	100
	Derecha	12	88	100
Panamá				
	Izquierda	35	65	100
	Centro	28	72	100
	Derecha	26	74	100
Todos los países				
	Izquierda	15	85	100
	Centro	14	86	100
	Derecha	13	87	100

Fuente: Barómetro de las Américas 2006/07, LAPOP



Una forma alternativa de conocer si los latinoamericanos que se definen de izquierda son significativamente más o menos democráticos que sus compatriotas de derecha es a través de un análisis de regresión. La Tabla VI-4 muestra el impacto que tiene la autoidentificación ideológica en los diferentes indicadores de apoyo a la democracia, controlando por el lugar de residencia (urbano versus rural), el sexo, la edad, nivel económico y educación del encuestado. El primer resultado que vale la pena mencionar es que la identificación ideológica es un factor determinante del nivel de apoyo democrático en todos los indicadores que usamos con la excepción del de tolerancia política. Segundo, los latinoamericanos de izquierda se oponen más a la censura gubernamental que los de derecha. Por el contrario, los resultados indican que aquellos que se identifican como de derecha están más a favor de la idea de Churchill sobre la democracia (“la democracia es la mejor forma de gobierno”), y aún más importante, son significativamente menos propensos a derrocar por la fuerza a un gobierno electo. Los resultados del análisis de regresión también indican que los ciudadanos más educados, con un mayor nivel económico y más años presentan mayores niveles de apoyo a la democracia que sus conciudadanos más jóvenes, menos educados y con menos recursos económicos. Como muestran otros estudios, las mujeres son más intolerantes políticamente, y tienen mayores niveles de apoyo a la censura gubernamental que los hombres.

Tabla VI-4. Factores determinantes del apoyo a la democracia

Variables independientes	Índice de tolerancia política	Índice de oposición a la censura gubernamental	La democracia es la mejor forma de gobierno	Oposición a derrocar violentamente a un gobierno electo	Autoritarismo vs. Democracia (1)
Urbano-Rural	-.031***	-.047***	.004	-.013	.056
Sexo	-.059***	-.072***	-.013	.040***	.021
Edad	-.008	.018**	.062***	.082***	.007***
Riqueza	.081***	.038***	.121***	.098***	.118***
Educación	.058***	.135***	.036***	.038***	.024***
Autoidentificación ideológica	-.002	-.046***	.125***	.098***	.033***
R cuadrado ajustado	.021	.039	.037	.032	.021

(1) Autoritarismo vs. Democracia es una variable dicotómica (0 es Autoritarismo y 1 es Democracia), por lo tanto, las celdas muestran los coeficientes del análisis binario logístico, y la última celda muestra el Nagelkerke R Cuadrado.
 (2) La formulación exacta de la pregunta es: “Ahora vamos a cambiar a otra tarjeta. Esta nueva tarjeta tiene una escala de 10 puntos, que van de 1 a 10, con el 1 indicando que usted desaprueba firmemente y el 10 indicando que usted aprueba firmemente. Voy a leerle una lista de algunas acciones o cosas que las personas pueden hacer para llevar a cabo sus metas y objetivos políticos. Quisiera que me dijera con qué firmeza usted aprobaría o desaprobaría que las personas hagan las siguientes acciones: que las personas participen en un grupo que quiera derrocar por medios violentos a un gobierno elegido”. La escala fue invertida para mantener la comparabilidad con el resto de los indicadores.
 Nota: Las celdas muestran los coeficientes Beta de los modelos de regresión lineal. * p<.10, **p<.05, ***p<.01.
 Urbano-Rural: Urbano 0, Rural 1; Sexo: Hombre 0, Mujer 1; Edad, Riqueza y Educación: los valores altos corresponden con más años, más recursos económicos y más años de educación formal. El posicionamiento ideológico va de 1 Extrema izquierda a 10 Extrema derecha. En todas las variables dependientes, los valores altos corresponden con las actitudes democráticas. Fuente: Barómetro de las Américas 2006/07, LAPOP.

Resumiendo, y a pesar de todas las diferencias encontradas entre países, los resultados ayudan a responder si la democracia está en riesgo debido al giro a la izquierda que América Latina está experimentando. Primero, es importante recalcar que la mayoría de los latinoamericanos tienen actitudes pro-democráticas independientemente de su ideología. Este resultado representa buenas noticias para la estabilidad democrática de la región. Segundo, las diferencias entre los ciudadanos de izquierda y los de derecha en su nivel de apoyo a la democracia dependen del país y del indicador que usemos para medir el apoyo democrático. Los latinoamericanos que son de izquierda se oponen más a la censura gubernamental que sus compatriotas de derecha, pero por otro lado, los ciudadanos que se identifican con la derecha manifiestan mayores niveles de apoyo que los de izquierda a la idea de que la democracia es la mejor forma de gobierno, también en la mayoría de los países. Aún más importante, los que se identifican con la derecha son menos propensos a derrocar por medios violentos a un gobierno electo. En otras palabras, existe evidencia suficiente para afirmar que los latinoamericanos de izquierda no pueden ser considerados sustancialmente menos democráticos que los de derecha, pero tampoco es cierto que sean más democráticos.

Conclusiones

Tomando en cuenta todos los argumentos antedichos, este capítulo presenta un panorama razonablemente positivo para el futuro de la democracia latinoamericana bajo gobiernos de izquierda. Primero, los latinoamericanos han expandido la competencia política al incorporar partidos de izquierda al gobierno. El futuro de la democracia puede estar en riesgo si un grupo importante de actores políticos siempre están del lado de los perdedores. Durante años, muchos partidos de izquierda latinoamericanos fueron perdedores en el juego electoral. Por lo tanto, la llegada de algunos de ellos al gobierno, en vez de ser un motivo de preocupación, debería ser interpretada como un indicador de salud democrática y un mecanismo para fortalecer el apoyo democrático entre los ciudadanos. Segundo, los resultados presentados en este capítulo también indican que cuando los latinoamericanos tienen maneras institucionales y democráticas para canalizar el descontento, optan por ellas. Al menos este es el caso en Brasil, México y Uruguay, donde los ciudadanos prefirieron votar por partidos “creíbles” en vez de buscar alternativas no democráticas y no institucionales para alcanzar sus demandas.

Por otro lado, este artículo provee de evidencia a favor del argumento que los latinoamericanos, en vez de orientar sus decisiones de voto y comportamiento político según sus preferencias ideológicas y de políticas, votan teniendo en cuenta los resultados. Eso lleva a concluir que el reciente giro de América Latina hacia la izquierda es el resultado del descontento económico de los votantes, en vez de una respuesta ideológica en contra de las políticas económicas neoliberales.

Los latinoamericanos son capaces de hacer rendir cuentas a sus líderes, removerlos de sus cargos cuando no cumplen con lo que se esperaba, y cambiar a aquellos que están en el gobierno por otros que representan una “oposición creíble”. El éxito de estos partidos en Brasil, México y Uruguay implica un aumento en la institucionalización y representación política, a la vez que un signo de madurez política (López 2005). En una región que demanda una democracia que de



respuesta a las necesidades de los ciudadanos, los ejemplos de Brasil, México y Uruguay muestran una manera en que esto puede hacerse. El reciente giro de la región hacia la izquierda ha intensificado y fortalecido la democracia al incorporar a los perdedores en el juego político.

A pesar de que América Latina ganó en pluralismo político, todavía no se sabe como gobernarán los partidos de izquierda. El análisis realizado con el Barómetro de las Américas 2006/07 muestra que los latinoamericanos que se identifican con la izquierda no son sustancialmente menos democráticos que los de derecha, pero tampoco son más democráticos. Por lo tanto, para saber hacia donde va la región al moverse a la izquierda, es necesario mirar si los gobiernos de izquierda están profundizando la democracia o realizando prácticas no democráticas. Chile, Brasil y Uruguay son países en donde los gobiernos de izquierda están actuando con respeto total hacia la democracia. Pero el escenario no es tan claro en otros países de la región como Venezuela, Bolivia y Ecuador. Todavía es prematuro decir si los gobiernos de izquierda en este último grupo de países producirán democracias más estables o si, por el contrario, representan algún riesgo para la democracia.

Referencias

- Ames, Barry. *The Deadlock of Democracy in Brazil*. Ann Arbor: The University of Michigan Press, 2001
- Anderson, Christopher J., André Blais, Shaun Bowler, Todd Donovan, y Ola Listhaug. *Losers' Consent. Elections and Democratic Legitimacy*. Oxford: Oxford University Press, 2005.
- Benton, Allyson Lucinda. "Dissatisfied Democrats or Retrospective Voters? Economic Hardship, Political Institutions and Voting Behavior in Latin America." *Comparative Political Studies* 38 (4) (2005):417-442.
- Cameron, Maxwell. *Democracy and Authoritarianism in Peru: Political Coalitions and Social Change*. New York: St. Martin's Press, 1994.
- Cantón, Darío y Jorge Raúl Jorrat. "Economic Evaluations, Partisanship, and Social Bases of Presidential Voting in Argentina, 1995 and 1999." *International Journal of Public Opinion Research* 41 (4) (2002):413-427.
- Converse, P. The Nature of Belief Systems in Mass Publics. En *Ideology and Discontent*, ed. D. Apter. Glencoe: The Free Press, 1964.
- Domínguez, Jorge I. y James A. McCann. "Shaping Mexico's Electoral Arena: The Construction of Partisan Cleavages in the 1988 and 1991 National Elections." *American Political Science Review* 89 (1) (1995):34-48.
- Domínguez, Jorge I. y James A. McCann. *Democratizing Mexico: Public Opinion and Electoral Choices*. Vol. 89, *American Political Science Review*. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 1996.
- Dutch, Raymond M. State of the Latin American Political Economy: The James A. Baker III Institute for Public Policy of Rice University, 2003.
- Easton, David. *The Political System*: Knopf, 1953.
- Echegaray, Fabián. *Economic Crises and Electoral Responses in Latin America*. Maryland: University Press of America, 2005
- Economist, The. 2006. The battle for Latin America's soul. *The Economist*, 20 May.
- Edwards, Sebastian. "Latin America's Underperformance." *Foreign Affairs* 77 (2) (1997).
- Escaith, H. y S. Morley. "El efecto de las reformas estructurales en el crecimiento de América Latina y el Caribe: una estimación empírica." *El Trimestre Económico* 68 (2201).
- Fiorina, Morris P. *Retrospective Voting in American National Elections*. New Haven: Yale University Press, 1981.
- Fuchs, Dieter y Hans-Dieter Klingermann. The Left-Right Schema. En *Continuities in Political Action*, ed. Jennings K. et al. Berlin: Walter de Gruyter, 1990.
- Gillespie, Charles y L.E. González. Uruguay: The Survival of Old and Autonomous Institutions. En *Democracy in Developing Countries, vol. 4: Latin America*, ed. Juan J. Linz, Larry Diamond y Seymour M. Lipset. Boulder, Colorado: Lynne Rienner Publishers, 1989.
- González, Luis E. *Political Structures and Democracy in Uruguay*. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1991.
- Greene, Kenneth. Opposition Party Strategy and Spatial Competition in Dominant Party Regime. A Theory and the Case of Mexico. *Comparative Political Studies* 35 (7) (2202):755-783.



- Huber, Evelyn y Fred Solt. "Successes and Failures of Neoliberalism." *Latin American Research Review* 39 (3) (2004).
- IDEA. Reform Fatigue. Washington DC: Inter-American Development Bank., 2004.
- Inglehart, Ronald y Hans-Dieter Klingerman. Party Identification, Ideological Preference and the Left-Right Dimensions among the Western Mass Publics. En *Party Identification and Beyond: Representations of Voting and Party Competition*, ed. I. Budge, I. Crewey D. Farlie. Chichester: Wiley, 1976.
- Kinder, Donald R. Opinion and Actions in the Realm of Politics. En *Handbook of Political Psychology* (1998).
- Kinder, Donald R. y D. Roderick Kiewiet. "Sociotropic Politics: The American Case." *British Journal of Political Science* 11 (2) (1981):129-161.
- Kitschelt, Herbert y Staf Hellemans. "The Left-Right Semantics and The New Politics Cleavage." *Comparative Political Studies* 23 (2) (1990):210-238.
- Klesner, Joseph L. The Structure of the Mexican Electorate: Social, Attitudinal, and Partisan Bases of Vicente Fox's Victory. En *Mexico's Pivotal Democratic Election. Candidates, Voters, and the Presidential Campaign of 2000*, editado por J. I. a. C. L. Domínguez. Stanford: Stanford University Press, 2004.
- Klesner, Joseph L. Electoral Competition and the New Party System in Mexico. *Latin American Politics and Society* 47 (2) (2005):103-142.
- Kuczynski, Pedro-Pablo y John Williamson, ed. *After the Washington Consensus: Restarting Growth and Reform in Latin America*. Washington DC: Institute for International Economics, 2003.
- Latinobarómetro, 2004. Annual Report, 2004.
- Latinobarómetro, 2006. Annual Report, 2006.
- Lawson, Chappell y James McCann. "Television News, Mexico's 2000 Elections and Media Effects in Emerging Democracies." *British Journal of Political Science* 35 (2004):1-30.
- Lewis-Beck, Michael. "Comparative Economic Voting: Britain, France, Germany, Italy." *American Journal of Political Science* 30 (2) (1986):315-346.
- Lewis-Beck, Michael. *Economics and Elections: The Major Western Democracies*. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1988.
- Lewis-Beck, Michael y Paolo Belluci. "Economic Influences on Legislative Elections in Multiparty Systems: France and Italy." *Political Behavior* 4 (1982):93-107.
- López, Santiago. "Partidos Desafiantes en América Latina: Representación Política y Estrategias de Competencia de las Nuevas Oposiciones." *Revista de Ciencia Política* 25 (2) (2005):37-64.
- Lora, Eduardo. Structural Reforms in Latin America: What Has Been Reformed and How to Measure it. En *Working Paper Green Series #348*. Washington DC: Inter-American Development Bank, 1997/2001.
- Lora, Eduardo y F. Barrera. Una década de reformas estructurales en América Latina: el crecimiento, la productividad y la inversión, ya no son como antes. Washington DC: Inter American Development Bank, Research Department, 1997.
- Lora, Eduardo y Ugo Panizza. Structural Reforms in Latin America under Scrutiny. In *Research Paper*. Washington DC: Inter American Development Bank, 2002.
- Lora, Eduardo, Panizza, Ugo y Myriam Quispe-Agnoli. "Reform Fatigue: Symptoms, Reasons and Implications." *Federal Reserve Bank of Atlanta Economic Quarter* (Second Quarter) (2004).

- MacKuen, Michael, Robert Erikson y James Stimson. "Sociotropic Politics: The American Case." *British Journal of Political Science* 11 (2) (1992):129-161.
- Mainwaring, Scott. *Rethinking Party Systems in the Third Wave of Democratization. The Case of Brazil*. Stanford, CA: Stanford University Press, 1999.
- Mainwaring, Scott y Timothy R. Scully, ed. *Building Democratic Institutions: Party Systems in Latin America*. Stanford, CA: Stanford University Press, 1995.
- Mora y Araujo, Manuel, y Peter H. Smith. Peronism and Economic Development: The Elections of 1973. En *Juan Perón and the Reshaping of Argentina*, ed. F. C. Turner y J. E. Miguens. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1984.
- Moreno, Alejandro. Party Competition and the Issue of Democracy: Ideological Space in Mexican Elections. En *Governing Mexico: Political Parties and Elections*, edited by M. Serrano. London: University of London, 1998.
- Moreno, Alejandro. Ideología y voto: dimensiones de competencia política en México en los noventa. *Política y Gobierno* 6 (1) (1999):45-81.
- Nadeau, Richard y Michael S. Lewis-Beck. "National Economic Voting in U.S. Presidential Elections." *Journal of Politics* 63 (1) (2001):158-181.
- Panizza, Ugo y Mónica Yañez. "Why are Latin Americans so unhappy about reforms?" *Journal of Applied Economics* VIII (1) (2005).
- Power, Timothy. "Blairism Brazilian Style? Cardoso and the "Third Way" in Brazil." *Political Science Quarterly* 116 (4) (2001/2002).
- Przeworski, Adam y John Sprague. *Paper Stones*. Chicago: University of Chicago Press, 1986.
- Remmer, Karen y Francois Gélinau. 2003. "Subnational electoral choice. Economic and Referendum Voting in Argentina, 1983-1999." *Comparative Political Studies* 36 (7) (2003):801-821.
- Roberts, Kenneth M. y Erik Wibbels. "Party Systems and Electoral Volatility in Latin America: A Test of Economic, Institutional, and Structural Explanations." *American Political Science Review* 93 (3) (1999):575-590.
- Roberts, Kenneth M. y Moisés Arce. "Neoliberalism and Lower-Class Voting Behavior in Peru." *Comparative Political Studies* 31 (2) (1998):217-246.
- Rodrik, Dani y Francisco Rodríguez. Trade Policy and Economic Growth: A Skeptic's Guide to the Cross-National Evidence. En *NBER Macroeconomics Annual 2000*, ed. B.S. and K. Rogoff Bernanke. Cambridge: Massachusetts Institute of Technology Press, 2001.
- Sachs, Jeffrey; McCord, Gordon y Wing Thye Woo. Understanding African Poverty: Beyond the Washington Consensus to the Millennium Development Goals Approach. En *Africa in the World Economy*, ed. Jan Joost and Age Akkerman Teunissen. The Hague: FONDAD, 2005.
- Samuels, David. "Sources of Mass Partisanship in Brazil." *Latin American Politics and Society*, 2006.
- Schlesinger, Arthur M., Jr. *The Cycles of American History*. Boston: Houghton-Mifflin, 1986.
- Seligson, Mitchell y Miguel Gómez. Ordinary Elections in Extraordinary Times: The Political Economy of Voting in Costa Rica. En *Elections and Democracy in Central America*, ed. J. Booth y M. Seligson. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1989.
- Stallings, Barbara y Wilson Peres. *Growth, Employment, and Equity: the Impact of Economic Reforms in Latin America and the Caribbean*. Washington D.C.: Brookings Institution, 2000.
- Stiglitz, Joseph. *Globalization and Its Discontent*. W.W.Norton & Company, 2002.



- Torcal, Mariano y Scott Mainwaring. "The Political Recrafting of Social Bases of Party Competition: Chile, 1973-95." *British Journal of Political Science* 33 (2003):55-84.
- Weyland, Kurt. "Peasants and Bankers in Venezuela? Presidential Popularity and Economic Reform Approval, 1989-1993." *Political Research Quarterly* 51 (2) (1998):341-362.
- Weyland, Kurt. "Economic Voting Reconsidered. Crisis and Charisma in the Election of Hugo Chávez." *Comparative Political Studies* 36 (7) (2003):822-848.

Parte II. Desafíos para la democracia desde la sociedad civil

VII. Confianza social, desigualdad económica y democracia en las Américas*

Abby B. Córdova Guillén**

Resumen

El objetivo principal de este trabajo es identificar “fuentes” de confianza social en Latinoamérica, explorando por qué los países que poseen un mayor desarrollo político y económico, en las Américas, es decir Canadá y los Estados Unidos, a su vez presentan niveles de confianza social más altos en comparación con países vecinos. La tesis principal de este capítulo es que los niveles relativamente menores de confianza social en Latinoamérica son en parte explicados por la distribución sumamente desigual de los recursos económicos en la región, debido a que la confianza social es menos probable de proliferar en un ambiente que instiga polarización y conflicto social entre ricos y pobres. La evidencia empírica de este capítulo sugiere que la falta de una mejora sustancial en la distribución de ingresos, en Latinoamérica, en los últimos años representa un desafío para la democracia, dado que la desigualdad económica provoca desconfianza social. Este trabajo también encuentra que la confianza social, en vez de la participación en organizaciones de la sociedad civil, es el componente más importante del capital social en Latinoamérica, ya que promueve consistentemente el tipo de actitudes políticas que favorecen a la democracia, tales como el apoyo a la democracia y la tolerancia política. Esta conclusión refuerza los resultados de investigaciones anteriores y sugiere que esfuerzos encaminados a fortalecer la sociedad civil en la región no harán avanzar la democracia, a menos que una mayor participación cívica esté acompañada por un aumento considerable en los niveles de confianza social y por lo tanto por una distribución más equitativa del ingreso.

"No se puede construir confianza cuando algunos grupos se sienten excluidos y creen que otros controlan los recursos".¹

¿Está la desigualdad económica deteriorando el capital social en Latinoamérica? Paradójicamente, aunque el surgimiento de la democracia en Latinoamérica ha abierto canales importantes de participación entre los ciudadanos, la participación cívica y política durante el período de democratización han ocurrido en un ambiente caracterizado por una baja confianza social, desafiando la idea de que la participación cívica y la confianza interpersonal, los dos componentes principales del capital social, van siempre de la mano (Putnam 1993). Teniendo en

* La autora agradece los comentarios y sugerencias del profesor Mitchell Seligson a versiones anteriores de este capítulo, y al departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Vanderbilt por el apoyo financiero brindado. Además, hace expreso sus agradecimientos a los miembros del equipo del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP). Cualquier omisión o error es responsabilidad propia.

** Actualmente parte del equipo LAPOP y estudiante del doctorado en el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Vanderbilt.

¹ Eric M. Uslaner, "Producing and Consuming Trust," *Political Science Quarterly* 115, no. 4 (2000). p. 580.



cuenta que la literatura sugiere que un nivel alto de confianza social es más efectivo en profundizar la democracia que la participación en organizaciones cívicas por sí misma (Inglehart y Welzel 2005), la importancia de identificar “fuentes” de confianza social con el objetivo de fortalecer el capital social en Latinoamérica se vuelve evidente. La hipótesis principal de este capítulo es que los niveles relativamente bajos de confianza social en Latinoamérica son en parte explicados por la distribución sumamente desigual de los recursos económicos en la región, que de hecho es la región con la peor distribución del ingreso en el mundo. Es decir, este capítulo sostiene que la desigualdad económica fomenta desconfianza social, lo que a su vez tiene un efecto negativo sobre la democracia.

Muchas son las definiciones de "confianza social" que se pueden encontrar en la literatura. Por ejemplo, Newton (2001) define la confianza social como "la creencia que en el peor de los casos otras personas no le harán daño a propósito, y que en el mejor de los casos actuarán de acuerdo a los intereses de uno" (202). Generalmente, la confianza social es concebida como el ingrediente que hace posible la interacción entre individuos que tal vez no se conocen lo suficiente o que no necesariamente comparten los mismos intereses y valores, pero que están dispuestos a emprender acciones colectivas. Por lo tanto, se dice que la confianza social es importante para lograr mejores democracias, ya que facilita la participación y la cooperación entre personas con diferentes creencias y experiencias (Fukuyama 1995, Inglehart 1999, Putnam 1993, Uslaner 2002), fomentando de esta manera la tolerancia política. Sin embargo, algunas sociedades parecen ser más propensas a generar las condiciones para la creación de confianza social que otras, y las condiciones económicas, particularmente, juegan un papel importante en la formación de la confianza social.

Tal como lo sugiere la cita de Uslaner (2000) al principio de este capítulo, es difícil que la confianza interpersonal florezca en sociedades donde los frutos del crecimiento económico son distribuidos de una forma muy desigual, ya que los conflictos de interés entre ricos y pobres suelen ser más profundos, lo que conduce al deterioro de la solidaridad y cooperación y pone en riesgo la creación del tipo de capital social que fortalece la democracia. Aunque se ha encontrado que el crecimiento económico por sí mismo es un determinante importante de la estabilidad política en sociedades democráticas, se ha demostrado también que la probabilidad de un rompimiento de la democracia es mayor en naciones con niveles altos de desigualdad económica (Przeworski 2000). De hecho, muchas investigaciones han señalado la importancia de la igualdad económica para la democratización, así como también para la prevención de conflictos (Boix 2003, Karl 2000, Lipset 1961, Muller y Seligson 1987).

Lipset (1961), por ejemplo, enfatiza la importancia de transformar la estructura de clases en sociedades democráticas, de una figura de "pirámide" a una de “diamante”, indicando que "una clase media amplia reduce la posibilidad de conflicto, ya que recompensa partidos moderados y democráticos y penaliza grupos extremistas" (51). Ciertamente, el conflicto social y la violencia personal parecen ser más comunes en sociedades con una distribución del ingreso altamente desigual (Fajnzylber, et al. 2002, Fajnzylber, et al. 1998). Este capítulo argumenta que la desigualdad económica frena el proceso de consolidación de la democracia en Latinoamérica, debido a que reduce el nivel de confianza social. Las sociedades desconfiadas son poco probables de crear un ambiente favorable a la democracia, ya que una baja confianza social está asociada con mayores oportunidades para el surgimiento de conflicto.

Además, la participación cívica en un ambiente caracterizado por baja confianza social resulta menos importante para impulsar la democracia, porque la pertenencia a organizaciones cívicas en este caso es más probable de fomentar una confianza "particularizada", en lugar de una confianza "generalizada" (Uslaner 2002, 2000), lo que sugiere que la confianza se materializa "adentro" pero no "entre" grupos cívicos. Es por eso que este estudio sostiene que el tipo de participación cívica que es más importante para las democracias latinoamericanas es la que está acompañada por niveles altos de confianza interpersonal. Por lo tanto, este capítulo procura contestar la pregunta, ¿Cómo pueden los países latinoamericanos aumentar sus niveles de confianza social, de manera que las oportunidades de participación, que el surgimiento de la democracia ha traído consigo, se puedan traducir en una cultura democrática amplia y por lo tanto en democracias más fuertes? En resumen, cómo se puede hacer funcionar el capital social en Latinoamérica de manera consistente con las predicciones de la mayoría de la literatura del capital social: la confianza interpersonal y la participación cívica van juntas y se refuerzan mutuamente (Putnam 1993). Es de notar que el tema de este capítulo tiene implicaciones de política importantes, así como también relevancia teórica. Aunque el fortalecimiento de la sociedad civil ha estado al centro de los planes de desarrollo político para la región (Campbell 2003, Seligson 2006), y ha sido un componente muy importante en los programas para la democracia de USAID (Finkel, Pérez-Liñán and Seligson 2007), este trabajo sugiere que la participación cívica por sí misma es improbable de fomentar la democracia a menos que forme parte de una agenda más amplia que incluya políticas que faciliten las condiciones para la generación de una confianza social generalizada, tales como políticas orientadas a promover la igualdad económica.

Debido a que ambos, la igualdad económica y el desarrollo socioeconómico, han sido identificados como fuentes de confianza social, este estudio analiza si el efecto de la igualdad económica sobre la confianza social es significativo, una vez se toma en cuenta el impacto del desarrollo socioeconómico. Ciertamente, se ha argumentado que sentimientos de seguridad económica pueden promover confianza entre individuos, ya que un mayor bienestar económico reduce la competencia por recursos escasos, lo que a su vez disminuye la probabilidad de conflicto social (Inglehart y Welzel 2005). Además de factores estructurales, es decir el grado de desarrollo e igualdad económica, este trabajo también examina los determinantes individuales de la confianza interpersonal. En particular, esta investigación explora como la experiencia personal con el crimen, así como las características socioeconómicas y demográficas estándares, condicionan la formación de la confianza interpersonal. Como se explicará, dado que este estudio busca identificar los determinantes de la confianza social, con el objetivo de encontrar mecanismos para fortalecer el capital social en Latinoamérica, este estudio se aleja del enfoque adoptado por trabajos anteriores que consideran la confianza social como una característica duradera, sobre todo un rasgo cultural, antes que un fenómeno social que puede ser alterado por medio de políticas públicas.

Metodológicamente, este estudio lleva a cabo un análisis de niveles múltiples de los determinantes de la confianza social, que toma en cuenta características a nivel individual y agregado o de país, con el objetivo de explorar por qué individuos que residen en los países más democráticos y desarrollados de las Américas (Canadá y los Estados Unidos) tienen un nivel promedio de confianza social más alto que individuos que residen en países vecinos.



Ciertamente, a nivel de país hay evidencia cuantiosa, principalmente proveniente de los datos de encuesta del World Values Survey (WVS), que indica que existe una correlación positiva fuerte entre la confianza social y el desarrollo político y económico (Inglehart y Welzel 2005, Norris 2002). Como se mostrará, la evidencia empírica que se presenta en este trabajo confirma estos resultados.

Los datos utilizados en este estudio consisten en encuestas cara a cara para diecinueve naciones latinoamericanas, incluyendo países del Caribe, que provienen del Barómetro de las Américas del 2006/07 llevado a cabo por LAPOP, y además encuestas por teléfono, también recolectadas por el Barómetro de las Américas durante el mismo año, en Canadá y los Estados Unidos. En resumen, la base de datos incluye más de 32.000 entrevistas individuales. La ronda de encuestas del 2006-07 nos permite hacer comparaciones entre dos grupos de naciones con niveles de confianza social y desarrollo político y económico muy diferentes. Específicamente, los datos hacen posible examinar por qué países Latinoamericanos y del Caribe tienen un nivel más bajo de confianza social que Canadá y los Estados Unidos. Para contestar esta pregunta, se combinaron los datos de LAPOP con datos agregados sobre el grado de desarrollo socioeconómico y de desigualdad económica en cada país. Los objetivos específicos de este capítulo son los siguientes:

- Hacer una breve revisión de la literatura sobre el capital social, poniendo énfasis en el papel que juega la confianza social y sus determinantes.
- Medir el nivel del capital social en las Américas y determinar que tan fuerte es la relación entre la confianza social y la participación cívica.
- Examinar si la brecha del capital social entre Latinoamérica y Canadá y los Estados Unidos está determinada por diferencias relacionadas a la experiencia personal con el crimen y características socioeconómicas y demográficas individuales.
- Explorar el efecto de factores estructurales sobre la confianza social, específicamente la desigualdad económica y el desarrollo socioeconómico, en comparación con el efecto de características individuales.
- Finalmente, mostrar la importancia de la confianza interpersonal para la democracia en Latinoamérica, en comparación con la participación en organizaciones cívicas, examinando si individuos con mayores niveles de confianza social son más probables de adoptar una cultura democrática.

Una breve revisión de la literatura

La idea de que una "cultura cívica" es importante para la consolidación de la democracia tiene una larga tradición en ciencias políticas. La confianza social ha sido identificada como una de las características principales de una cultura cívica. Por ejemplo, Banfield (1958) concluyó que "Montegrano," un pueblo localizado en el sur de Italia, era caracterizado por la falta casi completa de confianza entre sus habitantes, lo que hacía la participación en actividades colectivas extremadamente difícil. Como resultado, el gobierno municipal sufría de una incapacidad política casi completa, lo que al mismo tiempo afectaba negativamente las oportunidades de mejoras económicas. De manera similar, Almond y Verba (1963) encontraron

que entre los cinco países que analizaban, los que tenían menores niveles de democracia, entre ellos México, también tenían menores niveles de confianza interpersonal.

Recientemente con la publicación del libro "Making Democracy Work," con el cual Putnam (1993) popularizó el término "capital social," la importancia de la confianza social ha sido dramáticamente re-enfatizada. Al centro de la teoría del capital social se encuentra la idea de que gobiernos democráticos en sociedades con altos niveles de confianza responden más a las demandas de los ciudadanos, debido a que la participación cívica y política en esas sociedades es más alta, y por lo tanto los gobiernos son al mismo tiempo más probables de representar los intereses de la mayoría de la población. Putnam sugiere que los componentes principales del capital social son la confianza interpersonal y la participación cívica. De hecho, para Putnam hay una relación recíproca entre la confianza interpersonal y la participación cívica, sugiriendo que donde la participación cívica es alta, la confianza social debería también ser alta, y viceversa. Sin embargo, como se mostrará en este capítulo, aunque la participación cívica es relativamente alta en muchos países Latinoamericanos, el nivel de confianza social es bajo, evidencia empírica que contradice la teoría de Putnam.

La característica común de los trabajos que se acaban de mencionar es que estas investigaciones entienden los resultados políticos como productos de una "cultura cívica" que está arraigada en el legado histórico de las naciones, y por lo tanto como productos de los valores culturales transmitidos de generación a generación. Desde esta perspectiva, la confianza social es predominantemente un fenómeno cultural, lo que hace difícil que ocurran cambios en los niveles de la confianza social, ya que por su misma naturaleza las características culturales son perdurables.² Esto también implica que algunas culturas son más favorables a la democracia que otras.

Siguiendo las ideas de Max Weber, los valores protestantes occidentales son considerados más compatibles con la democracia que otros sistemas de normas y valores. Ciertamente, muchos de los países más exitosos política y económicamente en el mundo son al mismo tiempo aquellos cuyas culturas se originaron en tradiciones protestantes, aunque los países que pertenecen a las llamadas civilizaciones de la ética "confuciana" han mostrado un progreso impresionante en los últimos años. Por ejemplo, Harrison (1985) evalúa las causas del subdesarrollo en Latinoamérica, y concluye que lo que impide a los países Latinoamericanos prosperar son los valores y las tradiciones católicas enraizadas en la cultura hispana. Esta visión es compartida por Inglehart (Inglehart 1990, 1988, 1999, Inglehart y Welzel 2005), quien entiende las actitudes cívicas, incluyendo la confianza social, como productos culturales, aunque reconoce que factores estructurales, el desarrollo socioeconómico particularmente, pueden alterar el nivel de confianza social especialmente en sociedades que ya han alcanzado niveles altos de desarrollo político y económico.

Los enfoques "culturalistas" han sido retados por la evidencia empírica, ya que, por ejemplo, la confianza social y la participación cívica parecen haber experimentado un descenso

² Tal como Inglehart ha mostrado en sus estudios sobre Europa, las culturas pueden cambiar a través del tiempo. Ronald Inglehart, *Culture Shift in Advanced Industrial Society* (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1990).



importante en los Estados Unidos en décadas recientes (Putnam 2000, 1995), sugiriendo que algo más, en vez de características culturales, puede estar afectando los niveles de capital social en los EE.UU., dado que cambios dramáticos en la cultura son improbables de suceder en un espacio de tiempo relativamente corto. De acuerdo con Putnam, el descenso en el activismo cívico en los Estados Unidos es explicado, en parte, por el incremento en el número de horas que los individuos dedican a ver televisión, ya que esto disminuye el tiempo que se dedica a interactuar con otros. Además, según Putnam el incremento en el número de horas frente a la televisión ha hecho al mismo tiempo que las personas confíen menos en otros, porque los programas de televisión tienden a sobreestimar los aspectos negativos y muestran el mundo como un lugar "malo" (Putnam 1996).

La tesis de Putnam también ha sido cuestionada. Aunque muchos concuerdan que ha habido un descenso en la confianza social en los EE.UU., existe menos consenso sobre las razones de dicho descenso, y ciertamente la explicación de Putnam relacionada al impacto de la televisión ha sido rebatida. Uslaner (1998, 2005), por ejemplo, rechaza las explicaciones de Putnam sobre el declive del capital social en los Estados Unidos. Él argumenta que el incremento progresivo de la desigualdad económica en los Estados Unidos en los últimos años explica de mejor manera la disminución de la confianza interpersonal (Uslaner y Brown 2005), y agrega que el descenso de la participación cívica es el producto de la disminución en la confianza social.

Efectivamente, otros autores también han sugerido que los elementos que conforman una "cultura cívica", entre ellos la confianza social, no son completamente culturales, sino el producto de factores estructurales (Armony 2004, Jackman y Miller 1998, Muller y Seligson 1994). Por lo tanto, las actitudes cívicas son más maleables que lo que sugieren algunos de los defensores del enfoque culturalista. Los factores estructurales son importantes y consecuentemente los niveles de confianza social pueden ser cambiados por medio de políticas públicas. Este es el marco teórico que ha inspirado este estudio. Independientemente del papel que la cultura juega, este trabajo sostiene que la calidad del capital social en Latinoamérica puede ser mejorada sí y sólo sí se implementa una combinación adecuada de políticas públicas. La igualdad económica ha sido señalada como un factor estructural importante que afecta el nivel de confianza social en naciones democráticas (Armony 2004, Uslaner y Brown 2005), y su papel como determinante del capital social en Latinoamérica en relación con otros factores estructurales e individuales es aquí investigado.

El capital social en Latinoamérica en perspectiva comparada

Siguiendo el enfoque de Norris (2002), este estudio mide el capital social utilizando dos indicadores: la confianza social y el activismo cívico.³ El siguiente ítem en la encuesta del Barómetro de las Américas se emplea para medir la confianza interpersonal:

³ El análisis de factores de los datos del Barómetro de las Américas 2006 reveló que las medidas de confianza social y participación cívica utilizadas en este capítulo pertenecen a dimensiones diferentes, lo que sugiere que cada una de ellas es un componente distinto del capital social. Esto confirma los resultados de Pippa Norris (2002). De hecho, ella sostiene que la confianza social corresponde a la dimensión "cultural" del capital social, y que la participación cívica es la dimensión "estructural." Sin embargo, a diferencia de Norris, en esta investigación no se pudo construir

IT1. Ahora, hablando de la gente de aquí, ¿diría que la gente de su comunidad es ...?
(1) Muy confiable (2) Algo confiable (3) Poco confiable (4) Nada confiable

La confianza social, en este estudio, se refiere entonces a qué tanto los individuos confían en personas fuera de su círculo familiar inmediato. Como se mencionó anteriormente, el tipo de confianza que es probable de fortalecer la democracia es el que hace que individuos simpaticen con personas que quizá tengan creencias, ideologías, o valores diferentes a los propios, ya que es este tipo de confianza es el que contribuye al establecimiento de sociedades más armoniosas y por lo tanto democráticas (Putnam 2000, Uslaner 2002). El Gráfico VII-1 muestra el nivel promedio de confianza social en cada país, basado en la medida de confianza interpersonal del Barómetro de las Américas.⁴ Tal como se esperaba, el nivel promedio de confianza social es mucho más bajo en países Latinoamericanos y del Caribe que en Canadá y los Estados Unidos, confirmando la tendencia encontrada en las encuestas del World Values Survey. Los dos países más ricos y más democráticos en la muestra presentan un nivel mucho más alto de confianza social. Entre los veintiún países que se examinan, Canadá tiene el nivel más alto de la confianza social, con un promedio de 82,8 puntos, y Haití tiene el nivel más bajo, con un promedio de sólo 42,1 puntos. Estados Unidos tiene el segundo nivel más alto de la confianza social, pero su promedio no es estadísticamente diferente que el de Canadá.⁵

un indicador único del capital social, ya que la prueba Cronbach Alpha reveló que un índice basado en estos dos componentes tenía una consistencia interna baja, lo que sugiere que en el caso de las Américas la confianza social y la participación no van siempre juntas.

⁴ La variable original de confianza interpersonal fue recodificada en escala del 0 al 100 para lograr comparabilidad con los otros capítulos de este libro.

⁵ Aunque el Barómetro de las Américas 2006 incluye datos para Brazil, éste no ha sido tomado en cuenta en este capítulo, ya que la pregunta sobre confianza interpersonal fue hecha de manera distinta en este país.

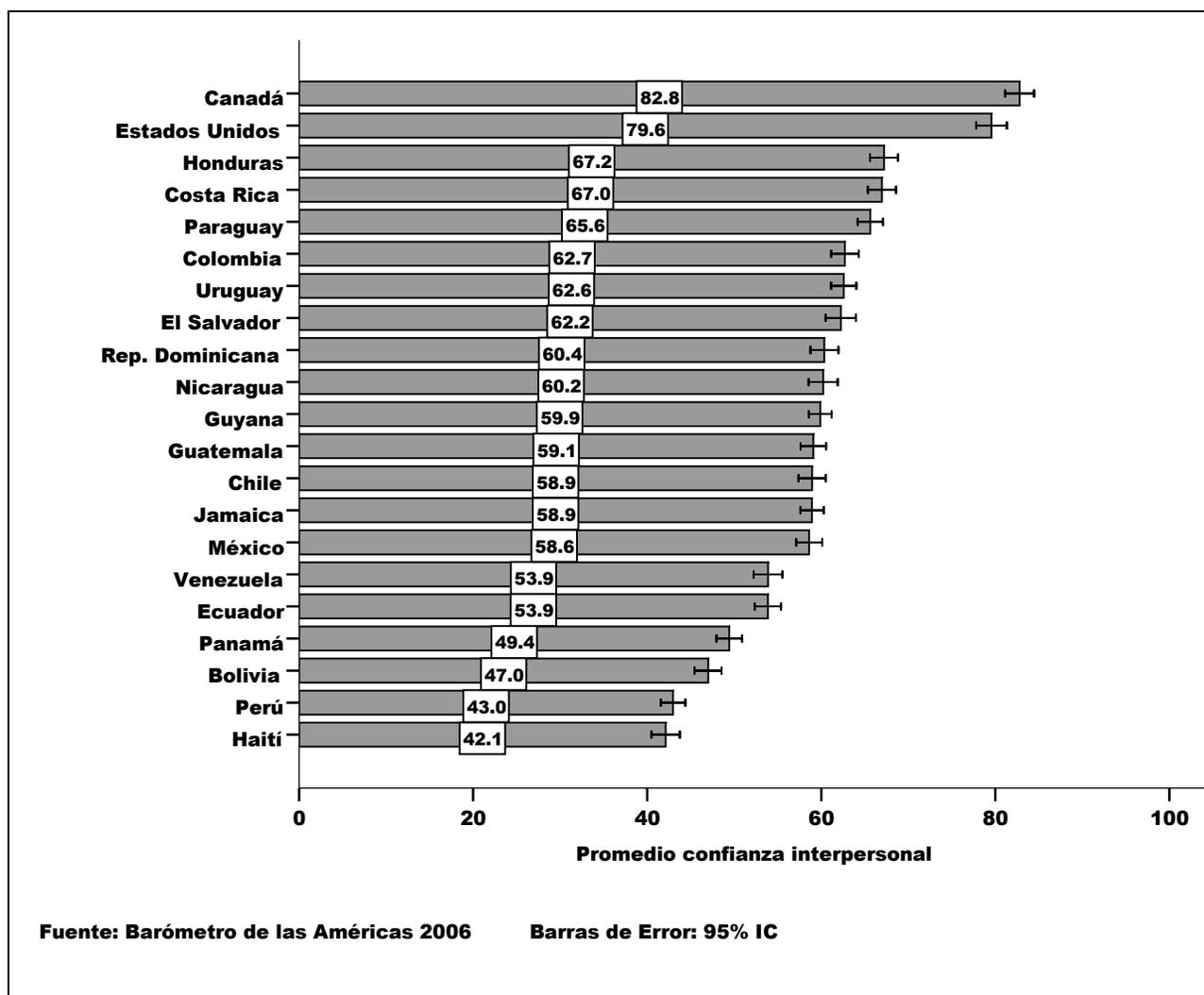


Gráfico VII-1. Promedio de confianza social por país

Para medir el nivel de activismo cívico, se construyó un índice de "participación cívica", el cual indica si la persona entrevistada dijo haber participado en reuniones de *por lo menos una* de las siguientes organizaciones seculares de la sociedad civil: una asociación de padres de familia de la escuela o colegio (el equivalente en Estados Unidos a los PTA), un comité o junta de mejoras para la comunidad, una asociación de profesionales, comerciantes o productores, y reuniones de un partido o el movimiento político.⁶ El Gráfico VII-2 muestra el porcentaje de la

⁶ Aunque la encuesta incluye una pregunta sobre participación en reuniones de organizaciones religiosas, esta no se incluyó en el índice debido a que un análisis de factores reveló que participación en este tipo de organizaciones pertenece a una dimensión o componente diferente de participación cívica. Es posible que algunos de los que respondieron esta pregunta no diferenciaron entre su participación en "servicios" religiosos y participación en "organizaciones" religiosas, las cuales son formas de participación cívica distintas. Adicionalmente, aunque las preguntas sobre activismo cívico toman en cuenta la "frecuencia" con que los entrevistados participan en organizaciones cívicas, en este capítulo se prefirió el uso de un índice dicotómico en lugar de una escala, ya que la consistencia interna de las cuatro variables incluidas en el índice de participación cívica es baja, tal como lo indicó la prueba Cronbach Alpha. Una consistencia interna baja implica que personas que pertenecen a un tipo de organización no necesariamente tienen que pertenecer a otro tipo, lo cual es razonable.

población en cada país que participa en por lo menos una de estos cuatro tipos de organizaciones cívicas. Los países con los mayores niveles de participación cívica, basado en el índice que aquí se utiliza, son Bolivia, Perú, y Canadá, con el 78,2, 73,8, y 72,4 por ciento de la población, respectivamente, participando en la sociedad civil. En contraste con estas cifras, los países con el porcentaje más bajo de participación en reuniones de organizaciones cívicas son Panamá (45.4%), Costa Rica (46.5%), y Uruguay (47.2%). Como se puede observar, estos resultados no concuerdan con lo esperado.

Se esperaba que Canadá tuviera una participación alta, y de hecho la tiene, y que Estados Unidos también tuviera una participación alta por encima de los países latinoamericanos y Caribeños, pero no es así. Sin embargo, en términos absolutos, la participación cívica en Estados Unidos es relativamente alta (67.5%). Los resultados inesperados son para los países de Latinoamérica que muestran los niveles más altos y bajos de participación cívica. Panamá, Costa Rica y Uruguay son democracias bien establecidas, con ésta última considerada como la democracia más antigua y consolidada de la región. Sin embargo, estas tres naciones poseen el nivel de participación cívica más bajo. En forma similar, Chile, en muchos sentidos considerado un país con una redemocratización ejemplar, también presenta un nivel bajo de participación cívica. Por otro lado, Bolivia es el país con el nivel de participación más alta, a pesar su frágil pasado democrático y su historia de turbulencia política en el que gobiernos elegidos han sido forzados a abandonar sus puestos.

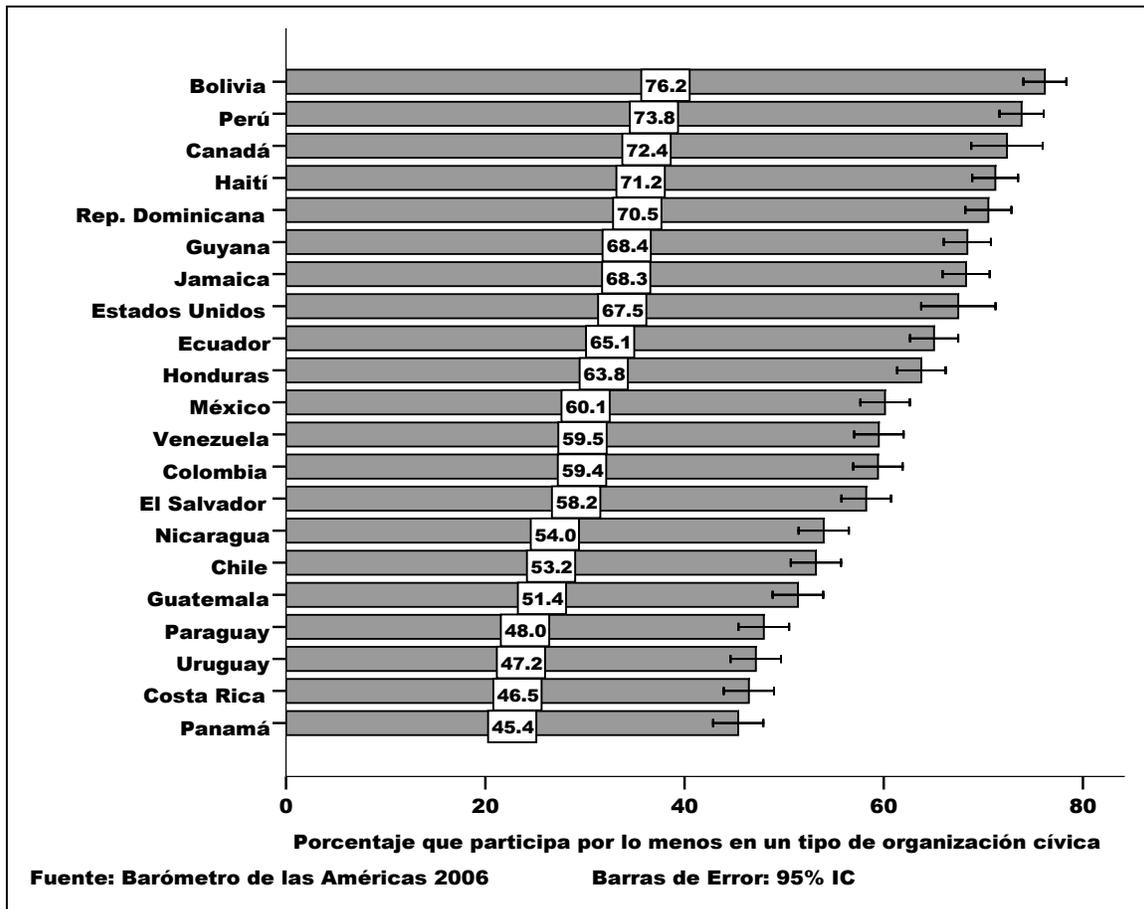


Gráfico VII-2. Participación cívica en las Américas



A nivel regional, el capital social, medido por la confianza social y la participación cívica, es más alto en la región norte, en Canadá y los Estados Unidos, que en países latinoamericanos y caribeños, aunque la diferencia en capital social entre regiones es más sustancial para el caso de la confianza social. El Gráfico VII-3 agrupa a los países analizados en regiones de capital social alto y bajo, es decir por una parte se tiene a los países latinoamericanos y caribeños, y por otra a Canadá y los Estados Unidos.⁷ Mientras que la diferencia entre el promedio de participación cívica en estas dos regiones es de tan sólo 9,8 puntos, la diferencia en el promedio de confianza social es 23,7 puntos. Como se observó en los gráficos anteriores, en algunos países latinoamericanos el activismo cívico es más alto que en Canadá y los Estados Unidos, pero la confianza social es significativamente más baja en Latinoamérica. En conclusión, en términos generales las regiones en las Américas menos desarrolladas política y económicamente presentan niveles más bajos de confianza social.

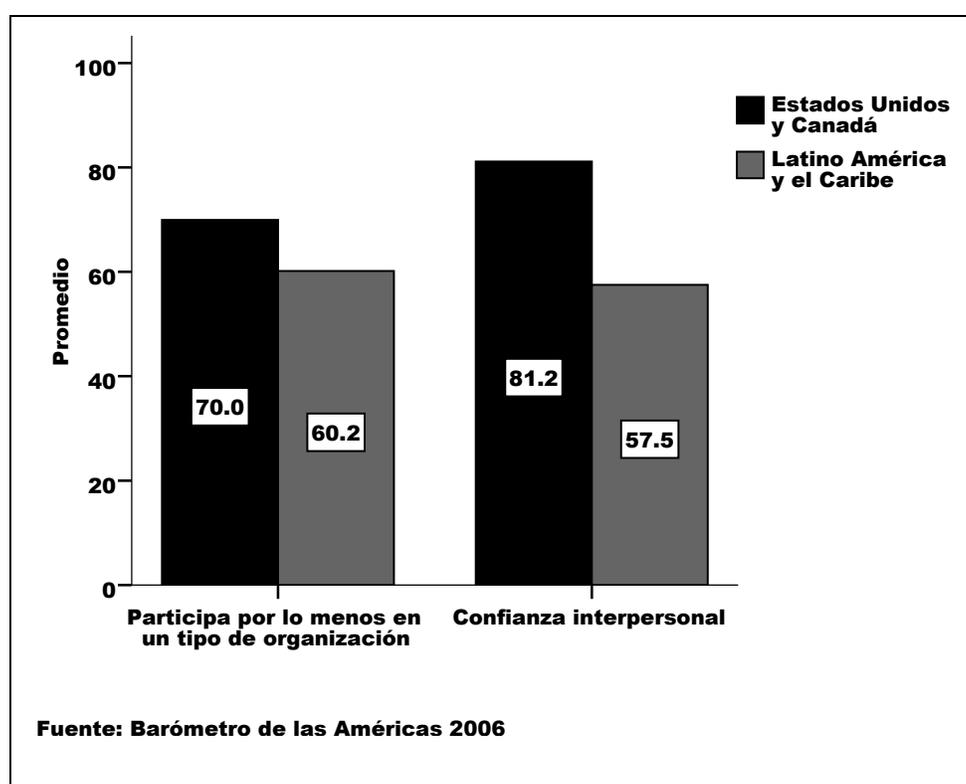


Gráfico VII-3. Capital social por región

Un nexo débil: la confianza social y la participación cívica

En esta sección, se evalúa si la confianza social y el activismo cívico forman un "círculo virtuoso", dado que se ha dicho que estos dos elementos se refuerzan uno al otro, y por lo tanto

⁷ De aquí en adelante, el término "Latinoamérica" se usa para hacer referencia a todos los países en la encuesta, excepto Canadá y los Estados Unidos.

se espera que la confianza social conlleve a la participación en la sociedad civil, y viceversa (Putnam 1993). Como se mencionó en la introducción de este capítulo, hay razones para cuestionar la supuesta relación entre la participación cívica y la confianza social, especialmente si se toma en cuenta que Armony (2004) ha demostrado que la participación cívica frecuentemente no conlleva a la confianza social y a resultados democráticos. Él notó que en algunas áreas en Weimer en Alemania, precisamente las áreas en las que los nazis ganaron primero el control, el nivel de participación cívica era extremadamente alto. Los resultados del Barómetro de las Américas refuerzan esta duda.

El Gráfico VII-4 muestra la relación entre la confianza interpersonal y la participación cívica a nivel de país. Cuando se puede observar, la relación entre la confianza interpersonal y la participación cívica no es bien definida. Por ejemplo, mientras Costa Rica tiene un nivel relativamente alto de confianza interpersonal en comparación con otros países latinoamericanos, al mismo tiempo tiene uno de los niveles más bajos de participación. Por otro lado, los países latinoamericanos donde la participación cívica es más elevada (Bolivia, Perú, y Haití), muestran los niveles más bajos de confianza interpersonal. Sólo Canadá y los Estados Unidos muestran un nivel promedio relativamente alto de confianza social y participación cívica. Esto sugiere que a nivel de país no hay una asociación clara entre la confianza social y la participación cívica, tal como la teoría de Putnam (1993) sobre el capital social lo sugiere. Este hallazgo no es completamente novedoso, ya que otros estudios basados en datos de encuesta también han encontrado que la confianza social y la participación cívica no siempre van juntas (Newton 2001, Norris 2002, Seligson 2002).

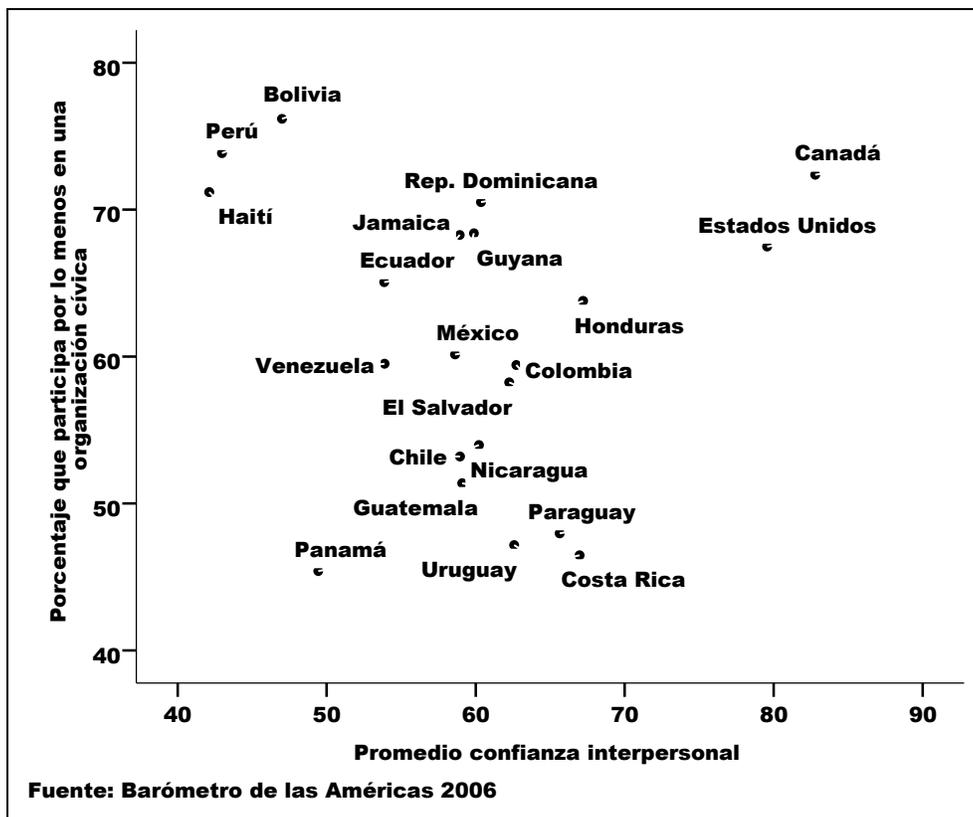


Gráfico VII-4. Un vínculo débil: la confianza social y la participación cívica



Estas conclusiones entonces nos llevan a preguntarnos, a nivel individual, ¿se traduce un nivel más alto de confianza interpersonal en una mayor participación cívica, o por lo menos existe una asociación entre los principales componentes del capital social? El Gráfico VII-5 sugiere que este parece ser el caso sólo en la región norteamericana. En Canadá y los Estados Unidos los individuos que tienen un nivel más alto de confianza interpersonal muestran también un nivel promedio más alto de participación cívica. Como se puede observar en el Gráfico VII-5, la línea que representa los países norteamericanos tiene una pendiente más inclinada, indicando que la confianza social está asociada a la participación cívica. Por otra parte, en la región latinoamericana, niveles más altos de confianza social no parecen estar vinculados con una mayor participación en la sociedad civil, tal como lo refleja la línea casi plana en el gráfico. Precisamente, mientras en Latinoamérica cerca del 60 por ciento de los individuos que tienen el nivel más alto de confianza social participan en por lo menos un tipo de organización cívica, en Canadá y los Estados Unidos arriba de un 70 por ciento lo hacen. Esto sugiere que el “contexto” o en otras palabras el promedio de confianza social a nivel de país es importante para la participación cívica, tal como lo sugiere Norris (2002). Un nivel individual de confianza interpersonal alto conlleva al activismo cívico sólo si otros miembros de la sociedad también poseen niveles altos de confianza.

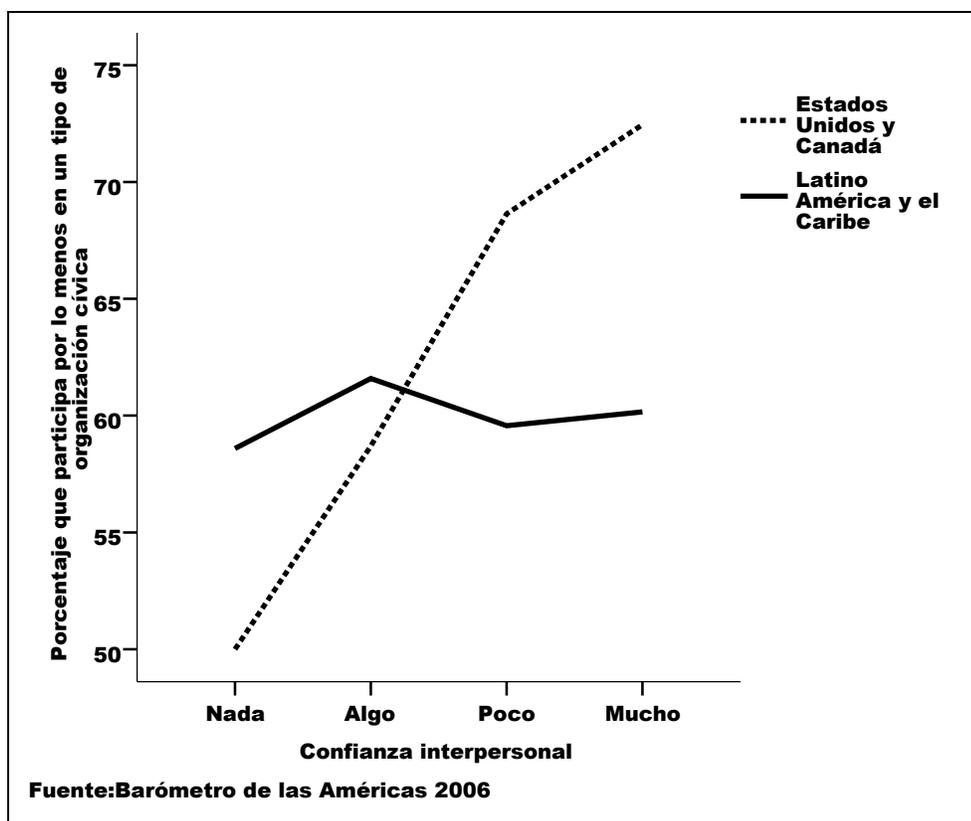


Gráfico VII-5. El nexo entre la confianza social y la participación cívica: un análisis individual

Sin embargo, el Gráfico VII-5 también indica que en Latinoamérica aún individuos que no tienen confianza en otros en absoluto, participan en reuniones de organizaciones seculares de la sociedad civil. En Latinoamérica, un porcentaje más elevado de entrevistados con el nivel más

bajo de confianza social son miembros de organizaciones cívicas que en Canadá y los Estados Unidos, lo cual sugiere que quizás en Latinoamérica las organizaciones cívicas no promueven el intercambio entre personas con diferentes creencias, ideologías, y valores, ya que la confianza social facilita la interacción entre individuos diferentes. Ciertamente, los beneficios de la participación cívica para la democracia son más probables de ser maximizados en organizaciones heterogéneas y no en organizaciones homogéneas, debido a que se ha encontrado que las organizaciones cívicas plurales fomentan la tolerancia política (Theiss-Morse y Hibbing 2005). En general, los resultados sugieren que otros factores parecen ser más importante en Latinoamérica para promover la participación cívica que la confianza social.

De hecho, a nivel individual, en el caso latinoamericano el nivel de educación resultó ser uno de los determinantes más importantes de la participación cívica que la confianza social. El efecto de la confianza social en la participación cívica en Latinoamérica, aunque positivo y estadísticamente significativo, es extremadamente pequeño.⁸ El Gráfico VII-6 muestra que existe una relación relativamente fuerte entre el nivel individual de educación y la participación cívica. Esto confirma el carácter desigual del capital social. Los que tienen más capital humano son más probables de ser miembros de una organización cívica, ya que cuentan con los recursos para participar efectivamente (Putnam 2000, Verba, et al. 1995). Sin embargo, el Gráfico VI-6 también muestra que en Latinoamérica un porcentaje substancial de personas sin educación formal, arriba del 50 por ciento, participa en reuniones de organizaciones cívicas seculares.

⁸ Los resultados del análisis de regresión pueden ser vistos en el anexo VI.1. Las estimaciones de los errores estándares de los coeficientes de todas las regresiones de este capítulo toman en cuenta el efecto del diseño de la muestra.

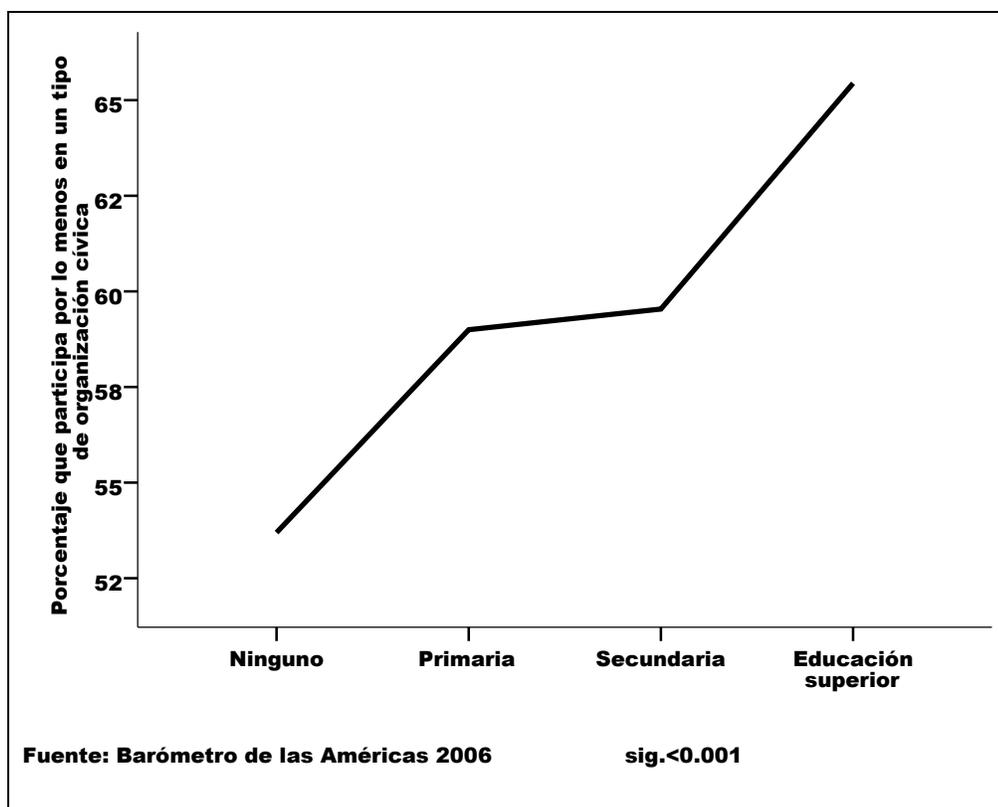


Gráfico VII-6. Participación cívica en Latinoamérica y el Caribe por niveles de educación

Explicando la brecha de la confianza social en las Américas: ¿Importan las características individuales?

Esta sección explora si el nivel más bajo de confianza social en Latinoamérica, en comparación con el de Canadá y los Estados Unidos, es explicado por factores individuales, tales como las diferencias socioeconómicas y demográficas y las diferentes experiencias personales que los individuos pueden tener en estas dos regiones de las Américas. Por lo tanto, los niveles de confianza social en estas dos regiones se comparan teniendo en cuenta las características individuales de los entrevistados. Si personas con características similares, pero residiendo en contextos sociales disímiles, muestran niveles de confianza diferentes, esto sugeriría que factores estructurales podrían ser más importantes para explicar la brecha de la confianza social en las Américas que las características individuales.

Características socioeconómicas

¿Se explica el menor nivel de confianza social en Latinoamérica y el Caribe por los niveles relativamente bajos de educación? Está bien documentado en la literatura que individuos con una mayor educación muestran una mayor confianza social (Newton 2001, Putnam 1995). Por lo tanto, una hipótesis es que el nivel más bajo de confianza social en Latinoamérica es

explicado por los niveles más bajos de educación en esta región. Si este fuera el caso, entonces observaríamos que individuos con poca educación en Latinoamérica tendrían también una confianza social baja, mientras que individuos bien educados mostrarían niveles de confianza social semejantes a los de Canadá y los Estados Unidos. El Gráfico VII-7 claramente rechaza esta hipótesis.

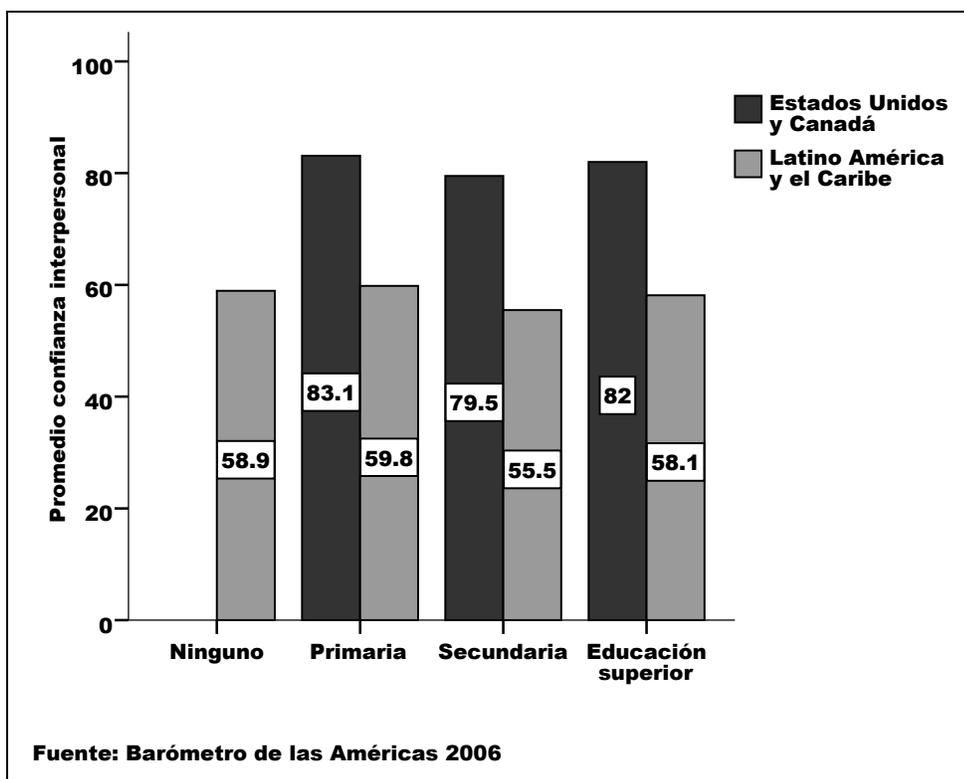


Gráfico VII-7. Confianza social por nivel de educación y región

La educación no parece explicar el bajo nivel de confianza social en Latinoamérica. No existen diferencias significativas en el promedio de confianza entre los diferentes niveles de educación en cada una de las regiones. Además, la brecha de la confianza social entre Latinoamérica y Canadá y los Estados Unidos continúa siendo grande en cada nivel de educación. De hecho, la brecha de confianza social continúa siendo cerca de 23 puntos en cada nivel educativo, es decir una brecha en confianza social similar a la que se observó en el Gráfico VI-3.

Características demográficas

¿Son las características demográficas responsables del nivel relativamente bajo de la confianza social en Latinoamérica? Específicamente, la primera interrogante es si hombres y mujeres tienen los mismos niveles de confianza social en Latinoamérica y los países del norte o si hay un sesgo en el capital social entre hombres y mujeres, el cual explica las diferencias en confianza social entre regiones. En segundo lugar nos preguntamos si las diferencias en la composición de la edad de la población en estas dos regiones explican en parte el diferencial en



confianza social. Trabajos previos han encontrado que la confianza social varía por edad y género. Hay evidencia que los hombres y personas de edad mediana tienden a confiar más en otros (Newton 2001). Por lo tanto, las diferencias por género, junto con los posibles diferenciales en la composición de la edad de la población, son factores que también podrían explicar por qué los dos grupos de países que aquí se analizan tienen diferentes niveles de confianza social. Los siguientes dos gráficos nos ayudan a contestar estas preguntas.

El Gráfico VII-8 muestra que, en promedio, no hay diferencias sustanciales en el nivel de la confianza social entre hombres y mujeres en Latinoamérica o en Canadá y los Estados Unidos. Consecuentemente, la brecha de la confianza social entre regiones es todavía evidente aun cuando la muestra se divide por género.

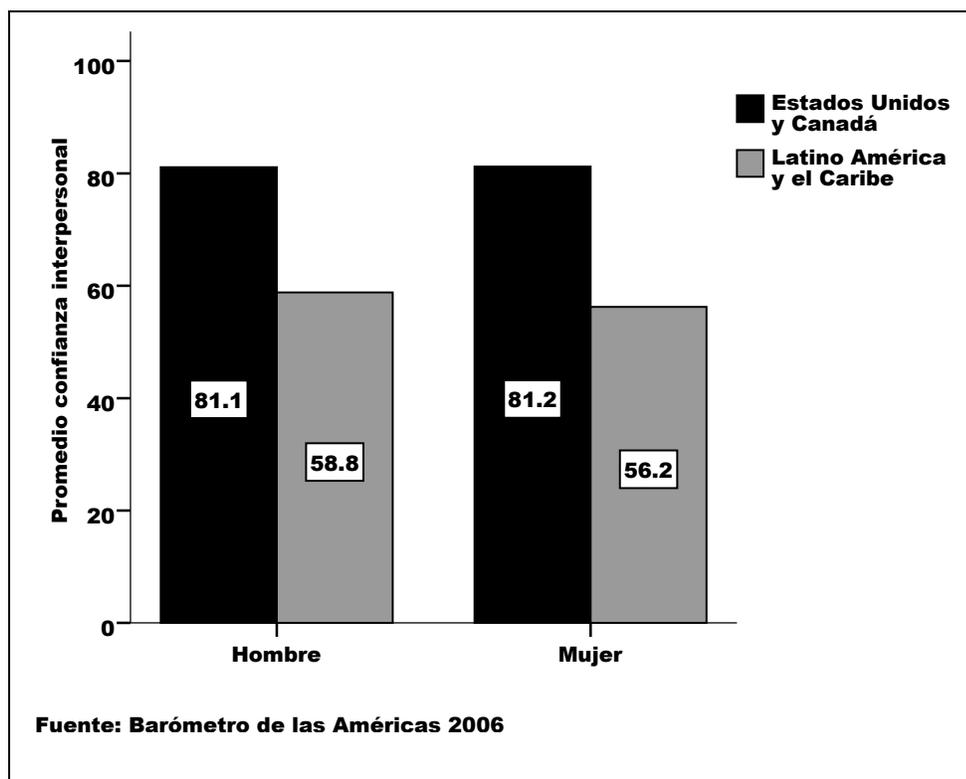


Gráfico VII-8. Confianza social por género y región

El Gráfico VII-9 sugiere que la composición de la edad de la población en las dos regiones analizadas tampoco es el factor que explica la brecha de la confianza social. En ambas regiones la tendencia es semejante: las personas de más edad son, en general, más confiadas. El diferencial de la confianza social entre regiones se mantiene más o menos constante, cerca de 20 puntos, en cada rango de la edad.

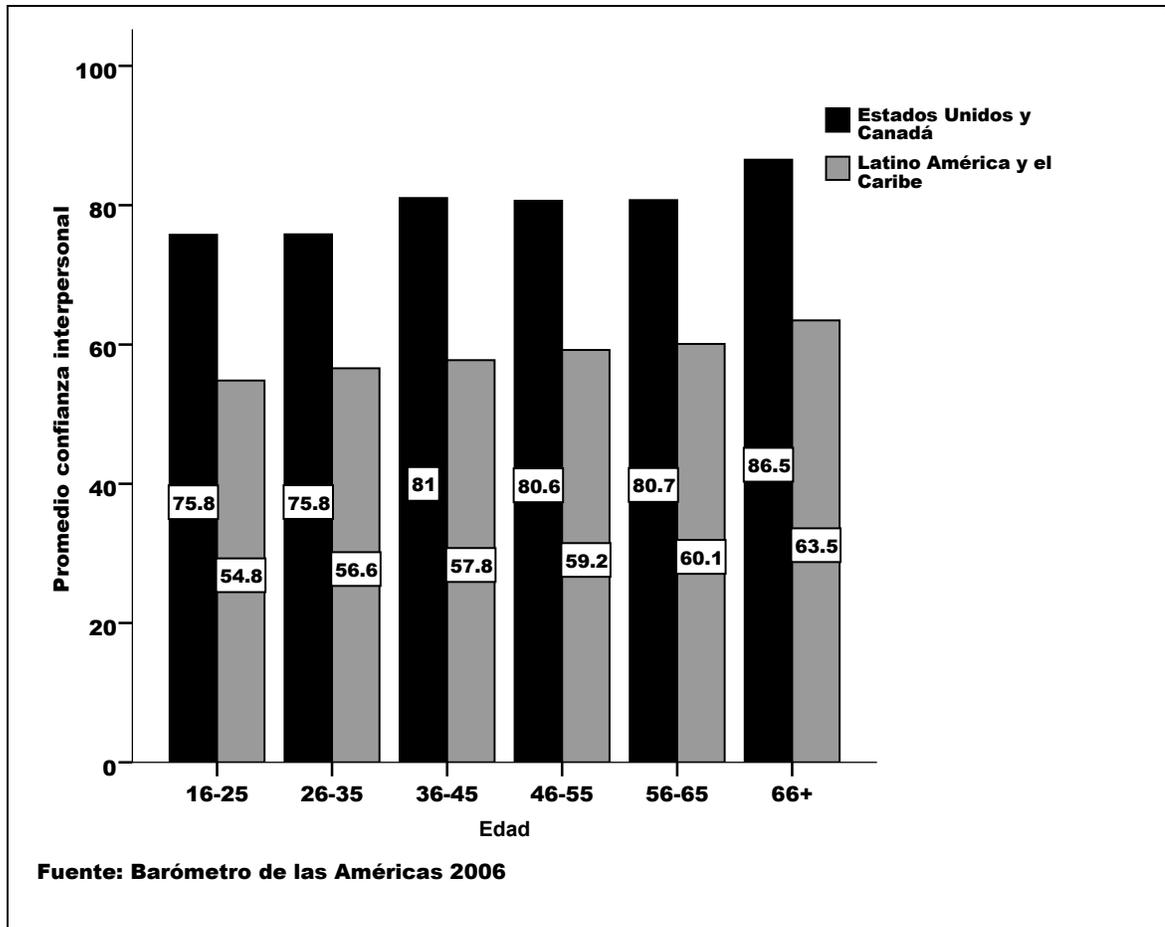


Gráfico VII-9. Confianza social por edad y región

La experiencia personal con el crimen

Finalmente, esta sección evalúa si la tasa más alta de victimización por crimen en Latinoamérica en relación con Canadá y los Estados Unidos explica en parte la brecha en confianza social entre estos dos grupos de países. Los datos del Barómetro de las Américas para el 2006/07 muestran que un mayor porcentaje de personas afirmaron haber sido víctimas del crimen en Latinoamérica que en Canadá y Estados Unidos. Mientras que en Latinoamérica, según la encuesta del Barómetro de las Américas, el porcentaje de la población víctima de un hecho criminal fue 17,5, en Canadá y los Estados Unidos ese porcentaje es de 11,7 puntos. Dado que las personas víctimas del crimen son menos probables de confiar en otros en sus comunidades, la mayor tasa de victimización por crimen en Latinoamérica es un candidato para explicar la brecha de la confianza social en estas dos regiones. De hecho, hay la evidencia que la confianza social y la victimización por crimen están negativamente correlacionados (Lederman, et al. 2002). Sin embargo, el Gráfico VI-10 sugiere que los diferenciales en la tasa de victimización por crimen no parecen explicar la brecha de la confianza social.

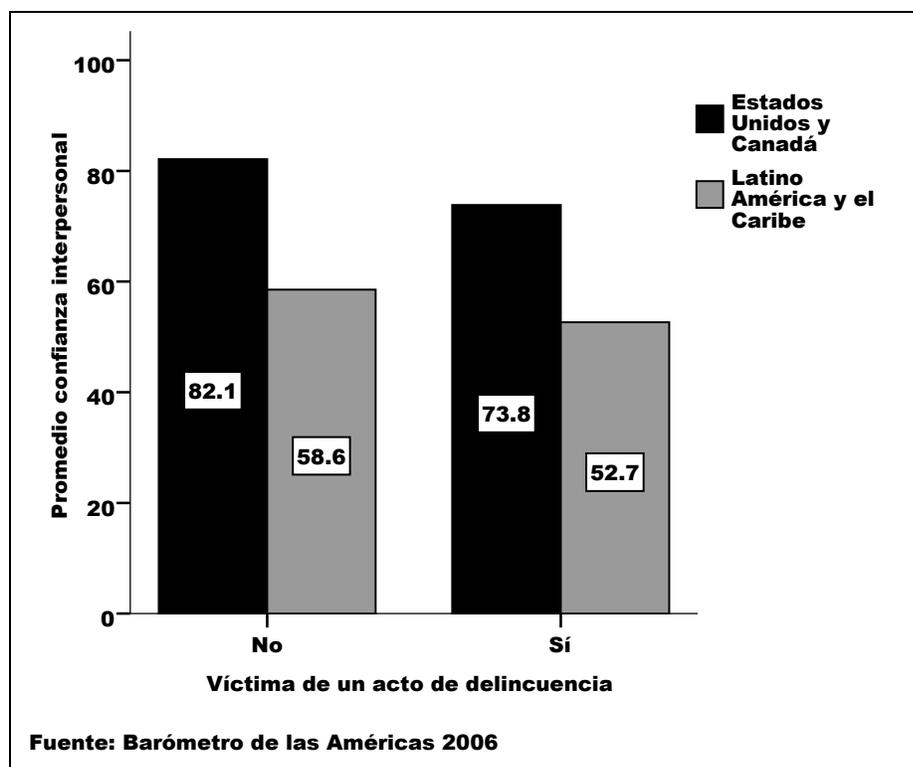


Gráfico VII-10. Confianza social y victimización por crimen

Aunque, como se esperaba, en promedio los que dijeron haber sido víctimas del crimen muestran un nivel más bajo de confianza interpersonal, esto no parece explicar el diferencial en confianza social entre las dos regiones analizadas. Si la victimización por crimen fuera un factor importante para explicar la brecha de la confianza social, se hubiera encontrado niveles similares de confianza social en ambas regiones entre aquellos que no tuvieron una experiencia personal con el crimen; sin embargo, claramente este no parece ser el caso. El nivel promedio de la confianza social es más bajo en Latinoamérica independientemente si las personas han sido víctimas del crimen o no, aunque en ambas regiones la confianza es más baja entre aquellos que han sido víctimas del crimen. Debido a que sabemos que los criminales no buscan a sus víctimas en base a su nivel de confianza, la baja confianza es producto de ser víctima y no al revés.

En conclusión, esta sección no encontró evidencia empírica a favor de la hipótesis que características socioeconómicas y demográficas individuales o experiencia personal con el crimen explican por qué los latinoamericanos confían menos en personas fuera de su círculo familiar que los canadienses y estadounidenses. Sin ningún análisis adicional, la evidencia hasta aquí presentada parece dar apoyo a la tesis que rasgos "culturales" quizás sean los determinantes más importantes del tipo de cultura cívica que uno encuentra en diferentes regiones del mundo. Aunque este estudio no pone a prueba la tesis "culturalista" directamente, la siguiente sección proporciona evidencia que factores económicos estructurales explican, por lo menos en parte, por qué en las Américas en algunas sociedades hay más confianza social que en otras.

La desigualdad económica y la confianza social: Un análisis de nivel múltiple

Hasta aquí el análisis que se ha llevado a cabo en este estudio ha mostrado que la región latinoamericana tiene inequívocamente un nivel promedio más bajo de confianza social que los países más democráticos y desarrollados de las Américas, es decir Canadá y los Estados Unidos. Además, se ha observado que la brecha de la confianza social entre estas dos regiones no parece ser explicada por diferencias entre mujeres y hombres, diferenciales en el nivel de educación y en la composición de la edad de la población, o por diferenciales en la tasa de victimización por crimen entre regiones. En esta sección, se explora si el "contexto" importa, y si ese es el caso, qué factores estructurales en estos países explican tales diferencias en capital social. La hipótesis que se pone a prueba es si los países con una mayor desigualdad económica presentan menores niveles de confianza social, o para ser más específico, si los individuos que viven en países caracterizados por una distribución desigual del ingreso son menos probables de confiar en personas de su comunidad.

El estudio de las consecuencias de la desigualdad económica sobre la confianza social, y por lo tanto sobre la democracia, es especialmente importante para Latinoamérica, ya que es la región que tiene la peor distribución de ingresos cuando se compara con otras regiones en el mundo. La falta de equidad en Latinoamérica se vuelve particularmente notoria cuando se compara con la desigualdad económica en países desarrollados. Según datos recientes del Banco Mundial, "mientras que el decil más rico de la población en la región gana el 48 por ciento de los ingresos totales, el decil más pobre gana tan sólo el 1,6 por ciento. En cambio, en países desarrollados el decil más rico recibe el 29 por ciento de los ingresos totales, y el más pobre un 2,5 por ciento."⁹ De hecho, aunque la desigualdad de ingresos ha estado subiendo en los Estados Unidos en los últimos años, todavía tiene un nivel más bajo de desigualdad que cualquiera de los países latinoamericanos y caribeños que se examinan en este capítulo. Este estudio sostiene que la intensa desigualdad económica en Latinoamérica está deteriorando el capital social, ya que disminuye la confianza social.

Para poner a prueba esta hipótesis, se estima un Modelo Lineal Jerárquico, un HLM por sus siglas en inglés, el cual tiene en cuenta el hecho que los individuos en la muestra pertenecen a países distintos. Las propiedades de estos modelos estadísticos hacen posible analizar cómo las características individuales afectan a la variable dependiente, en este caso el nivel individual de confianza interpersonal, y al mismo tiempo cómo las características estructurales o contextuales afectan la formación de actitudes a nivel individual.¹⁰ Es decir, este instrumento estadístico nos permite explorar por qué una vez se toman en cuenta las características individuales, alguien que vive en un país latinoamericano muestra un nivel más bajo de confianza social que un individuo con características semejantes que vive en Canadá o en los Estados Unidos; es decir, cómo el contexto afecta el promedio de la confianza social en un país. Como se mencionó anteriormente, la tesis principal de este estudio es que la desigualdad de ingresos es una variable estructural

⁹ David M. De Ferranti, *Inequality in Latin America : Breaking with History?*, World Bank Latin American and Caribbean Studies. Viewpoints (Washington, DC: The World Bank, 2004). p.1-1.

¹⁰ Ver Douglas A. Luke, *Multilevel Modeling* (Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications, 2004).



importante que explica, por lo menos en parte, el nivel más bajo de la confianza social en países latinoamericanos.

A nivel individual, se incluyen cuatro variables en el modelo: años de educación, género, edad, y victimización por crimen. Es decir, las mismas variables del Barómetro de las Américas analizadas en la sección anterior. A nivel de país, se incluyen dos variables estructurales rivales: la desigualdad de ingresos y el desarrollo socioeconómico. Los datos de desigualdad económica son tomados de los Indicadores de Desarrollo del Banco Mundial, y corresponden a la estimación del coeficiente de Gini más reciente que se encuentra disponible para cada país de la muestra.¹¹ La variable de desarrollo socioeconómico corresponde al Índice de Desarrollo Humano del PNUD para el 2004, el más reciente que se encuentra disponible.¹²

La Tabla VII-1 presenta los resultados del modelo de niveles múltiples.¹³ Todas las variables incluidas en el modelo son estadísticamente significativas y muestran el efecto esperado sobre la confianza interpersonal. En promedio, los hombres, los que tienen más educación y las personas de más edad muestran niveles más altos de confianza interpersonal, mientras que las víctimas del crimen son menos probables de confiar en personas en sus comunidades. Además, los resultados muestran que la confianza social es más alta en países más desarrollados y en aquellos donde la desigualdad de ingresos es más baja.

¹¹ El coeficiente de Gini puede tomar valores entre cero y uno, y mide el grado de desigualdad del ingreso en un país. Un Gini alto indica una mayor desigualdad del ingreso.

¹² El Índice de Desarrollo Humano es una medida del nivel de desarrollo socioeconómico de un país, el cual incluye tres indicadores de bienestar socioeconómico: recursos económicos (medido por el PIB per cápita a precios de paridad de compra), un índice de educación, y un índice de salud, el cual tiene en cuenta la esperanza de vida al nacer. Los valores del IDH oscilan entre cero y uno, donde un valor alto denota un mayor nivel de desarrollo humano.

¹³ El anexo VI.2 presenta la descomposición de la varianza de la variable de confianza social. Los resultados muestran que cerca de un 10% de la variación de la confianza social se debe a variaciones entre países. Esta variación relativamente pequeña entre países se explica por el hecho de que aunque hay una diferencia sustancial en el promedio de confianza social entre países latinoamericanos y los países del norte (Canadá y los Estados Unidos), esta diferencia está siendo contrarrestada por las diferencias relativamente pequeñas entre los promedios de confianza social entre los países de América Latina.

Tabla VII-1. Determinantes individuales y estructurales de la confianza social: Un modelo lineal jerárquico

Variables	Coef.	Err. Est.
Estructurales (a nivel de país)		
Desigualdad del ingreso (Gini)	-0.101**	0.052
Desarrollo socioeconómico (IDH)	0.116**	0.051
A nivel individual		
Años de escolaridad	0.040***	0.006
Sexo (1=hombre)	0.092***	0.011
Edad	0.080***	0.006
Víctima de crimen (1= sí)	-0.195***	0.014
Constante	0.003	0.052
Nota: coeficientes estandarizados para variables continuas		
**p-value<0.05		
***p-value<0.001		
Número de observaciones: 31.859		
Número de grupos (países): 21		
R-cuadrado (total): 5.5 %		
R-cuadrado (variables estructurales): 5.3%		
R-cuadrado (variables individuales): 0.2%		

Sin embargo, los factores estructurales, la desigualdad económica y el desarrollo socioeconómico, son más importantes para explicar la confianza social que los factores a nivel individual. Esto se deduce debido a que los resultados revelaron que el 5,5 por ciento de la variación total de la variable dependiente, es decir la confianza interpersonal, es explicada por factores tanto individuales como estructurales, pero los factores estructurales por si solos explican casi toda esta variación (5,3).¹⁴ Al mismo tiempo, el análisis estadístico reveló que el efecto del desarrollo socioeconómico y la desigualdad económica sobre la confianza social es similar (aunque en direcciones opuestas), tal como lo indica el valor absoluto del coeficiente estimado para cada una de estas variables. Estos resultados refuerzan las conclusiones de la sección anterior; las características individuales son menos importantes para explicar los diferenciales en la confianza interpersonal. Esto significa que las fuentes más importantes de la confianza social no están relacionadas con las características individuales ni la experiencia personal con el crimen, sino que con el contexto económico del país de residencia. Los Gráficos VI-11 y VI-12 muestran la relación entre la desigualdad económica y la confianza social, y el desarrollo socioeconómico a nivel de país, respectivamente.

¹⁴ Aunque el poder explicativo del modelo parece débil, ya que solamente un 5.5 de la varianza total está siendo explicada, es importante tomar en cuenta que los análisis de regresión basados en datos de encuesta usualmente arrojan R-cuadrados bajos.

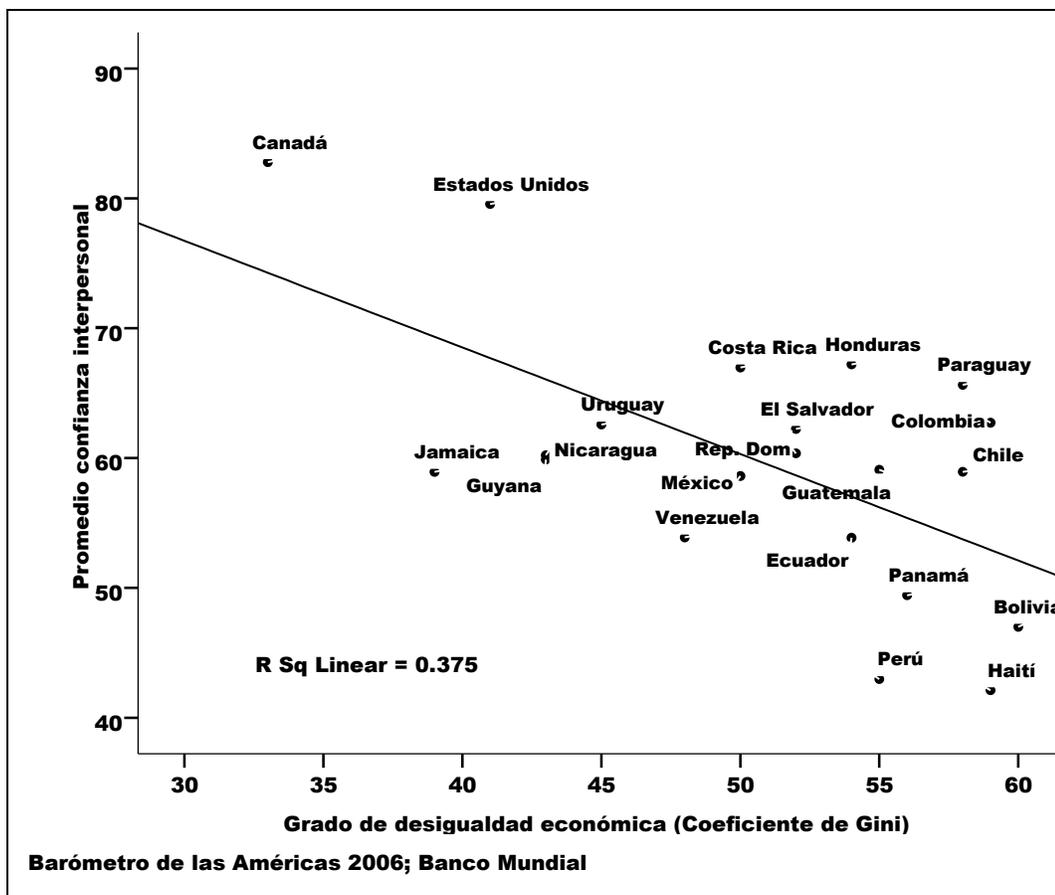


Gráfico VII-11. Desigualdad económica y confianza social

Cuando se puede observar claramente en Gráficos VII-11 y VII-12, la desigualdad y el desarrollo socioeconómico son dos fuerzas que afectan la confianza social en direcciones opuestas. Esto sugiere que aunque mejorar las condiciones socioeconómicas de los países latinoamericanos es importante, mejoras en el nivel de vida de la población por sí solas no son probables de resultar en un aumento significativo en la confianza social, y por lo tanto en democracias más fuertes, a menos que una mejora significativa en la distribución de ingresos también ocurra.

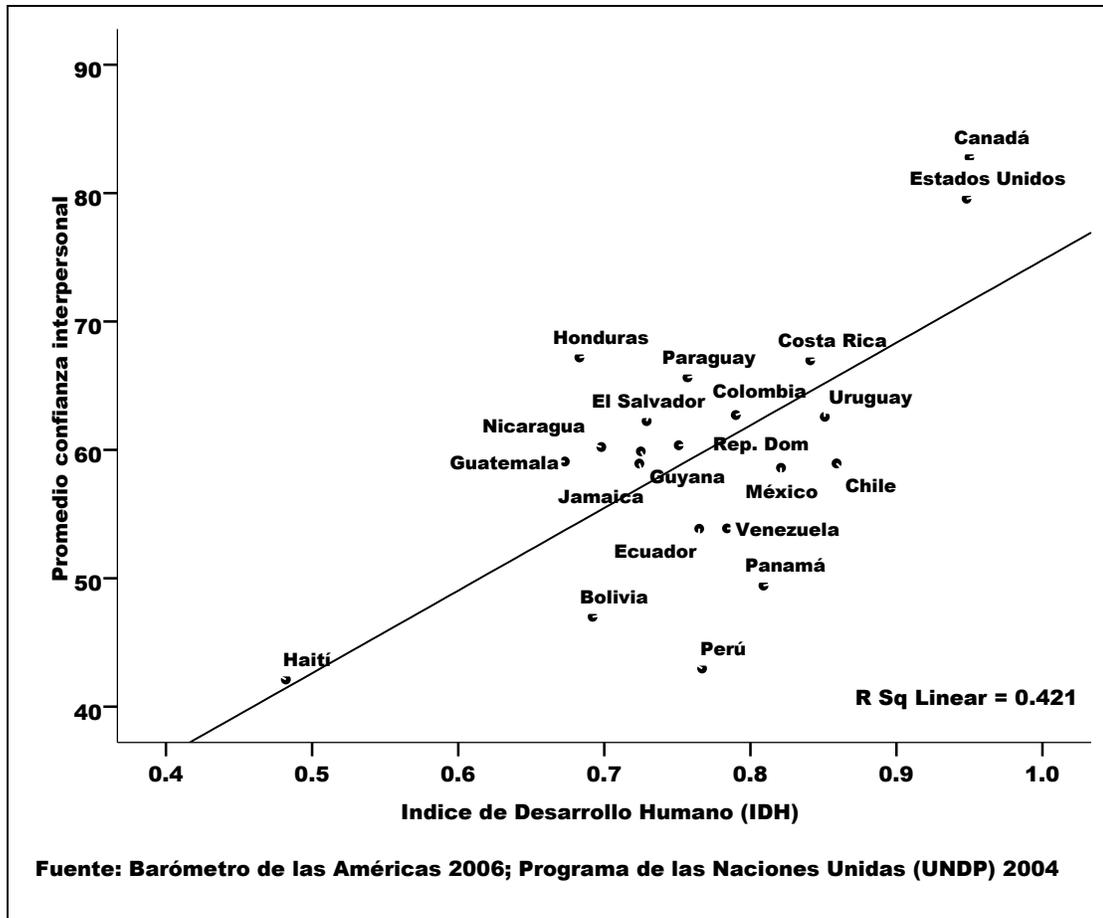


Gráfico VII-12. Desarrollo socioeconómico y confianza social

Adicionalmente, las conclusiones de esta sección sugieren que esfuerzos orientados a fortalecer el estado de derecho y mitigar la violencia social en Latinoamérica son más probables de tener un impacto positivo en la democracia, si las fuentes de conflicto social son al mismo tiempo mitigadas. Indiscutiblemente, la desigualdad económica constituye una clara fuente de conflicto social en Latinoamérica. Como se mencionó anteriormente, trabajos previos han encontrado que la violencia social es más común en países con una alta desigualdad económica (Fajnzylber, et al. 2002, Fajnzylber, et al. 1998), y los resultados de este estudio sugieren que lo que puede estar detrás de esa relación positiva entre violencia social y desigualdad económica es la baja confianza social en países altamente desiguales, ya que un ambiente dominado por la desconfianza es propicio para el surgimiento de conflictos. Por lo tanto, el fortalecimiento de la confianza social parece también ser necesario para reducir la violencia social, y en parte eso se puede lograr por medio de una mejor distribución de la riqueza.



La importancia de la confianza social para las democracias latinoamericanas

En la sección anterior, se identificaron fuentes de confianza social en las Américas. En esta sección, se demuestra que un aumento en el nivel de confianza social es indispensable para fomentar una cultura democrática en Latinoamérica. En general, se espera que individuos con niveles altos de confianza interpersonal muestren un mayor apoyo a la democracia, y también se espera que estén más dispuestos a respetar las libertades civiles y los derechos políticos de minorías o de aquellos con los que son más probables de estar en desacuerdo. Una cultura democrática ha sido vista como un requisito para la consolidación de la democracia (Diamond 1999), y la tolerancia política y el apoyo a la democracia son valores imprescindibles de personas altamente democráticas. La confianza interpersonal fomenta esos valores. Se espera que los individuos que residen en sociedades democráticas y que confían en los demás se opongan a regímenes autoritarios, ya que son más probables de sentirse seguros con otras personas y aceptar pacíficamente resultados políticos aún cuando estos no les favorezcan directamente. De hecho, la evidencia empírica sugiere que personas con una confianza interpersonal alta tienen una mayor probabilidad de tolerar y apoyar políticas que benefician a las minorías y los pobres (Uslaner 2004). Por lo tanto, personas con un alto grado de confianza son también más probables de tener una tolerancia política más alta, dado que se espera que estén más dispuestos a interactuar con personas diferentes de sí mismos, y por lo tanto, respetar los derechos e ideas de otros.

El Gráfico VII-13 muestra precisamente eso, en general, a nivel individual entre más se confía en otros, más se apoya a la democracia. La relación positiva significativa entre la confianza interpersonal y el apoyo a la democracia en países latinoamericanos se mantiene aún después de que tener en cuenta la evaluación individual de la situación económica del país, la satisfacción con el funcionamiento de la democracia, el grado de aprobación del gobierno en turno, participación en organizaciones cívicas, y características demográficas y socioeconómicas individuales.¹⁵

¹⁵ Los resultados de la regresión de “apoyo a la democracia” son mostrados en el anexo VI.3. La variable de “apoyo a la democracia” corresponde a la variable ING4 en la encuesta del Barómetro de las Américas, la cual pregunta a los entrevistados hasta que punto está de acuerdo con la siguiente afirmación en una escala del 1 al 7: “puede que la democracia tenga problemas, pero es mejor que cualquier forma de Gobierno.”

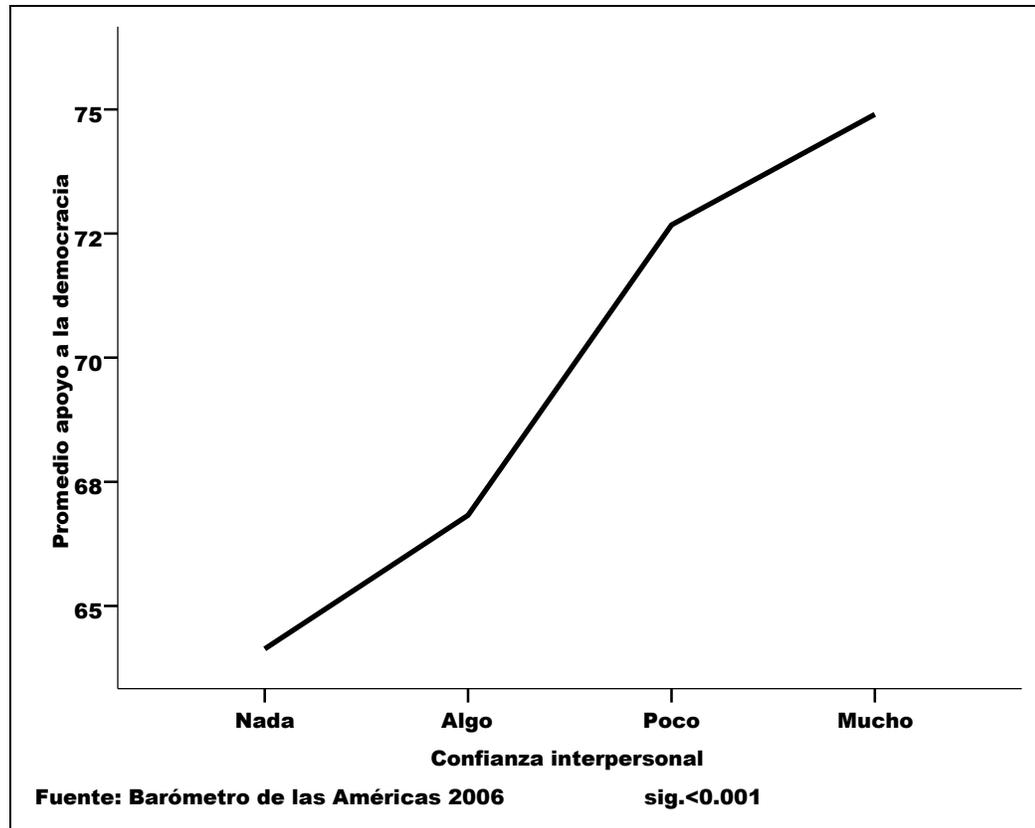


Gráfico VII-13. La confianza social y el apoyo a la democracia en América Latina y el Caribe

Con el objetivo de averiguar si niveles más altos de confianza interpersonal se asocian con una mayor tolerancia política, el índice de “tolerancia política” desarrollado por Mitchell Seligson de LAPOP fue incluido como variable dependiente en el análisis estadístico de regresión múltiple.¹⁶ El Gráfico VII-14 muestra que hay una relación positiva entre la confianza interpersonal y la tolerancia política. Esta relación se mantiene significativa, aún después de controlar por el efecto de la participación en distintas organizaciones cívicas, el grado de aprobación del gobierno en turno, y otras características individuales.

Además de mostrar que un nivel alto de confianza interpersonal se traduce en un mayor apoyo a la democracia y en más tolerancia política, el análisis estadístico reveló que la confianza interpersonal es consistentemente el componente más importante del capital social en Latinoamérica, lo que confirma los resultados del estudio mundial llevado a cabo recientemente por Inglehart y Welzel. Cuando se examina el efecto de la participación cívica sobre la tolerancia política y el apoyo a la democracia, la única forma de participación cívica que tiene un efecto positivo sobre el apoyo a la democracia es la participación en reuniones de organizaciones religiosas; sin embargo, participación en reuniones de organizaciones religiosas está al mismo tiempo asociado con una baja tolerancia política. Por otra parte, aunque la participación en reuniones de un partido o movimiento político es la única forma de participación cívica probable

¹⁶ Ver anexo VI.4. El índice de “tolerancia política” está basado en las preguntas D1, D2, D3, y D4 en la encuesta.



de incrementar significativamente la tolerancia política, el activismo en organizaciones políticas, paradójicamente, tiene un efecto negativo sobre el apoyo a la democracia.

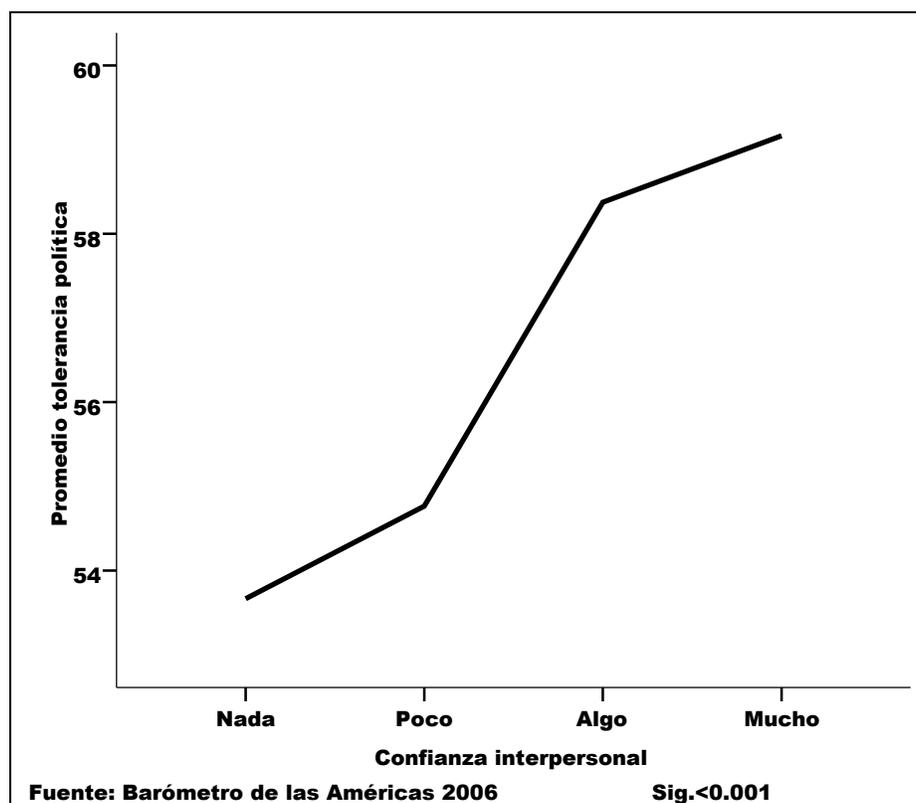


Gráfico VII-14. Tolerancia política y confianza social en América Latina y el Caribe

Conclusiones

Este capítulo ha demostrado que la confianza social es el componente más importante del capital social en las Américas; cuando la participación cívica no ocurre en un ambiente caracterizado por una confianza social generalizada, el activismo cívico es improbable de contribuir a la configuración de una cultura democrática. Además, este estudio, basado en los datos del Barómetro de las Américas, confirmó la tendencia encontrada en estudios anteriores; los países más desarrollados política y económicamente (Canadá y los Estados Unidos) muestran los niveles más altos de confianza social, lo que confirma la importancia de la confianza social para el desarrollo. Por esta razón, la tarea principal de este capítulo fue identificar "fuentes" de confianza social en las Américas, y por lo tanto explicar por qué los países latinoamericanos tienen un nivel más bajo de confianza social. Este capítulo encontró que, en general, características individuales estándares y la experiencia personal con el crimen tienen un impacto significativo pero débil sobre la confianza interpersonal, y que por lo tanto estos factores individuales no son responsables de la brecha de confianza social entre Latinoamérica y Canadá y Estados Unidos. El análisis estadístico mostró que los predictores más importantes de la confianza social son factores estructurales en lugar de características individuales, específicamente el grado de desigualdad económica y de desarrollo socioeconómico.

Los resultados muestran que aun después de tomar en cuenta el impacto del desarrollo económico, la igualdad económica sigue siendo una fuente significativa de confianza. Concretamente, los resultados sugieren que el desarrollo económico puede fortalecer la democracia por medio de un incremento en la confianza social siempre y cuando haya una mejora sustancial en la distribución de recursos económicos. Esta conclusión respalda la tesis de que aunque el desarrollo económico fortalece la democracia, los ciudadanos son más probables de interiorizar el tipo de valores necesarios para apoyar la democracia sólo si un mayor desarrollo socioeconómico viene acompañado de una mayor igualdad económica (Lipset 1961, 1959).

En general, estos resultados sugieren que aunque los países latinoamericanos han dado pasos positivos importantes en algunas áreas, lo cual se refleja, por ejemplo, en una mayor tasa de escolaridad en la región (IADB 2006), el impacto de estos avances sobre la democracia está quizás siendo contrarrestado por la falta de mejoras importantes en la distribución del ingreso, por lo que una reforma fiscal con miras a la redistribución del ingreso es imprescindible. Este capítulo concluye que a menos que avances significativos en ambos, el desarrollo socioeconómico y la distribución de recursos económicos, ocurran, la probabilidad de consolidar la democracia en Latinoamérica y el Caribe se mantendrá baja.



Referencias

- Almond, Gabriel A. y Sidney Verba. *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. Princeton: Princeton University Press, 1963.
- Armony, Ariel. *The Dubious Link : Civic Engagement and Democratization*. Palo Alto: Stanford University Press, 2004.
- Banfield, Edward. *The Moral Basis of a Backward Society*. Chicago: The Free Press, 1958.
- Boix, Carles. *Democracy and Redistribution, Cambridge Studies in Comparative Politics*. Cambridge, UK ; New York: Cambridge University Press, 2003.
- Campbell, Tim. *The Quiet Revolution : Decentralization and the Rise of Political Participation in Latin American Cities, Pitt Latin American Series*. Pittsburgh, Pa.: University of Pittsburgh Press, 2003.
- De Ferranti, David M. *Inequality in Latin America : Breaking with History?, World Bank Latin American and Caribbean Studies. Viewpoints*. Washington, DC: The World Bank, 2004.
- Diamond, Larry. *Developing Democracy: Toward Consolidation*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1999.
- Fajnzylber, Pablo, Lederman Daniel y Loayza Norman. "Inequality and Violent Crime." *Journal of Law and Economics* 45, no. 1 (2002): 1.
- Fajnzylber, Pablo, Daniel Lederman y Norman Loayza. *Determinants of Crime Rates in Latin America and the World : An Empirical Assessment, World Bank Latin American and Caribbean Studies. Viewpoints*. Washington, D.C.: World Bank, 1998.
- Finkel, Steven E, Aníbal Pérez-Liñán y Mitchell A. Seligson. "The Effects of U.S. Foreign Assistance on Democracy Building, 1990-2003." *World Politics* 59 (2007): 404-39.
- Fukuyama, Francis. *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity*. New York: The Free Press, 1995.
- Harrison, Lawrence E. *Underdevelopment Is a State of Mind: The Latin American Case*. Boston, MA: Center for International Affairs, Harvard University and University Press of America, 1985.
- IADB. "Education, Science and Technology in Latin America and the Caribbean, a Statistical Compendium of Indicators." Inter-American Development Bank, 2006.
- Inglehart, Ronald. *Culture Shift in Advanced Industrial Society*. Princeton: Princeton University Press, 1990.
- . "The Renaissance of Political Culture." *American Political Science Review* 82, no. 4 (1988): 1203-30.
- . "Trust, Well-Being and Democracy." En *Democracy and Trust*, edited by Mark E. Warren, 88-120. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
- Inglehart, Ronald y Christian Welzel. *Modernization, Cultural Change, and Democracy : The Human Development Sequence*. Cambridge, UK ; New York: Cambridge University Press, 2005.
- Jackman, Robert W. y Ross A. Miller. "Social Capital and Politics." *Annual Review of Political Science* 1, no. 1 (1998): 47-73.
- Karl, Terry Lynn. "Economic Inequality and Democratic Instability." *Journal of Democracy* 11, no. 1 (2000): 149.

- Lederman, Daniel, Loayza Norman y Menéndez Ana María. "Violent Crime: Does Social Capital Matter?" *Economic Development and Cultural Change* 50, no. 3 (2002): 509.
- Lipset, Seymour Martin. *Political Man: The Social Basis of Politics*. 1981 (expanded edition) ed. Baltimore, MD.: Johns Hopkins University Press, 1961.
- . "Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy." *American Political Science Review* 53 (1959): 65-105.
- Luke, Douglas A. *Multilevel Modeling*. Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications, 2004.
- Muller, Edward N. y Mitchell A. Seligson. "Civic Culture and Democracy: The Question of the Causal Relationships." *American Political Science Review* 88 (1994): 635-54.
- . "Insurgency and Inequality." *American Political Science Review* 81 (1987): 425-51.
- Newton, Kenneth. "Trust, Social Capital, Civil Society, and Democracy." *International Political Science Review* 22, no. 2 (2001): 201.
- Norris, Pippa. *The Democratic Phoenix: Reinventing Political Activism*. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
- Przeworski, Adam. *Democracy and Development : Political Institutions and Well-Being in the World, 1950-1990*. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.
- Putnam, Robert. "The Strange Death of Civic America." *The Independent* 1996, 13.
- Putnam, Robert D. *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon & Schuster, 2000.
- . *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1993.
- . "Tuning in, Tuning Out: The Strange Disappearance of Social Capital in America." *PS, Political Science & Politics* 28, no. 4 (1995): 664.
- Seligson, Mitchell A. "Can Social Capital Be Constructed? Decentralization and Social Capital Formation in Latin America." En *Developing Cultures : Essays on Cultural Change* edited by Lawrence E. Harrison and Jerome Kagan, xvi, 399 p. New York: Routledge, 2006.
- . "The Renaissance of Political Culture or the Renaissance of Ecological Fallacy." *Comparative Politics* 34 (2002): 273-92.
- Theiss-Morse, Elizabeth y John R. Hibbing. "Citizenship and Civic Engagement." *Annual Review of Political Science* 8, no. 1 (2005): 227-49.
- Uslaner, Eric M. *The Moral Foundations of Trust*. New York: Cambridge University Press, 2002.
- . "Producing and Consuming Trust." *Political Science Quarterly* 115, no. 4 (2000): 569-90.
- . "Social Capital, Television, and The "Mean World": Trust, Optimism, and Civic Participation." *Political Psychology* 19, no. 3 (1998): 441-67.
- Uslaner, Eric, M. "Trust and Social Bonds: Faith in Others and Policy Outcomes Reconsidered*." *Political Research Quarterly* 57, no. 3 (2004): 501.
- Uslaner, Eric M. y Mitchell Brown. "Inequality, Trust, and Civic Engagement." *American Politics Research* 33, no. 6 (2005): 868.
- Verba, Sidney, Kay Lehman Schlozman y Henry E. Brady. *Voice and Equality: Civic Voluntarism in American Politics*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1995.



Análisis estadístico

Anexo VII.1

Variable Dependiente: Participación en por lo menos un tipo de organización cívica* (Diecinueve países latinoamericanos)						
	Exp (B)	Err. Std. Lineales	t	P>t	[95% Int. Conf.]	
Confianza interpersonal	1.001	0.000	2.850	0.004	1.000	1.002
Educación	1.139	0.023	6.440	0.000	1.095	1.185
Aprobación gobierno de turno	1.202	0.077	2.890	0.004	1.061	1.362
Edad	1.006	0.001	5.930	0.000	1.004	1.008
Sexo (1=hombre)	0.967	0.009	-3.820	0.000	0.950	0.984
Riqueza	0.769	0.020	-10.230	0.000	0.732	0.809
Guatemala	0.715	0.080	-2.980	0.003	0.573	0.891
El Salvador	0.900	0.088	-1.080	0.282	0.742	1.091
Honduras	1.162	0.122	1.430	0.153	0.946	1.426
Nicaragua	0.780	0.082	-2.360	0.018	0.635	0.959
Costa Rica	0.587	0.060	-5.250	0.000	0.481	0.716
Panamá	0.512	0.062	-5.500	0.000	0.403	0.650
Colombia	0.904	0.100	-0.900	0.366	0.727	1.125
Ecuador	1.174	0.113	1.670	0.094	0.973	1.418
Bolivia	2.014	0.222	6.340	0.000	1.622	2.501
Perú	1.752	0.194	5.070	0.000	1.410	2.177
Paraguay	0.607	0.066	-4.600	0.000	0.491	0.751
Chile	0.698	0.080	-3.150	0.002	0.558	0.873
Uruguay	0.546	0.056	-5.890	0.000	0.447	0.668
Venezuela	0.959	0.118	-0.340	0.736	0.753	1.222
Dom. Rep.	1.527	0.157	4.120	0.000	1.248	1.868
Haití	1.520	0.189	3.370	0.001	1.191	1.940
Jamaica	1.437	0.156	3.340	0.001	1.162	1.778
Guyana	1.394	0.150	3.090	0.002	1.129	1.720

*Modelo de regresión logístico; errores estándares corregidos por el efecto del diseño de la muestra
País de referencia: México
Número de observaciones: 29.605

Anexo VII.2

Descomposición de la varianza	
Variable Dependiente: Confianza Interpersonal	
Parámetros aleatorios	
Variación total entre grupos (países)	.103
Variación total en cada grupo (país)	.927
Variación Total	1.020
Porcentaje de la varianza explicada por diferencias entre grupos:	10%
Significancia estadística: 0.000; Número de observaciones: 32.274; Número de países: 21	

Anexo VII.3

Variable dependiente: Apoyo a la democracia (ING4)* (Dieciocho países latinoamericanos)						
	Coef.	Err. Std.	Lineales	t	P>t	[95% Conf. Interval]
Confianza interpersonal	0.049	0.007		7.110	0.000	0.035 0.062
Org. religiosas	1.406	0.494		2.850	0.004	0.438 2.375
Asociación padres de familia	-3.315	0.772		-4.290	0.000	-4.830 -1.801
Org. mejoras de la comunidad	-0.439	0.806		-0.540	0.586	-2.019 1.142
Org. profesionales	-2.373	1.096		-2.170	0.031	-4.523 -0.223
Partido político o movimiento	-2.401	1.204		-1.990	0.046	-4.763 -0.039
Educación	2.871	0.298		9.620	0.000	2.286 3.456
Aprobación gobierno de turno	10.920	1.069		10.210	0.000	8.823 13.018
Satisfacción con la democracia	0.135	0.010		13.600	0.000	0.115 0.154
Situación económica nacional	-0.643	0.242		-2.650	0.008	-1.118 -0.167
Riqueza	0.428	0.128		3.350	0.001	0.177 0.678
Edad	0.140	0.013		10.910	0.000	0.115 0.166
Sexo (1=Hombre)	0.626	0.352		1.780	0.075	-0.064 1.316
Guatemala	0.410	1.525		0.270	0.788	-2.582 3.402
El Salvador	5.378	1.865		2.880	0.004	1.719 9.036
Honduras	-5.943	1.487		-4.000	0.000	-8.859 -3.027
Nicaragua	0.410	1.525		0.270	0.788	-2.582 3.402
Costa Rica	-4.407	1.575		-2.800	0.005	-7.497 -1.317
Panamá	7.635	1.443		5.290	0.000	4.805 10.466
Colombia	-13.249	1.968		-6.730	0.000	-17.109 -9.389
Ecuador	1.335	1.503		0.890	0.375	-1.612 4.282
Bolivia	-0.286	1.623		-0.180	0.860	-3.470 2.898
Perú	-2.343	1.425		-1.640	0.100	-5.139 0.453
Chile	-6.713	1.696		-3.960	0.000	-10.041 -3.386
Uruguay	3.615	1.730		2.090	0.037	0.221 7.009
Venezuela	8.650	1.550		5.580	0.000	5.610 11.690
Dom. Rep.	8.462	2.245		3.770	0.000	4.058 12.865
Haití	8.672	1.503		5.770	0.000	5.724 11.621
Jamaica	8.961	2.192		4.090	0.000	4.662 13.260
Guayana	7.828	1.577		4.960	0.000	4.735 10.920
Constante	2.914	1.606		1.810	0.070	-0.237 6.064

*Modelo de regresión lineal (OLS); errores estándares corregidos por el efecto del diseño de la muestra
País de referencia: México; Número de observaciones: 25.468; R-cuadrado: 0.11



Annexo VII.4

Variable Dependiente: Political Tolerance* (Diecinueve países latinoamericanos)						
	Coef.	Err. Std. Lineales	t	P>t	[95% Conf. Interval]	
Confianza interpersonal	0.038	0.007	5.460	0.000	0.024	0.051
Org. religiosas	-0.876	0.475	-1.840	0.065	-1.807	0.056
Asociación padres de familia	-2.335	0.711	-3.290	0.001	-3.729	-0.941
Org. mejoras de la comunidad	-1.004	0.793	-1.270	0.205	-2.559	0.551
Org. profesionales	1.656	1.058	1.570	0.118	-0.419	3.731
Partido político o movimiento	4.175	1.082	3.860	0.000	2.053	6.296
Aprobación gobierno de turno	-8.280	0.892	-9.290	0.000	-10.029	-6.532
Educación	3.899	0.301	12.970	0.000	3.309	4.488
Riqueza	0.330	0.123	2.680	0.007	0.089	0.571
Edad	0.006	0.013	0.460	0.648	-0.019	0.031
Sexo (1=hombre)	2.431	0.329	7.380	0.000	1.785	3.077
Guatemala	-2.566	1.354	-1.890	0.058	-5.222	0.091
El Salvador	0.350	1.274	0.270	0.784	-2.149	2.848
Honduras	-8.805	1.592	-5.530	0.000	-11.926	-5.683
Nicaragua	-3.015	1.679	-1.800	0.073	-6.308	0.278
Costa Rica	4.016	1.484	2.710	0.007	1.104	6.927
Panamá	-7.471	1.800	-4.150	0.000	-11.001	-3.941
Colombia	-3.708	1.491	-2.490	0.013	-6.632	-0.783
Ecuador	-11.038	1.392	-7.930	0.000	-13.769	-8.307
Bolivia	-11.977	1.375	-8.710	0.000	-14.673	-9.281
Perú	-4.242	1.466	-2.890	0.004	-7.117	-1.367
Paraguay	0.704	1.635	0.430	0.667	-2.502	3.910
Chile	-1.003	2.065	-0.490	0.627	-5.053	3.046
Uruguay	5.469	1.914	2.860	0.004	1.716	9.223
Venezuela	8.920	1.856	4.810	0.000	5.280	12.560
Dom. Rep.	3.798	1.668	2.280	0.023	0.526	7.069
Haití	7.690	1.998	3.850	0.000	3.772	11.608
Jamaica	15.711	1.569	10.010	0.000	12.633	18.788
Guyana	7.229	1.759	4.110	0.000	3.780	10.678
Constante	49.408	1.572	31.430	0.000	46.325	52.491

*Modelo de regresión lineal (OLS); errores estándares corregidos por el efecto del diseño de la muestra
País de referencia: México
Número de observaciones: 28.231
R-cuadrado: 0.09

VIII. Identidad nacional y minorías étnicas en las Américas*

Daniel Moreno**

Resumen

En este capítulo se considera la fortaleza del vínculo que tienen los ciudadanos con la comunidad política de la nación en los países incluidos en el Barómetro de las Américas de LAPOP. Dos preguntas principales son exploradas: primero, ¿cómo afecta el status de minoría étnica el sentido de pertenencia nacional de los ciudadanos? y segundo, ¿qué efecto tiene el nivel de desarrollo del país en el sentido de pertenencia nacional? Un análisis estadístico multi-nivel es empleado para establecer el efecto que la identidad étnica, como variable a nivel individual, y el nivel de desarrollo, como variable de nivel nacional, tienen sobre el sentido de pertenencia nacional. La evidencia sugiere que, con excepción de tres países, el status de minoría étnica no tiene un efecto relevante sobre la intensidad del vínculo del ciudadano con la nación; este hallazgo no parece tener relación con el nivel de desarrollo del país. A nivel nacional, el nivel de desarrollo aparece como un importante factor para predecir la fortaleza promedio del vínculo con la comunidad política nacional.

Este capítulo se concentra en el vínculo que tienen los ciudadanos con la comunidad política nacional de la cual forman parte. Particularmente se explora la relación que existe entre las identidades étnicas y el sentido de pertenencia nacional, considerando que es posible que existan diferencias relevantes en esta relación de acuerdo al nivel de desarrollo de cada país.

La relevancia de este tema se ha venido acentuando durante las últimas dos décadas, en las que las identidades étnicas parecen haber ganado importancia en una tendencia que podría denominarse global (Brysk 2000; Connor 1994). Durante los noventa, la desintegración de Yugoslavia y la guerra civil en Ruanda han sido las muestras más visibles, mas no únicas, de los potenciales alcances negativos de la exacerbación de la identidad sobre la estabilidad política de los países. Actualmente, ciudadanos de distintos países de la región cuestionan la legitimidad misma del Estado Nación, y esto hace que algunos observadores apunten al vínculo de los ciudadanos con el Estado como una explicación posible para las diferencias en la calidad de la democracia en la región.

Las preguntas que este capítulo busca responder son las siguientes: Bajo una tendencia mundial de creciente politización de las identidades étnicas, ¿esta tendencia es una amenaza para la democracia en las Américas? ¿Qué papel juega el nivel de desarrollo nacional en la relación

* Este capítulo fue elaborado gracias al apoyo financiero de USAID – Bolivia y del Center For the Americas de Vanderbilt University. Las sugerencias y comentarios de Mitchell Seligson y de los miembros del equipo de LAPOP resultaron particularmente útiles para este trabajo. Los errores y omisiones son sólo del autor.

** Candidato a Ph.D. en Ciencia Política por Vanderbilt University; fellow del Center For the Americas 2006-2008.



entre las identidades y la pertenencia nacional? ¿Qué otras variables pueden explicar la fortaleza del vínculo del ciudadano con la comunidad política nacional? Para este análisis se considera la muestra completa del Barómetro de las Américas de países sobre los que LAPOP posee información para el año 2006/07.

La comunidad política nacional

El sentido de pertenencia nacional aparece como una de las condiciones más importantes para la democracia. Tanto para participar en la democracia como para acatar las leyes, los ciudadanos necesitan reconocer que el Estado en el que viven es legítimo. En ese entendido, y siguiendo la línea marcada por Mill (1993), Rustow sugiere que la fortaleza del vínculo de los ciudadanos con el Estado es una condición imprescindible para la democracia (Rustow 1970).

Ser parte de la nación implica asumir que de alguna manera el destino propio está unido al de los demás ciudadanos que la conforman; implica también que todos los ciudadanos aceptan y reconocen como legítimo el poder del Estado. La comunidad política nacional, la nación de ciudadanos, puede ser entendida entonces como una comunidad imaginada, como la define el trabajo seminal de Anderson (1993), es decir, como una comunidad de personas que, sin conocerse, imaginan que comparten un vínculo mutuo de fraternidad y horizontalidad.

Pese a su importancia, el área de estudio de la política comparada le ha dado muy poca atención a este tema, y los estudios empíricos basados en información cuantitativa han sido inexistentes o muy escasos (Juviler y Stroschein 1999). Una notable excepción ha sido el trabajo de Smith y Jarkko (2001).

La mayor parte de los estudios que consideran este tema lo hacen tangencialmente, a partir del concepto mayor de apoyo al sistema, como parte de lo que se llama “apoyo difuso” (Dalton 1999; Dalton 2004; Easton 1965; Easton 1975; Muller, Jukam y Seligson 1982; Norris 1999). En este capítulo se hace una distinción explícita entre los conceptos de apoyo al sistema y el de pertenencia a la comunidad política nacional; parece claro que sentirse parte de la nación política es una condición necesaria para el apoyo al sistema político e institucional, pero no pueden considerarse como parte del mismo constructo teórico.

Pertenencia nacional: ¿Necesaria para la democracia?

¿Qué tan necesario es este sentido de pertenencia a la comunidad política nacional para la democracia? Para responder a esta pregunta, consideraremos dos elementos de ese apoyo que son centrales para la democracia: la relación entre los ciudadanos y el Estado, y la tolerancia política, que habla de una relación horizontal y de respeto de los ciudadanos dentro del marco del Estado democrático.

Los datos de LAPOP en 2006 son reveladores, y muestran que el sentido de pertenencia a la comunidad política nacional tiene un efecto positivo sobre estos valores democráticos en los ciudadanos; el gráfico VIII.1 a continuación presenta la relación entre el orgullo nacional, una de

las variables de atención de este capítulo que se detalla más abajo, y el apoyo al sistema político, medido como se detalle en el capítulo IV de este volumen.

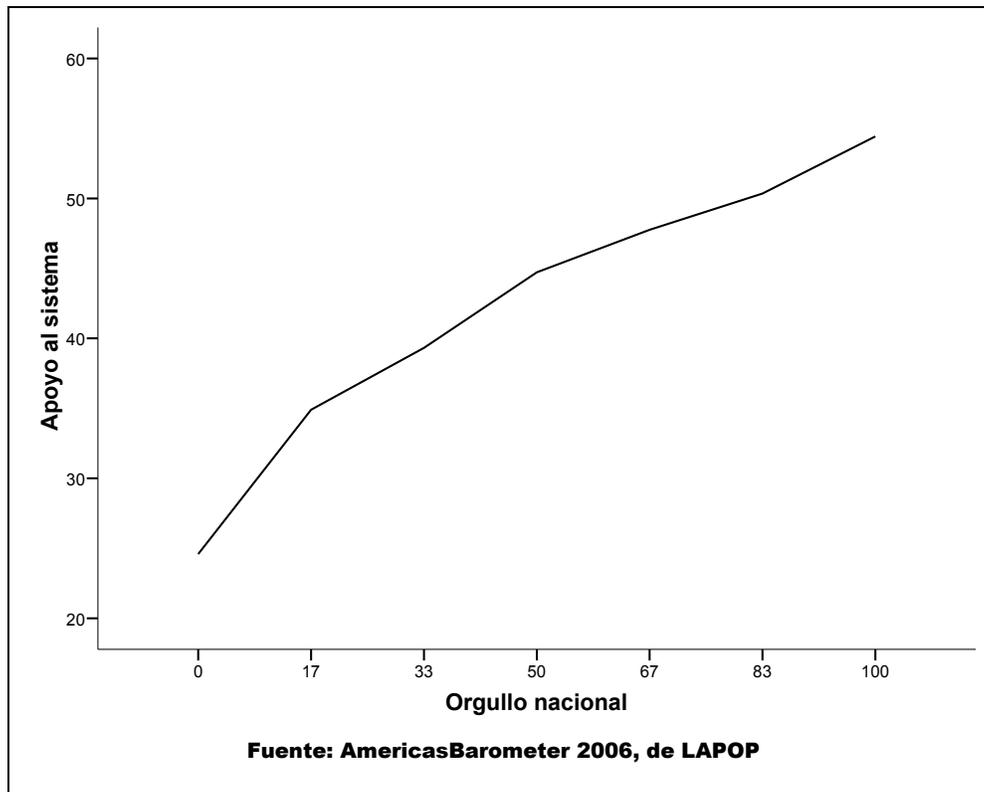


Gráfico VIII.1: Efecto del orgullo de su nacionalidad en el apoyo al sistema

La relación es clara: las personas con mayor orgullo de su nacionalidad tienden a tener mayor apoyo al sistema político del país. Esta relación es fuerte ($r=.230$) y estadísticamente significativa ($p<.001$). En el caso del apoyo al sistema y orgullo nacional es posible que ambas variables estén midiendo conceptos muy cercanos entre sí como para establecer una relación de causalidad entre las dos variables.

Veamos entonces otro valor central para la democracia: la tolerancia política. La tolerancia tiene que ver con que los ciudadanos respeten el derecho de otras personas de pensar y actuar de manera diferente e incluso opuesta a la suya, dentro de las reglas de juego democrático (Adorno, et al. 1950; Gibson 1992). Esta variable se describe y analiza en el capítulo IX de este volumen. El gráfico VIII.2 a continuación muestra la relación entre la medida de aceptación con la idea de valores comunes, descrita a detalle más adelante en este capítulo, y la tolerancia política.

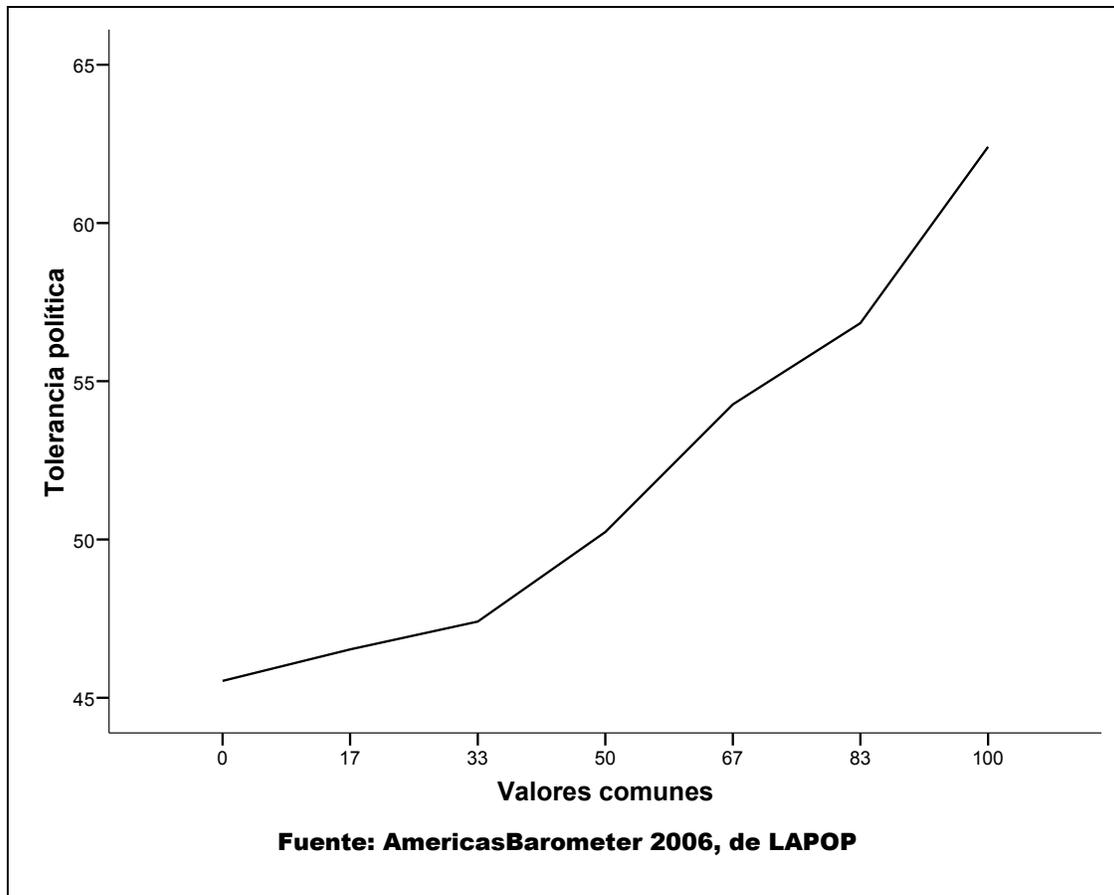


Gráfico VIII.2: Efecto de la creencia en valores comunes sobre la tolerancia política

La correlación entre estas dos variables es fuerte y significativa ($r=.18$, $p<.001$). Pero la prueba de fortaleza de esta relación es un análisis de regresión lineal en el que se introducen como controles estadísticos los factores que generalmente explican la tolerancia política (como la educación, la edad, el ingreso, y el género); en esta prueba, cada diez puntos adicionales en la escala de valores comunes incrementan el promedio de tolerancia política en 2 unidades en la escala de 0 a 100 usada para la tolerancia. Así, los valores comunes importan para este elemento central de la democracia.

Esto sugiere que es posible pensar en una relación de causalidad por medio de la cual un mayor sentido de apego a la comunidad política nacional, medido por la escala de valores comunes, produce más tolerancia política. Esta hipótesis tiene también lógica teórica, en tanto se puede entender que mientras más se sienta una persona parte de la comunidad nacional en la que existen ciudadanos distintos a ella misma, más grande va a ser su disposición a respetar estas diferencias. En este sentido, sentirse parte de la comunidad política nacional podría estar contribuyendo al reconocimiento del otro, del diferente, como un ciudadano legítimo (Mouffe 2000).

La fortaleza de la comunidad política nacional en los países del estudio

Este acápite analiza empíricamente dos variables que hacen referencia a la fortaleza del vínculo entre los ciudadanos y la comunidad política nacional. La primera proviene de la siguiente pregunta empleada en el cuestionario de LAPOP: *¿Qué tan orgulloso se siente usted de ser (mexicano, guatemalteco, etc.)?* La segunda variable proviene de la pregunta que dice *A pesar de nuestras diferencias, los (mexicanos, guatemaltecos, etc.) tenemos valores que nos unen como país. ¿Qué tan de acuerdo está usted con esta afirmación?* Las dos preguntas fueron medidas inicialmente en una escala del 1 al 7 en la que 1 represente “Nada” y 7 “Mucho”, pero fueron recodificadas en una escala del 0 al 100 para su mejor exposición. Estas son preguntas comúnmente usadas en estudios sobre este tema, y la literatura especializada da cuenta de esto (Norris 1999).

Estas variables miden dos dimensiones distintas del vínculo de los individuos con la comunidad política nacional. La primera pregunta toca directamente el nivel de orgullo que tiene la persona sobre su nacionalidad, y se basa en la idea de que el sentido de pertenencia a la comunidad nacional se refleja en el orgullo de ser parte de la misma. La segunda pregunta se enfoca en la idea de que la nación existe más allá de la delimitación territorial del Estado, en los valores que sus ciudadanos comparten (o al menos en la creencia de que estos valores existen). Las dos variables tienen una correlación de .247 ($p < .001$), que si bien muestra que las variables están relacionadas, no es muy alta, lo que sugiere que las variables realmente miden dimensiones distintas del concepto.

El gráfico VIII.3 que sigue a continuación muestra los valores de los promedios nacionales para las dos variables de atención en este capítulo.

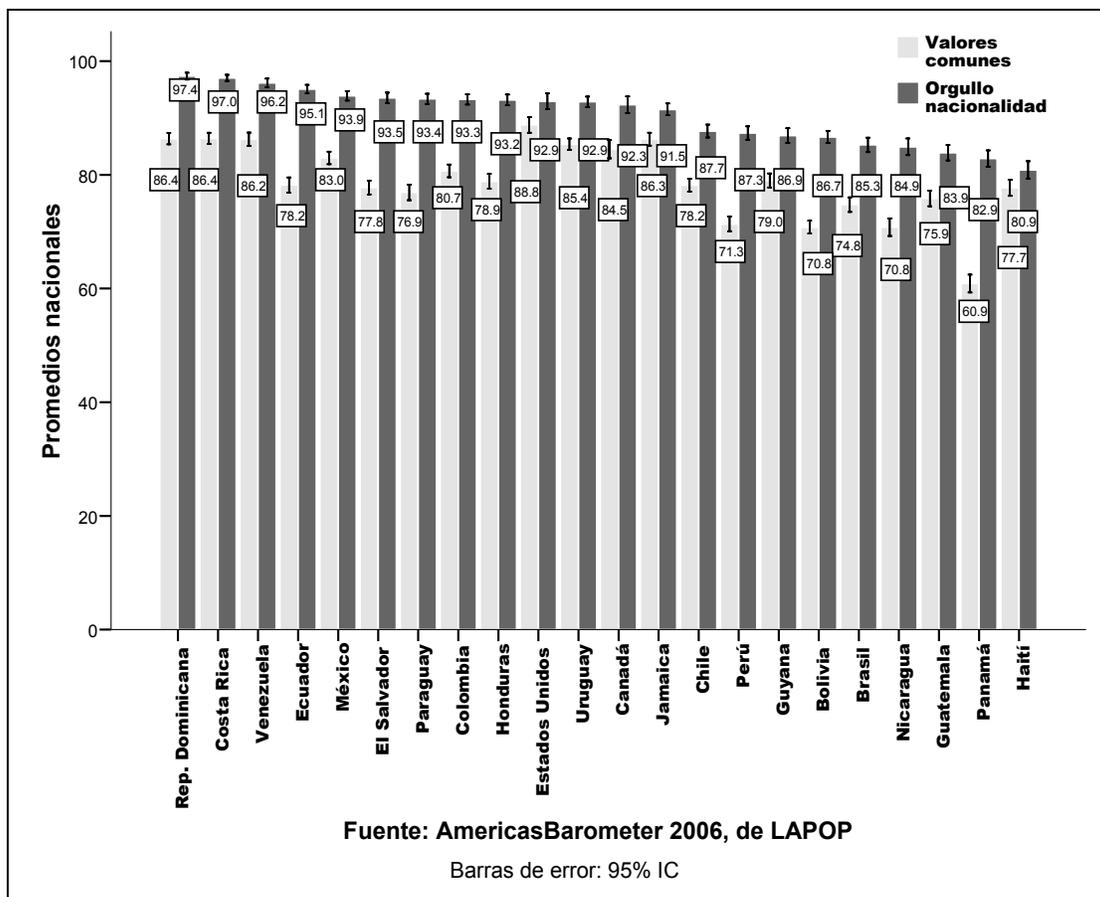


Gráfico VIII.3: Promedios de orgullo nacional y de creencia en valores comunes, por país

Como puede verse, los promedios del orgullo nacional son relativamente altos en todos los países estudiados, aunque las ‘I’ correspondientes a las barras de error sugieren que pueden considerarse 4 grupos de países¹. Los promedios más altos corresponden a la República Dominicana, Costa Rica, Venezuela y Ecuador. Le siguen el grupo de países confirmados por México, El Salvador, Paraguay, Colombia, Honduras, Estados Unidos, Uruguay, Canadá y Jamaica. Chile, Perú, Guyana, Bolivia, Brasil, Nicaragua, Guatemala, y Panamá conforman otro grupo, mientras que Haití presenta el valor más bajo registrado.

La variación es mucho más alta en la pregunta que mide el acuerdo con la idea de los valores comunes. Estados Unidos es el país con un promedio nacional más alto en esta pregunta, y parece distinguirse de los demás. Siguen el grupo de países conformados por República Dominicana, Costa Rica, Jamaica, Canadá, Venezuela, Uruguay y México. Otro grupo está formado por Colombia, Guyana, Honduras, Ecuador, Chile, El Salvador, Paraguay, Brasil y Guatemala. Con valores mucho más bajos aparecen Perú, Bolivia y Nicaragua, mientras que

¹ Las “I” que cada barra muestra representan los intervalos de confianza del promedio; como regla general, si las “I” de dos barras se sobrepone, se puede asumir que los dos promedios no son distintos estadísticamente.

Panamá tiene un promedio todavía más bajo que se distingue claramente de cualquier otro país en la serie.

Estudios anteriores sugieren que el orgullo nacional tiende a ser más alto en democracias estables e institucionalizadas que en países con democracias más frágiles (Smith y Jarkko 2001). Si bien los datos muestran que los países con democracias estables tienen niveles de orgullo nacional altos, la relación no aparece como lineal: las democracias más consolidadas de la región, Canadá y los Estados Unidos, tienen promedios inferiores a países con democracias menos consolidadas, como Ecuador o la República Dominicana. Esta explicación, entonces, no parece explicar muy claramente lo que sucede con los países de la región.

Una explicación alternativa para estas diferencias es el nivel de desarrollo del país. Ordenemos los promedios nacionales de cada país según su nivel de desarrollo humano, tal cual lo mide el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo² (UNDP 2006). Los gráficos VIII.4 y VIII.5 a continuación muestran la relación entre los promedios nacionales de las dos variables de atención y el Índice de Desarrollo Humano calculado para cada país.

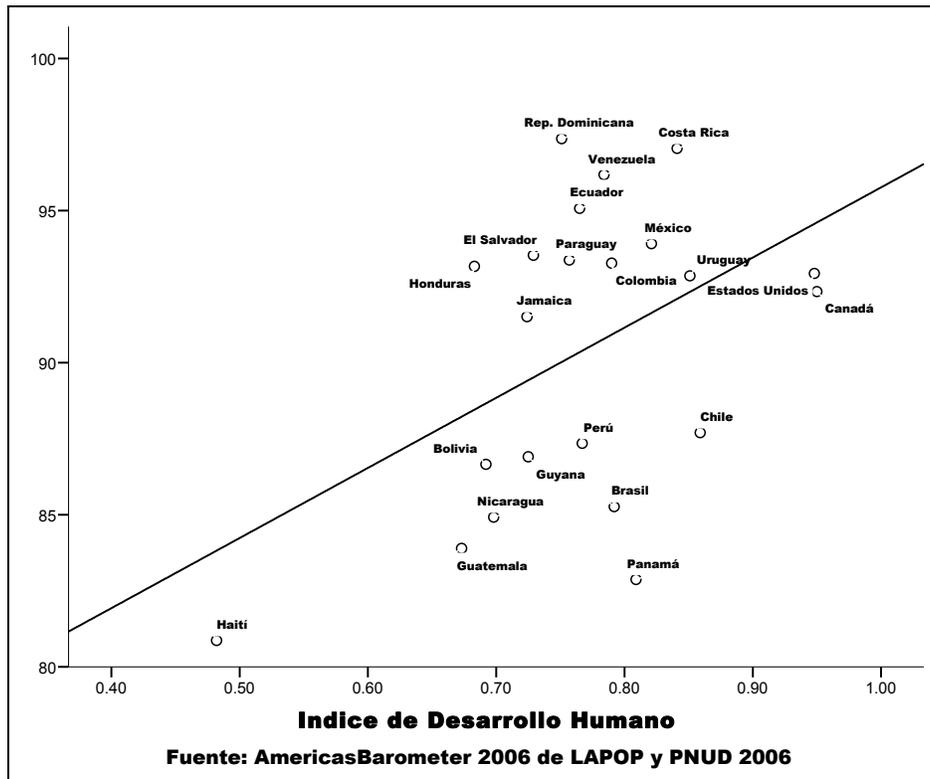


Gráfico VIII.4: Promedio de orgullo nacional por IDH

² El Índice de Desarrollo Humano es un indicador compuesto por aspectos económicos (PIB per cápita calculado de acuerdo al Poder de Paridad Adquisitiva), educativos (índice de educación del país), y de salud (expectativa de vida de la población). El PNUD calcula bi-anualmente el valor del índice para cada país en el mundo. Para más información ver <http://hdi.undp.org>.



La relación entre el nivel de desarrollo humano y el promedio de orgullo en la nacionalidad propia es claramente positiva. Con 21 de los 22 casos de la muestra (Panamá fue excluido por razones que se explican más abajo), la correlación es fuerte y significativa ($r=.535$, $p<.05$). Pese a esta fortaleza, la relación no es unívoca ni monótona. Mientras más lejos está un país de la línea de regresión, menos se podría predecir su nivel promedio de orgullo según su nivel de desarrollo humano. Por ejemplo, Costa Rica, Venezuela, República Dominicana y Ecuador están muy por encima de su valor promedio esperado, mientras que Brazil, Chile y Guatemala están por debajo de lo que se podría esperar. Panamá está muy por debajo de lo esperado, y estos resultados deben ser considerados por separado. Existen muchos factores que podrían explicar el orgullo de los ciudadanos en su nacionalidad, los cuales van desde el desempeño en deportes, como podría ser el caso en Ecuador y su selección de fútbol (Seligson, et al. 2006b), hasta la percepción interna de la imagen del país en el exterior.

Ahora bien, como el gráfico VIII.5 muestra, la relación entre desarrollo humano y la idea de los valores comunes aparece menos clara en la línea de regresión; esto se debe nuevamente a la presencia de Panamá, un caso atípico que “jala” la línea de regresión; una vez que se quita este caso de la muestra, la relación se vuelve significativa ($r=.497$, $p<.05$).

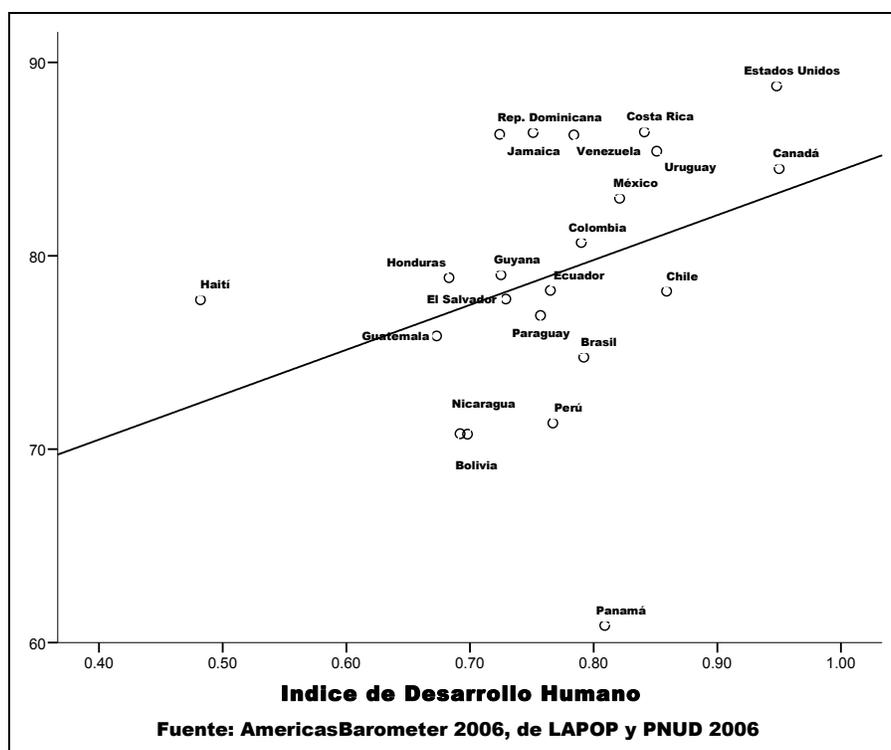


Gráfico VIII.5: Promedio de acuerdo con idea de valores comunes por IDH

A nivel de país, considerando los promedios nacionales, el Índice de Desarrollo Humano aparece como un factor que tiene un peso importante al momento de predecir tanto el orgullo de la nacionalidad como el nivel de acuerdo con la idea de los valores comunes. Usar promedios nacionales en este tipo de análisis es útil cuando se trata de comparar países o de registrar los

efectos de variables contextuales en los temas que nos interesan. Pero considerar solamente los promedios nacionales a menudo hace olvidar que existen grandes diferencias entre ciudadanos al interior de cada país, y que estas diferencias pueden ser mejor explicadas por características de los individuos y no del país. Este problema en el análisis es lo que se conoce como la “falacia ecológica”, y es una limitación común en el análisis de datos de encuestas de varios países (Seligson 2002).

Pertenencia nacional e identidad étnica. Cuestionando supuestos.

Una de las características propias de los individuos que en teoría resulta central para la fortaleza del vínculo del ciudadano con el estado y la nación es la identidad étnica. Para algunos autores, la diversidad étnica representa un obstáculo para la democracia liberal (Chua 2003; Horowitz 1985; Rabushka y Shepsle 1972; Snyder 2000); el argumento principal para este punto de vista es que las identidades étnicas, entendida como una pertenencia “primordial” a un grupo (Geertz 1963; Stack 1986; Van Evera 2001), crearían alianzas más fuertes entre sus miembros que las que son capaces de crear los estados nacionales conformados por distintos grupos étnicos. Los trágicos ejemplos Yugoslavia y Ruanda en la década pasada son usados comúnmente como evidencia de esta supuesta contradicción entre democracia e identidades étnicas fortalecidas.

Sin embargo, esta posición ha encontrado un debate cada vez más fuerte, que se genera principalmente a partir de una concepción de la identidad étnica menos “esencialista”, y que entiende que las identidades son construcciones sociales complejas, fluidas y maleables. Esto hace que para otros autores, la diversidad étnica no sea necesariamente un problema para la estabilidad democrática de un país (Abizadeh 2002; Chandra 2006; Gutmann 2003), y que las diferencias étnicas sean relevantes sólo cuando están acompañadas por diferencias socioeconómicas que sistemáticamente transforman patrones étnicos en mecanismos de estratificación de la sociedad.

Una implicación de la posición “primordialista” en este debate es que las identidades étnicas tenderían a ser más fuertes que la identidad nacional, por lo que las minorías étnicas en los países comprendidos en este estudio tendrían un sentido más débil de pertenencia a la comunidad nacional que los individuos que pertenecen al grupo étnico mayoritario. Para probar esta teoría, se generó una variable dicotómica que asigna un valor de 1 a las personas que se identifican como parte de un grupo minoritario en el país, y 0 a quienes se identifican como parte de la identidad étnica mayoritaria.

La variable fue generada a partir de la pregunta *¿Cómo se identifica usted?* incluida en el cuestionario de LAPOP con leves variaciones en la redacción de la pregunta y adecuaciones en la lista de categorías posibles para cada país. En la mayor parte de los países latinoamericanos, se consideró que el grupo mayoritario está conformado por una combinación de quienes se identifican como “blancos” y como “mestizos”, mientras que “indígenas” y “afrodescendientes” son parte de la categoría minoritaria³; en Estados Unidos se clasificó como mayoría a quienes se

³ Si bien es posible que algunos de los países latinoamericanos como Guatemala o Bolivia tengan una población indígena “mayoritaria” (Gurr 1993; Van Cott 2005; Yashar 2005), los gobiernos nacionales han estado



identifican racialmente como “blancos”, mientras que en Canadá los individuos clasificados como parte de la mayoría son quienes no se reconocieron como pertenecientes a ninguna otra categoría más que canadiense (principalmente franco-canadienses). En Brasil, quienes no se identificaron como ‘*branco*’ o ‘*pardo*’ fueron codificados como minoría. En Haití, quienes se identificaron como “blancos” fueron clasificados como la minoría. Tres países de los 22 que cubre LAPOP en 2006 no fueron incluidos en el análisis: Paraguay, que no tiene una pregunta de identificación étnica en el cuestionario, y Jamaica y Guyana, países donde clasificar a los individuos según las opciones existentes en el cuestionario resulta particularmente complicado⁴.

El gráfico VIII.6 a continuación ilustra la proporción de personas que en cada país fueron codificados como minoría étnica. Como puede verse, la proporción de personas que fueron clasificados como parte de la minoría varía ampliamente de país a país, desde más de 40% en Guatemala, hasta menos de 5% en Nicaragua.

históricamente en poder de ciudadanos que podrían ser clasificados como “mestizos” o “blancos”. Por supuesto, la reciente elección de Evo Morales en Bolivia representa un cambio sustancial en esta relación de poder, cambio que ha traído consigo importantes efectos en las opiniones y actitudes de los ciudadanos ante el Estado, como estudios de LAPOP confirman (Seligson, et al. 2006a). Sin embargo, pese a la posibilidad de que los grupos indígenas no sean minorías en su peso poblacional, aún en Bolivia y en Guatemala pueden ser tratados como minorías en términos de su acceso al poder.

⁴ Para ver en detalle los cuestionarios aplicados en las encuestas en cada uno de los países, favor visitar la página de LAPOP en el Internet (www.lapopsurveys.org).

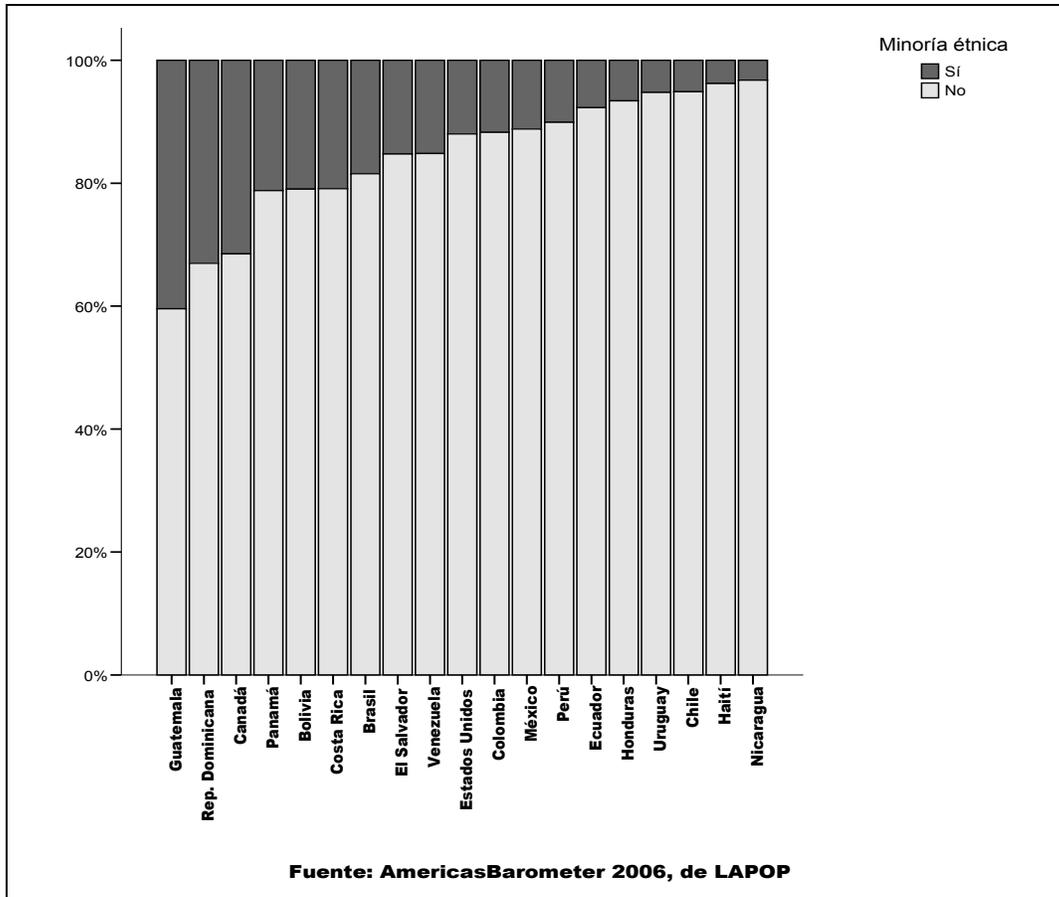


Gráfico VIII.6: Proporción de personas por país según estatus de minoría étnica

¿Cuál es el efecto de ser parte de la mayoría o la minoría étnica sobre el sentido de pertenencia a la comunidad política? Luego de correr un análisis de regresión lineal para cada una de las dos variables dependientes que incluye como controles estadísticos la edad de una persona, el sexo, el nivel educativo y el ingreso, las diferencias entre mayoría y minoría étnica son evidentes sólo en un puñado de países. El gráfico VIII.7 a continuación muestra el efecto de las diferencias entre mayorías y minorías para los países comprendidos en el estudio en los que la diferencia es robusta luego de introducir los controles sociodemográficos. La variable dependiente es el orgullo en la nacionalidad propia.

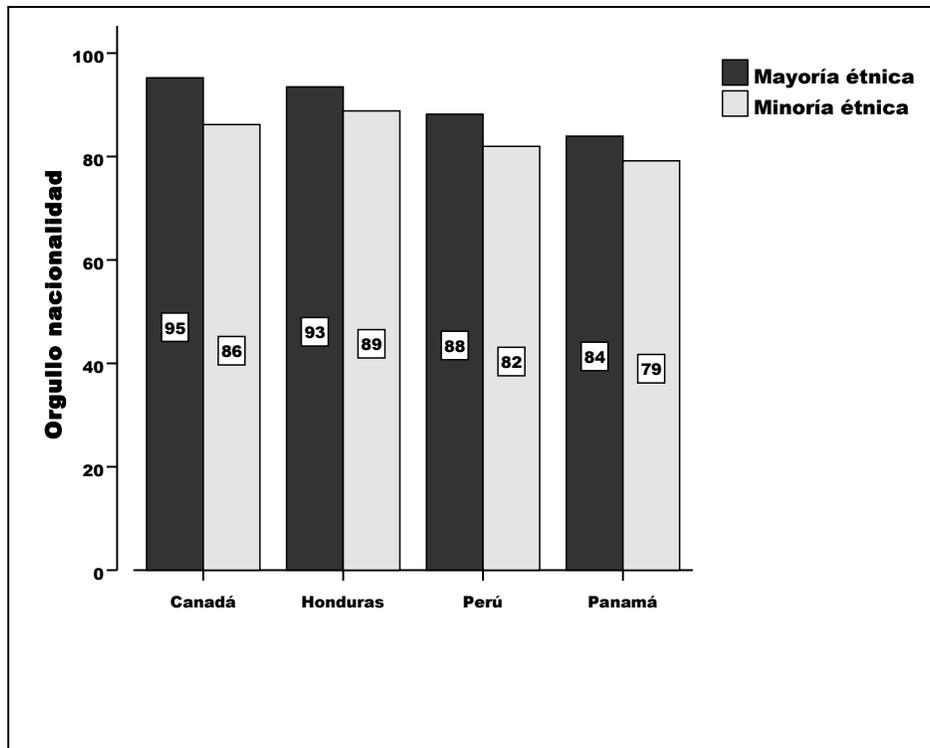


Gráfico VIII.7: Orgullo de su nacionalidad por estatus de mayoría (países con diferencias significativas)

Solamente en Canadá, Honduras, Perú y Panamá las minorías se sienten menos orgullosas de su nacionalidad que la mayoría étnica. Es en Canadá donde estas diferencias son más grandes, como el gráfico muestra. Es de notar que en los pocos casos en los que existen diferencias entre la mayoría y la minoría étnica, el grupo minoritario tiene promedios más bajos que el mayoritario, por lo que al menos en estos países se cumple lo que podría ser esperado desde una visión “primordialista” de las identidades étnicas.

La comparación para la variable que mide el nivel de acuerdo con la idea de los valores comunes es muy parecida. El gráfico VIII.8 que sigue a continuación da cuenta de ello.

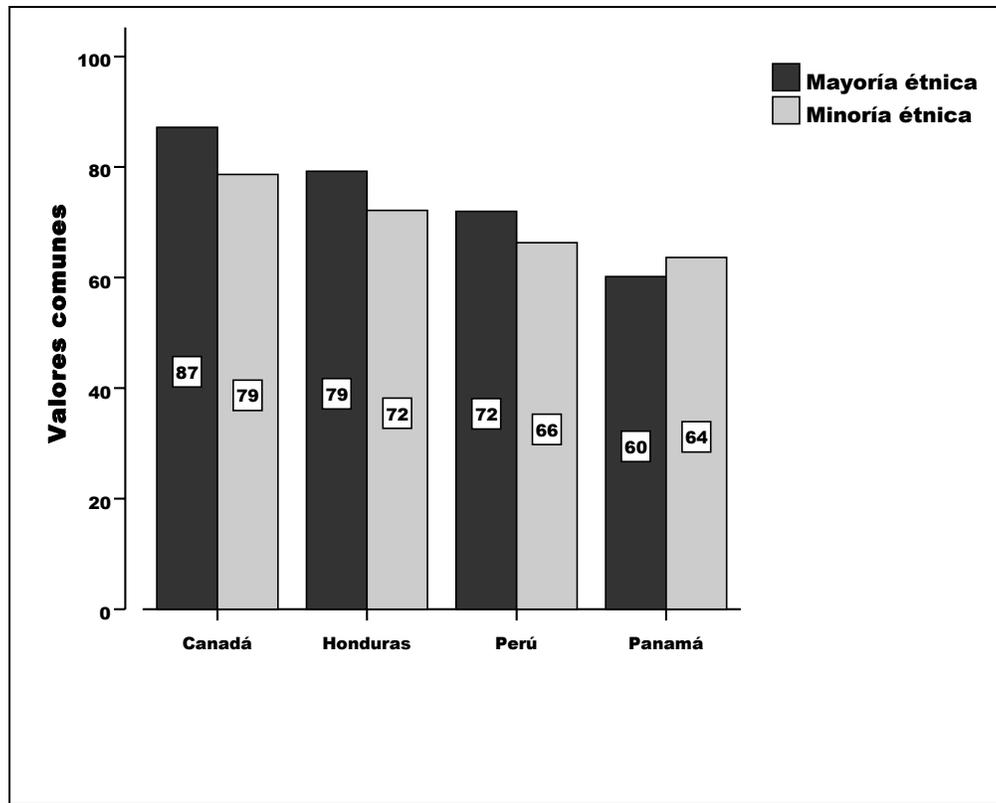


Gráfico VIII.8: Creencia en valores comunes por estatus de mayoría (países con diferencias significativas)

La lista de países en los que la identidad étnica tiene algún efecto en el sentido de pertenencia nacional es exactamente la misma que en el caso anterior, y nuevamente las diferencias más grandes están en Canadá. La diferencia principal de estos resultados con relación a los anteriores es que las personas que se identifican como parte de los grupos étnicos minoritarios en Panamá están aún más convencidas de que existen valores comunes que unen a los panameños que los miembros de la mayoría blanco – mestiza. La variable minoría tiene en Panamá un comportamiento paradójico: mientras que afecta positivamente una de las variables, afecta negativamente la otra.

Dejando por un momento el caso paradójico de Panamá, los países en los que las diferencias entre mayoría y minoría son más importantes son Canadá, Honduras y Perú. Sistemáticamente, los individuos que se identifican como indígenas, negros y mulatos en Honduras y en Perú, y como franco-canadienses o miembros de otro grupo racial en Canadá, tienden a tener un menor apego a la comunidad política nacional de sus respectivos países que quienes se sienten parte del grupo étnico codificado como mayoritario. Esto sugiere una inclusión más débil de estas poblaciones en el proyecto nacional representado por estos tres estados.

La pregunta que aparece como clave, entonces, es la siguiente: ¿Qué factores hacen que en unos países la identidad étnica tenga un efecto significativo sobre el sentido de pertenencia a la comunidad política nacional, mientras que en otros no? ¿Por qué las diferencias étnicas son relevantes para estas preguntas en Perú pero no en Ecuador, sí en Honduras pero no en



Nicaragua? O puestas las cosas de otra manera, ¿qué tienen en común Canadá, Honduras y Perú que los diferencie del resto de los países en el grupo?

Combinando factores individuales con factores contextuales

Existen instrumentos estadísticos útiles para poder determinar la influencia que tienen factores nacionales, como el Índice de Desarrollo Humano o el Producto Interno Bruto, y qué peso tienen los factores individuales, como la edad, el sexo de la persona, o su estatus como minoría o mayoría étnica. Uno de ellos, el análisis estadístico en niveles múltiples, permite combinar la información sobre factores nacionales e individuales (Luke 2004; Raudenbush y Bryk 2002). Un modelo de análisis en niveles múltiples es básicamente un modelo generalizado de regresión de mínimos cuadrados (GLS) al que se le permite que los efectos de las variables independientes varíen aleatoriamente, es decir, que no sean constantes⁵.

Usando la base combinada de los países estudiados por LAPOP en 2006⁶ se realizó una serie de análisis estadísticos; distintas ecuaciones fueron empleadas para probar las relaciones entre las dos variables dependientes y variables independientes a nivel de los individuos (sexo, edad, estatus de minoría o mayoría étnica), así como con el Índice de Desarrollo Humano del año 2006 como variable correspondiente al país.

También se incluyó un término de interacción entre una variable de nivel individual (estatus étnico) y otra de nivel nacional⁷ (IDH). Si este término resultara estadísticamente significativo, podemos pensar que el efecto de ser parte de una minoría étnica varía de acuerdo al nivel de desarrollo humano de los países⁸. La tabla VIII.1 que se presenta a continuación presenta los resultados más importantes para cada variable.

⁵ El modelo empleado es conocido como *Random Effects Maximum Likelihood* (REML).

⁶ La base combinada excluye a Guyana, Jamaica y Paraguay por falta de información en la variable ‘minoría’ y a Panamá por su comportamiento paradójico en relación a las dos variables. Por tanto, 15 países sumando un total de 24,426 entrevistas son consideradas aquí.

⁷ Dado que el número de países es relativamente pequeño, la inclusión de más de una variable en este nivel resultaría problemática.

⁸ Los resultados que se presentan para todas las variables provienen de modelos con interceptos y pendientes aleatorias estimadas para la variable “Minoría” en los que no se incluyó el término interactivo para evitar problemas de colinearidad. El término de interacción fue incorporado en modelos subsecuentes basados en los ahora descritos; los resultados de estos modelos se presentan en las celdas sombreadas de la tabla VIII.1.

Tabla VIII.1: Resultados de análisis estadísticos de dos niveles para las dos variables

Var. Dependiente	Orgullo nacional ⁺	Valores comunes ⁺
Var. Independiente		
<i>Minoría</i>	-0.64 (-0.85)	-1.60 (-2.37)*
Edad	0.36 (4.18)**	0.50 (4.95)***
Nivel educativo	-0.06 (-0.37)	1.80 (8.87)***
Sexo (mujer)	-0.11 (-0.46)	0.57 (1.99)*
<i>IDH</i>	24.9 (2.69)**	24.87 (2.20)*
<i>IDH X Minoría</i>	-11.81 (-1.54)	-10.78 (-1.51)
Constante	70.7 (9.83)***	54.49 (6.19)***
SD Minoría / Constante / Residuo ⁺⁺	2.6 / 4.1 / 20.3	1.88 / 4.99 / 23.6
N individuos / país	27,179 / 18	26,684 / 18
+ Valores presentados son coeficientes y (valor z)		
++ Efectos aleatorios		
* p<.05; ** p<.01; *** p<.001		

En la base de datos combinada de 18 países que aquí se considera, ser parte de una minoría étnica disminuye significativamente el promedio de creencia en valores comunes, pero no tiene ningún efecto sobre la variable que mide el orgullo nacional. Este es el resultado promedio para toda la región (hemos visto que puede ser distinto para cada país), y es independiente del nivel de desarrollo del país, de la edad de la persona, su nivel educativo y del género.

La edad tiene un efecto positivo altamente significativo en el sentido de pertenencia a la comunidad política nacional. Una vez que se controla por otros factores, las personas mayores tienden a ser más orgullosas de su nacionalidad y más convencidas de que existen valores comunes que otros ciudadanos más jóvenes. Los jóvenes, entonces, se sienten menos apegados a la nación en la que viven, quizás marcados más fuertemente por una idea de ‘ciudadanía universal’ que viene de la mano de la revolución de la tecnología de la información.

Las otras dos variables a nivel individual que se incluyen en el modelo son el nivel educativo y el género. Ambas afectan significativamente sólo a la idea de valores comunes. Mientras más alto sea el nivel educativo de las personas, más alto tiende ser su convencimiento de que en su país existen valores que unen a los ciudadanos. Por su parte, las mujeres están más de acuerdo con que en sus países existen valores comunes que los hombres; esto puede estar mostrando que los varones ven las diferencias internas en cada país como algo más irresoluble que las mujeres.

El Índice de Desarrollo Humano, la variable a nivel de país que se incluye en este análisis, tiene un efecto positivo y significativo sobre el orgullo nacional y sobre la variable de valores comunes, como se había mencionado anteriormente. Mientras más alto sea el nivel de desarrollo humano de un país, más orgullosos están los ciudadanos de su nacionalidad y más dispuestos están a creer que existen valores que unen al país. Este resultado es independiente de la educación de las personas y de los otros factores considerados en el modelo.



La variable que no tiene significancia estadística en el análisis es el término interactivo entre desarrollo humano y minoría. Esto quiere decir que, en la lista de países considerados aquí, el nivel de desarrollo no media el efecto del estatus de minoría sobre las medidas de pertenencia a la comunidad política nacional. Sin embargo, como ya se había sostenido anteriormente, la cantidad de países disponibles para el análisis es pequeña y representa una distribución truncada del universo de países del mundo. Es posible que, en una muestra de países mundial, el efecto de tener estatus de minoría étnica sobre el vínculo con la comunidad política nacional varíe de acuerdo al nivel de desarrollo del país, aunque es probable que no lo haga linealmente.

En suma, puede afirmarse que para la muestra comprendida por los países de las Américas, el estatus de minoría o mayoría étnica tiene un efecto ya sea reducido o inexistente sobre la fortaleza del vínculo de los individuos con la comunidad política nacional. Las personas que se clasifican aquí como parte de una minoría étnica están tendencialmente menos convencidas de que en sus países existen valores comunes entre los ciudadanos que quienes son parte del grupo caracterizado como mayoritario, pero su nivel de orgullo nacional es indistinto del de la mayoría. Estos hallazgos sugieren que investigaciones previas pueden haber exagerado el efecto negativo del estatus de minoría étnica sobre el vínculo del ciudadano con la comunidad política nacional.

Conclusiones

Tres conclusiones principales pueden derivarse del análisis presentado en este capítulo. En primer lugar, el estatus de minoría étnica no tiene un efecto por sí mismo sobre las variables que miden la fortaleza del vínculo del ciudadano con la comunidad política nacional. La activación de las identidades étnicas que se ha presenciado durante los últimos años no parece poner en riesgo a las naciones consolidadas ni a sus democracias. El orgullo nacional es, en general, el mismo para las minorías y las mayorías étnicas, mientras que la idea de la existencia de valores comunes es ligeramente menor entre las minorías que entre las mayorías étnicas nacionales. Existen, sin embargo, tres países en los que las minorías aparecen menos integradas a la comunidad política nacional: Canadá, Honduras y Perú; estos tres casos deberían merecer atención especial en el futuro, tratando de buscar factores ya sean comunes a los tres o propios de cada país que expliquen una inserción potencialmente problemática de las minorías a la comunidad política nacional.

En segundo lugar está el efecto del desarrollo. Se ha visto que mientras más alto sea el nivel de desarrollo humano de un país, más altos tenderán a ser el orgullo que tienen los ciudadanos de su nacionalidad y la creencia de que están unidos por valores compartidos. Pero a diferencia de lo que se había supuesto, el nivel de desarrollo no parece afectar la relación entre el estatus de minoría étnica y la pertenencia nacional. Se ha encontrado que las diferencias importan en países que ocupan lugares muy distintos en el ránking internacional de desarrollo humano del PNUD: mientras que Canadá ocupa el lugar número 6, Perú el 92, y Honduras el 117 entre los 177 para los cuales el PNUD tiene información (UNDP 2006). Es probable que si el nivel de desarrollo media el efecto entre el estatus de minoría étnica y el sentido de pertenencia a la comunidad política nacional lo haga de manera no lineal. En todo caso, las limitaciones propias

de este estudio, particularmente derivadas del uso de una muestra de países restringida a la región, impiden obtener conclusiones más abarcadoras en esta área.⁹

La tercera conclusión apunta a que las variables que miden el vínculo entre los ciudadanos y la comunidad política nacional puede aportar más a la comprensión de las posibilidades y del estado de la democracia en los distintos países. Se ha mostrado que el orgullo nacional está fuertemente relacionado con el apoyo al sistema, y que la idea de los valores comunes puede ser una causa de la tolerancia política. Siendo esto así, quienes están interesados en la promoción de la democracia harían bien al prestar más atención a las condiciones en que los ciudadanos se insertan en la comunidad política nacional como una explicación para la cultura política de la democracia.

Finalmente, es oportuno señalar la importancia que tiene el estudio de cómo las identidades étnicas se relacionan con la participación política de los ciudadanos, más allá del tema de la inserción en la comunidad política nacional considerado en este capítulo. Mientras que este capítulo ha encontrado que el estatus de minoría étnica afecta el vínculo de los ciudadanos con la nación en algunos países, aún no queda claro como y bajo qué condiciones la identidad se relaciona con actitudes y comportamientos políticos más específicos, como la votación o la inclinación ideológica. Estos temas quedan como interrogantes para ser resueltos por investigaciones futuras, y que la construcción de bases de datos como la del Barómetro de las Américas puede ayudar a clarificar.

⁹ Por supuesto es posible que existan otros factores que marquen las diferencias entre estos países y los otros de la región, los cuales no fueron considerados teórica ni empíricamente en este capítulo. Por último, tampoco puede descartarse la hipótesis de que estas diferencias importen en cada país por razones estrictamente contextuales, propias de cada país, y no por la existencia de un factor común que las explique. En todo caso, la única manera de poder saber esto es por medio de un análisis estadístico de dos niveles, con más casos a nivel de país, que podría incorporar más variables de país y probar así el efecto de otros factores sobre las variables de atención de este capítulo.



Referencias

- Abizadeh, Arash. "Does Liberal Democracy Presuppose a Cultural Nation? Four Arguments." *American Political Science Review* 96, no. 3 (2002): 495-509.
- Adorno, TW, Frenkel-Brunswik Else, Daniel Levinson y Nevitt Sanford. *The authoritarian personality*. New York: Harper & Row publishers, 1950.
- Anderson, Benedict. *Comunidades Imaginadas*. México: Fondo de Cultura Económica, 1993.
- Brysk, Alison. *From Tribal Village to Global Village: Indian Rights and International Relations in Latin America*. Stanford: Stanford University Press, 2000.
- Chandra, Kanchan. "What is Ethnic Identity and Does It Matter?" *Annual Review of Political Science* 9 (2006): 397-424.
- Chua, Amy. *World on fire*. New York: Doubleday, 2003.
- Connor, Walker. *Ethnonationalism: The Quest for Understanding*. Princeton: Princeton University Press, 1994.
- Dalton, Russell. "Political Support in Advanced Industrial Democracies." En *Critical Citizens*, compilado por Pippa Norris. Oxford: Oxford University Press, 1999.
- . *Democratic Challenges, Democratic Choices: The Erosion of Political Support in Advanced Industrial Democracies*. Oxford: Oxford University Press, 2004.
- Easton, David. *A Systems Analysis of Political Life*. New York: Willey, 1965.
- . "A Reassessment of the Concept of Political Support." *British Journal of Political Science* 5 (1975): 435-57.
- Geertz, Clifford. "The Integrative Revolution: Primordial Sentiments and Civil Politics in New States." En *Old Societies and New States: The Quest for Modernity in Asia and Africa*, compilado por Clifford Geertz. New York: Free Press of Glencoe, 1963.
- Gibson, James. "The Political Consequences of Intolerance: Cultural Conformity and Political Freedom." *American Political Science Review* 86, no. 2 (1992): 338-56.
- Gurr, Ted Robert. *Mnories at Risk. A Global View of Ethnopolitical Conflict*. Washington DC: United States Institute for Peace Press, 1993.
- Gutmann, Amy. *Identity in democracy*. Princeton - Oxford: Princeton University Press, 2003.
- Horowitz, Donald. *Ethnic Groups in Conflict*. Berkeley: University of California Press, 1985.
- Juviler, Peter, y Sherrill Stroschein. "Missing boundaries of comparison: The political community." *Political Science Quarterly* 114, no. 3 (1999): 435-53.
- Luke, Douglas. *Multilevel Modeling: Quantitative Applications in the Social Sciences*. Newbury Park, CA: Sage, 2004.
- Mill, John Stuart. *Utilitarianism, On Liberty, Considerations on Representative Government, Remarks on Bentham's philosophy*. London- Vermont: Everyman, 1993.
- Mouffe, Chantal. *The democratic paradox*. London: Verso, 2000.
- Muller, Edward, Thomas Jukam, y Mitchell Seligson. "Diffuse Political Support and Antisystemic Political Behavior." *American Journal of Political Science* 26, no. 2 (1982).
- Norris, Pippa, ed. *Critical Citizens: Global Support for Democratic Governance*. Oxford: Oxford University Press, 1999.

- Rabushka, Alvin y Kenneth Shepsle. *Politics in Plural Societies: A Theory in Democratic Instability*. Columbia: C. Merrill, 1972.
- Raudenbush, S. W. y A.S. Bryk. *Hierarchical Linear Models: Applications and Data Analysis Methods*. Newbury Park: Sage, 2002.
- Rustow, Dankwart. "Transitions to Democracy: Toward a Dynamic Model." *Comparative Politics* 2, no. 3 (1970): 337-63.
- Seligson, Mitchell A. "The renaissance of political culture or the renaissance of the ecological fallacy?" *Comparative Politics* 34, no. 3 (2002): 237-92.
- Seligson, Mitchell, Abby Córdova, Juan Carlos Donoso, Daniel Moreno, Diana Orcés y Vivian Schwarz. *Auditoría de la democracia. Informe Bolivia 2006*. Cochabamba: USAID - LAPOP - CIUDADANIA, 2006a.
- Seligson, Mitchell, Juan Carlos Donoso, Daniel Moreno, Diana Orcés y Vivian Schwarz. *Auditoría de la democracia. Ecuador 2006*. Quito: CEDATOS - LAPOP, 2006b.
- Smith, Tom y Lars Jarkko. *National Pride in Cross-National Perspective* National Opinion Research Center, 2001 [cited. Available from <http://www.issp.org/Documents/natpride.doc>.
- Snyder, Jack. *From Voting to Violence: Democratization and Nationalist Conflict*. New York: Norton, 2000.
- Stack, John, ed. *The Primordial Challenge: Ethnicity in the Contemporary World*. New York: Greenwood Press, 1986.
- UNDP. *Human Development Report 2006* 2006 [cited. Available from <http://hdr.undp.org>.
- Van Cott, Donna Lee. *From movements to parties in Latin America: The evolution of ethnic politics*. New York: Cambridge University Press, 2005.
- Van Evera, Stephen. "Primordialism Lives!" *APSA - CP: Newsletter of the organized section in comparative politics of the American Political Science Association* 12 (2001): 20-22.
- Yashar, Deborah. *Contesting Citizenship in Latin America: The Rise of Indigenous Movements and the Postliberal Challenge*. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2005.

IX. Retos para la tolerancia en las Américas*

Diana Orcés¹

Resumen

En este capítulo se analiza la importancia que tiene la tolerancia política y social para la democracia. Los ciudadanos que poseen niveles altos de tolerancia tienden a respetar los derechos políticos de las minorías e incluso de aquellos con los que no están de acuerdo. Si los derechos de las minorías para expresarse libremente no son garantizados, ¿cómo se podría mantener la democracia a largo tiempo? Esta es la razón por la cual la tolerancia es de suma importancia para la persistencia de la democracia como sistema de gobierno. En este capítulo se realiza una comparación a través de países donde parcialmente se atribuyen las diferencias de tolerancia política y social a factores culturales como la tradición colonial británica, francesa y española. No obstante, el principal objetivo de este estudio es de explicar las características individuales que determinan las diferencias en los niveles de tolerancia. El resultado más importante de este capítulo es el crítico rol que juega la educación en los niveles de tolerancia: mientras más alto el nivel de educación, más alto es el nivel de la tolerancia.

¿Es la tolerancia necesaria para la democracia? Mientras la mayoría de ciudadanos apoyan normas democráticas alrededor del mundo, es improbable que este mismo grupo de ciudadanos extienda los derechos democráticos hacia “grupos indeseados” (Peffley y Rohrschneider 2003). Por lo tanto, si los derechos para expresarse libremente de los “grupos indeseados” o minorías son generalmente negados y sus derechos no son garantizados, como se podría garantizar la continuación de la democracia a largo tiempo (Seligson y Córdova 1993).² Por esta razón, la tolerancia es necesaria para la persistencia de la democracia como sistema de gobierno. Además, la tolerancia es necesaria para la democracia, no sólo porque proporciona un ambiente de libertad, diversidad y la oportunidad para la representación política de la oposición, sino porque ayuda a promover las normas que hacen pacífica la coexistencia entre grupos divergentes que viven debajo del mismo sistema político.

El objetivo principal de este capítulo es el de examinar la importancia de la tolerancia política para la democracia. Primero, se explora las diferencias en los niveles de tolerancia

* Este capítulo fue elaborado gracias al apoyo financiero de USAID – Bolivia y del Center For the Americas de Vanderbilt University. Las sugerencias y comentarios de Mitchell Seligson y de los miembros del equipo de LAPOP resultaron particularmente útiles para este trabajo. Los errores y omisiones son sólo del autor.

¹ Este proyecto de investigación fue elaborado gracias al apoyo financiero de USAID- Ecuador, del Centro de las Américas y del Rector de la Universidad de Vanderbilt. Además, el autor agradece a sus colegas del Proyecto de Opinión Pública de Latino América (LAPOP) por sus valiosos comentarios y sugerencias, y especialmente al Profesor Seligson por su apoyo incondicional y por hacer posible esta investigación.

² El punto de partida para la base teórica de una democracia estable se encuentra en el estudio de Seligson y Córdova (Seligson y Córdova 1993; Seligson 2000). De acuerdo a esta investigación, las naciones se pueden volver autoritarias si la tolerancia es baja aun cuando el apoyo al sistema es alto.



política por varios países de América Latina y el Caribe.³ Para cumplir con este objetivo, se desarrollará un índice de tolerancia política para medir la aceptación de los ciudadanos hacia los derechos de aquellas personas que constantemente critican su sistema de gobierno. Seguidamente, se analiza los factores que influyen en la tolerancia política, particularmente con enfoque al crítico rol que la educación juega para elevar los niveles de tolerancia. La última sección de este capítulo se concentra en otra dimensión de la tolerancia a la cual se la refiere como “tolerancia social” y la cual será medida por medio de la aceptación de los derechos políticos de los homosexuales. Finalmente, este capítulo concluye con las implicaciones de los resultados.

La tolerancia política

La literatura relacionada con la tolerancia política indica la dificultad que representa medirla. Por ejemplo, Stouffer (1955) se concentró en preguntas relacionadas con la disposición de los ciudadanos a extender los derechos civiles hacia aquellos que tienen diferentes puntos de vista políticos como los socialistas, ateos y comunistas. Stouffer predijo que en el futuro los niveles de tolerancia se incrementarían notoriamente. Sullivan et al. (1982) criticaron el procedimiento de Stouffer, ya que encontraron que el incremento en la tolerancia era una ilusión, porque en realidad el disgusto hacia específicos grupos (especialmente los comunistas) se redujo, mientras el nivel de intolerancia general era el mismo. Prothro y Grigg (1960) se concentraron en la tolerancia de la mayoría hacia minorías y concluyeron que las mayorías apoyaban fuertemente los principios de la tolerancia, pero fallaban con respecto a grupos de minorías específicos, por ejemplo, comunistas, negros, homosexuales. Por consiguiente, encontrar la manera más apropiada de medir la tolerancia política sigue siendo un reto para los científicos sociales (Dahl 1971 ; Gibson y Bingham 1982; McClosky 1983; Gibson 1992a ;).⁴

La ronda de encuestas del Barómetro de las Américas llevada a cabo en el 2006 por el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP) tiene su propia medida de tolerancia, la cual se la ha encontrado que es fiable en estudios previos, y que tiene también la ventaja de proveer comparaciones a través del tiempo y entre países. La encuesta del 2006 cubre cuatro aspectos de los derechos democráticos, y en lugar de enfocarse en un grupo específico, se enfoca en los derechos de las personas que constantemente “hablan mal” de la forma de su gobierno. Las siguientes preguntas se realizaron en todos los países. Las respuestas van de 1 “desaprueba firmemente” a 10 “aprueba firmemente”:

D1. Hay personas que siempre hablan mal de la forma de gobierno del Ecuador, no sólo del gobierno de turno, sino la forma de gobierno, ¿con qué firmeza aprueba o desaprueba UD. el **derecho de votar** de esas personas? Por favor léame el número de la escala:

D2. ¿Con qué firmeza aprueba o desaprueba UD. el que estas personas puedan llevar a cabo **manifestaciones pacíficas** con el propósito de expresar sus puntos de vista?

³ Los países norteamericanos han sido incluidos en la primera parte de este análisis para contrastar las diferencias en los niveles de tolerancia política, entre las democracias establecidas y las democracias emergentes.

⁴ Para estudios claves relacionados con tolerancia política, ver: (Gibson 2006) (Gibson 2005a) (Gibson 2005b) (Gibson 2002) (Gibson 1987) (Gibson 1989) (Gibson 1992b) (Gibson y Duch 1991) (Gibson y Duch 1993)

D3. ¿Con qué firmeza aprueba o desaprueba UD. que estas personas puedan **postularse para cargos públicos**?

D4. ¿Con qué firmeza aprueba o desaprueba UD. que estas personas salgan en la televisión **para dar un discurso**?

El uso de esta metodología tiene ventajas porque no excluye a aquellos que no seleccionaron a un grupo “menos aceptado”, así como tampoco vincula la respuesta a un grupo específico.⁵ Su desventaja es que únicamente se concentra en quienes siempre hablan mal de la forma de su gobierno. Una consecuencia de esta medida es que las personas que no están de acuerdo con la forma de gobierno van a ser más tolerantes hacia aquellos que piensan parecido. A pesar de sus fallas, esta serie de preguntas parece ser la más apropiada para medir la tolerancia política y su defecto se lo puede resolver fácilmente una vez que se controle por las preferencias políticas de los entrevistados (Seligson, *et al.* 2006).

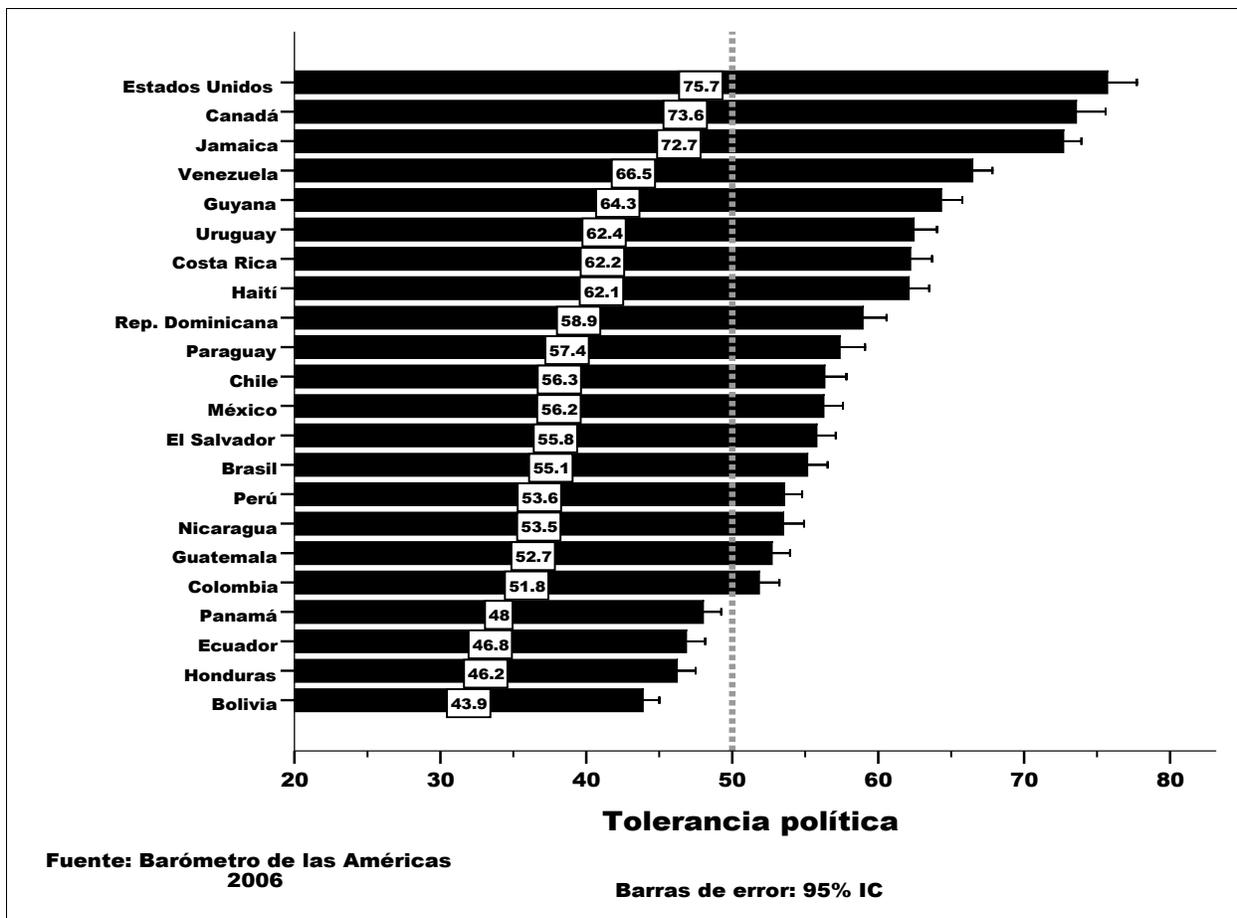


Gráfico IX-1. Tolerancia política por países

El Gráfico IX-1 indica que en una escala del 0 al 100 el promedio del nivel de tolerancia política es mucho mayor en los Estados Unidos, Canadá y Jamaica que en cualquiera de los

⁵ El actual formato convencional de los ítems de tolerancia es de preguntar a los encuestados que seleccionen “el grupo menos preferido”. En el estudio de Nicaragua de LAPOP, casi la mitad de los encuestados se negaron a seleccionar un grupo específico.



países hispanos y francófonos en este estudio. En contraste, Panamá, Ecuador, Honduras y Bolivia demuestran los niveles de tolerancia política más bajos, menores que 50 puntos en una escala de 0 a 100. Estos resultados pueden sugerir que los países que experimentan una democracia estable disfrutan niveles altos de tolerancia, posiblemente porque “cuando las libertades civiles han estado en ese lugar por períodos largos, los ciudadanos tienen más oportunidades para aplicar las normas democráticas hacia los oponentes indeseados” (Peffley y Rohrschneider 2003: 245). Por ejemplo, los Estados Unidos y Canadá han experimentado una historia larga de gobierno democrático, desde 1787 y 1867 respectivamente.⁶ Al mismo tiempo, estos resultados sugieren que a pesar que las democracias estables disfrutan niveles altos de tolerancia política, están lejos de lograr un acuerdo universal sobre la tolerancia. Así, incluso en los países que están por encima de este grupo se evidencia una cultura de intolerancia política en un segmento importante de la población (Gibson 1992b).

Otros casos en la muestra que disfrutan niveles altos de tolerancia política son Costa Rica y Venezuela⁷ que como en los casos de Canadá y los Estados Unidos, tienen la tradición democrática más larga (desde 1949 y 1959 respectivamente) en comparación a los otros casos en América Latina y el Caribe. Sin embargo, el orden de los demás países es difícil de explicar. Haití, por ejemplo, tiene niveles relativamente altos de tolerancia política, pero no tiene una tradición colonial inglesa, ni ha sido históricamente un país democrático. Por otro lado, Bolivia tiene niveles bajos de tolerancia política que podría ser por sus profundas divisiones étnicas.

¿Por qué la tolerancia política difiere a través de países?

Cabe recalcar que Jamaica (73) y Guyana (64) disfrutan niveles altos de tolerancia a pesar de su corta historia de democracia (desde 1962 y 1992 respectivamente), comparados con otros países en el estudio y sus niveles bajos de desarrollo económico y políticos similares a los de América Latina. Entonces, ¿por qué sus niveles de tolerancia política son relativamente altos? Los países de América Latina y el Caribe se han caracterizado por una larga historia de inestabilidad política y económica. Al mismo tiempo, la desigualdad generalizada ha estado siempre presente en la región (Patrice 2003). Varios investigadores argumentan que una explicación de las diferencias en el desarrollo político y económico de los países desarrollados y los que están en vías de desarrollo en las Américas es la manera en que fueron colonizados. El éxito de los países nórdicos, específicamente los Estados Unidos y el Canadá, se atribuye a su tradición protestante-inglesa que ha generado fuertes instituciones políticas y económicas (Engerman y Sokoloff 2002). Por el contrario, el subdesarrollo de los países en América Latina se atribuye a la desigualdad de la estructura institucional dejada por la conquista española (Yeager 1995).⁸

⁶ <http://www.infoplease.com/countries.html>.

⁷ *Ibíd.* Debido a varios cambios políticos y económicos que Venezuela ha experimentado en los últimos años, un análisis más profundo de la tolerancia política en este país será presentado al final de esta sección.

⁸ Se cree que el sistema de la “encomienda” que fue establecido por los españoles en América Latina ha contribuido a la “institucionalización” de la desigualdad, lo que quiere decir que todo el poder político y económico pertenece a la clase privilegiada mientras las masas obtuvieron pocos beneficios.

¿Se relacionan estos factores culturales e institucionales con las diferencias que se observan en la tolerancia política? Una característica común que comparten los Estados Unidos, Canadá, Jamaica y Guayana es su patrimonio cultural británico. Por lo tanto, un factor que se relaciona con tolerancia podría ser su herencia colonial (Seligson 1987).

Varios autores concuerdan que la cultura juega un papel importante, tanto para el desarrollo económico y la democracia (Harrison y Huntington 2000). Lawrence Harrison (1985) argumenta que América Latina es subdesarrollada e inestable porque su cultura ha sido influenciada por la cultura tradicional española que se relacionaba con valores antidemocráticos. Harrison también señala que estos valores han sido transmitidos de una generación a otra por medio de un proceso de socialización. Asimismo, Huber et al (1993) revelaron que algunas diferencias entre América Central y los países Caribeños provienen de su desarrollo durante los años 30. Según estos autores:

“La colonización británica fue importante porque ofreció una alternativa al modelo centroamericano de control del estado por los terratenientes o los militares, y de este modo una alternativa al uso de sindicatos y partidos políticos aliados. Consecuentemente, los años 30 marcaron el comienzo de una vida política organizada, y abrió el camino hacia la consolidación posterior de la sociedad civil en las Antillas, mientras que en América Central, se solidificó el modelo de la primacía del aparato del estado coercitivo y del control del estado de la represión de la sociedad civil, ejercitado ya sea por reuniones de terrateniente-militares o por los militares solamente” (79).

Por consiguiente, los altos niveles de tolerancia política en Jamaica y Guyana, pueden ser atribuidos a los efectos de su colonización. Aunque estos factores no proporcionan una explicación completa, si proporcionan una perspectiva del papel importante del colonialismo en estos países. De todas maneras, se debe realizar una investigación más a fondo con evidencia empírica para explicar las diferencias de la tolerancia política entre países.

¿Qué factores a nivel individual influyen en las diferencias de tolerancia política?

La principal pregunta de investigación en este capítulo es de explicar qué factores determinan las diferencias en los niveles de tolerancia política. Como se sugirió al comienzo de este capítulo, la tolerancia es de gran importancia porque legitima el sistema democrático, al garantizar los derechos de las minorías. Gibson (1992b) señala que “la tolerancia es importante porque está vinculada a una serie de creencias acerca de la legitimidad y lo apropiado de la expresión personal” (343). De este modo, es primordial que este estudio evalúe los factores que contribuyen a niveles de tolerancia política.

Para determinar los factores que influyen en la tolerancia política, se dividirá la muestra de los países incluidos en este estudio en tres regiones: 1) América del Norte y el Caribe; 2)



América Central; y 3) América del Sur.⁹ Se examinará las diferencias entre hombres y mujeres y sus niveles de educación. Se comienza con el rol que juega la educación para incrementar los niveles de tolerancia política, la cual conduce a una mayor aceptación de los “grupos indeseados”. Se cree que la educación es un elemento crítico porque aumenta la tolerancia política, incluso entre aquellos que tienen sentimientos negativos hacia un grupo específico (Lawrence 1976; Bobo y Licari 1989 ; Golebiowska 1995). Por consiguiente, se espera que mientras niveles altos de educación conducen a tener mayores niveles de tolerancia política, es la calidad de la educación que puede tener un impacto mayor. De igual manera, varios estudios indican que las mujeres tienen niveles de tolerancia política más bajos que los hombres. Sin embargo, existen razones para creer que la educación tendrá un impacto en la tolerancia de las mujeres y que estas diferencias entre hombres y mujeres serán mitigadas por mayores niveles de educación. Es así, que se espera que las mujeres tengan menores niveles de tolerancia política que los hombres. No obstante, mientras las mujeres obtengan mayores niveles de educación, menor serán estas diferencias con los hombres.

América del Norte y el Caribe

El Gráfico IX-2 demuestra cierta variación del patrón normal de la relación entre educación y la tolerancia política a través de los diversos países norteamericanos y caribeños. Los resultados de Canadá y los Estados Unidos¹⁰ indican que los hombres son más tolerantes que las mujeres independientemente de sus niveles de educación. Los casos restantes se conforman al patrón general, excepto que en Haití, la educación parece carecer de algún rol entre las mujeres, y la educación secundaria tiene un efecto positivo más fuerte entre los hombres. Guyana es el único caso donde el sexo no separa encuestados por niveles de tolerancia.

Cabe recalcar que no hay diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres en México, Haití, y Guyana, mientras que los Estados Unidos y Canadá¹¹ demuestran diferencias significativas en los niveles más altos de educación. Estos resultados no apoyan la idea de que las diferencias entre hombres y mujeres son mitigadas al alcanzar niveles más altos de educación. Incluso cuando las mujeres obtienen niveles altos de educación, ellas mantienen niveles menores de tolerancia comparados con los hombres. Estudios previos sugieren que las mujeres tienden a ser más conservadoras que los hombres. Ewa Golebiowska (1999) señala que “las mujeres son menos tolerantes por su débil compromiso a normas abstractas de la democracia, parcialmente debido a sus menores niveles de competencia política. Las mujeres también están menos dispuestas a tolerar a los grupos que están fuera de la corriente política dominante, porque

⁹ Los países norteamericanos están incluidos en la primera parte de este análisis, para contrastar las diferencias en los niveles de tolerancia política, entre las democracias consideradas estables y aquellas consideradas emergentes.

¹⁰ La categoría de educación primaria ha sido excluida en los gráficos de los Estados Unidos y Canadá, ya que solamente tenían 2 y 6 casos respectivamente. La categoría de “no educación” ha sido excluida en el caso de Guyana con sólo 7 casos. La razón por la cual se ha tomado esta decisión es debido a que la media no es fiable cuando la muestra es muy pequeña.

¹¹ La República Dominicana demuestra diferencias estadísticamente significativas en todos los niveles de educación con excepción del nivel superior.

perciben una mayor amenaza de dichos grupos, debido en parte a un compromiso mayor al tradicionalismo moral y a la intolerancia de la incertidumbre” (58).

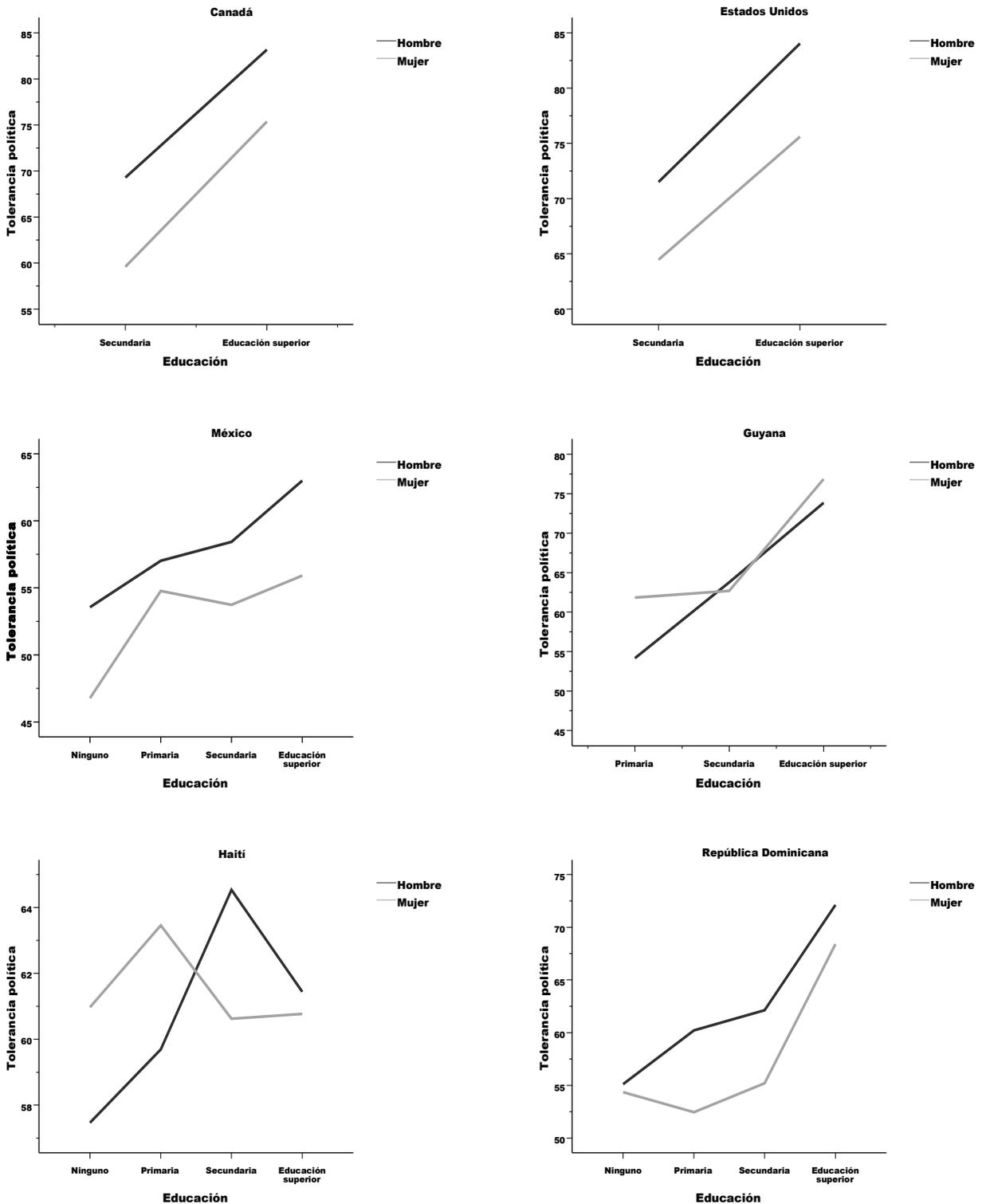


Gráfico IX-2. Tolerancia política por sexo y educación: países de la región de Norte América y el Caribe



América Central

Los Gráficos IX-3 y IX-4 ilustra un patrón más claro de la relación entre la educación y la tolerancia política en la región de América Central, en comparación con la región anteriormente examinada. Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, y Panamá demuestran que la tolerancia política se incrementa con mayores niveles de educación. Sin embargo, en Honduras, este patrón desaparece entre las mujeres.

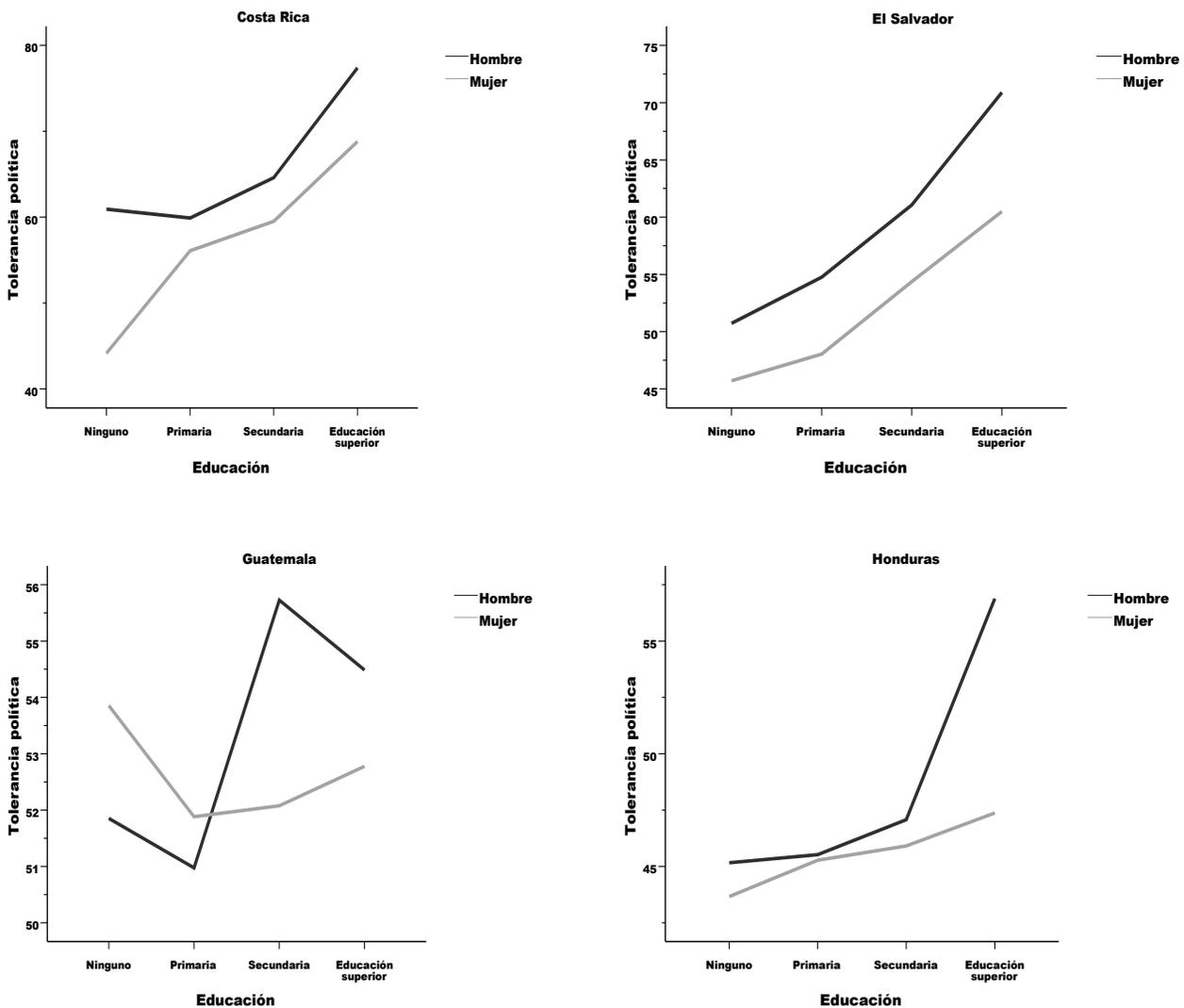


Gráfico IX-3. Tolerancia política por sexo y educación: países de la región de Centro América

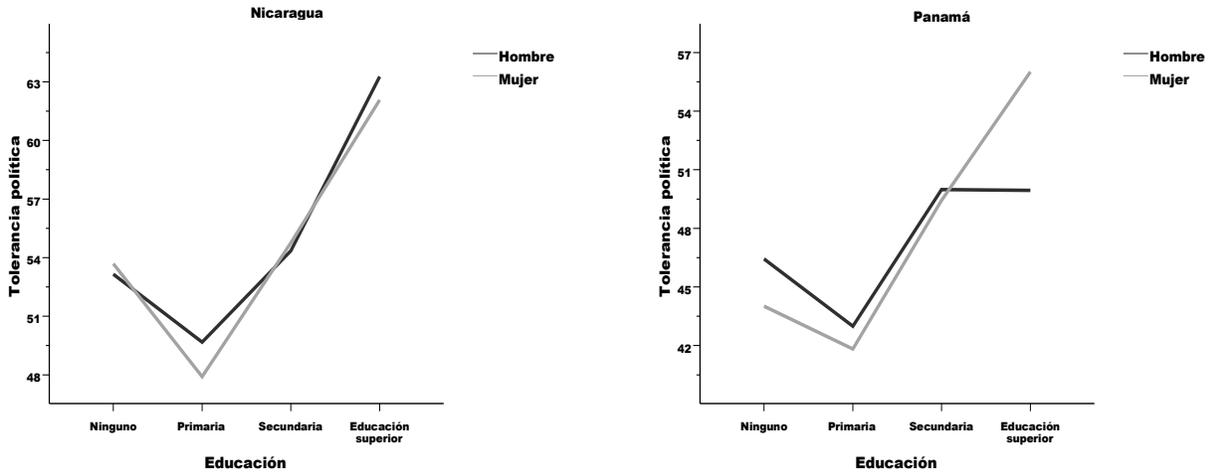


Gráfico IX-4. Tolerancia política por sexo y educación: Nicaragua y Panamá

Asimismo, Panamá (Gráfico IX-4) demuestra la relación general entre educación y tolerancia política, a excepción del nivel superior de educación, en donde las mujeres tienen mayor tolerancia que los hombres. No obstante, la diferencia no es estadísticamente significativa. El único país centroamericano que demuestra diferencias marcadas en tolerancia entre hombres y mujeres es El Salvador. Se puede especular que no solamente adquirir niveles altos de educación influye en la tolerancia política, pero es la calidad de la educación que tiene un impacto aun mayor sobre la tolerancia (Moreno y Seligson 2006). Guatemala es el único país en la región que no demuestra un patrón claro: la educación carece de rol entre las mujeres, pero entre los hombres se conforma al patrón general.

América del Sur

El Gráfico IX-5 ilustra que la tolerancia política aumenta en Colombia, Bolivia, Chile y Paraguay cuando sube el nivel de educación. Sin embargo, esta relación se mantiene entre los hombres, mientras que entre las mujeres la relación desaparece con excepción de Chile. En Venezuela, Ecuador, y Perú (Gráfico IX-6), la educación no juega ningún rol entre los hombres o entre las mujeres. Colombia es el único país de la región que demuestra diferencias estadísticamente significativas por sexo.

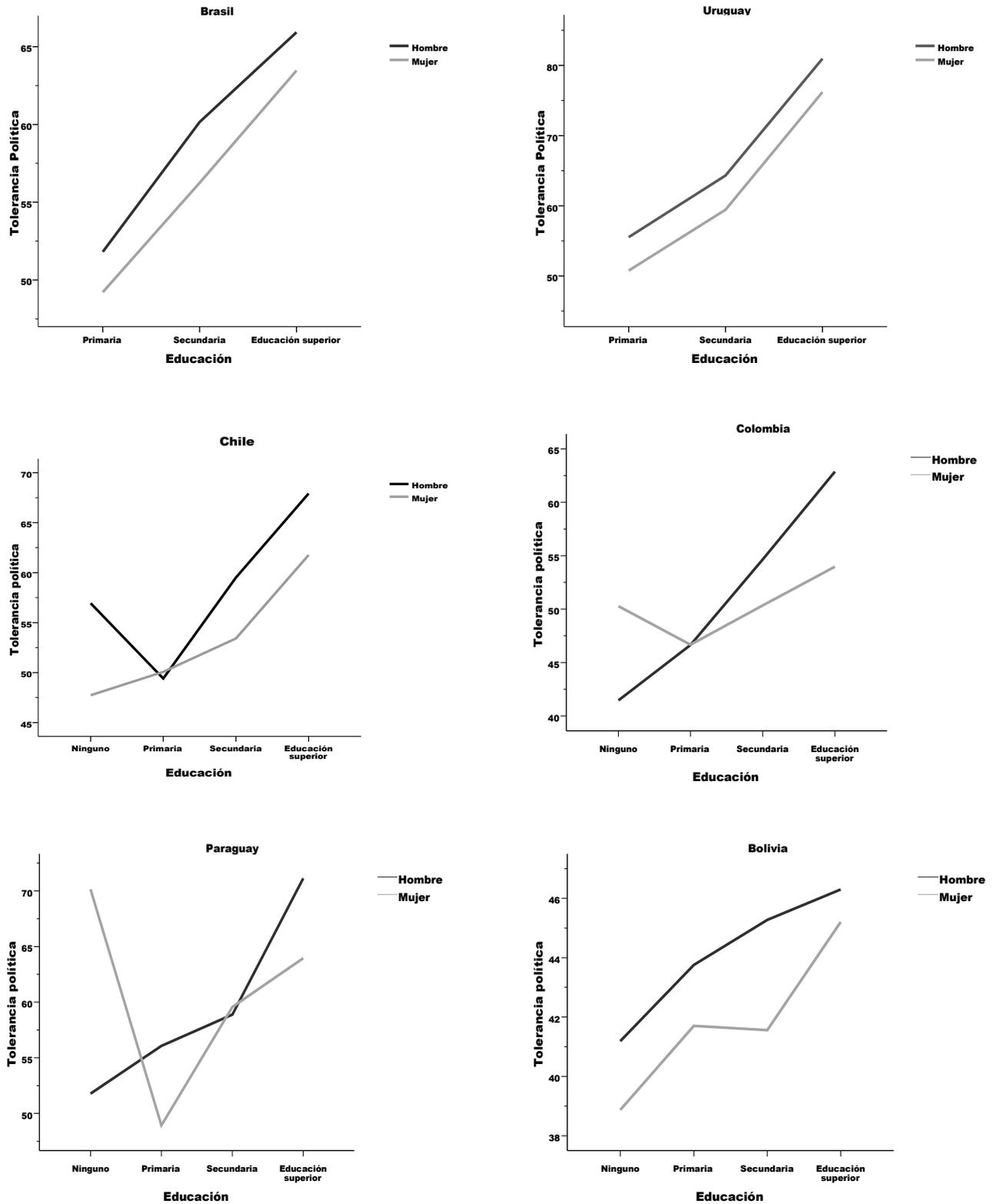


Gráfico IX-5. Tolerancia política por sexo y educación: países de la región de América del Sur

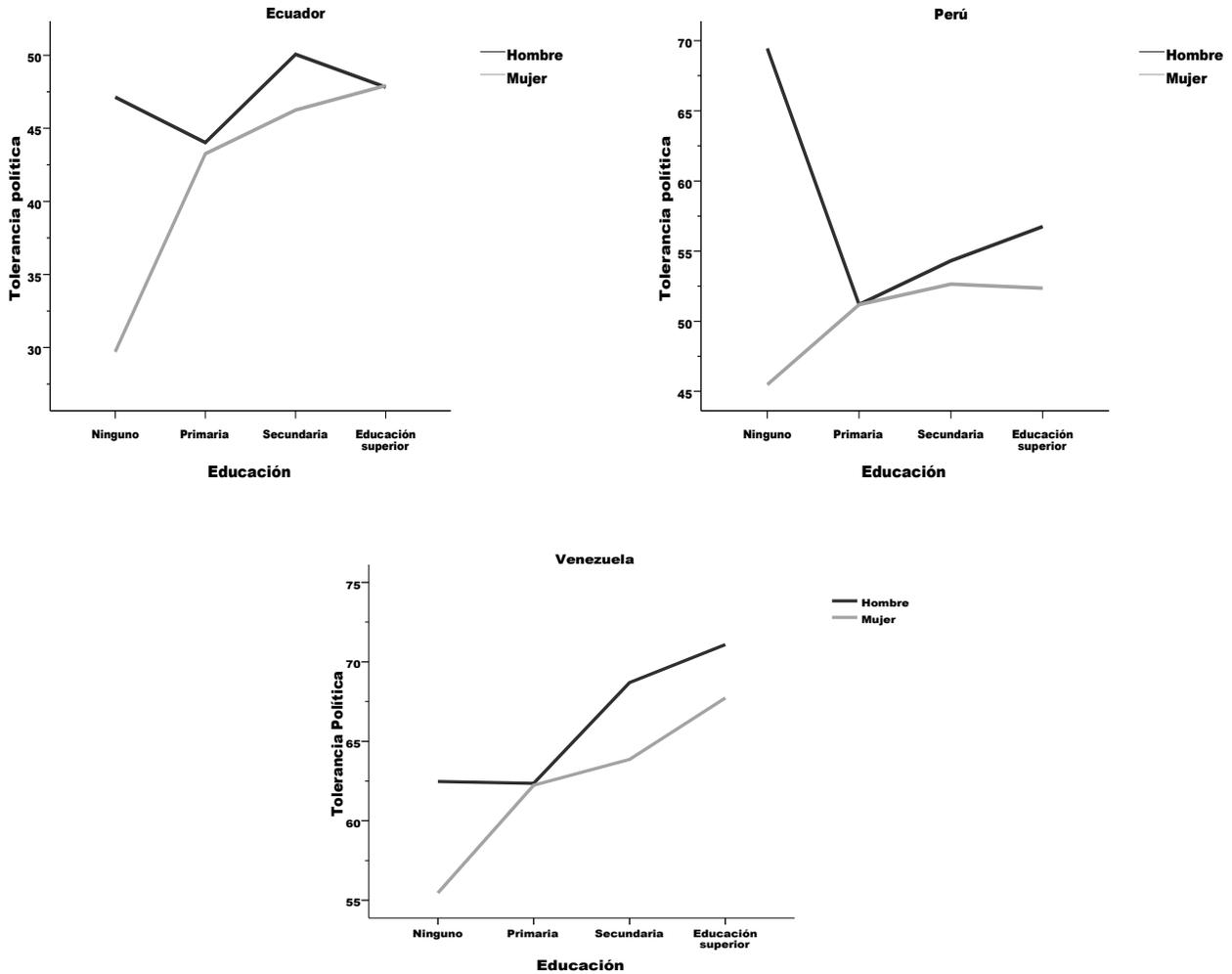


Gráfico IX-6. Tolerancia política por sexo y educación: Ecuador, Perú y Venezuela

Para recapitular, la influencia de la educación en la tolerancia política es evidente entre los países considerados como democracias estables. Por ejemplo, los Estados Unidos, Canadá y Costa Rica demuestran un impacto fuerte de la educación y la tolerancia: un alto nivel de educación se traduce en un nivel mayor de tolerancia política. No obstante, existen países considerados como democracias emergentes que también presentan diferencias marcadas entre los niveles de educación, por ejemplo, El Salvador, Nicaragua, Guyana, y la República Dominicana. También encontramos que el mismo patrón en América del Sur, excepto por Paraguay y Perú. Estos resultados sugieren que mientras mayores niveles de educación existen, se aumentan los niveles de tolerancia política. Al mismo tiempo, puede ser que la calidad de la educación sea la que tiene un impacto mayor en la tolerancia (Moreno y Seligson 2006). Además, incluso con los niveles altos de educación para las mujeres, las diferencias de tolerancia política por sexo no son eliminadas,¹² tal vez porque como lo sugieren estudios previos, las mujeres tienden a apoyar más los valores tradicionales que los hombres.

¹² En los países que demuestran diferencias estadísticamente significativas entre los niveles de educación.



Métodos y resultados

Se utilizará un modelo de regresión lineal (OLS) para estimar los efectos de los factores que explican la tolerancia política. El modelo incluye una serie de variables socio-demográficas relevantes teóricamente, así como una medida de apoyo al sistema.¹³ La variable dependiente, la tolerancia política, consiste de un índice de cuatro preguntas presentadas al comienzo de este capítulo. Asimismo, se incorpora al modelo una pregunta que mide la asistencia a reuniones de organizaciones religiosas.¹⁴ Se espera que la asistencia regular a dichas reuniones tenga un efecto negativo en la tolerancia política, ya que se relaciona con el apoyo a los valores más tradicionales. Igualmente, una medida de confianza interpersonal se incluye en el modelo donde se espera que aquellos que tengan bajos niveles de confianza interpersonal presenten bajos niveles de tolerancia política.¹⁵ Adicionalmente se incorpora una medida de aprobación al trabajo del actual presidente como control de la oposición al Gobierno de turno.¹⁶ Las variables socio-demográficas incluyen preguntas que miden la edad, riqueza, y lugar de residencia (áreas urbanas). Igualmente, se incluye una variable dicotómica que representa a las mujeres y variables dicotómicas que representan a las categorías de educación (educación primaria, secundaria y superior). Esta división de los niveles de educación puede ayudar a predecir la influencia del nivel de educación en la tolerancia política. Finalmente, se incluyen variables dicotómicas de todos los países en este estudio para tener una evaluación clara de cómo difiere la tolerancia política a través de países y a través de las regiones.¹⁷

Los resultados de la Tabla IX-1 demuestran que la educación es un factor positivo significativo que predice la tolerancia política, especialmente entre los encuestados con educación secundaria y superior. Asimismo, las mujeres tienen menores niveles de tolerancia que los hombres. El residir en áreas urbanas en lugar de áreas rurales también produce un incremento en los niveles de tolerancia política. Por razones teóricas, se incorporó en el modelo el apoyo al sistema donde se demuestra que influencia positivamente la tolerancia política. Por otro lado, la asistencia regular a organizaciones religiosas, bajos niveles de confianza interpersonal, y la aprobación al trabajo del Presidente tienen un efecto negativo en la tolerancia política. Como se mencionó anteriormente, la tolerancia política se refiere a los derechos de aquellos que constantemente “solo hablan mal” de la forma de su gobierno. Consecuentemente, este hallazgo se conforma con lo esperado ya que aquellos que aprueban el trabajo del Presidente simpatizarían menos con la oposición.

¹³ La creación del índice de “Apoyo al sistema” es presentada en otra parte de este volumen.

¹⁴ La pregunta que se utilizó para medir la asistencia a alguna organización religiosa es la siguiente: **CP6.** ¿A reuniones de alguna organización religiosa, usted asiste una vez a la semana, una o dos veces al mes, una o dos veces al año, o nunca? La variable ha sido recodificada para invertir la escala, asignando valores mayores a aquellos que asisten a organizaciones religiosas regularmente.

¹⁵ **IT1.** Ahora, hablando de la gente de aquí, ¿diría que la gente de su comunidad es (1) muy confiable, (2) algo confiable, (3) poco confiable, o (4) nada confiable?

¹⁶ **M1.** Y hablando en general del actual gobierno, diría usted que el trabajo que está realizando el Presidente es (5) muy bueno, (4) bueno, (3) ni bueno, ni malo (regular), (2) malo, (1) muy malo (pésimo)?

¹⁷ En esta sección de este capítulo, los Estados Unidos y Canadá son excluidos del análisis, ya que el estudio se enfoca en los contextos de América Latina y el Caribe.

Tabla IX-1. Factores que explican la tolerancia política: resultados de la regresión lineal

	Coeficientes no Estandarizados		Coeficientes Estandarizados		
	B	Error Std.	Beta	T	Sig.
Apoyo al sistema	.097	.008	.080	11.867	.000
Educación primaria	.158	.916	.003	.173	.863
Educación secundaria	4.040	.934	.072	4.326	.000
Educación superior	9.077	1.009	.128	8.994	.000
Mujer	-2.787	.339	-.050	-8.233	.000
Edad	-.080	.123	-.004	-.648	.517
Riqueza individual medida por la posesión de bienes de capital	.236	.104	.017	2.268	.023
Áreas urbanas	1.592	.404	.027	3.938	.000
Asistencia a organización religiosa	-.011	.004	-.016	-2.552	.011
Confianza Interpersonal	-1.062	.189	-.035	-5.621	.000
Aprobación al trabajo del Presidente	-2.756	.198	-.093	-13.916	.000
México	-4.243	1.010	-.035	-4.200	.000
Guatemala	-6.011	1.073	-.046	-5.602	.000
Salvador	-3.379	1.032	-.028	-3.275	.001
Honduras	-12.019	1.035	-.098	-11.608	.000
Nicaragua	-6.118	1.080	-.048	-5.667	.000
Panamá	-10.376	1.069	-.084	-9.702	.000
Colombia	-7.230	1.047	-.059	-6.908	.000
Ecuador	-13.684	1.045	-.111	-13.097	.000
Bolivia	-15.500	1.093	-.120	-14.178	.000
Perú	-7.407	1.071	-.060	-6.918	.000
Paraguay	-1.513	1.062	-.012	-1.424	.154
Chile	-4.352	1.023	-.036	-4.254	.000
Uruguay	1.760	1.039	.014	1.695	.090
Venezuela	4.901	1.034	.040	4.741	.000
República Dominicana	.895	1.040	.007	.860	.390
Haití	5.365	1.174	.039	4.571	.000
Jamaica	12.998	1.089	.096	11.935	.000
Guyana	4.504	1.070	.035	4.208	.000
(Constante)	45.330	1.683		26.930	.000
a Variable dependiente: tolerancia política			R Cuadrado	.096	
b País de referencia: Costa Rica			R Cuadrado ajustado	.094	
c Nivel de educación de referencia			Estimado de error	26.697	

Ecuador y Bolivia demuestran los niveles más bajos de tolerancia política. Quizás estos resultados pueden atribuirse a la inestabilidad política que estos países han experimentado en los últimos años. Por ejemplo, Ecuador ha tenido siete presidentes diferentes en un período de diez años. El más reciente, fue el Presidente ecuatoriano Lucio Gutiérrez, derrocado en Abril del 2005 después que el Congreso decretó el cierre de la Corte Suprema.¹⁸ Además, varios eventos marcados por corrupción, por ejemplo, los casos Cabrera y Zambrano, han marcado el escenario político ecuatoriano. Por lo tanto, no es de sorprenderse de los bajos niveles de tolerancia política de los ciudadanos. Con todos estos resultados, aquel que se mantiene algo inesperado es el nivel alto de tolerancia política que Venezuela demuestra a pesar de los cambios políticos y económicos substanciales que ha experimentado en los últimos años.

¹⁸ El Congreso decidió cerrar la Corte Suprema de Justicia en diciembre del 2004 y la reinstauró aproximadamente un año después.



El caso de Venezuela

Venezuela es una república federal con un sistema pluripartidista y una de las democracias más estables en América Latina desde 1959. Presidente Hugo Chávez Frías fue electo en diciembre del 1998, y asumió el poder al comienzo de 1999. En julio de 1999, una asamblea constituyente fue formada para reformular la constitución, seguida por la creación de la Asamblea Constitucional. Chávez ganó la reelección en diciembre del 2006 con 63% de los votos. En el 2007, Chávez ha tomado pasos importantes para consolidar su poder y crear un modelo socialista del estado. En enero, la Asamblea Nacional votó para permitir que Chávez gobierne por decreto por un año y medio. Pocos meses después, el Presidente cerró la principal estación opositora de televisión (RCTV). En agosto, la Asamblea Nacional votó para abolir el límite del mandato presidencial. Chávez ha propuesto varias reformas a la Constitución de 1999 que consolidaría más su poder.¹⁹

Un modelo de regresión lineal (OLS) es utilizado para tener una idea más clara de los factores que explican los niveles bastante altos de tolerancia política en este país. El modelo incluye las mismas variables presentadas en el modelo anterior en adición a un índice de sentimientos “antichavistas”.²⁰

Tabla IX-2. Factores que explican la tolerancia política en Venezuela: resultados de la regresión lineal

	Coeficientes no Estandarizados		Coeficientes Estandarizados		Sig.
	B	Error Std.	Beta	T	
Apoyo al sistema	.063	.037	.059	1.690	.091
Educación primaria	4.418	4.685	.062	.943	.346
Educación secundaria	9.750	4.562	.180	2.137	.033
Educación superior	11.381	4.635	.201	2.455	.014
Mujer	-4.759	1.447	-.088	-3.288	.001
Edad	.789	.558	.041	1.413	.158
Riqueza individual medida por la posesión de bienes de capital	-.010	.475	-.001	-.020	.984
Áreas urbanas	-1.787	3.652	-.013	-.489	.625
Asistencia a organización religiosa	.037	.018	.054	2.014	.044
Confianza Interpersonal	-1.219	.757	-.044	-1.610	.108
Aprobación al trabajo del Presidente	-3.848	.939	-.160	-4.098	.000
Sentimientos “Antichavistas”	7.838	2.052	.141	3.819	.000
(Constante)	44.112	7.315		6.030	.000
a Variable dependiente: tolerancia política			R Cuadrado		.078
			R Cuadrado ajustado		.070
c Nivel de educación de referencia			Estimado de error		26.035

¹⁹ Tarver and Frederick. 2005. *The History of Venezuela*. Greenwood Press: Westport, CT.
<http://www.venezuelanalysis.com/files/images/2007/10/Constitutional-Reform-Fact-Sheet-2007.pdf>
<http://www.infoplease.com/ipa/A0108140.html>

²⁰ Usted está (1) muy de acuerdo, (2) algo de acuerdo, (3) algo en desacuerdo, (4) muy en desacuerdo:

C1ch. Usted se siente orgulloso de estar asociado con Hugo Chávez

C3ch. Las acciones de Hugo Chávez hacen que usted le respete más

C4ch. Hugo Chávez mide las consecuencias éticas y morales de lo que hace

C5ch. Hugo Chávez expresa una visión convincente del futuro

El índice fue recodificado como una variable dicotómica: 0. A favor de Chávez 1. En contra de Chávez

Los resultados en la Tabla IX-2 indican que la educación es un factor positivo significativo que predice la tolerancia política, especialmente entre los encuestados con educación secundaria y superior. Asimismo, las mujeres tienen menores niveles de tolerancia que los hombres. El efecto positivo y significativo que se mantiene entre aquellos con sentimientos “antichavistas” incluso después de controlarlo por la aprobación al trabajo del Presidente indica que el lenguaje de las preguntas de tolerancia está teniendo un impacto. Es decir, las preguntas de tolerancia se refieren a aquellos que “solamente dicen cosas malas de nuestro sistema de gobierno.” Consecuentemente, los críticos del estilo de gobernar de Chávez son mucho más tolerantes de esos puntos de vista que aquellos que no lo critican.²¹

La tolerancia social

Esta sección se enfoca en otro tipo de tolerancia, la tolerancia social, la cual está relacionada con la aceptación de personas o grupos que son percibidos como diferentes. En otras palabras, el concepto de tolerancia social se refiere al “reconocimiento y aceptación de la identidad y singularidad de las diferencias que son visibles e irreducibles en sus portadores” (Persell, et al. 2001: 208). En esta sección del capítulo se referirá a la tolerancia social como la aceptación de aquellos grupos minoritarios que son percibidos como diferentes. La tolerancia social será medida a través del nivel de aceptación a los derechos políticos de los homosexuales. La siguiente pregunta es:

D5. Y ahora, cambiando el tema, y pensando en los homosexuales. ¿Con qué firmeza aprueba o desaprueba UD. que estas personas puedan postularse **para cargos públicos**?

Cabe señalar el contraste entre niveles altos de tolerancia política²² y los niveles bajos de tolerancia social. El Gráfico IX-7 indica que mientras ciertos países demuestran niveles relativamente altos de tolerancia social como Panamá, Colombia y Bolivia, estos países están lejos de tener los mismos niveles de tolerancia política e incluso, los dos tipos de tolerancia están lejos de estar en el de alcanzar niveles completos. Asimismo, el Gráfico IX-7 demuestra un sorprendente contraste entre los países norteamericanos y los países latinoamericanos y caribeños. Canadá y los Estados Unidos tienen, en promedio, los niveles de tolerancia social más altos con 76 y 70 puntos respectivamente, en una escala del 0 a 100, mientras que Haití refleja los niveles de tolerancia social más bajos. Al mismo tiempo, Uruguay (67) y Brasil (54) presentan niveles de tolerancia social altos en comparación al resto de países de la región. La mayoría de países tienen niveles menores a 50 puntos en una escala de 0 a 100, en contraste a solamente cuatro países que tenían niveles de tolerancia política menores de 50 puntos. El resultado más asombroso de esta sección del estudio es que los países caribeños que tienen los

²¹ Para tener un conocimiento más a fondo de la opinión pública hacia Hugo Chávez, ver: Damarys Canache, “From Bullets to Ballots: The Emergence of Popular Support for Hugo Chávez,” *Latin American Politics and Society*, Vol. 44, No. 1. (Spring, 2002), pp. 69-90.

²² Para hacer comparaciones con el gráfico que ilustra la tolerancia política a través de países, ver la página 3.



más altos niveles de tolerancia política, son los mismos que tienen los niveles más bajos de tolerancia social, al menos cuando tolerancia social es medida con respecto a los homosexuales. Se puede especular que la distancia entre tolerancia política y social entre los países caribeños, puede ser el resultado de sus orientaciones culturales históricas o incluso una reacción a la epidemia del SIDA, pero esto no se sabe a ciencia cierta.

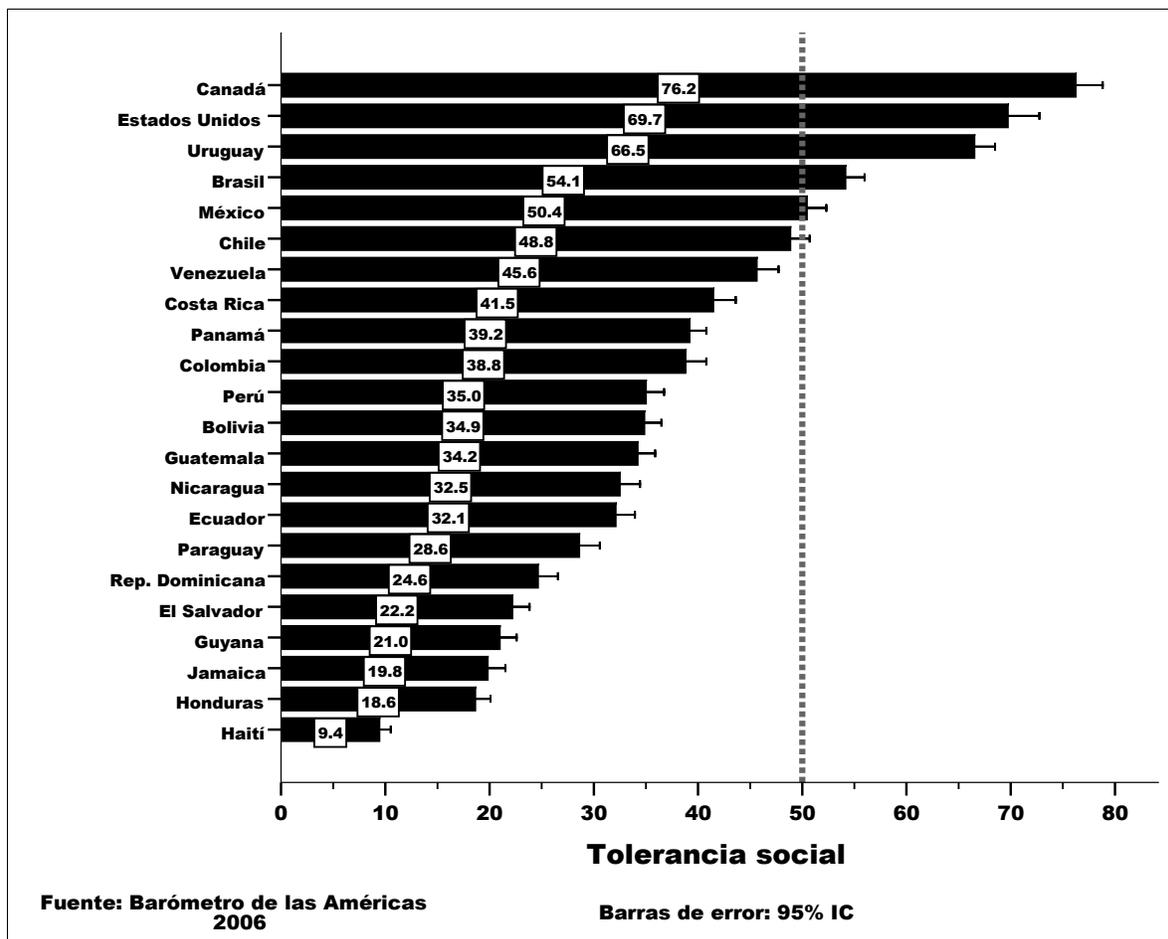


Gráfico IX-7. Tolerancia social por países

En esta sección, se procederá con el mismo análisis realizado en la primera parte de este capítulo, excepto que se incluirá una variable más al análisis: la identidad étnica. Esta variable se incluye en el modelo para determinar si la identidad étnica es un factor significativo que pueda explicar la tolerancia social. Al mismo tiempo, se espera que los países latinoamericanos tengan niveles bajos de tolerancia social por su tradición católica, la cual desapruueba la homosexualidad.

El Gráfico IX-8 ilustra que la educación aumenta los niveles de tolerancia social.²³ Sin embargo, se observa diferencias claras en los niveles de tolerancia social por identidad étnica. Los blancos y los mestizos indican niveles mayores de tolerancia social, mientras que los negros

²³ Estos resultados están basados en la muestra completa.

tienen los niveles más bajos. Sin embargo, como se demostrará en los resultados de la regresión, este es un resultado de su promedio (bajo) de niveles de educación e ingresos.

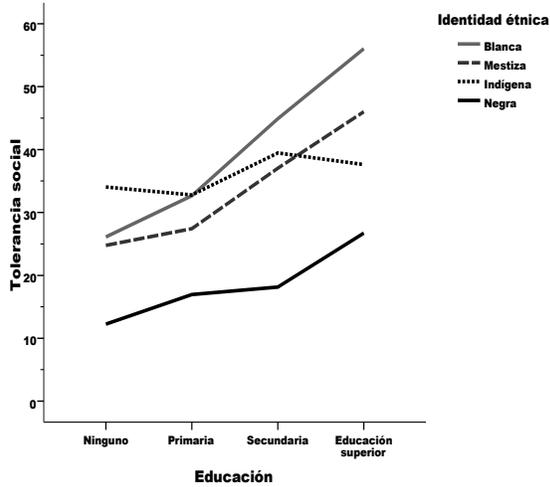


Gráfico IX-8. Tolerancia social por educación e identidad étnica

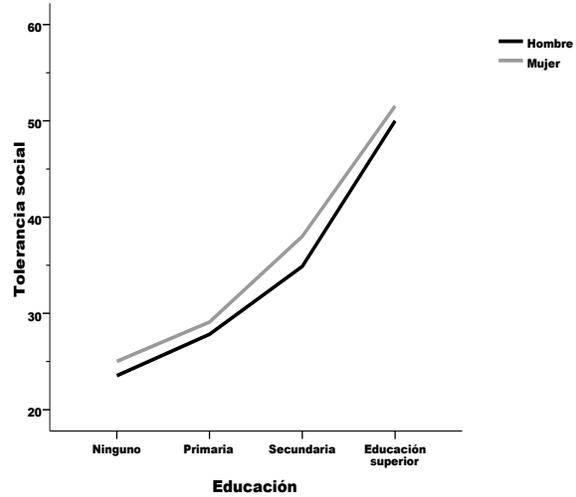


Gráfico IX-9. Tolerancia social por educación y sexo

El Gráfico IX-9 demuestra las diferencias de tolerancia social entre hombres y mujeres por nivel de educación. Aquí, los resultados son fascinantes, ya que indican que la tolerancia hacia los homosexuales es mayor entre las mujeres en comparación con los hombres, mientras que ocurre lo contrario con respecto a la tolerancia política. Se piensa que las mujeres tienen niveles mayores de tolerancia social posiblemente porque cuando se les preguntó si aprueban o desaprueban que los homosexuales se postulen para cargos públicos, las mujeres tal vez pensaron únicamente en los hombres homosexuales. En cierta forma, las respuestas de las mujeres sugieren que son menos sensibles hacia el tema de la homosexualidad. De todas maneras, la educación tiene un impacto significativo incrementando los niveles de tolerancia social entre los hombres y mujeres. Se continuará con el análisis de los factores que explican la tolerancia social a través de un modelo de regresión lineal.



Métodos y resultados

El modelo estadístico es el mismo que se presentó en la sección anterior de este capítulo. Difiere únicamente en el sentido que se incluye identidad étnica. Se incorpora cuatro variables dicotómicas representando negros, blancos,²⁴ mestizos, e indígenas. El resto de las variables son las mismas.²⁵

Tabla IX-3. Factores que explican la tolerancia social: resultados de la regresión lineal

	Coeficientes no Estandarizados		Coeficientes estandarizados		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
Apoyo al sistema	.088	.011	.055	8.408	.000
Educación primaria	-.859	1.183	-.011	-.726	.468
Educación secundaria	4.705	1.208	.063	3.896	.000
Educación superior	13.099	1.304	.140	10.049	.000
Mujer	2.949	.436	.040	6.769	.000
Mestizo	1.320	.571	.017	2.314	.021
Indígena	4.576	1.158	.026	3.952	.000
Negro	-.033	1.064	.000	-.031	.975
Edad	-.980	.158	-.039	-6.191	.000
Riqueza individual medida por la posesión de bienes de capital	.931	.134	.051	6.942	.000
Áreas urbanas	2.445	.521	.031	4.689	.000
Asistencia a organización religiosa	-.051	.005	-.059	-9.638	.000
Confianza interpersonal	-1.384	.243	-.034	-5.701	.000
Aprobación al trabajo del Presidente	-.781	.255	-.020	-3.066	.002
Guatemala	-13.608	1.405	-.078	-9.683	.000
Salvador	-26.672	1.311	-.165	-20.350	.000
Honduras	-27.180	1.321	-.168	-20.583	.000
Nicaragua	-14.152	1.369	-.084	-10.340	.000
Costa Rica	-9.764	1.318	-.061	-7.410	.000
Panamá	-7.154	1.348	-.044	-5.307	.000
Colombia	-10.378	1.320	-.063	-7.865	.000
Ecuador	-17.503	1.341	-.106	-13.054	.000
Bolivia	-13.483	1.433	-.078	-9.412	.000
Peru	-16.365	1.354	-.101	-12.089	.000
Paraguay	-17.320	1.408	-.104	-12.298	.000
Chile	-2.946	1.320	-.018	-2.233	.026
Uruguay	14.893	1.362	.091	10.938	.000
Venezuela	-7.839	1.323	-.048	-5.925	.000
Republica Dominicana	-22.853	1.327	-.139	-17.217	.000
Haiti	-33.696	1.765	-.184	-19.096	.000
Jamaica	-27.355	1.686	-.151	-16.220	.000
Guyana	-26.940	1.448	-.155	-18.599	.000
(Constante)	38.411	2.134		18.001	.000
a Variable dependiente: tolerancia social			R Cuadrado	.161	
b País de referencia: México			R Cuadrado ajustado	.160	
c Nivel de educación de referencia: ningún			Estimado std. error	34.14	

²⁴ Los blancos son el grupo de referencia

²⁵ En esta sección de este capítulo, los Estados Unidos y Canadá también son excluidos del análisis, ya que el estudio se enfoca en los contextos de América Latina y el Caribe.

Al contrario de lo que se esperaba, los resultados en la Tabla IX-3 demuestran que a pesar de que el efecto de los negros en la tolerancia social es negativa, el efecto no es significativo cuando otros factores, especialmente riqueza y educación, son incluidos. Por lo tanto, los datos no apoyan la noción que los negros tienden a rechazar a los homosexuales en particular. El nivel bajo de tolerancia social que se encontró entre los negros era en realidad una función de sus niveles bajos de educación y riqueza, y no un resultado de su identidad étnica. Otro resultado inesperado, es que los blancos tenían los mayores niveles de tolerancia social cuando se realizó la relación doble. Sin embargo, cuando se incluyen en la regresión lineal y se controlan por variables socio-demográficas y otras variables teóricamente relacionadas, otras identidades étnicas expresan mayor tolerancia social que los blancos, especialmente los individuos que se identifican como indígenas. Los grupos indígenas tienen menos acceso a la educación, por consiguiente, se habría esperado que este grupo tenga los niveles más bajos de tolerancia social. No obstante, los resultados demuestran que al ser controlados por educación y sobretodo SES, la intolerancia social es menor entre los indígenas que entre los blancos. Se puede argumentar que sus niveles de tolerancia social reflejan una aceptación mayor hacia los otros como resultado de haber sido víctimas de la intolerancia. En otras palabras, ya que los indígenas mismos han experimentado la intolerancia, están más dispuestos a aceptar a otros. Aún así, se necesita una investigación más a fondo para generar evidencia empírica que explique las razones por las cuales los grupos indígenas demuestran los niveles más altos de tolerancia social.

Otros resultados presentados en la Tabla IX-3 indican que los encuestados que residen en zonas urbanas, en lugar de zonas rurales, tienen más tolerancia social. Asimismo, las mujeres tienen mayores niveles de tolerancia social que los hombres, una vez que han sido controlados por educación, riqueza, y otras variables. Igualmente, el apoyo al sistema tiene un efecto positivo sobre la tolerancia social. Por otra parte, la asistencia regular a reuniones de organizaciones religiosas, bajos niveles de confianza interpersonal y la aprobación al trabajo del Presidente actual tienen un efecto negativo sobre tolerancia social. Como se mencionó anteriormente, aquellos que asisten regularmente a organizaciones religiosas tienden a ser más conservadores. Una vez más, la educación superior juega un rol importante. Hay un contraste marcado entre los efectos de la educación secundaria y superior sobre la tolerancia social. A pesar de que la educación secundaria tiene un efecto positivo y significativo sobre la tolerancia, el efecto de la educación superior es bastante mayor. Estos resultados reafirman la noción de que la educación es un factor crítico en los niveles de tolerancia social y política.

Conclusiones

En este capítulo se ha realizado una comparación a través de varios países en donde se demostró que Jamaica, Guyana, y Haití, en comparación con otros países latinoamericanos y caribeños disfrutaban de niveles bastante altos de tolerancia política, a pesar de su relativa corta historia democrática y en los casos de Guyana y Haití, niveles bajos de desarrollo económico y político comparados con varios países en este estudio. Estos resultados indican que tal vez la colonización británica y francesa impuso ciertas normas y valores que favorecen el desarrollo de la tolerancia política en estos países. Por otra parte, estos países presentan los niveles más bajos



de tolerancia social. Este estudio también encontró que en Venezuela, los “antichavistas” son aquellos que tienen los niveles más altos de tolerancia política reflejando una aceptación mayor hacia los críticos del sistema. No obstante, el resultado más importante de este capítulo, es el rol crítico que juega la educación en los niveles de tolerancia social y política: mientras más alto el nivel de educación, más alto es el nivel de la tolerancia. Por lo tanto, si la tolerancia es un objetivo importante de la democratización, los gobiernos deberían promulgar políticas que aumenten la cantidad y calidad de sus sistemas educativos, de manera que la tolerancia aumente y a la vez que a cambio ayude a garantizar que los derechos de las minorías permanezcan seguros.

Referencias

- Bobo, Lawrence y Frederick C. Licari. "Education and Political Tolerance: Testing the Effects of Cognitive Sophistication and Target Group Affect." *The Public Opinion Quarterly* 53, no. 3 (1989): 285-308.
- Dahl, Robert A. *Polyarchy: Participation and Opposition*. New Haven: Yale University Press, 1971.
- Engerman, Stanley L. y Kenneth L. Sokoloff. "Factor Endowments, Inequality, and Paths of Development Among New World Economies." *Economia* 3, no. 1 (2002): 41-109.
- Gibson, James L. "On the Nature of Tolerance: Dichotomous or Continuous?" *Political Behavior* 27 (2005a): 313-23.
- Gibson, James L. "Homosexuals and the Ku Klux Klan: A Contextual Analysis of Political Tolerance." *Western Political Quarterly* 40 (1987): 427-48.
- . "The Structure of Attitudinal Tolerance in the United States." *British Journal of Political Science* 19 (1989): 562-70.
- . "Alternative Measures of Political Tolerance: Must Tolerance Be "Least-Liked?"" *American Journal of Political Science* (1992a): 562-71.
- . "The Political Consequences of Intolerance: Cultural Conformity and Political Freedom." *American Political Science Review* 86, no. 2 (1992b): 338-56.
- . "Becoming Tolerant? Short-Term Changes in Russian Political Culture." *British Journal of Political Science* 32 (2002): 309-34.
- . "Parsimony in the Study of Tolerance and Intolerance." *Political Behavior* 27 (2005b): 339-45.
- . "Enigmas of Intolerance: Fifty Years after Stouffer's Communism, Conformity, and Civil Liberties." *Perspectives on Politics* 4 (2006): 21-34.
- Gibson, James L. y Richard D. Bingham. "On the Conceptualization and Measurement of Political Tolerance." *The American Political Science Review* 76, no. 3 (1982): 603-20.
- Gibson, James L. y Raymond M. Duch. "Elitist Theory and Political Tolerance in Western Europe." *Political Behavior* 13 (1991): 191-212.
- . "Political Intolerance in the USSR: The Distribution and Etiology of Mass Opinion." *Comparative Political Studies* 26 (1993): 286-329.
- Golebiowska, Ewa. "Individual Value Priorities, Education, and Political Tolerance." *Political Behavior* 17, no. 1 (1995): 23-48.
- . "Gender Gap in Political Tolerance." *Political Behavior* 21, no. 1 (1999): 43-66.
- Harrison, Lawrence E. *Underdevelopment Is a State of Mind: The Latin American Case*. Boston: University Press of America, 1985.
- Harrison, Lawrence E. y Samuel P. Huntington, eds. *Culture Matters: how values shape human progress*. New York: Basic Books, 2000.
- Huber, Evelyne, Dietrich Rueschemeyer y John D. Stephens. "The Impact of Economic Development on Democracy." *Journal of Economic Perspectives* 7, no. 3 (1993): 71-85.
- Lawrence, David G. "Procedural Norms and Tolerance: A Reassessment." *The American Political Science Review* 70, no. 1 (1976): 80-100.



- McClosky, Herbert y Alida Brill. *Dimensions of Tolerance: What Americans Believe about Civil Liberties* New York: Russell Sage Foundation, 1983.
- Moreno, Daniel y Mitchell Seligson. "Educación y tolerancia política en Bolivia." En *La cultura política de los bolivianos. Aproximaciones cuantitativas. Educación y tolerancia política en Bolivia*, compilado por Mitchell Seligson y Daniel Moreno. Cochabamba: Ciudadanía-LAPOP-USAID, 2006.
- Patrice, Franko. *The Puzzle of Latin American Economic Development*. Compilador: 2nd. New York: Rowman & Littlefield Publishers, Inc, 2003.
- Peffley, Mark y Robert Rohrschneider. "Democratization and Political Tolerance in Seventeen Countries: A Multi-Level Model of Democratic Learning." *Political Research Quarterly* 56, no. 3 (2003): 243-57.
- Persell, Caroline H., Adam Green y Liena Gurevich. "Civil Society, Economic Distress, and Social Tolerance." *Sociological Forum* 16, no. 2 (2001): 203-30.
- Prothro, J.W. y C.W. Grigg. "Fundamental Principles of Democracy: Bases of Agreement and Disagreement." *The Journal of Politics* 22 (1960): 276-94.
- Seligson, Mitchell A. "Costa Rica and Jamaica." En *Competitive Elections in Developing Countries*, compilado por Myron Weiner y Ergun Ozbudun. Durham, North Carolina: Duke University Press 1987, 1987.
- Seligson, Mitchell A. y Ricardo Córdova. *Perspectivas para una democracia estable en El Salvador*. San Salvador: IDELA, 1993.
- Seligson, Mitchell A., Daniel Moreno, Diana Orcés y Vivian Schwarz-Blum. *Auditoria de la democracia: Informe Ecuador 2006*. Quito: Cedatos-Gallup International-LAPOP-USAID, 2006.
- Stouffer, Samuel. *Communism, Conformity, and Civil Liberties*. New York: Doubleday, 1955.
- Sullivan, John L., James Piereson y George E. Marcus. *Political Tolerance and American Democracy*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.
- Yeager, Timothy J. "Encomienda or Slavery? The Spanish Crown's Choice of Labor Organization in Sixteenth-Century Spanish America." *The Journal of Economic History* 55, no. 4 (1995): 842-59.

Parte III. Desafíos para el estado de derecho

X. El impacto del crimen violento en la cultura política de América Latina: El caso especial de Centroamérica

José Miguel Cruz

Resumen

El objetivo del presente capítulo es analizar el impacto que tiene la violencia criminal, medida tanto en términos de victimización como en términos de inseguridad, sobre el apoyo a la democracia en América Latina y particularmente en Centroamérica, tomando en consideración el grado de consolidación y estabilidad de la democracia que impera en dichos países. En otras palabras, la hipótesis general que guía el presente trabajo es que la delincuencia erosiona la cultura política democrática en los países latinoamericanos sobre todo tomando en cuenta que muchos de esos países tienen una historia de relativa reciente democratización, como es el caso de la mayoría de países centroamericanos: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá. Los resultados indican que aunque la victimización y la inseguridad juegan un papel importante en la erosión de la cultura política democrática en algunos casos, también es necesario considerar las percepciones que los ciudadanos poseen sobre el desempeño del gobierno en el área de la seguridad pública. Esta condición, al lado de las anteriores, parece tener un peso más importante en algunos países que están en proceso de consolidar la democracia.

A inicios del siglo XXI, la violencia se ha convertido en un gran problema social a nivel mundial. De acuerdo al *Reporte Mundial de Violencia y Salud*, publicado por la Organización Mundial de la Salud (Krug et. al. 2002), aproximadamente 1.6 millones de personas pierden sus vidas cada año debido a la violencia: la violencia es una de las causas más frecuentes de mortalidad en personas entre 15 y 44 años de edad. Con la excepción del África Subsahariana, la región de América Latina y el Caribe se destaca como una de las más violentas en el mundo. Pero mientras África tiene que lidiar con la violencia producida por guerras civiles y conflictos étnicos, las principales fuentes de violencia de América Latina son la violencia social y la criminalidad.

De acuerdo a las mismas estadísticas publicadas por la OMS, la tasa de homicidios para los países de América Latina durante los años noventa fue de 27 muertes por cada 100,000 habitantes, casi el doble del promedio global de 13 muertes por cada 100,000 habitantes (Krug et al. 2002). En este contexto, Centroamérica ha surgido en años recientes como la subregión más violenta de América Latina. Con tasas de homicidios que oscilan entre las 45 y las 55 muertes por cada 100,000 habitantes, los países de El Salvador, Guatemala y Honduras están considerados en años recientes como las sociedades con los índices más graves de la violencia criminal en el mundo (Gaviria y Pagés, 1999).

Sin embargo, muy poco se ha estudiado el impacto político de la violencia común o delincuencia. Desde el punto de vista de la ciencia política, la violencia ha sido siempre



examinada bajo la modalidad de violencia política, esto es, como herramienta para acceder o disputar poder político o como catalizador de las fuerzas que luego se convierten en el Estado (Bates 2001; Tilly 2003), pero, con excepción de algunos trabajos o compilaciones recientes (ver Garland et al. 2003; Karstedt 2006), muy pocas veces se ha estudiado el impacto de la violencia no política sobre lo político, sobre todo en América Latina. Esto ha sido así porque, históricamente, la supervivencia de las democracias latinoamericanas se ha considerado tomando en cuenta más el desempeño económico y social de sus regímenes, y no la capacidad de generar seguridad pública.

El auge de la violencia criminal en diversas sociedades alrededor del mundo ha llamado la atención sobre los posibles efectos de la misma sobre los procesos políticos y, particularmente, sobre la democracia (Bodemer, 2003). Con la excepción de algunos estudios recientes sobre el impacto de la violencia criminal en la democracia y en la cultura política (Pérez, 2003; Seligson y Azpuru; Cruz, 2003; Cruz, 2000), la mayoría de trabajos académicos se concentran más bien en el estudio del impacto de la democracia sobre el funcionamiento del sistema de justicia criminal o sobre la violencia criminal en sí misma (Karstedt y Lafree, 2006). Por lo tanto, se sabe muy poco sobre el impacto que tienen el crimen y la violencia común sobre la democracia y, sobre todo, los procesos de democratización, como los que atraviesan muchos países latinoamericanos desde hace algunos años.

Esto tiene mayor relevancia si se considera que la violencia es cada vez más un problema acuciante para muchas de las democracias, nuevas o estables (LaFree y Tseloni, 2006). El objetivo del presente capítulo es analizar el impacto que tiene la violencia criminal, medida tanto en términos de victimización como en términos de inseguridad, sobre el apoyo a la democracia en América Latina y particularmente en Centroamérica, tomando en consideración el grado de consolidación y estabilidad de la democracia que impera en dichos países. En otras palabras, la hipótesis general que guía el presente trabajo es que la delincuencia erosiona la cultura política democrática en los países latinoamericanos sobre todo tomando en cuenta que muchos de esos países tienen una historia de relativa reciente democratización, como es el caso de la mayoría de países centroamericanos: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá.

Para llevar a cabo este análisis, se echa mano de la base de datos de las encuestas latinoamericanas del Barómetro de las Américas de la Universidad de Vanderbilt. El mismo recoge una amplia variedad de opiniones y actitudes de los ciudadanos veinte países de América Latina y el Caribe sobre democracia, política, corrupción, desempeño de las instituciones, tolerancia, violencia criminal, confianza ciudadana y otros¹.

Aparte de las consideraciones teóricas y del repaso sobre las condiciones de la violencia en América Latina, el presente trabajo tiene dos grandes partes en lo que respecta a la presentación de los resultados. La primera se concentra en analizar la relación entre la violencia criminal y las actitudes que soportan la democracia en los países de América Latina como un todo; esto se hace llevando a cabo análisis multivariados con los resultados de todos los países en

¹ Los países incluidos en este análisis son: Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Haití, Honduras, Guatemala, Guyana, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

la base general del Barómetro de las Américas 2006/07. La segunda parte se concentra específicamente en los países de Centroamérica. El objetivo fundamental del trabajo es por tanto dilucidar el impacto de la violencia criminal allí en donde el crimen es particularmente alto.

Condiciones para la democracia, cultura política, legitimidad y violencia

Cuando se habla de “condiciones para la democracia” se habla de aquellas circunstancias que hacen que un régimen funcione y que lo previenen de ser derrocado por un régimen autoritario (Rustow 1999; Linz 1989). El punto acá no es analizar los factores que llevan al establecimiento de una democracia, o por lo menos al inicio de una transición democrática; sino más bien, aquellos factores que una vez efectuada la transición, ayuden a la sostenibilidad y el desarrollo de los regímenes democráticos. Este, por ejemplo, es el caso de los regímenes centroamericanos con la excepción de Costa Rica. Hay dos categorías generales de explicaciones sobre las circunstancias que hacen funcionar a la democracia: primero, aquellas que se enfocan a las situaciones macroeconómicas y sociales, las cuales se vinculan con el desempeño económico y político de los regímenes; y segundo, la existencia de cierto conjunto de valores, normas y actitudes en los ciudadanos que apoyan el desempeño del régimen. Esta última tiene que ver con la cultura política².

No es el objetivo de este trabajo concentrarse en el impacto que el desempeño económico de los regímenes tiene sobre la democracia. La idea básica de los trabajos que se enfocan en ese ámbito (Lipset 1960/1996; Przeworski 1996; Muller y Seligson 1986) es que la sociedad que tiene un buen desempeño en términos económicos (por ejemplo, crecimiento, reducción de las desigualdades, bienestar económico) es menos propensa a enfrentar la ruptura del régimen, y tiene más posibilidades de que su democracia “prosperes”. El desempeño económico es, desde esta perspectiva, una condición importante para la supervivencia de un régimen, sobre todo si éste es democrático.

Pero la postura analítica en la que, por el contrario, sí se concentra este trabajo, hace énfasis en el rol de factores subjetivos y socioculturales en la sostenibilidad y preservación de la democracia; en otras palabras, hace referencia a la cultura política. El concepto de cultura política fue desarrollado originalmente por Almond y Verba (1963), quienes la definieron como el conjunto de orientaciones psicológicas hacia la política de los miembros de una sociedad. Esto fue retomado posteriormente por Lipset (1994, p.3), quien aseguró que “la democracia requiere de una cultura de apoyo, de la aceptación por parte de la ciudadanía y de las elites políticas del principio que fundamenta la libertad de expresión, comunicación, asociación, religión, de los derechos de los partidos de asociación, del gobierno de la ley, de los derechos humanos y otros similares.

² Existe otro tipo de explicaciones que se relacionan con las estructuras políticas y sociales (ver, por ejemplo, Lijphart, citado por Rustow, 1999), y con condiciones históricas, tal y como lo señaló Karl (1990). Sin embargo, este tipo de explicaciones se ajustan mejor a las transiciones que a los procesos de democratización. Para examinar unos excelentes enfoques sobre los regímenes centroamericanos desde una perspectiva histórica, ver Paige (1996) y Mahoney (2001).



Sin embargo, en su relación empírica con la democracia y la democratización, la noción de la cultura política no es tan homogénea entre los investigadores, ya que implica diversos tipos de valores y actitudes. Acá, es posible identificar tres grandes perspectivas sobre la relación entre cultura política y la democratización. La primera se concentra en los valores culturales, y básicamente argumenta que una democracia estable depende de una vida satisfactoria, de la confianza interpersonal y de la resistencia de la población al cambio revolucionario. De acuerdo a Inglehart (1988), estos valores pueden surgir del resultado de un crecimiento económico estimulado por el capitalismo o como el resultado de factores históricos relacionados con la religión y la ideología. La segunda postura viene de la teoría del capital social de Putnam (1993), que menciona que los sistemas de normas de reciprocidad social, confianza social y redes sociales de participación son los factores importantes para el funcionamiento de la democracia. Esto implica que la democracia funcionará y durará en las sociedades en las que las personas confían los unos de los otros, participen en organizaciones y tengan valores de reciprocidad social. El último punto de vista teórico aborda el vínculo entre cultura política y democracia enfocándose en el tema de la legitimidad y en el apoyo político al régimen. Su desarrollo se origina del trabajo de Lipset sobre eficacia y legitimidad, y ha sido desarrollado empíricamente por varios autores (Diamond 1993; Seligson 2000; Norris 1999).

De acuerdo con esta perspectiva, que constituye el marco fundamental para este trabajo, un régimen democrático sólo puede subsistir cuando la población —masas y elites— tienen la certeza que las instituciones políticas existentes son las más adecuadas para la sociedad (Lipset 1960); cuando la mayor parte de la población ve a este régimen como “*the only game in town*” (Linz y Stepan 1996), o “el único juego en la ciudad”. Esta certeza no se crea de un día para otro. En los regímenes democráticos, los cuales no dependen de la fuerza, la legitimidad es el producto del desempeño del sistema, emana de las percepciones de satisfacción de las necesidades básicas de la mayor parte de la población, y está relacionada con el comportamiento real de las autoridades y de los grupos de poder (Lipset 1960). Como lo señaló Diamond (1993, p. 13): la legitimidad “se deriva, en parte, del desempeño de un régimen democrático a lo largo del tiempo, pero también se ve influenciada (especialmente en la vida temprana del régimen) por la manera en que instituciones democráticas específicas se articulan con las formas tradicionales y legítimas de autoridad, y luego por la socialización, la expansión de la educación y otros tipos de cambio social y cultural”.

Lo anterior implica un par de consideraciones, las cuales son relevantes en el estudio de América Latina y, particularmente, en los casos centroamericanos. Primero, el desempeño del régimen es un desafío particular en las sociedades que están aprendiendo, por primera vez, sobre cómo funciona un régimen democrático. Debido a que no hay memorias personales o, incluso, institucionales, sobre cómo funciona la democracia, o que la misma se ha desvanecido entre las nuevas generaciones, la presión por el logro de resultados es excepcionalmente crítica, especialmente cuando se concibe el vínculo entre la democracia y la satisfacción de necesidades, como es el caso en América Latina (Moreno 2001). Segundo, en sociedades con una larga tradición autoritaria, como en el caso de Centroamérica, las fuentes tradicionales de autoridad están relacionadas con el uso abierto de la fuerza y con las instituciones que la administran, esto es, el ejército y la policía (Holden 1996). Por esta razón, el desempeño del régimen, que constituye la base para la legitimidad, no sólo es evaluado por el crecimiento económico y la distribución de la riqueza, como lo propuso Lipset originalmente. También se construye sobre

las evaluaciones de las reformas sociales, sobre los gobiernos íntegros y transparentes, con respeto y conservación de las reglas democráticas del juego; y, dentro del tema de este trabajo, sobre la capacidad de mantener el cumplimiento de la ley y el orden (Diamond 1993).

La violencia que predomina ahora en los países de Latinoamérica, especialmente en los países centroamericanos puede afectar la cultura política necesaria para que estas democracias sobrevivan. Y puede afectarla de diversas formas. En primer lugar, puede erosionar las actitudes que brindan legitimidad al régimen (Pérez 2003; Seligson y Azpuru 2004; Cruz 2003); pero también, la violencia erosiona el capital social, esto es, la confianza interpersonal, la confianza en las instituciones y las actitudes que favorecen la participación ciudadana que es necesaria para la construcción y el mantenimiento de la democracia (Karstedt y LaFree 2006; Sullivan y Transue 1999). Y además, la violencia promueve apoyo a respuestas de tipo autoritario que, consecuentemente, debilitan la democracia (Kurtenbach, 2003). La inseguridad y el miedo a la violencia que impera en sociedades con altos niveles de criminalidad o que se perciben a sí mismas con altos niveles de violencia produce ciudadanos ansiosos que, a su vez, se convierten en “malos demócratas” (Loader 2006, p. 216). La violencia estimula el apoyo ciudadano a las respuestas represivas que muchas veces vulneran el Estado de derecho, el cual es fundamental para el funcionamiento de una democracia estable.

Aunque la literatura sobre violencia común y democracia es limitada³, usualmente se ha enfocado al impacto del crimen en el desempeño de las instituciones y en el establecimiento del estado de derecho (ver Méndez et al. 1999; Agüero y Stark 1998). Más que ver el impacto en la legitimidad pública, la mayoría de los estudios se han concentrado en analizar el impacto de la violencia e inseguridad en el capital social y la tolerancia, asumiendo éstos como valores fundamentales para el funcionamiento democrático (Moser y Holland 1998; Moser y McIlwaine 2001).

Por todas estas razones, y tomando en cuenta la escasez de estudios empíricos que vinculen la violencia y la inseguridad ciudadana con el apoyo al sistema, este trabajo pretende probar la asociación teórica y empírica entre cultura política de apoyo a la democracia y violencia común en los países de América Latina, pero particularmente los países centroamericanos, retomando el marco analítico propuesto por Cruz (2000). En otras palabras: la violencia y la inseguridad erosionan el apoyo al sistema, porque, entre otras razones, reducen la credibilidad en las instituciones del sistema, y porque, dadas las características de la violencia de alterar el orden público, dan lugar a actitudes que apoyan a los regímenes autoritarios alternativos.

Esto no quiere decir que la violencia y la inseguridad son los únicos factores que generan falta de legitimidad y apoyo al régimen democrático. Tampoco sería correcto decir que la violencia es necesariamente el factor más importante en la erosión de las condiciones que soportan o que conducen a la democracia. No obstante, no sería incorrecto decir que la violencia y la inseguridad pueden jugar un rol fundamental en la desestabilización de los procesos democráticos al debilitar la legitimidad, el capital social y el Estado de derecho, entre otras cosas.

³ La mayor parte de la literatura que vincula los conceptos de violencia y democracia se enfoca a la violencia política, y no al crimen o a la violencia común.



Específicamente, este trabajo parte del marco teórico propuesto por Seligson (2000), según el cual elevados niveles de apoyo al sistema y una extendida actitud de tolerancia política entre la población son condiciones fundamentales para el mantenimiento y la supervivencia de una democracia estable. Por lo tanto, en las siguientes páginas se busca establecer el impacto de la violencia criminal sobre la combinación de esas actitudes que soportan una democracia estable.⁴

La violencia criminal en América Latina

A pesar de que el promedio del crimen en América Latina es el más alto del mundo, la violencia en Latinoamérica difiere sustancialmente entre los países y también dentro de los países. Por muchos años, Colombia ha sido considerado como el país más violento de la región, con tasas de homicidios superiores a las 80 muertes por 100,000 habitantes⁵, mientras que Chile y Uruguay tienen tasas inferiores a 5 muertes por 100,000 personas (De Mesquita Neto 2002). Con el fin de los regímenes autoritarios y las guerras civiles, los países latinoamericanos no sólo “descubrieron” nuevas formas de violencia, sino que también sus instituciones comenzaron a desarrollar sistemas de registro que revelaron la magnitud real del problema de violencia.

De acuerdo a un estudio del Banco Mundial (Moser, Winton y Moser, 2004), las tasas de homicidios en la región latinoamericana aumentaron un 50% desde la década de los ochenta y la mayoría de víctimas de la violencia son jóvenes entre 15 y 25 años de edad. El estudio señala que los crecientes niveles de violencia han agravado los problemas sociales y políticos, al tiempo que han generado grandes costos económicos para algunos de los países latinoamericanos.

Algunos países comenzaron a ocupar puestos altos en las estadísticas regionales de violencia y crimen en años recientes. El Salvador, Guatemala, y Honduras publicaron información que los ubicó en los mismos niveles que Colombia y algunas ciudades del Brasil. Un estudio apoyado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de mediados de los noventa encontró que El Salvador había tenido tasas de homicidio superiores a las 100 muertes por 100 000 habitantes (Cruz y González 1997) entre los años 1994 y 1997. Otra publicación del Banco reportó que en los años siguientes a los Acuerdos de Paz, Guatemala alcanzó tasas de casi 150 asesinatos violentos por 100,000 habitantes (Buvinic et al. 1999). Aunque es probable que algunas de estas cifras estén sobreestimando el problema de la violencia, como consecuencia de las deficiencias en los métodos de registro (CIEN, 2002; Aguilar, 2001), lo cierto es que estos

⁴ Se ha optado por seguir esta ruta en lugar de medir simplemente el impacto sobre el apoyo al sistema político porque en este último caso puede darse que las personas apoyen al sistema político predominante, pero no por ello necesariamente apoyen un régimen democrático. El uso del modelo de Seligson, el cual combina apoyo al sistema y tolerancia política, permite aproximarse mejor a la cultura política inequívocamente democrática. Por otro lado, este método ofrece también una ventaja sobre la posibilidad de medir el apoyo a la democracia usando un solo ítem del cuestionario del Barómetro (como por ejemplo el ítem ING4: “Puede que la democracia tenga problemas pero es mejor que cualquier otra forma de gobierno”). El uso del modelo implica la utilización de una medida más compleja y estandarizada y da menos lugar al tipo de sesgo que es frecuente en el uso singular de ítems.

⁵ Sin embargo, en los últimos años, Colombia ha logrado reducir significativamente las tasas de homicidios como producto de programas de convivencia ciudadana desarrollados en las ciudades más grandes y anteriormente más violentas del hemisferio, como Bogotá y Medellín (ver Mockus y Acero, sin fecha).

países centroamericanos, la violencia es mucho más alta que en el resto de la región (Arriagada, 2001; Wielandt, 2005). La Tabla X-1 muestra los datos más recientes sobre las tasas de homicidios en América Latina.

**Tabla X-1. Tasas de homicidios en América Latina y el Caribe
(datos más recientes disponibles)**

País	Tasas de homicidios (por 100,000 habitantes)
Argentina	4.7*
Bolivia	18.5
Brasil	20.0
Chile	3.0
Colombia	40.0
Costa Rica	6.0
Cuba	6.2*
Ecuador	14.8**
El Salvador	55.5
Guatemala	35.5
Guyana	6.6*
Honduras	41.0
Jamaica	35.0*
México	18.0
Nicaragua	10.0
Panamá	11.0
Paraguay	12.6*
Perú	10.3**
República Dominicana	12.0
Uruguay	4.0
Venezuela	33.0

Fuentes: Mockus y Acero, (sin fecha);
* Krug et al. (2004);
**Carrión (2004).

Como puede verse en la Tabla X-1, la gran mayoría de países latinoamericanos posee tasas de homicidios igual o por encima del promedio global mundial (12/100,000 hab.). Solamente los países del cono sur, Argentina, Chile y Uruguay, además de Costa Rica en Centroamérica y Cuba y Guyana en el Caribe, están claramente por debajo de ese promedio. Como ya se había apuntado antes, los países del triángulo norte de Centroamérica son, por mucho, los países más afectados por la violencia con tasas de homicidios por encima de 35 muertes por cada cien mil habitantes; les siguen países que forman parte de la misma cuenca del Caribe, como México, Colombia y Venezuela, y cuyas tasas son también muy altas.

Vale la pena resaltar que los países de la comunidad andina tienen también tasas relativamente altas de homicidios dado que las mismas han experimentado un crecimiento notable en las últimas décadas. De acuerdo a Carrión (2004), las tasas de homicidios en países como Ecuador y Perú prácticamente se han cuadruplicado en el lapso de quince años.



Pero la violencia que afecta muchos de los países de América Latina no solo se expresa en homicidios, se expresa también en una gran cantidad de delitos y hechos de violencia que ocurren en los países latinoamericanos. El crecimiento de las pandillas juveniles o maras en Centroamérica, las cuales controlan áreas urbanas completas sin que las autoridades puedan contrarrestarlas; el aumento del crimen organizado en países como México, Brasil o Haití a niveles tales que llegan a desafiar abiertamente a los Estados; la corrupción entre los funcionarios estatales encargados de la seguridad; y el crecimiento del crimen callejero en algunos de los países considerados menos violentos como Argentina o Costa Rica (ver por ejemplo, Dammert, 2000) generan un sentimiento de inseguridad que afecta a todos los ciudadanos.

Una encuesta conducida por el Instituto Interregional de las Naciones Unidas para la Investigación del Crimen y la Justicia a mediados de los noventa, mostraba que en los seis países latinoamericanos en donde se llevó a cabo la consulta, más del 85% calificaron como grave o muy grave los delitos de robos, lesiones y asaltos sexuales (Gabaldón, 2001). En otras palabras, la violencia criminal que impera de diversas formas en muchos países de América Latina se traduce en inseguridad ciudadana, esto es, se traduce en miedo que afecta la gobernabilidad de los países y la relación de los ciudadanos entre sí y las instituciones.

Aspectos metodológicos

El presente estudio se basa en los datos generados en la edición 2006 por el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP) del Barómetro de las Américas. El mismo utiliza los resultados de una encuesta cursada a más de 30,000 ciudadanos latinoamericanos de veinte países de América Latina y el Caribe. Al utilizar los resultados de esta encuesta, única por su alcance, naturaleza y compromiso con el método científico⁶, se parte de la suposición básica es que las creencias, actitudes y vivencias de las personas constituyen categorías importantes para el análisis de los hechos políticos, y las encuestas son un medio para abordarlas.

Datos

Este estudio utiliza los datos de las encuestas de LAPOP correspondientes al año 2006. Las encuestas se aplicaron en todos los países durante distintos períodos de ese año. En cada país, se diseñaron muestras nacionales probabilísticas para representar con precisión la distribución de la población, con un total de 1,500 entrevistas a ciudadanos adultos, mayores de 18 años.⁷

⁶ Un detalle completo sobre LAPOP y el Barómetro de las Américas puede encontrarse en: http://sitemason.vanderbilt.edu/lapop/about_us.

⁷ Con excepción de Nicaragua en donde se encuestó a partir de los 16 años de edad.

Ítems y variables

Violencia, victimización e inseguridad

Para medir el impacto de la violencia en la cultura política democrática de los ciudadanos centroamericanos se utilizarán dos variables independientes. La primera mide el nivel de violencia a través de la victimización personal por delincuencia y básicamente recoge lo que se puede llamar niveles “objetivos” de violencia”. La segunda mide el nivel de inseguridad percibida como producto de la violencia reinante alrededor y recoge lo que podríamos llamar el lado “subjetivo” de la violencia.

En el primer caso, se utiliza un solo ítem (VIC1) de medición de victimización para determinar los niveles de crímenes y violencia en los análisis y los modelos. Se les preguntaba a las personas si habían sido o no víctimas de algún incidente violento en los 12 meses anteriores a la entrevista. En el segundo caso, la inseguridad también se mide con un solo ítem, AOJ11.

La cultura política democrática

La variable dependiente es, en general, la cultura política de apoyo a la democracia. Pero dado que una cultura política de apoyo a la democracia tiene muchas dimensiones en donde la violencia puede impactar, en la primera parte del estudio, la que se refiere al análisis general de todos los datos, se utilizarán una serie de indicadores que remiten a los factores de una cultura política de apoyo a la democracia. Estas dimensiones son: a) apoyo a democracia estable, siguiendo el modelo de Seligson (2000); b) confianza interpersonal, medida a través del ítem IT1; 3) rechazo a liderazgos autoritarios, medida a través del ítem AUT1; y 4) conformidad con el Estado de derecho, medido a través del ítem AOJ8.

Hay razones teóricas de peso para considerar estas dimensiones como parte de una cultura política de apoyo a la democracia. En el primer caso, Seligson ha mostrado amplia evidencia empírica de la relevancia de combinar el apoyo al sistema y la tolerancia interpersonal, como condiciones fundamentales para la democracia. El segundo caso, la confianza interpersonal, remite a las teorías del capital social (Putnam 1993; Fukuyama 1995) que son relevantes sobre todo cuando se habla de regímenes que intentan reconstruir un tejido social que promueve la participación política. Por otro lado, el rechazo a liderazgos autoritarios se vuelve muy importante en sociedades con largas tradiciones autoritarias. El punto de incluir esta dimensión es analizar la posibilidad de tener ciudadanos que en general apoyan un sistema democrático, confían en los demás, pero están dispuestos a seguir apoyando liderazgos autoritarios a través de elecciones (Bermeo 2003). Finalmente, la conformidad con el Estado de derecho tiene que ver con el sentido de que en una democracia todos los ciudadanos respetan la ley y reclaman que las instituciones hagan lo mismo (Méndez 2003).



La siguiente Tabla resume las variables que se usan en el presente trabajo.

Tabla X-2. Variables en la primera parte del análisis

Condición	Nombre de la variable	Indicador	Item en el cuestionario
Violencia	Victimización por crimen	Porcentaje de personas victimizadas en el último año	VIC1: ¿Ha sido usted víctima de un acto de delincuencia en los últimos doce meses?
	Inseguridad por crimen	Promedio en la escala de inseguridad (1-4)	AOJ11: Hablando del lugar o barrio donde usted vive y pensando en la posibilidad de ser víctima de un asalto o robo, ¿se siente usted muy seguro, algo seguro, algo inseguro o muy inseguro?
Desempeño del gobierno	Percepción del trabajo del gobierno combatiendo la delincuencia	Promedio en la escala de desempeño (1-7)	N11: ¿Hasta qué punto diría usted que el gobierno actual mejora la seguridad ciudadana?
Cultura política	Apoyo a democracia estable	Combinación de alta tolerancia y alto apoyo al sistema (0-1)	Serie básica B1-B6 Serie básica D1-D4
	Confianza interpersonal	Promedio en la escala de confianza interpersonal (0-100)	IT1: Ahora hablando de la gente de aquí, ¿diría que la gente de su comunidad es: muy confiable, algo confiable, poco confiable o nada confiable?
	Apoyo a democracia electoral	Promedio de apoyo a democracia electoral frente a líder autoritario (0-100)	AUT1: Hay gente que dice que necesitamos líder fuerte que no tenga que ser elegido a través del voto. Otros dicen que a pesar de que las cosas no funcionen, la democracia electoral, o sea el voto popular, es siempre lo mejor. ¿Qué piensa usted?
	Conformidad estado de derecho	Promedio en la escala de que la policía ignore la ley (0-100)	AOJ8: Para poder capturar delincuentes, ¿cree usted que las autoridades siempre deben respetar las leyes o en ocasiones pueden actuar al margen de la ley?

La hipótesis empírica

La hipótesis empírica sostiene que las personas que han sido víctimas de crimen común o violencia y aquellas que muestran elevados niveles de inseguridad debido al crimen tienden a mostrar menos apoyo al sistema político y menos tolerancia, en otras palabras, tienden a poseer una cultura política que no favorece la democracia estable. Pero además, poseen menos confianza en los demás, favorecen con más frecuencia la presencia de un líder fuerte que pase por alto la democracia electoral y justifican el hecho de que las autoridades actúen al margen de la ley con tal de que las autoridades combatan a los criminales. Estas hipótesis serán evaluadas utilizando pruebas estadísticas de significación, para establecer una relación probable entre victimización e inseguridad, y las variables culturales mencionadas anteriormente.

Victimización, inseguridad y cultura política democrática en la región

Para establecer si la victimización directa criminal y las percepciones de inseguridad afectan la cultura política democrática de la región, se corrieron una serie de regresiones para establecer el impacto de las variables de seguridad, en conjunto con otras variables de control (género, edad, nivel educativo, ingreso familiar y tamaño de la ciudad como indicador de los niveles de urbanización). Además, se introdujo una variable adicional sobre la evaluación de los ciudadanos sobre el desempeño del gobierno en el tema de la seguridad ciudadana. Esto porque el impacto de las variables de seguridad sobre el apoyo a la democracia pueden estar mediadas por las evaluaciones del desempeño del gobierno en esa área. De hecho, la confianza en la democracia puede estar influida no solo por la percepción sobre las condiciones objetivas o subjetivas de seguridad, sino también por las percepciones sobre lo que hace el gobierno o el régimen para atender ese problema.

Todas estas variables independientes se analizaron en función del apoyo a la democracia estable, la confianza interpersonal, el apoyo a la democracia electoral (como rechazo de líderes autoritarios) y la conformidad con el Estado de derecho, las cuales constituyen los factores de una cultura política democrática. Los resultados se presentan en la Tabla X-3.

Como puede verse en la Tabla X-3, la variable de victimización directa por criminalidad no juega un papel preponderante en las variables que miden el apoyo a la cultura política democrática. En el caso de los predictores de apoyo para una democracia estable, la victimización por violencia no es estadísticamente significativa y, junto con la variable del tamaño de la ciudad, parece no tener ninguna importancia en los niveles de actitudes de apoyo a una democracia estable. Sin embargo, la percepción de inseguridad sí tiene un efecto negativo sobre las actitudes de apoyo estable a una democracia. Esto significa que, en general, las personas que se sienten más inseguras a causa de la criminalidad tienden a apoyar menos la democracia estable que el resto de la población. El problema de la violencia criminal pareciera tener un efecto negativo sobre las actitudes que apoyan una democracia estable en la región solo a través de los sentimientos de inseguridad que esta provoca, pero no a través de la victimización directa por violencia común—al menos de la manera en que ha sido medida por medio de las encuestas de LAPOP. Sin embargo, la variable que resultó tener un efecto importante y una significancia estadística positiva sobre el apoyo a la democracia estable fue la evaluación del desempeño del gobierno en materia de seguridad. Esto significa que en la medida en que los latinoamericanos perciben que sus gobiernos de turno están combatiendo la criminalidad, existen más probabilidades de que reúnan las actitudes de apoyo a la democracia estable.



Tabla X-3. Predictores de apoyo a la democracia estable, confianza interpersonal, apoyo a la democracia electoral y apoyo al Estado de Derecho en América Latina y el Caribe, 2006.

	Apoyo a democracia estable	Confianza interpersonal	Apoyo a democracia electoral	Conformidad Estado de Derecho ^a
Tamaño de la ciudad	.018 (.010)	1.873** (.130)	.030* (.013)	.003 (.009)
Género encuestada (Femenino)	-.074* (.030)	-1.335** (.386)	.048 (.039)	.054* (.027)
Edad encuestado	.006** (.001)	.145* (.013)	.011** (.001)	.008** (.001)
Ingreso familiar	.047** (.007)	1.356** (.085)	.057** (.009)	-.027** (.006)
Educación encuestado	.022** (.004)	-.116** (.050)	.042** (.005)	.014** (.004)
Victimización por crimen	.000 (.000)	-.017* (.005)	.000 (.001)	-.003** (.000)
Percepción de inseguridad	-.102** (.016)	-8.837** (.209)	-.030 (.021)	-.133** (.015)
Evaluación gobierno en seguridad ^b	.288** (.008)	1.013** (.106)	.096** (.010)	.034** (.007)
Constante	-2.209** (.108)	61.804** (1.370)	.304* (.137)	.048** (.096)
R2	.090 (Nagelkerke)	.116	.023 (Nagelkerke)	.018 (Nagelkerke)
X ² ó F	1471.25	372.40	287.26	313.91
N	23,923	22,751	22,159	24,167
* p < .05				
** p < .001				
^a No incluye Brasil.				
^b No incluye Bolivia.				

De hecho, en general la percepción del desempeño del gobierno en cada una de las áreas evaluadas (combate de la pobreza, reducción de la corrupción, promoción de los principios democráticos, promoción de los derechos humanos y combate del desempleo) tiene una relación estadísticamente significativa con el apoyo a la democracia estable, pero en ninguna—con excepción de la promoción de los derechos humanos— el efecto es más grande que cuando se trata del mejoramiento de la seguridad ciudadana.

Esto es de una relevancia especial pues significa que más importante que haber sido víctima del crimen y la violencia o incluso más importante que sentirse seguro, lo es tener una percepción positiva de los esfuerzos que hace el régimen para proveer seguridad a los ciudadanos. Cuando se examinan los datos por país, se encuentra que esta relación es estadísticamente significativa en todos los países latinoamericanos incluidos en la muestra y que recogieron la evaluación del desempeño del gobierno.⁸ El Gráfico X-1 representa esta relación de forma muy clara.

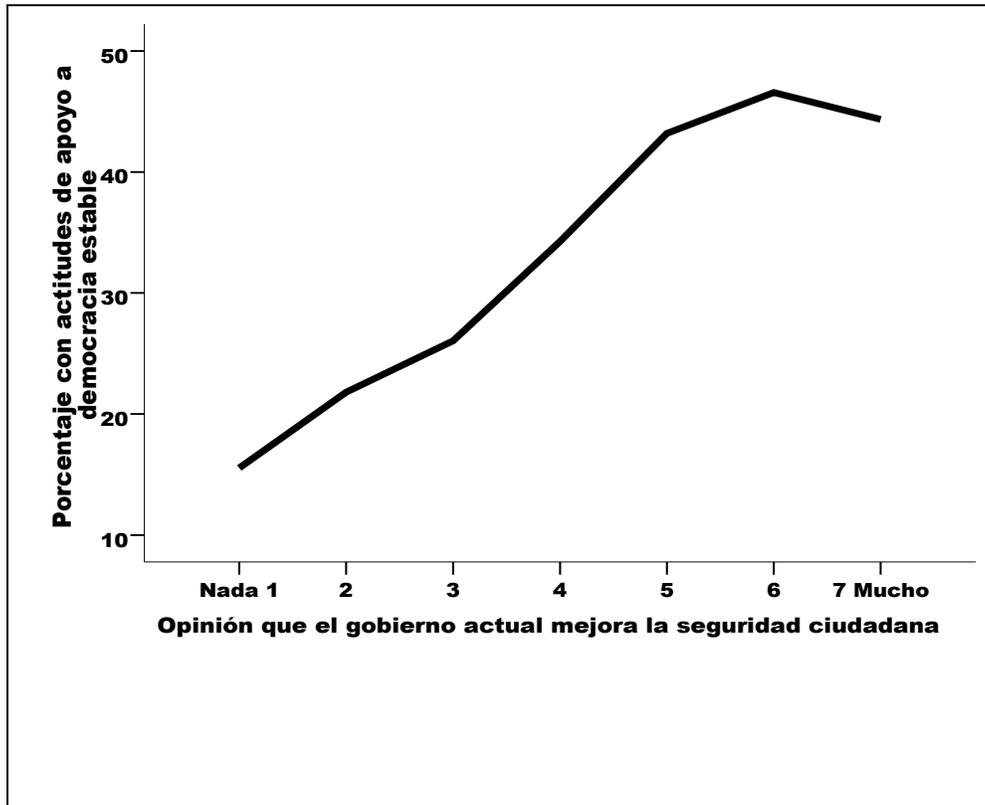


Gráfico X-1. Actitudes de apoyo a la democracia estable en América Latina y el Caribe según percepción del desempeño del gobierno en mejorar la seguridad pública, 2006.

Lo anterior, sin embargo, no debe opacar la importancia de las percepciones de inseguridad, o para ponerlo en términos positivos, de la percepción de seguridad. Como puede observarse en el siguiente gráfico, el porcentaje de personas con actitudes que sirven de soporte para una democracia estable aumenta en la medida en que las personas se ubican en los grupos que se perciben más seguros con respecto de la delincuencia. Así, el porcentaje de personas que apoyan una democracia estable pasa de 22 entre quienes se sienten muy inseguros a más del 30 entre quienes se sienten seguros. Esta relación se da para todos los datos incluidos en la muestra y

⁸ En Estados Unidos, Canadá y Bolivia no se incluyó la pregunta sobre el desempeño del gobierno, por lo tanto los análisis excluyen a estos países.



es significativa en la mayoría de los países de la región, con excepción de Guatemala, El Salvador, Ecuador, Bolivia y Chile.

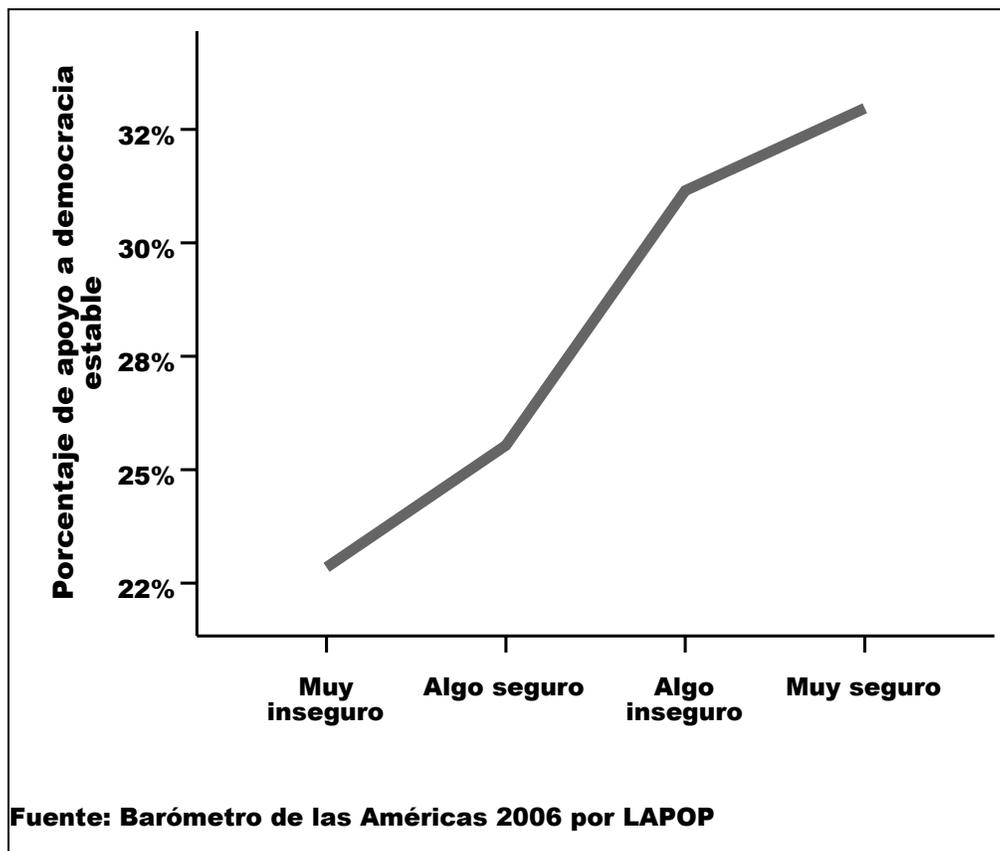


Gráfico X-2. Apoyo a la democracia estable en América Latina y el Caribe según percepción de seguridad, 2006

Por otro lado, cuando se examinan las variables que tienen un efecto sobre la confianza interpersonal, se encuentra, en este caso, que todas las variables independientes tienen una relación estadísticamente significativa, inclusive la victimización directa por violencia. Como puede verse en la Tabla X-3, en la región latinoamericana, haber sido víctima de la violencia y sentirse inseguro por la misma reduce los niveles de confianza interpersonal en términos generales. De igual manera, las percepciones sobre el desempeño del gobierno en el mejoramiento de la seguridad ciudadana tienen también un efecto, positivo, en este caso sobre la confianza interpersonal. No obstante, en este último caso, en realidad, la percepción de inseguridad juega un papel más sustantivo en los niveles de confianza interpersonal que la percepción del desempeño del gobierno.

Cuando se examinan los efectos de estas variables de manera bivariada, país por país, se encuentra que las percepciones de inseguridad suelen tener un efecto significativo con más frecuencia que la victimización o que la percepción del desempeño del gobierno (ver Tabla X-4). De hecho, en todos y cada uno de los países la inseguridad está relacionada con la confianza interpersonal de forma negativa. La victimización por violencia, en cambio, no parece tener efecto alguno en países como Bolivia, Chile, Costa Rica, Jamaica y Panamá; mientras que el desempeño del gobierno en el área de seguridad no resultó ser significativo en Costa Rica,

Ecuador, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. En resumen, la percepción de inseguridad se constituye en la condición más importante que erosiona la confianza entre los ciudadanos.

Tabla X-4. Relación de significancia estadística entre victimización por violencia, percepción de inseguridad y percepción del desempeño del gobierno en seguridad, y confianza interpersonal según país, América Latina y el Caribe 2006 (análisis bivariados)

País	Variables independientes		
	Victimización	Inseguridad	Desempeño gobierno
Bolivia		**	---
Brasil	**	**	*
Chile		**	*
Colombia	*	**	*
Costa Rica		**	
Ecuador	*	**	
El Salvador	**	**	**
Guatemala	**	**	*
Guyana	*	**	**
Haití	*	**	*
Honduras	**	**	**
Jamaica		**	*
México	**	**	**
Nicaragua	*	**	
Panamá		**	
Paraguay	*	**	*
Perú	*	**	**
República Dominicana	*	**	
Uruguay	**	**	**
Venezuela	**	**	**

Variable dependiente: Confianza interpersonal.
* p < .05
** p < .001

En otro orden, cuando se examinaron los efectos de las variables independientes relacionadas con la violencia con respecto al apoyo a la democracia electoral (medida en contraposición con el apoyo a un líder autoritario). Los coeficientes de la regresión logística binaria presentados en la Tabla X-3 indican que solamente la percepción del desempeño del régimen juega un papel importante en el apoyo a la democracia electoral y el rechazo a un líder autoritario. Los eventos de victimización sufridos por las personas directamente y los niveles de inseguridad percibida no parecen afectar, al menos de forma estadísticamente significativa el apoyo a la democracia electoral.

Aunque en términos generales, el efecto de la percepción del desempeño del gobierno es significativo para toda la región en general, al interior de algunos países, la relación es inexistente. La forma en que los ciudadanos perciben el desempeño de su gobierno en materia de seguridad es importante para el rechazo de figuras autoritarias en Guatemala, Nicaragua, Panamá, Colombia, Haití, República Dominicana, Venezuela, Chile, Paraguay y Uruguay; pero no parece tener importancia en México, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Ecuador, Perú, Brasil, Jamaica y Guyana. Por lo tanto, lo más sensato es pensar que las percepciones sobre el desempeño del



gobierno son importantes para el rechazo a líderes autoritarios solamente en algunas regiones de América Latina.

Sin embargo, las variables que miden el tema de violencia e inseguridad, sí probaron ser estadísticamente significativas y tener un efecto sustantivo sobre el apoyo al Estado de Derecho. Esta condición, que fue medida a través de la pregunta de qué tanto estaría dispuesto a aprobar que la policía pase por alto la ley con tal de capturar delincuentes, está claramente relacionada con los eventos de victimización de la persona, con su percepción de inseguridad debido a la delincuencia, y con la evaluación del desempeño del gobierno en el mejoramiento de la seguridad ciudadana. Los resultados indican que haber sido víctima del crimen en América Latina erosiona el compromiso de los ciudadanos con el respeto de la ley por parte de la policía; también lo hace la percepción de inseguridad: en la medida en que las personas se sienten más inseguras, están más dispuestas a aprobar que la policía actúe al margen de la ley con tal de atrapar delincuentes, erosionando con ello en Estado de Derecho (ver Gráficos X-3 y X-4). Pero igualmente importante es el resultado que indica que las personas que ven con buenos ojos el desempeño del gobierno están más dispuestas a exigir que la policía respete a la ley dentro de sus procedimientos. Puesto de otra manera, las personas que evalúan negativamente el desempeño gubernamental en el área de seguridad están más dispuestas a aceptar que la institución policial actúe al margen de la ley.



Gráfico X-3. Apoyo al Estado de Derecho en América Latina y el Caribe según victimización por violencia, 2006

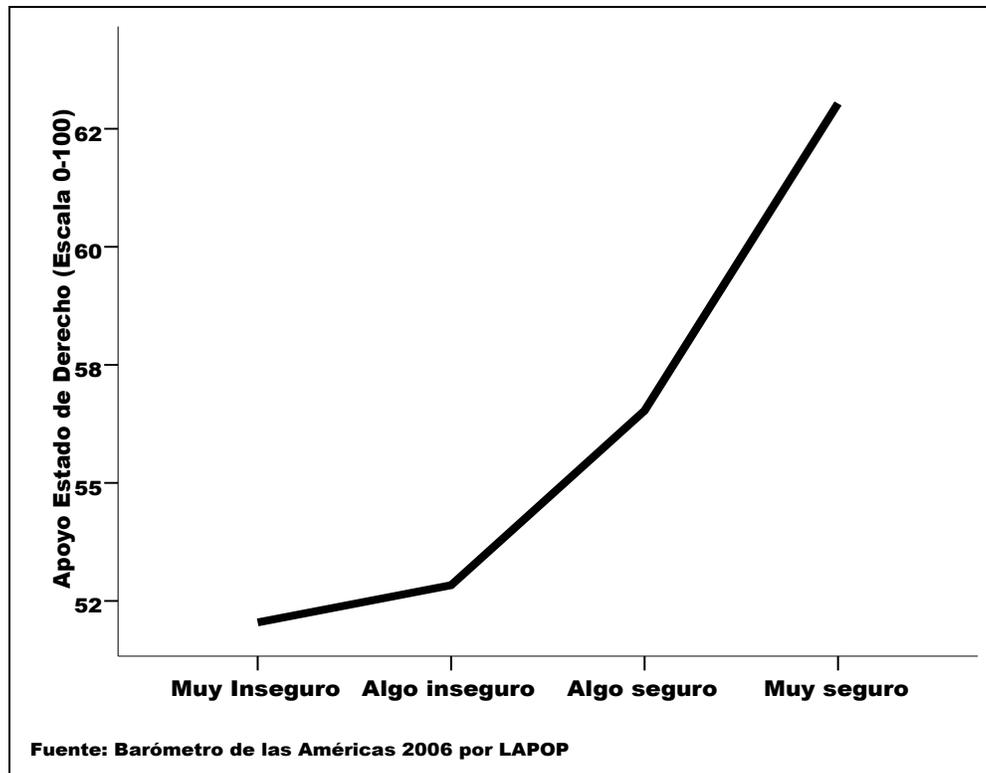


Gráfico X-4. Apoyo al Estado de Derecho en América Latina y el Caribe según percepción de inseguridad por violencia, 2006

Esto tiene implicaciones muy importantes para el tema del apoyo a la democracia y el Estado de derecho. Significa sobre todo que es importante que los gobiernos sean percibidos como competentes en el área de seguridad pública para que los ciudadanos se comprometan con el apoyo a la ley y el Estado de Derecho.

Ahora bien, aunque en términos regionales⁹, se puede decir que el apoyo al Estado de Derecho depende de la victimización, la inseguridad y la percepción del desempeño del gobierno, falta ver si en términos nacionales, estas variables siguen teniendo un efecto particular. La Tabla X-5 presenta un resumen de esas relaciones bivariadas por país. Como puede verse, en Costa Rica, Panamá y República Dominicana, ninguno de las variables de interés resultó estadísticamente significativa, pero en el resto de países, al menos una variable resultó significativa para predecir el apoyo al Estado de Derecho. La percepción de inseguridad, de nuevo, parece jugar un papel importante en la mayoría de los países: los ciudadanos tienden a rechazar las acciones institucionales al margen de la ley en la medida en que se sienten más seguros.

⁹ Con la excepción de Brasil porque no incluyó la pregunta AOJ8.



Tabla X-5. Relación de significancia estadística entre victimización por violencia, percepción de inseguridad y percepción del desempeño del gobierno en seguridad, y el apoyo al Estado de Derecho según país, América Latina y el Caribe 2006 (análisis bivariados)

País	Variables independientes		
	Victimización	Inseguridad	Desempeño gobierno
Bolivia	*	*	---
Chile	**	*	*
Colombia		*	
Costa Rica			
Ecuador	*	**	
El Salvador		**	
Guatemala	**	**	*
Guyana	**	**	**
Haití		**	**
Honduras	**	*	*
Jamaica	*		**
México	**	*	
Nicaragua		**	
Panamá			
Paraguay	*	**	
Perú	*		
República Dominicana			
Uruguay		*	
Venezuela	**	*	*

Variable dependiente: Apoyo al Estado de Derecho
 * p < .05
 ** p < .001

Resumiendo, en general, la victimización y la inseguridad generada por el crimen afectan las actitudes de apoyo a la democracia, esto es, las que mantienen a una democracia estable, las que facilitan la construcción de confianza interpersonal, las que rechazan la figura de líderes autoritarios (y apoyan la democracia electoral) y las que fomentan la construcción de un Estado de derecho. Esto es especialmente cierto en el caso de la percepción de inseguridad relacionada con el crimen. La inseguridad, parece afectar en casi todos los países de manera notable y significativa las actitudes que sirven para que una democracia se mantenga estable; afecta también la confianza entre las personas, la convicción de que las autoridades no deben irrespetar la ley y el apoyo a los procedimientos de la democracia electoral.

Sin embargo, la variable de victimización directa, aunque importante en algunos casos, no parece tener la misma relevancia que las percepciones de inseguridad. La victimización tiene un efecto notable solo cuando se trata del apoyo al Estado de Derecho, y hasta cierto punto cuando se trata de la confianza interpersonal. Pero no tiene efectos importantes en el apoyo a la democracia electoral en contraposición a los líderes autoritarios y, sobre todo, no tiene relevancia cuando se trata de las actitudes generales de apoyo a una democracia estable. Esto probablemente se debe al hecho de que la victimización por violencia afecta solo a algunos sectores de la población y que la misma victimización ha sido medida solo de manera superficial a través de la encuesta, dado que otros tipos de victimización han quedado fuera. En todo caso, estos hallazgos muestran un posible camino de profundización en el estudio de la violencia y su impacto en la cultura política democrática. Cuando se trata de ésta, los resultados preliminares de este ejercicio

parecen sugerir también la importancia de las percepciones del desempeño del gobierno en el área de seguridad pública. Esto se verá con más claridad en la siguiente sección, dedicada a explorar de forma más detenida la relación entre violencia y las actitudes de apoyo a la democracia estable en Centroamérica.

Violencia y actitudes de apoyo a la democracia en Centroamérica

En las siguientes páginas se analiza el impacto de la violencia en la subregión centroamericana. Esto por dos razones. Primero, porque como ya se ha mencionado más arriba, la región del norte de Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Honduras) es, por mucho, la región más violenta del mundo en cuanto a violencia criminal; pero a la vez contiene una de las regiones menos violentas de América Latina (Nicaragua, Costa Rica y Panamá tienen tasas de homicidios por debajo de 15 por 100,000 hab.) (ver Tabla X-1). Esto ofrece la oportunidad única de comparar, en la misma área geográfica y que comparten básicamente una misma cultura, países que son muy diferentes en términos de sus niveles de violencia. Segundo, porque al concentrar el estudio en Centroamérica, se cuenta con la posibilidad de comparar países con una historia muy diferente en términos de consolidación democrática. En la misma región se puede comparar a Costa Rica —el cual es el país más estable en América Latina en términos de democracia (Booth 1998)— con Guatemala, El Salvador y Nicaragua —que han experimentado una transición a la democracia por primera vez en su historia (Torres-Rivas 2001), acompañada del cese de conflictos bélicos— y con Honduras y Panamá —que han experimentado transición desde gobiernos militares recientemente, pero que han tenido cierto nivel de democracia en el pasado (Remmer 1985)¹⁰.

Se trata, por tanto, de la posibilidad de comparar países que reúnen dos condiciones que son importantes para comprender el impacto de la violencia sobre las actitudes que están detrás de la consolidación de la democracia. La posición de estos países en cuanto a estas condiciones se presenta en la Tabla X-6.

¹⁰ La aseveración de que los países de Honduras y Panamá han tenido cierto grado de democracia en el pasado no está libre de controversias. Para varios autores, estos países no han tenido regímenes democráticos anteriormente sino que una especie de regímenes electorales constantemente sujetos a la supervisión de los militares o grupos oligárquicos (Remmer, 1985; Mahoney, 2001). Estos grupos han permitido ciertas libertades y procesos de alternancia política, pero que no lograron el nivel de consolidación e institucionalización logrado en Costa Rica. En cualquier caso, durante algunos períodos del siglo xx, dichos regímenes se han diferenciado del carácter más inflexiblemente autoritario de los vecinos Guatemala, El Salvador y Nicaragua.



Tabla X-6. Los países centroamericanos según nivel de violencia homicida y democracia

	Democracia estable	Transición reciente de gobierno autoritario: Democracias “recuperadas”.	Transición acompañada de fin de conflicto militar: Democracias fundacionales.
No violento (tasa < 15/100,000 hab.)	Costa Rica	Panamá	Nicaragua
Violento (tasa > 40/100,000)		Honduras	Guatemala El Salvador

Por tanto, la violencia criminal puede impactar de manera diferenciada a estos países, tanto en función del grado de violencia que los mismos enfrentan como en función de la tradición democrática/autoritaria que ha prevalecido en sus regímenes. Países como Guatemala, El Salvador y Nicaragua, que son consideradas democracias fundacionales, tienen nula memoria institucional de cómo funciona una democracia y sus poblaciones han debido aprender a vivir bajo una nueva cultura política que supone el abandono del autoritarismo¹¹; en tal sentido, es lógico pensar que los problemas que suponen altos niveles de violencia impactarán en mayor medida el apoyo popular hacia la democracia estable. En cambio, en países como Honduras y Panamá, que tienen una historia previa de regímenes cuasidemocráticos, el desafío está en el restablecimiento de las instituciones y de los valores soportan la democracia; esta tarea puede ser menos difícil cuando existe cierto tipo de memoria, a pesar de que la misma sea tenue. El caso modelo lo constituye Costa Rica. En comparación con sus vecinos, este país tiene una larga tradición democrática, con instituciones y valores firmemente asentados desde hace décadas. Por lo tanto, los desafíos planteados por problemas graves como la violencia o las crisis económicas deberían de impactar menos en la cultura política de apoyo a la democracia estable.

Para probar el impacto de las variables de la violencia sobre el apoyo a una democracia estable, se llevó a cabo un análisis estadístico de los datos sobre la base de regresiones logísticas binarias, tomando como variable dependiente el apoyo a la democracia estable. En esta ocasión, y a diferencia de los gráficos y análisis llevados a cabo en la sección anterior, el ejercicio incluye controles de variables demográficas como sexo, edad, escolaridad y el tamaño de población en la que reside el encuestado. Además, en los modelos se introdujeron dos variables que están relacionadas con el tema de la violencia y que pueden jugar un papel importante en el impacto de las actitudes políticas. Una de estas variables es el registro de presencia de pandillas juveniles en el barrio del entrevistado y la otra es la evaluación sobre el desempeño del gobierno de turno en el área de la seguridad ciudadana. Un resumen de esos resultados se presenta en la Tabla X-4.¹²

La tabla muestra las variables que en cada una de las regresiones por país resultaron significantes para predecir el apoyo a una democracia estable. Esto es, las condiciones que dentro del grupo de condiciones que fueron examinadas para cada país tienen el peso estadístico suficiente como para afirmar que las mismas influyen en la presencia de una cultura política

¹¹ Es importante recordar que estas transiciones implicaron el cese de conflictos armados y el retiro de los militares de la política (Córdova 1996).

¹² Ver los anexos para un detalle de los resultados específicos de las regresiones.

democrática. Así, por ejemplo, los resultados muestran que para el caso de Guatemala, el tamaño de la ciudad en donde reside en encuestado, la percepción de presencia de pandillas en la comunidad y la evaluación del desempeño del gobierno guatemalteco en el área de seguridad pública son condiciones que están asociadas estadísticamente a la cultura política de apoyo a la democracia.

Más concretamente, el caso de Guatemala, los resultados dicen que las personas que viven en una ciudad pequeña o zona rural, las que perciben pandillas en su comunidad y las que evalúan de forma positiva las políticas de seguridad del gobierno de Guatemala, tienden a mostrar más una cultura política de apoyo a la democracia estable. En el caso de El Salvador, los resultados apuntan con claridad a que el género del entrevistado —esto es, ser mujer— y la percepción del desempeño del gobierno de turno en el área de seguridad son los factores que están detrás del apoyo a la democracia estable. En Honduras, las personas que se sienten libres de la inseguridad de ser víctimas de la violencia y las que no perciben pandillas en su comunidad son las que más apoyan la democracia estable, además de la evaluación del trabajo gubernamental en seguridad pública. En Nicaragua, los resultados apuntan de nuevo a la importancia del desempeño del gobierno, pero además muestran que variables como el tamaño de la ciudad, los ingresos familiares y la percepción de seguridad juegan un papel también, aunque menos significativo.¹³ En Costa Rica, aparte de evaluar positivamente al gobierno por sus políticas de seguridad, las características personales parecen jugar un papel mayor: las personas de más edad, con mayor nivel de escolaridad y que poseen más ingresos están más comprometidas con el apoyo a la cultura política democrática que el resto de la población. Finalmente en Panamá, solamente la percepción de seguridad y la evaluación positiva del trabajo gubernamental contribuyen a la cultura política de apoyo a la democracia.

¹³ Se ha optado por mostrar las variables que tienen un nivel de significancia de $p < .1$, que aunque es un límite particularmente alto para la significancia estadística en las ciencias sociales, puede ser útil para registrar aquellas variables que tienen un efecto más difuso en la cultura política democrática y que pueden ser pasadas por alto en el conjunto de la regresión. Con todo, las variables con este tipo de significancia deben ser tomadas con mucha cautela y lo más conveniente es darle la relevancia debida a las variables que muestran un nivel de significancia estadística de $p < .05$.



Tabla X-7. Predictores de las actitudes de apoyo a la democracia estable según país centroamericano

VARIABLES	Guatemala	El Salvador	Honduras	Nicaragua	Costa Rica	Panamá
Tamaño de ciudad	**			*		
Género del entrevistado		***				
Edad del entrevistado					**	
Escolaridad del entrevistado					**	
Ingresos familiares del entrevistado				*	**	
Grado de victimización						
Percepción de seguridad			**	*		**
Presencia de pandillas	*		**			---
Evaluación desempeño del gobierno en el área de seguridad	***	***	***	***	***	***
* p < .100 ** p < .050 *** p < .001 Nota: En el caso de Panamá, la variable de presencia de pandillas no fue incluida en la regresión porque no se preguntó en la encuesta local.						

En términos generales, estos resultados apuntan a dos grandes consideraciones. La primera es que, a pesar de los resultados vistos en la sección anterior, cuando se hace un análisis multivariado de las condiciones que están detrás del apoyo a la democracia estable, la victimización personal pierde su poder de predicción en los países en los que la misma había aparecido como importante, esto es, en Honduras y en Nicaragua. La segunda es que a la hora de determinar los factores más importantes en la presencia de una cultura política de apoyo a la democracia desde el tema de la violencia, la condición que aparece como más importante no es la inseguridad o la victimización en sí mismas sino la percepción de lo que hacen los gobiernos para enfrentar esos problemas. En otras palabras, el apoyo a una democracia estable vendría siendo más el resultado de cómo se percibe el desempeño de las instituciones en el combate de los problemas de la violencia que de la ausencia de esos problemas.

Más concretamente en el caso de la variable de victimización personal, los resultados indican que cuando se introduce la variable de percepción de seguridad en los modelos, el efecto de la victimización personal sobre las actitudes apoyo a la democracia estable desaparecen en aquellos países en donde había una relación simple (Honduras y Nicaragua). Esto sugiere que en esos países, desde el punto de vista de apoyo a la democracia, es más importante la percepción de seguridad que haber sido víctima directa de la violencia. La explicación se encuentra en el hecho de que las personas que han sido víctimas directas del crimen también se sienten más inseguras y es esta inseguridad, que además es compartida por muchas otras personas más, la que afecta las actitudes de apoyo a la democracia estable. Aunque estos resultados parecen objetar la idea de que la violencia directa afecta las actitudes democráticas, hay que recordar que la medida de victimización con la que se cuenta en este estudio es solo parcial pues solo se refiere a la victimización por motivaciones económicas y deja por fuera mucha de las victimizaciones más graves que toman lugar en los países de América Central. Lo segundo que hay que considerar aquí es que los resultados en realidad están sugiriendo que la variable más importante en lo que tiene que ver con las actitudes ciudadanas, no es la violencia en sí misma sino la inseguridad que la misma produce. Esta consideración no es nueva, la misma ya ha sido señalada en otros trabajos (Gabaldón 2004), pero muestra que cuando se trabaja el tema de la cultura política democrático no se pueden soslayar las percepciones asociadas con la violencia.

En este contexto, el hallazgo sobre la importancia de la percepción del desempeño del gobierno en el área de la seguridad pública se vuelve revelador. En la sección anterior se vio que en la mayoría de los análisis bivariados por país, la percepción de seguridad jugaba un papel importante en la determinación de las actitudes de apoyo a la democracia. Dicho de otra manera, en todos los países centroamericanos, con excepción de Guatemala y El Salvador, la inseguridad por crimen reduce de forma importante el apoyo a la democracia estable. Sin embargo, los resultados mostrados en esta sección muestran que para los países de Nicaragua y Costa Rica, la percepción del trabajo del gobierno se vuelve más importante que la inseguridad de tal manera que al introducir esta última variable en las regresiones, el efecto de la sensación de seguridad desaparece. Además, y como puede verse en la Tabla X-7 y en los anexos, la variable de evaluación del desempeño del gobierno es la condición más importante para predecir el apoyo a una democracia estable. Lo anterior sugiere que a la hora de examinar el impacto de la violencia criminal sobre la cultura política, es importante no solo considerar la inseguridad generada por el crimen sino también y sobre todo, considerar la manera en cómo los ciudadanos perciben las acciones del gobierno en el combate del crimen. Desde los ciudadanos, lo que hace el gobierno para combatir la violencia es más importante para apoyar a un régimen democrático que la existencia de la violencia o la inseguridad en sí mismas. En otras palabras, la erosión a una cultura política de apoyo a la democracia llega fundamentalmente de la mano de la pérdida de la legitimidad como producto de las acciones del gobierno y no llega tanto del hecho en sí mismo de que halla o no violencia e inseguridad.

Sin duda, ambos aspectos están relacionados: en muchos países, la violencia criminal existe, se incrementa o se reduce como producto de las acciones del gobierno pero esto no siempre está en las percepciones de la gente cuando evalúan el estado de sus sociedades. Al valorar el desempeño del gobierno en el área de seguridad, los ciudadanos en cambio señalan que su compromiso con la democracia depende de más del desempeño del régimen para enfrentar los problemas que los problemas en sí mismos. Esto remite a lo originalmente planteado por Lipset y retomado por Klingemann (1999) cuando afirman que la legitimidad de un régimen democrático está fuertemente influenciada por su propio desempeño.

Lo anterior es importante porque, a la hora de considerar las posibilidades de supervivencia de la democracia como producto del apoyo de los ciudadanos, obliga a fijar la atención en las instituciones políticas y no en los problemas. La democracia se mantiene, se fortalece o se debilita no porque existan problemas más o menos graves en las sociedades sino por las acciones de las instituciones para enfrentar esos problemas y cómo estas acciones son percibidas por el público. Desde el punto de vista de la cultura política, el problema de la violencia es un problema para la democracia porque la misma afecta la percepción del desempeño del régimen, pero al hacerlo afecta también las convicciones de que el Estado de derecho debe ser respetado y debilita la oposición a liderazgos autoritarios. Por ello, la violencia es un problema para el mantenimiento de la estabilidad democrática.

Esto puede verse con mucha más claridad en los resultados de una serie de preguntas incluida en el Barómetro de las Américas que tenían como objetivo identificar las condiciones bajo las cuales los ciudadanos estarían más dispuestos a apoyar un golpe de Estado. El Gráfico X-5 muestra dichos resultados para los países centroamericanos agrupados en función de su nivel de violencia.

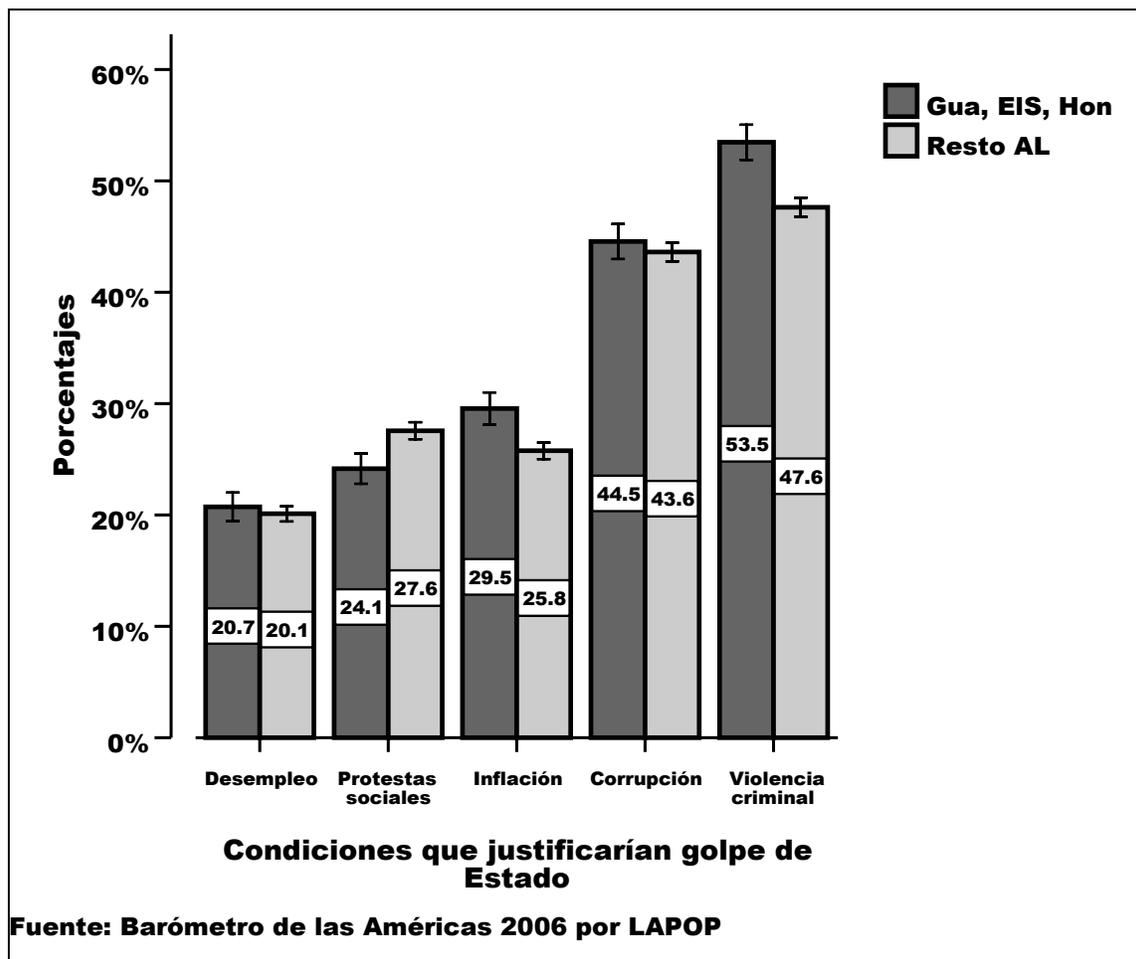


Gráfico X-5. Condiciones que justificarían un golpe de Estado según países Centroamericanos con problemas de violencia y el resto de países, 2006.

De entre todas las condiciones listadas (desempleo, protestas sociales, violencia criminal, inflación elevada y corrupción), la delincuencia destaca como la condición bajo la cual la mayoría de ciudadanos apoyaría un golpe de Estado. Esto es cierto tanto para los países centroamericanos que tienen graves problemas de violencia (Guatemala, El Salvador y Honduras), como para el resto de países incluidos en el Barómetro de las Américas. Sin embargo, es en aquellos países en donde el nivel de justificación por un golpe de Estado entre los ciudadanos alcanza su máximo nivel. Más de la mitad de los guatemaltecos, salvadoreños y hondureños aprobarían un golpe de Estado en respuesta a los niveles de violencia que existe en esos países. Ninguna otra condición alcanza ese nivel de aprobación y ninguna otra se diferencia de manera tan notable entre los países violentos y los no violentos. Dicho de otra manera, el apoyo al quiebre democrático a causa de la violencia criminal es más alto precisamente en aquellos países en donde la violencia es un problema grave. En ninguna otra circunstancia o país, existe tanto apoyo al rompimiento democrático que en aquellos países en donde la violencia impera.

Bajo ninguna circunstancia estos datos deben ser tomados como un predictor de golpe de Estado. En su lugar, estos datos deben ser tomados como un indicador del nivel de erosión de la legitimidad que enfrentan los regímenes cuando conviven con elevados niveles de criminalidad. Los resultados mostrados en el gráfico solo ejemplifican lo que ya se decía más arriba: que la violencia afecta la percepción del desempeño del régimen y es esta percepción la que debilita los prospectos de una cultura política de apoyo a la democracia. El hecho de que las personas “justifiquen” un golpe de Estado por los altos niveles de violencia constituye fundamentalmente una respuesta para modificar un régimen que es visto como incapaz de proveer seguridad.

Conclusiones

La violencia criminal afecta los prospectos de una democracia estable. Esta afirmación es particularmente cierta para la mayoría de los países de América Central. Pero este impacto no se produce de manera simple; en realidad, la violencia crea inseguridad y contribuye a crear la convicción entre los ciudadanos de que las instituciones de turno no son las adecuadas para proveer seguridad y para combatir la delincuencia. Esto no debería ser un problema de legitimidad porque en una democracia las instituciones pueden ser modificadas, reformadas o fortalecidas, y sus representantes pueden ser demandados, relevados o respaldados siguiendo una serie de procedimientos democráticos; pero lo cierto es que los datos indican que cuando los ciudadanos viven en una atmósfera de inseguridad y cuando no evalúan bien el desempeño de las instituciones encargadas de la seguridad, se produce una erosión de las actitudes que apoyan la democracia estable, a tal punto que en los países en los cuales la violencia es uno de los problemas sociales más graves, más de la mitad de la gente justifica el golpe de Estado como manera de enfrentar el problema de la violencia criminal.

El impacto de la violencia sobre la cultura política democrática, por tanto, no solo tiene que ver con la prevalencia del crimen y la inseguridad en sí mismas; tiene que ver, sobre todo, con que esas condiciones deterioran la legitimidad de las instituciones encargadas de proveer seguridad y, al hacerlo, abren el espacio para que la gente se desentienda de los valores democráticos, ignore el Estado de derecho y apoye alternativas autoritarias. Lo anterior no quiere decir que los países más violentos están en el irremediable camino de que sus regímenes protodemocráticos colapsen. Pero sí quiere decir que la violencia criminal, sobre todo aquella más aguda y que se traduce en inseguridad generalizada, constituye una amenaza clara para los procesos de consolidación democrática.

Esto es especialmente cierto para los países más afectados por la violencia en Centroamérica. Habiendo examinado el carácter transicional de la mayoría de estos países, quedan pocas dudas sobre el impacto de la violencia y la inseguridad en el apoyo ciudadano a los regímenes democráticos de estos países. La violencia perjudica la frágil ruta hacia la democratización en los países centroamericanos de reciente democratización, no sólo porque desgasta directamente al Estado de derecho, o porque amenaza los derechos humanos más básicos de los ciudadanos—como ha sido el enfoque tradicional del problema en la región—, sino también porque puede destruir la infraestructura de legitimidad necesaria para los nuevos regímenes. Como lo mencionaba Seligson (2002), América Latina tiene una larga historia de inestabilidad y regresiones autoritarias. Centroamérica no es la excepción de esta tendencia



negativa; más aún, estos países han sido inestables aún sin haber conocido regímenes democráticos. A juzgar por la historia en otras latitudes, no hay ninguna razón para pensar que los actuales e híbridos regímenes democráticos estarán exentos de estos retrocesos, sobre todo cuando la violencia sigue afectando a los centroamericanos.

Referencias

- Agüero, Felipe y Stark, Jeffrey. (eds). *Fault Lines in Post-Transition Latin America*. Miami: North-South Center Press, 1998.
- Aguilar, Jeannette. *Metodologías para la cuantificación del delito*. San Salvador: Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), Centro de Estudios Penales de El Salvador (CEPES), 2002.
- Almond, Gabriel y Verba, Sydney. *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. Princeton: Princeton University Press, 1963.
- Bates, Robert. *Prosperity and Violence. The political economy of development*. New York: Norton, 2001.
- Bermeo, Nancy. *Ordinary People in Extraordinary Times. The Citizenry and the Breakdown of Democracy*. Princeton: Princeton University Press, 2003.
- Bodemer, Klaus. *El nuevo escenario de (in)seguridad en América Latina ¿Amenaza para la democracia?* Caracas: Nueva Sociedad, 2003.
- Booth, J. Costa Rica: Quest for Democracy. Boulder: Westview Press, 1998.
- Buvinic, Mayra; Morrison, Andrew y Shifter, Michael. “La violencia en América Latina y el Caribe”. In: Fernando Carrión (ed.). *Seguridad ciudadana, ¿espejismo o realidad?* Quito: FLACSO Ecuador- OPS/OMS, 2002.
- Carrión, Fernando. “Seguridad ciudadana en la comunidad andina”. *Iconos* 18 (2004), 119-129.
- Centro de Investigación Económicas Nacionales. (CIEN). *Estudio sobre la magnitud y el costo de la violencia en Guatemala*. Guatemala: CIEN, 2002.
- Córdova Macías, Ricardo. “Executive-Legislative Relations and the Institutionalisation of Democracy”. In: Rachel Sieder (ed.). *Central America: Fragile Transition*. London: Macmillan Press, 1996.
- Cruz, José Miguel. Violencia y democratización en Centroamérica: el impacto del crimen en la legitimidad de los regímenes de posguerra. *América Latina Hoy* 35 (2003): 19-59.
- . “Violencia, democracia y cultura política.” *Nueva Sociedad* 167 (2000): 132-146.
- Cruz, José Miguel y González, Luis Armando. “Magnitud de la violencia en El Salvador”. *Estudios Centroamericanos* 588 (1997): 953-966.
- Dammert, Lucía. “Violencia criminal y seguridad pública en América Latina: la situación en Argentina”. Serie políticas sociales No. 43. Santiago de Chile: CEPAL, 2000.
- De Mesquita Neto, Paulo. “Crime, Violence, and Democracy in Latin America”. Paper presented in the Conference Integration in the Americas. Albuquerque, New Mexico: April 5, 2002.
- Diamond, Larry. “Introduction: Political Culture and Democracy”. In: Larry Diamond (ed.). *Political culture and democracy in Developing Countries*. London: Lynne Rienner Publishers, 1993.
- Fajnzylber, Pablo; Lederman, Daniel y Loayza, Norman. *Crimen y violencia en América Latina*. Bogotá: Alfa y Omega, 2001.
- Fukuyama, Francis. *Trust. the social virtues and the creation of prosperity*. New York: Free Press, 1995.



- Gabaldón, Luis Gerardo. “Seguridad ciudadana y control del delito en América Latina”. Análisis y propuestas. El observatorio de Nueva Sociedad, 2004. [Puede encontrarse en: http://www.seguridadregional-fes.org/upload/1772-001_g.pdf] (Última fecha de acceso: 4 de marzo de 2007).
- Gabaldón, Luis Gerardo. “Desarrollo de la criminalidad violenta en América Latina: un panorama”. En: Bodemer, Klaus et al. *Violencia y regulación de conflictos en América Latina*. Caracas: Nueva Sociedad, 2001.
- Garland, Allison; Holding, Heather A.; Ruthenburg, Meg y Tulchin, Joseph. (eds.) *Crime and the threat to democratic governance*. Washington, D.C.: Woodrow Wilson Center for International Scholars, 2003.
- Gaviria, Alejandro y Pagés, Carmen. “Patterns of Crime Victimization in Latin America”. Working Paper No. 408. Washington, D.C: Interamerican Development Bank, 1999.
- Holden, Robert. “Constructing the Limits of State Violence in Central America: Towards a New Research Agenda”. *Journal of Latin American Studies* 28, 2 (1996): 435-459.
- Inglehart, Ronald. (1988). “The Renaissance of Political Culture”. *American Political Science Review* 82 (1998): 1203- 1230.
- Karstedt, Susanne. “Democracy, values, and violence: paradoxes, tensions, and comparative advantages of liberal inclusion”. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science* 605 (6) (2006): 50-81.
- Karstedt, Susanne y Lafree, Gary. “Democracy, Crime and Justice”. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science* 605 (6) (2006): 6-23.
- Klingemann, Hans-Dieter. “Mapping political support in the 1990’s: A global Analysis.”. En: Pippa Norris (ed.). *Critical citizens. Global support for democratic governance*. Oxford: Oxford University Press, 1999.
- Krug, Etienne H.; Dahlberg, Linda L.; Mercy, James A.; Zwi, Anthony B. y Lozano Rafael. (eds). *World Report on Violence and Health*. Geneva: World Health Organization Publications, 2002.
- Kurtenbach, Sabine. El nuevo escenario de (in)seguridad en América Latina: ¿amenaza para la democracia?. En: Klaus Bodemer. *El nuevo escenario de (in)seguridad en América Latina ¿Amenaza para la democracia?* Caracas: Nueva Sociedad, 2003.
- LaFree, Gary y Tseloni, Andromachi. “Democracy and crime: a multilevel analysis of homicide trends in forty-four countries, 1950-2000”. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science* 605 (6) (2006): 26-49.
- Linz, Juan y Stepan, Alfred. “Hacia la consolidación democrática”. *La Política* 2 (1996): 29 – 49.
- Linz, Juan. *La quiebra de las democracias*. Madrid: Alianza Editorial, 1989.
- Lipset, Seymour M. “The Social Requisites of Democracy Revisited”. *American Sociological Review* 59 (1994): 1, 1-22.
- . *Political man*. London: Mercury Books, 1960.
- Loader, Ian. “Policing, Recognition, and Belonging”. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science* 605 (6) (2006): 210-223.
- Londoño, Juan L., Gaviria, Alejandro y Guerrero, Rodrigo (eds.). *Violencia en América Latina. Asalto al desarrollo*. Washington, D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo, 2000.
- Mahoney, James. “Radical, reformist, and aborted liberalism: Origins of national regimes in Central America.” *Journal of Latin American Studies* 33, 2 (2001): 221-256.

- Méndez, Juan. "Problems of Lawless Violence: Introduction." In: Juan Méndez, Guillermo O'Donnell and Paulo Sergio Pinheiro (ed.). *The (Un)Rule of Law & the Underprivileged in Latin America*. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1999.
- Mockus, Antanas y Acero, Hugo. "Criminalidad y violencia en América Latina. La experiencia exitosa de Bogotá." *Seguridad Sostenible* 22 (sin fecha).
- Moreno, Alejandro. "Democracy and Mass Beliefs Systems in Latin America". In: Roderic Ai Camp (ed.). *Citizens views of Democracy in Latin America*. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2001
- Moser, Caroline y Holland, Jeremy. *La pobreza urbana y la violencia en Jamaica*. Washington D.C.: El Banco Mundial, 1997.
- Moser, Caroline y McIlwaine, Cathy. *Violence in a Post-Conflict Context: Urban Poor Perceptions from Guatemala*. Washington, D.C.: World Bank Publications, 2001.
- Moser, Caroline; Winton, Ailsa y Moser, Annalise. "Violence, Fear, and Insecurity among the Urban Poor in Latin America". En: Marianne Fay (ed.). *The urban poor in Latin America*. Washington, D.C.: The World Bank, 2005.
- Muller, Edward y Seligson, Mitchell A. "Inequality and Insurgency". *American Political Science Review* 81, 2 (1987): 425-452.
- Norris, Pippa. "Introduction: The Growth of Critical Citizens?" In: Pippa Norris (ed.). *Critical Citizens. Global Support for Democratic Government*. Oxford: Oxford University Press, 1999
- Pérez, Orlando. Democratic Legitimacy and Public Insecurity: Crime and Democracy in El Salvador and Guatemala. *Political Science Quarterly*, 118 (4) (2003). Winter 2003-2004.
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (PNUD). *La democracia en América Latina: Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos*. Buenos Aires: Alfaguara, 2004.
- Przeworski, Adam; Alvarez, Michael; Cheibub, José Antonio y Limongi, Fernando. "What makes democracies endure?" *Journal of Democracy* 7, 1 (1996): 39-55.
- Putnam, Robert A. *Making Democracy Work*. Princeton: Princeton University Press, 1993.
- Remmer, Karen. "Redemocratization and the impact of authoritarian rule in Latin America". *Comparative Politics* 17, 3 (1985): 253-275.
- Rustow, Dankwart. "Transitions to democracy: Toward a Dynamic Model". In: Lisa Anderson (comp.). *Transitions to Democracy*. New York: Columbia University Press, 1999.
- Seligson, Mitchell A. "The Impact of Corruption on Regime Legitimacy: A Comparative Study of Four Latin American Countries". *The Journal of Politics* 64, 2 (2002): 408-433.
- . "Toward a Model of Democratic Stability: Political Culture in Central America". *Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe* 11, 2 (2000): 1 – 22.
- Seligson, Mitchell y Azpuru, Dinorah. "Las dimensiones y el impacto político de la delincuencia en la población guatemalteca". En Luis Rosero Bixby (ed.), *Población del istmo 2000: Familia, migración, violencia y medio ambiente*. San José: Centro Centroamericano de Población, 2000.
- Tilly, Charles. *The Politics of Violence*. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
- Torres-Rivas, Edelberto. "Foundations: Central America". En: Manuel Antonio Garretón and Edward Newman, (eds). *Democracy in Latin America. (Re)Constructing Political Society*. New York: United Nations University Press, 2001.



Wielandt, Gustavo. “Hacia la construcción de lecciones del posconflicto en América Latina y el Caribe. Una mirada a la violencia juvenil en Centroamérica”. *Serie Políticas Sociales 115*. Santiago de Chile: CEPAL, 2005.

Anexos: Cuadros de regresión logística binaria según país

Tabla X.A.1: Guatemala. Variables en la Ecuación(b)

		B	E.S.	Wald	gl	Sig.	Exp(B)
Paso 1(a)	tamano	.095	.046	4.303	1	.038	1.100
	q1	.009	.135	.005	1	.946	1.009
	q2	.006	.005	1.559	1	.212	1.006
	ed	.025	.019	1.781	1	.182	1.026
	q10	.002	.042	.001	1	.970	1.002
	vic2r	.000	.003	.028	1	.866	1.000
	insecure	.004	.003	2.059	1	.151	1.004
	aoj17	-.137	.071	3.656	1	.056	.872
	n10	.205	.037	30.226	1	.000	1.228
	Constante	-2.351	.463	25.833	1	.000	.095

a Variable(s) utilizados en el primer paso: tamano, q1, q2, ed, q10, vic2r, insecure, aoj17, n10.
b país País = 2 Guatemala

Tabla X.A.2: El Salvador. Variables en la Ecuación(b)

		B	E.S.	Wald	gl	Sig.	Exp(B)
Paso 1(a)	tamano	.014	.045	.102	1	.750	1.014
	q1	-.518	.125	17.176	1	.000	.596
	q2	-.002	.004	.236	1	.627	.998
	ed	.012	.017	.463	1	.496	1.012
	q10	.011	.034	.097	1	.756	1.011
	vic2r	.000	.002	.024	1	.877	1.000
	insecure	.002	.002	1.490	1	.222	1.002
	aoj17	-.028	.064	.190	1	.663	.973
	n10	.288	.035	66.741	1	.000	1.334
	Constante	-1.269	.464	7.489	1	.006	.281

a Variable(s) utilizados en el primer paso: tamano, q1, q2, ed, q10, vic2r, insecure, aoj17, n10.
b país País = 3 El Salvador



Tabla X.A.3: Honduras. Variables en la Ecuación(b)

		B	E.S.	Wald	gl	Sig.	Exp(B)
Paso 1(a)	tamano	-.070	.056	1.563	1	.211	.933
	q1	-.087	.136	.412	1	.521	.916
	q2	.004	.005	.571	1	.450	1.004
	ed	.021	.020	1.063	1	.303	1.021
	q10	.053	.041	1.707	1	.191	1.055
	vic2r	-.002	.003	.763	1	.382	.998
	insecure	.008	.002	10.824	1	.001	1.008
	aoj17	.226	.092	6.026	1	.014	1.253
	n10	.321	.044	54.327	1	.000	1.379
	Constante	-3.658	.554	43.552	1	.000	.026
a Variable(s) utilizados en el primer paso: tamano, q1, q2, ed, q10, vic2r, insecure, aoj17, n10.							
b pais Pais = 4 Honduras							

Tabla X.A.4: Nicaragua. Variables en la Ecuación(b)

		B	E.S.	Wald	gl	Sig.	Exp(B)
Paso 1(a)	tamano	-.089	.051	3.029	1	.082	.915
	q1	-.027	.136	.040	1	.841	.973
	q2	-.001	.005	.044	1	.834	.999
	ed	-.004	.020	.031	1	.860	.996
	q10	.063	.037	2.867	1	.090	1.065
	vic2r	-.003	.003	1.635	1	.201	.997
	insecure	.004	.002	2.729	1	.099	1.004
	aoj17	.025	.072	.121	1	.728	1.025
	n10	.258	.037	48.926	1	.000	1.295
	Constante	-2.076	.481	18.653	1	.000	.125
a Variable(s) utilizados en el primer paso: tamano, q1, q2, ed, q10, vic2r, insecure, aoj17, n10.							
b pais Pais = 5 Nicaragua							

Tabla X.A.5: Costa Rica. Variables en la Ecuación(b)

		B	E.S.	Wald	gl	Sig.	Exp(B)
Paso 1(a)	tamano	.043	.037	1.304	1	.254	1.044
	q1	-.093	.115	.649	1	.421	.911
	q2	.008	.004	4.926	1	.026	1.008
	ed	.034	.016	4.591	1	.032	1.035
	q10	.054	.027	3.954	1	.047	1.056
	vic2r	.001	.002	.115	1	.735	1.001
	insecure	.002	.002	1.960	1	.162	1.002
	aoj17	.059	.055	1.165	1	.280	1.061
	n10	.199	.033	36.367	1	.000	1.220
	Constante	-2.079	.406	26.163	1	.000	.125
a Variable(s) utilizados en el primer paso: tamano, q1, q2, ed, q10, vic2r, insecure, aoj17, n10.							
b pais Pais = 6 Costa Rica							

Tabla X.A.6: Panamá. Variables en la Ecuación(b)

		B	E.S.	Wald	gl	Sig.	Exp(B)
Paso 1(a)	tamano	-.064	.044	2.062	1	.151	.938
	q1	-.023	.135	.029	1	.864	.977
	q2	.005	.005	1.035	1	.309	1.005
	ed	.002	.019	.016	1	.899	1.002
	q10	.069	.056	1.515	1	.218	1.072
	vic2r	.000	.004	.000	1	.988	1.000
	insecure	.006	.002	5.435	1	.020	1.006
	n10	.544	.051	114.054	1	.000	1.723
	Constante	-3.844	.473	66.119	1	.000	.021
	a Variable(s) utilizados en el primer paso: tamano, q1, q2, ed, q10, vic2r, insecure, n10.						
b pais Pais = 7 Panamá							

XI. La corrupción y su impacto sobre la estabilidad democrática en Latinoamérica*

Dominique Zéphyr **

Resumen

El objetivo de este estudio es analizar de una manera más amplia el impacto de la corrupción sobre las actitudes de los ciudadanos hacia la democracia. Para ello, se utiliza la medida de corrupción desarrollada por LAPOP, la cual como se demostrará supera las debilidades de los indicadores de percepción de la corrupción. Además, se evalúa el impacto de la victimización por corrupción sobre el apoyo al sistema político, y el apoyo a la democracia. Este último es medido por la satisfacción con la forma en que la democracia funciona en la práctica y el apoyo a la democracia como forma ideal de gobierno. Finalmente, la inclusión de la mayoría de países latinoamericanos en el Barómetro de las Américas permite alcanzar conclusiones más robustas sobre el impacto de la corrupción en la región.

¿Es la corrupción un desafío para la democratización en Latinoamérica y el Caribe? Tradicionalmente, los estudios sobre la corrupción se han concentrado principalmente en determinar el impacto que ésta tiene sobre el desarrollo macroeconómico y el bienestar socioeconómico de los países en desarrollo. Se ha argumentado que la corrupción afecta negativamente al comercio, disminuye los incentivos para la inversión, y frena el desarrollo y el crecimiento económico (World Bank 1997). Sin embargo, el impacto de la corrupción sobre el desarrollo político ha emergido recientemente como tema de debate en las ciencias sociales. Para algunos, la corrupción puede contribuir a la estabilidad política (Becquart-Leclercq 1989; Huntington 1968; Waterbury 1976), ya que puede hacer que las burocracias estatales funcionen más efectivamente. Por ejemplo, Becquart-Leclercq (1989) argumenta que “la corrupción funciona como el aceite en las ruedas; tiene un efecto importante distributivo, es un sustituto funcional para la participación directa en el poder, constituye el cemento entre las élites y los partidos, y afecta la efectividad con la cual se ejerce el poder” (192). Otros autores han señalado que la corrupción afecta negativamente las actitudes de los ciudadanos hacia la legitimidad del sistema político, y por ende representa una amenaza para la consolidación de los regímenes democráticos (Camp, et al. 2000; Della Porta 2000; Pharr 2000; Shin 1999).¹

El estudio de las consecuencias de la corrupción sobre la estabilidad democrática es particularmente relevante en el contexto latinoamericano, dado que los indicadores globales de corrupción indican que la mayoría de los países de la región presentan niveles altos de corrupción. El ex Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), César Gaviria, resalta los efectos perjudiciales de la corrupción y la importancia de este tema para

* El autor agradece las sugerencias y comentarios de Mitchell Seligson. Los errores y omisiones son sólo del autor.

** Coordinador de investigación del proyecto de Opinión Pública de América Latina.

¹ Para una revisión más exhaustiva de la literatura ver (Seligson 2002, 2006).



la región señalando que “la corrupción es un terrible cáncer que atenta contra la legitimidad de las instituciones y el estado de derecho, y en ese sentido todavía hay un largo trecho por recorrer en las Américas.”² La recolección de datos en los últimos años por medio de encuestas sobre la cultura política que incluyen ítems sobre la percepción y/o la experiencia de los ciudadanos con la corrupción ha hecho posible comprobar empíricamente la existencia de una relación negativa entre la corrupción y la legitimidad del sistema político. Canache y Allison (2005) utilizando los datos de la encuesta del World Values (1995-1997) en combinación con los de Transparencia Internacional (1997) encontraron que la *percepción* entre los ciudadanos de que la corrupción es alta conlleva a un menor apoyo a los gobiernos de turno y a las instituciones políticas en seis países latinoamericanos. Sin embargo, ellos no hallaron evidencia de que la percepción de la corrupción impacta el apoyo de los ciudadanos a la democracia como la mejor forma de gobierno.

Por otra parte, Seligson (Seligson 2002, 2006) desarrolló una metodología innovadora para medir la corrupción utilizando como base las encuestas del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP). Esta nueva metodología mide el nivel de corrupción basado en las *experiencias* de los ciudadanos con el soborno en su vida diaria, en lugar de la percepción sobre la corrupción. Seligson muestra que a nivel individual la experiencia con la corrupción se traduce en un menor apoyo al sistema político en los seis países latinoamericanos analizados, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Nicaragua, y Paraguay.

El objetivo de este estudio es analizar de una manera más amplia el impacto de la corrupción sobre las actitudes de los ciudadanos hacia la democracia. Para ello, se utiliza la medida de corrupción desarrollada por LAPOP, la cual como se demostrará supera las debilidades de los indicadores de percepción de la corrupción. Además, se evalúa el impacto de la victimización por corrupción sobre el apoyo al sistema político, y el apoyo a la democracia medido por la satisfacción con la forma en que la democracia funciona en la práctica y el apoyo a la democracia como forma ideal de gobierno. Finalmente, la inclusión de la mayoría de países latinoamericanos en el Barómetro de las Américas permite alcanzar conclusiones más robustas sobre el impacto de la corrupción en la región.

El análisis empírico de este trabajo está basado en las encuestas cara a cara del Barómetro de las Américas llevadas a cabo en el 2006/07 en diecisiete países latinoamericanos y caribeños. Para estas encuestas se utilizó una muestra aleatoria estratificada, por conglomerados y multietápico. Además, para efectos de comparación se toman en cuenta los datos de las encuestas por teléfono para Canadá y Estados Unidos recolectados también por LAPOP. En total, la base de datos contiene más de 30,000 observaciones.

La principal hipótesis de este estudio es que la experiencia con la corrupción afecta negativamente las opiniones de los ciudadanos sobre la democracia y su apoyo al sistema político. En otras palabras, teniendo en cuenta que se ha dicho que la existencia de una cultura política democrática conlleva a democracias más fuertes y duraderas, este estudio argumenta que

² Mensaje del Secretario General de la OEA, Cesar Gaviria, a la conferencia sobre “La adecuación de la legislación penal Dominicana a la convención contra la corrupción” Santo Domingo, República Dominicana, 30 de agosto de 2002.

la corrupción constituye un desafío a la democracia, ya que hace que los ciudadanos tengan una visión menos positiva sobre el desempeño de los regímenes democráticos. Este capítulo está organizado de la siguiente manera. En la primera sección se evalúan los niveles de corrupción en países latinoamericanos y caribeños, contrastando el Indicador de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional con el índice de victimización por corrupción de LAPOP. En la segunda sección, se examinan las modalidades más comunes de victimización por corrupción en Latinoamérica y el Caribe, es decir los lugares en los que los ciudadanos son más probables de ser víctimas de la corrupción. En la tercera sección, se determina quienes son más probables de ser víctimas de la corrupción tomando en cuenta las características individuales. Finalmente, en la última sección se pone a prueba la hipótesis principal de este capítulo, y luego se concluye.

El nivel de corrupción en la región

¿Qué tanta corrupción hay en América Latina y el Caribe? Para dar un primer vistazo a la magnitud de la corrupción en la región, se utiliza el Indicador de Percepción de la Corrupción (IPC) desarrollado por Transparencia Internacional en 1995. El IPC es la más antigua y la más conocida de las medidas de corrupción a gran escala.³ El IPC es un índice que oscila entre 1 y 10, donde un valor de uno indica un nivel máximo de corrupción y 10 un nivel mínimo de corrupción. El IPC del 2006 muestra que el promedio de corrupción en Latinoamérica y el Caribe era de 3.5. La región presentó, en promedio, niveles de corrupción más altos que la Unión Europea y Asia pero menores que África y Europa del Este. Sin embargo, de acuerdo a este índice, la región latinoamericana alberga a algunos de los países más corruptos del mundo, entre ellos Haití, Venezuela, y Ecuador. Además, veinticinco de los treinta países de la región para los cuales se estimó el IPC en el 2006 presentan niveles de corrupción inferiores a 5, y un tercio de los países tiene un puntaje menor a 3. Estos puntajes son preocupantes si se toma en cuenta que Transparencia Internacional considera que la corrupción es un problema “serio” en países con puntajes menores a 5, y un problema “generalizado” en países con puntajes menores de 3 (Transparency International 2006b).

La siguiente Tabla XI-1 muestra los niveles de percepción de la corrupción de acuerdo al IPC para los veintidós países de las Américas que fueron incluidos en el Barómetro de las Américas del 2006/07. Como puede observarse, existen diferencias substanciales en los niveles de percepción de la corrupción entre los países de las Américas que aquí se analizan. Chile es el país latinoamericano con el menor nivel de percepción de corrupción con un puntaje de 7.3 sobre 10, lo que lo ubica en la segunda posición entre los países de menos corrupción en las Américas junto con los Estados Unidos. Canadá es el país con el menor nivel de corrupción en las Américas de acuerdo al IPC. En contraste, Haití recibió el puntaje más bajo de la región (1.8), lo que lo sitúa no sólo como el país más corrupto de las Américas, pero asombrosamente como el país más corrupto del mundo. De acuerdo a los datos de Transparencia Internacional, Haití ocupa la última posición entre los 163 países para los cuales se recoge información sobre la percepción de la corrupción. Sin embargo, la corrupción no sólo parece ser alarmante en Haití, sino también

³ El otro índice global de la percepción de la corrupción que compite en popularidad con el IPC es el Indicador de Control de la Corrupción (ICC), el cual forma parte de la base de datos sobre gobernabilidad desarrollada en el Banco Mundial por el equipo de Kaufmann. Véase (Kaufmann, et al. 2006)



en nueve de los países analizados por el Barómetro de las Américas, ya que muestran niveles “generalizados” de percepción de la corrupción.

Tabla XI-1. Percepción de la corrupción en diecisiete países latinoamericanos.

País	Ranking mundial	Ranking regional	Puntuación Del IPC (2006)	Encuestas utilizadas	Rango de confiabilidad
Canadá	14	1	8.5	7	8.0 - 8.9
Chile	20	2	7.3	7	6.6 - 7.6
Estados Unidos	20	2	7.3	8	6.6 - 7.8
Uruguay	28	5	6.4	5	5.9 - 7.0
Costa Rica	55	7	4.1	5	3.3 - 4.8
El Salvador	57	8	4	5	3.2 - 4.8
Colombia	59	9	3.9	7	3.5 - 4.7
Jamaica	61	10	3.7	5	3.4 - 4.0
Brasil	70	14	3.3	7	3.1 - 3.6
México	70	14	3.3	7	3.1 - 3.4
Perú	70	14	3.3	5	2.8 - 3.8
Panamá	84	18	3.1	5	2.8 - 3.3
República Dominicana	99	21	2.8	5	2.4 - 3.2
Bolivia	105	22	2.7	6	2.4 - 3.0
Guatemala	111	23	2.6	5	2.3 - 3.0
Nicaragua	111	23	2.6	6	2.4 - 2.9
Paraguay	111	23	2.6	5	2.2 - 3.3
Guyana	121	26	2.5	5	2.2 - 2.6
Honduras	121	26	2.5	6	2.4 - 2.7
Ecuador	138	28	2.3	5	2.2 - 2.5
Venezuela	138	28	2.3	7	2.2 - 2.4
Haití	163	30	1.8	3	1.7 - 1.8

Fuente: (Transparency International 2006a).

A pesar de que el IPC ha sido uno de los mejores índices disponibles para llevar a cabo estudios comparativos sobre la corrupción a nivel global, el índice ha recibido numerosas críticas, lo que ha motivado la revisión de su metodología. Sin embargo, algunas críticas son inherentes al índice y hasta cierto punto, ponen en tela de juicio su validez. Seligson (2002, 2006) señala tres debilidades del IPC y de otras medidas de percepción de la corrupción. Primero, el índice se fundamenta en *percepciones* sobre de la corrupción y no en *hechos* de corrupción. Segundo, el índice se basa en opiniones de expertos nacionales e internacionales, lo que dificulta la separación de los estereotipos con la realidad. Tercero, las medidas de percepción sufren problemas de endogeneidad y por lo tanto no son confiables, ya que pueden ser fácilmente influenciadas por la prensa. Adicionalmente, Luna (2006) argumenta que “las percepciones pueden estar condicionadas por el impacto coyuntural de escándalos específicos siendo eventualmente más volátiles y tornándose fuertemente dependientes del momento en que se realiza la medición” (93).

Teniendo en cuenta las debilidades de las medidas de percepción de la corrupción, el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP) ha desarrollado una metodología que permite medir la corrupción a partir de las experiencias directas de los ciudadanos con actos corruptos. El Barómetro de las Américas incluyó la batería de preguntas sobre la victimización por corrupción que ha sido utilizada tradicionalmente en las encuestas de LAPOP. Se preguntó a los encuestados sobre su experiencia personal con la corrupción en diferentes contextos: si la policía les solicitó un soborno, si tuvieron que pagar sobornos a empleados públicos, y si tuvieron que pagar algún soborno en el trabajo y cuando realizaron transacciones en las municipalidades, hospitales, escuelas, y en los juzgados. El siguiente cuadro presenta de forma detallada las preguntas de la encuesta de LAPOP que se utilizan para medir el grado de victimización por corrupción entre los ciudadanos.

Ahora queremos hablar de su experiencia personal con cosas que pasan en la vida...
EXC2. ¿Algún agente de policía le pidió una mordida (o soborno) en el último año?
EXC6. ¿Un empleado público le ha solicitado una mordida (o soborno) en el último año?
EXC11. ¿Ha tramitado algo en la alcaldía en el último año? Para tramitar algo en la alcaldía (como un permiso, por ejemplo) durante el último año, ¿ha tenido que pagar alguna suma además de lo exigido por la ley?
EXC13. ¿Ud. trabaja? En su trabajo, ¿le han solicitado alguna mordida en el último año?
EXC14. ¿En el último año, tuvo algún trato con los juzgados? ¿Ha tenido que pagar una mordida en los juzgados en el último año?
EXC15. ¿Usó servicios médicos públicos en el último año? Para ser atendido en un hospital o en un puesto de salud durante el último año, ¿ha tenido que pagar alguna mordida?
EXC16. ¿Tuvo algún hijo en la escuela o colegio en el último año? En la escuela o colegio durante el último año, ¿tuvo que pagar alguna mordida?

En base a estos ítems, LAPOP ha creado dos índices de victimización por la corrupción. Uno de ellos tiene en cuenta el número total de maneras que las personas han sido víctimas de corrupción en el último año, y el otro refleja si la persona ha sido víctima o no de la corrupción. Teniendo en cuenta este último indicador, el Gráfico XI-1 muestra el porcentaje de personas que han sido víctimas de al menos un acto de corrupción en el último año en cada país.

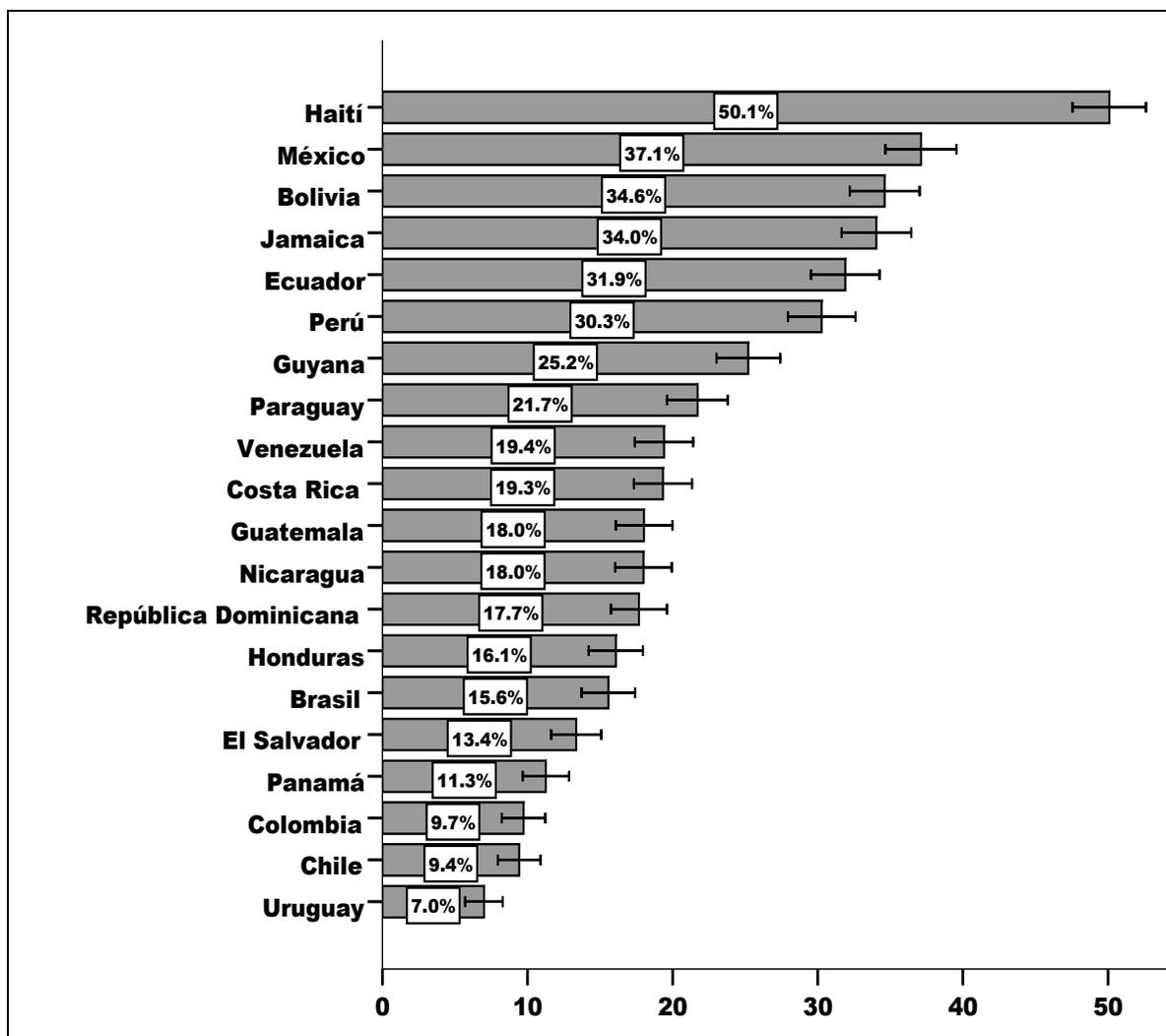


Gráfico XI-1. Porcentaje de la población que ha sido víctima de la corrupción al menos una vez en el último año

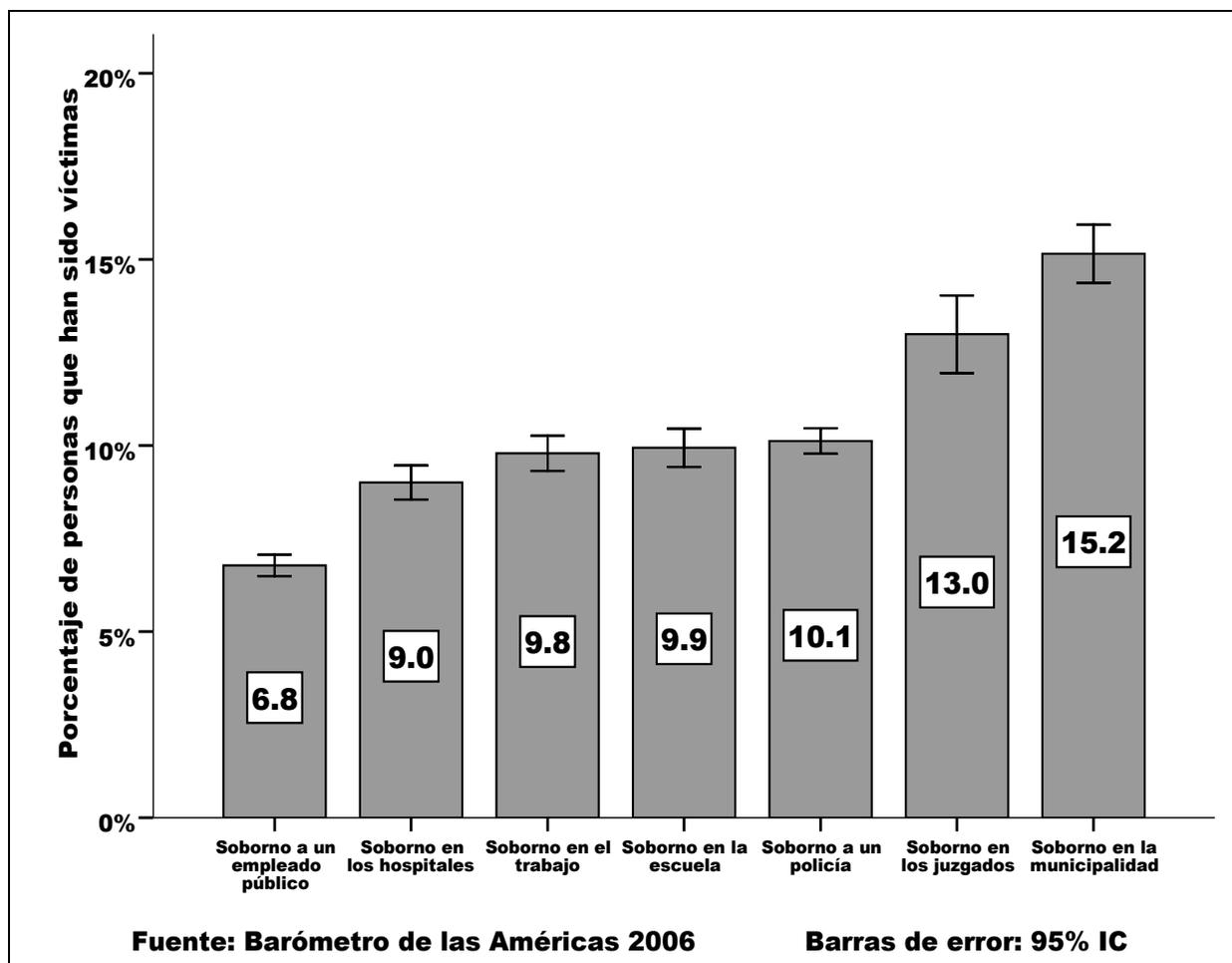
Como se observa en el Gráfico XI-1, el índice de victimización por corrupción de LAPOP constata que Chile es el líder de la región, ya que presenta el menor nivel de corrupción entre los países que se analizan. Por otra parte, Haití presenta el peor índice de victimización por corrupción, lo que también parece confirmar los resultados de Transparencia Internacional. Uno de cada dos haitianos ha declarado haber sido víctimas de un acto de corrupción, es decir el 50% de los haitianos han tenido que pagar sobornos, y este porcentaje es más del doble del promedio regional (22%).⁴ Aunque pareciera que el índice de victimización por corrupción desarrollado por LAPOP arroja resultados similares a los del IPC de Transparencia Internacional, se puede observar que existen diferencias sustanciales entre estos dos indicadores. En efecto, la correlación entre el IPC y el índice de victimización por corrupción es relativamente bajo ($r=0.47$). En la Tabla XI-1, Costa Rica aparecía como uno de los países con menores niveles de percepción de la corrupción, mientras que este país posee un nivel de corrupción similar al de Guatemala según el índice de victimización por corrupción de LAPOP. De hecho, los países centroamericanos,

⁴ Para mayor información sobre la corrupción en Haití, véase (Zéphyr, et al. 2007).

Guatemala, Honduras, y Nicaragua que se ubicaban entre los países con niveles de percepción de la corrupción “generalizados” o alarmantes, presentan niveles intermedios de victimización. Además, Jamaica y México, los cuales tenían un IPC intermedio pasan a formar parte del grupo de los seis países donde la magnitud del problema de la corrupción es grave, dado que más de un tercio de su población ha sido víctima. Teniendo en cuenta las limitaciones de los índices de percepción de la corrupción que se mencionaron anteriormente y las discrepancias entre los resultados que arrojan las dos metodologías que aquí se evalúan, se puede concluir que el índice de victimización por corrupción de LAPOP permite evaluar la magnitud de la corrupción en los países latinoamericanos de una manera más apegada a la realidad, ya que mide la experiencia de la gente con prácticas corruptas en su vida cotidiana.

Modalidades de victimización por corrupción en Latinoamérica y el Caribe

Una fortaleza adicional de la metodología para medir la corrupción desarrollada por LAPOP es que permite no sólo hacer comparaciones entre los países sino que también nos dice en que contextos se dan los actos de corrupción. Esta característica es importante, ya que proporciona información valiosa para el diseño de estrategias nacionales de combate a la corrupción, debido a que se puede identificar en que lugares son más frecuentes los actos de corrupción. La metodología de LAPOP se enfoca principalmente en medir los niveles de victimización por corrupción entre los usuarios de los servicios públicos. En otras palabras, para calcular el porcentaje de personas que han sido víctimas de la corrupción sólo se toma en cuenta a aquellos que en efecto han utilizado estos servicios. El Gráfico XI-2 presenta el porcentaje de las personas en Latinoamérica y el Caribe que han sido víctimas de la corrupción, teniendo en cuenta el lugar donde la persona afirmó haber sido víctima. Como puede observarse, los niveles de victimización por corrupción son más altos en las municipalidades (15.2%) y los juzgados (13%). También, los datos indican que, en promedio, sólo 6.8% de la población reportó haber sido víctima de un soborno por parte de un empleado público en la región.



GráficoXI-2. Modalidades de victimización de la corrupción en América Latina y el Caribe

Estos resultados regionales esconden diferencias substanciales entre los países. Por ejemplo, los resultados para la pregunta “¿un empleado público le ha solicitado un soborno en el último año?” por país son presentados en el Gráfico XI-3. Esta es la única pregunta de la batería sobre victimización por corrupción que ha sido incluida en los cuestionarios de Canadá y Estados Unidos, lo que permite comparar los niveles de victimización por un empleado público en Latinoamérica con los niveles de estos dos países. Como se puede observar, Ecuador, Bolivia, México y Paraguay aparecen con un grupo de casos con niveles relativamente homogéneos y más altos de victimización por corrupción. Los ciudadanos de estos países son 40 veces más probables de ser solicitados a pagar un soborno a un empleado público que los de Estados Unidos. Por otra parte, Chile, el cual presenta el menor nivel de victimización entre los países latinoamericanos, tiene un porcentaje dos veces más alto de personas que reportaron haber pagado un soborno a un empleado público que Canadá.

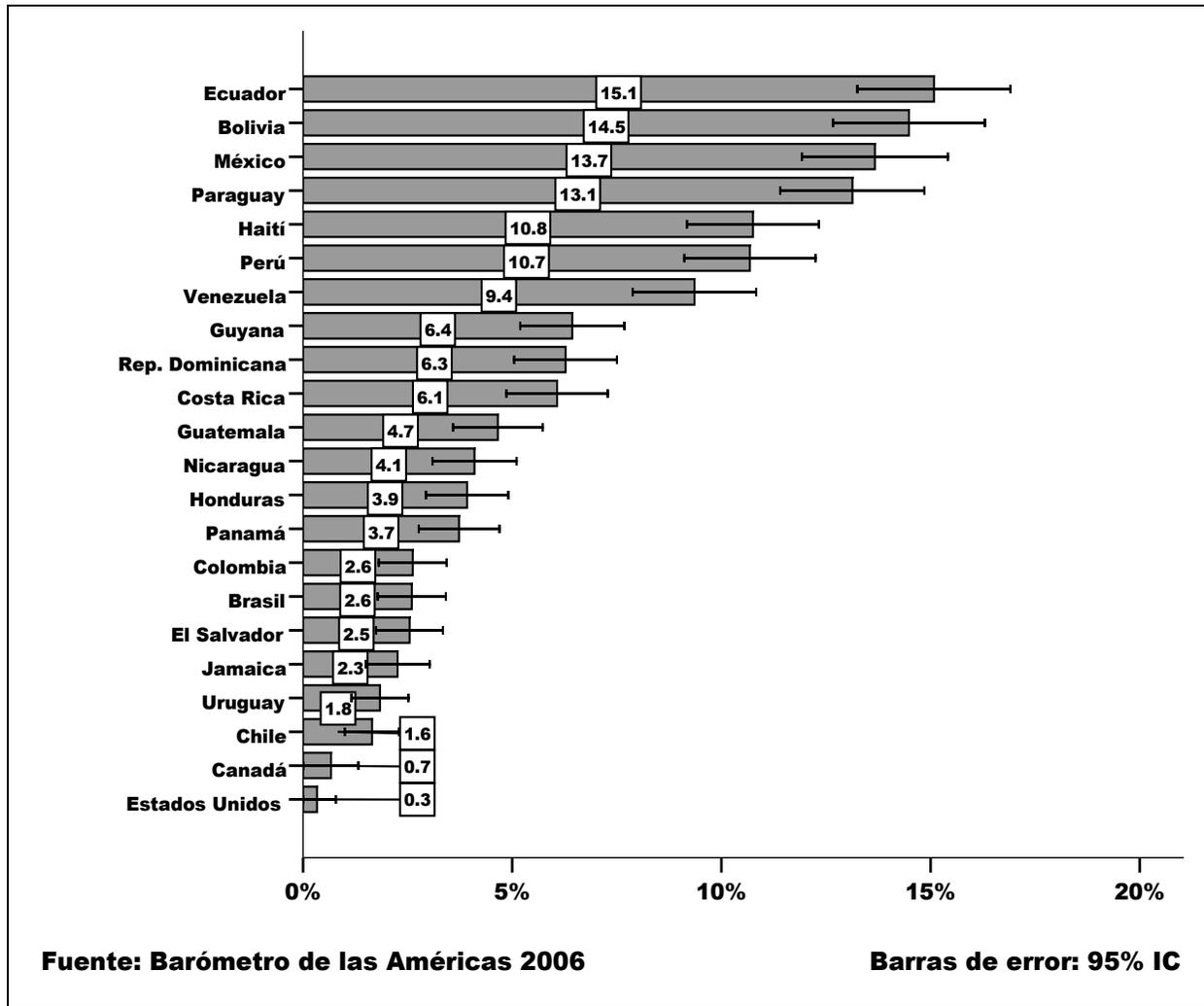


Gráfico XI-3. Empleado público pidió un soborno

En Latinoamérica y el Caribe, los niveles más altos de victimización por corrupción se hallan en las municipalidades. El 15.2% de las personas ha sido víctimas de la corrupción cuando realizaron transacciones en estas instituciones. Esto muestra la importancia del gobierno local en la vida del ciudadano en América Latina, pero también refleja que la corrupción es un problema serio para estos gobiernos. Como el Gráfico XI-4 muestra, el problema de corrupción en las municipalidades es muy serio sobre todo en Haití y también en Bolivia, México, Brasil, República Dominicana, Jamaica y Panamá donde los porcentajes de personas que han tenido que pagar un soborno son más altos que el promedio regional (15.2%). Corrupción en la municipalidad ha sido mencionada como una de las tres modalidades más frecuentes en todos los países de la región que fueron incluidos en el Barómetro de las Américas.

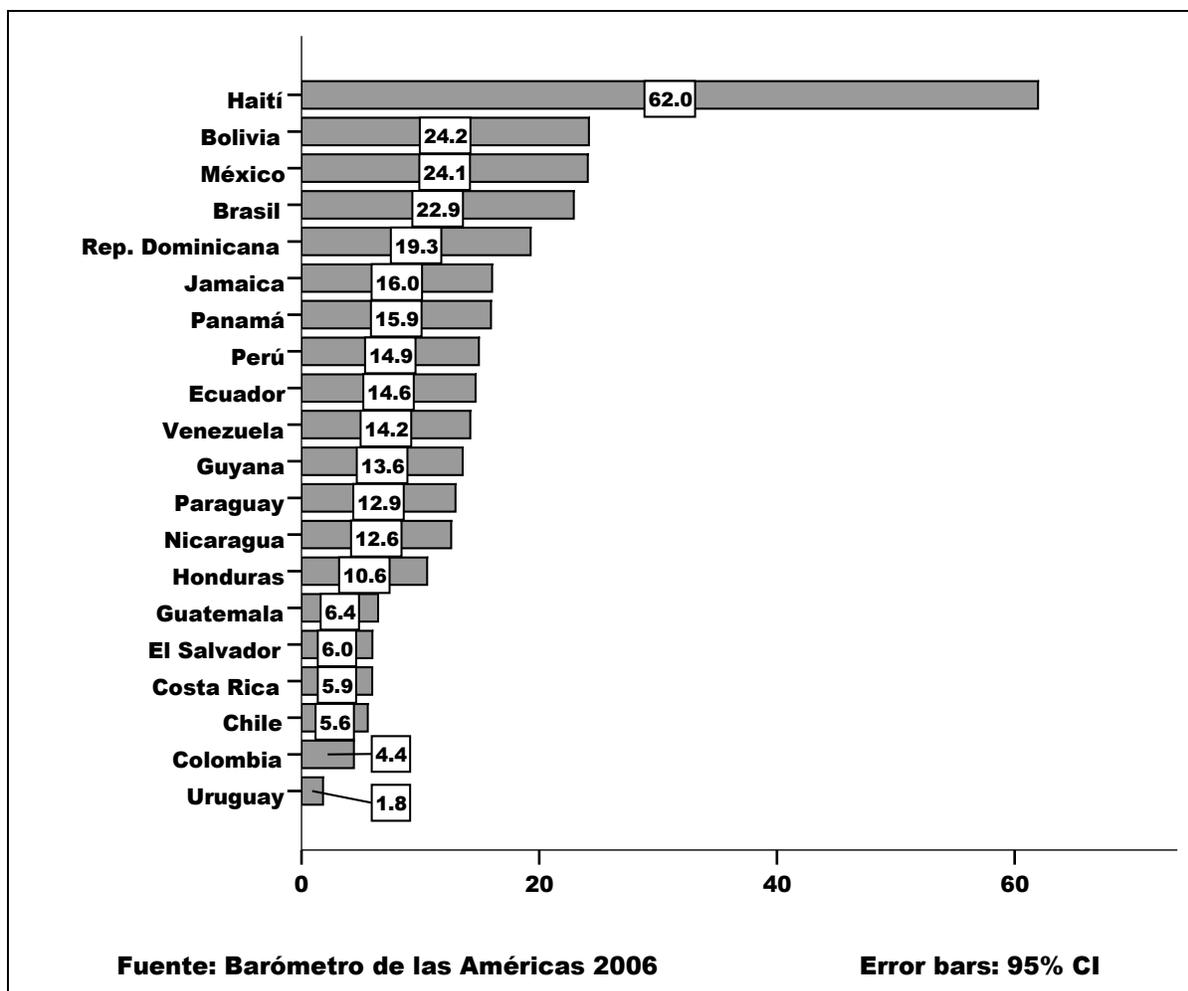


Gráfico XI-4. Sobornos en las municipalidades

Este resultado es particularmente relevante en el contexto latinoamericano, ya que la descentralización de recursos del gobierno central a los municipios está siendo impulsada como una estrategia para fomentar la gobernabilidad democrática, dado que se cree que esto conllevará a una mayor participación ciudadana y por lo tanto a una mayor rendición de cuentas (“accountability”) por parte de los funcionarios públicos. Sin embargo, como se mostró en el capítulo V en este libro, titulado “¿Descentralizar o centralizar? Desafíos para la reforma estatal y la democracia en América Latina y el Caribe”, la descentralización no es bien vista por muchos ciudadanos. De hecho, solamente uno de cada dos ciudadanos latinoamericanos apoya a la descentralización. Teniendo en cuenta los resultados de este capítulo, una hipótesis que surge es que la opinión dividida sobre la descentralización en Latinoamérica podría estar asociada con los altos niveles de corrupción que se experimentan en las municipalidades. El Gráfico XI-5 presenta evidencia a favor de esta hipótesis ya que aquellos que han tenido que pagar sobornos en las municipalidades poseen un menor nivel de apoyo a la descentralización de recursos y poderes a los gobiernos locales. Los resultados del Barómetro de las Américas sugieren que la descentralización debe ir acompañada por esfuerzos de combate a la corrupción en las municipalidades si se quiere lograr que la descentralización sea apoyada por la mayoría de la población y también, si se quiere evitar que las transferencias de poder y recursos a las municipalidades no provoquen un aumento de los niveles de victimización por corrupción.

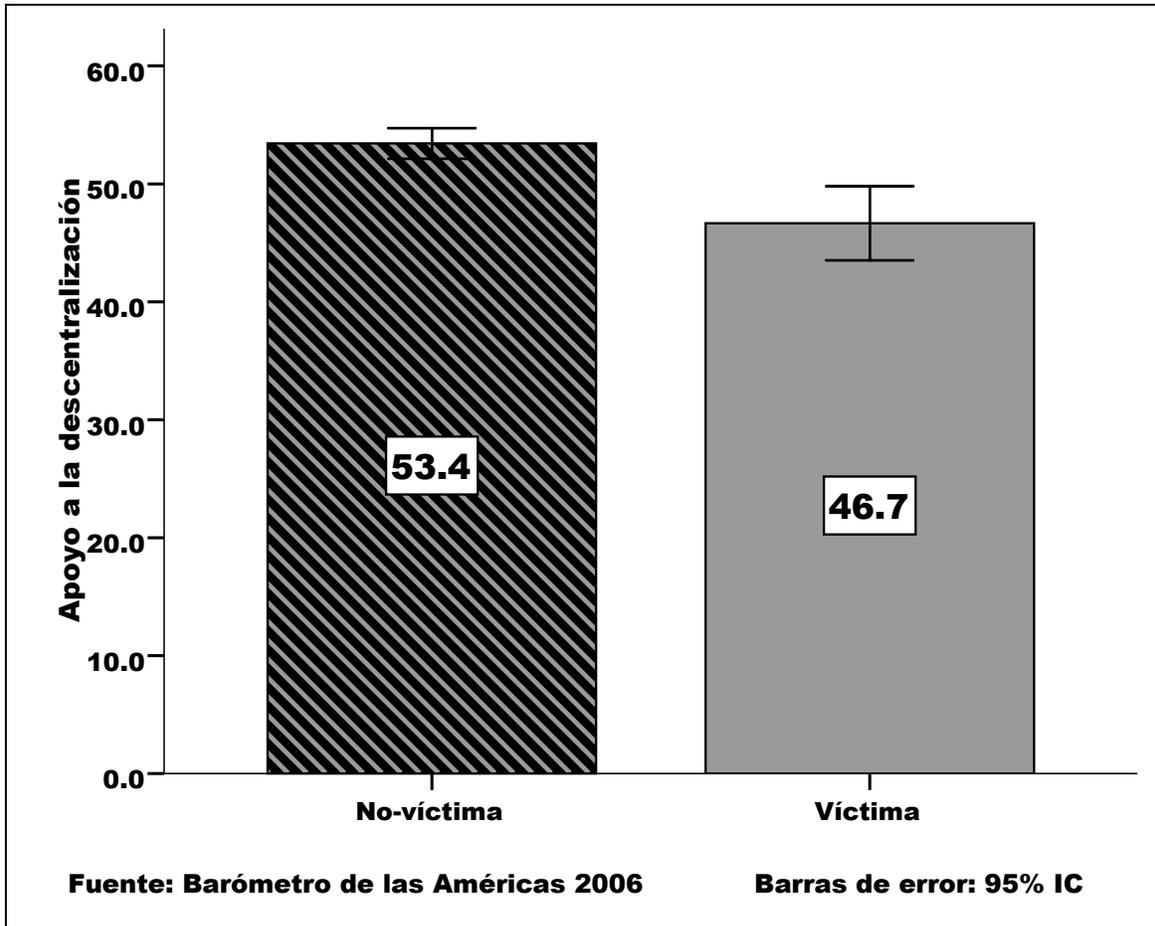


Gráfico XI-5. Impacto de la victimización por corrupción en las municipalidades sobre el apoyo a la descentralización

El segundo nivel de victimización más alto ocurre en los juzgados. En promedio, un 13% de las personas afirmaron haber sido víctimas de la corrupción cuando realizaron transacciones en los juzgados. El Gráfico XI-6 indica que alrededor del 3% de las personas que tuvieron algún trato con los juzgados padeció una exigencia de soborno en El Salvador, Costa Rica, y Colombia, mientras que uno de cada dos haitianos y uno de cada cuatro mexicanos han tenido la experiencia de pago de soborno en los juzgados.

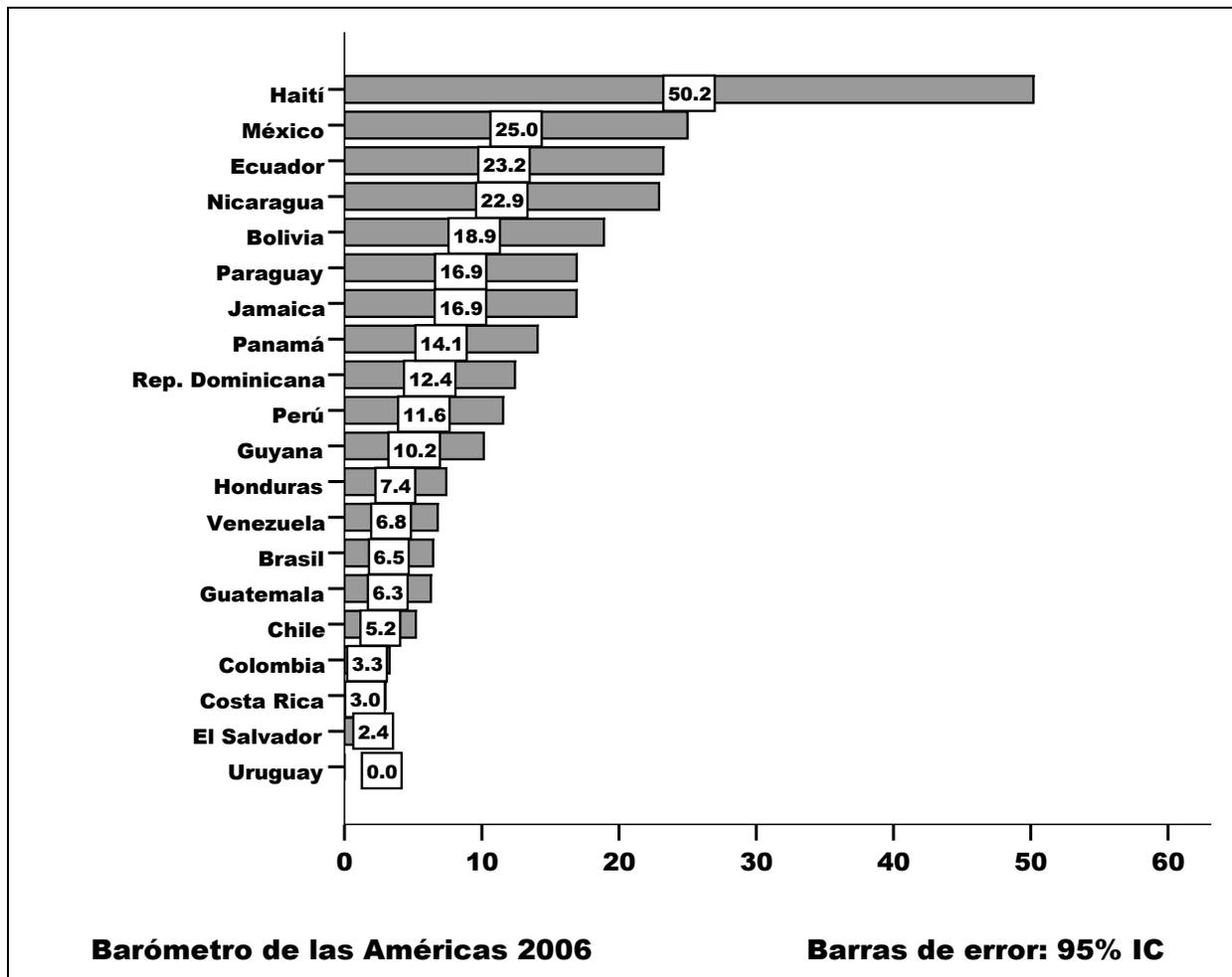


Gráfico XI-6. Sobornos en los juzgados

Tal como se señala en el capítulo XII de este libro, ser víctima de la corrupción tiene un impacto negativo sobre la confianza en las instituciones que garantizan el estado de derecho en las sociedades democráticas latinoamericanas, y la alta corrupción que se da en los juzgados parece estar explicando en parte este resultado. Como se muestra en el Gráfico XI-7, en efecto, las personas que han sido víctimas de la corrupción en los juzgados tienen un nivel de confianza menor en el sistema de justicia.

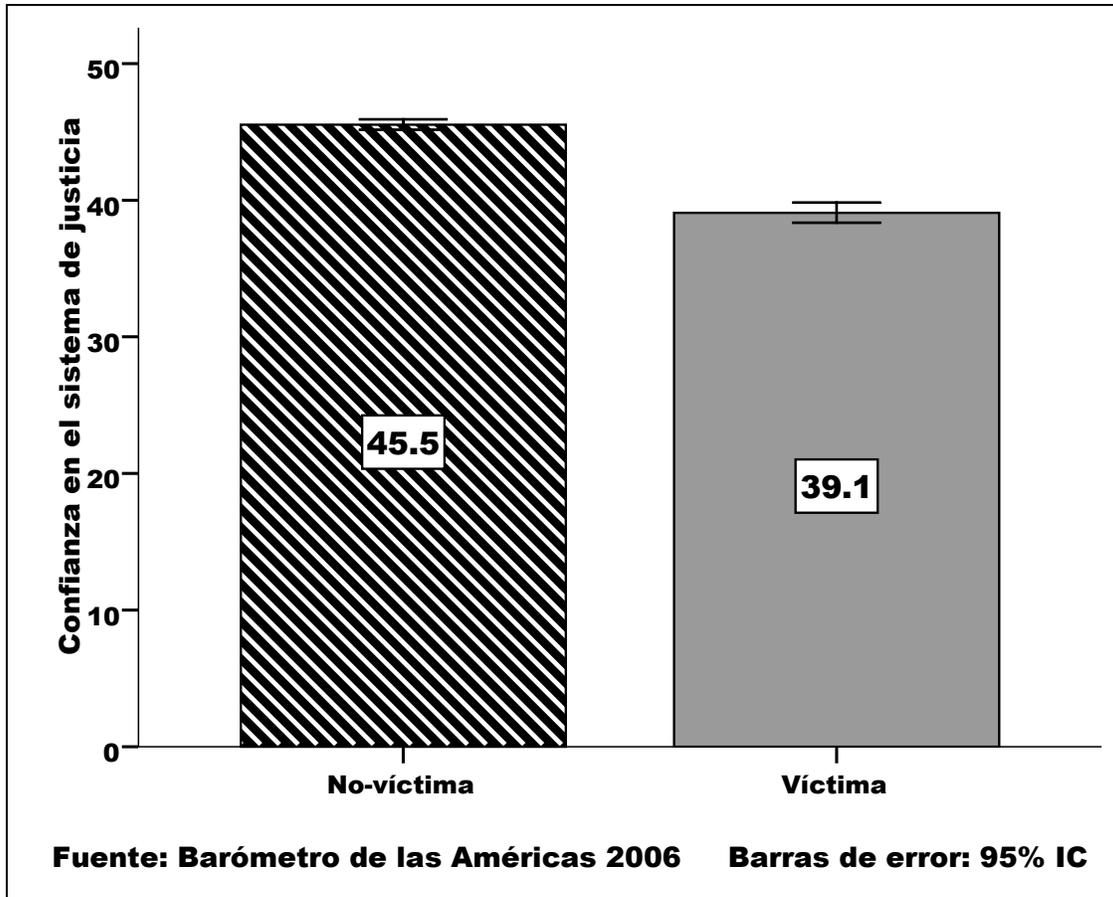


Gráfico XI-7. Impacto de la victimización por corrupción en los juzgados sobre la confianza en el sistema de justicia

¿Quiénes son más probables de ser víctimas de la corrupción?

Para responder esta pregunta, se construyó un modelo de regresión logística donde la variable dependiente indica si el encuestado fue víctima o no de al menos un acto de corrupción en el último año. Las variables independientes son el género, la edad, el nivel de educación, el nivel de ingreso, el estado civil, y el tamaño de la ciudad de residencia. Estas variables han sido tomadas en cuenta, ya que análisis anteriores han mostrado consistentemente que la corrupción no afecta a todos los ciudadanos por igual.⁵ Los resultados de la regresión aparecen en la Tabla XI-2. Se observa que la mayoría de las variables incluidas son factores relevantes estadísticamente ($p < 0.05$), excepto la variable de estado civil. A partir de los coeficientes estimados en la regresión, se calculó la probabilidad de ser víctima de la corrupción teniendo en cuenta el género de los entrevistados, y manteniendo las otras variables constantes a su valor promedio. Además, se calculó la probabilidad de ser víctima teniendo en cuenta el efecto individual de la edad, el ingreso, y la educación.

⁵ Ver los informes de los resultados de las encuestas nacionales de LAPOP en www.lapopsurveys.org



**Tabla XI-2. Determinantes de la victimización por la corrupción en América Latina y el Caribe
(Resultados de la regresión logística)**

	Coefficiente	Dev. estándar	t	Sig.
Género	0.490	0.033	15.040	0.000
Edad	-0.012	0.001	-8.290	0.000
Educación	0.059	0.006	10.680	0.000
Ingreso	0.019	0.010	1.830	0.067
Estado civil (casado)	0.085	0.037	2.300	0.022
Número de hijos	0.070	0.010	6.950	0.000
Tamaño de la ciudad de residencia	-0.017	0.019	-0.900	0.369
Constante	-1.880	0.111	-16.870	0.000

Variable dependiente: 0= no víctima; 1= víctima de la corrupción
 Número de observaciones: 25,289
 Efecto de diseño = 1581
 $F(7, 1575) = 71.68$

El Gráfico XI-8 muestra que las mujeres tienen una menor probabilidad de ser víctimas de la corrupción que los hombres. En promedio, las mujeres son 8% menos probables de ser víctimas de la corrupción. Esto se debe a que en Latinoamérica todavía existe una brecha de participación en los asuntos públicos entre hombres y mujeres, desfavoreciendo a las últimas. Esto reduce las situaciones en que las mujeres pueden ser victimizadas.

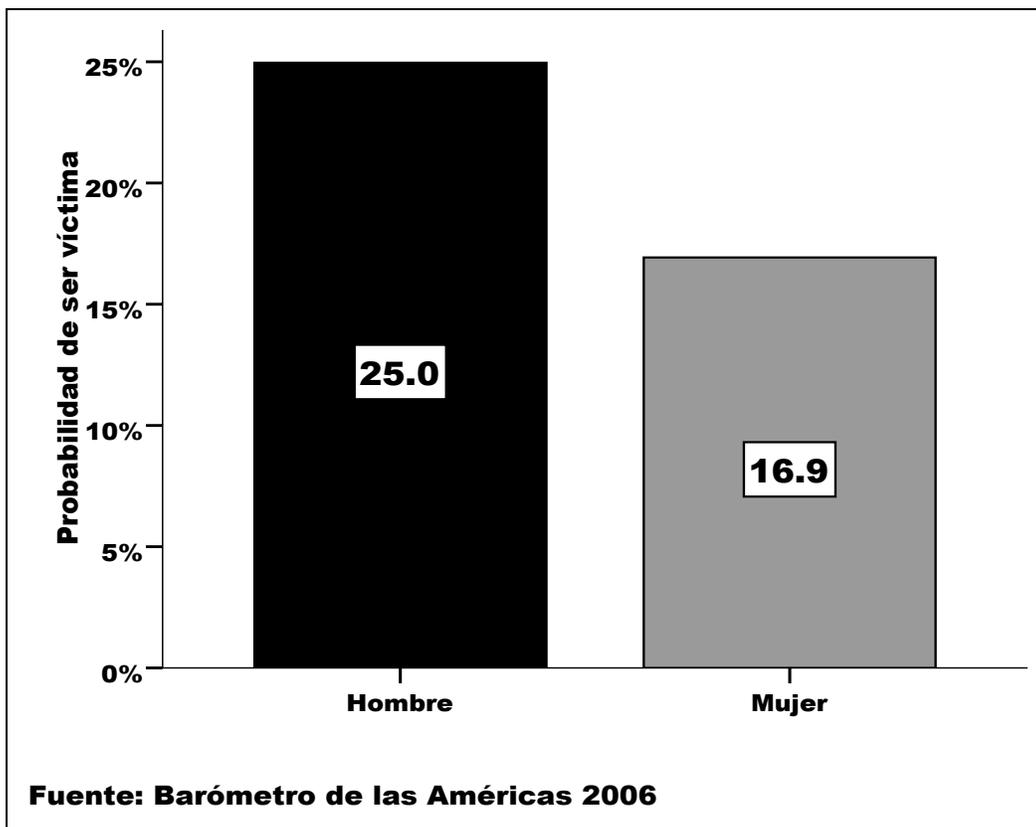
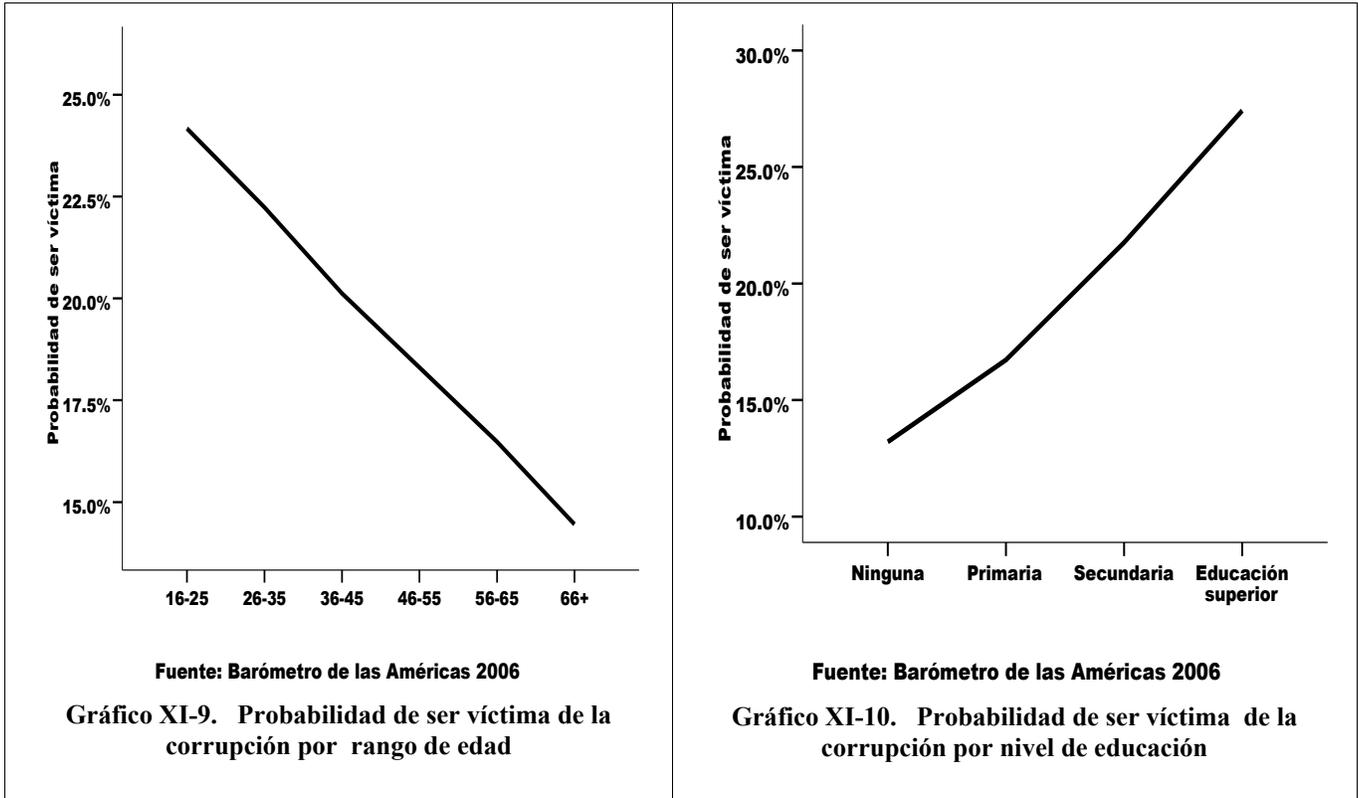


Gráfico XI-8. Probabilidad de ser víctima de la corrupción por género

Como se observa en el Gráfico XI-9, las personas jóvenes son más vulnerables a ser víctimas de la corrupción. Al juzgarse por la institución donde los niveles de corrupción son más altos, las municipalidades, se puede inferir que los jóvenes son más propensos a ir a estas instituciones a realizar trámites, tales como sacar actas de nacimiento o permisos, lo que les incrementa las oportunidades de estar expuestos a una mayor victimización por corrupción en comparación a las personas de más edad.



Por otra parte, se espera que personas con un mayor status socioeconómico sean más propensas a ser víctimas de la corrupción, ya que éstas tienen más recursos económicos y por tanto están más dispuestas a pagar un soborno y al mismo tiempo participan más en los asuntos públicos. El Gráfico XI-10 muestra que la educación es un factor que está asociado a la victimización; entre mayor es el nivel de educación, mayor la probabilidad de ser víctima de la corrupción. Además, los resultados de la regresión indican que existe una relación positiva estadísticamente significativa entre el ingreso y la victimización por corrupción. Estos dos resultados confirman que las personas con un mayor nivel socioeconómico son más probables de ser víctimas de sobornos.

La corrupción y su impacto sobre la democracia

Esta sección examina el impacto que tiene la corrupción sobre la estabilidad democrática. El apoyo generalizado a la democracia por parte de los ciudadanos es reconocido en la literatura política como un elemento importante para el establecimiento de regímenes democráticos



durables y estables (Almond y Verba 1963; Diamond 1999). En esta sección, se analiza en qué medida la incidencia de la corrupción en la forma de pago de sobornos a los empleados públicos afecta las opiniones de los ciudadanos sobre la democracia. Específicamente, se analiza si ser víctima de la corrupción afecta el apoyo a la democracia tal como existe en la práctica, medido por la satisfacción de los individuos con la forma en que la democracia funciona en sus países, y el apoyo a la democracia como forma ideal de gobierno, es decir el apoyo normativo a la democracia.

También, en esta sección se analiza el efecto de la victimización por corrupción sobre las opiniones de los ciudadanos acerca de la legitimidad del sistema político. Easton (1965; 1975) define la legitimidad política como la “convicción de que es justo y conveniente obedecer a las autoridades y someterse a las exigencias del régimen (1975, 451). De forma similar, Lipset (1994) indica que la “legitimidad incluye la capacidad de un sistema político de generar y mantener la convicción de que las instituciones políticas existentes son las más apropiadas y adecuadas para la sociedad” y considera a la legitimidad como un requisito para el mantenimiento y la estabilidad de la democracia. El argumento es que un sistema político que a tiene legitimidad los ojos de los ciudadanos tendrá un nivel alto de apoyo para sus instituciones. Es por esto que, además de examinar el efecto de ser víctima de la corrupción sobre la satisfacción y el apoyo a la democracia, se investiga su efecto sobre la legitimidad política. Se espera que la victimización por corrupción le reste legitimidad al sistema político de los países latinoamericanos, y al mismo tiempo conlleve a un menor apoyo a la democracia, ya que la corrupción hace que los ciudadanos pierdan confianza en las instituciones del sistema político y en el desempeño de los regímenes democráticos.

Victimización por corrupción y satisfacción con la democracia

La primera variable dependiente que se analiza es la satisfacción con la “forma en que la democracia funciona.” Esta variable se mide en el Barómetro de las Américas por medio de la siguiente pregunta: “*En general, ¿Ud. diría que está muy satisfecho, satisfecho, insatisfecho o muy insatisfecho con la forma en que la democracia funciona en [el país]?*” La satisfacción con la democracia refleja la percepción de los ciudadanos de cómo funciona en la práctica el régimen democrático en su país. Es decir, la satisfacción se refiere a cómo funciona la democracia en la práctica y no a la democracia como forma ideal de gobierno (Bratton, et al. 2004).

El Gráfico XI-12 muestra que el nivel de satisfacción con la forma en que funciona la democracia en Latinoamérica es relativamente bajo. El promedio regional de satisfacción con la democracia es 46.8 en una escala de 0 a 100 puntos. Sin embargo, la satisfacción con la democracia varía entre los países. Como puede observarse en el gráfico, los países con los niveles más bajos de satisfacción con la democracia son Paraguay (27.6) y Ecuador (36.5). Por otro lado, Uruguay muestra el nivel más alto de satisfacción con la democracia (62.2), seguido por Bolivia (54.1).

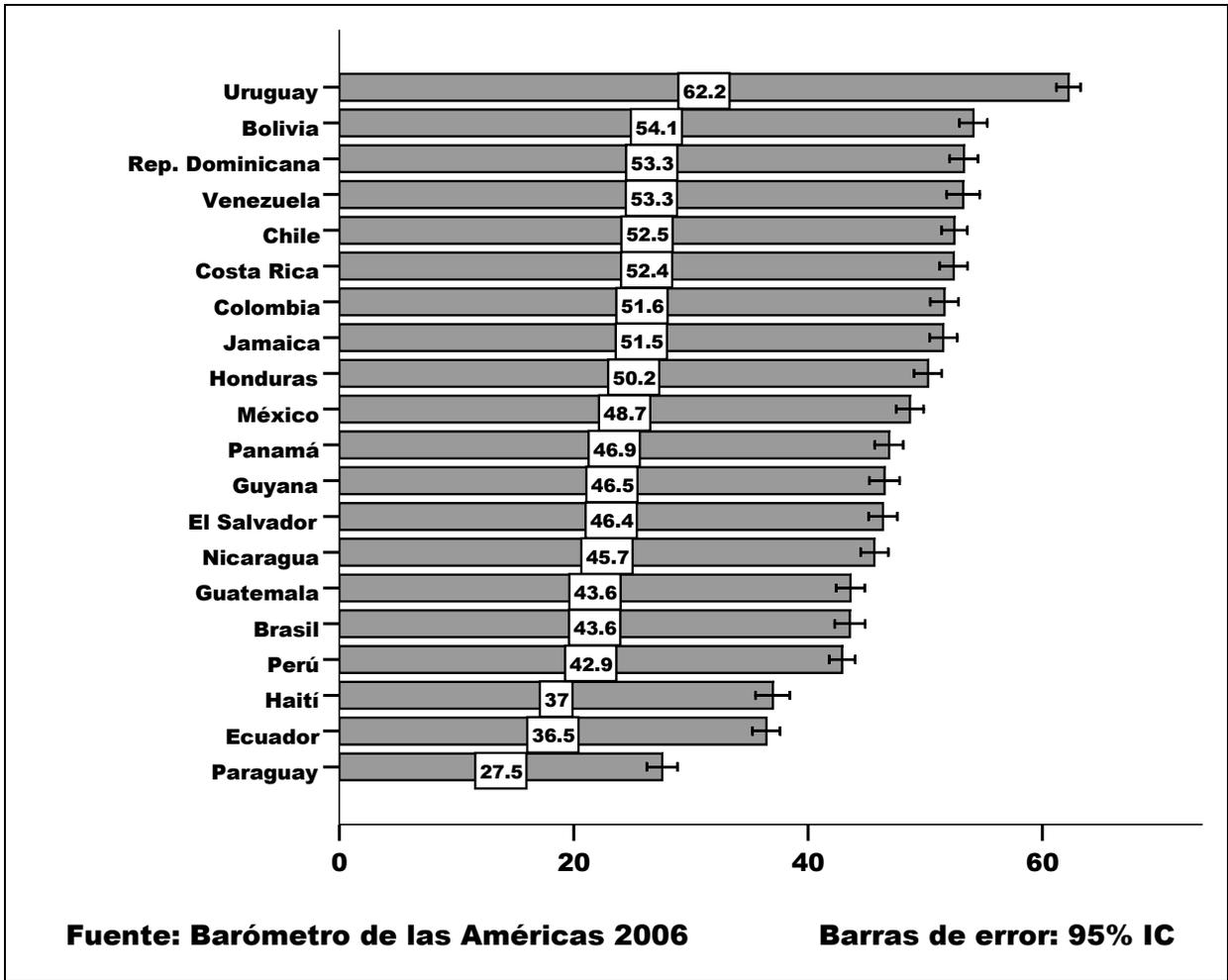


Gráfico XI-12. Satisfacción con la forma en que la democracia funciona

Para determinar el impacto de la victimización por corrupción sobre la satisfacción con la forma en que funciona la democracia, se construyó un modelo de regresión. Los predictores que se incluyeron en la regresión son el número total de maneras que la persona ha sido víctima de corrupción en el último año, las variables sociodemográficas usuales, género, edad, educación, riqueza, y el área de residencia, y variables dummies o dicotómicas para cada país, las cuales toman en cuenta las diferencias en los niveles de satisfacción con la democracia entre ellos. Además, se incluyen variables que miden el grado de aprobación al gobierno en turno, la percepción de la situación económica del país, y victimización por crimen. Los resultados de la regresión se presentan en la Tabla XI-3, los cuales indican que la experiencia con la corrupción influye negativamente sobre como las personas evalúan el funcionamiento de la democracia. Ser víctima de la corrupción está asociado a una reducción en el nivel de satisfacción personal con la democracia.



Tabla XI-3. Determinantes de la satisfacción con la forma en que la democracia funciona

	Coefficiente.	Dev. Est.	T	Sig.
Número total de maneras que han sido víctimas de corrupción en el último año	-0.534	0.165	-3.240	0.001
Satisfacción con el desempeño del presidente actual	0.297	0.006	49.720	0.000
Victimización por crimen	-0.023	0.003	-6.610	0.000
Percepción de la situación económica del país	0.155	0.006	25.090	0.000
Género	0.158	0.255	0.620	0.535
Edad	0.024	0.009	2.710	0.007
Educación	-0.772	0.192	-4.020	0.000
Riqueza	-0.254	0.080	-3.160	0.002
urbano	-1.249	0.300	-4.160	0.000
Constante	29.988	0.882	33.990	0.000
Número de obs =29469				
F(28, 29440) = 278.01				
R-Cuadrado Adj. = 0.2084				
Variable dependiente: Satisfacción con la forma en que la democracia funciona				
Dummy para los países (País de referencia: México).				

Victimización por corrupción y apoyo a la democracia como forma ideal de gobierno

Como se mencionó anteriormente, uno de los requisitos para la consolidación de la democracia en país es el apoyo generalizado a la democracia entre sus ciudadanos como forma ideal de gobierno. En el Barómetro de las Américas, se mide el nivel de apoyo a la democracia por medio de la siguiente pregunta, usando una escala de 1 a 7: *“Puede que la democracia tenga problemas pero es mejor que cualquier otra forma de gobierno. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con esta frase?”*.

El Gráfico XI-13 muestra que el nivel de apoyo a la democracia como mejor forma de gobierno es alto en todos los países de la región. El promedio regional de apoyo a la democracia es de 69.9. De hecho, Perú y Panamá, los países que presentan los niveles más bajos de apoyo a la democracia, tienen un nivel de apoyo superior a 50 puntos en una escala de 0 a 100. El gráfico sugiere que la demanda de la democracia es mayor que su oferta, es decir, los ciudadanos de la región tienen un nivel alto de apoyo a la democracia como forma ideal de gobierno, mientras que tienen niveles bajos de satisfacción con cómo funciona la democracia en la práctica en sus países.

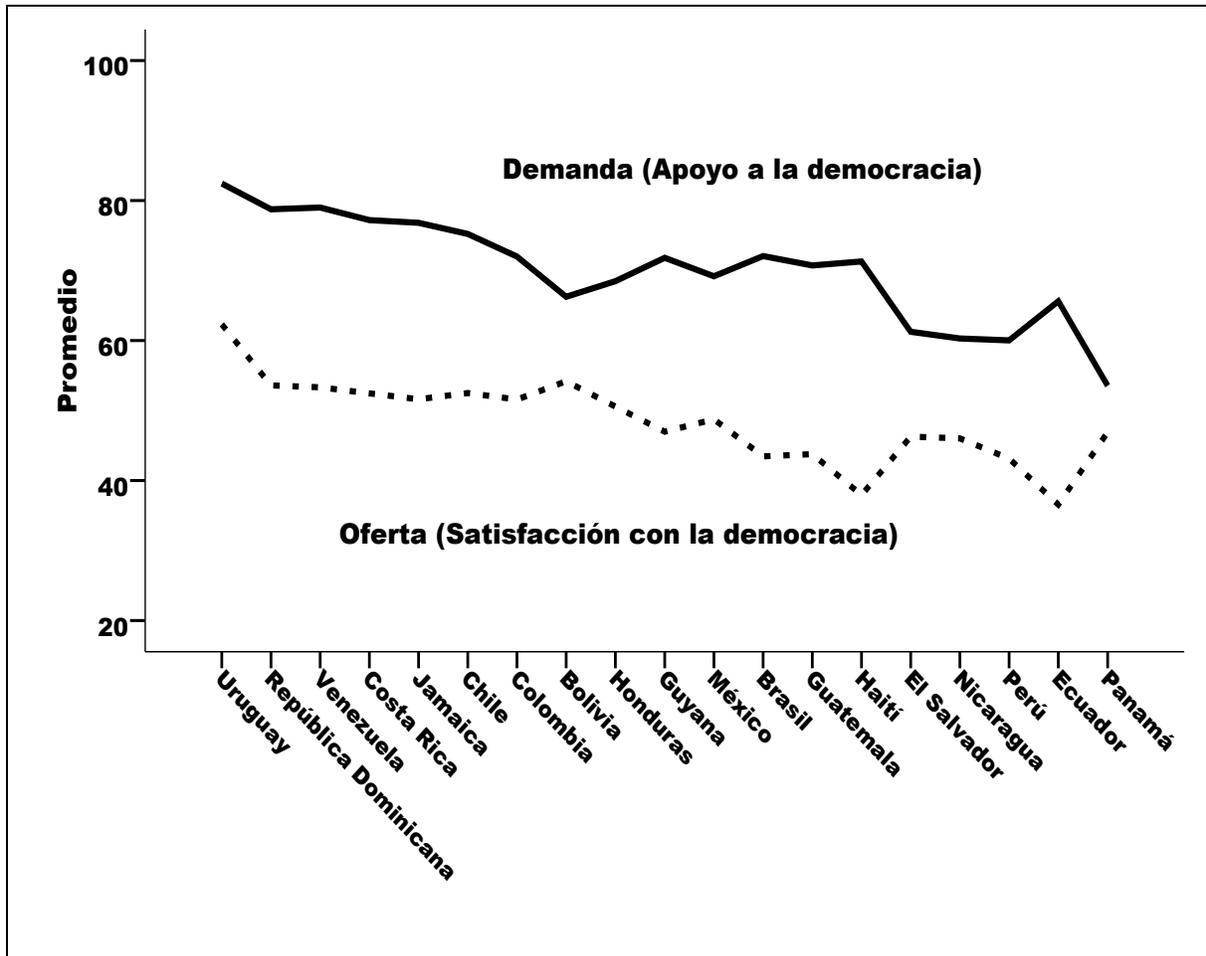


Gráfico XI-13. Oferta y demanda de la democracia en Latinoamérica y el Caribe

¿Afecta la victimización por corrupción al apoyo a la democracia como forma ideal de gobierno? Para responder esta pregunta, se estimó el modelo anterior de regresión, pero esta vez con el apoyo a la democracia como variable dependiente. Como los resultados lo indican (ver Tabla XI-4), la victimización por corrupción tiene un efecto negativo estadísticamente significativo sobre la propensión de los ciudadanos latinoamericanos para expresar apoyo a la democracia como forma de gobierno. Este resultado contradice las conclusiones de Canache y Allison (2003), quienes no encontraron evidencia empírica de que la corrupción afecta las opiniones de los ciudadanos sobre la democracia como forma de gobierno utilizando medidas de percepción de la corrupción.



Tabla XI-4. Determinantes del apoyo a la democracia como forma de gobierno

	Coefficiente.	Dev. Est.	T	Sig.
Número total de maneras que han sido víctimas				
de corrupción en el último año	-1.101	0.216	-5.090	0.000
Satisfacción con el desempeño del presidente actual	0.148	0.008	18.890	0.000
Victimización por crimen	-0.013	0.004	-3.010	0.003
Percepción de la situación				
económica del país	0.047	0.008	5.820	0.000
Género	0.896	0.330	2.710	0.007
Edad	0.148	0.012	12.830	0.000
Educación	2.703	0.248	10.910	0.000
Riqueza	0.430	0.104	4.150	0.000
urbano	-0.831	0.389	-2.130	0.033
Constante	48.234	1.136	42.470	0.000
Número de obs = 28261				
F(27, 28233) = 105.12				
R-Cuadrado adj. = 0.0905				
Variable dependiente: Apoyo a la democracia como forma de gobierno				
Dummy para los países (País de referencia: México).				

Victimización por corrupción y apoyo al sistema político

El Barómetro de las Américas incluye una batería de cinco preguntas que usa una escala de 1-7 para medir la legitimidad del sistema político entre los ciudadanos.⁶ Los resultados de la regresión del apoyo al sistema son presentados en el anexo. La variable de estudio, victimización por corrupción, guarda una relación negativa con la legitimidad del sistema, aun después de tener en cuenta de las variables de control, tal como se puede apreciar en la Tabla XI-5 en el anexo de este capítulo. Como puede observarse en el Gráfico XI-14, los entrevistados que no fueron víctimas de la corrupción tienen significativamente más confianza en el sistema. A medida que el número de maneras de actos corruptos al que se ha estado expuesto aumenta, el apoyo al sistema disminuye. Además, se comprobó que este resultado se mantiene cuando se utiliza el índice alternativo de victimización por corrupción de LAPOP, es decir el que únicamente toma en cuenta si la persona ha sido víctima o no de corrupción. En conclusión, estos resultados confirman la evidencia empírica de estudios anteriores que han encontrado que la corrupción corroe el apoyo al sistema político y que por lo tanto le resta legitimidad frente a los ciudadanos (Seligson 2002, 2006; Canache y Allison 2005).

⁶B1. ¿Hasta qué punto cree usted que los tribunales de justicia garantizan un juicio justo?

B2. ¿Hasta qué punto tiene usted respeto por las instituciones políticas del país?

B3. ¿Hasta qué punto cree usted que los derechos básicos del ciudadano están bien protegidos por el sistema político del país?

B4. ¿Hasta qué punto se siente usted orgulloso de vivir bajo el sistema político del país?

B6. ¿Hasta qué punto piensa usted que se debe apoyar el sistema político del país?

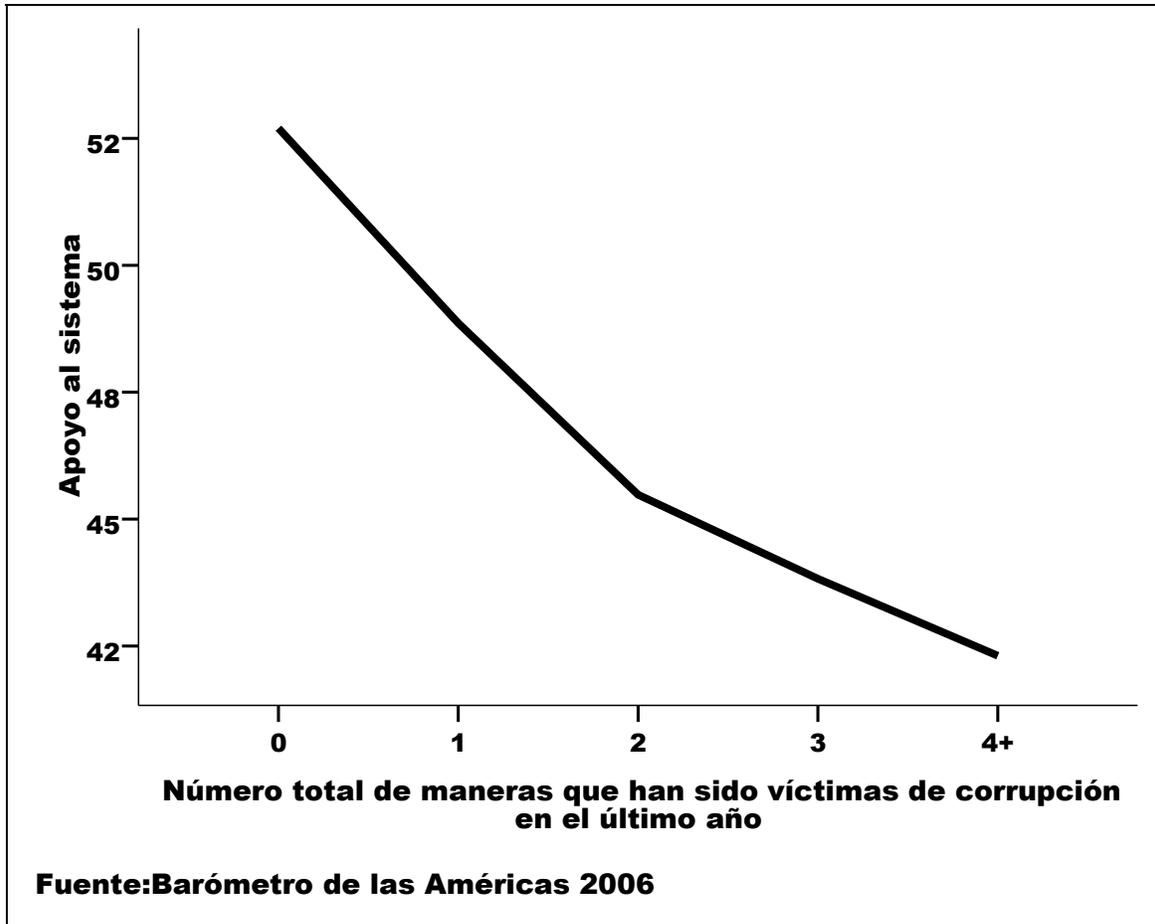


Gráfico X-14. Impacto de la victimización por corrupción sobre el apoyo al sistema

Conclusiones

Este estudio utilizó la metodología desarrollada por el Proyecto de Opinión Pública de América Latina para determinar la magnitud del problema de la corrupción en Latinoamérica y el Caribe. Esta metodología mide el nivel de corrupción a partir de las experiencias de los ciudadanos con el soborno en su vida cotidiana, en lugar de la percepción sobre la corrupción. Una de las ventajas de este método es que permite saber quiénes son las personas más propensas a ser víctimas de la corrupción y los lugares donde se dan los actos corruptos adentro de un país. En general, los resultados del análisis llevado a cabo a partir de los datos del Barómetro de las Américas confirman que la corrupción es un problema serio en la región.

Los datos mostraron que las municipalidades y los juzgados son los principales lugares donde se dan las prácticas corruptas. Además, se encontró que ser víctima de la corrupción afecta negativamente la confianza de los ciudadanos en el sistema de justicia y su apoyo a la descentralización de recursos del gobierno central a gobiernos locales. Esto sugiere que el éxito de los programas de descentralización y fortalecimiento del estado de derecho en Latinoamérica y el Caribe depende en gran medida de los avances que se den en el combate de la corrupción en las municipalidades y en el sistema de justicia. Adicionalmente, se encontró que, tal como lo



sugieren estudios anteriores de LAPOP, la corrupción no afecta a todos por igual. Se ha visto que los hombres, las personas de mayor status económico, y los jóvenes son más probables de ser víctimas de actos corruptos.

Este estudio demostró que la corrupción constituye un obstáculo para la consolidación de la democracia en la región, ya que se halló evidencia empírica de que la victimización por corrupción reduce el nivel de apoyo a la democracia como forma ideal de gobierno y la satisfacción de los ciudadanos con los regímenes democráticos en función entre la población. Además, la evidencia apunta a que la corrupción deteriora el nivel de confianza en las instituciones del estado y por lo tanto le resta legitimidad al sistema político.

Como una nota positiva, este capítulo recalcó que los ciudadanos latinoamericanos ven a la democracia como la forma ideal de gobierno, a pesar de que no están del todo satisfechos con la forma en que ésta funciona en la práctica. Sin embargo, también se mostró los efectos perjudiciales que la corrupción puede tener sobre la oferta y demanda de la democracia. De continuar así, la corrupción puede en el largo plazo socavar la estabilidad democrática de la región, principalmente en los países con los niveles más altos de corrupción.

Referencias

- Almond, Gabriel A. y Sidney Verba. *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. Princeton: Princeton University Press, 1963.
- Becquart-Leclercq, Jeanne. "Paradoxes of Political Corruption: A French View." En *Political Corruption: A Handbook*, compilado por Arnold J. Heidenheimer, Michael Johnston, Victor T. LeVine, 191-210. New Brunswick, NJ, 1989.
- Bratton, Michael, Robert B. Mattes y Emmanuel Gyimah-Boadi. *Public opinion, democracy, and market reform in Africa. Cambridge studies in comparative politics*. New York: Cambridge University Press, 2004.
- Camp, Roderic Ai, Kenneth M. Coleman y Charles L. Davis. "Public Opinion About Corruption: An Exploratory Study in Chile, Costa Rica and Mexico." Portland, Oregon, 2000.
- Canache, Damarys y Michael E. Allison. "Perceptions of Political Corruption in Latin American Democracies." *Latin American Politics and Society* 47, no. 3 (2005): 91.
- Della Porta, Donatella. "Social Capital, Beliefs in Government, and Political Corruption." En *Disaffected Democracies: What's Troubling the Trilateral Countries?*, compilado por Susan J. Pharr y Robert D. Putnam, 202-28. Princeton: Princeton University Press, 2000.
- Diamond, Larry. *Developing Democracy: Toward Consolidation*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1999.
- Easton, David. *A Systems Analysis of Political Life*. New York,: Wiley, 1965.
- . "A Re-Assessment of the Concept of Political Support." *British Journal of Political Science* 5 (1975): 435-57.
- Huntington, Samuel P. *Political Order in Changing Societies*. New Haven: Yale University Press, 1968.
- Kaufmann, Daniel, Aart Kraay y Massimo Mastruzzi. "Governance Matters V: Aggregate and Individual Governance Indicators for 1996-2005." (2006).
- Lipset, Seymour Martin. "The Social Requisites of Democracy Revisited." *American Sociological Review* 59 (1994): 1-22.
- Luna, Juan Pablo. *Cultura política de la democracia en Chile: 2006*. Compilador: Latin American Public Opinion Project. Nashville, TN: Vanderbilt University, 2006.
- Pharr, Susan J. "Officials' Misconduct and Public Distrust: Japan and the Trilateral Democracies." En *Disaffected Democracies: What's Troubling the Trilateral Countries?*, compilado por Susan J. Pharr y Robert D. Putnam. Princeton: Princeton University Press, 2000.
- Seligson, Mitchell A. "The Impact of Corruption on Regime Legitimacy: A Comparative Study of Four Latin American Countries." *Journal of Politics* 64 (2002): 408-33.
- . "The Measurement and Impact of Corruption Victimization: Survey Evidence from Latin America." *World Development* 34, no. 2 (2006): 381-404.
- Shin, Doh C. *Mass Politics and Culture in Democratizing Korea*. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
- Transparency International. "The Corruption Perception Index." Transparency International, 2006a.
- . "CPI 2006 Regional Results: Americas ": Transparency International, 2006b.



- Waterbury, John. "Corruption, Political Stability, and Development: Comparative Evidence from Egypt and Morocco." *Government and Opposition* 11 (1976): 426-45.
- World Bank. *World Development Report, 1997*. Washington, D. C.: Oxford University Press, 1997.
- Zéphyr, Dominique, Yves-François Pierre y Córdova, Abby. *Culture politique de la démocratie en Haïti: 2006*. Compilador: Latin American Public Opinion Project. Nashville, TN: Vanderbilt University, 2007.

Anexo

Tabla XI-5. Determinantes del apoyo al sistema

	Coeficiente.	Dev. est.	t	Sig.
Número total de maneras que han sido víctimas de corrupción en el último año	-1.408	0.155	-9.070	0.000
Satisfacción con el desempeño del presidente actual	0.258	0.006	45.830	0.000
Victimización por crimen	-0.021	0.003	-6.590	0.000
Percepción de la situación económica del país	0.125	0.006	21.580	0.000
Género	-0.488	0.240	-2.040	0.041
Edad	0.042	0.008	4.940	0.000
Educación	-0.187	0.181	-1.040	0.299
Riqueza	-0.076	0.075	-1.010	0.314
urbano	-1.475	0.282	-5.240	0.000
Constante	-1.408	0.155	-9.070	0.000
Número de observaciones = 30225				
F(28, 30196) = 285.71				
R-Cuadrado adj. = 0.2087				
Variable dependiente: Índice de apoyo al sistema político				
Dummy para los países (País de referencia: México).				

XII. Justicia y democracia: El estado de derecho en las Américas ¹

Juan Carlos Donoso

Resumen

La administración de justicia se basa en la habilidad del sistema judicial de dar a cada uno lo que se merece. La independencia judicial es una condición indispensable para el correcto funcionamiento del poder judicial en las Américas. Este capítulo explora los efectos que variables estructurales, como la autonomía del sistema de justicia, tienen en las actitudes personales de los ciudadanos hacia dicho sistema y las consecuencias de estas actitudes en la consolidación de la democracia liberal y representativa en el continente.

La reforma judicial y la consolidación de la autonomía en la administración de justicia han sido consideraciones prioritarias al momento de diseñar políticas públicas en América Latina durante las últimas décadas. Estas reformas han sido dirigidas al fortalecimiento del poder judicial con respecto al ejecutivo y al legislativo, pero también a mejorar los mecanismos de administración de casos, de capacitación de jueces y de resolución de conflictos. La importancia de la reforma judicial, sin embargo, puede verse disminuida cuando el sistema de administración de justicia carece de legitimidad entre la población. El presente capítulo aborda el tema de la legitimidad del sistema de justicia y el apoyo de la gente hacia el estado de derecho, sobretodo en los países de América Latina y el efecto que estas actitudes pueden llegar a tener en la consolidación democrática de estos países. En una primera sección analizaré la importancia de tener un sistema judicial autónomo e independiente en la generación de actitudes favorables hacia el sistema de justicia. La segunda parte del capítulo se enfoca en las variables de nivel individual que actúan como determinantes del apoyo de los ciudadanos al estado de derecho en un país. Finalmente, examinaré las consecuencias que un bajo grado de apoyo al estado de derecho pueden tener en la consolidación democrática de los países de América Latina, o en el surgimiento de nuevas democracias “híbridas” en el continente.

El “Poder” Judicial:

La fortaleza del sistema de justicia de un país es un factor determinante para lograr la legitimidad de un gobierno. La consolidación de un régimen democrático solo puede darse una vez que se hayan cumplido una serie de requisitos, uno de los cuales es la formación de un sistema judicial autónomo que genere seguridad en los ciudadanos en cuanto al estado de derecho (Becker 1999, Carothers 2006). Un régimen democrático que cuenta con un poder judicial debilitado puede tener serios problemas para conseguir el apoyo popular hacia el estado

¹ Expreso mi más sincero agradecimiento a USAID por el financiamiento brindado a LAPOP y al Barómetro de las Américas 2006. Agradezco especialmente a la misión de USAID en Ecuador, que ha financiado mis estudios en la Universidad de Vanderbilt y ha apoyado mi carrera en todo momento.



de derecho (Prillaman 2000, Verner 1984). Holston y Caldeira (1998) observan que el concepto de ciudadanía, indispensable en una democracia, incluye como mínimo una noción de justicia, legalidad, acceso y universalidad. Cuando la mayoría de la población percibe a su sistema de justicia como inaccesible e ineficiente, esto puede crear en las personas un sentimiento de “ciudadanía incompleta”, lo cual genera que su compromiso con el régimen tenga una intensidad muy baja o casi inexistente (O'Donnell 1994).

La fortaleza del sistema judicial en un país se puede interpretar de diferentes maneras. La literatura existente que trata sobre dicho tema identifica tres características principales que deben identificar a un poder judicial saludable. La primera es el libre acceso de la ciudadanía, es decir, que todos tengan la misma oportunidad de acceder a los servicios de la administración de justicia. Para esto, se deben cumplir dos condiciones, primero, la presencia física de la institución judicial en una determinada jurisdicción territorial y segundo, que los costos para los usuarios razonables, de tal manera que todos los puedan utilizar. La segunda característica tiene que ver con la eficiencia administrativa. Un sistema judicial eficiente debe cumplir dos requerimientos básicos. Primero, el de tramitar los procesos dentro del tiempo establecido por la ley. Segundo, el de hacer cumplir las sentencias dictadas por los jueces. Las principales características de un sistema judicial saludable, sin embargo, son la autonomía de la judicatura con respecto al ejecutivo y al legislativo y la independencia para decidir en contra de estos (Cappelletti 1985). Aunque los términos “autonomía” e “independencia” son similares, vale la pena hacer una diferenciación teórica entre uno y otro para el caso de este estudio. La autonomía es un atributo institucional del poder judicial que le permite construir su propia estructura institucional (Rios-Figueroa 2006). La independencia del poder judicial, en cambio, nace del principio de resolución de conflictos por un tercer partido neutral (Larkins 1996). Un poder judicial independiente, entonces, es el que puede decidir libremente, basado en la ley y en los hechos y sin tomar en cuenta las preferencias de terceros (Fiss 1993).

Si bien las constituciones de todos los países de América Latina garantizan la autonomía del poder judicial, en la práctica estas disposiciones no logran ser aplicadas debido a diferentes razones, como el acaparamiento de poder por parte del ejecutivo, la constante ingerencia de grupos de interés político o la presión de la opinión pública en determinados temas. Para efectos del presente estudio, la fortaleza del sistema judicial de cada país se determinará basándose en los reportes del Departamento de Estado de los Estados Unidos (www.state.gov). Estos reportes, que comenzaron en 1977, se realizan anualmente con el objetivo de describir los esfuerzos que realiza cada país del mundo para poner en práctica su compromiso de proteger los derechos humanos de sus ciudadanos. Los reportes son individuales y contienen una descripción detallada de las violaciones de los derechos humanos que fueron reportados en cada país ya sea por individuos o por la prensa nacional o internacional. Estas violaciones de los derechos humanos, son luego analizadas en varios contextos, uno de los cuales es el del debido proceso. En el marco de ese análisis, los reportes realizan una evaluación de la fortaleza de los sistemas judiciales de cada país y de los principales problemas que estos enfrentan. Si bien estas crónicas están sujetas a la subjetividad de sus autores, esta es una de las pocas fuentes sistemáticas de información sobre las judicaturas en América Latina. Varios trabajos académicos y de consultoría que se han realizado sobre el sistema judicial en la región ratifican la validez de estos reportes (Cross 1999, Dakolias 1994, Howard and Carey 2004, Yamanashi 2002).

Los datos

Esta sección tiene por objeto demostrar la importancia que un sistema judicial saludable tiene en la confianza que los ciudadanos depositan en el mismo. La confianza en el sistema de justicia en América se mide a partir de los datos del 2006/07 del Barómetro de las Américas, recolectados en 19 países del continente. En los países de Latinoamérica y el Caribe estas entrevistas fueron realizadas cara a cara, mientras que en los Estados Unidos de Canadá, por motivos de presupuesto, las entrevistas fueron hechas por teléfono y con un cuestionario base bastante más reducido. El cuestionario matriz fue producido por el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP), con base en la Universidad de Vanderbilt. Para medir la legitimidad del sistema judicial, el Barómetro de las Américas utiliza la siguiente pregunta:

B10A. ¿Hasta qué punto tiene confianza en el sistema de justicia?

Para contestar esta pregunta, el entrevistado dispone de una escala del 1 al 7 en la que uno significa ‘nada’ y siete significa ‘mucho’. Sin embargo, para facilitar la comprensión del lector, todas las escalas han sido estandarizadas del 0 al 100. El Gráfico XII-1 revela como están distribuidos los países en relación a sus niveles de confianza en sus sistemas de justicia. Cabe destacar que al hacer un promedio de toda la región, la confianza en el sistema de justicia se encuentra por debajo de la mitad de la escala, con un valor de 42. Canadá demuestra ser el país en donde los ciudadanos más confían en la judicatura, con un valor de 64 puntos de 100 posibles, seguido de los Estados Unidos y Costa Rica, lo cual no es sorpresa ya que estos tres países son considerados como las democracias más sólidas de la región. La presencia de Guyana, un país pequeño y relativamente desconocido, entre los países con puntajes más altos es inesperada. Uno podría especular que la influencia británica en este país es parcialmente responsable por el alto nivel de apoyo al sistema de justicia, sin embargo esta no es una tendencia que se repita en otros países con herencia británica, como Jamaica, que se encuentra justo por debajo del promedio del continente, como lo ilustra el gráfico a continuación. Al otro extremo de la escala se encuentra el Ecuador, con un puntaje de 28 sobre 100, menos de la mitad de Canadá y muy por debajo del promedio de la región. Considerando la historia política reciente de este país, no es sorprendente su ubicación con respecto al resto de países de las Américas.

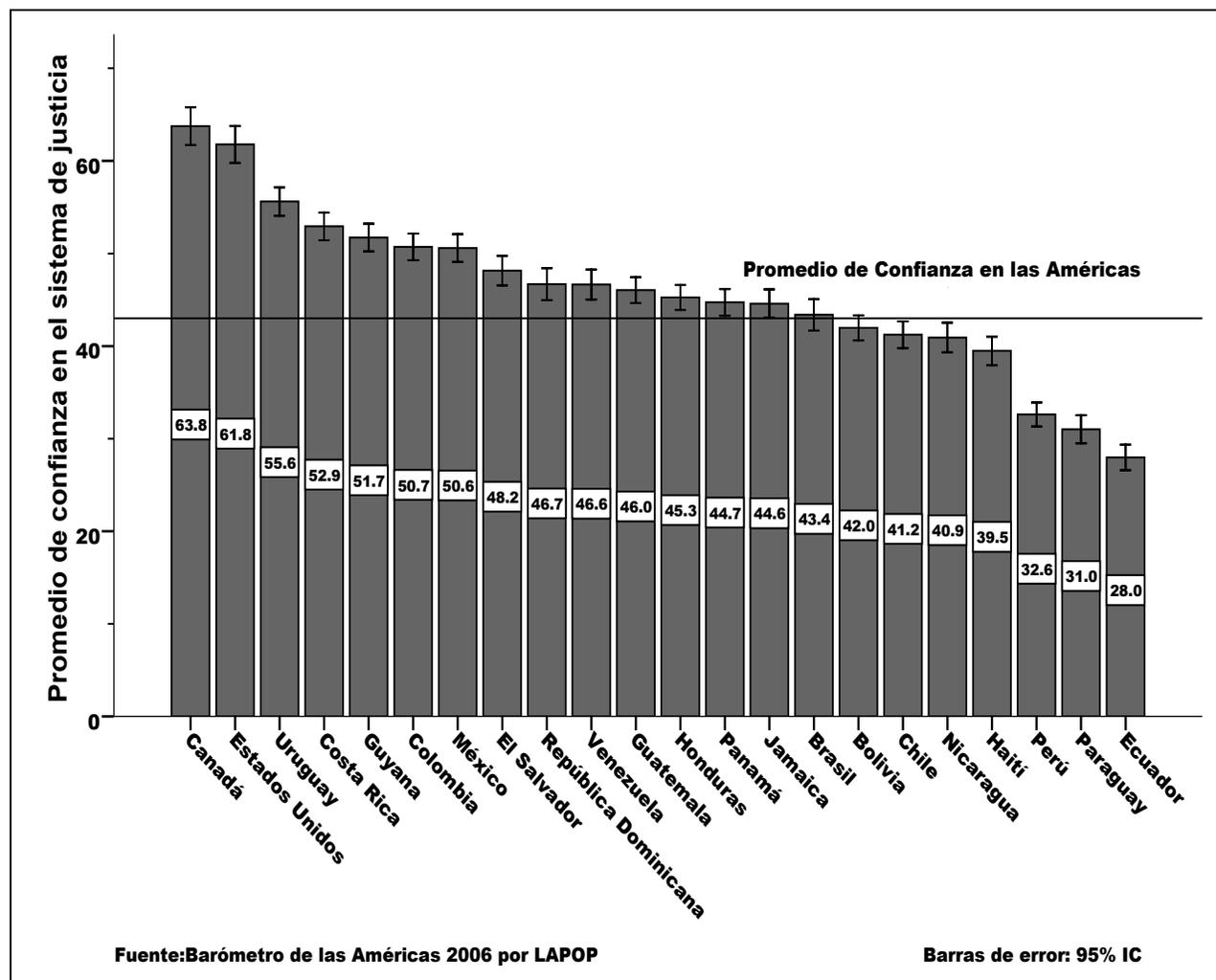


Gráfico XII-1. Nivel de Confianza en el Sistema de Justicia

Cuales son los factores que explican las grandes diferencias existentes entre un país y otro? Una parte de la respuesta descansa en las experiencias, circunstancias y actitudes de los individuos de cada país. La otra, sin embargo, va más allá de las diferencias individuales. Cada barra del Gráfico XII-1 muestra el nivel medio de confianza de un ciudadano promedio en un determinado país. Un análisis de varianza sugiere, sin embargo, que el 15% de la variación en la variable dependiente (nivel de confianza en el sistema de justicia) se explica por las diferencias entre un país y otro. Esto significa que las características de una estructura, como en este caso la fortaleza del sistema judicial de un determinado país, pueden moldear las actitudes individuales de los ciudadanos (Seligson and Muller 1994).

Como expliqué anteriormente, la fortaleza de los sistemas de justicia en los países de América fue medida en base a los reportes individuales de derechos humanos realizados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Debido a que los reportes hacen una narración descriptiva del sistema judicial de cada país, fue necesario definir un criterio de codificación para

poder sistematizar la información. La decisión fue la de construir una escala categórica de tres puntos, en la que el valor de uno sería asignado a países con niveles bajos de autonomía e independencia judicial. Los países niveles medios y altos de autonomía recibieron puntajes de dos y tres respectivamente. Para asignarle un puntaje a cada país me basé en el criterio de codificación utilizado anteriormente por Cingranelli y Richards así como el utilizado por Tate, Poe y Keith para medir el grado de protección a los derechos humanos (Tate, et al. 1999, www.humanrightsdata.org). A continuación detallo el criterio de codificación.

1.- Bajo: La judicatura es descrita como no autónoma y dependiente. Existen altos niveles de influencia o interferencia por parte del ejecutivo y los jueces pueden ser removidos sin previo aviso.

2.- Medio: La judicatura es descrita como parcialmente independiente, con presiones ocasionales del ejecutivo y protecciones incompletas para los jueces.

3.- Alto: La judicatura es descrita como generalmente autónoma e independiente. No existe manipulación por parte del ejecutivo salvo en casos extraordinarios.

El Gráfico XII-2 muestra la clasificación que obtuvieron los países de la muestra. Únicamente cuatro países, Los Estados Unidos, Canadá, Costa Rica y Chile, obtuvieron un puntaje de tres, mientras que ocho países, casi la mitad de la muestra, obtuvieron un puntaje de uno. Los valores asignados a los países de acuerdo a esta escala coinciden mayoritariamente con los puntajes de cada país con respecto a la confianza de sus ciudadanos hacia el sistema de justicia mostrados en el Gráfico XII-1.

Para captar el impacto que una característica estructural, como la fortaleza del sistema de justicia en un país, puede tener en la confianza de los ciudadanos en su sistema de justicia, he construido un modelo estadístico de regresión lineal jerárquica que mide el efecto que el poder de la judicatura tiene sobre la legitimidad del sistema de justicia, controlando por otros factores individuales que pueden también tener ingerencia sobre la variable dependiente. Estos factores incluyen el nivel de educación, la percepción de la corrupción en el sector público, la satisfacción con la democracia en el país y el haber o no sido víctima de un acto criminal durante el último año. La Tabla XII-1 muestra los resultados de esta regresión.

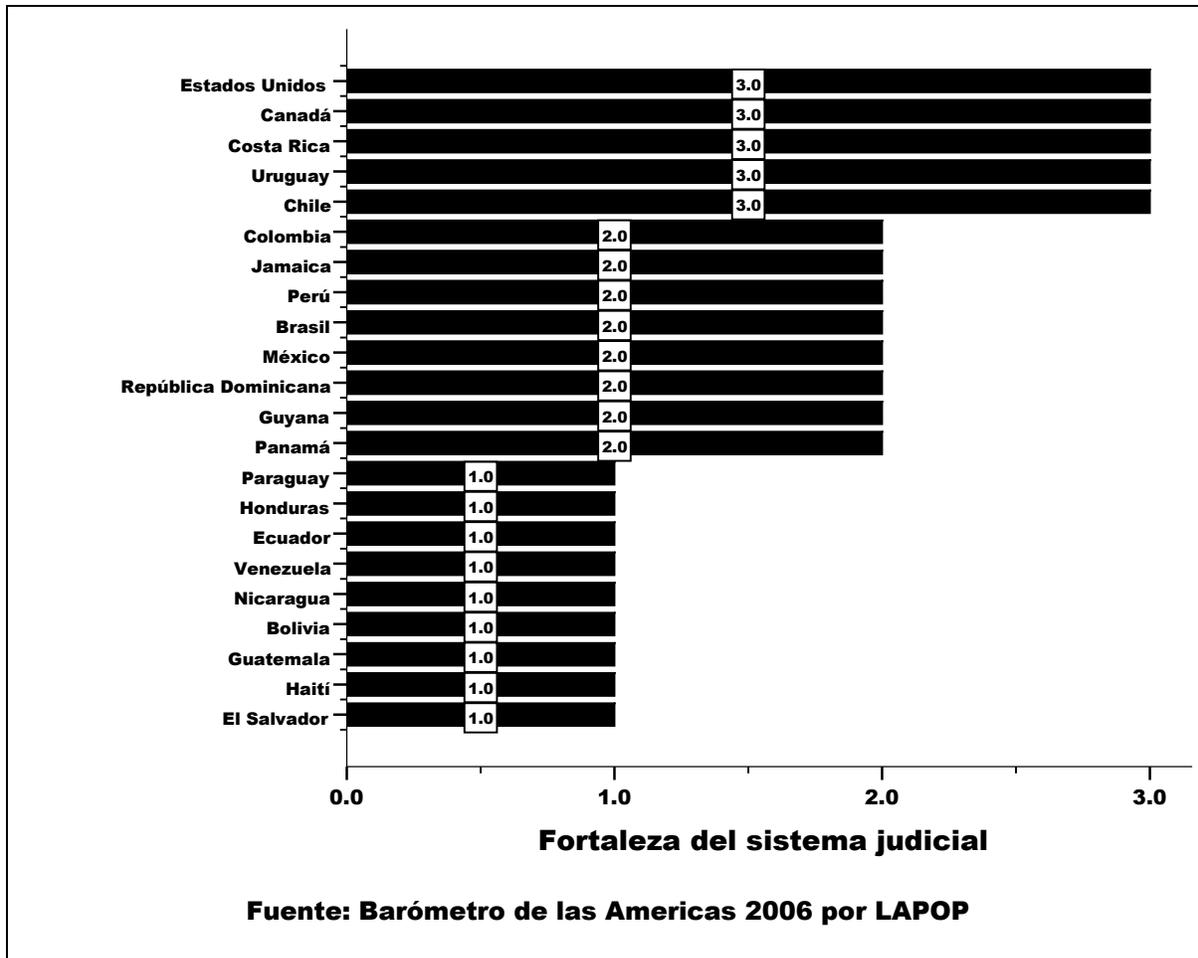


Gráfico XII-2. Fortaleza del sistema judicial en países de América.

Tabla XII-1. Efecto del poder de la judicatura en confianza al sistema de justicia

	<i>Coef.</i>	<i>Std. Err.</i>	<i>P>z</i>
Fortaleza de Judicatura	0.242	0.110	0.028
Educación	-0.048	0.016	0.002
Percepción de corrupción	0.181	0.013	0.000
Victimización de crimen	0.212	0.029	0.000
Satisfacción democracia	0.530	0.016	0.000
Ingreso.	-0.005	0.006	0.382
Constante	4.068	0.232	0.000

Como se puede ver en la Tabla XII-1, el efecto del poder de la judicatura sobre la confianza que las personas demuestran en su sistema de justicia es positivo. Esto significa que mientras más autónomo e independiente sea el poder judicial en un país, más alto será el grado de confianza de los ciudadanos en este, como lo ilustra el Gráfico XII-3. Otras variables que también tienen un efecto significativo son la percepción de corrupción y el hecho de haber sido víctima de un crimen. La regresión muestra que las personas que perciben un alto grado de corrupción y las personas que fueron víctimas de un crimen presentan menores niveles de confianza en el sistema de justicia. Finalmente, la educación es otro factor que surte un efecto importante, aunque la relación entre esta variable y la legitimidad del sistema de justicia es negativa, es decir, las personas con mayores niveles de educación confían menos en el sistema de justicia que aquellas personas con niveles bajos de educación.

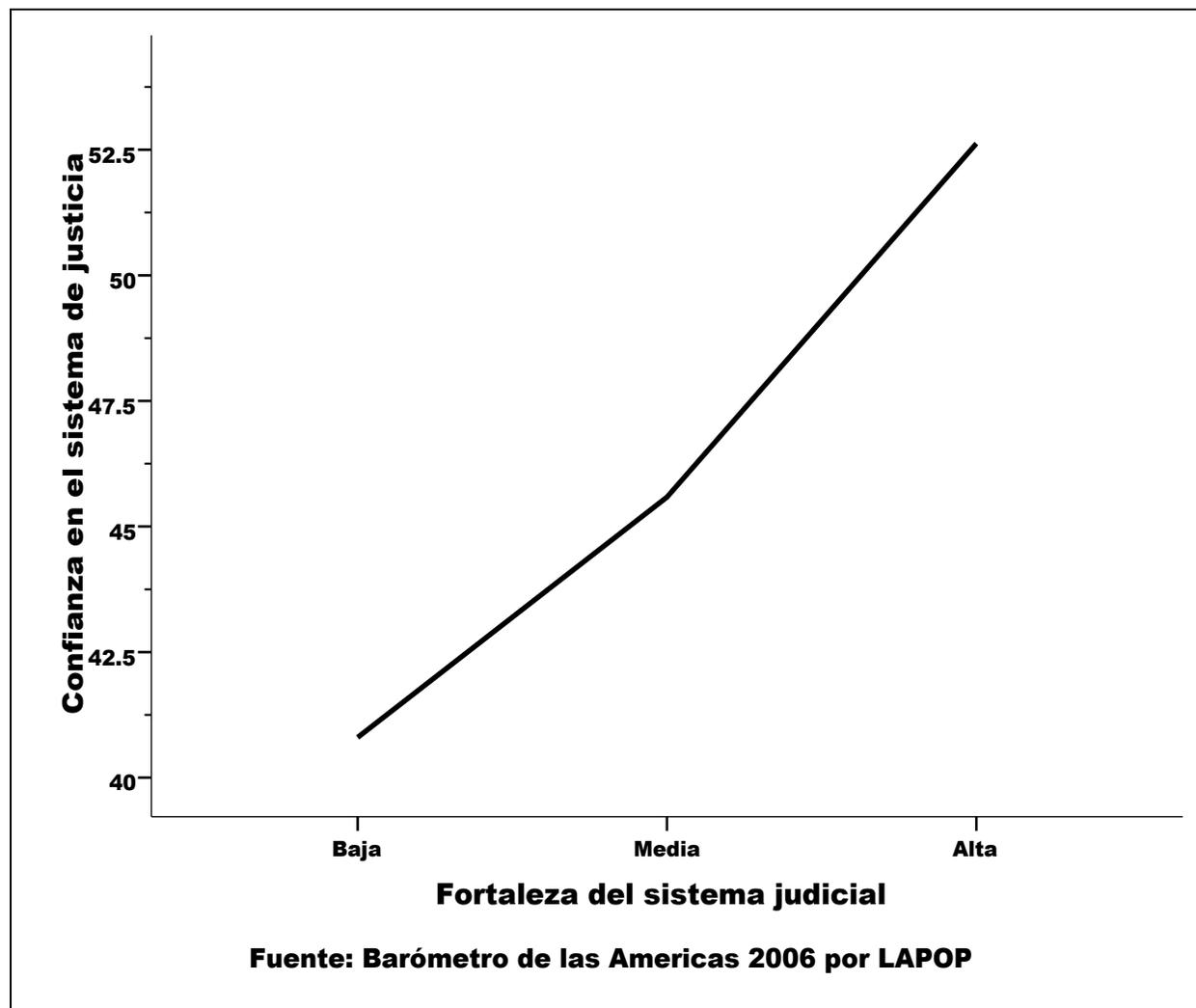


Gráfico XII-3. Efecto de la fortaleza del sistema judicial sobre la legitimidad del sistema de justicia en las Américas

Es importante recalcar que el efecto del poder del sistema judicial sobre la legitimidad del mismo se podría ver atenuado por otros factores que no han sido incluidos en esta regresión, debido a que los cuestionarios de los Estados Unidos y Canadá debieron priorizar la brevedad, ya que las encuestas eran realizadas telefónicamente. Los resultados del modelo estadístico aquí presentado, sin embargo, demuestran que, sin perjuicio del efecto que factores individuales como las experiencias y percepciones de los entrevistados puedan tener sobre la confianza de los ciudadanos en el sistema de justicia, los factores estructurales también pueden crear actitudes.

La siguiente sección de este capítulo estará enfocada en descubrir cuales son los determinantes del apoyo generalizado al estado de derecho en América Latina. Una vez demostrado el efecto que las variables estructurales pueden tener en la construcción de actitudes personales, en las siguientes páginas haré un énfasis en los factores de nivel individual que dan

forma a estas actitudes. Es importante mencionar que los Estados Unidos y Canadá han sido excluidos de este análisis debido a las limitaciones de información que mencioné anteriormente.

Apoyo al Estado de Derecho

Si bien la mayoría de las naciones de América Latina han cumplido un proceso de transición a la democracia electoral, muchas de las instituciones legales en estos países todavía conservan características autoritarias. Este es un problema que no afecta únicamente a América Latina sino a la mayoría de democracias que emergieron en el fenómeno que hoy se conoce como la tercera ola de democratización (Huntington 1991, O'Donnell and Schmitter 1986). El camino que muchas de estas democracias han recorrido demuestra que la institucionalización de un proceso electoral se consigue más fácilmente que la del estado de derecho (Pereira 2000, Schedler, et al. 1999). Pero que es el “estado de derecho”? Si bien la mayoría de la población tiene una noción concebida sobre el tema, que está estrechamente ligada a la capacidad del sistema legal de hacer cumplir las leyes con eficacia y equidad (Seligson 2004), emitir una definición clara y precisa es una labor complicada, debido a la multi-dimensionalidad del concepto (Goertz 2006). Múltiples discusiones teóricas se han generado alrededor de lo que entra o no entra en una definición de “estado de derecho” y a cuales son las condiciones necesarias y suficientes para poder puntualizarlo (Collier, et al. 2006).

La presente sección tiene por objeto encontrar los factores que determinan el apoyo de los ciudadanos al estado de derecho en los países de Latinoamérica y el Caribe. Para esto, he seleccionado una batería de preguntas que intentan capturar algunas de las dimensiones del estado de derecho. Es importante aclarar que el grupo de preguntas seleccionado no abarca todas las características contenidas en un concepto tan complejo. Sin embargo, es una buena aproximación práctica para efecto del análisis que se realizará a continuación. Las preguntas claves en la base de datos del Barómetro de las Américas 2006/07 que miden el apoyo a las instituciones del estado de derecho son las siguientes:

B1. ¿Hasta qué punto cree usted que los tribunales de justicia de (país) garantizan un juicio justo?

B10A. ¿Hasta qué punto tiene confianza en el sistema de justicia?

B18. ¿Hasta qué punto tiene confianza usted en la Policía?

B31. ¿Hasta qué punto tiene usted confianza en la Suprema Corte de Justicia de la Nación?

En este grupo de preguntas se encuentran contenidas algunas dimensiones del estado de derecho, como la necesidad del debido proceso, la institucionalidad del sistema de justicia y el deber del estado de proveer de seguridad a sus ciudadanos (Schor 2003). Estas preguntas han sido combinadas para crear un índice de apoyo ciudadano al estado de derecho. Un análisis de confiabilidad realizado al índice reveló que el Alpha de Cronbach de esta escala es de .756, lo que significa que las preguntas seleccionadas para el índice de apoyo ciudadano al estado de derecho están correlacionadas y no miden conceptos distintos y un análisis factorial muestra que las 4 variables forman una sola dimensión. El Gráfico XII-4 muestra como están distribuidos los países de América Latina a lo largo del índice. Como se puede observar en el gráfico, el



promedio de apoyo al estado de derecho en Latinoamérica y el Caribe es de 45 en una escala de 100 puntos, lo cual es preocupante, ya que no llega ni siquiera al punto medio de la misma. Se puede observar también una gran diferencia, de más de 20 puntos, entre los países con niveles más altos de apoyo, como Guyana, Colombia y Costa Rica y los países con niveles más bajos, como Ecuador y Paraguay.

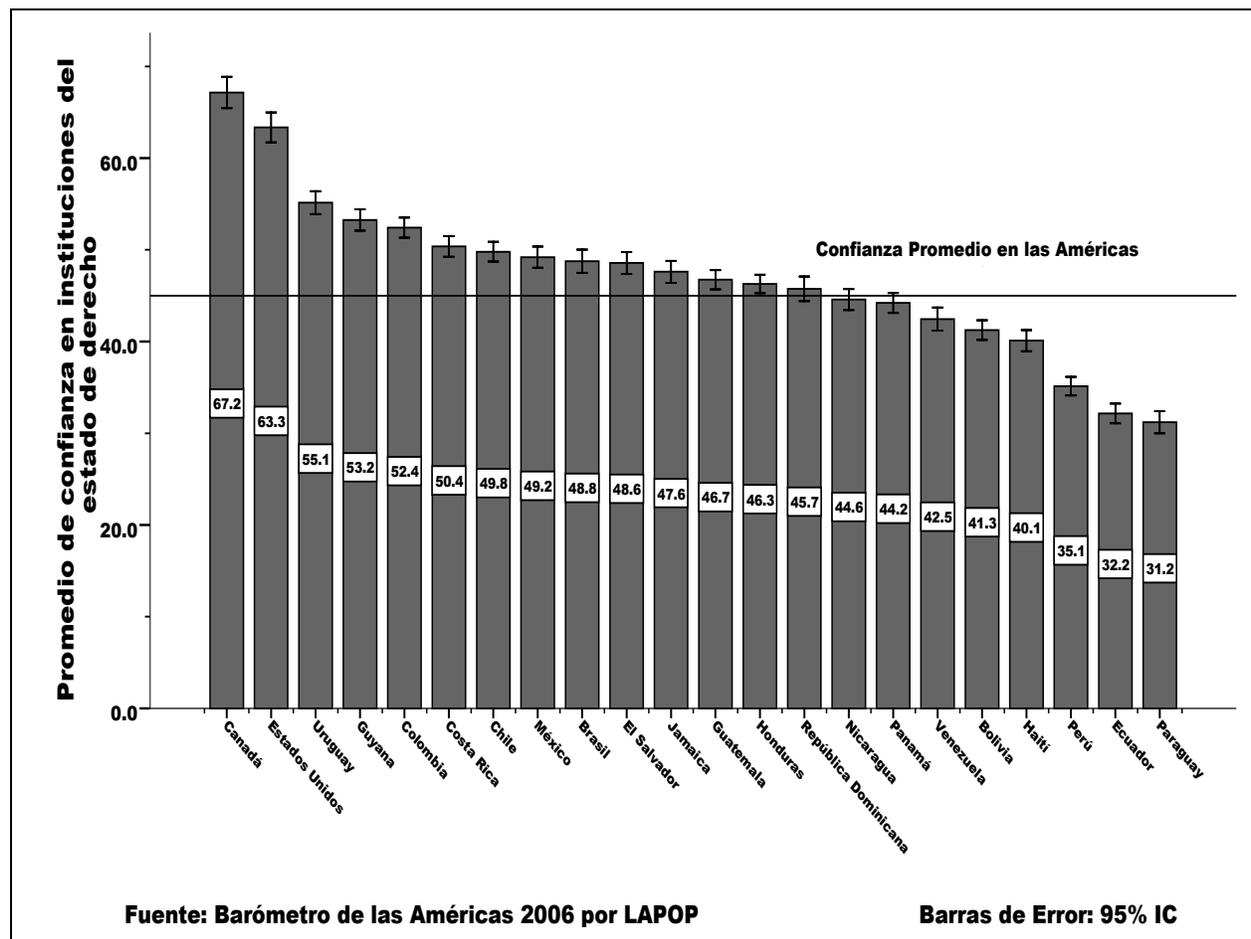


Gráfico XII-4. Apoyo ciudadano al estado de derecho en América Latina y el Caribe

Cuáles son los factores que generan el sustento popular del estado de derecho? Los factores sociodemográficos como la educación, la edad y la ubicación geográfica dentro de un país usualmente sirven como variables explicativas en la formación de actitudes individuales. Para el presente estudio he diseñado un modelo de regresión lineal que detalla que variables son determinantes en la generación del apoyo individual al estado de derecho en América Latina y el Caribe. La Tabla XII-2 contiene los resultados de dicha regresión. Sorpresivamente, factores como la ubicación geográfica dentro de un país no tienen una relación significativa con el apoyo popular al estado de derecho. Las instituciones del sistema judicial así como la Policía Nacional, suelen tener menos presencia física en las áreas rurales, lo cual cause que los habitantes de estas áreas tengan un nivel de apoyo menor que los habitantes de áreas urbanas. La diferencia entre unos y otros, sin embargo, no resultó ser estadísticamente significativa, lo que significa que si

bien esta es una tendencia verdadera, al combinarla con otros factores, el área geográfica no es tan importante al momento de determinar el apoyo de un individuo hacia el estado de derecho.

Tabla XII-2. Factores que determinan el apoyo al estado de derecho.

	B	Std. Error	Sig.
(Constante)	44.251	8.950	0.000
Urbano-Rural	3.049	2.545	0.232
Satisfacción con democracia	2.217	0.629	0.000
Índice de victimización por corrupción	-0.055	0.025	0.028
Pagó soborno en los juzgados	-0.262	3.220	0.935
Percepción de corrupción	-0.114	0.042	0.007
Víctima de un crimen	-0.055	0.035	0.028
Educación	0.121	0.310	0.696
Riqueza individual medida por la posesión de bienes de capital	-0.021	0.724	0.977
Ingreso	-0.000	0.000	0.515
Mexico	0.833	8.004	0.917
Guatemala	-2.894	6.765	0.669
Salvador	-0.901	6.199	0.884
Honduras	-17.65	8.789	0.048
Nicaragua	2.733	6.855	0.690
Panamá	1.104	16.12	0.945
Colombia	8.657	17.49	0.621
Ecuador	-19.19	7.115	0.007
Peru	-8.721	6.666	0.128
Chile	0.935	15.87	0.975
R Dominicana	-12.49	6.000	0.038
Haiti	0.608	5.994	0.919
Jamaica	-4.008	5.734	0.485
Guyana	2.679	5.436	0.622
Uruguay	15.99	14.31	0.264
Venezuela	18.31	15.85	0.248
R Cuadrado			0.177

Otros factores que demostraron no tener un efecto significativo en los niveles de apoyo al estado de derecho son los factores económicos personales, como el ingreso familiar y la riqueza individual medida por la posesión de bienes de capital, tales como electrodomésticos, computadoras, celulares y otros bienes más básicos como un cuarto de baño dentro de la casa o una cocina o refrigeradora. Los datos demuestran que estas variables no tienen un impacto significativo en la confianza que sienten las personas en el estado de derecho de sus respectivos países.

La educación resultó ser otro factor nulo en el apoyo individual a las instituciones del estado de derecho. En estudios anteriores realizados por el Proyecto de Opinión Pública de América Latina, la relación entre educación y la legitimidad del sistema democrático, el apoyo al estado de derecho y la confianza en instituciones de representación ha demostrado ser siempre



negativa. Esto quiere decir que las personas con los niveles más altos de educación siempre han reportado los niveles más bajos en las variables anteriormente mencionadas. Un análisis de correlación entre educación y apoyo al estado de derecho, utilizando los datos del Barómetro de las Américas 2006/07, demostró que la relación entre estas dos variables es, en efecto, la esperada. Sin embargo, al aumentar más ingredientes a la torta, vemos que el efecto de la educación en la evaluación individual de instituciones como la Policía y la Corte Suprema de Justicia se ve atenuada por factores vivenciales como las experiencias con la corrupción y la delincuencia.

La corrupción es un problema que aqueja a todas las democracias de América Latina y el Caribe. En los últimos diez años, altos funcionarios de las democracias Latinoamericanas, incluidos antiguos Presidentes de la República como en los casos de México, Costa Rica y Ecuador, han enfrentado cargos criminales por actos de corrupción cometidos durante el ejercicio de sus funciones. La corrupción se define como la utilización de bienes públicos para beneficios particulares (Weyland 1998) y es un mal que ha proliferado rápidamente y que ha atraído la atención tanto de la comunidad académica como de la comunidad política y los organismos internacionales. Debido a la naturaleza de la corrupción, esta es muy difícil de medir (Buscaglia 2001, Seligson 2006) y es por eso que académicos han utilizado varias estrategias para hacerlo. Una de las medidas más comunes de la corrupción es el índice de percepción de corrupción, creado por Transparencia internacional y que está basado en entrevistas hechas a empresarios en los diferentes países del mundo. En este capítulo se utilizan dos medidas de corrupción. La primera es parecida al CPI y está basada en una pregunta del cuestionario del Barómetro de las Américas 2006/07.

EXC7. Teniendo en cuenta su experiencia o lo que ha oído mencionar, ¿la corrupción de los funcionarios públicos está...?
(1) Muy generalizada (2) Algo generalizada (3) Poco generalizada (4) Nada generalizada

La segunda manera de medir la corrupción parte de captar las experiencias personales de la gente con esta. Las personas en nuestros países son víctimas de actos de corrupción por parte de funcionarios públicos, como policías y jueces y también por parte de entidades privadas, como escuelas, colegios y hasta oficinas. El Barómetro de las Américas ha desarrollado una batería de preguntas que miden las experiencias de la gente con la corrupción en lugares como juzgados, centros de salud, municipalidades, escuelas y otras oficinas públicas. Luego se creó un índice que contiene la frecuencia con que las personas fueron víctimas de actos de corrupción. Para efectos de este capítulo, he separado la pregunta que mide corrupción en la judicatura y la he ingresado en el modelo de regresión lineal por separado, debido a la relevancia que la corrupción en los juzgados tiene para el sistema jurídico de un país (Buscaglia 2001) Los resultados son claros, la corrupción crea desconfianza y disminuye el apoyo de los ciudadanos hacia el estado de derecho. Tanto las personas que sufrieron actos de corrupción en los juzgados, como aquellos que fueron víctimas de la corrupción en otros ámbitos públicos y privados presentan niveles de apoyo al estado de derecho significativamente inferiores a quienes no fueron víctimas de la corrupción. El Gráfico XII-5 ilustra la relación entre la victimización por corrupción y el apoyo al sistema de derecho, sin hacer la diferenciación entre los actos de corrupción ocurridos dentro de los juzgados y los que ocurrieron en otros ámbitos. Como se

puede ver, aquellas personas que no fueron víctimas de la corrupción reportan un puntaje mucho más alto que aquellos que fueron victimizados varias veces en el último año.

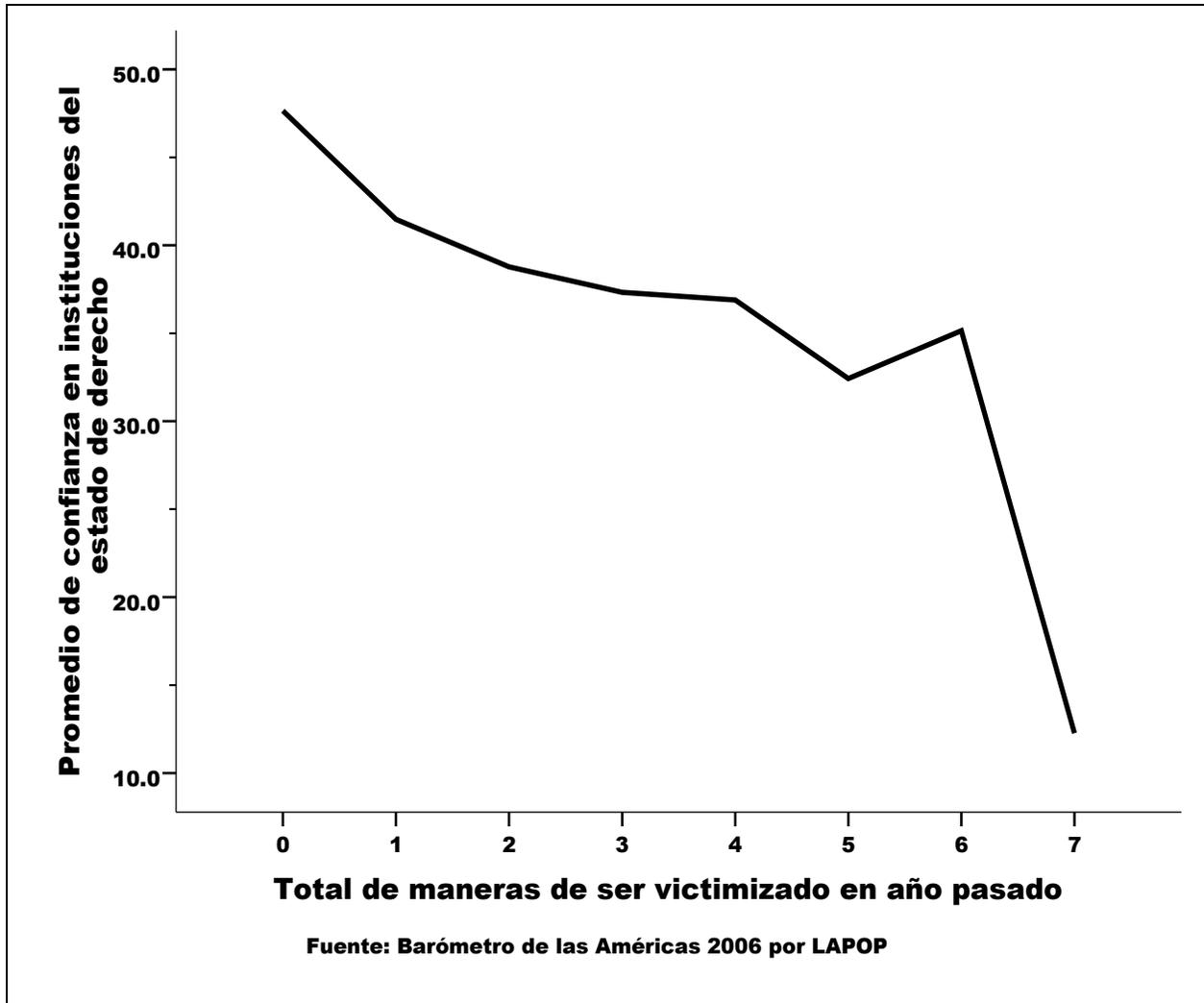


Gráfico XII-5. Efecto de la victimización por corrupción en el apoyo al estado de derecho.

La percepción de corrupción de los ciudadanos también probó ser un factor determinante en el apoyo al estado de derecho. Al igual que con la victimización, aquellas personas que perciben que la corrupción en el sector público está muy generalizada presentan niveles de apoyo significativamente más bajos que los de los entrevistados que perciben que la corrupción en su país no está generalizada. El Gráfico XII-6 muestra los resultados de la relación entre estas dos variables. Dos cosas resaltan al observar el gráfico. La primera es que la diferencia entre el grupo con el nivel más bajo de apoyo al estado de derecho y el grupo con nivel más alto no es tan dramática como en el gráfico anterior, donde la corrupción se midió a partir de las experiencias de las personas. Segundo, aparentemente las personas que consideran que la corrupción no está nada generalizada tienen niveles de apoyo más bajos que quienes contestaron que está algo generalizada. Las barras de error al tope de las barras, sin embargo, revelan que



esa diferencia no es estadísticamente significativa, sino producto del bajo número de personas que escogieron esa opción al momento de contestar. Al ver el Gráfico XII-6, entonces, uno podría concluir que la mejor manera de medir la corrupción es a través de las experiencias de los ciudadanos con esta, ya que los resultados que esta medida produce son más confiables.

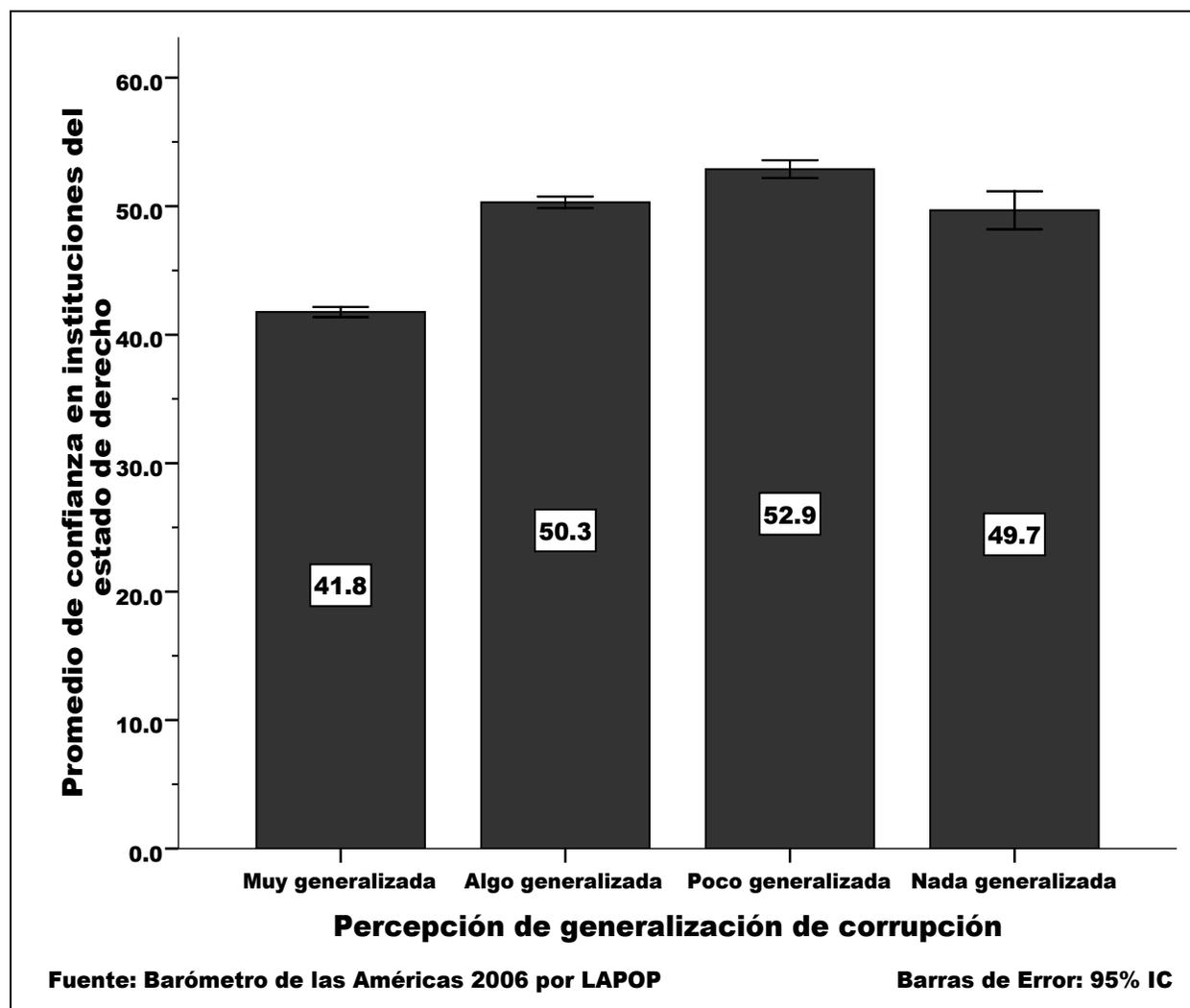


Gráfico XII-6. Relación entre la percepción de la corrupción y el apoyo al estado de derecho.

Las experiencias de los ciudadanos con el crimen tienen un efecto importante en el apoyo de estos al estado de derecho de su país. Un estado de derecho saludable no solo necesita solo de instituciones efectivamente democráticas, sino también de la conciencia de las personas de que el régimen y las instituciones nuevas son mejores que las anteriores a pesar de sus problemas (Cruz 2005). La violencia y el crimen en los países centroamericanos ha generado exclusión e inexistencia de interacción social, así como desconfianza en las instituciones que construyen el estado de derecho en las naciones de esa región del continente (Cruz 2004, Wielandt 2005). Lo mismo está ocurriendo hoy en el sur del continente, en donde la victimización por el crimen ha ido en ascenso en la última década. El cuestionario del Barómetro de las Américas 2006/07

contiene una serie de preguntas que lidian con el tema del crimen en América Latina y el Caribe; de entre las cuales he escogido una para incluir en el presente análisis.

VIC1. ¿Ha sido usted víctima de algún acto de delincuencia en los últimos 12 meses?
(1) Sí (2) No (8) NS/NR

El Gráfico XII-7 ratifica los resultados reportados en el modelo de regresión lineal. Las personas que fueron víctimas de un crimen por lo menos una vez en el último año reportan un nivel de apoyo al sistema de derecho significativamente inferior que sus contrapartes.

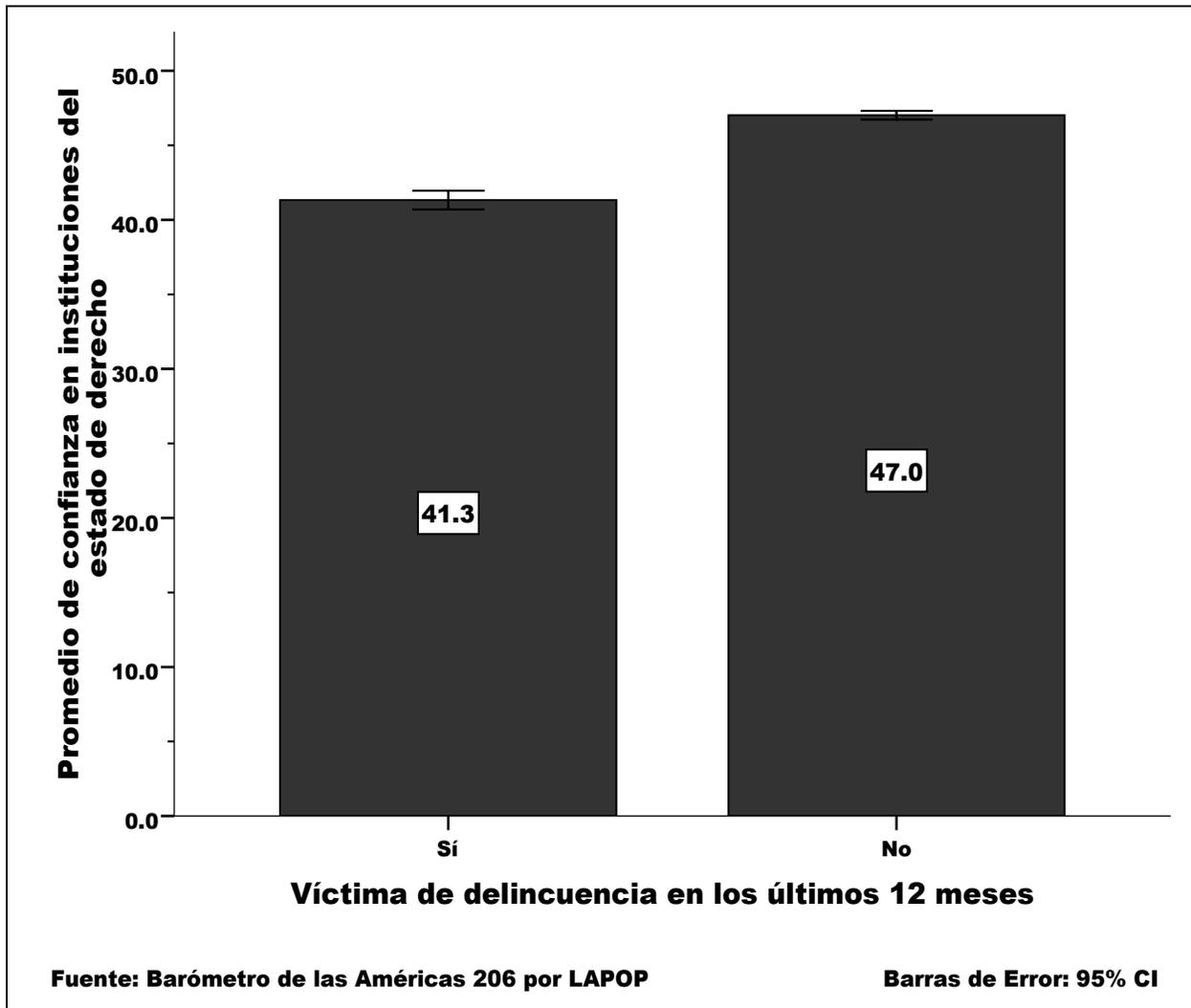


Gráfico XII-7. Relación entre victimización por el crimen y apoyo al estado de derecho.

A lo largo de esta sección se han descrito algunos de los factores que contribuyen a explicar las actitudes de los ciudadanos con respecto al estado de derecho en sus países. Las variables sociodemográficas han demostrado no tener un impacto significativo. El ingreso familiar y la riqueza medida en bienes materiales de consumo no afectan las actitudes



individuales sobre el estado de derecho, como tampoco lo hace el hecho de vivir en una zona urbana o rural. Las experiencias de los ciudadanos con el crimen y la corrupción también juegan un papel preponderante en la formación de actitudes hacia el estado de derecho, como se ha visto en las páginas anteriores. Falta, sin embargo, una parte de la explicación, y esta la completa el contexto. El modelo de regresión anteriormente presentado utiliza variables dicotómicas para cada país, con el objeto de analizar el impacto del contexto en el apoyo al estado de derecho tomando a Costa Rica como referencia. Los resultados indican que si bien este efecto no es significativo en todos los países, si lo es en unos cuantos, como Ecuador, Honduras y República Dominicana.

¿Qué significa esto? Como es posible que una variable con el nombre de un país pueda resultar significativa en la formación de actitudes hacia el estado de derecho? La respuesta es simple. Lo que los resultados revelan es que el contexto en el que uno vive es importante. Para el modelo de regresión presentado en este capítulo se crearon variables dicotómicas para todos los países de la región, excepto Costa Rica. Esto se hace para que al observar los resultados, estos puedan tener un punto de comparación. Tomemos el ejemplo del Ecuador. El coeficiente de la regresión del Ecuador es negativo y estadísticamente significativo. Esto quiere decir que, dejando todo lo demás constante, un ecuatoriano promedio reporta un nivel más bajo de apoyo al estado de derecho que un habitante de Costa Rica. En términos simples, vivir en el Ecuador tiene un impacto negativo en el apoyo al estado de derecho.

Esto se explica de una manera sencilla. Las circunstancias políticas en el Ecuador durante los últimos diez años han sido severamente inestables y la inseguridad jurídica se ha visto gravemente afectada en el país, debido especialmente a los acontecimientos de los últimos años en el sector judicial (Inclán 2006, Mejía Acosta, et al. 2006). A finales del 2004, el Congreso Nacional, con una mayoría simple, emitió una resolución en la que se destituyó de su cargo a 27 de los 31 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El motivo señalado en aquella resolución era la intención de despolitizar la misma. El Congreso entonces procedió a conformar una nueva Corte Suprema que fue unánimemente rechazada por los ciudadanos y la prensa debido a la presencia de personas ligadas a varios de los partidos políticos que en ese momento tenían mayoría en el Parlamento. Luego de una intensa presión ciudadana que duró más de cuatro meses, el entonces Presidente de la República, Coronel (R) Lucio Gutierrez, descalificó a la Nueva Corte Suprema de Justicia. El mecanismo para establecer una nueva corte, sin embargo, no pudo ser definido debido a que Gutierrez fue derrocado días después. El poder judicial en el Ecuador estuvo acéfalo durante un año, mientras transcurría el proceso de selección de la nueva corte, que fue supervisado por varios organismos de control nacionales e internacionales. La confianza de los ecuatorianos en la nueva corte, sin embargo, continúa siendo baja a pesar de la publicidad del proceso (Donoso, et al. 2006). Esto se ha visto agravado por una serie de irregularidades cometidas por el alto mando de la Policía Nacional, que en las últimas semanas fue reemplazado cuatro veces en solo dos semanas. Estos eventos, comparados con la relativa estabilidad política que se ha vivido en Costa Rica, al margen de los escándalos ocurridos en los últimos tiempos, ejemplifican la importancia del contexto en la formación de actitudes individuales en América Latina.

Estado de derecho y democracia

En las secciones anteriores la discusión giró alrededor de los determinantes estructurales e individuales que determinan el apoyo de las personas al estado de derecho en América Latina y el Caribe. Sabemos que factores como la fortaleza del sistema judicial, la experiencia de los ciudadanos con el crimen y la corrupción, la educación y el contexto socio-político son factores determinantes en la construcción de actitudes favorables o desfavorables hacia el estado de derecho. Pero tiene esto alguna importancia para la consolidación democrática en el continente? La respuesta es si. Los últimos párrafos de este capítulo están dedicados a mostrar la importancia del apoyo popular al estado de derecho en el apoyo a la democracia representativa y sus instituciones.

La tercera ola de la democratización comenzó en América Latina hace más de 25 años y sin embargo la consolidación democrática sigue siendo quizás el mayor reto de los países de la región. Los defectos en el sistema de administración de justicia en Latinoamérica y el Caribe y la falta de seguridad de los ciudadanos frente al estado de derecho juegan un papel clave en este problema (Binder 1991, Buscaglia, et al. 2000). Para ilustrar de mejor manera la relación entre el apoyo popular al estado de derecho y la consolidación democrática en el continente recurriré nuevamente a los datos obtenidos por el Barómetro de las Américas en el 2006/07. Si bien existen varias formas de medir el apoyo a la democracia en un país, para efecto de este estudio he escogido una pregunta que capta la preferencia de los ciudadanos por la democracia sobre cualquier otro sistema de gobierno. La pregunta es la siguiente:

ING4. Puede que la democracia tenga problemas pero es mejor que cualquier otra forma de gobierno. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con esta frase?

A los entrevistados se les mostró una escala del 1 al 7 en donde uno es igual a ‘muy en desacuerdo’ y siete representa ‘muy de acuerdo’. El Gráfico XII-8 ilustra el efecto que el apoyo al sistema de derecho tiene sobre la legitimidad de la democracia como sistema de gobierno. La relación entre las dos variables es la esperada, con las personas que reportan un mayor nivel de apoyo al estado de derecho mostrándose más a favor de tener un sistema democrático y las personas que reportan menos niveles de apoyo al estado de derecho mostrando una preferencia más baja. El gráfico revela una buena noticia y una no tan buena. La buena es que aquellas personas con niveles extremadamente bajos de apoyo al estado de derecho de todas maneras muestran preferencia por la democracia como el sistema ideal de gobierno. La no tan buena es, que tipo de democracia es la que estas personas prefieren?

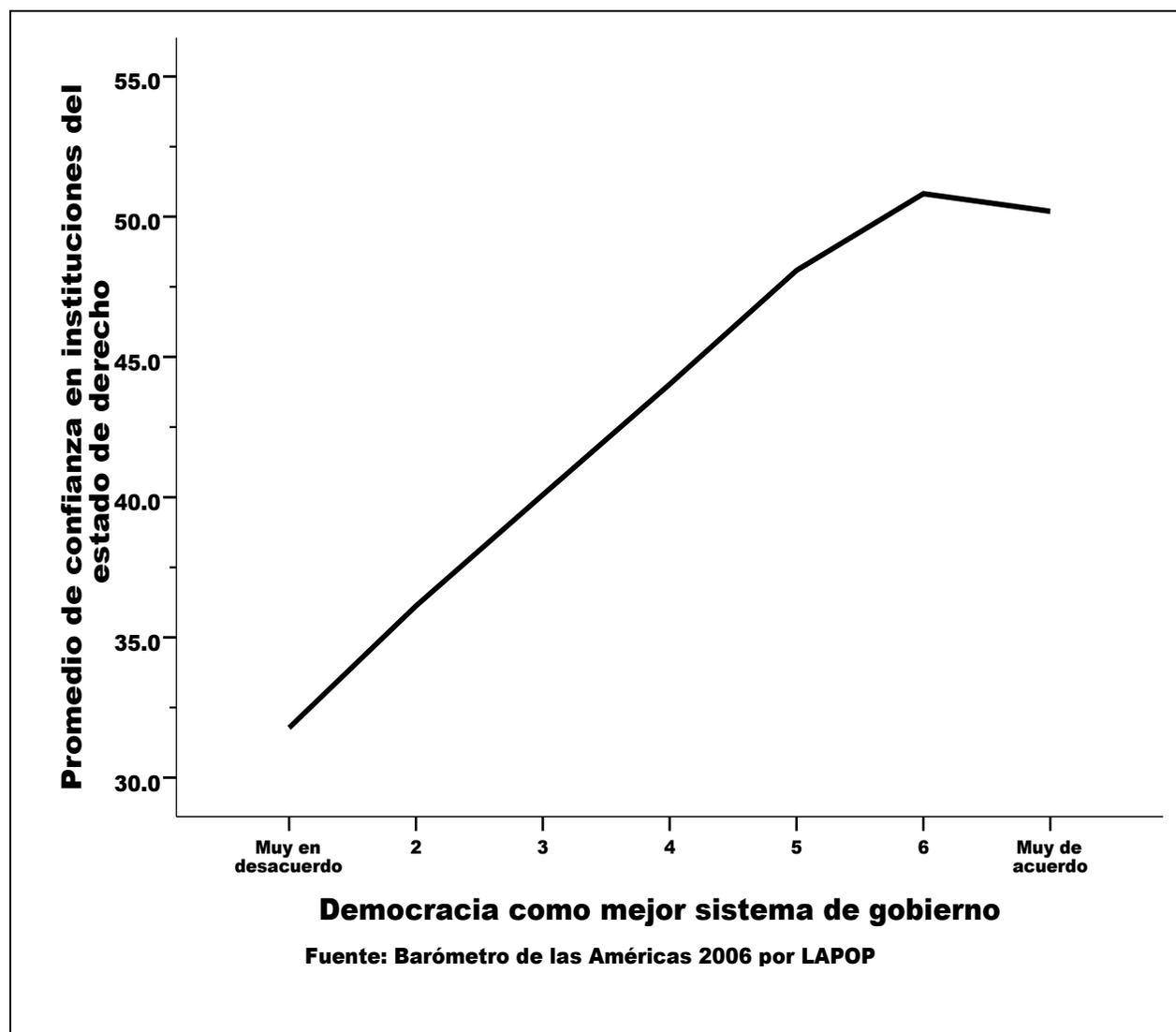


Gráfico XII-8. Efecto del apoyo al estado de derecho en la preferencia por la democracia.

En los últimos años, observadores y académicos han visto con preocupación el surgimiento de lo que algunos llaman democracias “híbridas” en la región. Estas democracias se caracterizan por tener elecciones libres, pero también por ignorar algunos de los principios básicos de las democracias representativas, como la separación de poderes, el derecho a la propiedad privada y el cumplimiento irrestricto de las libertades civiles de sus ciudadanos. Si bien mucha gente cuestiona a este tipo de democracias, en algunos casos este tipo de restricciones son apoyadas por las personas, que, cansadas de ver como las normas no son cumplidas y los procesos no son lo suficientemente ágiles, está dispuesta a ceder con tal de mejorar en algo su situación personal.

Mucho se ha hablado en los últimos años sobre el renacimiento del populismo en América Latina. Los regímenes populistas se caracterizan por sus líderes fuertes y carismáticos que suelen conquistar a las multitudes creando en ellas un sentimiento de identidad. Las personas que votan por un líder populista sienten que este entiende sus problemas mejor que

nadie y que trabajará para ellos cueste lo que cueste. Esto incluye el esquivar ciertos obstáculos legales para lograr que los procesos se den con mayor rapidez. Los sistemas legales de muchos países de América Latina y el Caribe se caracterizan por su ineficiencia y su lentitud. Muchos países de la región todavía no recurren a la oralidad en los procesos legales, por lo que un simple juicio civil puede tardar algunos años. El Gráfico XII-9 ilustra el resultado de preguntarle a la gente sobre la utilidad de los jueces en un régimen democrático.

POP3. [Leer alternativas]

1. Los jueces con frecuencia estorban la labor de nuestros presidentes, y deberían ser ignorados, [o al contrario],
2. Aun cuando a veces los jueces estorban la labor de nuestros presidentes, las decisiones de los jueces siempre tienen que ser obedecidas.

Como se puede ver en el gráfico, existe una diferencia importante y estadísticamente significativa entre aquellas personas que piensan que los jueces son un estorbo y aquellas que creen que son necesarios en cuanto a su apoyo promedio al estado de derecho.

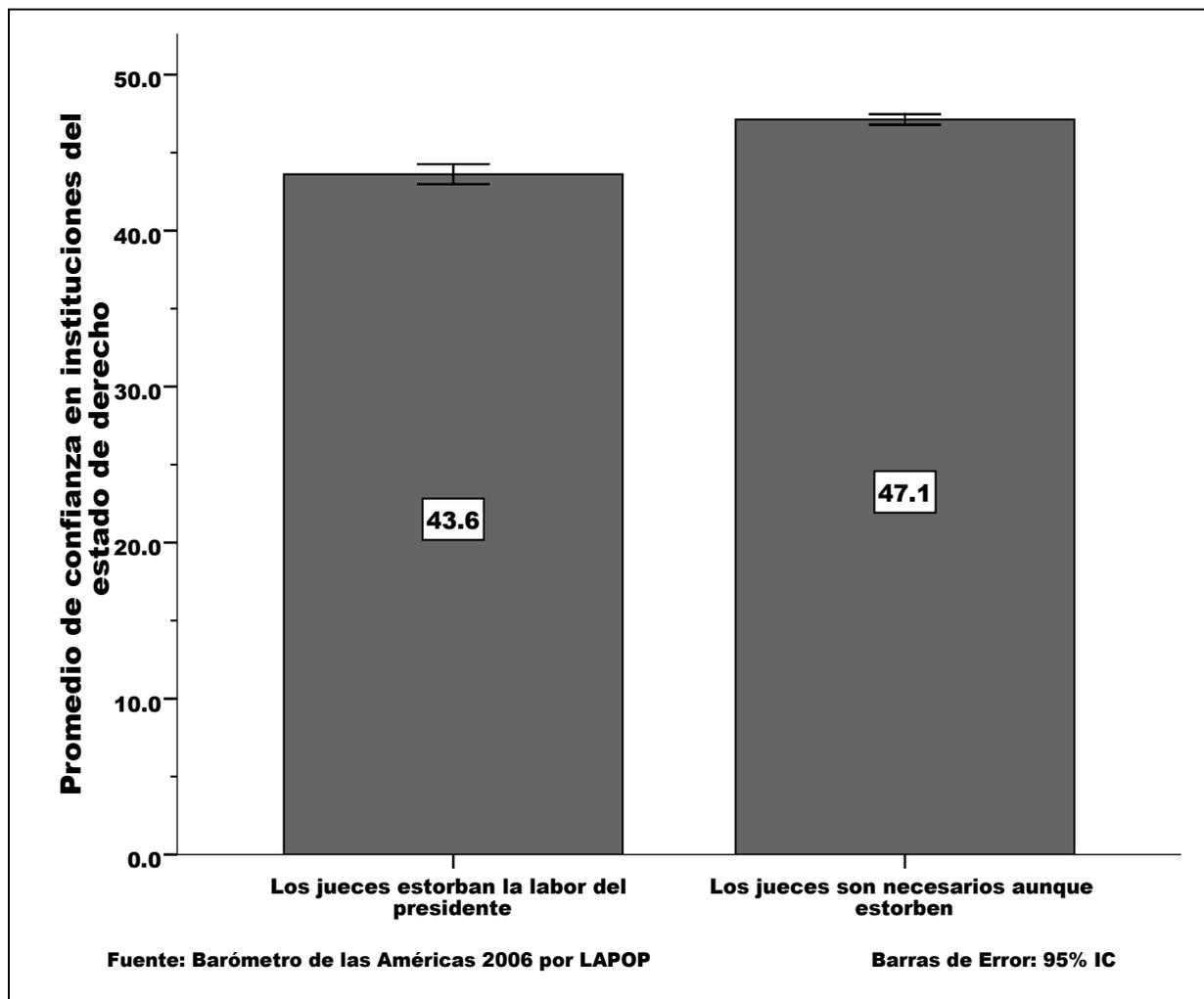


Gráfico XII-9. Apoyo al estado de derecho y justificación a medidas populistas.



Finalmente, hay personas que están dispuestas a justificar medidas extremas para mejorar el sistema de administración de justicia de un país. La Corte Suprema de Justicia es una institución muy desgastada en América Latina y el Caribe. En una escala del 0 al 100, el promedio de confianza de los latinoamericanos en la Corte Suprema a duras penas supera los 40. Esto la ubica como una de las instituciones del estado que menos confianza genera en sus respectivos países, superando únicamente a los partidos políticos y al Congreso. Una batería de preguntas del cuestionario del Barómetro de las Américas del 2006/07 intenta captar la tolerancia de las personas hacia medidas antidemocráticas, como podría ser el cierre de la Corte Suprema de Justicia en un país.

JC16. ¿Cree usted que alguna vez puede haber razón suficiente para que el presidente disuelva la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o cree que no puede existir razón suficiente para eso? (1) Sí (2) No

El Gráfico XII-10 muestra que las personas que justificarían una eventual disolución de la Corte Suprema de Justicia por parte del Presidente tienen un nivel de apoyo promedio al estado de derecho más bajo que sus contrapartes.

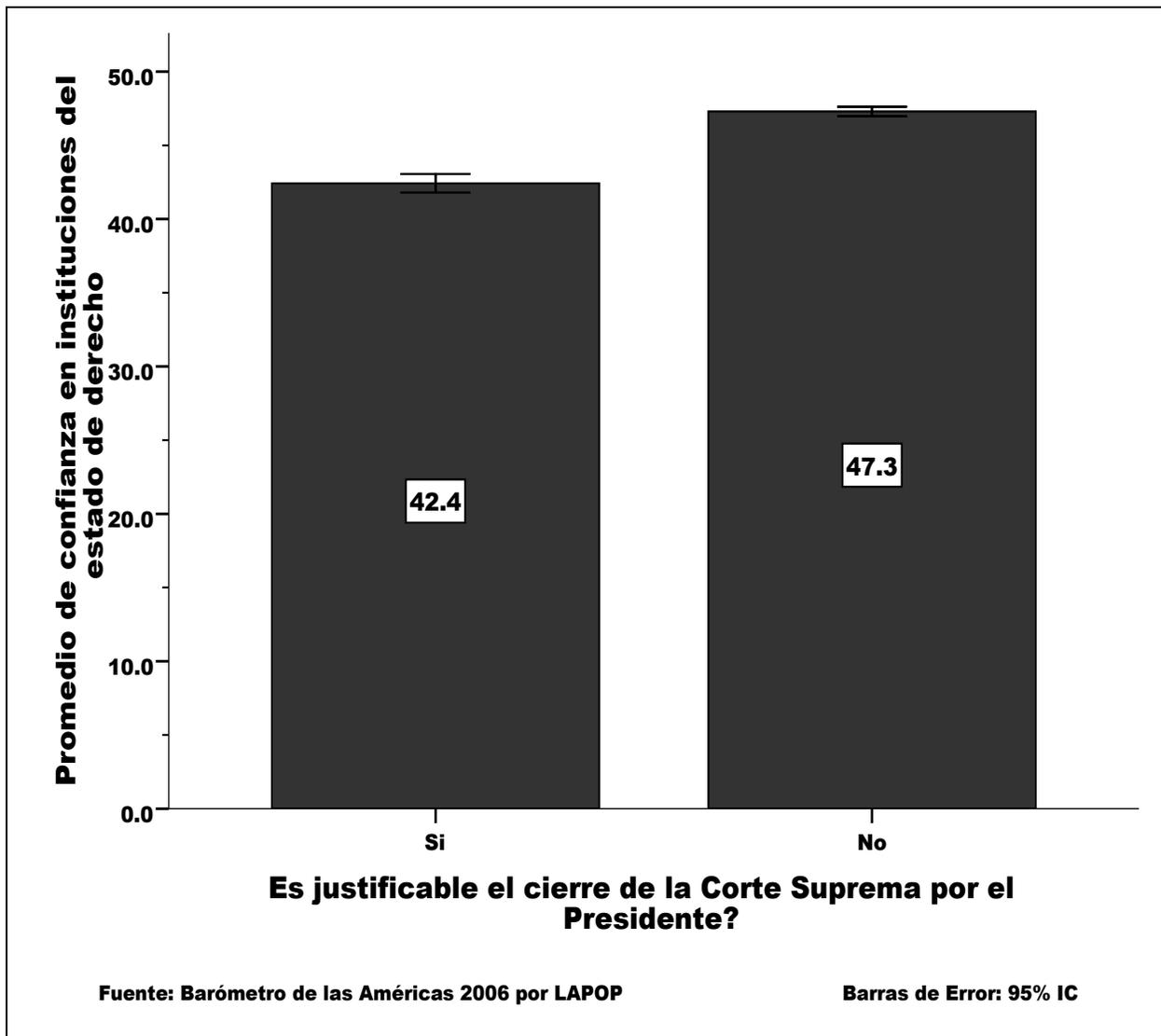


Gráfico XII-10. Apoyo al estado de derecho y justificación del cierre de la Corte Suprema.

Conclusiones

Este capítulo ha intentado descubrir los factores determinantes en la construcción de un estado de derecho sólido en los países de América Latina y el Caribe. Comenzamos por resaltar la importancia de factores estructurales, como la necesidad de contar con un poder judicial saludable, que se maneje sin influencias ni intromisiones del ejecutivo o el legislativo y que respete y haga respetar las libertades básicas de los ciudadanos. También revisamos los predictores individuales del apoyo al estado de derecho, entre los que destacan la victimización por crimen y corrupción experimentada por los entrevistados como motivos poderosos para desconfiar de las instituciones del estado de derecho en nuestros países. Finalmente observamos las peligrosas consecuencias de no confiar en dichas instituciones. Los ciudadanos



decepcionados con la manera en que su gobierno administra la justicia y provee seguridad desarrollan actitudes negativas hacia la democracia representativa y se muestran más dispuestos a tolerar medidas drásticas para que las cosas funcionen de mejor manera. Es importante que nuestros países trabajen en controlar el crimen y la corrupción y en construir instituciones sólidas y autónomas con mecanismos eficientes de rendición de cuentas que generen la confianza y el apoyo de sus ciudadanos.

Referencias

- Becker, David. "Latin America: Beyond Democratic Consolidation." *Journal of Democracy* 10, no. 2 (1999): 138-51.
- Binder, Alberto. "Reform of the Penal System in Latin America." Arlington, VA: Council of State Courts, 1991.
- Buscaglia, Edgardo. "An Analysis of Judicial Corruption and Its Causes: An Objective, Governing-Based Approach." *International Review of Law and Economics* 21 (2001): 233-49.
- . "Judicial Corruption in Developing Countries: Its Causes and Economic Consequences." In *Essays in Public Policy*. Washington, DC: Hoover Institute, 2001.
- Buscaglia, Edgardo, Valeria Merino y Ana Lucia Jaramillo. "Estudio sobre la Correlación entre la Existencia de Justicia y la Consolidación de la Democracia en Ecuador." Quito: Corporación Latinoamericana para el Desarrollo, 2000.
- Cappelletti, Mauro. "Who Watches the Watchmen? A Comparative Study on Judicial Responsibility." In *Judicial Independence: The Contemporary Debate*, edited by S. Shetreet and J. Deschenes. Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers, 1985.
- Carothers, Thomas. *Promoting the Rule of Law Abroad: In Search of Knowledge*. Washington D.C.: Carnegie Endowment for International Peace, 2006.
- Collier, David, Fernando Hidalgo y Andra Maciuceanu. "Essentially Contested Concepts: Debates and Applications." *Journal of Political Ideologies* 11, no. 3 (2006): 211-46.
- Cross, Frank B. "The Relevance of Law in Human Rights Protection." *International Review of Law and Economics* 19 (1999): 87-98.
- Cruz, José Miguel. "Pandillas y Capital Social en Centroamérica." En *Maras y Pandillas De Centroamérica*: UCA Editores, 2004.
- . "Violencia y Democratización en Centro América: El Impacto del Crimen en los Regímenes de la Post Guerra." PNUD, 2005.
- Dakolias, Maria. "Ecuador: Judicial Sector Assessment." Washington D.C.: The World Bank, 1994.
- Donoso, Juan Carlos, Daniel Moreno, Diana Maria Orcés, Vivian Schwartz-Blum y Mitchell A. Seligson. "Democracy Audit: Ecuador 2006." Quito: Latin American Public Opinion Project, 2006.
- Fiss, Owen. "The Limits of Judicial Independence." *University of Miami Inter-American Law Review* 25 (1993).
- Goertz, Gary. *Social Science Concepts: A User's Guide*: Princeton University Press, 2006.
- Holston, James y Teresa P.R. Caldeira. "Democracy, Law and Violence: Disjunctions of Brazilian Citizenship." In *Fault Lines of Democracy in Post-Transition Latin America*, edited by Felipe Aguero. Coral Gables: North-South Center Press, 1998.
- Howard, Robert y Henry Carey. "Is an Independent Judiciary Necessary for Democracy?" *Judicature* 87, no. 6 (2004): 284-91.
- Huntington, Samuel. *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century* Norman: University of Oklahoma Press, 1991.



- Inclán, Silvia. "Fragile Judicial Independence in Latin America: A Decade after Judicial Reform." In *Annual Meeting of the Midwest Political Science Association*. Chicago, 2006.
- Larkins, Christopher. "Judicial Independence and Democratization: A Theoretical and Conceptual Analysis." *The American Journal of Comparative Law* 44, no. 4 (1996): 605-26.
- Mejía Acosta, Andres, María Caridad Araujo, Anibal Pérez-Linan y Sebastian Saiegh. "Veto Players, Fickle Institutions and Low Quality Policies: The Policy Making Process in Ecuador (1979-2005)." Inter-American Development Bank, 2006.
- O'Donnell, Guillermo. "Delegative Democracy." *Journal of Democracy* 5 (1994): 55-69.
- O'Donnell, Guillermo y Philippe Schmitter. *Transitions from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions About Uncertain Democracies*. Baltimore: John Hopkins University Press, 1986.
- Pereira, Anthony. "An Ugly Democracy? State Violence and the Rule of Law in Post-Authoritarian Brazil." In *Democratic Brazil: Actors, Institutions and Processes*, edited by Peter Kingstone Jr and Timothy J. Powers. Pittsburgh: University of Pittsburgh's Press, 2000.
- Prillaman, William. *The Judiciary and Democratic Decay in Latin America: Declining Confidence in the Rule of Law*. Westport: Praeger, 2000.
- Rios-Figueroa, Julio. "Judicial Independence: Definition, Measurement and Its Effects on Corruption: An Analysis of Latin America." Doctoral Dissertation, New York University, 2006.
- Schedler, Andreas, Larry Diamond y Marc F. Plattner. *The Self Restraining State: Power and Accountability in New Democracies*. Boulder: Lynne Rienner, 1999.
- Schor, Miguel. "The Rule of Law and Democratic Consolidation in Latin America." In *Latin American Studies Association*. Dallas, Texas, 2003.
- Seligson, Mitchell. "Auditoría de la Democracia: Ecuador 2004." edited by CEDATOS. Quito, 2004.
- . "The Measurement and Impact of Corruption Victimization: Survey Evidence in Latin America" *World Development* 34, no. 2 (2006): 381-404.
- Seligson, Mitchell y Edward N. Muller. "Civic Culture and Democracy: The Question of the Causal Relationship." *American Political Science Review* 88 (1994): 635-54.
- Tate, Neal, Linda Camp Keith y Steven Poe. "Repression of the Human Right to Personal Integrity Revisited: A Global Cross-National Study Covering the Years 1976-1993." *International Studies Quarterly* 43 (1999): 291-315.
- Verner, Joel G. "The Independence of Supreme Courts in Latin America: A Review of the Literature." *Journal of Latin American Studies* 16, no. 2 (1984): 463-506.
- Weyland, Kurt. "The Politics of Corruption in Latin America." *Journal of Democracy* 9, no. 2 (1998): 108-21.
- Wielandt, Gonzalo. "Hacia la Construcción de Lecciones del Posconflicto en América Latina y El Caribe. Una Mirada a la Violencia Juvenil en Centroamérica." Santiago de Chile: CEPAL, 2005.
- www.humanrightsdata.org. "The Cingranelli and Richards Human Rights Dataset." (2004).
- www.state.gov. *U.S. State Department's Annual Human Rights Country Reports* 2005 [cited].
- Yamanashi, David Scott. "Judicial Independence and Human Rights." In *American Political Science Association Annual Meeting*, 2002.